

# **PROPUESTAS CORRELACIONADAS CON LA LEY DE AMPARO VIGENTE**

## **TOMO II**



**SUPREMA CORTE DE JUSTICIA  
DE LA NACION**  
SISTEMA BIBLIOTECARIO  
BIBLIOTECA "SILVESTRE MORENO CORA"

# **COMISION DE ANALISIS DE PROPUESTAS PARA UNA NUEVA LEY DE AMPARO**

**Coordinador General**

**Ministro Humberto Román Palacios**  
**Ministro Juan N. Silva Meza**  
**Germán Fernández Aguirre**  
**José Ramón Cossío Díaz**  
**Cesar Esquinca Muñoa**  
**Héctor Fix-Zamudio**  
**Javier Quijano Baz**  
**Manuel Ernesto Saloma Vera**  
**Arturo F. Zaldivar Lelo de Larrea**

*Febrero-2000*

1150.113

P 766.6p

+2 y.1

**PROPUESTAS CORRELACIONADAS CON LA LEY DE AMPARO  
VIGENTE**

**I N D I C E**

**TOMO II**

	Página
Capítulo X	
De las sentencias	
Artículo 76.....	779
Artículo 76 bis.....	871
Artículo 77.....	966
Artículo 78.....	978
Artículo 79.....	982
Artículo 80.....	988
Artículo 81.....	1033
 Capítulo XI	
De los recursos	
Artículo 82.....	1053
Artículo 83.....	1074
Artículo 84.....	1147
Artículo 85.....	1153
Artículo 86.....	1158
Artículo 87.....	1163

## **Comisión de Análisis de Propuestas para una Nueva Ley de Amparo**

---

Artículo 88.....	1165
Artículo 89.....	1173
Artículo 90.....	1181
Artículo 91.....	1194
Artículo 92.....	1203
Artículo 93.....	1205
Artículo 94.....	1207
Artículo 95.....	1208
Artículo 96.....	1275
Artículo 97.....	1277
Artículo 98.....	1286
Artículo 99.....	1290
Artículo 100.....	1300
Artículo 101.....	1302
Artículo 102.....	1305
Artículo 103.....	1307

## **Capítulo XII**

### **De la ejecución de las sentencias**

Artículo 104.....	1330
Artículo 105.....	1336
Artículo 106.....	1377
Artículo 107.....	1381
Artículo 108.....	1382
Artículo 109.....	1395
Artículo 110.....	1399
Artículo 111.....	1400



**Propuestas Correlacionadas con la Ley de Amparo Vigente**

---

Artículo 112.....	1404
Artículo 113.....	1405



## Capítulo X

### De las sentencias

**Artículo 76.** Las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo sólo se ocuparán de los individuos particulares o de las personas morales, privadas u oficiales que lo hubiesen solicitado, limitándose a ampararlos y protegerlos, si procediere, en el caso especial sobre el que verse la demanda, sin hacer una declaración general respecto de la ley o acto que la motivare.

### PROPUESTAS

Si en alguna forma gráfica pudiera nominar este tema, sería no tanto sugiriendo cómo *acabar con la Fórmula Otero*, sino como aclara dicha fórmula.

Nadie deja de reconocer que cuando en un juicio de amparo se reclama un *acto* o una *omisión* de una autoridad pública, al examinar la controversia planteada por el quejoso al respecto, el juez de amparo —si acepta estudiar el fondo del asunto, y encuentra que la responsable *actuó* inconstitucionalmente u *omitió* actuar en la forma que le obliga la Constitución—, otorga una salvaguarda constitucional que *solamente* puede beneficiar a quien demandó tal protección constitucional, y a nadie más, aun respecto de aquél que se quejara del mismo acto u omisión, dictado por exactamente la misma autoridad, en la misma situación y bajo el mismo documento en que conste el acto o la omisión reclamadas. La Fórmula

Otero. (que establece la *relatividad de las sentencias de amparo*) en estos casos debe confirmarse en sus términos estrictos.

No es el mismo caso tratándose de la impugnación de leyes (en sentido estricto; o tratados internacionales; o reglamentos) que se afirma no se ajustan a los mandatos constitucionales.

El acto (o la omisión) constituye conductas de autoridades ordenadas para un individuo ( o a una persona moral), en forma concreta y singularizada. La ley –a la manera en que se le distingue tradicionalmente-, es *general, impersonal y abstracta*. La ley es *genial*, porque si bien puede referirse a ciertos sujetos generalizados (obreros, campesinos, comerciantes, ciudadanos), o sea todos los que queden incluidos en la hipótesis legal, se ven compelidos e incluidos en el mando legal; y si no se hiciera así, se rompería el principio de igualdad ante la ley. Es *impersonal* porque nuestra Constitución, (de acuerdo con la doctrina universal) prohíbe las leyes privativas, o sea las leyes privativas, o sea las que se expiden a favor o en contra de una persona, o de un grupo de personas individualizadas. Y es *abstracta* como corolario de todo lo anterior.

Si se aplica indebidamente la concepción de nuestro gran jurista Mariano Otero, al *relativizar* a la norma general, habremos logrado –como por siglo y medio lo hemos hecho-, que una ley, trata o reglamento declarados contrarios a lo que ordena nuestra Constitución Política, no deben ser cumplidos por quienes obtuvieron una sentencia favorable (la obtención de una *patente personal*); y en caso contrario, a pesar de su declarada inconstitucionalidad tendrán que ser obedecidos por los que no

obtuvieron dicha patente. Premio para los diligentes; y castigo para los ignorantes, los descuidados, los incapacitados. Este proceder es evidente que no pertenece al sistema de estricta constitucionalidad, como orden nacional, sino al régimen de pequeñas sutilezas legales, que no debe seguir siendo patrocinado.

Por ello propongo concretamente introducir un segundo párrafo al artículo 76 de nuestra Ley de Amparo actual, en la siguiente forma:

(ACTUAL ARTICULO 76)

...

Las leyes federales o locales, los tratados internacionales, los reglamentos expedidos por el Ejecutivo Federal, por los Gobernadores de los Estados o por el Jefe de Distrito Federal, que hubieren sido declarados inconstitucionales mediante jurisprudencia firme decretada por reiteración de criterio, o por prevalencia en una contradicción de tesis, serán invalidados, debiéndose publicar la tesis respectiva aprobada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual deberá insertarse en el Diario Oficial de la Federación y, en su caso, en la publicación oficial del Estado en donde se hubiera declarado inválido.

No escapa a usted que esta reforma reglamentaria no podría producirse, si antes no se lleva a cabo una *reforma constitucional* en el artículo 107, fracción II. (Juventino V. Castro y Castro, Tomo I, páginas 144 a 146)

La necesidad de reformar la Ley de Amparo, surge principalmente del hecho de que ésta, en contra del principio sustentado por el artículo 1º Constitucional, permite que los actos de autoridad que son violatorios de las garantías individuales prevalezcan en forma indefinida y permanente, sin que exista medio alguno a favor del gobernado para defenderse de los actos abusivos de poder.

El artículo 1º Constitucional establece, que en los Estados Unidos Mexicanos, todo individuo gozará de las garantías que otorga la Constitución, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse, sino en los casos que ella misma establece; más, como se presenta la Ley de Amparo, por defecto de ésta y por omisión del artículo 107 Constitucional, se produce el grave efecto de la restricción de garantías, que prohíbe expresamente la Constitución en el precepto antes mencionado.

**DEL ARTÍCULO 107 CONSTITUCIONAL.-** La necesidad de reformar el artículo 107 Constitucional, para ajustarse a los verdaderos requerimientos de la sociedad mexicana, se deriva de lo siguiente:

a).- En contra del principio establecido por el artículo 133 Constitucional, de la supremacía de la Constitución y Tratados Internacionales aprobados por el Senado sobre cualesquier otra ley secundaria, Constitución o Ley Local, le da efectos individuales a las sentencias dictadas en los amparos promovidos en contra de leyes o actos de efecto general. (Jorge Arellano Medina, Tomo II, páginas 802 y 803)

El Párrafo Primero, de la Fracción II, en virtud de que un amparo enderezado en contra de una Ley o acto de autoridad de efectos generales, debe ser de efecto general, en cuanto a su sentencia, como atinadamente lo ha sostenido el insigne jurista mexicano, Doctor Ignacio Burgoa Orihuela.

Si el efecto natural de la sentencia de amparo, es impedir que el acto reclamado pueda tener ejecución, por haber sido declarado contrario a la Constitución, tratándose de una Ley, o de un acto de efecto general la sentencia de amparo debe también producir efectos generales, precisamente en razón de haber sido declarada la Ley o acto inconstitucional, y no permitir, nociva e innecesariamente, que esa Ley o acto de efectos generales que ha sido tachada de ser en contra del texto Constitucional, siga produciendo sus efectos.

Ello, atendiendo también al principio de la supremacía de la Constitución sobre las demás leyes, establecido por el artículo 133 Constitucional, en relación con el artículo 1º de la misma Ley, que confiere a todo individuo el derecho de gozar de las garantías individuales; no existiendo ninguna razón de que una Ley que ha sido declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, deba seguirse aplicando en contra del principio sustentado por el precepto primero mencionado y produciendo el efecto de la negación del goce de las garantías.

Estimamos, pues, que el texto del Párrafo Primero de la Fracción II, del artículo 107 Constitucional, debe reformarse para que diga: *"La sentencia siempre será tal, que sólo se ocupe de individuos particulares, limitándose a ampararlos y protegerlos en el caso especial sobre el que verse la queja, sin hacer una declaración general al respecto del acto que la motivare; excepto en el caso de que el amparo se promueva en contra de leyes o de actos de efecto general, en los que los efectos de la sentencia serán también generales"*. (Jorge Arellano Medina, Tomo II, páginas 804 y 805)

---

II.- El artículo 107 fracción II y 76 de la Ley de Amparo, limitan la eficacia de la sentencia de amparo contra leyes al quejoso, prohibida toda prolongación a otros sujetos que no hayan sido partes en la Litis Constitucional, "sin atacar —decía OCAMPO— al Legislador en su alta esfera de soberano". La Ley así no se siente herida. Los Constituyentes del 57 y VALLARTA en la Corte, creían que la Ley inconstitucional perdería su fuerza moral, NO SE SUSPENDE SOLO POCO A POCO, BAJO LOS GOLPES REPETIDOS DE LA JURISPRUDENCIA LLEGA A SUCUMBIR AL FIN. VALLARTA pensaba así en vano, en el caso de FEBRONIO RAMÍREZ (Votos IV, p.35), esperaba que el gobernador del Estado de Guanajuato se "apresuraría a derogarla"; pero esas no son las bondades de la sentencia de amparo; por eso ante el cúmulo de leyes inconstitucionales, se requiere superar la relatividad de la sentencia de amparo, para darle advenimiento a la fórmula "erga omnes" de inconstitucionalidad; pues tenemos una Corte que hace alarde de su independencia suficiente para enfrentarse con



energía, dignidad y habilidad política a los otros poderes. No hay control del Legislativo frente a las leyes inconstitucionales por jurisprudencia.

El texto vigente del artículo 107 de la Constitución, fracción II, y esto está retomado del texto de la Constitución Yucateca de 1840, dice que el amparo se concederá *é*xclusivamente al quejoso para protegerle la garantía violada, sin hacer ninguna declaración general sobre la ley o el acto que la motivaron, esto que en un principio pareció inicuo, y que el insigne Diputado Ignacio Ramírez, luego Ministro de la Corte, objetó diciendo que era tanto como darles poderes a la Suprema Corte, al Poder Judicial Federal, para que se colocase encima del Congreso y ANULASE SUS LEYES Y, QUE ENTONCES ERA UN SUPERPODER, resulta que ha sido un minipoder, porque solamente la sentencia de Amparo está restringida al particular que obtuvo la sentencia favorable y la Ley sigue rigiendo, por eso el talentoso Don Manuel Moreno, cuando era Senador, él dijo, LA LEY ES LEGAL AUNQUE SEA INCONSTITUCIONAL, entonces hay que entender a Don Manuel Moreno, es un hombre muy erudito, muy inteligente ya que la Ley sigue rigiendo para todos, excepto para el sujeto quejoso que obtuvo la protección constitucional.

La declaratoria de inconstitucionalidad de la ley debe tener eficacia erga omnes, es decir, "hacer perder para siempre su eficacia normativa general y abstracta". (Calamandrei, Derecho Procesal Civil, Tomo III, Editorial Ejea, págs. 32 y 33). OTERO en los artículos 16, 17 y 18 de su proyecto; y 22, 23 y 24 del Acta proponía, a través del Control Político, la anulación de leyes inconstitucionales. En su Voto Particular, decía: "... y la Constitución no debe dejar nunca a las leyes secundarias el poder de

destruirlas...". Nuestra Jurisprudencia y nuestros tratadistas negaron el principio de anulación, recogido por Austria y Alemania, cambiando el antro político por el control judicial, lo que viene del Poder Conservador de 1836 (art. 12) acta de reformas de 1847 y "que nosotros lo ahogamos con espectacular orgullo".

En México en la reforma de 1987 y 1988, que se aparta del sendero de la Constitución americana, se estructura a la Suprema Corte como un Tribunal Constitucional, que ejerce la función del control de legitimidad de las leyes, siguiendo el sistema austríaco, obra personal del genial HANS KELSEN en 1920 y que matiza definitivamente en 1926 configurando el control concentrado.

La realidad punzante exige la transformación del principio de la relatividad de la sentencia debida al ilustre jurista jalisciense MARIANO OTERO, de ahí su denominación "fórmula de Otero"; para que el amparo contra leyes surta efectos generales, es decir que la sentencia adquiera valor erga omnes y así el Amparo contra Leyes será "el más genuino y estrictamente constitucional de las tres modalidades estructurales del Amparo", como ha escrito el Doctor HÉCTOR FIX-ZAMUDIO siguiendo a Don MARIANO AZUELA, así pues, se necesita reformar el artículo 107 fracción II y el artículo 76 de la Ley de Amparo que consagra el principio de la relatividad de la sentencia.

El Maestro J. RAMÓN PALACIOS VARGAS, certeramente nos dice:

**“No logramos ni entonces ni ahora comprender cómo el problema de leyes inconstitucionales en México pueda importar el “control de leyes”; el más genuino y directo control de leyes opuestas a la Carta, porque:**

- a).- La sentencia no adquiere valor erga omnes;**
- b).- La inconstitucionalidad de la ley es prejudicial lógica y jurídicamente estudiada en la sentencia, empero no llega al dispositivo;**
- c).- No obliga al Congreso ni al ejecutivo;**
- d).- La jurisprudencia sobre esas leyes tampoco abate la ley;**
- e).- Únicamente se impugna por el quejoso la lesión a sus derechos constitucionales particulares causados por la ley y se le ampara —en dado caso- contra ese perjuicio concreto;**
- f).- El Congreso puede votar y el ejecutivo promulgar y publicar leyes idénticas a las tildadas de inconstitucionales en los considerandos de las sentencias de amparo”. (Instituciones de Amparo, págs. 307 y 308, Ed. Cájica).**

**Don MARIANO AZUELA RIVERA, en su estudio “APORTACIÓN AL ESTUDIO DEL AMPARO CONTRA LEYES”, nos dice: “... el amparo interpuesto para obtener la declaración de inconstitucionalidad de una ley si de él se prescindiera resultaría dudosa la categoría de juicio constitucional**

atribuida a nuestro juicio de garantías". (Autor y op. Cit., publicado en la Revista Jurídica Veracruzana, Tomo VII, Núm. 1. Pág. 7).

La historia del Amparo contra Leyes es brillantísima, pero al absorber los negocios judiciales y no tener efectos generales, la sentencia se va opacando, se impone reformarlo para ponerlo a la par, conforme la evolución de la doctrina procesal constitucional.

Recordemos la oración final de JOHN MARSHALL en su fallo en el caso de MADISON vs. MARBURY, que era: "Una ley contraria a la Constitución es nula y los Tribunales tanto como los demás departamentos de gobierno están obligados por dicha Constitución...". "y las decisiones de la Suprema Corte asumen importancia especial sólo porque es la Corte de última instancia". En consecuencia, nos dice GRANT, de los efectos de los fallos inconstitucionales se deduce que la invalidez de una Ley no data de la fecha en que la Corte así lo declaró, "de ahí que Las Cortes no invalidan las Leyes; se niegan a ponerlas en vigor porque no son válidas". (Autor citado, El Control de la Constitucionalidad de las Leyes, pág. 430, Revista de la Facultad de Derecho de México, julio-septiembre 1992).

En nuestro sistema Constitucional el artículo 107 fracción II de la Constitución y el artículo 76 de la Ley de Amparo consagran el principio de relatividad de la cosa juzgada, limitándose la sentencia a amparar a los individuos particulares o personas morales, privadas u oficiales,... sin hacer una declaración general respecto a la Ley o acto que la motivare.

La misión de la Suprema Corte, sostenía VALLARTA en el Voto de FEBRONIO RAMÍREZ (T. IV, p. 35) era evitar las Leyes inconstitucionales; sin embargo, esperaba que el Congreso Local del Estado de Guanajuato abrogara la Ley inconstitucional.

"Si el Congreso del Estado de Guanajuato se convenciera de la iniquidad de la Ley inconstitucional y se apresurara a derogarla, sería este caso el más brillante testimonio de la excelencia de nuestras Instituciones, de la bondad del amparo, que a la vez que asegura el goce de las garantías del individuo, fija el derecho público de la Nación haciendo imposibles las leyes inconstitucionales". (Vallarta, Votos, IV, p. 35).

El sistema difuso del Control de la inconstitucionalidad del vecino país del Norte, desde MARSHALL, es que una Ley que repugna a la Constitución es NULA, ni crea derechos ni establece obligaciones, es como si nunca se hubiese dictado.

Por desgracia en México, no obstante, el precedente de MARSHALL de más de un siglo sobre "El Stare Decisis", el cual declara nula la ley que pugna contra la Constitución, es decir que no obstante, no encontrar en la Constitución de Estados Unidos ni en las Leyes reglamentarias o secundarias un precepto que otorgue ese efecto derogatorio ya que en el sistema norteamericano del Stare Decisis, que arraiga desde la sentencia de Marshall y que llega hasta las recientes ejecutorias de "Brow y Borad Of. De. Topeka y Beeting Sharpe", en donde se ha declarado nula la ley, y por lo mismo, ha de perecer, ha caracterizado al sistema de control constitucional de los E. U. A.

El precedente de la Sentencia Marshall, "MARBURY vs. MADISON" y los votos del insigne Vallarta, sientan las bases del derecho público de sus respectivas Naciones, y todavía continúan irradiando la autoridad de su sabiduría, y al igual que "las obras humanas se imponen por sí mismos", ambos fueron "Jueces perincritos", sabios intérpretes de sus respectivas Constituciones y su obra jurídica continúa velando el sueño de la democracia de ambos países. Marshall y Vallarta, sientan las bases, definen los principios del Derecho Constitucional y cuando Marshall muere en (1835) "los precedentes tenía la autoridad más sólida y las prácticas quedaban consagradas como reglas invariables", y fundamentalmente una ley inconstitucional "es tan ineficaz como si nunca se hubiere dictado". (Norton V. Shelbey 118 U.S. 445, 482). "Estos varones constituyen los termómetros jurídicos que indican el avance o retroceso de nuestro Derecho".

En México, la suprema Corte a través del Juicio de Amparo tratándose del Amparo Contra Leyes, dada la relatividad de la sentencia de amparo, que no surte efectos erga omnes, que no anulan la ley, evita realizar una justicia constitucional democrática, no tiene vigencia el principio de la igualdad frente a la ley.

El Maestro RAMÓN PALACIOS, nos dice: "Este efecto es el que invade de terror a nuestros constitucionalistas, que se han convertido en los resignados sepultureros de la facultad del Poder Judicial". (La Suprema Corte y Las Leyes Inconstitucionales).

Así pues, con la competencia de la Corte para conocer de las acciones inconstitucionales, interpuestas por el equivalente del 33% de los integrantes de la Cámara de Diputados o del Senado, contra leyes Federales, Tratados o Leyes del Distrito Federal que expida el Congreso; así pues, tanto los fallos de la Suprema Corte sobre acción de inconstitucionalidad y la Controversia Constitucional, tendrán efectos generales cuando sea aprobado por una mayoría de 8 votos; así pues, se establece en nuestro país un sistema de justicia de jurisdicción constitucional especializada, por lo que la fórmula "Otero" de la relatividad de la sentencia debe transformarse y la sentencia de la Suprema Corte en Amparo contra Leyes debe surtir efectos generales erga omnes, estableciendo una justicia igualitaria; se necesita "la adopción en México – afirma el Maestro Palacios Vargas- de medidas enérgicas que revivan los viejos prestigios del Juicio de Amparo". (La Suprema Corte y las Leyes Inconstitucionales, p. 105, Ediciones Botas, 1962).

Recordemos que RABASA nos dice que:

"El Juicio Constitucional merece los elogios que se le prodigan, como institución practica mantiene la Supremacía de la Constitución y protege al individuo en el goce de los derechos que de aquélla derivan; PERO NO HAY QUE OLVIDAR QUE ES SOLO UN INSTRUMENTO IMPERFECTO, HAY MUCHA DISTANCIA DEL IDEAL TEÓRICO QUE SE PERSIGUE".

El Doctor HÉCTOR FIX-ZAMUDIO, Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, en su artículo "LA JUSTICIA CONSTITUCIONAL EN IBEROAMÉRICA Y LA

**DECLARACIÓN GENERAL DE INCONSTITUCIONALIDAD**", afirma: "Pero además de la declaración general de inconstitucionalidad que se está imponiendo paulatinamente, y que tiene que vencer todavía los arraigados conceptos de la desaplicación para cada caso concreto, como sucede en México con la llamada 'fórmula Otero', la que se ha convertido en un verdadero dogma, justificable históricamente, pero vacío de contenido en la actualidad; el paso posterior que pueden dar los ordenamientos que ya han conquistado esa declaración general, es el establecimiento de una jurisdicción constitucional especializada, que debemos considerar como la verdadera culminación del desarrollo de la justicia constitucional en Iberoamérica". (Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, Tomo XXXIV, Enero-Junio 1984, números 133-134-135, pág. 686).

Es necesario transformar la "fórmula de OTERO", para que la sentencia de la Corte Constitucional en el amparo contra leyes tenga efectos de declaración general obligando a las autoridades responsables (Poder Legislativo) a la abrogación de la Ley inconstitucional para lograr una justicia democrática.

El principio ERGA OMNES de la sentencia, hace reflexiones en torno al artículo 25 del Acta de 1847, el artículo 102 de la Constitución de 1857 y de todas nuestras Leyes de Amparo, hasta llegar a nuestra Constitución, en el artículo 107 fracción II y 76 de la Ley de Amparo.

El principio de la relatividad de la sentencia de amparo debe superarse para que surta efectos generales la ley declarada inconstitucional



por la jurisprudencia; y ello se debe a una evolución de los medios de control en Europa y Latinoamérica. Es una transformación que con toda seguridad aceptaría el ilustre Don Mariano Otero, como ya ha sucedido con la creación de la acción de inconstitucionalidad, que aunque se ha silenciado por el Legislador y autores de la reforma del artículo 105 fracción II de la Constitución, este medio de control no es más que el RECLAMO DE OTERO, (artículo 16, 17 y 18 de su Proyecto, 22, 23 y 24 del Acta de Reformas de 1847), cambiando el número de 10 diputados, 6 senadores por el 33%, y el órgano de control político a órgano de control judicial. El reclamo evolucionó de acuerdo con el avance de la democracia, y que con las controversias constitucionales, la Suprema Corte, adquiere la característica de un Tribunal Constitucional, que declara NULAS las leyes inconstitucionales; ya RAMÍREZ sostenía que "la derogación parcial" era un desatino y más convenía la derogación total y abierta.

JOSÉ BARRAGÁN, afirma: "Otero, en efecto, distinguió bien ambos sistemas el de la anulabilidad y el amparo, de que hablaremos seguidamente. Uno y otro sistemas se encomiendan a instituciones diferentes: la anulación estaba a cargo del Congreso general respecto de las leyes locales; y a la mayoría de las legislaturas respecto de las leyes generales;..."

"Mariano Otero diferenció perfectamente ambos sistemas. Si el sistema de la anulabilidad se le encomendaba al Congreso y, en su caso, a la mayoría de las legislaturas, era lógico prohibirle luego a la justicia el que hiciera declaración alguna acerca de la inconstitucionalidad de la ley o acto recurrido, debiéndose limitar a proteger al quejoso en particular. Tal

prohibición, por tanto, impuesta o prescrita al Poder Judicial, era razonable y lógica dentro de todo el sistema de garantías de otro, pero carece de sentido en la Constitución de 1857 y en la de 1917, ya que en ninguna de las dos Constituciones se recoge la primera parte del sistema, o de la anulabilidad de las leyes anticonstitucionales. Decir que la justicia federal organizada conforme a las mencionadas Constituciones de 1857 y 1917, sólo puede amparar y proteger al quejoso y no puede pronunciarse ni sobre la constitucionalidad de la ley o acto que motiva el amparo, ni sobre la responsabilidad del agente, sólo porque la fórmula de Otero así lo indica, resulta una verdadera aberración, o una verdad a medias (si es que existen las medias-verdades) que sería injusta y minimalista". (Autor citado, Facultades de la Justicia Federal en , Materia de Responsabilidad Según las Constituciones Mexicanas de 1824 y 1857, publicado en el Anuario Mexicano de Historia del Derecho III-1991, Universidad Nacional Autónoma de México, 1991).

Debe implantarse el principio de la eficacia erga omnes de la sentencia de amparo, cuando se forme la Jurisprudencia sobre la inconstitucionalidad de una ley, así se evitará la práctica de leyes inconstitucionales, porque la jurisprudencia, obligará a la autoridad legislativa a anular la ley, y no tendrá eficacia para casos futuros. "El amparo contra leyes es el más grave y el más genuinamente constitucional". Es el motivo supremo del Juicio de Amparo.

Si la ley declarada inconstitucional se desaplica en cuanto al quejoso; y continua surtiendo sus efectos para todos los gobernados, entonces "se

concluye –afirma PALACIOS VARGAS- que el amparo ha sido MAL ESTRUCTURADO”. (Instituciones de Amparo, p. 224).

El Tribunal Constitucional como Organo Supremo Jurisdiccional que protege la Supremacía Constitucional, debe ser un dique, al ejercer la función de su competencia frente a la inconstitucionalidad de las normas constitucionales; ese sería el verdadero “GOBIERNO NO LOS JUECES” SINO LA CONSTITUCIÓN; alcanzando así la Corte Suprema el PODER POLÍTICO CONSTITUCIONAL ejerciendo así un PODER de ENMENDAR LA CONSTITUCIÓN, pues, cuando la norma constitucional por chocar o contradecir con una decisión fundamente, debe ser declarada inconstitucional con efectos anulatorios, con fuerza erga omnes “que tiene, pues –afirma Eduardo García Enterría- una naturaleza puramente legislativa. Es, en consecuencia, el Tribunal Constitucional un Legislador...”. El Tribunal Constitucional Alemán –afirma BACHOF- ha integrado jurisprudencia de “NORMAS CONSTITUCIONALES INCONSTITUCIONALES” (verfassungswidrige vafas sun snormen).

Si aceptamos el carácter de Tribunal Constitucional de nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación, siguiendo el modelo europeo que sigue el sistema de HANS KELSEN, establecido en la Constitución Austríaca de 1920 y 1929, debemos considerar, que debido a la evolución histórica y por estos mismos motivos, la Corte Constitucional tiene la función, mediante una interpretación de confrontar las normas constitucionales con las ESTRUCTURAS FUNDAMENTALES y si chocan, declaran INCONSTITUCIONALES LAS NORMAS CONSTITUCIONALES, que violan “los valores superiores” que consagran las DECISIONES

**FUNDAMENTALES de la Constitución de que habló SCHMITT, pues, esta función que debe de ejercer la actual CORTE CONSTITUCIONAL, es para proteger la Constitución contra la dictadura y el abuso del Legislativo.**

**Nuestra CORTE CONSTITUCIONAL como intérpretes Supremo de la Constitución, frente a la inconstitucionalidad de Leyes o actos y de "NORMAS CONSTITUCIONALES INCONSTITUCIONALES", debe constituir un auténtico factor real de poder en el seno del Estado Mexicano, cuyas sentencias deben de tener el valor erga omnes, frente a la colisión con la Constitución de un acto o Ley inconstitucional, o cuando la norma constitucional choca con otra de mayor jerarquía por contener una decisión político-jurídica de la constitucional o porque el proceso legislativo de la norma suprema contenga vicios de procedimiento. Esa sería "la obligación más fuerte, la vinculación más fuerte del Juez a la Constitución (higher, superior obligation)". (Nicolás Martínez Cerda, Tomo II, páginas 853 a 865)**

---

**Se necesita reformar el artículo 107 fracción I, el artículo 76 de la Ley de Amparo, que consagran el principio de la relatividad de la sentencia de amparo, que limita su eficacia al quejoso a la cosa litigiosa, sin el control del Legislativo, al no adquirir o carecer de valor erga omnes.**

**Es necesario superar la "fórmula de OTERO", para que la sentencia de la Corte Constitucional en el amparo contra leyes tenga efectos de declaración general obligando a las autoridades responsables (Poder**

Legislativo) a la abrogación de la Ley inconstitucional para lograr una justicia democrática.

La declaratoria de inconstitucionalidad de la ley debe tener eficacia erga omnes, es decir, "hacer perder para siempre su eficacia normativa general y abstracta". (Calamandrei, Derecho Procesal Civil, Tomo III, Editorial Ejea, págs. 32 y 33).

Debe implantarse el principio de la eficacia erga omens de la sentencia de amparo, cuando se forme la Jurisprudencia sobre la inconstitucionalidad de una ley; así se evitará la práctica de leyes inconstitucionales, porque la jurisprudencia, obligará a la autoridad legislativa a anular la ley, y no tendrá eficacia para casos futuros. "El amparo contra leyes es el más grave y el más genuinamente constitucional". Es el motivo supremo del Juicio de Amparo. "Una Ley Inconstitucional... es tan eficaz como si nunca hubiese existido".

Cuando la Suprema Corte por jurisprudencia integradora (5 ejecutorias) declare la inconstitucionalidad de una ley, tendrá eficacia general (erga omnes), será declarada nula. La declaratoria de inconstitucionalidad por la jurisprudencia será notificada al Congreso de la Unión, para su abrogación, en un plazo de 30 días; y a los Congresos Locales, en el mismo plazo, par los mismos efectos. La declaración de la inconstitucionalidad, como consecuencia de la anulación jamás podrá aplicarse. (Nicolás Martínez Cerda, Tomo II, páginas 869 y 870)

Planteo, asimismo la propuesta en relación a los efectos generales de la jurisprudencia definida sobre inconstitucionalidad de la Ley, en virtud de que el desenvolvimiento histórico-jurídico del juicio de amparo, demuestra que ha superado el riesgo de convertirse en instrumento político, que fue el principal motivo por el que se instauró el principio de relatividad del juicio de amparo, también conocido como principio de Mariano Otero, en el siglo XIX. (Bulmaro Corral Rodríguez, Tomo II, página 877)

---

**Reformas a los principios del juicio de amparo.**

A. Principio de relatividad de las sentencias (artículo 107, fracción II de la Constitución y 76 de la Ley de Amparo).

14.- En el proyecto de Constitución para Yucatán que formuló Manuel Crecencio Rejón, en el artículo 53 se dice:

"...Art. 53. Corresponde á este tribunal (Corte Suprema de Justicia) reunido: 1° amparar en el goce de sus derechos á los que le pidan su protección, contra las leyes y decretos de la Legislatura que sean contrarias á la Constitución; ó contra las providencias del Gobernador ó Ejecutivo reunido, cuando en ellas se hubiese infringido el Código fundamental ó las leyes, limitándose en ambos casos á reparar el agravio en la parte en que estas ó la Constitución hubiesen sido violadas..."

En el artículo 19 del proyecto de reformas que propuso en su artículo 25 del Acta de Reformas de 1847, dice:

“...Art. 19. Los tribunales de la Federación ampararán á cualquier habitante de la República en el ejercicio y conservación de los derechos que le concedan esta Constitución y las leyes constitucionales, contra todo ataque de los Poderes Legislativo y Ejecutivo, ya de la Federación, ya de los Estados, limitándose dichos tribunales á impartir su protección en el caso particular sobre que verse el proceso sin hacer ninguna declaración general respecto de ley ó del acto que lo motivare.

La proposición de Otero fue integrada a la Constitución de 1857 en el artículo 102 y en la de 1917 en el artículo 107, fracción I, precepto que en el texto original decía:

“...I.- La sentencia será siempre tal, que sólo se ocupe de individuos particulares, limitándose a ampararlos y protegerlos en el caso especial sobre el que verse la queja, sin hacer una declaración general respecto de la ley o acto que la motivare...”

La Ley de Amparo, en el ahora artículo 76, dispone:

“...Las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo sólo se ocuparán de los individuos particulares o de las personas morales, privadas u oficiales que lo hubiesen solicitado, limitándose a ampararlos y protegerlos, si procediere, en el caso especial sobre el que verse la demanda, sin hacer una declaración general respecto de ley o acto que lo motivare...”

Tradicionalmente este principio se ha aplicado en sus términos y la formula que utilizan los Tribunales Federales para conceder el amparo dice: la Justicia de la Unión ampara y protege a X contra actos de a), b) y c) consistentes en... Y la sentencia siempre favorece o perjudica a quienes son parte en el juicio y a nadie más.

Este principio tiene origen romano pues el Digesto disponía lo siguiente: *Res inter alios acta vel iudicata, alteri nec prodest, nec nocet.*

Pero a pesar de que este principio afirma que las sentencias sólo perjudican o favorecen a quienes litigaron, lo cierto es que de acuerdo con el objeto del juicio, la sentencia podrá tener efectos universales y doy dos ejemplos:

\* Si una resolución judicial atribuye a Juan la propiedad de un predio, dicha resolución, tendrá que ser observada por todos, pues el derecho real de propiedad es oponible a todos.

\* Si un Juez Familiar considera que Juan puede cambiar de apellido, el nuevo apellido tendrá que ser aceptado y observado por todos, ya que el efecto de la sentencia que permite el cambio de nombre es universal y retroactivo, porque tendrán que modificarse todos los documentos, en que aparezca el nombre primitivo.

Atento lo anterior, tanto Rejón como Otero, que eran abogados, para evitar que las sentencias pronunciadas en el juicio de amparo tuvieran un alcance universal, lo que hubiera ocasionado el rechazo del juicio de



garantías por las animadversiones que habían existido en relación con el llamado Supremo Poder Conservador y sus resoluciones con efectos universales, dispusieron que su efecto fuera particular, limitado.

Por tal motivo, para que no tuvieran efectos universales las sentencias de amparo, se estableció lo que ahora llamamos el "principio de relatividad".

15.- Desde 1847, fecha del Acta de Reformas, a este año de 2000 han transcurrido 153 años. El juicio de amparo ha hecho un largo camino y hoy podemos decir que todos los mexicanos lo han aceptado, por lo que cabe examinar el principio de relatividad de las sentencias, para determinar si debe conservarse como se encuentra o puede ser modificado.

Es indudable que cuando el juicio de amparo se pide respecto de actos concretos de la autoridad, la sentencia que en el juicio se dicte sólo podrá favorecer o perjudicar a quienes son parte y no a otra persona alguna, de ahí que en relación con este tipo de juicios debe conservarse intacto el principio de relatividad; pero el amparo no sólo se promueve contra actos concretos, sino también contra leyes y la ley, por su propia naturaleza, es un ordenamiento general y abstracto, obligatorio para todos aquellos que se encuentran comprendidos dentro de su hipótesis de aplicación.

Así las cosas, si la Suprema Corte de Justicia considera que una norma general es contraria a la Constitución, de acuerdo con la formula de Otero, tal resolución solamente va a favorecer a quienes solicitaron el juicio

de garantías, pero no a quienes no lo pidieron, lo que entraña, en primer lugar, una situación de desigualdad entre quienes solicitaron el amparo y obtuvieron una sentencia favorable y aquéllos que por la circunstancia que haya sido, no pudieron presentar el juicio o no pudieron obtener una sentencia favorable. Los primeros no están obligados a observar la ley, los segundos tienen que acatarla, quieran o no. Esta situación, repito, es notoriamente desigual.

Además, si la Suprema Corte de Justicia es el interprete de la Constitución y ha estimado que una norma de carácter general es contraria a la dicha Constitución, su sentencia debe tener un efecto general, porque resulta absurdo que una ley inconstitucional, es decir una norma que ya se ha declarado por quién puede hacerlo, que es contraria a la ley fundamental, continúe en vigor, y, repito es un absurdo; para mostrarlo con mayor claridad daré un ejemplo: hace años en el Distrito Federal estaban en vigor unos reglamentos para panaderías, tortillerías etc. En todos esos reglamentos se contenía el llamado requisito de distancia, es decir la prohibición de instalar un establecimiento igual a aquellos a que el reglamento se refería, dentro de un radio de 50 o 100 metros. Todos estos reglamentos fueron declarados inconstitucionales una y otra vez por la Suprema Corte de Justicia y todos esos reglamentos siguieron vigentes y eran aplicados por la autoridad. ¿No es esto absurdo? No es contrario a la Constitución que siga en vigor y aplicándose una ley o un reglamento, que no la acatan.

Y si esto es así, por un elemental espíritu de igualdad, congruencia y justicia, debe otorgarse un efecto universal, obligatorio para todos, a las

resoluciones de la Suprema Corte de Justicia que declaren inconstitucional una norma de carácter general, lo que significa una modificación al artículo 107, fracción I de la Constitución y, por consecuencia, al artículo 76 de la Ley de Amparo, estableciendo una redacción que podría ser la siguiente: "Las ejecutorias de la Suprema Corte de Justicia, que declaren inconstitucional una norma general, deberán ser cumplidas por todas las autoridades".

Un último argumento olvidando el razonamiento de Marshall: la Constitución de acuerdo con su artículo 133 es la Ley Suprema de la Nación, y a ella deben ajustarse los actos de todas las autoridades quienes, de conformidad con el artículo 128 del propio texto constitucional, antes de tomar posesión de su encargo protestan guardar la Constitución. Por tanto, si la Suprema Corte de Justicia de la Nación establece que una norma de carácter general es contraria a la Constitución, todas las autoridades, en cumplimiento a la protesta que hicieron de acuerdo con el artículo 128, deben dejar de aplicar la norma que el Tribunal, intérprete de la Constitución ha determinado que es contraria a la misma, por lo que las ejecutorias de la Suprema Corte, como ya se dijo, deben ser cumplidas por todas las autoridades.

16.- Sin embargo surgen dos problemas, a saber:

En el párrafo anterior se propone dar efecto general a una ejecutoria de la Suprema Corte que declare que una norma general es inconstitucional.

Muchos hay que estiman que no debe darse ese efecto, porque sería tanto como invadir las facultades del Poder Legislativo o del Ejecutivo en su facultad reglamentaria, objeción que en principio parece razonable, ya que es cierto que los Tribunales Federales podían convertirse en autoridades que derogaran la ley; pero para esto hay un remedio: que la resolución que declare inconstitucional una norma general, sólo sea cumplida por las autoridades que tienen obligación de aplicarla, sin que tenga la ejecutoria efectos derogatorios, o sea que la norma general queda vigente pero privada de efectos. Esto se puede obtener mediante una adición al artículo 192 de la Ley de Amparo, que establezca que la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia debe ser acatada por todas las autoridades del país y no como ahora, que es obligatoria exclusivamente, para los Tribunales, de jure o de facto, y esto nos lleva al segundo problema.

Hasta ahora he hablado de una resolución, pero se objeta por muchos, y creo que con razón, que una sola sentencia declarando inconstitucional una norma no es suficiente, porque también los Tribunales, formados por hombres, pueden equivocarse, de ahí que la mayoría de los partidarios del efecto universal en el amparo contra leyes, estimen que tal efecto debe darse a la jurisprudencia de la Suprema Corte y no a una ejecutoria que declare inconstitucional una norma.

De las dos proposiciones, si debe darse efecto general a una ejecutoria o a la jurisprudencia, me inclino por la primera, por dos razones: la jurisprudencia puede tardar en formarse mas tiempo del adecuado y quedar vigente una ley inconstitucional, máxime que hay normas fiscales con duración anual, respecto de las cuales no habría jurisprudencia posible,

salvo que los amparos se fallaran en una o dos ocasiones, siempre que fueren consecutivas.

La otra razón deriva de los artículos 192, último párrafo, de la Ley de Amparo y 42, y 72 de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 Constitucional, ya que en las contradicciones de tesis una sentencia constituye jurisprudencia; en las controversias constitucionales, una sentencia tiene efectos generales y en las acciones de inconstitucionalidad una sentencia invalida ley combatida. Por tanto, creo que bastará una ejecutoria que declare la inconstitucionalidad de una ley, para que tenga efectos generales, agregando al capítulo único del título cuarto de la Ley de Amparo, un artículo que diga que constituyen jurisprudencia las resoluciones que declaren inconstitucional una norma general, jurisprudencia que deberá ser observada por todas las autoridades del país.

17.- Finalmente, para el mayor éxito de esta disposición, la parte de la ejecutoria que declare la inconstitucionalidad deberá publicarse en el Diario Oficial y en los principales periódicos de México. (Jesús A. Arroyo Moreno, Tomo II, páginas 1025 a 1032)

---

Enmienda.

MISMO TEXTO, CON LA ADICIÓN SIGUIENTE:..., SALVO QUE SE TRATE DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS O DEMÁS DISPOSICIONES DE OBSERVANCIA GENERAL, DECLARADAS

INCONSTITUCIONALES POR JURISPRUDENCIA, PROCEDIÉNDOSE EN ESTE CASO, CONFORME A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 105 BIS DE ESTA LEY.

**Motivos.**

SIENDO EL PRINCIPIO DE LA RELATIVIDAD DE LAS SENTENCIAS PRONUNCIADAS EN LOS JUICIOS DE AMPARO, UNA DE SUS CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTALES, SURGE FRENTE AL MISMO LA PERMANENTE ASPIRACIÓN DE LA OBEDIENCIA A LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, AL INVARIABLE RESPETO A LA SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL, CONSAGRADA EN EL ARTÍCULO 133 DE LA CARTA MAGNA. CUANDO LA JURISPRUDENCIA QUE DECLARA LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LAS LEYES O DISPOSICIONES PRIMERAMENTE REFERIDAS Y ADQUIERE CARÁCTER OBLIGATORIO CONFORME AL ARTÍCULO 192 DE LA LEY DE AMPARO, SU EJECUCIÓN RESULTARÍA ILUSORIA SI SÓLO SURTIERA EFECTOS RESPECTO DEL QUEJOSO. COMO LAS LEYES ENTRE SUS CARACTERÍSTICAS TIENEN EL CARÁCTER GENERAL E IMPERSONAL, RESULTA PLENAMENTE JUSTIFICADO CUANDO SON DECLARADAS INCONSTITUCIONALES POR LA JURISPRUDENCIA QUE CONCLUYA SU VIGENCIA. ( Fidencio Ramírez y Fidel Herrera Beltrán, Tomo II, páginas 1145 a 1147)

---

Al libro segundo relativo al juicio de amparo en materia agraria, título único, artículo 76 actualmente contiene la redacción siguiente:

**"ARTICULO 78.- Las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo sólo se ocuparán de los individuos particulares o de las personas morales, privadas u oficiales que los hubiesen solicitado, limitándose a ampararlos y protegerlos, si procediere, en el caso especial sobre el que verse la demanda, sin hacer una declaración general respecto de la ley o acto que la motivare".**

### **EXPOSICION DE MOTIVOS QUE GENERA LA PROPUESTA.**

Tomando en cuenta el avance y grado de madurez tanto político como jurídico de nuestro país, así como el marco del estado de derecho de nuestro sistema jurídico claro e imparcial, como una condición necesaria para el ejercicio de la democracia, el funcionamiento de las políticas económicas y el crecimiento como nación, en atención a que la legalidad es un valor superior por encima de ideologías o posturas políticas, en tanto que sin un profundo respeto al derecho como ciencia del orden social, reflejado a través de la ley en todas sus formas y excepciones, ninguna sociedad podría avanzar al carecer sus miembros de la certidumbre respecto a los que los otros miembros de la sociedad, incluyendo el Gobierno podrían realizar, sin contar con un régimen de derecho.

En dicha tesitura ideológica, se propone ampliar el principio de la relatividad de las sentencias al considerar que para que exista credibilidad y estricto derecho en las instituciones republicanas, es menester que respecto a las iniciativas de ley no se aplique dicho principio cuando se ejercite el juicio de amparo, así como tratándose de amparo contra leyes, en virtud

que actualmente resulta inconcebible que la justicia a través del amparo y protección del Gobierno Federal sólo sea para un sector de la población que posee los medios para interponer el juicio de amparo, con relación a la importancia social que representa una reforma de rango constitucional o una ley, no obstante que se entienda la importancia histórica del principio que rige el dispositivo que se pretende modificar, aunque actualmente no exista la renuencia del Poder Judicial de la Federación para ocuparse de analizar la constitucionalidad de una reforma a la Constitución, pues conforme al principio de relatividad de los efectos de la sentencia de amparo, si se llegara a declarar que dicha reforma se encuentra viciada, esto únicamente va a favorecer a quien pida el amparo, esto es nada más a un sujeto o a los que en número específico interpongan el amparo, y la trascendencia como ya se dijo tratándose de una norma constitucional, debiera ser en todo caso que la sentencia vallera erga omnes, por lo que es aquí en donde radica la esencia de la reforma propuesta, en tanto que hasta ahora los efectos relativos de la sentencia de amparo no permiten que la sola declaración de inconstitucionalidad de una norma la nulifique, sino que únicamente se deja de aplicar en contra de las personas que obtienen el amparo.

Por lo que dado la trascendencia que significa la responsabilidad jurídica, política y social de las reformas constitucionales como de las leyes que expide el constituyente, se considera que es el momento adecuado para que dicha responsabilidad sea compartida con el garante natural de la Constitución que el Poder Judicial Federal, en virtud de que debe existir un cauce legal para dirimir las bondades o defectos de una posible reforma que podría ser contraria al propio texto Constitucional, toda vez que como ya



dijimos la legalidad de la Constitución es un valor superior, más allá de ideologías o posturas políticas que le da certidumbre al régimen democrático y republicano que rige nuestro país.

Así las cosas, se propone la siguiente redacción al artículo 76 de la Ley de Amparo:

**"ARTICULO 76.- Las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo sólo se ocuparán de los individuos particulares o de las personas morales, privadas u oficiales que lo hubiesen solicitado, limitándose a ampararlos y protegerlos, si procediere, en el caso especial sobre el que verse la demanda, sin hacer una declaración general respecto de la ley o acto que la motivare, excepción hecha cuando se trate del juicio de amparo en contra de una Reforma Constitucional o en amparo contra leyes en cuyo caso por su trascendencia la resolución tendrá efectos erga omnes, es decir, generales".(Agustín Hernández González, Tomo II, páginas 1331 a 1333)**

---

**Artículo 76. consignar una fracción que diga:**

**"Los Jueces de Distrito y los Magistrados del Tribunal Colegiado, deberán tramitar y resolver los amparos que ante ellos se interpongan en estricto orden en que fueron citados para sentencia, sin dar preferencia a ninguno.**

**"El incumplimiento a esta disposición será causa de responsabilidad".**

También en mis 69 años de ejercer la profesión, he podido comprobar que Jueces de Distrito y Magistrados del Tribunal Colegiado, por razones inexplicables o inconfesables, resuelven determinados juicios, no en el orden cronológico en que han sido puestos para sentencia.

Consignar otro párrafo que sería a continuación del actual artículo 76, con el siguiente texto:

"Redactada una sentencia, se pondrá a la vista de las partes por el término de DIEZ DIAS para que si lo creen pertinente hagan las observaciones que estimen legales y que deberá atender el funcionario o Tribunal respectivo".

"Si esto aconteciere en un Juzgado de Distrito el litigante que dentro del término citado no hiciera observación alguna a la sentencia proyectada, perderá el derecho a recurrirla y causará estado en su contra".

La costumbre de hacer entrega del proyecto de la sentencia, fue seguida por muchos años por la entonces Tercera Sala Civil de esta H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, y actualmente algunos Magistrados del Tribunal Colegiado la siguen, y dio y da muy buen resultado para la buena administración de justicia, porque frecuentemente se cometen equivocaciones, omisiones y violaciones y algunas veces, pero pocas, entonces inadvertidas, y hoy deliberadas, por venalidad, corrupción o ineptitud de Jueces de Distrito o Magistrados del Tribunal Colegiado, tanto más cuando que los Jueces de Distrito y sobre todo los Magistrados del

Tribunal Colegiado, tienen cada uno dos o tres auxiliares que les llaman "proyectistas" y me consta que muchos de esos Juzgadores se atienen al proyecto de esas personas y no se enteran del expediente, y menos aún los otros dos miembros del Tribunal, distintos al Ponente, que simplemente leen la sentencia sin enterarse de las constancias del expediente para cerciorarse que el proyecto coincida con estas y no omita alguna. (Félix Galindo D. B., Tomo II, páginas 1367 a 1369)

---

El Congreso de Magistrados concluyó que el principio de relatividad de las sentencias transgrede la Supremacía Constitucional, consagrada en el art. 133 de la Carta Magna, pues deja su observancia sujeta al nivel cultural y/o económico del gobernado.

#### **TEXTO CON MODIFICACIÓN**

**ARTICULO 76.-** Las sentencias que se dicten en los juicios de amparo en que se decrete la inconstitucionalidad de una ley o un acto, que afecte no sólo al quejoso, tendrán el efecto de hacer extensivo a todos los que se encuentren en el mismo supuesto, quedando la o las autoridades responsables obligadas a observar tal conducta. (María Simona Ramos Ruvalcaba, Tomo II, página 1412)

---

Otro problema relevante que sobre las sentencias de amparo se ha suscitado, consiste en los llamados amparos para efectos, en los que el tribunal que conoce del juicio de garantías al momento de resolverlos se limita declarar nulo el acto de autoridad, para el efecto de que la

responsable emita uno nuevo con plenitud de jurisdicción, y si bien esto es correcto, en los amparos judiciales, especialmente en los directos, se ha abusado de esta figura, pues con el ánimo de respetar al máximo la jurisdicción de la responsable, muchas veces la concesión del amparo es muy ambigua, y ello da lugar a que en lugar de que la responsable se sienta orientada por la sentencia de amparo, sucede exactamente lo contrario, pues no sabe exactamente en que consistió la violación, y ello da lugar que al emitir una nueva resolución se cometa la misma violación o alguna otra, lo que puede dar lugar a la repetición del acto reclamado o a un nuevo amparo, y así sucesivamente haciendo una cadena interminable de amparos en un mismo asunto, lo que implica que la impartición de justicia se retrase.

Ante esta situación considero que los amparos para efectos sólo deberían darse, cuando el objeto de la protección federal fuera reponer el procedimiento (admitir una prueba, un recurso, revocar actuaciones nulas para realizarlas conforme a la ley, etc), y hecho esto dictar una nueva sentencia conforme a los elementos que tenga el juez responsable. Pero en el caso de los amparos contra sentencias porque al dictarla no se valoró adecuadamente alguna prueba, o no resolvió alguno de los puntos litigiosos, o no se fundamentó conforme a la letra de la ley o de su interpretación jurídica, o no se motivó conforme a los hechos, creo que es ocioso que el juez con plena jurisdicción pueda emitir una nueva sentencia, pues lo cierto es que la autoridad federal en la sentencia de amparo ya determinó que la responsable violó determinadas garantías, normalmente las de audiencia y legalidad, por las razones que se expresan en la parte considerativa de la misma, por la que la responsable debe quedar vinculada con las razones

expuestas en la sentencia de amparo y en cumplimiento de ella, emitir una nueva resolución, tomando en cuenta esas razones, pues si no lo hace, insiste en la violación de garantías por la que su acto fue revocado.

Esta solución no da lugar a que se invada la competencia de los tribunales locales, ya que ellos resuelven un problema de propiedad, de familia, de arrendamiento, etc., y el tribunal de amparo lo que determina es si la forma en que el juez responsable dirimió el conflicto que le fue planteado viola o no las garantías previstas en los artículos 14, 16 o en algún otro de los que integran la parte dogmática de la Constitución. (Jorge Antonio Galindo Monroy, Tomo III, páginas 1641 y 1642)

---

Uno de los principios más importantes del juicio de amparo es el de la relatividad de las sentencias, conforme al cual éstas se limitaran a proteger al agraviado en el caso especial sobre el que verse la queja sin hacer una declaración general sobre la ley o acto que la motivare. La razón del principio salta a la vista, pues con base en la garantía de audiencia ninguna sentencia puede afectar a quién no fue parte en el juicio; pero además hay una razón histórica, evitar el enfrentamiento que existió entre las autoridades causado por el Supremo Poder Conservador. Sin embargo hay que considerar que los efectos de las sentencias también dependen de la naturaleza del derecho que tutela, por ejemplo la que declara la titularidad de un derecho real a favor de persona determinada, también afecta a terceros pues aunque no hayan sido parte en el juicio están obligados a respetar el derecho real decretado judicialmente a favor de cierta persona.

Bajo este criterio podría concluirse que de concederse el amparo en contra de una norma general, ésta debería anularse y dejar de obligar a la colectividad, ya que por tener efectos generales y abstractos se aplicaría a cualquier persona que estuviere en su hipótesis, pero por su inconstitucionalidad declarada, no podría seguir obligando. Sin embargo se pensó que esta solución no era necesaria porque a través de los golpes redoblados de la jurisprudencia la autoridad dejaría de aplicar la ley aunque esta no hubiere quedado derogada, sin embargo en México los golpes redoblados de la jurisprudencia no han surtido efectos pues hay leyes que hace mas de medio siglo se declararon inconstitucionales y al día de hoy las responsables las siguen aplicando.

En estas condiciones si bien es cierto que por su naturaleza la ley debería dejarse de aplicar a partir de su declaración de inconstitucionalidad, como sucede en las acciones de inconstitucionalidad y en las controversias constitucionales, también lo es que por la trascendencia de las consecuencias que puede tener la resolución que declara inconstitucional una ley, y para lograr una mayor certeza jurídica sobre la bondad de las decisiones del Tribunal Constitucional, es necesario una mayor reflexión para dejar de aplicar la ley declarada inconstitucional, y es a través de la jurisprudencia que pueden anularse con efectos erga omnes las disposiciones generales declaradas inconstitucionales. La razón es sencilla, en México la jurisprudencia en amparo normalmente se integra con 5 sentencias dictadas en el mismo sentido y de manera ininterrumpida, lo que significa mayor estudio y reflexión sobre el problema planteado, pues si el tribunal se percató que cometió un error, puede corregirlo cambiando el

criterio y sosteniendo otro que cumpla con los requisitos para integrar jurisprudencia.

Además es necesario que la jurisprudencia que declara la inconstitucionalidad de una ley obligue no solo a los tribunales, sino a cualquier tercero y derogue o abroge en su caso la norma jurídica impugnada, sin que en contra de ello obste la fórmula Otero ya que ésta se refiere a las sentencias que son las resoluciones que dicta el Juez resolviendo el fondo de la controversia o una cuestión incidental, pero como la jurisprudencia no es una sentencia, sino el criterio judicial sostenido de manera reiterada por los tribunales en diversos casos, a ella no le es aplicable la Fórmula Otero.

Las principales objeciones que podrían formularse serían que el Poder Judicial Federal se convertiría en un super poder que nulificaría los actos de las demás autoridades, lo que violaría el principio de división de poderes; la segunda objeción podría orientarse sobre la vigencia de la jurisprudencia, esto es si solo afectaría a situaciones verificadas con posterioridad a su integración o a las realizadas con anterioridad a ella; la tercera podría consistir en qué sucedería con las personas que hubieren acatado voluntariamente la ley inconstitucional y que no tuvieran objeción en seguirlo haciendo. A estos argumentos se les podrían dar las siguientes respuestas. Al primero, que el Poder Judicial Federal desde la Constitución de 1857 es el Supremo Poder de la Unión, por ser el único capaz de juzgar los actos de los demás poderes y si al hacerlo los estima inconstitucionales, los declara nulos, aunque dicha nulidad tenga efectos relativos, en el entendido de que los otros poderes no pueden juzgar actos de poder,

incluso la facultad concedida en los artículos 108 a 114 de la Constitución Federal al legislativo no le permite hacerlo, pues solo juzga la conducta ilícita de la persona que integra a uno de ellos o que es alto funcionario de éstos. Además a pesar de la Fórmula Otero en la parte considerativa de las sentencias de amparo si se analiza la constitucionalidad de la norma. La segunda objeción es irrelevante pues de otorgar efectos generales a la jurisprudencia que decreta la inconstitucionalidad de una norma, simplemente habría que adoptar el criterio sobre su vigencia, estimando por seguridad jurídica que el más correcto sería que dicha derogación tuviere efectos a futuro inmediato o mediato, dependiendo del tema de la ley, o de la norma que hubiere sido declarada inconstitucional. Finalmente la tercera objeción es infundada, pues al igual que la ley establece derechos y obligaciones que deben cumplirse independientemente de lo que piense el gobernado, la jurisprudencia que tuviere efectos generales y derogara una ley, debería cumplirse con independencia de lo que pensara el gobernado. Además hay que recordar que los derechos del orden público son irrenunciables y como las garantías individuales lo son, no son renunciables su goce y ejercicio.

Existe otra razón que acaba con todas las dudas, pues en las controversias constitucionales y en las acciones de inconstitucionalidad previstas en el artículo 105 de la Constitución, se faculta al Pleno de la Suprema Corte de Justicia para que declare la nulidad de una ley con efectos erga omnes, siempre y cuando esa decisión se adopte por el voto favorable de cuando menos ocho de los once ministros.



En consecuencia cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación o un Tribunal Colegiado en el ámbito de su competencia, emita con motivo de un juicio de amparo, jurisprudencia declarando inconstitucional una norma general y abstracta, esta debería dejarse de aplicar. **(Jorge Antonio Galindo Monroy, Tomo III, páginas 1676 a 1680)**

---

Obligación de la Jurisprudencia y Fórmula Otero. Deben deslindarse dos cuestiones: el grado de obligatoriedad de los criterios interpretativos e integradores de ley emanados de los tribunales, por un lado, y la posibilidad de dar efectos generales a sus sentencias, por otro. Con relación al primer punto, la jurisprudencia debe obligar tanto a tribunales (como dispone la Ley vigente) como a autoridades administrativas. Con relación al segundo, las sentencias podrán tener efectos generales, amén de otros requisitos, sólo cuando los actos reclamados fueran normas jurídicas generales, abstractas e impersonales. **(Julio César Vázquez Mellado García, Tomo III, página 1774)**

---

**SENTENCIAS.** Inconstitucionalidad de Leyes. Cuando la Suprema Corte de la Nación resuelva sobre la inconstitucionalidad de una ley, remita la resolución al Congreso de la Unión. **(Fernando Sánchez Ugarte, Tomo III, página 1794)**

---

Las sentencias que se dictan en los juicios de amparo sólo se ocuparán de los individuos particulares o de las personas morales privadas

u oficiales que lo hubieran solicitado, limitándose a ampararlos, si procediere, en el caso especial sobre el que versa la demanda, sin hacer declaración general respecto del acto que la motive.

Tratándose de Leyes, Reglamentos y demás disposiciones de carácter general y obligatorio, la declaración de inconstitucionalidad imposibilita su aplicación.

**MOTIVOS.-** La formula otero ha sido muy criticada por lo que hace al aspecto de constitucionalidad de leyes, porque resulta no ético aplicar disposiciones inconstitucionales. Por ello, se propone flexibilizarla en el supuesto indicado. (David Ancira Martínez, Tomo III, página 1913)

---

No obstante que ha habido ya importantes reformas al respecto y existe el contenido del artículo 76 bis relativo a las excepciones a este principio, que dan forma a la llamada suplencia de la queja, pero bajo el esquema de que opera exclusivamente en relación a los conceptos de violación expresados por el quejoso en la demanda de amparo o en los escritos de recursos, a pesar de ello el Juez de amparo se encuentra maniatado para defender la constitución y anular el acto de autoridad reclamado a pesar de que la inconstitucionalidad del acto sea a todas luces manifiesta, por ello se propone la desaparición del principio de estricto derecho a fin de que los jueces tengan absoluta libertad de otorgar el amparo por causas que no se hayan señalado por el quejoso cuando sea manifiesta la contravención de la autoridad responsable al texto constitucional, pues siendo la finalidad del amparo mantener incolumne el

orden jurídico, el principio debe ser sin lugar a dudas el de suplir cualquier deficiencia independientemente de que el quejoso haya sabido o no impugnar técnicamente el acto de autoridad que viola sus derechos.

Esta propuesta de reforma no tendría más beneficio que mantener el objetivo fundamental del juicio de amparo, que es el de tutelar el respeto, que todas las autoridades deben a la ley fundamental de nuestro país. (Laura Elena Palafox Enriquez, Tomo III, página 2037 y 2038)

---

Se considera aquí que la aplicación del principio de la relatividad de las sentencias la cual hoy en día resulta completamente obsoleto toda vez que su utilización favorece única y exclusivamente a quien tiene la oportunidad de contratar los servicios de un Licenciado en Derecho para defender sus intereses y, por ende, es quien tiene las posibilidades económicas de hacerlo, pero ¿Qué hay de la inmensa mayoría de los ciudadanos que se encuentran en los mismos supuestos en que se pretende violar sus garantías constitucionales por la sola promulgación de una ley o su primer acto de aplicación?, se ha de recordar que el bien común debe prevalecer sobre el bien individual, así como el principio de generalidad de toda norma jurídica, por tales motivos cuando una ley es considerada como inconstitucional por los órganos federales en materia de amparo debe dejar de aplicarse con efectos erga omnes lo que traería como consecuencia la no operatividad del principio de la relatividad de las sentencias.

Ahora bien, la no aplicación de la fórmula Otero nos lleva a la propuesta de reformar el artículo 107 Fracción II de la Constitución que reza:

"La sentencia será siempre tal, que sólo se ocupe de individuos particulares, limitándose a ampararlos y protegerlos en el caso especial sobre el que verse la queja, sin hacer una declaración general respecto de la ley o acto que la motivare".

En conclusión podemos afirmar que para que la ley sea de observancia general se debe suprimir el principio de relatividad de las sentencias contenido en el artículo 76 de la Ley de Amparo, siendo necesario que se reforme también el artículo 107 en su fracción de nuestra Ley de Leyes, para con ello cuando un ordenamiento legal sea declarado a través de sentencia ejecutoria en materia de amparo como inconstitucional lo sea para todos los individuos que se encuentren en nuestro país, por lo que los artículos mencionados quedarían de la siguiente manera:

**Artículo 76 de la Ley de Amparo:**

"Las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo surtirán efectos erga omnes cuando se trate de leyes declaradas inconstitucionales por los tribunales federales si procediere, en el caso especial, sobre el que verse la demanda".

Con esta propuesta se evitaría el rezago judicial en materia de Amparo toda vez que no habría razón de ser de las demandas presentadas

ante los Tribunales Federales competentes por casos similares habiendo sido resueltos y así surtir efectos de aplicación general.

**Artículo 107, Fracción II Constitucional:**

“La sentencia que se pronuncie en juicios de amparo surtirán efectos de carácter general cuando se trate de leyes declaradas inconstitucionales por los Tribunales Federales si procediere, en el caso especial, sobre el que verse la demanda.”

Con esta propuesta se estaría corroborando que el bien común debe prevalecer sobre los intereses individuales y, en consecuencia, no debe aplicarse una ley declarada inconstitucional toda vez que en la actualidad dicho ordenamiento jurídico si lo permite. (Mario Luis Pérez Méndez, Tomo III, páginas 2059 a 2061)

---

**En relación con la fórmula Otero**

Se propone la derogación del artículo 76 de la ley de amparo, es decir derogar el artículo 76 que contiene la fórmula Otero por las siguientes razones:

No hay razón jurídica, ni práctica, para que una sentencia emitida por autoridad competente, que resuelva sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una ley o un reglamento o un tratado, no produzca

efectos hacia todas las personas que se encuentren en igualdad de condiciones.

De hecho, con la supresión que se propone se beneficiaría a las personas de bajos recursos, que en muchas ocasiones no promueven precisamente por su condición económica (aún cuando existe la figura del defensor de oficio).

Por otra parte, se reduciría la carga de trabajo de los tribunales que en muchas ocasiones tienen que resolver sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los mismos ordenamientos.

Al derogar el artículo 76, habría seguridad jurídica con el pronunciamiento que surtiría efectos hacia todos los que se encontraran en el mismo caso. Ya que no estarían sujetos al criterio que tuviera cada autoridad respecto del mismo asunto.

Finalmente, las leyes deben elaborarse para que respondan a las necesidades de la sociedad, deben estar apegadas al espíritu de la constitución, ya que es injusto que la constitucionalidad de un ordenamiento jurídico varíe de acuerdo a la persona que lo impugne.

Consideramos que derogando la fórmula Otero se fortalecerá el Estado de Derecho, ya que no hay mejor principio legal que en nuestro país sólo se apliquen las leyes que estén apegadas a la Constitución. Por otro lado el país avanzaría ya que el Congreso y el Ejecutivo Federal tendrían una mayor responsabilidad al formular leyes. Desde luego, sería positivo

que la Suprema Corte pudiera tener facultades de iniciativas de ley. (Luis Orlando Hernández, Tomo III, páginas 2077 y 2078)

---

También se propone que se analice la fórmula Otero, sobre todo en tratándose de amparo contra leyes, es decir que se flexibilice este principio. (Román Díaz Vázquez, Tomo III, página 2291)

---

Consideraciones.- El crecimiento lógico y natural de la población, la globalización y otros factores de índole tanto interna como externa, ha producido efectos en la vida económica y social del país, que se han traducido en problemas laborales, penales, civiles y administrativas que después de ventilarse ante las instancias correspondientes, llegan hasta los tribunales de amparo.

El aumento destacado, ha hecho que nuestra institución haya tenido que multiplicar sus órganos con el consiguiente esfuerzo de sus funcionarios, que en muchas de las veces, podría catalogarse como sebrehumano.

Es un hecho conocido que los Tribunales de control constitucional conceden, en muchos casos, el amparo de la Justicia Federal.

Buena parte de ese trabajo, que llega tanto a los Juzgados de Distrito como a los Tribunales, se debe a cuestiones relacionadas con el cumplimiento de las sentencias, que muchas veces llegan hasta la H.

Suprema Corte de Justicia de la Nación, misma que ha tenido que crear todo un aparato jurídico-administrativo para resolver esas cuestiones se ha tenido que editar un manual y emitir numerosas jurisprudencias y tesis, entre las que destaca una que propone el trámite de un incidente innominado para aclarar los efectos de una sentencia y su cumplimiento.

Desde mi particular punto de vista, la problemática se produce, la mayoría de las veces, sin ser las únicas, por dos cuestiones a saber.

**1º Falta de precisión de los efectos de las sentencias, y**

**2º Imprecisión en el momento de atender al cumplimiento por parte de las responsables, en mérito a una interpretación errónea o imprecisa de la sentencia amparadora, dictada por un Tribunal Colegiado en el recurso de revisión.**

Por tales motivos, con respecto al primer extremo, los Artículos 76 y 73, fracción III de la Ley de Amparo, se deben adicionar para que en las sentencias de amparo se imponga como obligación, para los órganos de control constitucional, que deban precisar los alcances de la protección federal, respecto de todos y cada uno de los actos reclamados de un modo claro, destacado y porque no sistematizado con relación al carácter de cada una de las autoridades responsables (ordenadoras y ejecutoras). (Francisco Javier Teodoro Arcovedo Montero, Tomo IV, páginas 2550 a 2552).



Otra reforma que se propone es la reducción de la fórmula Otero en la fracción II del supracitado artículo 107, sin que la propuesta llegue a romper con la fórmula Otero en sentido estricto, toda vez que ya existe la acción de inconstitucionalidad en el artículo 105 que prevé la abrogación automática de una ley inconstitucional por mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, órgano ante el que se sustancia la acción de inconstitucionalidad. Por ello nuestra propuesta es sólo en el sentido de que en el amparo contra leyes, el órgano legislativo emisor del acto reclamado y que tenga carácter de autoridad responsable, deba cumplir con la sentencia de amparo, derogando o reformando la parte que haya sido declarada inconstitucional por la resolución judicial, con lo que formalmente no se dá la derogación o abrogación automática de la ley como en la acción de inconstitucionalidad, y sí en cambio, se pugna porque el Legislador ajuste sus actos al régimen de constitucionalidad, sin perjuicio de que la nueva Ley de Amparo establezca ciertos mecanismos de excepción en virtud del fuero de que gozan los legisladores. (Felipe Chávez Carrillo, Tomo IV, páginas 2561 y 2562).

---

Antecedentes del principio de relatividad. Con el triunfo de la tendencia federalista en 1847, Mariano Otero fue comisionado para redactar el proyecto de reformas que deberían introducirse a la Constitución de 1824, el que luego de aprobarse en sus términos y promulgarse pasó a formar parte del derecho como el Acta de Reformas de 1847, en cuyo artículo 25 se establecía: "Los tribunales de la Federación ampararán a cualquier habitante de la República en el ejercicio y conservación de los derechos que le concede esta Constitución y las leyes constitucionales, contra todo ataque de los Poderes Legislativo y Ejecutivo ya sea de la federación, ya de

los Estados; limitándose a impartir su protección en el caso particular sobre el que verse el proceso, sin hacer ninguna declaración general, respecto de la ley o acto que la motivare”.

Tal disposición es desde ese entonces principio rector del juicio de garantías, pues la protección de los gobernados por los tribunales de amparo se concreta a protegerlos en el caso sobre el que verse el proceso constitucional, sin hacer ninguna declaración general de la ley o acto que motivare la protección.

La razón del principio de relatividad -según Otero y los Constituyentes de 1857- era evitar una declaración general de inconstitucionalidad que derogara o aboliera la ley reclamada, y que con ello provocara fricciones entre los poderes o pugnas violentas entre el Poder Judicial y el Poder Legislativo y aún el Ejecutivo.

Quizás los comentarios de Alexis de Tocqueville sobre el funcionamiento del Poder Judicial Federal de los Estados Unidos de Norteamérica, fueron los que inspiraran a Otero y a los Constituyentes de 1857, al sostener que las sentencias “no tienen por objeto más que el descargar el golpe sobre un interés personal y la ley sólo se encuentra ofendida por causalidad. De todos modos, la ley así censurada no queda destruida; se disminuye sí, su fuerza moral, pero no se suspende su efecto material. Sólo perece, por fin, poco a poco y con los golpes redoblados de la jurisprudencia”.

**Marco jurídico.** El principio de relatividad de las sentencias de amparo se encuentra previsto en los artículos 107, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 76 y 80 de la Ley de Amparo.

El primero establece que todas las controversias de que habla el artículo 103 constitucional, se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, pero entre las bases que señala está la de que la sentencia será siempre tal, que sólo se ocupe de individuos particulares, limitándose a ampararlos y protegerlos en el caso especial sobre el que versa la queja, sin hacer una declaración general respecto de la ley o acto que la motivare.

Mientras el segundo dispone que las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo sólo se ocuparán de los individuos particulares o de las personas morales, privadas u oficiales que lo hubiesen solicitado, limitándose a ampararlos y protegerlos, si procediere, en el caso especial sobre el que verse la demanda, sin hacer una declaración general respecto de la ley o acto que la motivare; y el tercero, que la sentencia que conceda el amparo tendrá por objeto restituir al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el efecto del amparo será obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir por su parte, lo que la misma garantía exija.

De acuerdo con el contenido de los anteriores preceptos, los efectos de la sentencia de amparo en un caso concreto, no producen consecuencias en todos los casos similares ni respecto de cualquier afectado por la ley o por el acto reclamados, aun cuando guarde idéntica posición jurídica con el que obtuvo la protección constitucional, es decir, la sentencia de amparo no surte efectos erga omnes sino sólo respecto de quien demandó el amparo; de manera que la ley o acto reclamados permanecen inalterados -desde el punto de vista de su validez o vigencia- para todos aquellos que no hayan sido el quejoso.

#### **CASO DE EXCEPCION DE INAPLICABILIDAD DEL PRINCIPIO DE RELATIVIDAD**

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido jurisprudencia de que tratándose del litisconsorcio pasivo necesario, el principio de relatividad no debe aplicarse al ejecutarse la sentencia de amparo sino que sus efectos también se extienden a favor de los litisconsortes que no acudieron al juicio de garantías; ello con base en que, por virtud de ese fenómeno procesal, existe unidad y el interés es común entre todos los litisconsortes, por lo que no debe dividirse el juicio cuando se ordena reponer el procedimiento por uno de ellos sino mantener la unidad del juicio y la reposición debe abarcar a todos los litisconsortes. Dicha jurisprudencia<sup>30</sup> es del rubro: "SENTENCIAS DE AMPARO. CUANDO ORDENEN REPONER EL PROCEDIMIENTO, SUS EFECTOS DEBEN HACERSE EXTENSIVOS A LOS CODEMANDADOS DEL QUEJOSO,

---

<sup>30</sup> Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo III, febrero de 1996, tesis P./J. 9/96, página 78.

**SIEMPRE QUE ENTRE ÉSTOS EXISTA LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO”.**

Y si bien su fundamento consiste en que los efectos del litisconsorcio pasivo sólo se producen dentro del proceso correspondiente, que éste es una unidad y que las consecuencias de una sentencia protectora sí deben alcanzar o beneficiar a los codemandados del quejoso en el juicio natural, por constituir -la reposición de su procedimiento- un acto necesario para el debido cumplimiento de la ejecutoria de amparo; la consideración de que esto no implica infracción al principio de relatividad, porque no se está en la hipótesis de que una sentencia de amparo se hubiese ocupado de individuos particulares o de personas morales diversas a quienes hubieren solicitado la protección federal, viene a demostrar no sólo la precisión del alcance de la jurisprudencia y lo absurdo de que se reponga un juicio por uno y quedara firme por otros, sino la ventana jurídica por la que pueda apartarse del principio de relatividad.

La ley sólo queda abrogada o derogada por otra cuyo nacimiento le preceda y que así expresamente lo declare, o bien que contengan disposiciones incompatibles entre una y otra, pero lo cual es obra del Poder Legislativo.

Al Poder Judicial de la Federación se le encomienda la decisión de inconstitucionalidad o no de una ley; y cuando la declara en sentencia de amparo, su efecto es que no se le aplique exclusivamente al gobernado que la haya reclamado, pero no se hace extensiva -tal inaplicación- a quienes no hayan demandado la protección constitucional. El Poder Legislativo

debiera subsanar los errores en que incurra al aprobar la ley cuando se hagan notables por la sentencia de amparo; empero no lo hace, pese a la declaración de inconstitucionalidad, de ahí que incluso el mecanismo jurisprudencial resulta ineficaz para anular la ley inconstitucional que se declara a través del mismo.

La ley es general, por tanto, cuando la misma es declarada inconstitucional en beneficio del quejoso que la reclamó los efectos protectores de la sentencia de amparo también han de ser generales, pues con esa sentencia de amparo lo que se defienden son las garantías individuales que resultan vulneradas con el acto de la autoridad legislativa; de manera que si el juicio de amparo es el medio eficaz que los gobernados tienen para defender sus derechos públicos subjetivos que se trastocan por una ley o por un acto de autoridad, haciendo prevalecer la Constitución y sometiendo a la autoridad a la misma, es inconcuso que no hay razón para que a los gobernados -no quejosos- se les siga sometiendo a una ley que es inconstitucional so pretexto de la relatividad de las sentencias de amparo.

No debe perderse de vista que la institución del juicio de amparo ha sido acogida por el derecho positivo extranjero<sup>31</sup> y que, incluso, en el mismo actualmente presenta el avance que se comenta, en cuanto a que en materia de inconstitucionalidad de leyes la sentencia tiene efectos erga omnes; además de que en el derecho positivo mexicano ya ha desaparecido cualquier temor de pugna entre los Poderes de la Unión, tan

---

<sup>31</sup> Se tiene presente al ilustre jurista mexicano Rodolfo Reyes, que llevara tan noble institución al derecho español

es así que las sentencias que se dictan en las acciones de inconstitucionalidad<sup>32</sup>, los efectos de invalidez son generales.

**PROPUESTAS DE REFORMAS A LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN, Y 76 Y 80 DE LA LEY DE AMPARO.**

**"Artículo 107.- ..... II. La sentencia será siempre tal, que sólo se ocupe de individuos particulares, limitándose a ampararlos y protegerlos en el caso especial sobre el que verse la queja, sin hacer una declaración general respecto del acto que la motivare, a excepción de cuando se trate de una ley".**

**"Artículo 76.- Las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo sólo se ocuparán de los individuos particulares o de las personas morales, privadas u oficiales que lo hubiesen solicitado, limitándose a ampararlos y protegerlos, si procediere, en el caso especial sobre el que verse la demanda, sin hacer una declaración general respecto del acto que la motivare, a excepción de cuando se trate de una ley".**

Se considera que en la declaración respecto de la ley o acto que motiva la demanda de amparo, es donde deben reformarse las disposiciones constitucional y reglamentaria que se analizan, dado que idénticamente establecen en lo conducente "...sin hacer una declaración general respecto de la ley o acto que la motivare" y se propone "...sin hacer

---

<sup>32</sup> Previstas en el artículo 105, fracción II, de la Constitución.

una declaración general respecto del acto que la motivare, a excepción de cuando se trate de una ley”.

En cuanto al artículo 80 de la Ley de Amparo, se propone como reforma la supresión de “al agraviado” y sustituir el verbo “restituir” por “restitución”, pues dispone: “La sentencia que conceda el amparo tendrá por objeto restituir al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada,...”; y deberá establecer: “La sentencia que conceda el amparo tendrá por objeto la restitución en el pleno goce de la garantía individual violada,...” (Victorino Rojas Rivera, Tomo IV, páginas 2658 a 2664).

---

**EL PRINCIPIO DE LA RELATIVIDAD DE LAS SENTENCIA DE AMPARO.-** Es necesario abrir más este principio. Proponemos que una vez que un acto reclamado sea declarado inconstitucional de manera definitiva por un tribunal de la Federación, cualquier persona que se considere afectada por tal acto podrá hacer valer la estimación de inconstitucionalidad a fin de que aquél no se pueda aplicar en su contra y en su caso se deje insubsistente. El gobernado tendrá que ocurrir a juzgado de distrito o tribunal colegiado al que le correspondería conocer del asunto, para el único efecto de que dicho órgano declare que efectivamente en relación con ese acto reclamado ya hay una decisión de inconstitucionalidad y que hay afectación de dicho acto en perjuicio del particular. Esto es, la intervención del tribunal no será para estudiar si el acto es ilegal o no, sino únicamente para constatar y declarar en su caso que el propio acto ya se tuvo por ilegal



y que afecta al gobernado, por lo que en cuanto a él también debe dejarse insubsistente. (José Luis Arellano Pita, Tomo IV, página 2692).

---

**Esto en base a las siguientes consideraciones:**

La llamada Formula Otero o Principio de Relatividad, como principio rector del Juicio de Amparo consiste en que las Sentencias de Amparo sólo surte efectos en relación con las personas que promovieron el Juicio, jamás respecto de otros, dicho principio se encuentra consagrado en los artículos 107 fracción II, de la Constitución General de la República y 76 de la Ley de Amparo.

El primer párrafo de la fracción II del artículo 107 de la Constitución General de la República dispone: "La Sentencia será siempre tal, como sólo se ocupe de individuos particulares, limitándose a ampararlos y protegerlos en el caso especial sobre el que verse la queja, sin hacer una declaración general respecto de la Ley o Acto que la motivare". Estoy de acuerdo que esta disposición Constitucional tenga plena aplicación a las Sentencias de los juicios de Amparo contra actos de autoridad, pero no a las sentencias de los juicios de Amparo en contra de Leyes; esto es, cuando un Gobernado se ampara contra actos de autoridad, ya provengan del Poder Ejecutivo en sus tres niveles Federal, Estatal o Municipal (Actos Judiciales), el acto reclamado efectivamente solo afecta la esfera jurídica del quejoso, mas no de terceras personas que no solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal; en tal caso sí es razonable que la sentencia de amparo sólo se ocupe del gobernado en particular, del

quejoso, amparándolo y protegiéndolo si el acto de autoridad resulta vulnerador de las garantías individuales o contrario a la Constitución.

Pero no es razonable, ni jurídico, ni lógico que una Ley autoaplicativa o sea un acto Legislativo emitido por el Poder Legislativo ya sea Federal o Estatal, y contra el cual algún gobernado haya solicitado amparo y concedido que fuere la sentencia sólo surta efectos para el quejoso, esto es, si el máximo órgano del control de la Constitucionalidad, que es el Poder Judicial de la Federación, ya resolvió en una sentencia que causó ejecutoria, resultado del Juicio de Amparo, que una Ley o algún precepto de esa Ley es anticonstitucional, la Sentencia de Amparo deberá surtir efectos Erga Omnes, es decir sus efectos deberán de extenderse a todos los gobernados y no sólo a la esfera jurídica del quejoso; si alguna Ley o algún precepto es anticonstitucional para el quejoso, lógico que también lo es para todos los Gobernados, de no ser así se aplicaría una Ley autoaplicativa o un precepto contrarios a la Constitución, a los Gobernados que no se ampararon dentro del término de Ley, rompiendo con ello el Estado de Derecho y se permitiría que una Ley o algún precepto contrario al espíritu de nuestra Ley máxima que es la Constitución General de la República, cuya Supremacía es indiscutible, se aplicara aún ya declarada su inconstitucionalidad, lo cual resulta inadmisibile, por ello propongo LA NO APLICACION DEL PRINCIPIO DE RELATIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO CONTRA LEYES, y que dicho principio sólo rija en el Amparo contra actos de autoridad; aunque esto implique una reforma Constitucional al artículo 107 fracción II, lo que desde luego compete al Constituyente Permanente, pero es urgente dicha reforma al precepto mencionado que es uno de los que regulan desde el marco constitucional al Juicio de garantías

y que una nueva Ley de Amparo que se diga moderna deberá contemplar esta propuesta, insisto, de no aplicar el Principio de relatividad en las Sentencias del Juicio de Amparo contra Leyes o preceptos que hayan sido declarados anticonstitucionales.

La anterior propuesta la hago de su Superior conocimiento y la pongo a consideración de su elevada Investidura, para los efectos conducentes, reiterándole las seguridades de mi atenta consideración y respeto. (José Manning Bustamante, Tomo IV, páginas 2764 a 2766).

---

En primer término he de referir que en nuestro sistema jurídico la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es el ordenamientos primario y por tanto es la ley fundamental, supremacía que se debe conservar y proteger a través de sus medios de constitucionalidad y el respeto a las normas que la contienen, tal supremacía implica que no puede existir el acto de autoridad contrario a la constitución, entendiendo por acto tanto a las leyes como a las resoluciones judiciales y administrativas.

El control constitucional de nuestro sistema está conferido al órgano judicial federal y los efectos de la resolución que éste pronuncie, sólo pueden versar sobre el caso concreto planteado por individuos particulares, tal y como lo establecen los artículos 103 y 107 de la Constitución Política que en lo relativo dicen:

"Artículo 103.- ..." (se transcribe primer párrafo).

**"Artículo 107 fracción II.- ..." (se transcribe).**

De ahí la importancia que adquiere en ésta exposición el amparo contra leyes que consagra el principio de relatividad de la sentencia de amparo, que constriñe el efecto de la sentencia que conceda la protección de la justicia federal al quejoso, de manera de que quien no haya sido expresamente amparado, no puede beneficiarse con la apreciación que acerca de la inconstitucionalidad del acto reclamado haya expresado el juzgador en la mencionada sentencia; principio de relatividad que se contempla al igual que los preceptos constitucionales citados, en el artículo 76 de la Ley de Amparo que establece:

**"Artículo 76.- ..." (se transcribe).**

Lo anterior implica que al no pronunciarse la declaración general de inconstitucionalidad de las leyes impugnadas a través del juicio de amparo, y sólo conceder el amparo a individuos particulares se viola el principio esencial del Estado democrático de derecho, de igualdad de los gobernados ante la ley, en cuanto a que algunos han contado con asesoramiento jurídico por tener mayores alternativas y recursos económicos, no estando obligados a cumplir con los mandatos de una ley inconstitucional mediante el amparo concedido, en cambio quienes no han obtenido deben acatarla, lo que rompe con la justicia y equidad; amén de que dicho principio de relatividad de la sentencia en la actualidad resulta ineficaz y agrava el rezago de los Tribunales Federales a medida que cada individuo en particular reclame el amparo y protección de la justicia federal contra leyes inconstitucionales.

Por las reflexiones aquí asentadas, tomando en cuenta la consideración que emite el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al invitarnos para participar en la propuesta que deba hacerse a una nueva Ley de Amparo para lograr la consolidación de nuestro estado de derecho en la que se asegure a los gobernados una pronta, completa e imparcial administración de justicia, ante todo con igualdad jurídica, me permito proponer:

Se reformen los artículos 107 fracción II constitucional y el relativo al artículo 76 de la Ley de Amparo, para anular la aplicación del principio de relatividad de la ley de desaplicación concreta, con la finalidad, por lo tanto, de que ninguna ley declarada inconstitucional pueda tener vida jurídica, para así consignar la declaración general de inconstitucionalidad de una ley o reglamento, pudiendo establecerse el absoluto respeto que la jurisprudencia merece como fuente formal del derecho en términos del artículo 192 de la Ley de Amparo, de tal manera que cuando se hayan resuelto de inconstitucionalidad de una ley en revisión ante el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o ante las Salas en cinco ejecutorias seguidas en un mismo sentido no interrumpidas por otra en contrario, y que hayan sido aprobadas por lo menos por catorce Ministros si se trata de jurisprudencia del Pleno, o por cuatro Ministros en los casos de jurisprudencia de Salas, esta resolución de declaración de nulidad deberá hacerse con las mismas formalidades que para su expedición se utilizaron, turnándose al Ejecutivo con el objeto de que ordene su publicación en el Diario Oficial de la Federación con la finalidad de que no se vuelva a aplicar esa norma declarada inconstitucional. En consecuencia y para adecuar las

facultades que otorgue la ley al Poder Judicial de la Federación, se deberá modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal, con objeto de que el Tribunal en Pleno se incluya la de hacer una declaración general, en los términos que he precisado en la presente propuesta. (Miriam Torres Monroy, Tomo IV, páginas 2797 a 2799).

---

Se considera inaplicable el principio de relatividad, en los casos de sentencias que conceden el amparo contra leyes o su aplicación.

Dando las gracias, por la oportunidad que se da a los que nos dedicamos al estudio de la Ciencia del Derecho, y sin faltar a la decencia ética que es la modestia, damos un punto de vista sobre un tema que afecta a la sociedad, y que le causa repudio porque crea una discriminación y una desigualdad entre sus miembros.

Se parte de las bases y los principios constitucionales y legales del juicio de amparo, y de las doctrinas de nuestros grandes jurisconsultos, enfocándolos a la solución de un problema concreto.

Juristas más capaces, con mayor cultura y con grande experiencia, podrán aquilatar los siguientes puntos de vista, y nos daremos por servidos si nuestra opinión, como un grano de arena sirve para construir el gran edificio del orden jurídico constitucional.

## **SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL**

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos está en la base y en la cúspide del orden jurídico de la República, formal y materialmente; lo primero, por ser escrita y rígida, y lo segundo, porque emana de la soberanía del pueblo.

El principio de supremacía constitucional es universal, doctrinaria y legalmente.

La Constitución autodetermina su superioridad, y la subordinación de todos los actos de autoridad a sus principios y mandatos.

Con efecto, así se concluye de sus siguientes preceptos:

1) El artículo 133 imperativamente dice, que es la Ley Suprema de toda la Unión; que las Leyes del Congreso deben "emanar" de ella; y, que los Tratados que celebre el Presidente de la República, con aprobación del Senado, deben estar de "acuerdo", con la misma.

2) El artículo 128 establece que, todo funcionario público, sin excepción tiene, la obligación de prestar la protesta de guardarla, o sea, la de cumplirla y obedecerla, antes de tomar posesión de su cargo.

3) Los artículos 87 y 97 específicamente imponen, al Presidente de la República y a los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, la obligación de guardar y hacer guardar la Constitución y las Leyes que de ella emanen, mirando en todo por el bien, la prosperidad de la Unión.

4) El artículo 135 dispone, que sólo puede ser adicionada o reformada, de la manera y en la forma que ella determina.

5) El artículo 136 indica, que no perderá su fuerza y vigor, aún cuando por alguna rebelión se interrumpa su observancia.

6) Los artículo 40 y 41 determinan, que es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República, Representativa, Democrática y Federal, compuesta de Estados, unidos en una Federación, establecida según los principio de la misma ley fundamental; y, que el pueblo ejerce su soberanía por medio de los poderes de la Unión, en los términos establecidos por la propia constitución federal.

7) El artículo 49 establece, que el Supremo Poder de la Federación se divide, para sus ejercicio, en Legislativo, Ejecutivo y Judicial.

8) El artículo 115 estatuye, que los Estados adoptarán, para su régimen interior, la forma del gobierno Republicano, Representativo y Popular.

Por lo tanto, la Supremacía de la Constitución nunca pierde su vigencia, porque debe ser cumplida, en todo tiempo y circunstancias.

Los actos, de cualquier autoridad, comprendiendo los del Poder Legislativo, están limitados por los preceptos de la Constitución, como Ley Suprema, por lo que no pueden calificarse de legales, si no son fieles a sus preceptos.



## **CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD**

La misma Constitución General de la República establece los medios para controlar la actuación de todas las autoridades, cualquiera que sea su jerarquía, e impedir que puedan desconocerla o violarla, y para restituir las cosas al estado material y jurídico que tenían, antes de que el orden jurídico constitucional hubiese sido alterado, a fin de conservar, permanentemente, su supremacía.

Los medios de control son:

1) El Juicio Político o de Responsabilidad de los Funcionarios Públicos, establecido y regulado por los artículos 108, 109 fracción I, 110, 74 fracción V y 76 fracción VII:

2) Los Procesos de Litigios Constitucionales, creados por el artículo 105 fracción I:

3) Las Acciones de Inconstitucionalidad, contempladas por el artículo 195 fracción II:

4) El Proceso Investigatorio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contenido en el artículo 97, segundo párrafo:

5) El Proceso de Averiguación de algún hecho o hechos que constituyan violación al voto público, fundado en el artículo 97, tercer apartado:

6) El Proceso Suspensivo de Garantías Individuales, previsto en el artículo 29:

7) El Juicio de Amparo, instituido por los artículos 103 y 107, por violación a las garantías individuales.

#### **ACCIÓN DE AMPARO.**

Cuando un gobernado considera que sufre o va a sufrir un perjuicio, una molestia, o una violación, en alguno de los derechos públicos subjetivos, que le reconoce la Constitución, tiene un poder jurídico para obtener la prestación de la jurisdicción constitucional especial, para hacerla saber ese estado y reclamarla su intervención, a fin de que cese esa situación arbitraria, y sea restituido al pleno goce del derecho fundamental que le fue desconocido o violado, y se restablezca el orden Constitucional. Este poder es la acción de amparo.

Así como los órganos jurisdiccionales ordinarios, deben mantener la observancia de la ley sobre los particulares, la jurisdicción especial de amparo debe mantener la observancia de la Constitución, sobre todas las autoridades. En otros términos, los Tribunales comunes, como órganos jurisdiccionales ordinarios, controlan la legalidad de la conducta de los

particulares y los Tribunales de amparo ejercen un control jurídico sobre la actividad de las autoridades.

Mediante la acción de amparo, se persigue proteger, tanto los derechos fundamentales de los particulares, como el orden constitucional.

El amparo no es un recurso ordinario en el que se decide sobre los derechos de los litigantes, sin que la litis trascienda al orden público, como no fuera evitar conflictos, para que haya tranquilidad social, sino un juicio que tiene por objeto el interés general y el orden público, para contener a todas las autoridades en la estricta observación de la Constitución. Es un instrumento, para que el Poder Judicial de la Federación alcance sus fines superiores y más bastos, que exceden los límites de una controversia de particulares, que son los de mantener el riguroso cumplimiento de la Ley Fundamental. Es el eslabón que une al Poder Legislativo con el Poder Judicial, para formar la unidad del Estado de Derecho.

La finalidad última de la acción de amparo, es de carácter constitucional; de coordinación entre las funciones legislativas y judiciales, y de unificación de todo el orden jurídico.

Mediante la acción de amparo, se aprovecha el interés individual de los litigantes, poniéndolo al servicio del interés público.

Pensamos con A. M. Morello, "que si no hacemos demasiada teoría y abstracción dogmática caemos en la cuenta de que el derecho subjetivo de la parte (jus litigatoris), es el alma de la impugnación; el que mueve los

engranajes; también el que cuida por el valor y eficacia de la ley", en nuestro caso, de la Ley Suprema.

Desde los Emperadores Romanos existió la visión del Poder Central, de valerse de los litigios de los particulares, por lograr que mediante una queja del perdidoso, ese Poder actuara para que se respetara su legislación. La "Supplicatio" romana, no era un recurso ordinario, como la "appellatio", sino una queja ante quien gobierna, para que éste asegurara el "derecho" que ha decretado, y se mantenga el *jus constitutionis*.

El gran constitucionalista del siglo XIX, Don José María Velasco, cuando tomó la palabra en la deliberación Camaral, del Proyecto de la Ley Reglamentaria de los artículos 101 y 102 de la Constitución, al Congreso de la Unión (Segunda Ley de Amparo, de 1869), dijo: "La ventaja de ese juicio (el de amparo) es, que la defensa de las instituciones se confía al interés individual, siendo la cuestión de instituciones...".

En la iniciativa que el Ejecutivo presentó, por conducto del C. Secretario de Justicia, Protasio P. Tagle, a la Cámara de Diputados, con el título de "Modificaciones y Adiciones a la Ley Orgánica de los artículos 101 y 102 de la Constitución, expedida el 20 de Enero de 1869", se dice: "El pensamiento dominante de la reforma es conciliar el interés particular con el bien público...".

El juicio de amparo está hermanado a la Constitución, es un control nomofiláctico.

A través del quejoso, que sufre un agravio directo a sus garantías individuales, se protege el Estado de Derecho Constitucional. Este es un atributo del juicio de amparo, a la vista de los artículos 107 fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4, 5, fracción I, 116 segundo párrafo, 166 fracciones I y IV y 80 de la Ley de Amparo.

La jurisdicción de amparo es negativa, porque está limitada al conocimiento y decisión de una cuestión de derecho constitucional, y su efecto es destruir el acto inconstitucional, pero no decidir positivamente, el mérito de la controversia del agraviado peticionario.

El amparo es un procedimiento de anulación del acto reclamado que se juzga inconstitucional, porque si se determina que pugna contra la Ley Fundamental, es inexistente, y porque si la sentencia que se pronuncie, ampara y protege al quejoso, tiene efectos retroactivos, conforma al artículo 80 de la Ley de Amparo, que ordena que se restablezcan las cosas al estado que guardaban antes de la violación, si el acto reclamado fue de carácter positivo, u obligando a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantías de que se trate, y a cumplir, por su parte lo que la misma garantía exija, si fue de carácter negativo.

Si el acto o la Ley reclamada se declaran inconstitucionales, se les debe considerar como si nunca hubiesen existido.

El derecho comparado nos enseña, que a las leyes contrarias a las constituciones, se les ya considerado nulas y anulables.

En el Digesto del Emperador Justiniano encontramos, en sus Libros Cuadragésimonono, Título VIII, Apartado 1, párrafo segundo, la Ley QUAE SENTENTIAE SINE APPELLATIONE RESCINDANTUR, Cuadragésimo segundo, Título I, Apartado 32, la Ley DE RE IUDICATA, ET DE EFFECTU SENTENTIARUM, ET DE INTERLOCUTIONIBUS; y en el Cuadragésimonono, Título I, Apartado 19, la Ley DE APPELLATIONIBUS ET RELATIONIBUS. La primera distinguía, el caso en el que una sentencia pugnaba con una norma legal del en el que sólo se afectaban intereses privados, y determinaba, en la primera hipótesis, que se negara la ejecución de la sentencia y se declarara la nulidad del fallo, aunque la hubiese pronunciado el mismo Pretor. La segunda precisaba el caso en el que una sentencia pugnaba con la ley, del en que sólo se afectaban los intereses de las partes, estableciendo que se juzgaba contra las constituciones (Jus constitutionis), cuando se pronunciaba un fallo contra el derecho constitutivo, no contra el derecho del litigante (Jus litigatoris). Correlativamente se daban dos medios de impugnación contra la sentencia, según la naturaleza de infracción: si recaía sobre el derecho constitucional se establecía la "querella nulitatis", sustentada en el principio de nulidad, si recaía sobre el derecho de litigantes se establecía la "appellatione". El primero era judicium rescindens, porque anulaba, y el segundo judicium rescissorium, porque confirmaba o revocaba la sentencia.

Con el mismo pensamiento político de los Emperadores Romanos, actuaron los Reyes de Francia. Para fortalecer la autoridad Real se creó, hacia el año de 1422, durante los reinados de Carlos VI y Carlos VII, la apelación ab abusu", fundada en los principios de que era un atributo esencial y necesario del soberano, defender y proteger a sus vasallos

cuando quedaban sometidos a leyes y jurisdiccional eclesiástica, porque no podían abdicar, ni desprenderse de esa autoridad suprema, sin que al mismo tiempo renunciaran a su independencia y dividieran el Poder Real del Imperio. El Rey en interés de su autoridad regia como depositario de la Soberanía, que reunía en su persona los poderes Legislativo, Administrativo y Judicial. El Consejo del Rey se dividió en dos: "el Conseil d 'Etat" y "el Conseil des Parties", correspondiendo al primero funciones políticas, y al segundo funciones decisorias de los recursos judiciales. Esta organización y división de funciones subsistieron hasta la Revolución. El "Conseil des Parties", vigilaba a los jueces para que no dejaran a un lado la Ley, expresión de la voluntad del pueblo, en daño del Poder Legislativo y la separación de Poderes. Sus funciones eran negativas pues sus facultades eran anular lo contrario, en forma expresa o tácita, a la ley.

En España se instituyeron los Recursos de Fuerza en forma similar a la apelación ab abusu francesa. Joseph de Covarrubias, haciendo suya la Doctrina del Ilustre Colegio de Abogados contenida en el Dictamen sobre las Conclusiones de Valladolid, sostiene que: "Las doctrinas de los sabios griegos... y entre los romanos, dejaron preceptos que, trasladados e ilustrados por los sabios de los siguientes siglos enseñan que en cualquier República que se considerara sólo podía existir una sola potestad suprema e independiente, fuese el Príncipe o fuese el Pueblo, de la que dimanaban las demás, aún cuando en su modo de ejercitarse y acomodarse al pueblo variara; por consiguiente, no puede haber una República donde cupieran muchas potestades supremas". Hubo dos Recursos de Fuerza, "por injusticia notoria" y de "segunda suplicación. La "injusticia notoria", consistía, en la expresa y notoria transgresión de la Ley y la máxima sobre este tema

era "Dixe nulidad, porque la injusticia notoria tienen todos los caracteres de la nulidad, y la nulidad todos los caracteres de injusticia notoria". La "segunda suplicación" era un recurso, para anular las sentencias pronunciadas contra la ley.

El artículo 12 fracciones I, II y III de la Segunda Ley Constitucional, estableció como atribuciones del Supremo Poder Conservador, las de declarar la nulidad de una Ley o Decreto, cuando fueran contrarios a artículo expreso de la constitución, la nulidad de los actos del Poder Ejecutivo, cuando fueron contrarios a la Constitución o a las Leyes, y de la Suprema Corte de Justicia en el caso de usurpación de facultades. Esta fue la primera vez, en el Derecho Público Mexicano, en la que se estableció una autoridad con la facultad de poder declarar la nulidad de una Ley Inconstitucional.

### **PRINCIPIO DE RELATIVIDAD**

En la Exposición de Motivos, del Proyecto de Reformas a la Constitución Política del Estado de Yucatán, que formuló la Comisión formada por, DON MANUEL CRESCENCIO REJÓN, PEDRO C. PÉREZ Y DARÍO ESCALANTE, se dice que, se siguen las huellas de los Estados Unidos de Norte-América, en los que la Corte Suprema ejerce, al lado de atribuciones judiciales, otras enteramente políticas, en los casos en los que el Poder Ejecutivo se opone a los desafueros del cuerpo Ejecutivo y en los que éste se defiende de las empresas atrevidas de aquél, aunque ese poder inmenso es de pura opinión; que es innecesario un Poder Conservador por monstruoso, que destruye las Instituciones fundamentales a pretextos de



conservarlas, que se convierte en el árbitro de los destinos del estado; que no se hacía el Poder Judicial, de él "un Poder temible", cual sería si se le encargase de impugnar las leyes de un modo teórico y general; pues que entonces al erigirse en censor del Legislativo, entraría abiertamente en la escena política, dando apoyo al partido que le contrariase, y llamando todas las pasiones que pudiesen interesarse en la contienda, con peligro de la tranquilidad del Estado; que aunque "...se da al Poder Judicial el derecho de censurar la legislación, también se le obliga a ejercerlo de una manera oscura y en casos particulares, ocultando la importancia del ataque a las miras apasionadas de las facciones. Sus sentencias, pues, como dice muy bien Tocqueville, no tendrían por objeto más que el descargar el golpe sobre un interés personal, y la Ley sólo se encontraría ofendida por casualidad. De todos modos la ley así censurada no se quedara destruida: se disminuirá su fuerza moral, pero no se suspenderá su efecto material. Sólo perecerá por fin poco a poco y con los golpes redoblados de la jurisprudencia, siendo además fácil de comprender, que encargando la interés particular promover la censura de las leyes, se enlazarán el proceso hecho a éstas con el que se siga a un hombre, y habrá por consiguiente seguridad de que la legislación no sufrirá el más leve detrimento, cuando no se le deje expuesta por ese sistema a las agresiones diarias de los partidos. En fin, multiplicándose por el medio referido los fallos contra las leyes inconstitucionales, se harán estas ineficaces, teniendo las Cámaras por lo mismo que derogarlas, y sacándose de consiguiente la ventaja de conservar el Código fundamental intacto, por un antemural el más fuerte que se ha levantado contra la tiranía de las asambleas legislativas".

El artículo 53 del Proyecto, indicado, decía: "Corresponde a ese tribunal (Corte Suprema de Justicia) reunido: 1º amparar en el goce de sus derechos a los que le pidan su protección, contra las leyes y decretos de la Legislatura que sean contrarios a la Constitución; o contra las providencias del Gobernador o Ejecutivo reunido, cuando en ellas se hubiese infringido el Código fundamental o las leyes, limitándose en ambos casos a reparar el agravio en la parte en que éstas o la Constitución hubiesen sido violadas..." (este Proyecto de precepto, pasó con el número 62 a la Constitución Política del Estado de Yucatán).

Por su parte, DON MARIANO OTERO, al disentir de la mayoría de los miembros de la Comisión de Constitución, designada por el Congreso extraordinario de 1847, emitió su famoso voto particular, en el que expuso: "Para este último evento, es indispensable dar al Congreso de la Unión el derecho de declarar nulas las leyes de los Estados que importen una violación del Pacto federal, o sean contrarias a las leyes generales; porque de otra manera el poder de un Estado sería superior al de la Unión, y el de ésta se convertiría en una mera irrisión. Pero para evitar que se hagan declaraciones imprudentes, ya se consulta que estas leyes sólo puedan iniciarse en la Cámara de Senadores, la cual representa el principio federativo en toda su fuerza, y da las mejores garantías de calma y circunspección; y además se establece que la mayoría de las Legislaturas de los Estados tenga el derecho de decidir en todo caso si las resoluciones del Congreso general son o no anticonstitucionales. De esta manera cada Estado en particular está sometido a la Unión y el conjunto de todos será el árbitro supremo de nuestras diferencias y el verdadero poder conservador de las instituciones. Si hay todavía otro medio más eficaz de robustecer el

principio federativo, si se conoce otra mejor garantía de las libertades e los cuerpos confederados, yo no la propongo, porque no la conozco”.

“Los ataques dados por los poderes de los Estados y por los mismos de la Federación a los particulares, cuentan entre nosotros por desgracia numerosos ejemplares, para que no sea sobremanera urgente acompañar el restablecimiento de la Federación con una garantía suficiente para asegurar que no se repetirán más. Esta garantía sólo puede encontrarse en el poder judicial, protector nato de los derechos de los particulares, y por esta razón el solo conveniente. Aun en las monarquías absolutas, refugiada la libertad en el recinto de los tribunales, ha hecho que la justicia encuentre allí un apoyo cuando han faltado todas las garantías políticas y por esto yo no he vacilado en proponer al Congreso que eleve a grande altura el Poder de la Federación, dándole el derecho de proteger a todos los habitantes de la República en el goce de los derechos que les aseguren la Constitución y las leyes constitucionales, contra todos los atentados del Ejecutivo o del Legislativo, ya de los Estados o de la Unión”.

En su voto particular, OTERO redactó los siguientes preceptos:

“Art. 16. Toda ley de los Estados que ataque la Constitución o las leyes generales, será declarada nula por el Congreso; pero esta declaración sólo podrá ser iniciada en la Cámara de Senadores”.

“Art. 17. Si dentro de un mes de publicada una ley del Congreso general fuere reclamada, como anticonstitucional, o por el Presidente de acuerdo con su ministerio, o por diez diputados, o seis senadores, o tres

Legislaturas, la Suprema Corte, ante la que se hará el reclamo, someterá la ley al examen de las Legislaturas, las que dentro de tres meses, y precisamente en un mismo día, darán su voto.

Las declaraciones se remitirán a la Suprema Corte, y ésta publicará el resultado, quedando resuelto lo que diga la mayoría de las Legislaturas”.

“Art. 18. En el caso de los artículos anteriores, el Congreso general y las Legislaturas a su vez se contraerán a decidir únicamente si la ley de cuya invalidez se trate es o no anticonstitucional; y en toda declaración afirmativa se insertarán la letra de la ley anulada y el texto de la Constitución o ley general a que se oponga”.

“Art. 19. Los tribunales de la Federación ampararán a cualquier habitante de la República en el ejercicio y conservación de los derechos que le concedan esta Constitución y las leyes constitucionales, contra todo ataque de los Poderes Legislativo y Ejecutivo, ya de la Federación, ya de los Estados, limitándose dichos tribunales a impartir su protección en el caso particular sobre que verse el proceso, sin hacer ninguna declaración general respecto de ley o del acto que lo motivare”.

OTERO estableció para el Control de Constitucionalidad dos procedimientos, uno político que denominó reclamo, y otro Judicial al que dio el nombre tradicional y castizo de amparo. Mediante el primero se obtenía la declaración de nulidad de las Leyes de los Estados que atacarían la Constitución, por declaración del Congreso, y la declaración de nulidad de las leyes del Congreso General que fueran anticonstitucionales, por las

Legislaturas Estatales. Mediante el segundo, se obtenía la declaración de nulidad de todo ataque a los derechos, que a todos los habitantes de la República, les concede la Constitución.

Los preceptos proyectados por DON MARIANO OTERO fueron aceptados por el Congreso Constituyente e incorporados en el Acta Constitutiva y de Reformas de 18 de Mayo de 1847, con los números 22, 23, 24 y 25.

La Constitución Política de la República Mexicana, de 1857, aceptó el principio de relatividad, antes referido, en sus artículos 101 y 102 sus textos son:

"Artículo 101. Los tribunales de la federación resolverán toda controversia que se suscite:

I. Por leyes o actos de cualquiera autoridad que violen las garantías individuales.

II. Por leyes o actos de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados.

III. Por leyes o actos de las autoridades de estos, que invadan la esfera de la autoridad federal".

"Artículo 102. Todos los actos de que habla el artículo anterior se seguirán, a petición de la parte agraviada, por medio de procedimientos y

formas del orden jurídico, que determinará una ley. La sentencia será siempre tal, que sólo se ocupe de individuos particulares, limitándose a protegerlos y ampararlos en el caso especial sobre que verse el proceso, sin hacer ninguna declaración general respecto de la ley o acto que la motivare".

La Comisión desechó en su Dictamen, el reclamo del Acta Constitutiva y de Reformas, porque: "La ley de un Estado, cuando atacaba la constitución o leyes generales, se declaraba nula por el congreso; y la ley de éste, reclamada como anticonstitucional, se sometía al juicio de la mayoría de las legislaturas. En cualquier caso era una declaración de guerra de potencia a potencia, y esta guerra venía con todas sus resultas, con sus más funestas consecuencias. Los gobernados tenían la obligación de promulgar y ejecutar las leyes del congreso federal, como si fuesen empleados de esta administración, y el poder ejecutivo de la Federación expedía órdenes a los gobernados como de superior a inferior. Una vez las leyes o actos de los Estados se sobreponían a la autoridad federal, y otras el poder de la Unión hacía sucumbir al del Estado: en uno y otro extremo quedaba siempre desairada y envilecida una de las dos autoridades, sancionada la discordia y hasta decretada inevitablemente la guerra civil. No es éste el sistema federal, pues si ésta fuera, sería necesario proscribirlo y execrarlo".

La Constitución Política de la República Mexicana de 1857, subsumió o incorporó en un mismo procedimiento, el juicio Político y el juicio Jurisdiccional, ideados por OTERO.

Los Constituyentes de 1856-1857, aceptaron el principio de relatividad con el corte jurídico de CRESCENCIO REJÓN y MARIANO OTERO en el artículo 102 de la Constitución Política de la República Mexicana, tanto para los casos de leyes anticonstitucionales, federales o estatales, como para los casos de violación de garantías individuales.

Como es natural, las Leyes Orgánicas, de Procedimientos de los Tribunales de la Federación, que exige el artículo 102 de la Constitución Federal, para los juicios de que habla el artículo 101 de la misma, de 1861; Orgánica Constitucional sobre el Recurso de Amparo de 1869, y Orgánica de los Artículos 101 y 102 de la Constitución Federal, de 1882, se amoldaron al principio de relatividad de la Constitución de 1857.

En el Proyecto que presentó el señor Venustiano Carranza, al Congreso Constituyente 1916-1917, sobre reforma al artículo 102 de la Constitución de 1857, se siguió la misma directriz establecida de éste, en relación al principio de relatividad de la sentencia que conceda el amparo al quejoso agraviado. El precepto, ya aprobado, coincide con el texto del proyecto, cambiando, únicamente, la ubicación de la fracción I, por la de la fracción II, que dice: "La sentencia será siempre tal, que sólo se ocupe de individuos particulares, limitándose a ampararlos y protegerlos en el caso especial sobre que verse la queja, sin hacer una declaración general respecto de la ley o acto que la motivare"

La Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 104 de la Constitución Federal, de 1919, y la Ley de Amparo Reglamentaria de los artículos 103 y

107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente, se ajustan a las normas constitucionales que reglamentan.

**INCONGRUENTE APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE RELATIVIDAD,  
EN LOS CASOS EN LOS QUE SE RECLAMA LA  
ANTICONSTITUCIONALIDAD DE UNA LEY.**

Las sentencias que se pronuncian en un juicio constitucional, que concede el amparo y protección de la Justicia Federal, a un quejoso agraviado por una ley anticonstitucional, no puede fundarse ni tener los mismos conceptos, extensión y alcance, que los de las sentencias dictadas en los juicios de amparo, en los que quien pide la prestación de la jurisdicción especial, se funda en la privación o molestia que le causa un acto de autoridad por ilegalidad o inexacta aplicación de la ley.

Es una expresión hermosa pero utópica y romántica, la de don MANUEL CRESCENCIO REJÓN cuando dice: "En fin, multiplicándose, por el medio referido, los fallos contra las leyes anticonstitucionales, se harán estas ineficaces, teniendo las Cámaras por los mismos que derogarlas, y sacándose por consiguiente la ventaja de conservar el Código Fundamental intacto, por un antemural el más fuerte que se ha levantado contra la tiranía de las asambleas legislativas".

La sensibilidad y la disposición permanente del espíritu del gran jurista a buscar y lograr la estabilidad de una Nación, que tratando de organizarse entre principios centralistas y federalistas, y entre ideas conservadoras y progresistas, le hicieron imaginar que los integrantes del



Poder Legislativo serían, sino como él, que cuando menos tendrían sentimientos patrios iguales, en los que predominaría la razón; sin embargo, la historia nos demuestra lo contrario. Después de ciento sesenta años, las Cámaras no acatan los fallos jurisprudenciales de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, derogando las leyes que han sido juzgadas y declaradas inconstitucionales.

2) El Acta Constitutiva y de Reformas de 1847, tuvo una vigencia efímera, en medio de la tragedia que sufrió México, por la invasión norteamericana y sus consecuencias lamentables.

Además, nunca se dictó la Ley Reglamentaria de los artículos 22, 23, 24 y 25 del Acta Constitutiva y de Reformas.

OTERO, en unión de MANUEL ROBREDO y DOMINGO IBARRA formularon un Proyecto de Ley Constitucional de Garantías Individuales, anunciada en el Acta Constitutiva y de Reformas y envió a JOSÉ URBANO FONSECA, Ministro de Justicia y Negocios Eclesiásticos un Proyecto de Reglamento del artículo de la misma, aunque, desgraciadamente, no se conoce su contenido.

Con justa razón se dice que no hay más grande mentira que una verdad a medias.

OTERO creó dos procedimientos para el control de constitucionalidad, uno de carácter político, y otro de carácter jurisdiccional. El primero se refería, específicamente, al control de la constitucionalidad de las leyes,

confiando al Congreso Federal la decisión de las reclamaciones contra las disposiciones generales y abstractas dictadas por las Legislaturas Locales, y a éstas el examen y voto de una Ley del Congreso General. Por el segundo se sometían, al conocimiento de la Suprema Corte de Justicia, los casos de violaciones a cualesquiera de las garantías individuales reconocidas a favor de los habitantes de la República.

Desde la Constitución de 1857 se damasquinaron los dos procedimientos en uno sólo y se hicieron comunes los principios, que por sus propias naturalezas, correspondían a cada uno de ellos. De esta manera, la jurisdicción especial federal, de control de constitucionalidad, ejerce funciones de orden político y funciones propiamente jurisdiccionales. A través del juicio de amparo, por violación de las garantías individuales, se juzga de la constitución de las leyes que corresponderían, conforme al pensamiento de OTERO, al procedimiento de reclamo; sin embargo, no se dan a la sentencia de amparo los efectos generales de las resoluciones del procedimiento político.

3) OTERO abrió la luz dentro de las tinieblas creadas por el conservadurismo. Isidro Antonio Montiel y Duarte nos dice: "Un lunar oscurismo veremos siempre en el derecho constitucional que estableció entre nosotros, "el Supremo Poder Conservador," con una superioridad inconcebible, respecto del Poder Judicial, del ejecutivo y aún del Legislativo, pues autorizado estaba para suspender a la alta Corte de Justicia, para declarar la incapacidad física o moral del Presidente de la República y hasta para suspender por dos meses las sesiones del congreso general. Un poder tan monstruoso, fue creado con el fin de sostener el equilibrio

constitucional entre los poderes y el de mantener o restablecer el orden constitucional en los casos en que fuere perturbado; y aunque no pudo ser más plausible el propósito; de seguro que el medio fue completamente inadecuado, porque la eficacia de la acción de un poder tan exorbitante, no pudo derivarse sino de un profundo y religioso respecto al principio de autoridad; y este respecto quedó completamente relajado desde el momento en que se vio levantada una entidad enteramente desconocida, cuyas plantas podían hollar impunemente la supremacía de nuestros Altos Poderes aún en su existencia colectiva... Se nota que la organización del Poder Legislativo, está basada en la creencia errónea de que su acción es omnipotente, pues al ponerle restricciones expresas, se da a entender muy claramente, que puede hacer todo aquello que no esté comprendido expresamente en tales restricciones; sobre todo cuando en plena cámara se dijo a una vez sin contradicción: que el Congreso tenía todo el poder de un Monarca absoluto".

Es indudable que no se quiso caer en el campo del conservadurismo.

Al subsumirse en un solo procedimiento el reclamo y el amparo, se quiso respetar el federalismo, pero el resultado no fue feliz.

4) No es verdad que la sentencia que concede el amparo, a un habitante de la República, contra una ley inconstitucional, desaire y envilezca a las autoridades que intervinieron en su procedimiento legislativo y que engendre discordia y una guerra civil entre los Poderes.

La autoridad es el derecho de ser escuchado y obedecido por otro, de dirigir y mandar; y el poder es la fuerza de que se dispone, y con cuya ayuda se puede obligar a otro a escuchar y obedecer.

La Suprema Corte es una autoridad privada de poder, y el Legislativo y el Ejecutivo, cuando dictan una norma general y abstracta, inconstitucional, ejercen un poder sin autoridad. El poder que no es la expresión de una autoridad es inicuo. Con el solo poder la autoridad baja al orden físico, y como autoridad el poder se eleva al orden jurídico y moral. Cuando el Legislativo y el Ejecutivo ejercen poder sin autoridad, obran sobre el Estado y carecen de autoridad para dirigir, para ser escuchado y para ser obedecido.

Una ley anticonstitucional es inexistente, aunque materialmente sea el producto del poder.

La soberanía nacional, o sea, la voluntad del pueblo mexicano, se ejerce a través de la trilogía de los Poderes, que por lo mismo son iguales, aunque los distingan sus funciones.

Si la sentencia dictada por la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, que declara la inconstitucionalidad de una ley, no se cumple ni respeta, se crea una situación privilegiada para las autoridades que intervinieron en el procedimiento legislativo de la norma general y abstracta reclamada, y un respeto mítico y omnímodo para el Poder Legislativo, y a su vez, se minimiza al Poder Judicial, lo que equivale a subordinar la

Soberanía nacional y sus facultades de mandante, a los intereses arbitrarios del mandatario.

Se destruye la distribución igualitaria de la Soberanía nacional.

5) El quejoso que ejercita la acción de amparo actúa en defensa de sus derechos públicos subjetivos, y en interés del orden constitucional, y si se le concede el amparo y protección, es para restituirlo en el que de sus derechos fundamentales; pero la restitución no será completa, si no se satisfacen los intereses particulares y generales de su acción.

6) Si a la sentencia que declara que una ley es anticonstitucional, se le dan efectos restitutorios relativos, debe concluirse, por necesidad lógica, que la supremacía constitucional también es relativa y no absoluta, pues se permite la existencia de una norma general y abstracta que al estar impugnada con la constitución debe ser nula de manera absoluta.

7) La conservación de una ley, que ha sido declarada inconstitucional crea una desigualdad entre los gobernados, porque sufren un trato desigual, ya que el mandato o la prohibición inconstitucional no se aplica al quejoso que obtuvo el amparo y protección de la justicia federal, y se sigue aplicando a quien no tiene la defensa de ese mural.

Los artículos 1° y 13 de la Constitución Política de la República determinan, que todos los individuos gozarán de las garantías que la misma otorga, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse, si no en los casos

h condiciones que ella misma establece, y que no habrá leyes privativas ni tribunales especiales, y que nadie tiene fueros.

La Ley Fundamental, no establece ninguna excepción, en perjuicio de la conservación de la pureza y de la supremacía constitucionales.

8) Los derechos públicos subjetivos son fundamentales y permanentes, y la ley inconstitucional inexistente, razones por las que una vez que se ha declarado inconstitucional una ley, no debe aplicarse en forma alguna, en perjuicio de un gobernado.

El juicio de amparo, se ha ido formando y perfeccionando, a través del tiempo, con la fuerza intelectual y moral de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Aún cuando la parte resolutive de una sentencia, dictada en un juicio de amparo en el que se reclamó una ley por inconstitucional, sólo haga referencia a la persona del quejoso y al acto concreto de aplicación de esa ley, para cumplir constitucional y legalmente con el principio de relatividad, en su parte Considerativa se estudia la ley reclamada como norma abstracta y general, pues de otra manera no podría examinarse si está o no dentro del marco constitucional. La H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, tiene sentada jurisprudencia en el sentido de que la autoridad de las sentencias se extiende a sus considerandos, porque "en términos generales, la parte resolutive de la sentencia, por sí misma es la que puede perjudicar a los litigantes y no la parte Considerativa, pero este principio

debe entenderse unido al de la congruencia, según el cual los considerandos rigen a los resolutivos y sirve para interpretarlos...”.

Los considerandos de la sentencia que ampara y protege contra una ley inconstitucional hacen un estudio y declaración general respecto a la ley reclamada, aún cuando ese estudio y esa declaración se limiten en el fallo.

Todos conocemos la frase exteriorizada de la sentencia de amparo, que dice que la Justicia de la Unión ampara y protege al quejoso, para los efectos que se determinan en los Considerandos.

El más alto Tribunal de la Nación, destruyendo la esencia de la cosa juzgada, determina, en su jurisprudencia firme, que “Las ejecutorias de amparo deben ser inmediatamente cumplidas por toda autoridad que tenga conocimiento de ellas y que, por razón de sus funciones, deba intervenir en su ejecución, pues atenta la parte final del primer párrafo del artículo 107 de la Ley Orgánica, de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, no solamente la autoridad que haya figurado con el carácter responsable en el juicio de garantías está obligada a cumplir la sentencia de amparo, si no cualquiera otra autoridad que, por sus funciones tenga que intervenir en la ejecución de ese fallo”. Se impone la conservación de la estabilidad y supremacía del orden jurídico constitucional, y de interés público, sobre el interés de los particulares.

El Legislador ha establecido, como un caso de la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación de la demanda de amparo, los casos “En cualquier materia, cuando el acto reclamado se funde en leyes

declaradas anticonstitucionales por la Jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia", atendiendo al artículo 76 bis, fracción I, de la Ley de Amparo en vigor.

9) Actualmente y en términos del artículo 105 fracciones I inciso K), segundo apartado y II, inciso f), último apartado, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de las controversias constitucionales y de las acciones de inconstitucionalidad, si aquéllas versan sobre disposiciones generales de los Estados o de los Municipios impugnados por la Federación, de los Municipios impugnadas por los Estados, o de los Poderes de un mismo Estado, o de dos Órganos del Gobierno del Distrito Federal, sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales, y si éstas tienen por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y la Constitución.

En estos casos, si las resoluciones deciden que la controversia constitucional es operante y que existe contradicción entre una norma de carácter general y la Constitución, tendrán efectos generales de invalidez de las disposiciones o normas impugnadas.

Sin embargo, no sucumben, ni quedan desairadas e envilecidas las autoridades Federal o del Estado, ni caen en inevitable guerra civil.

El fantasma del conservadurismo ha desaparecido y sin temor ninguno debe prevalecer la Supremacía Constitucional.



## **PROPOSICIONES CONCRETAS**

**PRIMERA.-** Deben reformarse los artículos 94, apartado VIII, 107 fracción XIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 192 de la Ley de Amparo, para determinar que la jurisprudencia que establezca la H. Suprema Corte de Justicia, funcionando en Pleno o en Salas, por reiteración y por contradicción de Tesis, que se refiera a la inconstitucionalidad de una norma general y abstracta, es obligatoria para todas las autoridades de la República, ya sean Federales, Estatales o Municipales, sin distingo de sus jerarquías.

**SEGUNDO.-** Debe adicionarse el artículo 195 de la Ley de Amparo, estableciendo que la jurisprudencia de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, referente a la inconstitucionalidad de una norma general y abstracta, deberá publicarse, además de en el Diario Oficial de la Federación, y en los Diarios Oficiales o Gacetas, de o de las Entidades Federativas, a las que corresponda la norma anticonstitucional.

**TERCERO.-** Debe agregarse como caso de suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación de la demanda de amparo aquél en el que el acto reclamado se haga consistir en la inconstitucionalidad de una norma general y abstracta, o en su aplicación, y ya se haya resuelto por la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, en controversias y en acciones de inconstitucionalidad, que tal norma pugna con la Constitución.

**CUARTO.-** Cuando exista Jurisprudencia de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que una norma general y abstracta,

reclamada en un juicio de amparo, es inconstitucional, por violación de los procedimientos legislativos o establecidos para su pronunciamiento y publicación, y en los casos del artículos 103 fracciones II y III de la Constitución General de la República, la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, la pondrá en conocimiento de la parte legitimada, conforme al artículo 105 fracciones I y II de la Carta Magna, para que inicie la controversia o la acción inconstitucionalidad, correspondiente.

QUINTO.- Deben adicionarse, los artículos 107 fracción II de la Constitución y 80 de la Ley de Amparo, para determinar, que en los casos en los que se conceda el amparo y protección de la Justicia Federal, a un quejoso, porque la ley que reclamó, o su aplicación, sean inconstitucionales la ley así juzgada será inaplicable a casos iguales o futuros en perjuicio de cualquier habitante de la República, si al respecto se llega a formar Jurisprudencia.

SEXTO.- Debe agregarse una fracción al artículo 95 de la Ley de Amparo, para establecer que en los casos en que exista jurisprudencia de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que una norma general y abstracta es inconstitucional, cualquiera persona a la que se aplique puede impugnar, esa aplicación mediante el Recurso de Queja, en cualquier tiempo.

Al respecto debe tenerse presente que las autoridades que intervinieron en el procedimiento legislativo o en el pronunciamiento y publicación de la norma general y abstracta, declarada inconstitucional, ya

fueron oídas legalmente en los juicios de amparo en que se pronunciaron las Ejecutorias o Tesis que constituyen Jurisprudencia.

Se trata de un verdadero caso de exceso o defecto de la ejecución de la sentencia que amparo. (Antonio Zafra Oropeza, Tomo IV, páginas 2823 a 2850).

---

a) La propuesta de reforma lo constituye el TÍTULO PRIMERO, relativo a las REGLAS GENERALES, del Capítulo X, artículo 76 de la Ley de Amparo, que a la letra dice: "Las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo sólo se ocuparán de los individuos particulares o de las personas morales, privadas u oficiales que lo hubieren solicitado, limitándose a ampararlos y protegerlos, si procediere, en el caso especial sobre el que verse la demanda, sin hacer una declaración general respecto de la ley o acto que la motivare.

b) Las consideraciones o motivos que explican la aportación, son las siguientes:

Uno de los medios de la defensa de la Constitución, puede realizarse en nuestro país a través del juicio de amparo; la defensa si lograda es primordialmente del individuo y sólo indirecta, secundaria y limitadamente de la Constitución.

Por su parte, el Poder Judicial Federal, tiene una función jurisdiccional específica, que le confiere el artículo 103 constitucional, a través del juicio

de amparo como un sistema de defensa constitucional, fijándose las bases para su tramitación en el artículo 107 del mismo texto.

Motivo por el cual, el objetivo fundamental de este trabajo estriba en reformar la fracción II del artículo 107 constitucional; y como consecuencia el artículo 76 de la Ley de Amparo, conocida en la doctrina como principio de la relatividad de la sentencia de amparo (fórmula Otero); evitando el mencionado precepto que las sentencias de amparo tengan efectos generales, limitándose única y exclusivamente a amparar y proteger al quejoso en los casos en que verse su demanda de garantías, sin hacer una declaración general de nulidad de leyes o actos inconstitucionales.

Fundamento constitucional que tuvo su origen con Mariano Otero, quién al proponer el juicio de amparo a nivel federal en su notable voto particular de 5 de abril de 1847, que después quedaría consagrado en el Acta Constitutiva y de Reformas de 18 de mayo de 1847, consideró que, siguiendo el modelo americano, el Poder Judicial solamente desaplicaría la norma secundaria, ya que de lo contrario los jueces derogarían las leyes y se pondrían en oposición contra el Poder Legislativo.

Esta fórmula quedó recogida, casi literalmente, por el artículo 102 de la Constitución de 1857, el cual, junto con el artículo 101, representaron la consagración definitiva del juicio de amparo; más tarde pasó a formar parte por la fracción II del artículo 107 constitucional vigente.

Hemos observado que el principio de la relatividad de la sentencia de amparo (fórmula Otero), es injusta, por cuanto tal como hoy se práctica,

mediante el amparo contra ley o acto inconstitucional sólo se protege al quejoso, dejando subsistente y en pleno vigor dicha ley o acto inconstitucional para todos aquellos otros particulares que no hubieren recurrido a tiempo, no atacando el mal intrínseco de la disposición contraria a la Constitución.

Lo cual nos induce a proponer como solución del problema, reformar la fracción II del artículo 107 constitucional y 76 de la Ley de Amparo, basada en el método científico del estudio de legislación comparada, donde en algunos países europeos y americanos se han venido creando tribunales constitucionales, dotando a sus sentencias de efectos erga omnes, así como en otros países, a las sentencias de constitucionalidad de leyes dadas por tribunales ordinarios, también se les ha dado esa característica a sus efectos, ya que consideran que los efectos generales de la sentencia de un proceso en que se revise la constitucionalidad de una ley, no violan los principios de la división de poderes, puesto que con ello se procura aplicar con realismo el principio de la supremacía de la norma constitucional sobre las normas secundarias.

Concebimos esta reforma como un urgente mecanismo, pretendiendo como fin inmediato la adecuación del principio del que nos hemos referido en el amparo, a efecto de que las sentencias pronunciadas no sean relativas, sino generales y abstractas, logrando el bienestar tanto del quejoso que haya impugnado la inconstitucionalidad de la ley o acto de autoridad, como aquél que no lo hizo pero que se encuentra afectado por dicha ley o acto, quedando invalidado totalmente y lograr un bienestar en el gobernado.

c) Redacción que resulta al incorporar comentarios.

Ante el problema planteado, proponemos la reforma de la norma constitucional en cuestión, para quedar en los siguientes términos:

**Texto actual**

"La sentencia será siempre tal, que sólo se ocupe de individuos particulares, limitándose a ampararlos y protegerlos en el caso especial sobre el que verse la queja, sin hacer una declaración general respecto de la ley o acto que la motivare".

**Texto de la reforma**

Sugerimos la reforma de la facción II del artículo 107 constitucional y 76 de la Ley de Amparo, para quedar en los términos siguientes:

La sentencia que declare la inconstitucionalidad de una ley o acto, será definitiva y de efectos generales, amparando y protegiendo tanto al quejoso que impugnó la inconstitucionalidad, como a todos aquéllos que se encuentran afectados por dicha ley o acto. (Tranquilino Juárez Ortega, Tomo IV, páginas 2851 a 2854).

**Artículo 76 bis. Las autoridades que conozcan del juicio de amparo deberán suplir la deficiencia de los conceptos de violación de la demanda, así como la de los agravios formulados en los recursos que esta ley establece, conforme a lo siguiente:**

**I. En cualquier materia, cuando el acto reclamado se funde en leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia.**

### **PROPUESTAS**

En el artículo 107 de la Constitución Federal se fijan las bases que sustentan al juicio de amparo; ahí se encuentra una serie de principios que deben aplicarse a aquél, dentro de los cuales está el "de estricto derecho" que se identifica con el principio procesal de congruencia y exige que el Juzgador de amparo limite la función Jurisdiccional a resolver sobre los actos reclamados y los conceptos de violación hechos valer en la demanda; es decir, el Juzgador no puede hacer consideraciones de inconstitucionalidad o ilegalidad que no se hubieren planteado en la demanda.

Concretamente el principio "de estricto derecho" está contemplado en el artículo 107, fracción II, primer párrafo, de la Constitución General de la República; dicho precepto prevé: "La sentencia será siempre tal que sólo se ocupe de los individuos particulares limitándose a ampararlos y protegerlos

en el caso especial sobre el que verse la queja, sin hacer una declaración general respecto de la Ley o acto que la motivare".

Cuando se habla de que un principio rige una institución (en este caso el juicio de amparo), se considera regla general, misma que se debe observar y para ser confirmada requiere de excepciones. En su origen, el principio "de estricto derecho" era regla general que normaba a los juicios constitucionales; su excepción era la suplencia de la queja la cual sólo operaba en casos especiales y concretos. La evolución del juicio de garantías ha permitido que la aludida excepción se esté consagrando como una regla general, así se observa que se aplica en materia administrativa, civil y mercantil en donde en otras épocas la suplencia era vedada.

El principio "de estricto derecho" debe ser observado por la autoridad que conoce del juicio de garantías, es decir, por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Tribunales Colegiados de Circuito y Unitarios así como los Jueces de Distrito.

Otra nota que distingue al principio de que se viene hablando, es que regula a la sentencia de amparo y que sirve de advertencia al quejoso y a su patrocinador para que se esmeren en la formulación de la demanda, ya que si el acto reclamado no es atacado adecuadamente a través de los conceptos de violación, el Juzgador no podrá suplir sus deficiencias y, obviamente, se obtendrán resultados negativos.

El principio "de estricto derecho" es desarrollado en la Ley de Amparo en los artículos 76, 76 bis (interpretado a contrario sensu) y 78. El artículo



76 bis, contiene las hipótesis en que el Tribuna de amparo tiene la obligación de suplir la deficiencia de la queja, lo que quiere decir, en sentido contrario, que mientras el asunto no esté comprendido dentro de esas hipótesis, el juicio de garantías estará siempre regido por el principio "de estricto derecho".

La idea de presentar este trabajo se apoya fundamentalmente en las fracciones 1, IV y VI del artículo 76 bis. Cuando se trata del juicio de amparo; en que el acto reclamado se funde en leyes declaradas inconstitucionales por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debe suplirse la deficiencia de los conceptos de violación. Recientemente la Honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación, declaró inconstitucional el artículo 1°. de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Al tener conocimiento de esta Jurisprudencia, los Tribunales que conocen del juicio de garantías la aplicaron de inmediato y las reflexiones vinieron después, a virtud de que el juicio laboral se inició ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje y el demandado no opuso la excepción de incompetencia, lo cual obligaba a aquél a dictar el laudo correspondiente. Entonces el quejoso planteaba en los conceptos de violación la incompetencia Legal de aquél Tribunal. Cuando ese tipo de asuntos fue del conocimiento del Tribunal al que pertenezco, siempre fui de la idea de que la Jurisprudencia se aplicara de inmediato para así lograr que el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje se declarara incompetente, sin importar si quien peleaba esa situación había planteado o no la excepción correspondiente. Sin embargo, el Alto Tribunal de la Federación ha indicado a través de la tesis aislada 2a. XIX/99, visible en el Tomo IX, marzo de 1999, página 307, materia laboral, que si el quejoso tuvo conocimiento de la

Jurisprudencia, debió invocarla ante la autoridad instructora del proceso laboral.

A partir de 1995, la Honorable Suprema Corte de Justicia ha sido más abierta hacia los temas jurídicos, por tanto, imbibitamente plasma su deseo de que los juzgadores de amparo, no seamos rígidos, que procuremos la impartición de justicia en su máxima expresión, por eso cuando el juzgador que conoce del amparo observa que la Ley que rige el acto reclamado ha sido declarada inconstitucional, no encuentro justificación legal para exigir al quejoso que tenga que hacer valer ese derecho durante el procedimiento y en la etapa procesal correspondiente. De acuerdo con el artículo 192 de la Ley de Amparo, la Jurisprudencia es obligatoria para las autoridades a que dicho precepto se refiere, mas no para los particulares, que es la pretensión de la tesis; pero independientemente de ello, se lograrían mejores encauzamientos de justicia si la autoridad que conoce del juicio natural aplica oficiosamente la jurisprudencia que declara inconstitucional una ley pues de otra forma no se lograría el propósito del artículo 17 de la Constitución Federal, es decir no sería correcto que una autoridad emitiera su resolución en contra de un gobernado a sabiendas de que es incompetente legalmente para conocer del juicio sometido a su consideración. (José Manuel Hernández Saldaña, Tomo II, páginas 745 a 748)

**II. En materia penal, la suplencia operará aun ante la ausencia de conceptos de violación o de agravios del reo.**

### **PROPUESTAS**

Ahora bien, la naturaleza del juicio de garantías permite al juzgador ampliar la intención del legislador en aras de la preservación de las garantías individuales de los gobernados, tal y como se consideró en la exposición de motivos del decreto que incorporó al artículo 107 vigente, la suplencia de la queja deficiente en amparos en revisión en materia penal, que expresa en lo conducente

"El motivo que justifica la suplencia de la queja deficiente en amparos penales, ha consistido siempre en proteger, de la manera más amplia posible y apartándose del formalismo que muchas veces des plaza la justicia intrínseca del negocio jurídico del negocio jurídico de que se trate, valores e intereses humanos de la más alta jerarquía, como son la vida y libertad del individuo. Conforme a este desideratum, se ha estimado la Constitución por la Ley de Amparo y por la jurisprudencia de la Suprema Corte, que en el amparo penal puede existir mayor liberalidad en la apreciación de los conceptos de violación o de los agravios alegados por el quejoso, y que, en el supuesto de no haberlos expresado, el órgano jurisdiccional de control debe tener facultad para suplir su deficiente formulación o su total ausencia, toda vez que, atendiendo al ambiente económico en que vive la mayoría de la población de México, y que, si no es de pobreza es de extrema miseria, y en el que se registra generalmente la delincuencia, los autores de un delito carecen del numerario suficiente

para remunerar los servicios profesionales de un abogado que, mediante sólidos conocimientos jurídicos, habilidad técnica o influencia política o amistosa, los patrocine con éxito viable."

De lo que se sigue, que si la tutela de la defensa del acusado por la comisión de un delito es de una cobertura tan amplia, y ante el evidente desequilibrio de los beneficios o garantías existentes entre el victimario probable y la víctima del delito, por mayoría de razón tratándose de ésta última, se debe suplir la deficiencia de la queja como protección mínima de su derecho de impugnar las resoluciones del Ministerio Público de no ejercicio o del desistimiento de la acción penal, como de manera clara se expresa en el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en lo conducente se transcribe:

"la negativa sobre el ejercicio de la acción penal o el desistimiento de ésta, cuando resultan injustificados, violan en perjuicio del denunciante, querellante, víctima del delito o de los familiares de éste, o del interesado legalmente en la persecución del delito, la garantía de seguridad jurídica consagrada en la reforma al artículo 21, párrafo cuarto, de la Constitución Política. Además, es patente que tales determinaciones afectan los intereses jurídicos de la sociedad y por ende, del ofendido, persona que ha resentido directa o indirectamente la conducta calificada como delito, en especial, al privarle de la posibilidad de obtener la reparación del daño, por lo que éste, por sí, por medio de sus representantes o, en su caso, sus sucesores, el legitimado para ejercer al respecto la acción de garantías. Conforme a lo anterior, si las determinaciones del Ministerio Público sobre el no ejercicio o desistimiento de la acción penal, pueden resultar

directamente violatorias de las garantías individuales del ofendido, el juicio de amparo es plenamente procedente para reclamarlas". Amparo en revisión 32/197.- Luis Guillermo Bueno Ziaurriz.- 21 de octubre de 1997.- Unanimidad de once votos.- Ponente: Juan Díaz Romero.- Secretario: Armando Cortés Galván.

En suma, si el máximo Tribunal de la Nación estableció que el ofendido tiene el carácter de parte dentro de la relación jurídica procesal, aunque sea de manera limitada, pues sólo puede impugnar resoluciones de naturaleza administrativa dictadas por el Ministerio Público, deviene evidente que en sus exposiciones de agravios, cuando menos, procede suplir la deficiencia de la queja.(José Pérez Tronco, Tomo I, páginas 424 a 426)

---

En atención a su cordial invitación, realizada por memorándum de fecha 24 de noviembre de 1999, y que a su vez se desprende de la realizada por el Ministro GENARO DAVID GONGORA PIMENTEL, Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, me permito hacerle llegar la siguiente propuesta que se considera debe hacerse a la Nueva Ley de Amparo que está en estudio, para que por su conducto se envíe al Coordinador de la Comisión Organizadora Ministro HUMBERTO ROMAN PALACIOS:

UNICO: La propuesta que se realiza, va en relación a las excepciones al principio de estricto derecho que rige a la Ley de Amparo, que encuentran fundamento en el artículo 107 fracción II, Párrafo Segundo,

de la Constitución Federal que a la letra dice: "todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y forma del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo con las siguientes bases:

I.-...

II.-...

En el juicio de Amparo deberá suplirse la deficiencia de la queja de acuerdo con lo que disponga la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de esta Constitución".

De modo particular la propuesta va dirigida en relación a la materia penal y precisamente al ofendido o víctima de un proceso penal, en lo que se refiere a la reparación de daños y perjuicios y no ejercicio o desistimiento de la acción penal.

Actualmente el artículo 76 Bis de la Ley de Amparo, expresamente estatuye varias excepciones al citado principio, atendiendo unas a la naturaleza del acto y otros a las circunstancias personales del quejoso y recurrente, y en efecto, el citado artículo dice: "las autoridades que conozcan del juicio de amparo deberán suplir la deficiencia de los conceptos de violación de la demandada, así como la de los agravios formulados en los recursos que ésta ley establece conforme a los siguientes: I.-...; II.- en materia penal, la suplencia operará aún ante la ausencia de los conceptos de violación o de agravios del reo.

Como puede constatarse de la lectura del artículo mencionado en la fracción II, en materia penal, solo el reo tiene la facilidad de que el juez de amparo de forma oficiosa entre al estudio del acto reclamado, aún y cuando los conceptos de violación o de agravios sean deficientes o no existan, es decir que el juzgador se apoyará en las consideraciones que estime oportuno, aunque el reo haya omitido todo razonamiento tendiente a demostrar la Constitucionalidad del acto reclamado a la ilegalidad de la resolución que recurra. De lo que se desprende que el legislador hace que el juicio de amparo constituya para el reo un medio de fácil defensa, y a consideración del proponente también el ofendido o la víctima de un delito tiene derecho a que el juez de amparo supla las deficiencias de los conceptos de violación o de los agravios en los recursos, ya que por lo regular en el proceso no tienen un asesor jurídico y en muchas de las ocasiones el ministerio público les obstaculiza su intervención en el procedimiento penal, resultando inermes ante los actos de autoridad, y para sustentar el criterio nos basamos en los siguientes razonamientos:

1.- "La Justicia es uno de los derechos del pueblo mexicano, y la cual se concibe como el objetivo a alcanzar y todo el aparato gubernamental y el sistema jurídico deben estar encaminados a permitir su concreción en casos reales e individualizarlos que se sometan a su jurisdicción. Y el determinar que es lo suyo de cada cual debe ser tarea permanente del Estado y muy especialmente del Poder Judicial. Esa y no otra debe ser su razón de ser"; estas ideas son tomadas del artículo suscrito por MANUEL LORENZO NUÑEZ, y publicado en la Revista Lex, Tercera Epoca, Año V, JUNIO-JULIO 1999, números 48 y 49, páginas 87 y 88.

2.- Ahora bien, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su título Primero Capítulo 1, establece las garantías individuales que abarcan del artículo 1 al artículo 29, y el artículo 20 establece: "en todo proceso de orden penal, tendrá el inculpado las siguientes garantías", y en seguida el artículo enumera las garantías que se comprenden en diez fracciones, y el último párrafo menciona: "en todo proceso penal, la víctima o el ofendido por algún delito, tendrá derecho a recibir atención jurídica, a que le satisfagan la reparación del daño cuando proceda, a coadyuvar con el ministerio público, a que se le preste atención médica de urgencia cuando lo requiera, y, lo demás que señalen las leyes"; a su vez el artículo 21 párrafo cuarto de la Carta Magna menciona: "las resoluciones del ministerio público sobre el no ejercicio y desistimiento de la acción penal, podrán ser impugnadas vía jurisdiccional en los términos que establezca la ley", por lo cual al comprenderse estos derechos del ofendido o de la víctima, dentro de la Constitución Federal, dentro del capítulo de Garantías Individuales, conlleva a determinar que tanto los derechos expuestos en el último párrafo del artículo 20 y el cuarto párrafo del artículo 21 son Garantías Constitucionales que al ser vulneradas por alguna autoridad son susceptibles de tutela Constitucional a través del juicio de amparo conforme a los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, ya que incluso actualmente la Suprema Corte de Justicia ha establecido Jurisprudencia al resolver la Contradicción de Tesis 55/96, que es procedente el juicio de garantías contra la resolución del ministerio público sobre el no ejercicio y desistimiento de la acción penal. Luego entonces si el Legislador Federal establece en la Carta Magna, que en materia penal tanto el inculpado como el ofendido tienen garantías constitucionales, entonces en la ley de amparo debe darse igualdad jurídica entre el ofendido



o la víctima y el procesado, igualdad que es uno de los componentes de la justicia y que garantiza la Carta Magna en sus artículos 1º y 17, por lo tanto la propuesta se encamina a que en el artículo 76 Bis se establezca que en el juicio de garantías, en materia penal, el juez de amparo supla la deficiencia de los conceptos de violación de la demanda, así como de los agravios formulados en los recursos, respecto del ofendido o de la víctima única y exclusivamente en la reparación de daños y perjuicios y del no ejercicio o desistimiento de la acción penal.

3.- Una vez expuestos los argumentos, en seguida se expondrá el texto de reforma de la fracción II del artículo 76 Bis de la Ley de Amparo para quedar como sigue:

Artículo 76 Bis...

I.-...

II.- En materia penal, la suplencia operará aún ante la ausencia de conceptos de violación o de agravios del reo; así como del ofendido o víctima por lo que hace a la reparación del daño proveniente del delito e impugnación del no ejercicio o desistimiento de la acción penal. (Fernando Romero Domínguez, Tomo IV, páginas 2770 a 2774).

**III. En materia agraria, conforme a lo dispuesto por el artículo 227 de esta Ley.**

### **PROPUESTAS**

Cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación estime que el amparo, por sus características especiales, debe ser resuelto por ella, conocerá del mismo, bien sea procediendo de oficio o a petición fundada del correspondiente Tribunal Colegiado de Circuito o del Procurador General de la República, aplicándose en lo conducente lo dispuesto por el artículo 182 de esta Ley. (David Ancira Martínez, Tomo III, página 1915)

---

**IV. En materia laboral, la suplencia sólo se aplicará en favor del trabajador.**

### **PROPUESTAS**

Tema diferente es el de la suplencia de la queja contemplado en la fracción IV del artículo 76 bis de la Ley de amparo. En la compilación de 1975, Tomo relativo a la Cuarta Sala, página 67, 68 y 69, dicho Alto Tribunal de la Nación, sostuvo que tratándose de amparos interpuestos por trabajadores debe suplirse la deficiencia de la queja aun en ausencia total de conceptos de violación. El rubro de esa tesis relacionada dice lo siguiente: "COPIAS PARA EL AMPARO DIRECTO EN MATERIA DE TRABAJO (SUPLENCIA DE LA QUEJA)". No fue sino hasta el 10 de

Octubre de 1994, cuando la Cuarta Sala citada, emitió la Jurisprudencia número 47/94, por mayoría de 3 votos, en la que consideró que para que el Tribunal de amparo esté en aptitud de aplicar la suplencia de la queja, tratándose de amparos promovidos por el Trabajador, era necesario que en la demanda se expresaran, de alguna manera, conceptos de violación o un agravio, porque la fracción II, que regula la materia penal, solo autoriza la suplencia aun en ausencia total de conceptos de violación.

La actual Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación interrumpió la Jurisprudencia a que se refiere el párrafo anterior, para considerar que la suplencia de la queja opera aun ante la falta de conceptos de violación. Este es el criterio que actualmente prevalece.

Los elementos antes descritos permiten apreciar que la Ley es omisa en establecer con toda claridad la verdadera intención de suplir la deficiencia de la queja en materia laboral; esas obscuridades han tenido que ser aclaradas por la H. Suprema Corte de Justicia, con criterios de interpretación diferentes. Tal vez en esta parte el tema resulte trillado; pero ahora que tengo oportunidad, deseo expresar mi opinión.

La suplencia de la deficiencia de la queja ha tenido fuente principal de implantación, las interpretaciones jurídicas que a lo largo de la historia ha hecho la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pensamientos que han sido recogidos por los diferentes ordenamientos que preceden a la Ley de Amparo. Siempre se ha pensado en proteger con esa institución a la parte más débil; pero tampoco podemos dejar de advertir que los tiempos han cambiado radicalmente, a tal grado que no permanecen las mismas

circunstancias ahora, que las que rigieron el pasado y si bien se dijo que la suplencia se aplicaría en toda su extensión, ello se debió al gran atraso jurídico intelectual que tenía nuestro pueblo; desde luego que esto ya no es del todo prevaleciente por eso es que en la evolución de esa suplencia o quizá en busca de la perfección, ya no debería permitirse que en materia laboral se supla la queja a favor del trabajador aun en ausencia total de conceptos de violación.

El tercer punto de este Trabajo tiene como su base principal la correlación que a mi juicio debe hacerse de las fracciones IV y VI, del artículo 76 bis, de la Ley de Amparo. La última de las fracciones anotadas establece que debe suplirse la deficiencia de la queja cuando se advierta que ha habido en contra del quejoso o del particular recurrente una violación manifiesta a la Ley que lo haya dejado sin defensa. El problema radica en que en su apreciación literal está permitida la suplencia "EN OTRAS MATERIAS", lo que quiere decir a simple vista que en materia laboral, dicha institución sólo se aplica a favor del trabajador. El máximo Tribunal del país debería interpretar todas estas disposiciones del 76 bis, para llegar a concluir que en el concepto "OTRAS MATERIAS" también debe incluirse a la laboral, cuando se advierta que el patrón ha quedado sin defensa. Esta posición se apoya fundamentalmente en la experiencia vivida pues en muchas ocasiones se observa que los laudos impugnados a través del amparo por los patrones, carecen de alguna firma de los integrantes de la Junta o que tratándose de resoluciones que ponen fin al juicio de tercería, son dictados por el Presidente de la Junta quien carece de toda facultad legal para ello y sin embargo, los quejosos patrones no se percatan de esa circunstancia con lo cual se observa que hay una manifiesta violación

de la Ley que bien podía ser suplida por el órgano que conoce del amparo. La Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que es totalmente improcedente la suplencia de la deficiencia de la queja a favor de la parte patronal; fundamentalmente se apoya en que la fracción IV, del artículo 76 bis, señala que en materia laboral sólo se aplica a favor del trabajador; esto es cierto, pero esta parte no debe interpretarse en sentido literal ni aislado sino, como en otras ocasiones lo hace el Máximo Tribunal. Si llegara a buscarse la correcta armonía del precepto 76 bis, nada impediría que también los patrones fueran beneficiados con esta medida. La Jurisprudencia número 42/97, ha tenido ciertas modificaciones en cuanto la misma Segunda Sala consideró, en correcta interpretación, que tratándose de los sindicatos quejosos, debe suplirse la deficiencia de la queja en dos casos específicos:

- 1.- Cuando al Sindicato se le niegue el registro; y
- 2.- Cuando impugne la resolución que declara inexistente la huelga.

Hasta donde tengo conocimiento, antes no se permitía la suplencia de la queja a favor de los Sindicatos; pero ahora la Suprema Corte sí armonizó estos preceptos en forma adecuada para considerar procedente esa medida a favor de aquellos grupos inexistente sociales. Insisto, de esa misma manera debería buscarse la esencia del artículo 76 bis, para lograr un avance más en la aplicación de la institución a favor de los patrones, claro en ciertos casos específicos.

## **CONCLUSIONES.**

**PRIMERA.-** La suplencia de la deficiencia de la queja debe aplicarse en todos los casos en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya declarado inconstitucional una Ley, independientemente de cuál sea el estado del juicio o que lo hayan hecho o no valer las partes.

**SEGUNDA.-** En los amparos promovidos por los trabajadores debe condicionarse la suplencia de la queja a que exista un principio de concepto de violación o de agravio.

**TERCERA.-** Debe suplirse la deficiencia de la queja a favor de los patrones cuando se advierta que se le ha dejado en total estado de indefensión. (José Manuel Hernández Saldaña, Tomo II, páginas 748 a 752)

---

#### **Limitación de la Suplencia de la Queja**

#### **Consideraciones de la Aportación**

Si bien se reconoce que la suplencia de la queja surgió como una forma de atemperar el principio de estricto derecho, que rige a nuestro juicio de amparo en virtud de que, como han apuntado grandes juristas de la talla del Ministro Juventino V. Castro y Felipe Tena Ramírez, dicho principio provoca que "la decisión judicial en mucho dependa de la perspicacia jurídica de los abogados o de la torpeza de sus patrocinadores"

convirtiéndolo en un "formulismo inhumano y victimario de la justicia";<sup>33</sup> hoy por hoy, dicha suplencia es escudo de abogados ineptos y en ocasiones hasta poco honestos.

En efecto, tras veinte años de que la suplencia de la queja fue prevista en el artículo 107 constitucional<sup>34</sup> con carácter obligatorio, estimamos que el otro lado de la moneda ha resultado verdadero, como ya apuntaba el Maestro Ignacio Burgoa, en su libro El Juicio de Amparo, "el efecto práctico del uso indiscriminado de la suplencia de la queja se ha traducido en la indolencia y apatía de algunos abogados quienes se cobijan en la esperanza", muchas veces satisfecha por nuestros funcionarios judiciales "de encontrar un juzgador diligente, acucioso o movido de buena voluntad y simpatía, que en la sentencia tome a su cargo el trabajo de formular a guisa de considerandos, los conceptos de violación omitidos o torpe o deficientemente desarrollados."<sup>35</sup>

Si bien reconocemos que las causas que motivaron al legislador a prescribir la suplencia de la queja en el juicio de amparo (la protección de las clases económicamente desfavorecidas: obrero, campesinos, menores de edad, indiciados, que en muchas ocasiones no pueden allegarse la representación legal adecuada) aún persiste, consideramos que la

---

<sup>33</sup> BURGOA, Ignacio El Juicio de Amparo, editorial Porrúa, vigésimo octava edición, México 1991, páginas 296 y 297

<sup>34</sup> La reforma de la Ley de Amparo de 1951 incluyó en forma facultativa la suplencia de la queja para leyes declaradas inconstitucionales por la Suprema Corte de Justicia así como para la parte obrera en juicios de índole laboral. En 1962 se amplía dicha facultad para incluir la materia agraria y en 1974 para la protección de los menores incapaces, siempre con el carácter discrecional. En 1976 todos estos supuestos de suplencia de la queja adquieren carácter obligatorio y son elevados a rango constitucional en la fracción II del artículo 107. Véase: Gongora Pimentel Genaro, Introducción al estudio al derecho de Amparo, Porrúa, 3 edición ampliada México, 1990.

<sup>35</sup> Burgoa, op cit 297

excepción al principio de estricto derecho no ha sido, cuando menos en todos los casos, la solución idónea.<sup>36</sup> La verdadera solución consiste en unir esfuerzos para elevar la calidad de la abogacía en nuestro país y sobretodo la de la defensa de los justiciables a través de mecanismos como la representación legal certificada<sup>37</sup>, la colegiación obligatoria o bien a través de los servicios que ya ofrece el Instituto Federal de la Defensoría Pública del Poder Judicial de la Federación.

En este contexto, estimamos necesario una limitación a la excepción de la suplencia de la queja, que restituya en la medida de lo posible, el principio de igualdad procesal, al no obligar al juzgador a alterar la litis del juicio constitucional, convirtiéndose en juez y parte; pues esta excepción ha resultado escudo de ineficiencias y faltas de profesionalismo de muchos litigantes. Por ello, consideramos que sería conveniente devolverle el carácter discrecional a esta facultad, a fin de que sólo en aquellos casos en que el juez perciba una grave omisión que colocara al quejoso en estado de indefensión, supla la deficiencia.

Ahora bien, por lo que toca al ámbito del derecho laboral, en adición a lo hasta aquí expuesto, estimamos que la suplencia de la queja para el

---

<sup>36</sup> Cabe apuntar que tanto la Suprema Corte de Justicia como los Tribunales Colegiados a través de sus tesis y jurisprudencias han establecido límites considerables a la suplencia de la queja. Véanse entre otras las tesis cuyos son: SUPLENCIA DE LA QUEJA SOLO OPERA EN CUESTIONES QUE NO SE RIGEN POR LA SUPLENCIA DE LA QUEJA. SUPLENCIA DE LA QUEJA NO DEBE LLEVARSE AL EXTREMO DE CAMBIAR LA VIA INTENTADA. QUEJA. SUPLENCIA DE LA. NO COMPRENDE LA DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES RESPONSABLES. SUPLENCIA DE LA QUEJA NO COMPRENDE EL EJERCICIO DE FACULTADES CONCEDIDAS A LOS JUECES DE INSTANCIA. SUPLENCIA DE LA QUEJA EN AMPARO NO APTA A QUE SE VIOLEN LAS REGLAS DE PERSONALIDAD. SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA PREVISTA POR LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 78bis DE LA LEY DE AMPARO DEBE SER ESTRUCTA Y CIRCUNSCRIBIRSE A LA LITIS CONSTITUCIONAL. consultadas en [www.scjn.gob.mx](http://www.scjn.gob.mx)

<sup>37</sup> Véase la propuesta de la Maestra Ana Elena Fierro Ferráez, "Mejora de la Representación Legal ante el Poder Judicial de la Federación".



trabajador, en materia de amparo resulta excesiva; en virtud de que toda la regulación en materia del trabajo tiene como propósito, precisamente, la protección de esta clase social. En efecto, desde la redacción del artículo 123 constitucional y con la promulgación de la Ley Federal del Trabajo de 1970, esta rama del ordenamiento jurídico mexicano ha sido catalogada como derecho social, cuyo objetivo primordial es lograr la igualdad material de los mexicanos, a través de la protección de los trabajadores frente al capital. El derecho del trabajo constituye, como apuntaba el maestro Trueba Urbina, "un estatuto proteccionista y reivindicador del trabajador."<sup>38</sup>

Este espíritu de protección y defensa del trabajador, también se encuentra en el proceso laboral, así lo apunta Trueba Urbina al señalar que corresponde a las Juntas de Conciliación y Arbitraje corregir y subsanar las demandas omisas o defectuosas de los trabajadores así como reivindicar sus derechos en el laudo:

"Las Juntas de Conciliación y Arbitraje están obligadas a redimir a la clase trabajadora supliendo sus quejas o reclamaciones defectuosas"<sup>39</sup>.

En la misma línea, el junsta Néstor de Buen distingue, entre los principios que rigen el derecho laboral, el de la interpretación, consistente en que las Juntas de Conciliación y Arbitraje deberán procurar que sus

---

<sup>38</sup> Trueba Urbina Alberto Trueba Barrera Jorge Ley Federal del Trabajo, Comentarios, Prontuario, Jurisprudencia Porrúa 67ª edición, México 1991, p XX

<sup>39</sup> TRUEBA, ibid p XXII

interpretaciones legales contribuyan a los fines de la justicia social, la igualdad y la libertad de todos los trabajadores.<sup>40</sup>

Si, como ha quedado apuntado en los párrafos precedentes, la legislación laboral, tanto en la parte sustantiva, como en la adjetiva, tiene por objeto la protección y reivindicación de la clase obrera, resulta un tanto excesivo que tal situación se reitere en el juicio de amparo. El derecho procesal laboral ha privilegiado a una de las partes en el juicio laboral haciendo del juzgador un defensor del trabajador, por estimar que tal situación es necesaria para lograr una justicia social, ello es plenamente justificable; sin embargo, el fin del juicio de amparo es diverso, e incluso la contraparte del quejoso-obrero ya no es el patrón, sino una autoridad que, en no pocas ocasiones, es precisamente la Junta de Conciliación y Arbitraje; por lo tanto tal desequilibrio entre las partes en el juicio ya no encuentra fundamento en la reivindicación de la clase obrera.

Tomando en cuenta todo lo hasta aquí expuesto es que proponemos la derogación de la fracción cuarta del artículo 76bis de la Ley de Amparo, así como atemperar el carácter obligatorio de la suplencia de la queja para las demás materias previstas en esta norma, en virtud de que en los demás casos la protección legal no es tan predominante.

#### **Título, Capítulo de la Ley de Amparo Actual**

**Artículo 76bis.** Las autoridades que conozcan del juicio de amparo deberán suplir la deficiencia de los conceptos de violación de la demanda,

---

<sup>40</sup> Barajas Montes de Oca Santiago. Conceptos Básicos del Derecho del Trabajo. Fondo de Cultura Económica. 2ª edición México 1996

así como los agravios formulados en los recursos que esta ley establece, conforme a lo siguiente:

...

IV. En materia laboral, la suplencia sólo se aplicará a favor del trabajador.

**Redacción resultante**

Artículo 76 bis. Las autoridades que conozcan del juicio de amparo deberán suplir las deficiencias, que consideren dejarían al justiciable en completo estado de indefensión, tanto por lo que se refiere a los conceptos de violación de la demanda como en el caso de los agravios formulados en los recursos que esta ley establece, conforme a lo siguiente:

...

**IV.- DEROGADA.**

**... (Absalón Álvarez Escalante, Tomo II, páginas 1176 a 1180)**

---

3.- Propongo, en principio, derogar la fracción IV del artículo 76 bis, relativa a la suplencia de la deficiencia de la queja en materia laboral a favor del trabajador, puesto que con ella se rompe el equilibrio procesal entre las partes. A mayor abundamiento, tan competentes son los abogados de los trabajadores como los de los patrones; además, existe una Procuraduría de la Defensa del Trabajo, tanto federal como en cada uno de los Estados de la República, con abogados muy capaces, de ahí que dicha disposición no tenga razón de ser.

Sin embargo, de estimarse lo contrario, bien valdria la pena reflexionar sobre los alcances de la suplencia de la deficiencia de la queja a favor del trabajador, que en mi concepto debieran estar limitados a los conceptos de violación o agravios expuestos en la demanda de garantías o en el recurso, según sea el caso, pues definitivamente no es admisible que —como se viene dando en la actualidad—, se supla la deficiencia de la queja respecto de conceptos de violación o agravios que no se hicieron valer; ello equivale a que los tribunales de amparo se conviertan en parte al suplir no una deficiencia de la queja, sino la queja misma. Así las cosas, la fracción en comento quedaría como sigue:

**"... IV.- En materia laboral, la suplencia sólo se aplicará a favor del trabajador Y EXCLUSIVAMENTE RESPECTO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACION QUE HAYAN SIDO INVOCADOS EN LA DEMANDA DE GARANTIAS". (Martín González Gamboa, Tomo II, páginas 1252 y 1253)**

---

**V. En favor de los menores de edad o incapaces.**

**PROPUESTAS**

En favor de menores de edad, incapaces, personas de la tercera edad y miembros de etnias o grupos indígenas.

**MOTIVOS.-** Se estima conveniente incorporar en el sistema de suplencia de la queja a individuos que por sus especiales circunstancias

habían estado ajenos a la institución, no obstante que los informes oficiales han detectado que el promedio de vida de los mexicanos ha aumentado a 75 años y que cada día son objeto de abandono. Lo mismo ocurre con los grupos indígenas, quienes cada día reclaman el respeto de sus derechos, y de sus costumbres. (David Ancira Martínez, Tomo III, páginas 1913 y 1914)

---

**QUE SE EXTIENDA DICHA FIGURA DE MANERA ESPECÍFICA A LA MATERIA FAMILIAR.**

**ANTECEDENTES:**

Como es el conocimiento, el tema que es materia de mi propuesta, está contemplado en la Ley de Amparo y de manera específica en el numeral 76 bis, que es del tenor siguiente:

"Las autoridades que conozcan del juicio de amparo deberán suplir las deficiencias de los conceptos de violación de la demanda, así como la de los agravios formulados en los recursos que esta ley establece, conforme a lo siguiente:

I.- En cualquier materia, cuando el acto reclamado se funde en leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia.

II.- En materia penal, la suplencia operará aun ante la ausencia de conceptos de violación o de agravios del reo.

III.- En materia agraria, conforme a lo dispuesto por el artículo 227 de esta ley.

IV.- En materia laboral, la suplencia solo se aplicará a favor del trabajador.

V.- A favor de los menores de edad o incapaces.

VI.- En otras materias, cuando se advierta que ha habido en contra del quejoso o del particular recurrente una violación manifiesta de la ley que lo haya dejado sin defensa".

#### **JUSTIFICACIÓN:**

A).- De la manera como está legislada esta figura jurídica, su finalidad se diversifica en dos cuestiones a saber

I.- Suplir la deficiencia de los conceptos de violación de la demanda.

Lo que entraña, por necesidad, vincularlo directamente con el acto y con el informe justificado.

II.- Suplir la deficiencia de los agravios formulados en los recursos que esta ley establece (nominados e inominados).

Este punto, trae consigo la vinculación con el acto reclamado, el informe justificado, con los cuales se estableció la litis constitucional, y con la resolución que se hubiere emitido, que por su multiplicidad de casos y de causas, no tendría caso aludir a las mismas; baste que la impugnación que se haga en contra de dicha resolución, vía agravios, será en su caso objeto de la suplencia.

B).- Se pudiera imaginar que el objeto de mi propuesta estaría contemplado dentro de los supuestos previstos por las fracciones V y VI del precepto aludido, sin embargo no es así, atendiendo a lo siguiente:

1°. Las fracciones en comento aluden a los menores de edad o a los incapaces, que en estricto sentido están contemplados en el derecho de la familia, pero este va mas allá de estos dos sujetos, merecedores de toda consideración legal, como a la fecha acontece; y en otras materias, como pudiera ser la familiar, bajo los supuestos que la ley establece.

2°.- El objeto de la presente propuesta bajo ningún concepto estaría en contra o pugnaria con el principio de estricto derecho, pues dentro de los mismos casos de excepción se fundamenta éstas.

3°.- Considerando que el principio de estricto derecho, imbibido dentro de la Ley de Amparo, obliga a las autoridades que conozcan de un juicio de amparo, en primera o segunda instancia o en única instancia, de conformidad a las exposiciones que hubiere vertido el quejoso, vía

conceptos de violación o de agravios, y de conformidad a las piezas de autos que integren el sumario correspondiente.

4°.- Ahora bien, dicho principio emite ciertas excepciones, como las previstas en el transcrito numeral 76 bis, del ordenamiento invocado, mediante las cuales se obliga a la autoridad judicial, que resolverá la controversia constitucional, puesta a su consideración, a subsanar o corregir los errores que advierta en los escritos de demanda o de agravios, al haberse recurrido alguna resolución.

5°.- La propuesta de protección en caso de conflicto, supuesto bajo el cual emerge la figura de la suplencia de deficiencia de la queja a la familia y a las instituciones que de ella se desprende, tienen como argumento principal a que ellas, son base y fundamento de la sociedad y por consiguiente del derecho familiar. Y que tanto la familia como las referidas instituciones, deben contar con instrumentos legales para su supervivencia y para que se fortalezcan, teniendo como común denominador la subsistencia del basamento social, en el cual estamos inmersos todos.

6°.- Dentro del servicio de la Administración de Justicia, cuantos y cuantos casos hemos visto, que un inadecuado planteamiento de una acción o excepción, dan al traste con una familia, en el sentido amplio, su patrimonio; o bien no se logra el bienestar de dicha familia, entratándose de alimentos, sin que la autoridad pueda hacer algo porque triunfe la justicia y no el derecho, en acatamiento al principio estricto derecho; si bien esta propuesta sería la última oportunidad para proteger y salvaguardar los



intereses de la familia no es menos cierto, que la naturaleza del amparo lo exige.

7°.- Por consecuencia bajo la denominación genérica de la familia o del derecho familiar la suplencia de la deficiencia de la queja, habrá de operar en tratándose de:

- Divorcios
- Alimentos
- Nulidad de matrimonio
- Subsistencia del concubinato

Sin abarcar los sujetos objeto de protección de esta figura ya contemplada, por obvias razones, o en su caso, con la modificación pertinente y que a manera de conclusión se esboza en el párrafo siguiente.

#### **CONCLUSIÓN:**

Incorporarse al artículo 76 bis, de la Ley de Amparo una fracción, que aluda a la materia familiar, precisándose alcances, a efecto de que prospere la suplencia de la deficiencia de la queja; aunque con mejor técnica jurídica, se sugiere que la fracción V, se modifique y se incorpore a la materia familiar, incluyéndose como sujetos de protección a los menores o incapaces, elementos sustanciales del derecho de familia. (Salvador del Razo Jiménez, Tomo IV, páginas 2790 a 2794).

**VI. En otras materias, cuando se advierta que ha habido en contra del quejoso o del particular recurrente una violación manifiesta de la ley que lo haya dejado sin defensa.**

## **PROPUESTAS**

La suplencia de la queja deficiente como deber impuesto al juzgador de amparo, comprende en algunos casos a la materia fiscal, y se establece en los artículos 76 bis y 79 de la Ley de Amparo.

En efecto, el artículo 76 bis de la Ley citada, determina la responsabilidad de la suplencia de la queja deficiente, incluyendo a la materia tributaria, en las fracciones que transcribiremos a continuación: "Artículo 76 Bis. Las autoridades que conozcan del juicio de amparo deberán suplir la deficiencia de los conceptos de violación de la demanda, así como la de los agravios formulados en los recursos que esta ley establece, conforme a lo siguiente:

En cualquier materia, cuando el acto reclamado se funde en leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia".

En esta fracción, quedan comprendidas lógicamente las leyes fiscales declaradas inconstitucionales.

**"V. A favor de los menores de edad o incapaces".**

En la parte anterior, se comprende también a los menores de edad o incapaces que tengan calidad de contribuyentes por cualquier motivo, y por consecuencia, debe suplirse las queja deficiente en favor de los mismos, en tratándose de amparos fiscales.

"VI. En otras materias, cuando se advierte que ha habido en contra del quejoso o del particular recurrente una violación manifiesta de la ley que lo haya dejado sin defensa".

En el fragmento transcrito queda también comprendida la materia tributaria, pero hubiera sido más acertado el texto de la fracción, si en lugar de la expresión. "En otras materias", se hubiera utilizado la locución. "En cualquier materia", y por lo mismo, formando parte de la fracción I, del artículo que nos ocupa, aun cuando se le agregara un segundo párrafo. (Gregorio Sánchez León, Tomo I, páginas 12 y 13)

---

La aseveración que da título a este trabajo expone la manera en que —en mi opinión— se debe entender y se debe aplicar la suplencia de la deficiencia de la queja, pues sólo así quedará satisfecho el interés tutelado por esta institución procesal, cuya atención, antes de las últimas reformas que a este respecto se hicieron a la Ley de Amparo (2), se encontraba prevista como una facultad discrecional del juzgador de amparo en materia penal y en favor de la parte obrera en materia laboral, y sólo se preveía como obligatoria cuando el acto reclamado se fundara en leyes declaradas inconstitucionales por la Jurisprudencia de la Suprema Corte o cuando figuraran como quejosos los menores de edad o incapaces (3), así como en

materia agraria en los juicios en que eran parte, como quejosos o como terceros, los medios de población ejidal o comunal, los ejidatarios y comuneros en sus derechos agrarios, así como en su pretensión de derechos a quienes pertenecían a la clase campesina (4).

La Reforma de 1986, con buen criterio, estableció como obligatorio, para las autoridades que conozcan del juicio de amparo, suplir la deficiencia de los conceptos de violación de la demanda, así como la de los agravios formulados en los recursos que establece la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, en los siguientes casos: "Art. 76 Bis. Las autoridades que conozcan del juicio de amparo deberán suplir la deficiencia de los conceptos de violación de la demanda, así como la de los agravios formulados en los recursos que esta ley establece, conforme a lo siguiente: I.- En cualquier materia, cuando el acto reclamado se funde en leyes declaradas inconstitucionales por la Jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia.- II.- En materia penal, la suplencia operará aun ante la ausencia de conceptos de violación o de agravios del reo.- III.- En materia agraria, conforme a lo dispuesto por el artículo 227 de esta Ley.- IV.- En materia laboral, la suplencia sólo se aplicará en favor del trabajador. V.- En favor de los menores de edad o incapaces. VI.- En otras materias, cuando se advierta que ha habido en contra del quejoso o del particular recurrente una violación manifiesta de la ley que lo haya dejado sin defensa" (Texto vigente a partir del 4 de junio de 1986).

Así mismo, la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución General de la República, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 11 de mayo de 1995, estableció la suplencia de

la deficiencia de la queja en el dictado de las resoluciones que se emitan, tanto en la acción de controversia constitucional como en la de inconstitucionalidad (5).

Ahora bien, para entender y aplicar una institución, es menester entender su razón de ser, y si se ven los supuestos bajo los cuales ha venido operando la suplencia de la queja, se aprecia que con ella se busca la preservación de instituciones cuyo resguardo no puede dejarse a la voluntad de su titular, bien porque involucren un derecho fundamental, como es la vida o la libertad, o derechos de trabajadores, ejidatarios, comuneros, menores e incapaces, o bien, facultades de las entidades de gobierno que litiguen la acción de controversia constitucional, o las posturas de las minorías legislativas y demás entidades que pueden plantear acciones de inconstitucionalidad; derechos, facultades o posturas cuyas correspondientes normas reguladoras disponen su irrenunciabilidad, ampliándose esta situación al derecho del quejoso de no ser sujeto de aplicación de leyes declaradas inconstitucionales por jurisprudencia de la Suprema Corte.

Las instituciones a preservarse así, son derechos que trascienden no sólo a la esfera particular de su titular, sino que revisten el orden público en que jurídicamente se sustenta nuestro Estado y sistema de derecho; luego, es claro que buscando un común denominador de los supuestos que originaron instituir la suplencia de la deficiencia de la queja, lo encontramos, precisamente, en ese orden público, y bajo este mismo denominador, por existir la misma razón, debemos entender la operancia de suplir la queja, no sólo bajo los supuestos en que ahora lo exigen los artículos 76 bis, 227 de

la Ley de Amparo y 39, 40 y 71 de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución General de la República, pues en todo litigio hay cuestiones, tanto procedimentales como sustantivas, que la ley o la jurisprudencia señalan que revisten carácter de orden público, como es el caso del análisis de los elementos de procedencia de la acción (6), y que, por lo mismo, su vigencia no debe dejarse expuesta a la renuncia expresa de su titular o a la renuncia implícita derivada de una nula o deficiente alegación o actuación en el juicio, por lo que cuando ésta se dé, deberá ser la suplencia de la deficiencia de la queja la que restituya la vigencia de ese orden, en cuya preservación -por ser público- el pueblo está interesado, sin importar la materia sobre la cual se proyecte (7).

El orden público es así -a mi entender- el interés que debe tutelar el legislador, tanto a nivel constitucional, como ordinario, y por ello su atención se debe prever como obligación del juez en todas las materias, pues, incluso, bajo la actual legislación, el supuesto "violaciones manifiestas de la ley, que dejen sin defensa al quejoso", con el cual la fracción VI del artículo 76 de la Ley de Amparo regula uno de los casos en que debe suplirse la deficiencia de la queja, debe entenderse en el sentido de que tales violaciones estén vinculadas con cuestiones, procedimentales o sustantivas, que revistan el carácter de orden público y sólo no habrán de atenderse, cuando el silencio en el juicio afecte derechos renunciables por ser del exclusivo interés particular de quien los ostente o reclama, pues, en este caso, tal silencio o falta de defensa deberá surtir sus consecuencias procesales y sustantivas y no deberá ser objeto de atención en suplencia de queja, toda vez que ese interés particular no se encuentra tutelado por la institución supletoria que se ha tratado.

Tal interpretación la auspicia el imperativo contenido en el artículo 133 de la Constitución General de la República, que, en lo conducente, impone a los jueces del fuero común la obligación de aplicar dicha Constitución y sus leyes reglamentarias, por encima de las leyes estatales, cuando ésta se contraponga a aquellas normas fundamentales (8). Criterio parecido fue atendido por la antes Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aun cuando se vio limitado al caso de controversias civiles en que se involucraron derechos de menores, y se apoyó, sustancialmente, más que en la aplicación del artículo 133 de la Constitución, en la circunstancia de que las "normas de la Ley de Amparo no sólo son reglamentarias de los artículos 103 y 107 Constitucionales, sino de todas las garantías individuales y por lo mismo, son de superior jerarquía de las disposiciones del Código Procesal del Distrito y de las Entidades Federativas, debiendo acatarse preferentemente sus preceptos" (9).

Mantener la suplencia de la queja en los ámbitos limitados en que ahora se aplica, lleva a establecer, sin justificación alguna, un orden público "de primera categoría" y un orden público "de segunda categoría". Este último, lo es aquél que, no obstante ser tal, orden público, no merece de especial resguardo por el juzgador, con su correspondiente detrimento.

Por otro lado, justificar lo anterior con el argumento de que implicaría que la pericia del juzgador sustituyera a la del abogado, solapándose así la abulia y negligencia de éste; esto, no puede ser justificativo de no atender la suplencia de la queja siempre que medie una cuestión de orden público, ya que además de que ésta ya se tutela expresamente en ciertas materias y

con esto se puede ya estar propiciando tal abulia e irresponsabilidad, sin embargo, no ha sido obstáculo para suplir la deficiencia de la queja, pues con justa razón se estima que la impericia del abogado no puede provocar el sacrificio del derecho de su cliente y, cabe preguntar, si no debe esto prevenirse en todo litigio?, pues, de no hacerse así, no solamente estaríamos hablando de un orden público de primera o segunda categoría, sino también, de justiciables bajo esa doble e inequitativa clasificación; debe, en todo caso, dejarse al litigante el resguardo de su dignidad profesional al procurar que sus argumentos no requieran de ser reparados por la autoridad judicial.

Se puede entender también que la aplicación que hasta ahora se ha hecho de la suplencia de la queja a favor sólo de ciertos sujetos de la población, corresponde a la necesidad de igualar su status jurídico frente al de contrarios mas poderosos, económica, cultural e intelectualmente hablando, o bien, para salvaguardar derechos fundamentales del hombre como la vida, la libertad, la dignidad, sin embargo, cabe también preguntar, si no en la actualidad esas diferencias de status jurídicos o esa salvaguarda del derecho fundamental a la vida digna, a la libertad física, económica e intelectual, no se presenta también en los litigios de deudores, de inquilinos, de ocupantes, de predios sin título que aspiran a una vivienda indispensable, en los derechos del cónyuge maltratado, del causante ante la autoridad fiscal?; en fin, no hay litigio que no proyecte cuestiones de orden público.

Encuadrar o enlistar, limitadamente, los supuestos de suplencia de la queja, implica discriminación e injustificada desatención de los no incluidos,



por lo que ideal sería que se legislara, en rango constitucional, que la suplencia de la queja debe atenderse siempre que se dé una cuestión de orden público, pues además, ello impediría que la jurisprudencia deba de hacer encuadramientos casuistas como el del criterio que se anotó respecto de la obligación de los jueces de los estados de suplir la deficiencia de la queja en asuntos de menores, aun cuando la legislación estatal no lo autorice, por estimarse en dicho criterio que la Constitución regula las garantías individuales y que por ello debe entenderse que las leyes estatales deben acatar lo dispuesto en una ley reglamentaria de nuestra Carta Magna (10).

Lo anterior puede encontrar apoyo en lo dispuesto en el artículo 133 de nuestra Ley Fundamental, que señala el principio de "supremacía constitucional", pero, insisto, tal interpretación se aprecia casuista y, sin duda, cuestionable para algunos escépticos respecto del "control difuso" de nuestra Constitución, que ese precepto auspicia. Lo ideal, como ya señalé, sería elevar a rango constitucional la sencilla regla de que **TODO JUZGADOR, EN CUALQUIER INSTANCIA PROCESAL O COMPETENCIAL, DEBE SUPLIR LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA SIEMPRE QUE MEDIE UNA CUESTIÓN DE ORDEN PÚBLICO.**

Por último, estimo que la aplicación de la suplencia de la queja no compromete la igualdad procesal de las partes, en virtud de que **EL PROCEDIMIENTO NO DEBE APRECIARSE COMO UN MEDIO PARA DILUCIDAR QUIEN LITIGA MEJOR, SINO PARA DEFINIR A QUIEN LE ASISTE EL DERECHO**, y esta definición, al darse en un medio que exige que se respete y salvaguarde el orden público, aun supliendo para esto la

queja, es indudable que se proyectará mas confiable que la definición que se emite cerrando los ojos ante la vulneración de dicho orden, propiciada por la torpeza o ignorancia de uno de los litigantes. En relación con esto cabe acoger la conclusión a que arriba la Señora Ministra Olga María del Carmen Sánchez Cordero García Villegas, en su ensayo "El principio de estricto Derecho" (11), cuando sostiene: "EL PRINCIPIO DE ERICTO DERECHO NACE COMO UNA EXCEPCIÓN A LA REGLA GENERAL, HOY, DE FORMA DESNATURALIZADA SE HA CONVERTIDO EN LA REGLA GENERAL LO QUE NACIÓ COMO UNA EXCEPCIÓN." (Pedro F. Reyes Colín, Tomo I, páginas 576 a 582)

---

Se propone que el anterior precepto se reforme, para que quede de la siguiente manera: Artículo 76 bis. -

"Las Autoridades que conocen del Juicio de Amparo en cualquier materia deberán suplir la deficiencia de los conceptos de violación de la demanda, así como la de los agravios formulados en los recursos que esta ley establece, siempre que medie una cuestión de orden público".

Asimismo, y por su relación con el anterior precepto, propongo la reforma al Artículo 227 de la misma Ley de Amparo, contenido en el LIBRO SEGUNDO (Del Amparo en Matena Agrana), TITULO UNICO, Capitulo Unico, que es del siguiente texto actual

"Art. 227.- Deberá suplirse la deficiencia de la queja y la de exposiciones, comparecencias y alegatos, en los juicios de amparo en que

sean parte como quejoso o como terceros, las entidades o individuos que menciona el artículo 212; así como en los recursos que los mismos interpongan con motivo de dichos juicios”.

Propongo que el anterior artículo se reforme para quedar, como sigue:

“Art. 227.- Deberá suplirse la deficiencia de la queja en los términos que señala el Artículo 76 bis de la presente Ley” (conforme a reforma propuesta). (Pedro Fernando Reyes Colin, Tomo II, páginas 756 y 757)

---

**EN EL JUICIO DE AMPARO LA SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA DEBE ATENDERSE EN TODA INSTANCIA Y MATERIA, SIEMPRE QUE MEDIE UNA CUESTION DE ORDEN PUBLICO. (1)**

La aseveración que da título a este trabajo expone la manera en que - en mi opinión- se debe entender y se debe aplicar la suplencia de la deficiencia de la queja, pues sólo así quedará satisfecho el interés tutelado por esta institución procesal, cuya atención, antes de las últimas reformas que a este respecto se hicieron a la Ley de Amparo (2), se encontraba prevista como una facultad discrecional del juzgador de amparo en materia penal y en favor de la parte obrera en materia laboral, y sólo se preveía como obligatoria cuando el acto reclamado se fundara en leyes declaradas inconstitucionales por la Jurisprudencia de la Suprema Corte o cuando figuraran como quejosos los menores de edad o incapaces (3), así como en materia agraria en los juicios en

- (1) El presente ensayo amplía el publicado por su autor en el Boletín de Información Judicial del Estado de Sonora, Número 1. Mayo 1989. Sexta Epoca. H. Supremo Tribunal de Justicia. Hermosillo, Sonora.
- (2) Decreto de 26 de abril de 1986, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 20 de mayo de 1986, que reformó, entre otros, el artículo 76 y creó el 76 Bis.
- (3) "Art. 76 .- Cuando el acto reclamado se funde en leyes declaradas inconstitucionales por la Jurisprudencia de la Suprema Corte, los funcionarios que conozcan del amparo deberán suplir la deficiencia de la queja, ajustándose a los plazos que señalan los artículos 156 y 182 Bis de esta Ley.

Podrá también suplirse la deficiencia de la queja, en materia penal y la de la parte obrera en materia de trabajo, cuando se encuentre que ha habido en contra del agraviado una violación manifiesta de la ley que lo ha dejado sin defensa, y en materia penal, además, cuando se le haya juzgado por una ley que no es exactamente aplicable al caso.

Deberá suplirse la deficiencia de la queja en los juicios de amparo en que los menores de edad o los incapaces figuren como quejosos" (Texto anterior a la reforma que entró en vigor el 4 de junio de 1986).

que eran parte, como quejosos o como terceros, los medios de población ejidal o comunal, los ejidatarios y comuneros en sus derechos agrarios, así como en su pretensión de derechos a quienes pertenecían a la clase campesina (4).

La Reforma de 1986, con buen criterio, estableció como obligatorio, para las autoridades que conozcan del juicio de amparo, suplir la deficiencia de los conceptos de violación de la demanda, así como la de los agravios formulados en los recursos que establece la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, en los siguientes casos: "Art. 76 Bis. Las autoridades que conozcan del juicio de amparo deberán suplir la deficiencia de los conceptos de violación de la demanda, así como la de los agravios formulados en los recursos que esta ley establece, conforme a lo siguiente: I.- En cualquier materia, cuando el acto reclamado se funde en leyes declaradas inconstitucionales por la Jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia.- II.- En materia penal, la suplencia operará aun ante la ausencia de conceptos de violación o de agravios del reo.- III.- En materia agraria, conforme a lo dispuesto por el artículo 227 de esta Ley.- IV.- En materia laboral, la suplencia sólo se aplicará en favor del trabajador. V.- En favor de los menores de edad o incapaces. VI.- En otras materias, cuando se advierta que ha habido en contra del quejoso o del particular recurrente una violación manifiesta de la ley que lo haya dejado sin defensa" (Texto vigente a partir del 4 de junio de 1986).

- (4)        \*Art. 212 primer párrafo. Con la finalidad de tutelar a los núcleos de población ejidal o comunal y a los ejidatarios y

comuneros en sus derechos agrarios, así como, en su pretensión de derechos, a quienes pertenezcan a la clase campesina, se observarán las disposiciones del presente Libro Segundo en los siguientes juicios de amparo."

"Art. 27. Deberá suplirse la deficiencia de la queja y la de exposiciones, comparecencias y alegatos, en los juicios de amparo en que sean parte como quejosos o como terceros, las entidades o individuos que menciona el artículo 212; así como en los recursos que los mismos interpongan con motivo de dichos juicios."

Así mismo, la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución General de la República, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 11 de mayo de 1995, estableció la suplencia de la deficiencia de la queja en el dictado de las resoluciones que se emitan, tanto en la acción de controversia constitucional como en la de inconstitucionalidad (5).

Ahora bien, para entender y aplicar una institución, es menester entender su razón de ser, y si se ven los supuestos bajo los cuales ha venido operando la suplencia de la queja, se aprecia que con ella se busca la preservación de instituciones cuyo resguardo no puede dejarse a la voluntad de su titular, bien porque involucren un derecho fundamental, como es la vida o la libertad, o derechos de trabajadores, ejidatarios, comuneros, menores e incapaces, o bien, facultades de las entidades de gobierno que litiguen la acción de controversia constitucional, o las posturas de las minorías legislativas y demás entidades que pueden plantear acciones de

inconstitucionalidad; derechos, facultades o posturas cuyas correspondientes normas reguladoras disponen su irrenunciabilidad, ampliándose esta situación al derecho del quejoso de no ser sujeto de aplicación de leyes declaradas inconstitucionales por jurisprudencia de la Suprema Corte.

**(5) Controversia Constitucional.**

"Art. 39. Al dictar sentencia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación corregirá los errores que advierta en la cita de los preceptos invocados y examinará en su conjunto los razonamientos de las partes a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada.

"Art. 40. En todos los casos la Suprema Corte de Justicia de la Nación deberá suplir la deficiencia de la demanda, contestación, alegatos o agravios."

**Acción de Inconstitucionalidad.**

"Art. 71. Al dictar sentencia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación deberá corregir los errores que advierta en la cita de los preceptos invocados y suplirá los conceptos de invalidez planteados en la demanda. La Suprema Corte de Justicia de la Nación podrá fundar su declaratoria de inconstitucionalidad en la violación de cualquier precepto constitucional, haya o no sido invocado en el escrito inicial."

Las instituciones a preservarse así, son derechos que trascienden no sólo a la esfera particular de su titular, sino que revisten el orden público en que jurídicamente se sustenta nuestro Estado y sistema de derecho; luego,

es claro que buscando un común denominador de los supuestos que originaron instituir la suplencia de la deficiencia de la queja, lo encontramos, precisamente, en ese orden público, y bajo este mismo denominador, por existir la misma razón, debemos entender la operancia de suplir la queja, no sólo bajo los supuestos en que ahora lo exigen los artículos 76 bis, 227 de la Ley de Amparo y 39, 40 y 71 de la Ley Reglamentaria de la fracción I y II del artículo 105 de la Constitución General de la República, pues en todo litigio hay cuestiones, tanto procedimentales como sustantivas, que la ley o la jurisprudencia señalan que revisten carácter de orden público, como es el caso del análisis de los elementos de procedencia de la acción (6), y que, por lo mismo, su vigencia no debe dejarse expuesta a la renuncia expresa de su titular o a la renuncia implícita derivada de una nula o deficiente alegación o actuación en el juicio, por lo que cuando ésta se dé, deberá ser la suplencia de la deficiencia de la queja la que restituya la vigencia de ese orden, en cuya preservación -por ser público- el pueblo está interesado, sin importar la materia sobre la cual se proyecte (7).

- (6) "Acción. Estudio Oficioso de su Improcedencia. La improcedencia de la acción por falta de uno de sus requisitos esenciales, puede ser estimada por el juzgador, aun de oficio, por ser de orden público el cumplimiento de las condiciones requeridas para la procedencia de dicha acción". Quinta Epoca. Tercera Sala. Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985. Pág. 11. Tesis No. 3.

- (7) "La estimación del orden público puede estar



expresamente señalada por la ley, por la jurisprudencia, o por el propio juzgador respecto a la naturaleza de la norma jurídica que deba atender" (Jurisprudencia 193. Apéndice al Semanario Judicial de la Federación. 1917-1985. Sección Común al Pleno y a las Salas. Pág. 314).

El orden público es así -a mi entender- el interés que debe tutelar el legislador, tanto a nivel constitucional, como ordinario, y por ello su atención se debe prever como obligación del juez en todas las materias, sólo no habrán de atenderse, cuando el silencio en el juicio afecte derechos renunciables por ser del exclusivo interés particular de quien los ostente o reclama, pues, en este caso, tal silencio o falta de defensa deberá surtir sus consecuencias procesales y sustantivas y no deberá ser objeto de atención en suplencia de queja, toda vez que ese interés particular no se encuentra tutelado por la institución supletoria que se ha tratado.

Mantener la suplencia de la queja en los ámbitos limitados en que ahora se aplica, lleva a establecer, sin justificación alguna, un orden público "de primera categoría" y un orden público "de segunda categoría". Este último, lo es aquél que, no obstante ser tal, orden público, no merece de especial resguardo por el juzgador, con su correspondiente detrimento.

Por otro lado, justificar lo anterior con el argumento de que implicaría que la pericia del juzgador sustituyera a la del abogado, solapándose así la abulia y negligencia de éste, esto, no puede ser justificativo de no atender la suplencia de la queja siempre que medie una cuestión de orden público, ya que además de que ésta ya se tutela expresamente en ciertas materias y

con ésto se puede ya estar propiciando tal abulia e irresponsabilidad, sin embargo, no ha sido obstáculo para suplir la deficiencia de la queja, pues con justa razón se estima que la impericia del abogado no puede provocar el sacrificio del derecho de su cliente y, cabe preguntar, si no debe ésto prevenirse en todo litigio?, pues, de no hacerse así, no solamente estaríamos hablando de un orden público de primera o segunda categoría, sino también, de justiciables bajo esa doble e inequitativa clasificación; debe, en todo caso, dejarse al litigante el resguardo de su dignidad profesional al procurar que sus argumentos no requieran de ser reparados por la autoridad judicial.

Se puede entender también que la aplicación que hasta ahora se ha hecho de la suplencia de la queja a favor sólo de ciertos sujetos de la población, corresponde a la necesidad de igualar su status jurídico frente al de contrarios mas poderosos, económica, cultural e intelectualmente hablando, o bien, para salvaguardar derechos fundamentales del hombre como la vida, la libertad, la dignidad; sin embargo, cabe también preguntar, si no en la actualidad esas diferencias de status jurídicos o esa salvaguarda del derecho fundamental a la vida digna, a la libertad física, económica e intelectual, no se presenta también en los litigios de deudores, de inquilinos, de ocupantes, de predios sin título que aspiran a una vivienda indispensable, en los derechos del cónyuge maltratado, del causante ante la autoridad fiscal?; y qué decir de la inseguridad a que se enfrenta a la sociedad entera cuando, en aras del estricto derecho con que se atienden los agravios del Ministerio Público, se confirma la libertad de delincuentes que, de permitirse suplir la deficiencia de los argumentos de la Representación Social, conllevaría a revocar la resolución que los pone en

la calle con impunidad y ante la indefensión de la sociedad a quien la ley y la justicia deben de resguardar.

Encuadrar o enlistar, limitadamente, los supuestos de suplencia de la queja, implica discriminación e injustificada desatención de los no incluidos, por lo que ideal sería que se estableciera, en rango constitucional y, por lo pronto, en la Ley de Amparo, que LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEBE ATENDERSE EN TODA INSTANCIA Y MATERIA, SIEMPRE QUE MEDIE UNA CUESTION DE ORDEN PUBLICO, pues además, ello impediría que la jurisprudencia deba de hacer encuadramientos casuistas.

Por último, estimo que la aplicación de la suplencia de la queja no compromete la igualdad procesal de las partes, en virtud de que EL PROCEDIMIENTO NO DEBE APRECIARSE COMO UN MEDIO PARA DILUCIDAR QUIEN LITIGA MEJOR, SINO PARA DEFINIR A QUIEN LE ASISTE EL DERECHO, y esta definición, al darse en un medio que exige que se respete y salvaguarde el orden público, aun supliendo para ésto la queja, es indudable que se proyectará mas confiable que la definición que se emite cerrando los ojos ante la vulneración de dicho orden, propiciada por la torpeza o ignorancia de uno de los litigantes. En relación con ésto cabe acoger la conclusión a que arriba la Señora Ministra Olga María del Carmen Sánchez Cordero García Villegas, en su ensayo "El principio de Estricto Derecho" (11), cuando sostiene: "EL PRINCIPIO DE ERICTO DERECHO NACE COMO UNA EXCEPCION A LA REGLA GENERAL, HOY, DE FORMA DESNATURALIZADA SE HA CONVERTIDO EN LA REGLA GENERAL LO QUE NACIO COMO UNA EXCEPCION."

No puede pensarse que la manera en que actualmente se regula la intención de igualar las fuerzas en litigio en favor de quienes, por su ámbito de cultura, social, económico, de salud, o de edad, no cuentan originariamente con ese ambiente de equidad, pueda llevar, vía suplencia de la queja, a permitir la desatención del orden público, pues éste, se insiste, es el sustento de todo régimen de derecho y no es dable que un afán de equidad, sustento a su vez de la justicia, lleve a quebrantar una institución a la que ambas, equidad y justicia, están para servir.

- (11) "Revista del Instituto de la Judicatura Federal.-  
Número 4, junio de 1999, Pág. 373-398. Cita en pág. 388,  
primer párrafo.

- NO SE PROPONE SUPLIR LA VOLUNTAD DE ACCIONAR O  
RECURRIR.

-NO SE PROPONE SUPLIR LA DEFICIENCIA DE LA PRUEBA.

-SE PROPONE, SOLAMENTE, QUE: "SE SUPLA LA DEFICIENCIA  
DE LA QUEJA EN LOS JUICIOS DE AMPARO, EN CUALQUIER MATERIA  
Y EN TODA INSTANCIA, SIEMPRE QUE MEDIE UNA CUESTION DE  
ORDEN PUBLICO." (Pedro Fernando Reyes Colln, Tomo II, páginas 758  
a 768)

---

Permite, en el Párrafo Segundo de la Fracción II, que la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, que es la Ley de amparo, prevenga sobre la suplencia de la deficiencia de la queja, lo que ha producido el injusto efecto de que en el artículo 76 Bis, de la ley de Amparo, se limite injustamente la suplencia de la queja a casos especiales y no a todas las materias, como debe ser el espíritu de la Constitución, pervertido por la Ley Reglamentaria; porque al final, cuando a través de un juicio de garantías en el que el quejoso teniendo el derecho de ser protegido por la Justicia de la Unión, le es negado a éste el amparo por defectos de la queja, ahí se da, precisamente la restricción de las garantías individuales. (Jorge Arellano Medina, Tomo II, página 803)

---

Respecto al Párrafo Segundo de la misma Fracción II del artículo 107 Constitucional, debe reformarse para que la suplencia de la queja sea general, y no conforme a lo que disponga la Ley Reglamentaria, atendiendo a que conforme a las condiciones económico sociales de la sociedad mexicana, principalmente a los muchos millones que están sujetos a extrema pobreza, existe para éstos la imposibilidad de contratar un abogado, sobre todo que conozca del "elitista juicio de amparo", como lo establece nuestra actual e injusta legislación.

Con tristeza vemos en las listas de acuerdos de ellos Tribunales Federales que conocen de juicios de amparo, que la mayoría de éstos se sobrean, algunos se niegan, y un mínimo porcentaje se conceden casi siempre para efectos. Como vemos el espíritu de casi todos los Tribunales

de Amparo, es desechar demandas, o de inventar causas de sobreseimiento, para nunca conocer el fondo de los negocios, situación que produce inevitablemente denegación de justicia y la restricción de las garantías individuales, por defecto de la Ley y de quienes la aplican.

Nace la necesidad entonces de que la suplencia de la queja sea general y no limitada, y que además, que el quejoso cuente con asesoría jurídica, por lo que el Párrafo Segundo de la Fracción II del artículo 107 de la Constitución, debe reformarse para decir: *"en el juicio de amparo y en todos los casos deberá suplirse la deficiencia de la queja y el agraviado contará con asesoría jurídica adecuada"*.

Y a fin de quitar el juicio de amparo el carácter de elitista, con el propósito también de evitar la denegación de justicia por parte de los Tribunales de Amparo, debe adicionarse a la Fracción mencionada un párrafo que diga: "En la demanda de amparo bastará que se señale a la autoridad o autoridades responsables, en el acto que se reclame en cada autoridad, el tercero o terceros perjudicados y el domicilio de éstos, si el agraviado los conociera, para que el Juez de Distrito, los Tribunales Colegiados de Circuito, o la Suprema Corte de Justicia, según sea el caso y el estado del juicio, proceda, existiendo el interés jurídico del quejoso, a estudiar si el acto o actos que se reclaman de la autoridad son violatorios de las garantías individuales, y en tal condición, a amparar y proteger al agraviado en contra de dichos actos. Queda a cargo de la autoridad responsable y bajo su más estricta responsabilidad, informar sobre la existencia de terceros perjudicados y del domicilio de éstos cuando la

demanda sea omisa, así como para remitir todos los documentos y pruebas que tuviere relativos al acto reclamado o que sean antecedentes al mismo."

Esa adición, bien puede hacerse y para los mismos fines en la Ley de Amparo, si se estima que no deba ser reformada para ese efecto la Constitución, con el fin de evitar los nocivos efectos producidos por el desechamiento de demandas, sobreseimientos de amparos y negativas de concesión de amparo, en casos que debe protegerse al gobernado. (Jorge Arellano Medina, Tomo II, páginas 805 a 807)

---

Deben reformarse a su vez los artículos 76 Bis y 116, de la Ley de Amparo, a fin de hacer más sencilla la formación de la demanda de amparo y no dar lugar a que por defectos de ésta, o de la queja, se niegue al quejoso el amparo y protección de la justicia federal, cuando a éste le han sido violadas las garantías individuales.

A fin de garantizar el fiel cumplimiento del artículo 1º Constitucional, la reforma al artículo 76 bis, de la Ley de amparo, podría ser en los siguientes términos: "Las autoridades que conozcan del juicio de amparo deberán suplir en todos los casos la deficiencia de los conceptos de violación de la demanda, y aún la ausencia de los mismos cuando el acto reclamado indicado por el quejoso sea violatorio de las garantías individuales de éste; debiendo suplir también la deficiencia de los agravios formulados en los recursos que esta ley establece". Con ello se lograría, que el juicio de amparo esté, como debe ser, al alcance de todo individuo en la República Mexicana. (Jorge Arellano Medina, Tomo II, página 812)

---

6. Propongo reformar totalmente el artículo 76 bis de la Ley de Amparo, a fin de que la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación de la demanda de garantías, así como la de los agravios formulados en los recursos que establece la propia Ley, opere en absolutamente todas las materias, y que se reserve el principio de estricto derecho exclusivamente a cargo de la autoridad responsable; e igualmente que la jurisprudencia definida que declare la inconstitucionalidad de una ley, se comunique al órgano legislativo responsable, a fin de que de inmediato derogue la ley reclamada.

Planteo la propuesta anterior, en relación a la suplencia, porque desgraciadamente como puede constatarse en multitud de ejecutorias pronunciadas en el juicio de amparo, los tribunales de la Federación inopinadamente aplican la suplencia más allá de un mero arbitrio discrecional, y sin limitarse a los casos verdaderamente manifiestos, se sustituyen a las autoridades responsables y rebasan la soberanía de éstas sobre todo en la estimación y valoración de las pruebas, y despojan arbitrariamente de sus efectos jurídicos a resoluciones en materia civil, mercantil, laboral, pronunciadas en juicios en los que en realidad no hay violaciones manifiestas que suplir, ni las partes litigantes han estado nunca en estado de indefensión, lo cual se traduce en verdaderos perjuicios para los interesados, contrapartes de los favorecidos con la suplencia. (Bulmaro Corral Rodríguez, Tomo II, páginas 876 y 877)



### **Restauración del principio de estricto derecho.**

Hubo un tiempo en que rigió en el amparo la norma de que los conceptos de violación y los agravios formulados por el quejoso, no podían completarse por el juez, quien por tanto, no podría suplir la queja, salvo la llamada suplencia del error en la cita. Más tarde en una reforma a la Ley de Amparo a iniciativa de Miguel Alemán, se agregaron al artículo 76 un segundo y un tercer párrafo, para que pudiera suplirse la deficiencia de la queja cuando se fundara el acto reclamado en leyes dictadas inconstitucionales por la Suprema Corte, en materia penal y la de la parte obrera en materia laboral, reforma motivada por otra hecha al artículo 107 constitucional. La reforma al artículo 76 se publicó en el Diario Oficial del 19 de febrero de 1951. Posteriormente se volvió a reformar la fracción II del 107 de la Constitución, para adicionarle un párrafo final, que ordenaba la suplencia de la deficiencia de la queja en materia agraria. La reforma al artículo 76 se publicó en el Diario Oficial del 4 de febrero de 1962. Más tarde se agregó al artículo 91 de la Ley de Amparo la fracción VI, facultando a los Tribunales a suplir la deficiencia de la queja en el juicio de amparo que se promoviera contra actos que afectaran los derechos de los menores o de los incapaces esta reforma se publicó el 23 de diciembre de 1974.

Por último, los diversos casos de suplencia de la queja se reunieron en el artículo 76 bis, por reforma publicada en el Diario Oficial del 20 de mayo de 1986.

Debo hacer una observación para demostrar el descuido con el que se ha reformado la Ley de Amparo. En diciembre de 1974 se publicó un

decreto agregando una fracción VI al artículo 91 de la ley, para suplir la queja en los amparos promovidos por menores e incapaces, con el efecto señalado en el artículo 78 último párrafo, que en la misma fecha se agregó y que disponía que se tendría como actos reclamados los que afectarían sus derechos, aun cuando no se expresaran en la demanda. En reforma de mayo de 1986 se eliminó el párrafo sobre los actos reclamados, pero se dispuso la aportación oficiosa de pruebas en los amparos promovidos por menores e incapaces.

Finalmente, en enero de 1988 se publicó una última reforma, para que el artículo 78 quedara como hoy se encuentra; pero el artículo 91, fracción VI, sólo se modificó en mayo de 1976, para facultar a los Tribunales Colegiados y a la Suprema Corte a suplir la queja en los amparos de menores e incapaces, en los términos del tercer párrafo del artículo 78, que ya nada dice al respecto.

Este descuido y otros más que existen en la ley han originado preceptos fuera de lugar, repeticiones, contradicciones, que hay que eliminar.

La razón de estas reformas, cuando menos la razón confesada, es la protección de aquellos grupos humanos que se estima que están más desprotegidos, como los campesinos, los obreros, los menores e incapaces, cuya inclusión en la suplencia de la queja se debió a que se celebraría el año del niño y el Presidente Echeverría quería poder decir ante el mundo, que tenía la legislación más adelantada para la protección de los menores. La suplencia de la queja se incluye en la Constitución y en la ley para

ayudar a quienes no habían sabido pedir el amparo. Y cabe preguntar ¿y que pasa con los que no lo pidieron?

En materia penal la suplencia a favor del reo ha sido tradicional en México, ante el hecho de que la mayoría de los que se encuentran en prisión pertenecen a los grupos humanos más depauperados y más ignorantes.

Finalmente, la suplencia de la queja en leyes reclamadas inconstitucionales, más que suplir la queja, es una manera tímida de darle efectos generales a la jurisprudencia de la Suprema Corte, que declara inconstitucional una norma general. Y digo tímida, porque para que esta fracción I del artículo 76 bis se aplique se requiere, necesariamente, presentar una demanda de amparo, por lo que no favorece a quienes no la presentan, produciendo – de nuevo – desigualdad.

En términos generales la suplencia propende a la protección de los grupos humanos que, real o supuestamente, son desprotegidos. En principio pudiera parecer válido requerir el auxilio del Juez para ayudar al quejoso, supliendo deficiencias, alegándose, además, que el amparo es técnico; que es coto cerrado de especialistas caros, por lo que no está al alcance de obreros, campesinos y, en general, de quienes no tienen muchos recursos.

No puede negarse que hay mucho de razón en lo que se afirma para sostener la pertinencia de la suplencia de la queja; pero lo cierto es que para resolver esos problemas se escogió un camino equivocado. Para

resolver un mal se creo otro mal, si cabe, más grave. Todos los tratadistas; todos los abogados postulantes; todos aquellos que realmente estudian el problema de los Tribunales, coinciden en que éstos deben de ser independientes y en que el Juez debe de ser imparcial, insistiendo en que no puede tomar partido; en que no puede inclinarse, ni a una parte ni a la otra; de ahí que en todos los códigos procesales de México, una de las causas de recusación o de excusa de los jueces, sea el hecho de que alguna de las partes sea su pariente o que reciba regalos o que, de alguna manera, se incline a una de las partes. Es decir, la ley procura salvaguardar la imparcialidad del Juez.

La suplencia de la queja termina con tal imparcialidad, porque se obliga al Juez a buscar razones para defender a una de las partes, alegándose su pobreza, su marginalidad, su falta de conocimientos; pero al obligar al juez de esa manera, lo único que ocurre es que pierde imparcialidad en mayor o en menor grado. Y cabe preguntar ¿la suplencia de la queja será aplicada en forma aséptica, cuando realmente proceda? o tal vez así ocurra al principio, pero más tarde puede suplirse la queja por intereses bastardos, pues la suplencia obedece a motivaciones subjetivas, en ocasiones sin apoyo en elementos objetivos.

Atento el hecho de que el Juez pierde imparcialidad es evidente que debe eliminarse la suplencia de la queja. Y no se crea que esto que digo es una ocurrencia, ¿qué imparcialidad tiene un juez obligado a cumplir con el artículo 225 de la Ley de Amparo? Este precepto obliga al Juez a recabar todas las pruebas que puedan beneficiar a los campesinos, a contrario sensu, no recabará las pruebas que los desfavorezcan y si la prueba

favorece a un pequeño propietario o alguno otro tercero perjudicado, contrario al grupo campesino. ¿No se tomará en cuenta? ¿Y esto no significa tomar partido?

Siempre ha sido un principio que deben observar todos los tribunales: que sólo deben resolver los asuntos sometidos a su consideración y exclusivamente ellos, sin poder resolver ni más ni menos, principio que se conoce con el nombre de principio de congruencia; pero el artículo citado faculta al Juez, si es a favor de los campesinos, a conceder el amparo por actos que no han sido reclamados, lo que significa que la suplencia de la queja puede llevar a sentencias injustas y destruye la seguridad y el orden jurídico y, lo que es muy grave, desnaturaliza la labor de los Jueces. Disposiciones como éstas permiten fallar, de hecho lo hacen, con un auténtico subjetivismo. En relación con este punto, y para subrayar los errores de la suplencia, les pongo a mis alumnos el siguiente ejemplo: Si en un juego de fútbol, sobre todo en aquellos en los cuales los contendientes son verdaderos adversarios, el arbitro, en lugar de sujetarse a reglas dirige el juego a su capricho, lo único que va a ocurrir, y así ha ocurrido, es que se desaten verdaderos motines, como ocurrió hace muchos años con una decisión arbitral, que motivó que fuera quemado el parque Asturias.

Sin embargo queda vivo el problema del acceso a la justicia. Es cierto que hay quienes no pueden por ignorancia, por pobreza, por marginalidad, presentarse en un juicio. La solución que con más o menos perfección se ha adoptado, es que el Estado proporcione una asesoría gratuita a quienes no pueden pagar un abogado, en especial en materia penal.

En México, hasta donde yo se, esa asesoría la proporciona el DIF en materia familiar, las Procuradurías de la Defensa del Trabajo, en materia laboral; las defensorías de oficio en materia penal y ahora los asesores jurídicos y defensores de oficio del Poder Judicial Federal que prestan su servicios en la defensa de reos y en asesorar en otro tipo de juicios.

La queja generalizada es que esos organismos son ineficaces y que a la postre, se dice, cuestan dinero, porque de una manera o de otra, solicitan dinero a quienes acuden ante ellos, por lo que no hay un servicio estrictamente gratuito. Y esto lo he oído en especial de la defensoría de oficio del fuero común.

A pesar de ello, lo cierto es que ese es el medio para que, quienes no puedan pagar a un abogado, lo tengan; pero en México esta institución, como tantas otras, no funciona como debiera funcionar por varios motivos, entre los que se encuentran, los sueldos misérrimos que se otorgan a los defensores de oficio, que además tienen un exceso de trabajo; la ignorancia o incapacidad de quienes aceptan un cargo de ese tipo el nulo apoyo que tienen. Sin embargo, en ocasiones, cuando en las Procuradurías de la Defensa del Trabajo quienes las dirigen son auténticos abogados, se defiende, realmente, al trabajador.

Respecto del DIF, me consta que en algunas épocas defendían a los menores y a las mujeres en forma óptima. Por lo que se refiere a los campesinos, hubo épocas en que el CNC defendía y defendía bien a los campesinos. En cuanto a los sindicatos, defienden a sus agremiados con

ventaja, porque además de gozar de la suplencia de la queja, tienen buenos abogados.

En pocas palabras, la suplencia de la queja es un mal remedio adoptado por exceso de populismo y demagogia para resolver el problema del acceso a la justicia, pues no proporciona los medios adecuados para resolver el problema. El Poder Judicial Federal lo está resolviendo mejor: defensores de oficio para la materia penal; asesores jurídicos para otras materias. Y se están escogiendo mejores abogados, pagándoles un estipendio mejor. Y esto es lo que hay que hacer. A ello cabe agregar que no se aprovecha a los estudiantes de derecho. Los médicos, para obtener el grado, requieren trabajar en hospitales, en constante contacto con el enfermo y, posteriormente, deben hacer un auténtico servicio social y el sistema funciona. ¿No podría hacerse lo mismo con los estudiantes de derecho? ¿No podrían formarse equipos dirigidos por abogados capaces, para encargarse de la defensa gratuita de los reos y de la asesoría jurídica para los que acuden a tribunales diversos de los penales? De esta manera se obtienen dos beneficios: uno para el estudiante, porque el abogado, cualquiera que sea la rama o la actividad jurídica a que se dedique en el futuro, debe formarse en los Tribunales. Un beneficio para los grupos humanos marginales o depauperados, que contarían con una mejor atención a sus necesidades.

En conclusión, debe eliminarse la suplencia de la queja tanto del artículo 107, fracción II, párrafos segundo, tercero y cuarto, como del artículo 76 bis de la Ley de Amparo. (Estas razones son validas para eliminar la suplencia en la controversia constitucional y en la acción de

inconstitucionalidad). (Jesús A. Arroyo Moreno, Tomo II, páginas 1032 a 1040)

---

**Enmienda.**

SE DEROGUEN LAS SEIS FRACCIONES TRANSCRITAS PARA QUE QUEDE REDACTADA ESTA PARTE COMO SIGUE: EN TODAS LAS MATERIAS, INDEPENDIENTEMENTE DE LA CALIDAD, CONDICIÓN O ACTIVIDAD DEL QUEJOSO, SIEMPRE QUE DEL CONTENIDO DE LA DEMANDA Y DE LAS PRUEBAS APORTADAS SE DEMUESTRE PLENAMENTE QUE LA AUTORIDAD O AUTORIDADES RESPONSABLES INCURRIERON EN UN ACTO VIOLATORIO DE SUS GARANTÍAS INDIVIDUALES.

**Motivos.**

LA REDACCIÓN ACTUAL DEL PRECEPTO EN COMENTO, EN CUANTO A SUS SEIS FRACCIONES, SIN NEGAR QUE SU RATIO JURIS ESTÁ ORIENTADA A LA CONSECUCIÓN DEL FIN MÁS ELEVADO DEL DERECHO QUE ES LA JUSTICIA, SIN PROPONÉRSELO CONLLEVA UNA GRAVE INJUSTICIA. BIEN ES CIERTO QUE LAS DESIGUALDADES SOCIALES SEÑALAN QUE A LOS MENOS FAVORECIDOS SE LES DEBEN CONCEDER PRERROGATIVAS ADECUADAS, EXCEPCIONALES, SUPERIORES QUE AL RESTO DE LA COMUNIDAD, PERO ESE CAMINO JUSTIFICADO EN OTRAS FUNCIONES DE MANERA PRINCIPAL EN LA ADMINISTRATIVA, RESULTA



IMPRACTICABLE TRATÁNDOSE DE LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL PORQUE AQUÍ TODOS SOMOS IGUALES ANTE LA LEY Y EN ESE PLANO DE IGUALDAD SE DEBEN TRAMITAR Y RESOLVER LOS JUICIOS DE AMPARO. AMPLIAR EL HORIZONTE DE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN DONDE SE ENCUENTRE LA RAZÓN, EN DONDE SE LOCALICE LA JUSTICIA Y SE DEBA APLICAR CON EQUIDAD, ES RETOMAR LA PRIMIGENIA ORIENTACIÓN DEL JUICIO DE AMPARO. PRECISA ACLARAR CATEGÓRICAMENTE QUE NO SE BUSCA SUPRIMIR EL BENEFICIO A DETERMINADAS CLASES SOCIALES, QUE EN LOS TÉRMINOS DE LA ENMIENDA PROPUESTA LO SEGUIRÁN DISFRUTANDO SIEMPRE Y CUANDO LA JUSTICIA LES ASISTA. CUANDO SUCEDA LO CONTRARIO, SE DEBE SUPLIR Y ESTUDIAR PARA QUE LA MISMA SE LE OTORQUE A QUIEN LE CORRESPONDE. EN ESTE PUNTO QUE TOCA UN ASPECTO TORAL, PENSAMOS FUNDADAMENTE QUE ESTO NOS LLEVARÁ A VIVIR EN UN AUTÉNTICO PAÍS DE LEYES. (Fidencio Ramírez y Fidel Herrera Beltrán, Tomo II, páginas 1147 a 1149)

---

#### **MOTIVOS**

#### **ARTICULO 76 BIS.**

La propuesta pretende darle también al ofendido oportunidad de acudir al Juicio de Garantías y para que goce de los mismos beneficios que el reo, por encontrarse en igual desventaja.

**TEXTO CON MODIFICACIÓN**

**ARTICULO 76 Bis.-** Las autoridades que conozcan del juicio de amparo deberán suplir la deficiencia de los conceptos de violación de la demanda, así como la de los agravios formulados en los recursos que esta ley establece, conforme a lo siguiente:

**I.-** En cualquier materia, cuando el acto reclamado se funde en leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia.

**II.-** En materia penal, la suplencia operará aun ante la ausencia de conceptos de violación o de agravios del reo o del ofendido en los casos que proceda el juicio de amparo.

**III.-** En materia agraria, conforme a lo dispuesto por el artículo 227 de esta Ley.

**IV.-** En materia laboral, la suplencia sólo se aplicará en favor del trabajador.

**V.-** En favor de los menores de edad o incapaces.

**VI.-** En otras materias, cuando se advierta que ha habido en contra del quejoso o del particular recurrente una violación manifiesta de la ley que lo haya dejado sin defensa (María Simona Ramos Ruvalcaba, Tomo II, páginas 1414 a 1416)

De lo transcrito, se aprecia que la Ley de amparo establece la suplencia de los conceptos de violación únicamente en las materias penal, agraria y laboral, ésta última sólo a favor del trabajador, y en otras materias, distintas a aquéllas, cuando existan violaciones que dejen sin defensa a los quejosos.

Tomando en consideración la propuesta anterior, en el sentido de derogar el Libro Segundo, del amparo en materia agraria, se propone derogar las fracciones III y IV.

Debiendo entonces quedar el numeral citado con la siguiente redacción:

**Artículo 76 bis.** Las autoridades que conozcan del juicio de amparo deberán suplir la deficiencia de los conceptos de violación de la demanda, así como la de los agravios formulados en los recursos que esta ley establece, conforme a lo siguiente:

I. En cualquier materia, cuando el acto reclamado se funde en leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia;

II. En materia penal, la suplencia operará aún ante la ausencia de conceptos de violación o de agravios del reo;

III. A favor de los menores de edad o incapaces, y

**IV. En todas las materias, cuando se advierta que ha habido en contra del quejoso o del particular recurrente una violación manifiesta de la ley que lo haya dejado sin defensa". (Emilio Alberto Hassey Domínguez, Tomo III, páginas 1612 a 1614)**

---

**Crear una Comisión que analice que no haya abusos por parte de la Autoridad de Amparo, respecto a la figura Jurídica de la suplencia de la demanda de garantías del trabajador ya que en algunas ocasiones se abusa de esta figura. (Héctor Manuel Medrano Hurtado, Tomo III, página 1800)**

---

**Si observamos la estadística de la promoción de amparos, a nivel nacional de 100 amparos que se promueven, se sobreseen un 95 por ciento, y se otorga el uno o dos por ciento, los jueces y secretarios debido a la carga de trabajo, tratan de deshacerse, de estos amparos observando causales de improcedencia, y sobreseyéndose sin estudiar el fondo del asunto, por lo que sugiero que se derogue las causales de improcedencia que señala la ley, en su Capítulo VIII y IX de la Ley de Amparo, proponiendo en su lugar la obligación de estudiar el fondo de la violación en la garantía individual o social por parte de la autoridad jurisdiccional otorgando o negando la protección de la justicia federal, y que la deficiencia de la suplencia de la queja no solo sea en materia, penal agraria, o laboral sino en todas las materias. (Silverio Castañeda Ceballos, Tomo III, página 1990)**

El artículo 76 bis de la Ley de Amparo establece la facultad de que el juzgador supla la queja deficiente en los casos que especifica el propio numeral; sin embargo, de las sentencias en las que se ha aplicado tal principio se advierte que el juzgador sólo invoca el precepto y la fracción correspondiente, sin expresar razonamiento alguno del porqué en el caso específico opera dicha suplencia.

Por lo anterior, se considera de suma importancia adicionar el precepto que se comenta, imponiendo al juzgador el deber de razonar en las sentencias en forma concreta los elementos tomados en cuenta para suplir la queja, con lo cual se da mayor seguridad jurídica a las partes y se evita la promoción de recursos por cuestiones meramente formales que en muchos casos implican un retraso en la administración de justicia. (Olga Hernández Espíndola, Tomo III, páginas 2065 y 2066)

---

Otro punto importante, relacionado con el control constitucional, es el relativo al de la suplencia de la queja, y si este se debe extender a todas las materias o eliminar el amparo de estricto derecho tal como hasta ahora se le conoce.

Nuevamente las diversas interpretaciones realizadas a través de las jurisprudencias, que se le han dado al artículo 76 de la Ley de Amparo, para regular la suplencia de la queja, ha generado problemas que han tenido que ser resueltos por los Tribunales Colegiados y la Suprema Corte, en muchas ocasiones en forma contradictoria, todo esto generado por una indebida redacción.

Quizás una buena reforma a la Ley de Amparo en esta materia sería que se eliminen todos los vicios de la anterior redacción y se defina si se suple en todas las materias o en ninguna.

La suplencia de la queja nació como excepción al principio de estricto derecho, y consiste en que al analizar la constitucionalidad del acto o actos reclamados, únicamente se deben analizar y estimar los conceptos de violación aducidos en la demanda de amparo, en los términos que se han formulado, prohíbe que el juez de amparo pueda expresar consideraciones respecto a la constitucionalidad del acto reclamado, que no se haya hecho valer expresamente por el quejoso.

Consideramos que las fracciones IV y VI deben ser eliminadas, ya que el principio del juicio de amparo, es de estricto derecho y las excepciones ya se encuentran plasmadas a saber, en materia penal y la laboral.

Razón por la cual consideramos, que es un rubro que debería analizarse.

**TEXTO PROPUESTO. ARTÍCULO 76 bis.** Las autoridades que conozcan del juicio de amparo deberán suplir la deficiencia de los conceptos de violación de la demanda, así como la de los agravios formulados en los recursos que esta ley establece, conforme a lo siguiente:

I. En cualquier materia, cuando el acto reclamado se funde en leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia;

II. En materia penal, la suplencia operará aun ante la ausencia de conceptos de violación o de agravios del reo;

III. En materia agraria, conforme a lo dispuesto por el artículo 227 de esta ley;

IV. En materia laboral, la suplencia sólo se aplicará en favor del trabajador;

V. En favor de los menores de edad o incapaces.

Agradeciendo de antemano las atenciones que se sirva prestar a la presente, aprovechamos la oportunidad para enviarle un cordial saludo.  
(Luis Orlando Hernández, Tomo III, páginas 2109 a 2111)

---

En dicho precepto se consagra la suplencia de la queja y expresamente en la fracción IV se establece que en materia laboral, la suplencia sólo se aplicará en favor del trabajador.

Derivado de dicha premisa en la práctica ocurre infinidad de injusticias, desconocemos si de buena o de mala fe y aún a sabiendas de que hay trabajadores que tienen como su *modus operandi* el promover juicios laborales aduciendo falsos despidos injustificados y a pesar de que

se destacan en los procedimientos laborales que los juicios concretos devienen de una cadena de juicios instaurados por el trabajador contra el mismo patrón, los colegiados hacen caso omiso a dicha circunstancia y suplen sin explicación alguna la supuesta deficiencia de la demanda laboral o del recurso de revisión según se trate de juicio de amparo directo o indirecto y con ello afectan los intereses de los patrones a quienes siempre se les otorga el papel de "malos". Perdemos de vista como lo sostenía el Ministro jubilado Lic. Noé Castañón León, que la suplencia de la queja o la suplencia de la deficiencia de la queja lo que busca en esencia es darle la razón a quien la tiene trabajo que debe estar encomendado al juzgador y se debe aplicar a todas las materias y en beneficio de cualquiera de las partes. Por lo que consideramos que se debe reformar la fracción IV del precepto en comento indicándose que dicha suplencia también debe favorecer a los patrones. (Ignacio Quesada Castillo, Tomo III, página 2117)

---

**ARTÍCULO 76 bis.** Las autoridades que conozcan del juicio de amparo deberán suplir la deficiencia de los conceptos de violación de la demanda, así como la de los agravios formulados en los recursos que esta ley establece, conforme a lo siguiente:

I. En cualquier materia, cuando el acto reclamado se funde en leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia

II. En materia penal, la suplencia operará aun ante la ausencia de conceptos de violación o de agravios del reo;



III. En materia agraria, conforme a lo dispuesto por el artículo 227 de esta ley;

IV. En materia laboral, la suplencia sólo se aplicará en favor del trabajador;

V. En favor de los menores de edad o incapaces; y

VI. En otras materias, cuando se advierta que ha habido en contra del quejoso o del particular recurrente una violación manifiesta de la ley que lo haya dejado sin defensa y que la misma trascienda al resultado del fallo.  
**(Oscar Barrera Garza, Tomo III, páginas 2193 y 2194)**

---

En cuanto al artículo 76 bis de la Ley, debe ser reformado, para quedar en los siguientes términos: La suplencia de la queja consiste en decir que una autoridad violó un precepto constitucional o legal, o bien una jurisprudencia, sin que el quejoso o recurrente se refiera a esa violación, o bien aludiendo a ella defectuosamente en sus conceptos de violación o agravios. Por violación manifiesta de la ley se entiende como la imposibilidad del quejoso de lograr que se modifique el acto reclamado, ya sea porque no exista medio de defensa para ese efecto, o bien porque existiéndolo el quejoso no pudo agotarlo o agotando el mismo, le fue adverso. Las autoridades que conozcan el juicio de amparo deberán suplir la deficiencia de los conceptos de violación de la demanda, así como la de los agravios formulados en los recursos.

Son casos para suplir la deficiencia de la queja, entre otros, los siguientes: I.- Cuando el acto reclamado se funde en leyes declaradas inconstitucionales pro la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia, II.- Cuando se advierta que ha habido en contra del quejoso o del particular recurrente una violación manifiesta que lo haya dejado sin defensa, III.- Cuando al quejoso o al recurrente no se le haya respetado la garantía de audiencia.

La autoridad que conoce del juicio de amparo debe, al momento de suplir la deficiencia de la queja, señalar cuál es el precepto legal o constitucional, o bien la jurisprudencia infringida, cuál es el acto concreto de autoridad que contiene esta violación y las razones para considerar la misma. (Mario Gómez Mercado, Tomo IV, páginas 2679 y 2680).

---

Sin lugar a dudas la Reforma Constitucional de 1993 relativas precisamente a los derechos del ofendido que el artículo 20 Constitucional fracción X párrafo final le otorga a la víctima u ofendido por un delito, ha traído como consecuencia en las legislaciones secundarias importantes modificaciones surgiendo nuevas disposiciones y nuevos criterios tanto Jurisprudenciales como doctrinarios que vienen a revolucionar el procedimiento penal Mexicano.

En un principio, debe decirse que esa nueva reforma por su ubicación fue considerada por algunos como inapropiada y desafortunada pues justamente el artículo 20 de nuestra Carta Magna contiene lo que son básicamente significativas garantías para el inculpado durante el

procedimiento Penal y que por ello hablar del ofendido en el referido precepto, se afirma, no es adecuado, sin embargo, debe reconocerse que independientemente de su ubicación las referidas Reformas deben estimarse acertadas pues miran hacia uno de los sujetos del drama penal que tradicionalmente pasaba desapercibido, casi en el anonimato no obstante que en torno a él gira toda la maquinaria de Procuración y Administración de Justicia.

En nuestra entidad, Hidalgo, ese nuevo concepto se ha visto reflejado en diversas reformas y adiciones que desde 1990 y hasta el mes de marzo de 1999 se han venido llevando a cabo en los dispositivos sustantivos y adjetivos entre los que destacan la obligación del Juzgador de tener con carácter de Coadyuvante al ofendido o a su representante a partir del auto de radicación del proceso, así, sin mayor trámite, basta con que se le reconozca el carácter de ofendido para que en consecuencia se le admita también como Coadyuvante del Ministerio Público y sólo en los casos de Homicidio se requiere que la persona que tenga derecho a la Reparación de los daños y perjuicios expresamente se constituya como Coadyuvante del Ministerio Público, teniendo el derecho de hacer valer alguno de los recursos que la Ley de la materia señala durante los cuales expresará los agravios que le cause la resolución combatida, en materia federal, el artículo 141 del Código de Procedimientos Penales otorga al ofendido ciertos derechos.

En el Estado de Hidalgo la asesoría jurídica a que hace referencia el artículo 20 Constitucional en su fracción X párrafo final y que como garantía tiene derecho la víctima o el ofendido ha quedado ampliada al imponerse

como obligación del Estado pues en aquellos casos en que el ofendido no tenga los recursos necesarios para contratar un abogado particular, podrá solicitar al Ministerio Público o al Juzgador según sea el caso le asigne un asesor jurídico con remuneración a cargo del Estado.

En materia Constitucional debe recordarse el contenido del artículo 21 de la Ley Suprema en donde en su párrafo cuarto pone de manifiesto la posibilidad de que las resoluciones del Ministerio Público sobre el no ejercicio de la acción penal puedan ser impugnadas por la vía Jurisdiccional resolviendo nuestro Alto Tribunal que ésta habrá de ser la Constitucional y quien sino la víctima o el ofendido será quien intente dicho juicio pues reciente directa o indirectamente la conducta calificada como delito y en especial puede privársele de la posibilidad de obtener la reparación del daño lo que le da legitimación para ejercer al respecto la acción de garantías toda vez que las resoluciones sobre el no ejercicio o desistimiento de la acción penal puedan resultar directamente violatorias de las garantías del ofendido.

En las condiciones anotadas, resulta cuestionable que atentos al triple propósito del proceso penal de tutelar jurídicamente al inculpado (en lo que hace a sus legítimos intereses), al ofendido por el delito y a la sociedad, y la protección constitucional que ahora resulta obligada para la víctima u ofendido, se impone la necesidad de que en los juicios de amparo promovidos por éstos o su representante el Juez Federal supla también las deficiencias de los conceptos de violación de la demanda y de los agravios formulados en los recursos que la Ley de Amparo establece, no solo por lo que hace al reo sino también a quien reciente las consecuencias de la

acción criminosa en su vida, salud, patrimonio o en algún otro bien jurídico protegido por la Ley razón por la cual se propone una adición al artículo 76 bis de la Ley de Amparo que imponga la obligación a la autoridad Federal de suplir las deficiencias cuando el peticionario de amparo lo sea también la víctima, ofendido o su representante. (Esteban Espinosa Ramírez, Tomo IV, páginas 2757 a 2759).

---

## **LAS CUESTIONES FAMILIARES DENTRO DEL JUICIO DE AMPARO**

Al margen de la discusión sobre si las cuestiones de índole familiar deben de estar incluidas tradicionalmente dentro del derecho civil o si bien deben de ser regulados por una rama independiente del derecho común, hemos de hacer hincapié en el que las cuestiones que se encuentran dentro del llamado derecho familiar merecen un tratamiento especial, dado que dentro de él se encuentran diversos supuestos que atañen a entidades y sujetos tales como la familia, el matrimonio, los menores, los incapaces y los ausentes, los cuales reclaman un tratamiento específico, que les separe de los principios igualitarios pregonados por el liberalismo y de los cuales tiene su sustento el derecho civil, que en muchos casos los coloca en situaciones no del todo favorables a los intereses primigenios que portan.

En este sentido, considero que como signatura fundamental de la reforma que se realice a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales debe de ser sin duda el de considerar a los temas del derecho de familia, como elementos fundamentales a proteger dentro del

procedimiento de amparo, toda vez que el considerarlos junto con otra clase de temas que sólo responden a intereses particulares sin trascendencia común, se corre el riesgo de derruir las prerrogativas que la legislación ordinaria ha concedido en estos menesteres a efecto de lograr que el interés común que envuelven a estos supuestos queden plenamente salvaguardados.

Fácilmente se advierte que en el texto de la Ley de Amparo en vigor, algunas cuestiones son distinguidas del resto de casos que previene, ello en virtud a la trascendencia de los derechos que se tutelan.

Así verbi gracia tenemos que en el caso de la suspensión del acto reclamado, la Ley de Amparo reserva para algunos supuestos, la procedencia de oficio de la misma, tal y como lo señala en su artículo 123, al disponer:

**Artículo 123.- Procede la suspensión de oficio:**

I. Cuando que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, deportación o destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal.

II. Cuando se trate de algún otro caso que, si llegará a consumarse, haría físicamente imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía individual reclamada.

Como se aprecia, sólo para los casos antes enumerados se concederá la suspensión en forma oficiosa, para el resto de actos deberá llevarse a cabo a petición de parte y agotarse el incidente respectivo.

En ese mismo sentido la Ley de Amparo establece al lado del principio de estricto derecho, la facultad de suplencia de la queja en tratándose de amparos en materia laboral, penal y agrario, aún que hace excepciones en el resto de materias, en los casos consagrados por el artículo 76 bis en las fracciones I, V y VI, destacando en el presente caso que nos ocupa el contenido de la fracción V, que contempla supuestos afines a nuestro tema, dicho precepto establece lo siguiente:

**Artículo 76 bis.-** Las autoridades que conozcan del juicio de amparo deberán suplir la deficiencia de los conceptos de violación de la demanda, así como la de los agravios formulados en los recursos que esta ley establece, conforme a lo siguiente: ... V. En favor de los menores de edad o de los incapaces.

Con los dos anteriores ejemplos, se aprecia que la legislación de amparo concede a ciertos hechos un trato especial, a mayor abundamiento basta recordar el contenido del libro segundo de la Ley de Amparo, el cual se establece con el único propósito de fincar a favor de los sujetos enumerados en el artículo 212 de la propia ley, una serie de preferencias en su actuación procesal como parte en el amparo.

En este sentido, consideramos que ciertas situaciones de índole familiar, tal como lo es la concesión de alimentos, la custodia de menores, la

protección de incapaces, medidas provisionales entre cónyuges, entre otros, deberían de incluirse dentro de estos supuestos de excepción. De esta forma el acto de autoridad consistente en denegar la fijación de una pensión alimenticia provisional o definitiva, que en determinado caso podría convertirse en acto reclamado de un juicio de amparo, bien ameritaría que se concediese una suspensión de oficio, o bien que en el caso de que en su escrito de demanda no se estableciese con toda certeza y propiedad los conceptos de violación que lo motivan, pudiese el juzgador de amparo suplir esta deficiencia y con esto evitar que por una deficiencia en la exposición de su demanda se dejase sin percibir alimentos a quien por derecho debería de corresponderle.

Los dos anteriores casos –la concesión de la suspensión oficiosa y la suplencia de la queja- sirven de fiel sustento a la tesis enarbolada líneas arriba, las cuales se proponen en forma enunciativa y no limitativa, a la serie de supuestos donde puede lograrse una amplia protección a los intereses tutelados por el derecho de familia, por lo que en realidad esto sólo propone evidenciar la necesidad de contemplar este aspecto dentro de una posible enmienda legislativa, la cual consideramos no escapa a la idoneidad o adecuación con los principios rectores del juicio de garantías, puesto que como se adujo, la propia ley en la actualidad concede estas concesiones, por lo que si se otorgan ciertas prerrogativas especiales a ejidatarios, trabajadores o procesados, por qué no hacerla extensiva a la familia, los menores, incapaces o el matrimonio.

En todo caso la reforma que adopte estas ideas debe de precisar los alcances de la misma, vigilando a qué sujetos y en qué condiciones puede



obsequiarse estas preferencias y bajo qué supuestos pueden prestarse las mismas. En esta labor debe de ser fundamental el auxilio que preste la jurisprudencia existente hasta el momento, la cual ha tenido a bien reconocer esta realidad y en más de un caso ha atendido el silencio del texto legal. (Brígida Pérez Perusquia, Tomo IV, páginas 2786 a 2789).

---

II.- En cuanto a la suplencia de la queja deficiente.

El principio de estricto derecho que regía en el juicio de amparo, obligaba al órgano jurisdiccional al dictar sentencia, a sujetarse a los conceptos de violación contenidos en la demanda, sin que pudiera suplir al quejoso, de oficio, sobre aspectos de inconstitucionalidad de los actos reclamados que éste no señalaba.

Dicho principio ha sido criticado por eminentes juristas, entre los que destaca el Maestro Tena Ramírez, quien sostuvo que implicaba una restricción rigurosa al arbitrio judicial; que sacrificaba los derechos fundamentales al rigor de la fórmula, al tecnicismo sutil que requiere de servicios de profesionistas eminentes que no están al alcance de las personas de escasos recursos, los que quedaban a merced de un contrincante más hábil. Que se premiaba la destreza y no se perseguía la Justicia.

Otros, en cambio, lo han justificado, con el argumento de que por la propia naturaleza de los litigios en los que se ventilan intereses meramente

privados, su defensa corresponde en forma íntegra a sus titulares y de ninguna manera a las autoridades de control constitucional.

Frente al principio aludido se encuentra el diverso relativo a la facultad de suplir la queja deficiente, que permite al órgano jurisdiccional perfeccionar, completar o aclarar las deficiencias de la demanda; de tal modo que puede, otorgarse el amparo en la sentencia con base en el concepto de violación suplidos o perfeccionados oficiosamente por el juzgador.

El Poder Constituyente de 1917, sólo la estableció a favor de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación y en materia penal. Posteriormente se amplió a jueces de Distrito y Tribunales Colegiados y se amplió a otras materias, como las siguientes:

Tratándose de leyes inconstitucionales, a partir de las reformas de 1984 a la Ley de Amparo, se obliga a suplir la deficiencia de la queja en cualquier materia, cuando el acto reclamado se funde en leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

En materia penal procede la suplencia de la queja deficiente aun ante la ausencia de conceptos de violación o de agravios del reo.

En materia agraria opera a favor de los núcleos de población ejidal o comunal; de los ejidatarios y comuneros, y en general, de quienes

pertenezcan a la clase campesina cuando los actos reclamados afecten sus derechos agrarios.

En otras materias, en referencia obvia por exclusión, a los asuntos del orden civil y administrativo, la suplencia se aplica cuando se advierte que ha habido en contra del quejoso o del particular recurrente, una violación manifiesta de la ley que lo hubiera dejado sin defensa.

En este último aspecto, existen criterios jurisprudenciales en el sentido de que, en razón de lo dispuesto por el artículo 76 bis, fracción VI, de la Ley de Amparo, en las citadas materias, el juicio de garantías ha dejado de ser de estricto derecho.

Para corroborar la exposición anterior, basta la lectura de las siguientes tesis y ejecutorias:

**Octava Epoca**

**Instancia: Tercera Sala**

**Fuente: Semanario Judicial de la Federación**

**Tomo: 111 Primera Parte**

**Tesis: 3a./J. 22 (5/89)**

**Página: 399**

**SUPLENCIA EN LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA, IMPLICA UN EXAMEN CUIDADOSO DEL ACTO RECLAMADO.** El artículo 76 bis, fracción VI, de la Ley de Amparo, establece que las autoridades que conozcan del juicio de garantías deberán suplir la deficiencia de los

conceptos de violación de la demanda, así como la de los agravios formulados en los recursos previstos en la propia ley, cuando se advierta que ha habido en contra del quejoso o del particular recurrente una violación manifiesta de la ley que lo haya dejado sin defensa. Este dispositivo no puede ser tomado literalmente, pues si así se hiciera, su contenido se volvería nugatorio habida cuenta que contra los actos de autoridad arbitrarios e ilegales, el agraviado siempre podrá defenderse a través del juicio constitucional, de manera que la indefensión prevista nunca se presentaría; en cambio, una saludable interpretación del citado numeral permite sostener que la suplencia en la deficiencia de la demanda, ha lugar cuando el examen cuidadoso del problema que se plantea hace patente que la responsable infringió determinadas normas en perjuicio del quejoso, quien como consecuencia de ello, quedó colocado en una situación de seria afectación a sus derechos que de no ser corregida, equivaldría a dejarlo sin defensa.

Octava Epoca

Instancia: Pleno

Fuente: Semanario Judicial de la Federación

Tomo: IV Primera Parte

Tesis: LIV/89

Página: 122

**SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA. EN LAS MATERIAS CIVIL Y ADMINISTRATIVA PROCEDENTE.** El artículo 76 bis, fracción VI, de la Ley de Amparo, dispone que la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación o de los agravios procede "en otras materias"

cuando se advierta que ha habido en contra del quejoso o del particular recurrente una violación manifiesta de la ley que lo haya dejado sin defensa. De lo anterior se sigue que la suplencia prevista en esa fracción opera en los amparos en las materias civil y administrativa, toda vez que el legislador, al emplear las palabras "en otras materias", se refiere a las que no están expresamente reguladas en las primeras cinco fracciones del artículo citado, y que son, precisamente, la civil y la administrativa.

**Octava Epoca**

**Instancia: Pleno**

**Fuente: Semanario Judicial de la Federación**

**Tomo: IV Primera Parte**

**Tesis: LV/89**

**Página: 123**

**SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA EN LAS MATERIAS CIVIL Y ADMINISTRATIVA. PROCEDE UNICAMENTE ANTE UNA VIOLACION MANIFIESTA DE LA LEY.** Para efectos de la suplencia de la queja deficiente, prevista en la fracción VI del artículo 76 bis de la Ley de Amparo, que se refiere implícitamente a las materias civil y administrativa, debe establecerse que sólo procede ante una violación manifiesta de la ley, que es la que se advierte en forma clara y patente, que resulta obvia, que es innegable e indiscutible, y cuya existencia no puede derivarse de una serie de razonamientos y planteamientos cuestionables.

**Octava Epoca**

**Instancia: Pleno**

**Fuente: Semanario Judicial de la Federación**

**Tomo: IV Primera Parte**

**Tesis: LVI/89**

**Página: 122**

**SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA EN LAS MATERIAS CIVIL Y ADMINISTRATIVA. DEBE SER ESTRUCTA Y CIRCUNSCRIBIRSE A LA LITIS CONSTITUCIONAL.** La suplencia de la deficiencia de la queja prevista por el artículo 76 bis, fracción VI, de la Ley de Amparo, debe ser de aplicación estricta y circunscribirse exclusivamente a la litis constitucional, lo que significa que no debe introducir en el juicio extraordinario cuestiones no controvertidas en el juicio ordinario, sobre las que no se expresaron razonamientos ni fueron materia de prueba.

**Octava Epoca**

**Instancia: Pleno**

**Fuente: Semanario Judicial de la Federación**

**Tomo: IV Primera Parte**

**Tesis: LIX/89**

**Página: 123**

**SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA EN LAS MATERIAS CIVIL Y ADMINISTRATIVA. SIGNIFICADO DEL SUPUESTO DE INDEFENSIÓN.** El artículo 76 bis, fracción VI, de la Ley de Amparo, establece, para suplir la deficiencia de la queja en las materias civil y administrativa, además de haberse producido en contra del quejoso o del particular recurrentes una violación manifiesta de la ley que, el acto de

autoridad lo haya dejado sin defensa. Este supuesto no debe interpretarse literalmente, ya que el precepto se volvería nugatorio, toda vez que contra todo acto de autoridad existen medios de defensa, entre ellos el juicio de amparo. Por ello, debe interpretarse esa disposición en el sentido de que indefensión significa que la autoridad responsable infringió determinadas normas de tal manera que afectó substancialmente al quejoso en su defensa.

Octava Epoca

Instancia: Tercera Sala

Fuente: Semanario Judicial de la Federación

Tomo: V Primera Parte

Tesis: LXXXII/90

Página: 194

**SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA. No PERMITE EN LA HIPO TESIS PREVISTA EN LA FRACCION VI DEL ARTÍCULO 76 BIS DE LA LE Y DE AMPARO, VARIAR LA LITIS CONSTITUCIONAL.** De conformidad con lo dispuesto en el artículo 76 bis, fracción VI de la Ley de Amparo, procede suplir la deficiencia de los conceptos de violación de la demanda, así como de los agravios formulados en los recursos que establece la legislación en consulta, la hipótesis prevista por dicha fracción, cuando se advierta que ha habido contra el quejoso o particular recurrente una violación manifiesta de la ley que lo haya dejado sin defensa. Luego, esta suplencia opera sólo respecto de los conceptos de violación o de los agravios, sin que se pueda variar la litis constitucional; es decir, no se pueden introducir en ésta, cuestiones no controvertidas en el juicio ordinario

y el juzgador de amparo no puede integrar pruebas que el quejoso o el particular recurrente debieron ofrecer y rendir en el juicio de garantías.

En el mismo sentido, se han pronunciado los Tribunales Colegiados de Circuito y como referencia, enseguida se transcriben dos criterios al respecto:

Novena Epoca

Instancia: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO.

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Tesis: VI.2o. J/166

Página: 1337

SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA EN LAS MATERIAS CIVIL Y ADMINISTRATIVA, PROCEDENCIA DE LA. De lo dispuesto por el artículo 76 bis, fracción VI de la Ley de Amparo, se desprende que es procedente suplir la deficiencia de los conceptos de violación o de los agravios "en otras materias" cuando se advierta que ha habido en contra del quejoso o del particular recurrente una violación manifiesta de la ley que lo haya dejado sin defensa; de lo que se sigue, que la suplencia prevista en esa fracción opera en los amparos en las materias civil y administrativa, toda vez que el legislador, al emplear las palabras "en otras materias", se refiere a las que no están expresamente reguladas en las primeras cinco fracciones del artículo citado, y que son, precisamente, la civil y la administrativa.



Octava Epoca

Instancia: TERCER TRIBUNAL, COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO.

Tomo: VIII-Octubre

Tesis: VI. 3o. J/23

Página: 117

**SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN MATERIA CIVIL, POR FALTA DE EMPLAZAMIENTO.** De conformidad con el artículo 76 bis, fracción VI de la Ley de Amparo, las autoridades que conozcan del juicio de garantías, están facultadas para suplir la deficiencia de los conceptos de violación o de los agravios, en cualquier materia, aun la civil, cuando se advierte que ha habido en contra del quejoso una violación manifiesta de la ley que lo haya dejado sin defensa y entre tales violaciones es obvio que se encuentra la falta o el ilegal emplazamiento por ser la violación procesal de mayor magnitud y de carácter más grave, de ahí que si el juez de Distrito, al analizar las actuaciones del juicio de origen, suple la deficiencia de los conceptos de violación, al advertir que el emplazamiento a la sucesión demandada fue hecho en contravención a lo establecido en el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, no viola el principio de estricto derecho.

En las referidas condiciones, con la finalidad de que los tribunales de amparo no premien la destreza de los litigantes sino que actúen en el alto fin de conseguir la Justicia, convendría que en el nuevo ordenamiento se conservara la institución de la suplencia de la queja deficiente, clarificando los conceptos y términos de la actual redacción, e incorporar los extremos

aludidos en los precedentes jurisprudenciales antes transcritos. Esto es: precisar que procede la suplencia de la queja deficiente en materias civil y administrativa y en cualquier materia; que procede ante una violación manifiesta de la ley, entendida como aquélla que se advierte cuando la autoridad responsable infringe determinadas normas de tal manera que afecta substancialmente las defensas del quejoso. Que la autoridad de amparo debe circunscribirse exclusivamente a la litis constitucional, sin introducir cuestiones no controvertidas en el juicio ordinario, sobre las que no se expresaron razonamientos ni fueron materia de prueba y que no puede integrar pruebas que el quejoso o el particular recurrente debieron ofrecer y rendir en el juicio de garantías.

Actualmente, el artículo 76 bis, fracción VI de la Ley de Amparo, previene:

**ARTÍCULO 76 bis.** Las autoridades que conozcan del juicio de amparo deberán suplir la deficiencia de los conceptos de violación de la demanda, así como la de los agravios formulados en los recursos que esta ley establece, conforme a lo siguiente

VI. En otras materias, cuando se advierta que ha habido en contra del quejoso o del particular recurrente una violación manifiesta de la ley que lo haya dejado sin defensa.

En razón de lo expuesto, se realiza la siguiente:

## **PROPUESTA**

Que la nueva Ley de Amparo contenga una disposición en la que al respecto estatuya:

Las autoridades que conozcan del juicio de amparo deberán suplir la deficiencia de los conceptos de violación de la demanda, así como la de los agravios formulados en los recursos que esta ley establece, conforme a lo siguiente: .... En todas las materias, incluidas la civil y la administrativa, cuando se advierta que la autoridad responsable incurrió en una violación manifiesta de la ley que hubiera dejado sin defensa al quejoso o al particular recurrente y hubiera trascendido al resultado del fallo. En estos casos, la autoridad de amparo debe circunscribirse exclusivamente a la litis constitucional sin introducir cuestiones no controvertidas en el JUICIO ordinario, y sin posibilidad de recabar pruebas que el quejoso o el particular recurrente debieron ofrecer y rendir en el juicio de garantías. (Herminio Huerta Díaz, Tomo IV, páginas 2904 a 2914).

---

**DEL ARTICULO 107 CONSTITUCIONAL.-** La necesidad de reformar el artículo 107 Constitucional, para ajustarse a los verdaderos requerimientos de la sociedad mexicana, se deriva de lo siguiente:

En contra del principio establecido por el artículo 133 Constitucional, de la supremacía de la Constitución y tratados Internacionales aprobados por el Senado sobre cualesquier otra ley secundaria, Constitución o Ley local, le da efectos individuales a las sentencias dictadas en los amparos promovidos en contra de leyes o actos de efecto general.

Permite, en el párrafo segundo de la fracción II, que la Ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucional, que es la Ley de Amparo, prevenga sobre la suplencia de la deficiencia de la queja, lo que ha producido el injusto efecto de que en el artículo 76 Bis, de la Ley de Amparo, se limite injustamente la suplencia de la queja a casos especiales y no a todas las materias, como debe ser el espíritu de la Constitución, pervertido por la Ley Reglamentaria; porque al final, a través de un juicio de garantías en el que el quejoso teniendo el derecho de ser protegido por la Justicia de la Unión, le es este negado el amparo por defectos de la queja, ahí se da, precisamente, la restricción de las garantías individuales.

Injustamente, en ese precepto, en el Artículo 107 fracción XIV, contempla la figura del sobreseimiento por inactividad y la caducidad, en el juicio de amparo.

Estimamos por ello, y por otras razones, que el artículo 107 Constitucional, debe ser reformado en su Fracción II, párrafos Primero, Segundo, y Cuarto y fracción XIV. El párrafo Primero, de la Fracción II, en virtud de que un amparo enderezado en contra de una Ley o acto de autoridad de efecto general, en cuanto a su sentencia , como atinadamente lo ha sostenido el insigne jurista mexicano, Doctor Don Ignacio Burgoa Orihuela.

Si el efecto natural de la sentencia de amparo, es impedir que el acto reclamado pueda tener ejecución, por haber sido declarado contrario a la Constitución, tratándose de una Ley o de un acto de efecto general, la

sentencia de amparo debe también producir efectos generales, precisamente en razón de haber sido declarada la Ley o acto inconstitucional, y no permitir, nociva e innecesariamente, que ha sido tachada de ser en contra del texto Constitucional, siga produciendo sus efectos.

Ello, atendido también al principio de la supremacía de la Constitución sobre las demás leyes, establecido por el artículo 133 Constitucional, en relación con el artículo 1º. de la misma Ley, que confiere a todo individuo el derecho de gozar de las garantías individuales; no existiendo ninguna razón de que una Ley que ha sido declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, deba seguirse aplicando en contra del principio sustentado por el precepto primero mencionado y produciendo el efecto de la negación del goce de las garantías.

Estimamos, pues, que el texto del Párrafo Primero de la Fracción II, del artículo 107 Constitucional, debe reformarse para que diga:

"La sentencia siempre será tal, que solo se ocupe de individuos particulares, limitándose a ampararlos y protegerlos en el caso especial sobre el que verse la queja, sin hacer una declaración general al respecto del acto que la motivare; excepto en el caso de que el amparo se promueva en contra de leyes o de actos de efecto general, en los que los efectos de la sentencia serán también generales".

Respecto al Párrafo Segundo de la misma Fracción II del artículo 107 Constitucional, debe reformarse para que la suplencia de la queja sea general, y no conforme a lo que disponga la Ley Reglamentaria, atendiendo a que conforme a las condiciones económicas sociales de la sociedad mexicana, principalmente a los muchos millones que están sujetos a extrema pobreza, existe para estos la imposibilidad de contratar un abogado, sobre todo que conozca del "elitista juicio de amparo", como lo establece nuestra actual e injusta legislación.

Con tristeza vemos en las listas de acuerdos de los Tribunales Federales que conocen de juicio de amparo, que la mayoría de estos se sobresean, algunos se niegan, y un mínimo porcentaje se conceden casi siempre para efectos. Como vemos el espíritu de casi todos los Tribunales de amparo, es de desechar demandas, o de inventar causas de sobreseimiento, para nunca conocer el fondo de los negocios, situación que produce inevitablemente denegación de justicia y la restricción de las garantías individuales, por defecto de la Ley y de quienes la aplican.

Nace la necesidad entonces de que la suplencia de la queja sea general y no limitada, y que además, que el quejoso cuente con asesoría jurídica, por lo que el Párrafo Segundo de la Fracción II del artículo 107 de la Constitución, debe reformarse para decir :

"En el juicio de amparo y en todos los casos deberá suplirse la deficiencia de la queja y el agraviado contara con asesoría jurídica adecuada".

Y a fin de quitar al juicio de amparo el carácter de elitista, con el propósito también de evitar la denegación de justicia por parte de los Tribunales de Amparo, debe adicionarse a la Fracción mencionada un párrafo que diga :

" En la demanda de amparo bastara que se señale a la autoridad o autoridades responsables, el acto que se reclame de cada autoridad, el tercero o terceros perjudicados y el domicilio de estos, si el agraviado los conociera, para que el juez de Distrito, los Tribunales Colegiados de Circuito, o la Suprema Corte de Justicia, según sea el caso y el estado del juicio, procedan, existiendo el interés del jurídico del quejoso, a estudiar si el acto o actos que se reclaman de la autoridad son violatorios de las garantías individuales; y en tal condición, a amparar y proteger al agraviado en contra de dichos actos. Queda a cargo de la autoridad responsable y bajo su mas estricta responsabilidad, informar sobre la existencia de terceros perjudicados y del domicilio de estos cuando la demanda sea omisa, así como para remitir todos los documentos y pruebas que tuviere relativos al acto reclamado o que sean antecedentes al mismo".

Esa adición, bien puede hacerse y para los mismos fines en la Ley de Amparo, si se estima que no deba ser reformada para ese efecto la Constitución, con el fin de evitar los nocivos efectos producidos por el desechamiento de demandas , sobreseimientos de amparo, en casos que debe protegerse al gobernado.

La Fracción XIV y el párrafo IV de la Fracción II también del artículo 107 Constitucional, estimamos que debe suprimirse la primera parte, en

atención a que deben desaparecer las figuras del sobreseimiento y la caducidad procesal en el juicio de amparo, por ser injusto que se castigue al gobernado por el incumplimiento de los deberes de la autoridad; reformándose en tal sentido la Ley de Amparo, como adelante se indica. (Xavier Gómez Coronel, Tomo V, páginas 2 a 6)

---

Debe reformarse a su vez los artículos 76Bis y 166, de la Ley de Amparo, a fin de hacer mas sencilla la formación de la demanda de amparo y no dar lugar a que por defectos de esta, o de la queja, se niegue al quejoso el amparo y protección de la justicia federal cuando a este le han sido violadas las garantías individuales. (Xavier Gómez Coronel, Tomo V, páginas 12 y 13)

---

A fin de garantizar el fiel cumplimiento del artículo 1º Constitucional , la reforma al artículo 76 bis, de la Ley de Amparo, podría ser en los siguientes términos:

"Las autoridades que conozcan del juicio de amparo deberán suplir en todos los casos, la deficiencia de los conceptos de violación de la demanda, y aun la ausencia de los mismos cuando el acto reclamado indicado por el quejoso sea violatorio de las garantías individuales de este; debiendo suplir también , la deficiencia de los agravios formulados en los recursos que eta ley establece".



Con ello se lograría, que el juicio de amparo esté, como debe ser al alcance de todo individuo en la República Mexicana. Para simplificar la demanda de amparo, el artículo 116 de la Ley de Amparo, bien podría adicionarse con lo siguiente:

**\* En caso de que el quejoso omita señalar las garantías violadas y los conceptos de violación, o lo hiciere equivocadamente, probándose la existencia del mismo acto reclamado y siendo este violatorio de garantías individuales las autoridades que conozcan del deberán suplir esa deficiencia en la sentencia que en su caso se dicte\*.**

Es muy común, especialmente en materia penal, que al promoverse un juicio de amparo enderezado en contra de actos violatorios de las garantías consignadas por los artículos 16, párrafo segundo, y 19 Constitucionales, aunque estén probadas en el juicio de amparo las violaciones de fondo de esos preceptos, que se traducen generalmente en la privación de la libertad del agraviado, al advertir los jueces de Distrito que el acto reclamado adolece defectos de forma, invocando la suplencia de la deficiencia de la queja, resuelven el amparo concediéndolo para el efecto de que, subsanadas las violaciones de forma, la autoridad responsable en plenitud de jurisdicción vuelva a resolver sobre el liberamiento o negativa de la orden de aprehensión, o de la formal prisión, según proceda.

Como consecuencia, la sentencia de amparo, dictada aparentemente para proteger al agraviado, por el contrario somete a este a una larga, injusta, e innecesaria prisión preventiva, lo que resulta a todas luces antijurídico y absurdo, atendiendo a las siguientes razones:

1ª.- Porque se rompe con el principio jurídico, de que lo accesorio sigue a lo principal, por lo que existiendo una violación de fondo que es la principal, debe de dejarse a un lado la accesoria , que es la forma.

2ª.- Porque si en el juicio de amparo en contra de una orden de aprehensión se reclama la violación directa de un precepto Constitucional, como lo es el párrafo segundo del artículo 16 Constitucional, que se refiere a una garantía específica y no la general que contiene el párrafo primero de la misma disposición, al darse la violación directa al párrafo segundo, resulta indebido que se deje de proteger al agraviado de esa violación y se le concede el amparo por defectos de forma, lo que equivale sin lugar a dudas denegación de justicia Constitucional.

Lo mismo sucede cuando se reclama la violación a las garantías contempladas por el Párrafo Primero del artículo 19 Constitucional, que justificándose la violación a esa garantía específica, se deniega la protección de la Justicia de la Unión por ese concepto y tratando de aparentar que se protege al inculpado se le concede el amparo para el efecto de que se suplan defectos de forma, que la mayoría de las veces no existen y constituye un medio para dejar de conocer el fondo de los amparos en contravención a lo dispuesto por los artículos 1º., y 103, Fracción y Constitucionales. El resultado, totalmente injusto, toda vez de que estando el agraviado privado de su libertad, sufre, en esas condiciones en que se da la violación las garantías que otorgan los artículos 16, Párrafo Segundo, y 19 Párrafo Primero, para que se les dicte una nueva resolución, que siempre es en sentido negativo para el quejoso, lo que motiva la

promoción de nuevos juicios de amparos totalmente innecesarios en contra de los nuevos autos. Y si la autoridad responsable, en su nueva resolución no suple las deficiencias de forma y no son tratadas, por cualquier causa, en el recurso de queja, de nueva cuenta el nuevo amparo será "concedido" para el mismo efecto de que se suplan las deficiencias de forma, pudiendo el agraviado estar indefinidamente detenido cuando se dan violaciones directas a los preceptos Constitucionales mencionados.

3ª.- La ultima razón, estriba que con esa perjudicial practica, que se da negativamente por omisión de la Ley de Amparo y no por el sentimiento de la misma ni de la Constitución, se eleva muy considerablemente el volumen de los amparos en tramite, en perjuicio de la Administración de justicia, dado que la cantidad innecesaria de negocios retarda la Administración de justicia y resta calidad a las resoluciones. En tales condiciones, estimamos que el Capítulo X del Título Primero de la Ley de Amparo, debe adicionarse con una disposición que diga: (Xavier Gómez Coronel, Tomo V, páginas 13 a 16)

---

ARTÍCULO 76 bis.- Las autoridades que conozcan del juicio de amparo deberá suplir la deficiencia de los conceptos de violación de la demanda, así como la de los agravios formulados en los recursos que esta ley establece, conforme a lo siguiente:

...

VI.- En todas las materias, cuando se advierta que ha habido en contra del quejoso o del particular recurrente, una violación manifiesta de la

ley que lo haya dejado sin defensa. (Salvador Bravo Gómez, Tomo V, página 24)

---

Otra reforma que se propone, es al artículo 76 bis relativo a la suplencia de la deficiencia de la queja, así como de los agravios formulados en los recursos que la ley concede. En efecto, la ley de amparo, en el dispositivo legal invocado prevé la suplencia de la deficiencia en los conceptos de violación de la demanda en materia penal, en la agraria, en la laboral, así como en las demandas promovidas por menores de edad o por incapaces, ampliándolo en cualquier materia, cuando el acto reclamado se funde en leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la suprema corte de justicia o bien, cuando se advierta que ha habido en contra del quejoso una violación manifiesta de la ley que lo haya dejado sin defensa. Como puede observarse, la ley contempla diversas hipótesis en las que procede este beneficio que, a mi juicio, debe limitarse a la materia penal y cuando sea un menor o un incapaz el que promueva el amparo. Es perfectamente entendible que, tratándose de la libertad de la persona o de un menor o incapaz, proceda esta medida y, por tanto, la suplencia, pero en los demás casos y dado el incremento de los peritos en derecho en nuestra república mexicana, no es dable subsanar una anomalía de la demanda o de los agravios en los recursos que la ley reconoce, para enmendar, por parte del órgano de control constitucional, esa anomalía o irregularidad que presenta la parte afectada. En tales condiciones, se propone la reforma adecuada para que, el artículo 76 bis de la ley de amparo contenga únicamente dos fracciones, el cual quedaría redactado de la siguiente forma:

La ley reconoce, para enmendar, por parte del órgano de control constitucional, esa anomalía o la irregularidad que presenta la parte afectada, en tales condiciones, se propone la reforma adecuada para que, el artículo 76 bis de la ley de amparo contenga únicamente dos fracciones, el cual quedaría redactado de la siguiente forma:

**\*Art. 76 bis.** Las autoridades que conozcan del juicio de amparo deberán suplir la deficiencia de los conceptos de violación de la demanda, así como de los agravios formulados en los recursos que esta ley establece, conforme a lo siguiente:

I.- En materia penal. La suplencia operará aun ante la ausencia de conceptos de violación o de agravios del reo; y

II.- A favor de los menores de edad o incapaces. (José Antonio Gómez-Cambrón, Tomo V, páginas 54 y 55)

**Artículo 77. Las sentencias que se dicten en los juicios de amparo deben contener:**

**I. La fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados;**

**II. Los fundamentos legales en que se apoyen para sobreseer en el juicio, o bien para declarar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado;**

**III. Los puntos resolutivos con que deben terminar, concretándose en ellos, con claridad y precisión, el acto o actos por los que sobreseer, conceda o niegue el amparo.**

### **PROPUESTAS**

En mi carácter tanto de autoridad responsable como de académica y de ciudadana interesada en la implantación de un eficiente sistema de impartición de justicia que garantice en todos los niveles la garantía contenida en el artículo 17 constitucional, me permito participar en esta consulta, para exponer una inquietud sobre la técnica y los principios del juicio de amparo, en particular con relación al contenido y los efectos de las sentencias de los juicios de amparo directo, específicamente en la materia laboral que me compete, problemática que he advertido no sólo en mi carácter de Presidenta de Junta Especial, sino como secretaria de estudio

del Poder Judicial Federal, puesto en el que me desempeñé previamente a mi actual actividad.

**b) CONSIDERACIONES O MOTIVOS QUE EXPLICAN ESTA APORTACIÓN:**

Mi reflexión se refiere a la consideración que rige la actuación de los Tribunales Colegiados de Circuito al dictar las sentencias de concesión de amparo "para efectos", en cuanto a señalar únicamente en forma genérica la violación en que incurrió la responsable al emitir el respectivo laudo, dejándola en plenitud de jurisdicción para resolver nuevamente, bajo la premisa de no substituir su imperio para analizar la controversia ante ella planteada. Tal principio que resulta impecable desde el punto de vista de la estructura y atribuciones de cada uno de los niveles de nuestro sistema de impartición de justicia, genera en la práctica una serie de vicios y de retrasos en la resolución definitiva de los juicios, propiciando la negación de la garantía constitucional de justicia pronta y expedita, además de una gran improductividad en la función jurisdiccional.

En efecto, consideremos el caso de cualquier juicio laboral: resulta evidente que la emisión del laudo va precedido de un estudio de la controversia y de las pruebas ofrecidas. Cuando dicho laudo es impugnado, el Tribunal Colegiado que conoce del respectivo amparo, debe realizar también un estudio general de tales cuestiones y, evidentemente se forma una opinión jurídica de la forma en que debió actuar la autoridad responsable. Sin embargo, este punto de vista en la gran mayoría de las ocasiones de las sentencias de concesión no se hace evidente, cuando

para evitar “sustituir a la responsable” se le señala exclusivamente la violación en que incurrió y se le deja en libertad de jurisdicción para resolver lo que en derecho proceda. Lo anterior, independientemente de que muchas veces carece de claridad el sentido de la concesión, provocando problemas de interpretación para su cumplimiento, conlleva a que dicha autoridad responsable se vea obligada a hacer un nuevo estudio y análisis de la controversia planteada antes de emitir el segundo laudo, el cual es susceptible de ser nuevamente impugnado mediante un nuevo juicio de amparo, lo que da lugar a un tercer estudio del mismo expediente, habiendo ocasiones en que esta cadena se extiende a un sinnúmero de eslabones, lo que da lugar a que un mismo expediente se estudie varias veces hasta que se dicte una ejecutoria que constriña a la responsable. Además, resulta común que después de varios años y de diversos laudos y amparos, un juicio se resuelva, en los mismos términos en que se dictó el primer laudo, con el consecuente incumplimiento del ideal de justicia expedita y después de un desgaste innecesario de recursos y tiempo de las partes y de los órganos jurisdiccionales involucrados, traducándose ello en prácticas contrarias a los propósitos de productividad y eficiencia que se buscan en el México actual.

A mi juicio, ello se evitaría si, - respetando desde luego la premisa de que si existen violaciones procesales, o violación en aspectos que como la prescripción o la falta de legitimación, deben estudiarse previamente al fondo de la controversia -, al advertir el Tribunal una violación de fondo, no se limite a señalarla en su sentencia para que sea reparada por la responsable con libertad de jurisdicción, sino que igualmente determine con precisión los lineamientos a los que la responsable debe ceñirse en la



emisión del nuevo laudo, con lo cual éste ya no resulte impugnabile por la vía del amparo, sino en todo caso de la queja por exceso o defecto en el cumplimiento de la respectiva ejecutoria, la cual en caso de resultar procedente daría lugar a un laudo que necesariamente sería el último.

Lo anterior reduciría significativamente el lapso existente entre la presentación de la demanda de primera instancia y el laudo firme, con lo cual no sólo se favorecerían los intereses de los trabajadores que se ven sumamente afectados por la tardanza existente en la resolución definitiva de su juicio sino de los patrones que ven incrementadas sus condenas con el pago de salarios caídos derivados de dicha tardanza. Pero, sobre todo el proceder que se sugiere colaboraría enormemente para la reducción de los juicios de amparo que se tramitan, cuyo incremento desmedido y eventual "abuso", es motivo de preocupación del Poder Judicial Federal, disminuyendo también los recursos y el tiempo invertidos por las autoridades de primera instancia en el cumplimiento de dichas ejecutorias, contribuyendo a disminuir el rezago de juicios que actualmente las asola.

Por otra parte, debe destacarse la situación que deriva del hecho de las concesiones de amparo por violaciones procesales que no trascienden en el fondo del fallo o por violaciones de fondo que aún reparándolas van a dar lugar a una resolución similar. Si bien es verdad que el criterio adoptado por el Consejo de la Judicatura Federal en cuanto a que el órgano que conoció del primer amparo debe conocer de los sucesivos, colabora a evitar esta práctica, a mi juicio sería necesario adoptar medidas más contundentes para limitarla.-

### C) PROPUESTA.-

Mi propuesta se orienta a que en el capítulo relativo a las "Sentencias de Amparo", en particular en el artículo 77 de la actual Ley de Amparo, relativo al contenido de las sentencias que se dicten en los juicios de amparo, se agregue como fracción IV lo siguiente:

"Artículo 77:—IV.- En el caso de las sentencias que concedan el amparo, se deberán precisar con claridad los lineamientos a los que debe ceñirse la autoridad responsable en la cumplimentación de la respectiva sentencia."

Para el caso de que no se considere esta propuesta, me permito sugerir que quizá mediante la vía de los acuerdos internos, se haga conciencia en los órganos de dicho Poder Judicial, sobre la importancia de emitir sentencias en las que se señalen con claridad las violaciones constitucionales existentes y en las que las concesiones de amparo no se rijan por consideraciones formales, sino que bajo la premisa de una auténtica impartición de justicia, tales concesiones se limiten a los casos en que efectivamente existan violaciones que resulten trascendentes. (Ana María Conesa Ruiz, Tomo II, páginas 1245 a 1249)

---

También se propone que el artículo 77 de la Ley de Amparo se adicione con un párrafo o fracción I bis, para que se establezca que en las sentencias de amparo deberán analizarse y resolverse, ya sea porque las partes las hagan valer en sus conceptos de violación, o aún de oficio, todas

las violaciones procesales o formales, que se adviertan en el acto reclamado, lo que impediría que en un mismo asunto se tramiten varios juicio de amparo lo que va en contra de lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, que consigna la garantía de justicia pronta y expedita, ya que de resolverse en la sentencia todas las violaciones de esa naturaleza y de resultar fundadas varias de ellas, la autoridad responsable, en el supuesto de que esté obligada a emitir un nuevo acto, deberá subsanar esas violaciones, por lo que, en su caso, se tramitaría un segundo amparo, en el que ya se resolvería respecto del fondo de asunto, evitando infinidad de juicio que en muchas ocasiones las partes los hacen valer invocando las violaciones a que se hace referencia, porque así les conviene.

La propuesta que se realiza debe ser incluida en el Libro Primero, Título Primero, Capítulo X "De las Sentencias", y quedaría de la siguiente forma:

...

I. bis. El análisis de todas las violaciones procesales y formales que contenga el acto reclamado ya sea que las haga valer la parte quejosa en sus conceptos de violación o de agravios, o advertidas de oficio por el juzgador". (Rosa Elena Rivera Barbosa, Tomo III, páginas 1757 y 1758)

---

Séptimo.- En cuanto al alcance de las sentencias de amparo, estimamos que debido a la eficacia y seguridad legal de la ley concreta, no es permitible de acuerdo a la técnica jurídica, como alguien propone, que las resoluciones de amparo incorporen a entidades ajenas a la litis constitucional resuelta en las instancias de amparo; en efecto, la ley

concreta constituida por las sentencias de amparo, sólo debe obligar a las partes contendientes y a sus causahabientes. Quedan para las entidades ajenas a la contienda amparista, los beneficios de las tesis y criterios jurisprudenciales emitidos por los jueces, magistrados y ministros. Entender lo contrario significaría incluir obligadamente como partes de una controversia amparista a todos los gobernados, lo que no es ni lógico ni razonable ni jurídico.

Sin embargo, entendemos que hay que profundizar en la instrumentación legal de las sentencias de amparo, con la finalidad de evitar que, como reiteradamente sucede, los jueces y magistrados, al resolver, omitan importantes consideraciones que resultan de insoslayable estudio, valoración y definición; sucede que de acuerdo a los criterios de la justicia federal que ya son de explorado derecho en el sentido de que el examen de pruebas no debe de ser general, sino específico y concreto, se han dado a la tarea de examinar cada prueba en forma aislada, de tal suerte que tales estudios y consideraciones en relación con las constancias de autos, a nada conducen, al menos con la firmeza que demanda la seguridad legal; así las cosas, resulta impostergable a la legalidad y a la seguridad jurídica constitucionales, que las sentencias de amparo se emitan bajo un lineamiento de obligada observación, que contenga los más elevados principios de la técnica jurídica, con la finalidad de que las sentencias de amparo surtan en favor de los gobernados los afanes de justicia que todos pretendemos, elevados propósitos y fines republicanos que poco se pueden lograr si se constriñe el examen de la controversia constitucional a apreciaciones limitadas, ya que es precisamente el ámbito constitucional del juicio de amparo, en el que las contiendas se deben conocer y resolver en

razón fundamental de la verdad, que por diversos motivos los contendientes del amparo no pudieron obtener en los juicios de origen; en efecto, resulta desalentador que no obstante aportar en los juicios de amparo diversas probanzas que hacen entender de manera fehaciente la falta de motivación y de fundamentación del acto reclamado, éste a pesar de sus vicios siga prevaleciendo, porque los jueces y magistrados no pueden acceder al estudio y consideración de probanzas en forma abierta, como lo reclama el derecho contemporáneo; así, nos permitimos proponer las reformas a los artículos 77 y 78 de la ley de amparo, en los siguientes términos:

"artículo 77.- Las sentencias que se dicten en los juicios de amparo deben contener:

i.- La fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; para lo cual se procederá al examen de cada una de las pruebas aportadas por las partes y de las que obren en autos, determinando su valor legal intrínseco, así como el que resulte de relacionarlas unas con otras en forma razonada, lógica y congruente.

ii.- ...

iii.- Los puntos resolutivos con que deben terminar, concretándose en ellos con claridad y precisión, el acto o actos por los que se sobresea, conceda o niega el amparo. En tratándose de sentencias que concedan el amparo, deberán fijarse además, con igual claridad y precisión, los contenidos, alcances y efectos jurídicos y legales de la resolución".

"artículo 78.- En las sentencias que se dicten en los juicios de amparo, el acto reclamado se apreciará en razón de las pruebas aportadas por las partes y de las que obren en autos.

El juez del amparo deberá recabar oficiosamente pruebas que, estime necesarias para la resolución del asunto". (Jesús González Moreno, Tomo III, páginas 1809 a 1812)

---

**ARTÍCULO 77.** Las sentencias que se dicten en los juicios de amparo deben contener:

I. La fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados;

II. Los hechos y fundamentos legales en que se apoyen para sobreseer en el juicio, o bien para declarar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado; y

III. Los puntos resolutivos con que deben terminar, concretándose en ellos, con claridad y precisión, el acto o actos por los que sobresea, conceda o niegue el amparo. (Oscar Barrera Garza, Tomo III, página 2194)

Se adiciona la exigencia de que en las sentencias de amparo indirecto se cumpla con el principio de congruencia, exigido en la propia Ley de Amparo para las sentencias de Amparo Directo.

#### **TEXTO PROPUESTO**

**Art. 77** Las sentencias que se dicten en los juicios de amparo deben contener:

I La fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados;

En ningún caso comprenderán más cuestiones que las legales propuestas en la demanda de amparo.

II. Los fundamentos legales en que se apoyen para sobreseer en el juicio, o bien para declarar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado

III. Los puntos resolutivos con que deban terminar, concretándose en ellos, con claridad y precisión, el acto o actos por los que sobresea, conceda o niegue el amparo. (Francisco Moreno y Gutiérrez, Tomo IV, páginas 2749 a 2751).

Esto, en razón de que al no estar previsto que la autoridad al resolver el juicio de garantías, precise con claridad y precisión los efectos para los cuales se otorga el amparo, a la fecha existen un sin número de ejecutorias que no pueden ser cumplidas por las autoridades responsables.

#### **TEXTO QUE SE PROPONE**

**Artículo 77.- ...**

**III. Los puntos resolutivos con que deban terminar, concretándose en ellos, con claridad y precisión, el acto o actos por los que se sobresea, conceda o niegue el amparo; así como de sus efectos en caso de otorgarse éste. (Manuel Fuentes Muñiz, Tomo V, páginas 169 y 170)**

---

#### **Comentario**

La presente reforma establece la incorporación del concepto de aclaración de sentencia, misma que no se preveía en las disposiciones vigentes, incluyendo el procedimiento, bajo el cual se desahoga la aclaración de sentencia.

Cabe mencionar que la aclaración de sentencia que se propone sólo procederá después de que ésta haya causado ejecutoria, en virtud de que antes de que se actualice dicha situación, las sentencias pueden ser impugnadas y por ello modificadas

#### **Reforma**



**ARTICULO 77-A.-** Por una sola ocasión podrá pedirse la aclaración o adición de la sentencia incidental o definitiva. El promovente deberá presentar dentro de los tres días siguientes contados a partir de que le sea notificado el acuerdo que establezca que la sentencia, expresando la contradicción, ambigüedad u oscuridad que contenga.

El órgano del conocimiento resolverá dentro de los cinco días siguientes a la fecha en que haya sido presentado el escrito de aclaración lo que estime procedente, sin que pueda variar la substancia de la resolución.

El auto que resuelva sobre la aclaración o adición de una resolución, se reputará parte integrante de ésta, y no admitirá recurso alguno. (Juan José Paullada Figueroa, Tomo V, páginas 256 y 257)

**Artículo 78. En las sentencias que se dicten en los juicios de amparo, el acto reclamado se apreciará tal como aparezca probado ante la autoridad responsable, y no se admitirán ni se tomarán en consideración las pruebas que no se hubiesen rendido ante dicha autoridad para comprobar los hechos que motivaron o fueron objeto de la resolución reclamada.**

**En las propias sentencias sólo se tomarán en consideración las pruebas que justifiquen la existencia del acto reclamado y su constitucionalidad o inconstitucionalidad.**

**El juez de amparo deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto.**

#### **PROPUESTAS**

**(ACTUAL ARTICULO 78) -**

.....

**El juez de amparo deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable no obren en autos, y estime necesarias para resolución del asunto, o bien cuando se trate de los amparos de la libertad precisadas en la fracción II del artículo 136 de esta ley. (Juventino V. Castro y Castro, Tomo I, páginas 152 y 153)**

En cuanto al alcance de las sentencias de amparo, estimamos que debido a la eficacia y seguridad legal de la ley concreta, no es permitible de acuerdo a la técnica jurídica, como alguien propone, que las resoluciones de amparo incorporen a entidades ajenas a la litis constitucional resuelta en las instancias de amparo; en efecto, la ley concreta constituida por las sentencias de amparo, sólo debe obligar a las partes contendientes y a sus causahabientes. Quedan para las entidades ajenas a la contienda amparista, los beneficios de las tesis y criterios jurisprudenciales emitidos por los jueces, magistrados y ministros. Entender lo contrario significaría incluir obligadamente como partes de una controversia amparista a todos los gobernados, lo que no es ni lógico ni razonable ni jurídico.

Sin embargo, entendemos que hay que profundizar en la instrumentación legal de las sentencias de amparo, con la finalidad de evitar que, como reiteradamente sucede, los jueces y magistrados, al resolver, omitan importantes consideraciones que resultan de insoslayable estudio, valoración y definición; sucede que de acuerdo a los criterios de la justicia federal que ya son de explorado derecho en el sentido de que el examen de pruebas no debe de ser general, sino específico y concreto, se han dado a la tarea de examinar cada prueba en forma aislada, de tal suerte que tales estudios y consideraciones en relación con las constancias de autos, a nada conducen, al menos con la firmeza que demanda la seguridad legal; así las cosas, resulta impostergable a la legalidad y a la seguridad jurídica constitucionales, que las sentencias de amparo se emitan bajo un lineamiento de obligada observación, que contenga los más elevados principios de la técnica jurídica, con la finalidad de que las sentencias de amparo surtan en favor de los gobernados los afanes de justicia que todos

pretendemos, elevados propósitos y fines republicanos que poco se pueden lograr si se constriñe el examen de la controversia constitucional a apreciaciones limitadas, ya que es precisamente el ámbito constitucional del juicio de amparo, en el que las contiendas se deben conocer y resolver en razón fundamental de la verdad, que por diversos motivos los contendientes del amparo no pudieron obtener en los juicios de origen; en efecto, resulta desalentador que no obstante aportar en los juicios de amparo diversas probanzas que hacen entender de manera fehaciente la falta de motivación y de fundamentación del acto reclamado, éste a pesar de sus vicios siga prevaleciendo, porque los jueces y magistrados no pueden acceder al estudio y consideración de probanzas en forma abierta, como lo reclama el derecho contemporáneo; así, nos permitimos proponer las reformas a los artículos 77 y 78 de la ley de amparo, en los siguientes términos:

**"artículo 77.- Las sentencias que se dicten en los juicios de amparo deben contener:**

**i.- La fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; para lo cual se procederá al examen de cada una de las pruebas aportadas por las partes y de las que obren en autos, determinando su valor legal intrínseco, así como el que resulte de relacionarlas unas con otras en forma razonada, lógica y congruente.**

**ii.- ...**

**iii.- Los puntos resolutivos con que deben terminar, concretándose en ellos con claridad y precisión, el acto o actos por los que se sobresea, conceda o niega el amparo. En tratándose de sentencias que concedan el**

amparo, deberán fijarse además, con igual claridad y precisión, los contenidos, alcances y efectos jurídicos y legales de la resolución".

"artículo 78.- En las sentencias que se dicten en los juicios de amparo, el acto reclamado se apreciará en razón de las pruebas aportadas por las partes y de las que obren en autos.

El juez del amparo deberá recabar oficiosamente pruebas que, estime necesarias para la resolución del asunto". ". (Jesús González Moreno, Tomo III, páginas 1809 a 1812)

---

ARTÍCULO 78. En las sentencias que se dicten en los juicios de amparo, el acto reclamado se apreciará tal como aparezca probado ante la autoridad responsable, y no se admitirán ni se tomarán en consideración las pruebas que no se hubiesen rendido ante dicha autoridad para comprobar los hechos que motivaron o fueron objeto de la resolución reclamada.

En las propias sentencias sólo se tomarán en consideración las pruebas que justifiquen la procedencia o improcedencia del juicio de garantías, el sobreseimiento o la caducidad de la instancia, así como la existencia del acto reclamado y su constitucionalidad o inconstitucionalidad.

El Juez de Distrito o el magistrado del Tribunal Unitario de Circuito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. (Oscar Barrera Garza, Tomo III, páginas 2194 y 2195)

**Artículo 79. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, los tribunales colegiados de circuito y los jueces de distrito, deberán corregir los errores que adviertan en la cita de los preceptos constitucionales y legales que se estimen violados, y podrán examinar en su conjunto los conceptos de violación y los agravios, así como los demás razonamientos de las partes, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, pero sin cambiar los hechos expuestos en la demanda.**

### **PROPUESTAS**

#### **Prevalencia del Derecho.**

En el tipo de contenciones de interés público, como la que ahora capta nuestra atención, es totalmente irrazonable que las causas se resuelvan con estricto apego a las argumentaciones legales de las partes en conflicto, hipótesis en la cual los desaciertos, omisiones y errores suelen conducir a resultados absurdos, y situaciones extremas, a la negación del Derecho mismo.

Tratándose del juicio de amparo, cuya matena se centra en posibles violaciones directas a la Constitución, más particularmente a las garantías individuales, es preciso que en forma legal se de una aplicación de máximo alcance a la suplencia de la queja, a pesar de que esto se traduzca en una ventaja sobre todo para la parte quejosa, pues, como se ha manifestado en apartados anteriores, su posición es débil comparativamente con el aparato

gubernamental que cuenta con unidades especializadas en materia legal y contenciosa.

Sobre este aspecto no debe perderse de vista que otras entidades del sector oficial están actuado oficiosamente para proteger los derechos esenciales del individuo, como persona y como ciudadano, o en último caso brindan asesoría gratuita para evitar errores defensivos en esta materia, lo que no está aconteciendo en el Poder Judicial Federal. (Ivan Rueda Heduán, Tomo I, página 107 y 108)

---

#### **Justicia de Fondo.**

Nuestro actual sistema propicia, o al menos permite, que los juicios "suban y bajen" dentro de las jerarquías jurisdiccionales, sin encontrar solución de fondo, sobre todo cuando se plantean violaciones formales o de carácter procedimental, lo cual es absolutamente común, provocándose así que los expedientes sean reenviados a su jurisdicción original por los tribunales revisores cuando reconocen cierto tipo de irregularidades, para el efecto de que se enmienden los vicios configurados y se vuelva a dictar sentencia, todo lo cual puede ser reiterativo, sin que existan limitantes en las regulaciones procesales a esta censurable práctica.

En algunos casos, cuando los formalismos afectan esencialmente los derechos de las partes contendientes, tal mecánica puede justificarse, pero no así en otras situaciones en que los vicios conformados resultan intrascendentes o pueden subsanarse en las etapas finales de revisión,

casos en los que debe prevalecer una normatividad distinta, tendiente a la resolución sustancial y definitiva de la causa.

El juicio de amparo no escapa a la referida rutina, aceptada por décadas a pesar de la interferencia que ocasiona a los justiciables en el logro de sus propósitos finales, de tal manera que debe recomendarse la adopción de nuevas medidas tendientes a la pronta solución del proceso atendiendo el apotegma "justicia denegada". (Ivan Rueda Heduán, Tomo I, páginas 113)

---

Es menester que se ordene que en las sentencias de amparo se traten todos los conceptos de violación que se hagan valer por los quejosos y no que, con el pretexto de que ya se trataron algunos puntos, se omitan otros que son de importancia. (Jorge Manuel Garizurieta González, Tomo I, página 169)

---

Debe reformarse el artículo 79 de la Ley de Amparo, para obligar a los Jueces Federales y Ministros a fundar sus sentencias no solo en los conceptos de violación y agravios, sino "además en los razonamientos de las partes"; este agregado de la Reforma de 1984, desnaturaliza la técnica de Amparo, de antaño existe Jurisprudencia de la Suprema Corte, que ha sido sostenida. (Nicolás Martínez Cerda, Tomo II, página 867)



Debe reformarse el artículo 79 de la Ley de Amparo para eliminar la frase "además en los razonamientos de las partes", ya que el Juez al dictar la sentencia analiza los conceptos de violación o agravios, por lo que debe eliminarse este agregado de la reforma de 1984 que desnaturaliza la técnica del amparo. (Nicolás Martínez Cerda, Tomo II, página 872)

---

Estudio del fondo del asunto. Es importante establecer en la ley que los Tribunales Federales resolverán en primer lugar sobre el fondo del amparo, y sólo concederán el amparo pro vicios de forma cuando el particular hubiera quedado en estado de indefensión y no se pueda a través del amparo tramitar y subsanar y vicio de forma y dejar sin efecto el acto de autoridad. Con ello se pretende transformar al amparo de un juicio de nulidad a un juicio con plena jurisdicción. (Fernando Sánchez Ugarte, Tomo III, páginas 1794 y 1795)

---

**ACLARACION DE SENTENCIA** Podría establecerse texto expreso en la Ley de Amparo que determine cuándo y por qué, así como el plazo, de aclaración de sentencias de amparo. Ya que al no existir este texto da margen a una laxa interpretación de si procede la aclaración en términos del Código Federal de Procedimientos Civiles o Penal, o bien de recurso de revisión. (Fernando Sánchez Ugarte, Tomo III, página 1798)

---

2.- En algunos casos los Tribunales de Amparo conceden la protección de la Justicia de la Unión tomando como base los 2 conceptos de

violación que tienen que ver con el fondo del asunto, sin entrar al estudio de los demás conceptos de violación que también tienen que ver con el fondo del asunto: Por lo que se propone se estudien todos y cada uno de los conceptos de violación. (Héctor Manuel Medrano Hurtado, Tomo III, página 1799)

---

**ARTÍCULO 79.** La Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y los Jueces de Distrito, deberán corregir los errores que adviertan en la cita de los preceptos constitucionales y legales que se estimen violados, y podrán examinar en su conjunto los conceptos de violación y los agravios, así como los demás razonamientos de las partes, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, pero sin cambiar los hechos expuestos en la demanda de amparo o en el escrito de agravios. (Oscar Barrera Garza, Tomo III, página 2195)

---

Si la demanda de amparo por jurisprudencia firme es un todo, sin importar cierto desorden en que incurren algunos quejosos, ello debe llevar al juez a examinarla en su conjunto, hasta donde sea posible, evitando el amparo para efectos. Se propone la siguiente redacción del artículo 79 de la Ley.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Tribunales Colegiados de Circuito y los Jueces de Distrito, que conocer del juicio de amparo y de los recursos contemplados en esta ley, están obligados:

A corregir los errores que adviertan en la cita de los preceptos constitucionales y legales que estimen violados; II.- A examinar en su conjunto los conceptos de violación y los agravios, así como los demás razonamientos de las partes, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, pero sin cambiar los hechos expuestos en la demanda; III.- A examinar en primer lugar los conceptos de violación y agravios que tiendan a una concesión lisa y llana del amparo y IV.- A precisar los efectos de la concesión cuando ésta sea por vicios de forma o de procedimiento. (Mario Gómez Mercado, Tomo IV, página 2679).

---

**Artículo 80.** La sentencia que conceda el amparo tendrá por objeto restituir al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el efecto del amparo será obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija.

## **PROPUESTAS**

1.1 Antecedentes del principio de relatividad. Con el triunfo de la tendencia federalista en 1847, Manano Otero fue comisionado para redactar el proyecto de reformas que deberían introducirse a la Constitución de 1824, el que luego de aprobarse en sus términos y promulgarse pasó a formar parte del derecho como el Acta de Reformas de 1847, en cuyo artículo 25 se establecía: "Los tribunales de la Federación ampararán a cualquier habitante de la República en el ejercicio y conservación de los derechos que le concede esta Constitución y las leyes constitucionales, contra todo ataque de los Poderes Legislativo y Ejecutivo ya sea de la federación, ya de los Estados, limitándose a impartir su protección en el caso particular sobre el que verse el proceso, sin hacer ninguna declaración general, respecto de la ley o acto que la motivare".

Tal disposición es desde ese entonces principio rector del juicio de garantías, pues la protección de los gobernados por los tribunales de

amparo se concreta a protegerlos en el caso sobre el que verse el proceso constitucional, sin hacer ninguna declaración general de la ley o acto que motivare la protección.

1.1.1 La razón del principio de relatividad -según Otero y los Constituyentes de 1857- era evitar una declaración general de inconstitucionalidad que derogara o aboliera la ley reclamada, y que con ello provocara fricciones entre los poderes o pugnas violentas entre el Poder Judicial y el Poder Legislativo y aún el Ejecutivo.

1.1.2 Quizás los comentarios de Alexis de Tocqueville sobre el funcionamiento del Poder Judicial Federal de los Estados Unidos de Norteamérica, fueron los que inspiraran a Otero y a los Constituyentes de 1857, al sostener que las sentencias "no tienen por objeto más que el descargar el golpe sobre un interés personal y la ley sólo se encuentra ofendida por causalidad. De todos modos, la ley así censurada no queda destruida; se disminuye sí, su fuerza moral, pero no se suspende su efecto material. Sólo perece, por fin, poco a poco y con los golpes redoblados de la jurisprudencia".

1.2 Marco jurídico. El principio de relatividad de las sentencias de amparo se encuentra previsto en los artículos 107, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 76 y 80 de la Ley de Amparo.

El primero establece que todas las controversias de que habla el artículo 103 constitucional, se sujetarán a los procedimientos y formas del

orden jurídico que determine la ley, pero entre las bases que señala está la de que la sentencia será siempre tal, que sólo se ocupe de individuos particulares, limitándose a ampararlos y protegerlos en el caso especial sobre el que versa la queja, sin hacer una declaración general respecto de la ley o acto que la motivare.

Mientras el segundo dispone que las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo sólo se ocuparán de los individuos particulares o de las personas morales, privadas u oficiales que lo hubiesen solicitado, limitándose a ampararlos y protegerlos, si procediere, en el caso especial sobre el que verse la demanda, sin hacer una declaración general respecto de la ley o acto que la motivare; y el tercero, que la sentencia que conceda el amparo tendrá por objeto restituir al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el efecto del amparo será obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir por su parte, lo que la misma garantía exija.

1.3 De acuerdo con el contenido de los anteriores preceptos, los efectos de la sentencia de amparo en un caso concreto, no producen consecuencias en todos los casos similares ni respecto de cualquier afectado por la ley o por el acto reclamados, aun cuando guarde idéntica posición jurídica con el que obtuvo la protección constitucional, es decir, la sentencia de amparo no surte efectos erga omnes sino sólo respecto de quien demandó el amparo; de manera que la ley o acto reclamados

permanecen inalterados -desde el punto de vista de su validez o vigencia- para todos aquellos que no hayan sido el quejoso.

## 2.CASO DE EXCEPCION DE INAPLICABILIDAD DEL PRINCIPIO DE RELATIVIDAD

2.1 La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido jurisprudencia de que tratándose del litisconsorcio pasivo necesario, el principio de relatividad no debe aplicarse al ejecutarse la sentencia de amparo sino que sus efectos también se extienden a favor de los litisconsortes que no acudieron al juicio de garantías; ello con base en que, por virtud de ese fenómeno procesal, existe unidad y el interés es común entre todos los litisconsortes, por lo que no debe dividirse el juicio cuando se ordena reponer el procedimiento por uno de ellos sino mantener la unidad del juicio y la reposición debe abarcar a todos los litisconsortes. Dicha jurisprudencia<sup>41</sup> es del rubro: "SENTENCIAS DE AMPARO. CUANDO ORDENEN REPONER EL PROCEDIMIENTO, SUS EFECTOS DEBEN HACERSE EXTENSIVOS A LOS CODEMANDADOS DEL QUEJOSO, SIEMPRE QUE ENTRE ÉSTOS EXISTA LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO".

Y si bien su fundamento consiste en que los efectos del litisconsorcio pasivo sólo se producen dentro del proceso correspondiente, que éste es una unidad y que las consecuencias de una sentencia protectora sí deben alcanzar o beneficiar a los codemandados del quejoso en el juicio natural,

---

<sup>41</sup> Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo III, febrero de 1996 tesis P /J 9/96 página 78

por constituir -la reposición de su procedimiento- un acto necesario para el debido cumplimiento de la ejecutoria de amparo; la consideración de que esto no implica infracción al principio de relatividad, porque no se está en la hipótesis de que una sentencia de amparo se hubiese ocupado de individuos particulares o de personas morales diversas a quienes hubieren solicitado la protección federal, viene a demostrar no sólo la precisión del alcance de la jurisprudencia y lo absurdo de que se reponga un juicio por uno y quedara firme por otros, sino la ventana jurídica por la que pueda apartarse del principio de relatividad.

2.2 La ley sólo queda abrogada o derogada por otra cuyo nacimiento le preceda y que así expresamente lo declare, o bien que contengan disposiciones incompatibles entre una y otra, pero lo cual es obra del Poder Legislativo.

Al Poder Judicial de la Federación se le encomienda la decisión de inconstitucionalidad o no de una ley; y cuando la declara en sentencia de amparo, su efecto es que no se le aplique exclusivamente al gobernado que la haya reclamado, pero no se hace extensiva -tal inaplicación- a quienes no hayan demandado la protección constitucional. El Poder Legislativo debiera subsanar los errores en que incurra al aprobar la ley cuando se hagan notables por la sentencia de amparo; empero no lo hace, pese a la declaración de inconstitucionalidad, de ahí que incluso el mecanismo jurisprudencial resulta ineficaz para anular la ley inconstitucional que se declara a través del mismo.



La ley es general, por tanto, cuando la misma es declarada inconstitucional en beneficio del quejoso que la reclamó los efectos protectores de la sentencia de amparo también han de ser generales, pues con esa sentencia de amparo lo que se defienden son las garantías individuales que resultan vulneradas con el acto de la autoridad legislativa; de manera que si el juicio de amparo es el medio eficaz que los gobernados tienen para defender sus derechos públicos subjetivos que se trastocan por una ley o por un acto de autoridad, haciendo prevalecer la Constitución y sometiendo a la autoridad a la misma, es inconcuso que no hay razón para que a los gobernados -no quejosos- se les siga sometiendo a una ley que es inconstitucional so pretexto de la relatividad de las sentencias de amparo.

No debe perderse de vista que la institución del juicio de amparo ha sido acogida por el derecho positivo extranjero<sup>42</sup> y que, incluso, en el mismo actualmente presenta el avance que se comenta, en cuanto a que en materia de inconstitucionalidad de leyes la sentencia tiene efectos erga omnes; además de que en el derecho positivo mexicano ya ha desaparecido cualquier temor de pugna entre los Poderes de la Unión, tan es así que las sentencias que se dictan en las acciones de inconstitucionalidad<sup>43</sup>, los efectos de invalidez son generales.

---

<sup>42</sup> Se tiene presente al ilustre jurista mexicano Rodolfo Reyes, que llevara tan noble institución al derecho español

<sup>43</sup> Previstas en el artículo 105, fracción II, de la Constitución.

**3. PROPUESTAS DE REFORMAS A LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN, Y 76 Y 80 DE LA LEY DE AMPARO.**

**"Artículo 107.- ..... II. La sentencia será siempre tal, que sólo se ocupe de individuos particulares, limitándose a ampararlos y protegerlos en el caso especial sobre el que verse la queja, sin hacer una declaración general respecto del acto que la motivare, a excepción de cuando se trate de una ley".**

**"Artículo 76.- Las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo sólo se ocuparán de los individuos particulares o de las personas morales, privadas u oficiales que lo hubiesen solicitado, limitándose a ampararlos y protegerlos, si procediere, en el caso especial sobre el que verse la demanda, sin hacer una declaración general respecto del acto que la motivare, a excepción de cuando se trate de una ley".**

Se considera que en la declaración respecto de la ley o acto que motiva la demanda de amparo, es donde deben reformarse las disposiciones constitucional y reglamentaria que se analizan, dado que idénticamente establecen en lo conducente "...sin hacer una declaración general respecto de la ley o acto que la motivare" y se propone "...sin hacer una declaración general respecto del acto que la motivare, a excepción de cuando se trate de una ley".

En cuanto al artículo 80 de la Ley de Amparo, se propone como reforma la supresión de "al agraviado" y sustituir el verbo "restituir" por

"restitución", pues dispone: "La sentencia que conceda el amparo tendrá por objeto restituir al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada,..."; y deberá establecer: "La sentencia que conceda el amparo tendrá por objeto la restitución en el pleno goce de la garantía individual violada,..." (Victorino Rojas Rivera, Tomo IV, páginas 2658 a 2664).

---

Otra de las cuestiones graves que presenta la Ley de Amparo, por omisión, y que en la práctica, por el criterio sustentado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación trae como consecuencia la tramitación de miles de amparos innecesarios, a pretexto de la suplencia de la deficiencia de la queja, es por lo siguiente:

Es muy común, especialmente en materia penal, que al promoverse un juicio de amparo enderezado en contra de actos violatorios de las garantías consignadas por los artículos 16, Párrafo Segundo y 19 Constitucionales, aunque estén probadas en el juicio de amparo las violaciones de fondo de esos preceptos, que se traducen generalmente en la privación de la libertad del agraviado, al advertir los jueces de Distrito que el acto reclamado adolece de defectos de forma, invocando la suplencia de la deficiencia de la queja, resuelven el Amparo concediéndolo para el efecto de que subsanadas las violaciones de forma, la autoridad responsable en plenitud de jurisdicción vuelva a resolver sobre el libramiento o negativa de la orden de aprehensión, o de la formal prisión, según proceda.

Como consecuencia, la sentencia de amparo, dictada aparentemente para proteger al agraviado, por el contrario somete a éste a una larga,

injusta e innecesaria prisión preventiva, lo que resulta a todas luces antijurídico y absurdo, atendiendo a las siguientes razones:

1a.- Por que se rompe con el principio jurídico, de que lo accesorio sigue a lo principal, por lo que existiendo una violación de fondo que es la principal, debe dejarse a un lado la accesorio, que es la forma.

2a.- Porque si en el juicio de amparo en contra de una orden de aprehensión, se reclama la violación directa de un precepto constitucional, como lo es en el Párrafo Segundo del artículo 16 Constitucional, que se refiere a una garantía específica y no la general que contiene el Párrafo Primero de la misma disposición, al darse la violación directa al Párrafo Segundo, resulta indebido que se deje de proteger al agraviado de esa violación, y se le conceda el amparo por defectos de forma, lo que equivale sin lugar a dudas denegación de justicia constitucional.

Lo mismo sucede cuando se reclama la violación a las garantías contempladas por el Párrafo Primero del artículo 19 Constitucional, que justificándose la violación a esa garantía específica, se deniega la protección de la justicia de la unión por ese concepto, y tratando de aparentar que se proteja al inculcado se le concede el amparo para el efecto de que se suplan defectos de forma, que la mayoría de las veces no existen y constituye un medio para dejar de conocer el fondo de los amparos en contravención a lo dispuesto por los Artículos 1º y 103 Fracción I Constitucionales.

El resultado, totalmente injusto, toda vez de que estando el agraviado privado de su libertad, sufre, en esas condiciones en que se da la violación

a las garantías que otorgan los artículos 16, Párrafo Segundo, y 19, Párrafo Primero, para que se les dicte una nueva resolución que siempre es en sentido negativo para el quejoso, lo que motiva la promoción de nuevos juicios de amparo, totalmente innecesarios en contra de los nuevos Autos. Y si la autoridad responsable en su nueva resolución no suple las deficiencias de forma y no son tratadas, por cualquier causa, en el recurso de queja, de nueva cuenta el nuevo amparo será "concedido" para el mismo efecto de que se suplan las deficiencias de forma, pudiendo el agraviado estar indefinidamente detenido cuando se dan violaciones directas a los preceptos constitucionales mencionados.

3a.- La última razón, estriba que con esa perjudicial práctica, que sea negativamente por omisión de la Ley de Amparo y no por el sentido de la misma, ni de la constitución se eleva muy considerablemente el volumen de los Amparos en trámite en perjuicio de la administración de justicia, dado que la cantidad innecesaria de negocios retarda la administración de justicia y resta calidad a las resoluciones

En tales condiciones estimamos que el Capítulo X del Título Primero de la Ley de Amparo, debe adicionarse con una disposición que diga: "Cuando en el acto reclamado existan violaciones de fondo y además de forma, en la sentencia se estudiarán y decidirán primeramente las primeras; y solo en el caso de que produzcan solamente las segundas se concederá en contra de éstas el amparo y protección de la Justicia Federal." (Jorge Arellano Medina, Tomo II, páginas 813 a 816)

Son muchos los problemas de naturaleza laboral que se plantean ante los Tribunales de Trabajo, y que posteriormente a través del Amparo Directo, llegan al conocimiento de los Tribunales Colegiados de Circuito, que de acuerdo con las reformas del artículo 107 Constitucional, y a la Ley de Amparo que entraron en vigor el 15 de enero de 1988, son los competentes para conocer de los Juicios de Garantías de esa clase.

Ahora bien, los Tribunales Colegiados de Circuito casi invariablemente, cuando conceden el Amparo, precisan que éste se otorgue para un determinado efecto, lo que ocasiona además de retardo en la aplicación de la justicia, un cúmulo de trabajo para los propios Tribunales Colegiados, a quienes les regresan nuevamente los expedientes con nuevos Amparos, lo que motiva que en un Juicio Laboral se tengan que tramitar hasta tres Juicios de Amparo Directo, porque las responsables no interpretan correctamente el sentido de las ejecutorias. Asimismo, sucede que en algunas ocasiones se conceden los Amparos para efectos, por la falta de estudio de las responsables de una o dos pruebas, sin que éstas sean trascendentales para el fondo del negocio, lo cual también resulta determinante para que la administración de la Justicia Laboral sea pronta y eficaz:

Por lo que se propone:

1º.- Que tal y como lo señala el artículo 80 de la Ley de Amparo, la Autoridad Amparista debe señalar a las responsables como deben cumplir

las ejecutorias en que la justicia de la Unión ampara y protege a los Quejosos.

2º.- Sólo para el caso de que las pruebas que dejara de valorar las responsables tuvieran trascendencia y eficacia para el resultado del Juicio, conceder el Amparo, de lo contrario resulta inútil la concesión de la protección.

3º.- Finalmente, porque en nuestra Legislación de Amparo no existe la figura de conceder Amparos para efectos.(Pablo Enrique Barradas Anchondo, Tomo II, páginas 829 y 830)

---

66.- Una practica de los Tribunales Colegiados que retrasa la sentencia definitiva y que permite que sobre el mismo asunto se dicten dos, tres o más sentencias y hayan otras tantas demandas de amparo, es el llamado amparo para efectos.

El juicio de amparo es un juicio de nulidad, si se concede la protección de la Justicia Federal se anula el acto y si se trata de un juicio en contra de una sentencia, concedido el amparo, el tribunal federal reenvía los autos a la responsable para que en cumplimiento de la ejecutoria de amparo y de acuerdo con lo que ésta indique, anule o deje sin efectos, la resolución motivo del amparo y dicte otra nueva. Si en la resolución del amparo éste se concede respecto de la acción, de la excepción o de la condena y considera que el tribunal violó garantías, vincula a la responsable para dictar la nueva sentencia de acuerdo con el criterio sustentado por el tribunal

federal; pero si se examinan violaciones procesales, se hayan cometido durante el procedimiento o en la sentencia, y se considera fundada una, el tribunal federal concede el amparo para el efecto de que la autoridad repare la garantía violada, dicte una nueva sentencia con plena jurisdicción. Y este amparo para efectos causa que la responsable repare la garantía violada y dicte una nueva sentencia que será materia de otra demanda de amparo y así hasta cinco, que son las que me constan, aun cuando he sabido que en algún caso el número de demandas fue mayor. Y esto ocurre, porque el Tribunal Colegiado no estudia todo el problema y todas las violaciones alegadas, para resolver todas; incluso las de fondo, pues puede suceder, de hecho sucede, que una de estas es fundada y puede concederse el amparo en el fondo, evitando otro amparo.

Esta situación requiere ser remediada y considero que el único medio consiste en que el tribunal federal resuelva todos los problemas inherentes al juicio, como si fuere un tribunal de instancia vinculando a la responsable, y que sólo pudiera dictarse una sentencia para efectos, cuando hubiera que reponer el procedimiento, como por ejemplo, cuando debe admitirse y desahogarse una prueba. De esta manera ya no habrá amparo para efectos y los asuntos se resolverán con mayor rapidez. (Jesús A. Arroyo Moreno, Tomo II, páginas 1078 a 1080)

---

1.- Planteamos como tema fundamental la creación de un Capítulo sobre "el amparo en materia laboral" que podría incluirse como Título Primero, Capítulo II-Bis.



**Este Capítulo incluiría principalmente los siguientes aspectos:**

**A) En el amparo otorgado para efectos de que la autoridad responsable emita un nuevo laudo, estimamos que debe suprimirse el agregado de "con libertad de jurisdicción" y resolver de una vez completamente todos los puntos contenidos en la demanda de amparo.**

**La experiencia demuestra que esa libertad de jurisdicción conduce a que la autoridad responsable emita varios nuevos laudos, porque éstos son revocados sucesivamente por la autoridad del amparo; lo que ocasiona una enorme erogación económica para las partes, que tienen que cubrir honorarios a los abogados patrocinadores, y además cargas de trabajo excesivas e injustificadas para la Junta.**

**Cuando se concede el amparo no debe limitarse a un concepto de violación, sino resolver de una vez todos los puntos de la demanda, para evitar que se produzcan varias resoluciones de amparo bajo un mismo asunto; con los perjuicios inherentes para las partes y el retraso en la impartición de la justicia laboral; salvo que se trate de una excepción que deja sin materia el fondo del amparo como en el caso de la prescripción.**

**Establecer sanciones eficaces para evitar los abusos en la interposición del juicio de amparo, toda vez que hay un gran número de amparos interpuestos, con la sola finalidad de retardar el cumplimiento de los laudos. (Antonio Montes Peña, Tomo II, páginas 1254 y 1255)**

1.- De este capítulo de la Ley de Amparo tan sólo aclararía que los efectos de cualquier sentencia que se dicte en el juicio de garantías, ya sea que se trate de actos negativos y positivos, será restituir al quejoso en el goce de la garantía individual violada, incluso en aquellas violaciones que se originaron con motivo de una abstención u omisión en la que legalmente o inconstitucionalmente incurrió la autoridad, pues aún en esos casos antes de configurarse la omisión, el particular tenía pleno goce de sus garantías individuales, y no fue sino que hasta la autoridad se abstuvo de hacer lo que debía, cuando violó la esfera jurídica del gobernado, por lo que la manera reparar esa violación es haciendo lo que dejó de hacer.

En consecuencia creo que debería reescribirse el artículo 80 de la Ley de Amparo en ese sentido. (Jorge Antonio Galindo Monroy, Tomo III, página 1640)

---

El origen de esta propuesta se encuentra al considerar que el actual artículo 80 de la Ley de Amparo permite que, en ocasiones, al concederse el amparo y protección de la Justicia Federal, se deje en libertad de jurisdicción a la autoridad responsable para que emita un nuevo acto de autoridad; sin embargo, existen casos, específicamente en materia penal, tratándose de amparos contra autos de formal prisión, en los que existen violaciones constitucionales de forma que si bien son suficientes para amparar y proteger al quejoso, al no entrar al fondo del asunto, dejan en libertad de jurisdicción a la autoridad responsable para que emita un nuevo acto de autoridad, cuestión que en mi opinión, impide que los efectos de esa protección federal sean cumplidos cabalmente, ya que permite que la

autoridad responsable corrija el error cometido, involucrando al quejoso en un círculo que le niega la impartición de justicia garantizada en nuestra Carta Magna.

En efecto, si atendemos a las disposiciones del artículo 80 de la Ley de Amparo, encontraremos que no se indica la forma en que deberá ser restituida la garantía conculcada sino que señala que el "efecto" será el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía violada y a cumplir lo que la misma garantía exija.

Por lo anterior, considero factible la reforma a dicho numeral, mediante la adición que se propone, a fin de que, en materia penal, una vez que la autoridad amparista determine la existencia de violaciones constitucionales, otorgue la protección de la Justicia de la Unión con el efecto de restituir la garantía conculcada mediante la determinación expresa de dicha autoridad, lo que se materializará a través de los actos de ejecución de la autoridad responsable.

Podría pensarse que es una propuesta disparatada o sin sentido, pero no debe olvidarse que al concederse el amparo y protección federal es porque el acto reclamado es inconstitucional, y que su efecto, en las condiciones actuales, permite que la autoridad responsable corrija las deficiencias de forma que consideró para dictar el auto de formal prisión, pero que dejan en estado de incertidumbre al procesado, negándole el derecho a la impartición de justicia que posee todo gobernado. Es decir que, en tales supuestos, el procesado se encuentra sujeto a las determinaciones

de la responsable que no siempre se encuentra debidamente fundadas y motivadas.

En consecuencia, la propuesta que se expone obligaría a los jueces penales a estudiar con mayor profundidad los asuntos a su cargo, de manera que los autos de formal prisión que dicten se encuentren fundados y motivados, lo que permitirá sustentar su legalidad, en caso de que se impugnen en la vía constitucional.

Para hacer factible esta propuesta considero pertinente derogar la fracción VI del artículo 225 del código penal federal, consignada en el Título Decimoprimer, capítulo I denominado DELITOS COMETIDOS POR LOS SERVIDORES PÚBLICOS, que prevé el delito contra la administración de justicia.

Pues si bien es cierto que este delito se consuma cuando el juzgador dicta una sentencia ilícita, cuestión que, en principio, otorgaría al quejoso la posibilidad de presentar la denuncia correspondiente a fin de que, en su caso, se sancionara al juzgador, también es cierto que esa denuncia no tendría consecuencias legales en el juicio de garantías, pero que permitiría un marco de libertad para que los jueces penales pudieran ejercitar sus labores.

Por las razones expuestas, armonizando la propuesta de adición del artículo 80 de la Ley de amparo, a fin de que la concesión de la protección de la Justicia Federal tuviera efectos plenos, en conjunción con la derogación de la fracción VI del artículo 225 del Código Penal Federal, se

establecería la libertad plena para que, de manera responsable, los jueces penales emitieran sus resoluciones o sentencias, ya que en caso contrario, éstas serían revocadas mediante la intervención de la autoridad de amparo, teniendo como consecuencia jurídica fundamental, el fortalecimiento del Poder Judicial, tanto en el ámbito local como en el federal, así como la recuperación de la confianza de los gobernados en nuestras Instituciones encargadas de la impartición de Justicia.

"La sentencia que conceda el amparo tendrá por objeto restituir al agraviado en el pleno goce de la garantía violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, y cuando sea de carácter negativo, el efecto del amparo será el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija"

Para los efectos del presente trabajo, considero prudente mencionar algunos aspectos doctrinarios relativos a las sentencias de amparo, a fin de sustentar técnicamente la propuesta planteada.

## **2. La sentencia en el juicio de amparo**

"CONCEPTO. La sentencia en el juicio de amparo es el acto culminatorio de la actividad jurisdiccional pronunciado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tribunal Colegiado de Circuito, Juez de Distrito o superior del tribunal que haya cometido la violación en los casos que la ley así lo establezca, por el que resuelve si concede, niega o sobresee el

amparo solicitado por el quejoso en contra del acto reclamado a la autoridad responsable." <sup>(44)</sup>

De lo expuesto podemos inferir que en el juicio de garantías la sentencia definitiva será la que niegue o conceda el amparo de la justicia federal, no así la que sobresee el juicio en razón de que no resuelve el fondo del asunto.

### 3. Efectos de la sentencia de amparo

Por lo que se refiere a los efectos del amparo, el autor Chávez Castillo, en la obra Juicio de Amparo, señala: "Ahora bien, las sentencias que se dicten en el juicio de amparo solo exigen cumplimiento una vez que hayan causado ejecutoria aquellas en las cuales se haya concedido el amparo y protección de la justicia de la unión, toda vez que el efecto genérico de las mismas es el de restituir al agraviado en el goce de sus garantías individuales violadas; no así de aquellas sentencias de amparo en las cuales se haya negado la protección federal o se haya sobreseído en el juicio, pues en esta hipótesis indudablemente el acto reclamado queda intocado, dejando a la autoridad o autoridades responsables en aptitud de actuar conforme a sus atribuciones; en atención a lo expuesto, a continuación nos referiremos a los efectos de la sentencia de amparo, en el único caso en el que deben cumplimentarse, pues en los casos de negativa o sobreseimiento, no tienen efecto.

---

<sup>44</sup> Chávez Castillo, Raul. Juicio de amparo. Editorial Harla. México, 1994, págs. 266 y 267

El efecto de la sentencia concesoria del amparo y protección de la justicia de la unión, lo encontramos regulado en el art. 80 de la ley reglamentaria de los numerales 103 y 107 de la Constitución Federal, que textualmente dispone:

“La sentencia que conceda el amparo tendrá por objeto restituir al agraviado en el pleno goce de la garantía violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, y cuando sea de carácter negativo, el efecto del amparo será el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija”

Cuando en el amparo directo se aleguen violaciones al procedimiento origen del acto reclamado, la sentencia de amparo en caso de encontrar ciertas violaciones tendrá el efecto de que se anule el acto reclamado, o sea, la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, y además reponer el procedimiento a partir del momento en que ocurrió la violación; por otro lado, si no se encuentran dichas violaciones, como ya lo mencionamos con antelación, la autoridad de amparo estudiará los conceptos de violación en cuanto a las violaciones de fondo se refiere y por consiguiente, en caso de encontrarlos fundados, otorgará la protección federal solicitada, y el efecto será el que la autoridad responsable deje insubsistente el acto reclamado y resuelva en los términos precisados en la ejecutoria de amparo, purgando las violaciones que haya cometido en

perjuicio del quejoso, restituyéndolo así en el goce de las garantías individuales violadas.

No debemos olvidar que para que la sentencia concesoria del amparo tenga los efectos que se han mencionado, se requiere de forma indispensable que haya causado ejecutoria y, por tanto, tenga la calidad de cosa juzgada.” (45).

El Maestro Juventino V. Castro, en su obra “Lecciones de Garantías y Amparo” expresa, en relación con los efectos de las sentencias de amparo, que:

“El artículo 80 de la Ley de Amparo establece los efectos de las sentencias que concedan la protección constitucional solicitada.

Plantea dos hipótesis: aquella en que el acto reclamado sea de carácter positivo -en cuyo caso la sentencia estimatoria tendrá como efecto restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación-, y aquella otra en que el acto reclamado sea de carácter negativo -caso en el cual el efecto del amparo será obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía violada, y a cumplir con lo que la misma garantía exija.

---

<sup>45</sup> Op. Cit. págs 275 y 276



Por lo anterior, resulta incompleta la tesis jurisprudencial que a continuación se transcribe:

**Tesis 174. SENTENCIAS DE AMPARO.-** El efecto jurídico de la sentencia definitiva que se pronuncia en el juicio constitucional, concediendo el amparo, es volver las cosas al estado que tenían antes de la violación de garantías, nulificando el acto reclamado y los subsecuentes que de él se deriven.

Es incompleta la cita porque si el efecto de toda sentencia que concede el amparo fuere volver las cosas al estado que tenían antes de la violación -nulificando el acto reclamado y sus consecuencias-, tratándose de actos de carácter negativo esto no tendría el menor sentido.

Si se reclama, por ejemplo, la inconstitucionalidad o ilegalidad de un auto de formal prisión, que es un acto positivo, es correcto afirmar que la sentencia que concede el amparo anula al auto de formal prisión; y sus consecuencias materiales como lo es la pérdida de la libertad. Este amparo tendrá como efecto dejar las cosas como se encontraban antes de la violación de garantías, o sea al quejoso libre y sin tener que responder dentro de un proceso penal \* (<sup>46</sup>)

En estas condiciones, en mi opinión, resulta evidente y necesaria la reforma del artículo en cuestión para normar los efectos del otorgamiento de

---

<sup>46</sup> Castro V. Juventino. Lecciones de garantías y Amparo. Edit. Porrúa. México 1981. págs 501 y 502

la protección federal en materia penal y, sobre todo, en lo que se refiere al auto de formal prisión.

Finalmente cabe precisar que con la propuesta no se rompe el equilibrio constitucional entre la Federación y los Estados, en cuanto a las determinaciones respecto a los negocios judiciales que son competencia de aquella y de éstos, toda vez que el papel de la autoridad federal no sería el de revisar cuestiones de la competencia de los tribunales del fuero común sino sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado.

## **II. EL DELITO CONTRA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.**

En los meses de noviembre-diciembre del año anterior, en la revista especializada "El mundo del Abogado" se publicó un artículo denominado: "En defensa de los Jueces" de Jesús Zamora Pierce, en el que expone la actuación de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal en torno al ejercicio de la acción penal en contra de algunos jueces que, al parecer —como dice el autor citado— han emitido resoluciones que la Procuraduría no comparte. Sostiene el Lic. Zamora Pierce que con esa actitud se amenaza con destruir la independencia del Poder Judicial y, propone la derogación de la fracción VI del artículo 225 del código penal federal, que establece el delito en contra de la administración de justicia, que se consuma cuando se dicta una resolución de fondo o una sentencia definitiva que sean ilícitas por violar algún principio terminante de la ley o por ser contrarias a las actuaciones seguidas en juicio o al veredicto de un jurado.

En opinión del autor, el creador de la norma que se comenta, parece pensar que la legalidad o ilegalidad de una sentencia es un concepto objetivo, cuestión que resulta del todo alejada de la realidad y expresa:

“...El autor del artículo 225, VI, parece olvidar que el derecho procesal tiene ya firmemente establecido un procedimiento de control de la legalidad. Sólo su ignorancia pudo llevarlo a tipificar como delito la conducta de un juzgador al dictar una sentencia. Esa misma ignorancia nos lleva, en la aplicación del tipo, a soluciones monstruosas y a evidentes injusticias, así como a efectos que distorsionan la justicia y rompen el equilibrio entre los poderes, como veremos a continuación. Ante la posibilidad de error, natural en el hombre, el derecho procesal exige que se otorgue a las partes la posibilidad de impugnar ante el superior del juzgador, la sentencia de éste que estiman ilícita. Sólo queda firma, sólo es cosa juzgada, la sentencia contra la cual no pueden ya interponerse recursos.

A la luz de este procedimiento de control de la legalidad, resulta evidente su esencial contradicción con el tipo penal en estudio. ¿Podrá el ministerio público ejercer la acción penal en contra de un juez, imputándole el haber dictado una sentencia ilícita, antes de que se resuelvan los recursos de los que se valgan las partes, o únicamente cuando la sentencia esté firme, por haber sido confirmada en apelación?

El artículo 225, VI, no resuelve este problema. Su autor ni siquiera parece consciente de que existe. Si se permite que se proceda penalmente en contra del juez, sin esperar a que se resuelvan los recursos procedentes, pueden dictarse sentencias contradictorias. Así, por ejemplo, puede

condenarse penalmente a un juez por haber dictado sentencia ilícita, a pesar de que ésta haya sido plenamente confirmada en apelación.

El sentido común parece indicar que debiera esperarse al resultado de la apelación y que debiera procederse penalmente, tan sólo, en contra del juez cuya sentencia fue revocada por el superior. Pero, si así fuera, todos los jueces deberían estar en la cárcel, porque todos han dictado una sentencia que, posteriormente ha sido revocada en apelación. Es decir, a todo juez le ha dicho alguna vez su tribunal de apelación que su sentencia no se ajustaba a derecho; es decir que era ilícita"<sup>47</sup>)

Es evidente que, con independencia de las razones expuestas por el autor mencionado, esta hipótesis normativa constituye una amenaza para que los jueces emitan, particularmente, sentencias que pueden transformarse en ilícitas y con ello la posibilidad de que sean sujetos a proceso penal, lo que limita su actuación en el ejercicio de su función. Por tales motivos, me adhiero al sentido del artículo que se comenta, es decir a su derogación.

Ahora bien, la derogación del precepto, armonizada con la adición al artículo constitucional que se plantea, establecería plena libertad para los jueces.

---

<sup>47</sup> Zamora Pierce, Jesus. En defensa de los jueces. El mundo del abogado". Noviembre-diciembre de 1999. Págs. 29,30,31

**III. PROPUESTA DE ADICIÓN AL ARTÍCULO 80 DE LA LEY DE AMPARO.**

En el contexto expresado, considero que el referido numeral 80 de la Ley de Amparo, deberán adicionarse los siguientes párrafos:

"En materia penal, cuando el Juzgado de Distrito que conozca del juicio de amparo determine la existencia de violación de garantías por parte de la autoridad responsable, sean de forma o de fondo, deberá ordenar, en forma directa, la restitución de los derechos constitucionales conculcados.

El cumplimiento de dicha ejecutoria deberá realizarlo en forma inmediata la autoridad responsable quien, para efectos de esa resolución, no gozará de libertad de jurisdicción.

El mismo criterio deberá aplicarse por parte de los Tribunales Colegiados de Circuito y los Unitarios de Circuito, por conducto, también, de las autoridades responsables"

Por lo anterior, el nuevo artículo 80 deberá quedar en la forma que a continuación se indica:

"La sentencia que conceda el amparo tendrá por objeto restituir al agraviado en el pleno goce de la garantía violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, y cuando sea de carácter negativo, el efecto del amparo será el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el

sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija”

“En materia penal, cuando el Juzgado de Distrito que conozca del juicio de amparo determine la existencia de violación de garantías por parte de la autoridad responsable, sean de forma o de fondo, deberá ordenar, en forma directa, la restitución de los derechos constitucionales conculcados.

El cumplimiento de dicha ejecutoria deberá realizarlo en forma inmediata la autoridad responsable quien, para efectos de esa resolución, no gozará de libertad de jurisdicción.

El mismo criterio deberá aplicarse por parte de los Tribunales Colegiados de Circuito y los Unitarios de Circuito, por conducto, también, de las autoridades responsables”.

Se reitera que la propuesta de adición no implica que las autoridades, al otorgar la protección de la Justicia Federal invadan el ámbito competencial de las autoridades responsables, ya que únicamente intervendrán para restituir los derechos fundamentales conculcados, lo que impide que conozcan del juicio o procedimiento que dio origen a la instancia de amparo.

En efecto, el sustento de la propuesta radica en tres cuestiones fundamentales, que le permitirán a las autoridades de amparo intervenir, únicamente en los términos anotados, en los procedimientos y juicios

naturales y, en su caso, en los tramitados ante los Tribunales Colegiados de Circuito y Tribunales Unitarios de Circuito.

A) La primera consiste en la derogación de la fracción VI del artículo 225 del código penal federal, lo que permitirá la libertad e independencia absoluta de los jueces (locales y federales) para dictar sus resoluciones y, en forma correlativa, la obligación de que dichas resoluciones sean emitidas conforme a derecho, es decir, debidamente fundadas y motivadas, en la inteligencia de que al no hacerlo en términos legales, los juzgadores de amparo las revocarán, quedando constreñidos a cumplir las ejecutorias de amparo correspondientes, con los efectos, jurídicos y administrativos, derivados de una deficiente actuación y sin perjuicio de las sanciones del orden que procedan.

B) La segunda, radica en la existencia y funcionamiento del Consejo de la Judicatura Federal y los Consejos de las Judicaturas Locales, ya que, en palabras del actual presidente de la Suprema Corte de justicia de la Nación: "El Consejo de la Judicatura es un órgano de apoyo administrativo de instrumentación técnica al desarrollo material de los órganos jurisdiccionales y de control de la conducta judicial de jueces y Magistrados" y "...la función jurisdiccional debe recaer en Jueces independientes, capaces, imparciales, honorables y responsables, es decir, con un alto respeto a los valores morales y profesionales, sin que estas virtudes puedan ser trastocadas por imposiciones internas o externas ajenas al ejercicio propio de la función jurisdiccional.

Esto significa que la potestad del ejercicio jurisdiccional corresponde sólo a Jueces y Magistrados considerados en lo individual, puesto que por su naturaleza es inherente a cada uno de ellos; de ahí, la independencia y autonomía del Juzgador.

El Poder Judicial, como Institución, agrupa a los órganos judiciales que administran justicia, integrados por la unidad jurisdiccional.

La relación jerárquica que surge por su sola pertenencia a una estructura orgánica no puede extenderse al ejercicio de la función judicial, pues la dependencia que se crea solo se da dentro del ámbito jurídico, cuando así lo establezcan las leyes.

Es independiente el que no depende de otro, el que goza de autonomía propia en el ejercicio de su función judicial.

La independencia judicial supone la ausencia de subordinación, el no reconocimiento de un mayor poder o autoridad administrativa.”<sup>(48)</sup>

En concordancia con lo expresado, considero conveniente señalar que el segundo párrafo del artículo 94 de la Constitución General de la República, establece que “La administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial de la Federación, con excepción de la Suprema Corte de

---

<sup>48</sup> Góngora Pimentel, Genaro David Toma de protesta de los Consejeros de la Judicatura Federal LEX, difusión y análisis Tercera Época Año V, agosto de 1999, número 50. pág 6



Justicia de la Nación, estarán a cargo del Consejo de la Judicatura Federal en los términos que, conforme a las bases que señala esta Constitución, establezcan las leyes” y el sexto párrafo del numeral 100 del ordenamiento invocado expresa que “La Ley establecerá las bases para la formación y actualización de funcionarios, así como para el desarrollo de la carrera judicial, la cual se regirá por los principios de excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo e independencia.”

Ahora bien, con la creación del Consejo de la Judicatura Federal y con la directriz expresada por su actual Titular, me lleva a reflexionar en la posibilidad del mejoramiento de los órganos encargados de la impartición de justicia. Sobre este tema el Ministro Gudiño Pelayo ha expresado: “ La carrera judicial ha sido ampliamente reglamentada por la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la que en su artículo 112 establece que el ingreso y promoción para las categorías de Magistrados de Circuito y Juez de Distrito se hará a través de concurso interno de oposición y para ingresar como actuario o secretario se requiere del acreditamiento de un examen de aptitud. Para la evaluación del concurso de oposición libre e interna, el segundo párrafo de la fracción III del artículo 114 del mismo cuerpo legal dispone: “Al llevar a cabo su evaluación, el jurado tomará en consideración los cursos que haya realizado el sustentante en el Instituto de la Judicatura, la antigüedad en el Poder Judicial de la Federación, el desempeño, el grado académico y los cursos de actualización y especialización que haya acreditado en términos del reglamento que dicte el Consejo de la Judicatura

Federal. Cuando ningún sustentante alcance el porcentaje mínimo requerido, el concurso se declarará desierto.”<sup>(49)</sup>.

En atención a lo expresado es posible colegir que la existencia del Consejo de la Judicatura Federal supone no sólo la regulación de la función judicial sino, también, la mejoría de sus integrantes en aspectos profesionales y personales, lo que posibilitará indudablemente, la independencia de los integrantes del Poder Judicial federal para el ejercicio de su función, sin la existencia del delito contra la administración de justicia que supone, también, una presión para el ejercicio profesional de los jueces.

C) La tercera consiste en el razonamiento que considera los argumentos jurídicos expresados en este trabajo, los que interpretados de manera integral, llevan a concluir que es factible la adición propuesta al artículo 80 de la Ley de Amparo, cuestión que implica, por un lado, mayor responsabilidad y cuidado por parte de los jueces penales al emitir sus determinaciones, especialmente en los autos de término constitucional, sin la existencia de la fracción VI del artículo 225 del código penal federal, esto es, en un marco de absoluta libertad e independencia; y, por otro lado, con la plena certeza de que al incurrir en un análisis ligero de las constancias de autos para dictar el auto de término constitucional, provocará la intervención de la autoridad de amparo para subsanar, directamente la violación de garantías en que hubieran incurrido.

---

<sup>49</sup> Gudiño Pelayo, José de Jesús. Independencia y carrera judicial LEX, difusión y análisis. Tercera Época Año V, abril de 1999, número 46 págs. 8 y 9

En efecto, al existir violaciones constitucionales de forma en perjuicio del quejoso, si la autoridad amparista concede la protección federal, dicho acto constituye la base para que le sean restituidos tales derechos conculcados y su efecto debe ser el de la libertad inmediata.

No es obstáculo para ello el que no se hubiese analizado el fondo del asunto, toda vez que la obligación fundamental del juzgador de origen es resolver debidamente el asunto en cuestión, es decir que en el marco de libertad e independencia que obtendrá con la adición, se le impone la obligación, también adicional, de fundar y motivar debidamente sus actos de autoridad, puesto que nuestro sistema jurídico establece derechos y obligaciones tanto para los gobernados como para las autoridades. En este sentido, Manuel Loaiza Nuñez, al referirse al "Derecho a la Justicia", señala:

"El derecho, acción o posibilidad de acudir ante los tribunales establecidos para exigir justicia, tiene componentes esenciales que no se agotan, pero si que le dan una configuración, siendo los más significativos: Igualdad, Seguridad, Legalidad y Supremacía Constitucional.

#### **IV.1- Igualdad ante la Ley.**

Es de explorado derecho que cuando el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que "En los Estados Unidos Mexicanos todo individuo gozará de las garantías que otorga esta Constitución, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse, sino en los casos y con las condiciones que ella misma establece", no únicamente

establece una garantía de igualdad jurídica de todos ante la ley, ya sean blancos, morenos, negros, chaparros, pobres, ricos, hombres, mujeres, niños, personas morales o físicas, lo cual de por sí es de la mayor relevancia, sino que también fija un límite a la actuación del poder público frente a los gobernados. En efecto, el dispositivo legal en comento consta de dos partes fundamentales:

a) El reconocimiento de las garantías consignados por la Constitución en beneficio de todos los gobernados, sin distinción de ninguna especie; y

b) La obligación del poder público de respetar esas garantías, las cuales sólo podrán restringirse o suspenderse en los casos de excepción previstos por la propia ley fundamental, y cumpliendo con los requisitos y condiciones que ella misma establece.

En ese orden de ideas, todo órgano estatal debe apegarse estrictamente a lo preceptuado por la Ley Suprema, so pena de incurrir en violación de garantías, las cuales deben serle restituidas al quejoso en el amparo, sin condicionamientos, y, en su caso, fincar a la autoridad infractora las responsabilidades civiles, administrativas o penales que en cada caso procedan.

Al respecto resulta aplicable la jurisprudencia visible en el apéndice de 1975, Octava Parte, Pleno y Salas, Tesis 46, pág. 89, que textualmente dice:

**"AUTORIDADES.** Las autoridades sólo pueden hacer lo que la Ley les permite".

Dicha situación que pudiera estimarse intimidatoria e inhibitoria del quehacer público, no lo es en absoluto, ya que de conformidad con nuestro derecho positivo vigente la autoridad únicamente puede hacer aquello para lo que esta expresamente facultada; en tanto que el particular, el gobernado, tiene un amplísimo espacio jurídico de libertad, que le permite hacer todo lo que no le esté expresamente prohibido, además de lo que le autorice la norma cumpliendo con los requisitos y condiciones previstos en la legislación específica de la materia de que se trate.

De lo anterior se infiere que el poder público, los órganos del Estado, en sus tres niveles de gobierno y cualesquiera que sea de los poderes debidamente establecidos Ejecutivo, Legislativo o Judicial, están obligados jurídica y políticamente a servir al pueblo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 de nuestra Carta Magna..."<sup>(50)</sup>

Por último, en una propuesta sena no pueden omitirse las posiciones contrarias, bajo el nesgo de caer en la subjetividad o en la parcialidad, por ello, es preciso señalar que nuestro más alto tribunal, a través de la Primera Sala, emitió la Junsprudencia 20/94, cuya denominación es: "AUTO DE FORMAL PRISIÓN INFUNDADO E INMOTIVADO. LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBE SER LISA Y LLANA", en la que analiza

---

<sup>50</sup> Loiza Nuñez Manuel. La Justicia: derecho y obligación. LEX, difusión y análisis. Tercera Época. Año V, junio-julio de 1999, números 48 y 49, págs. 8 y 9.

resoluciones contradictorias entre tribunales colegiados, siendo importante transcribir lo siguiente:

Ahora bien, el que se conceda a la parte quejosa el amparo de manera absoluta, no significa que como consecuencia ineludible la autoridad judicial responsable deba decretar la libertad del quejoso, pues al caso la restitución de la garantía violada conforme al artículo 80 de la Ley de Amparo, sería para en ejecución de la sentencia, en el plazo a que se refiere la primera parte del párrafo inicial del artículo 105 de la mencionada ley, la autoridad resuelva lo procedente en términos de lo dispuesto en el artículo 19 constitucional, es decir, al quedar invalidada la determinación constitucional en el sentido de formal prisión, lo técnicamente adecuado no es dejar incierta la situación jurídica del quejoso inculpado, ni obligar a la autoridad responsable a definirla en determinado sentido, ya que el amparo en tal caso se limitó a examinar cuestiones de forma y no de fondo, por lo que lo correcto, es dar opción a la propia autoridad para que dentro del ámbito de su jurisdicción emita una nueva resolución, pero sin darle lineamientos, aún de forma, en cuanto a la manera de hacerlo".

En mi opinión el razonamiento anterior es el que debe modificarse, ya que:

Soslaya las violaciones de forma que se cometan por parte del juzgador;

Interpreta la consecuencia del otorgamiento de la protección federal, conculcando las garantías individuales;

Interpreta, sin el debido sustento legal, los denominados "efectos" que el propio artículo 80 omite;

Esta argumentación encuentra también su fundamento en el párrafo que se transcribe y que forma parte del razonamiento de la Primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis referida:

"...no omite considerar esta Sala que, con una finalidad estrictamente doctrinal y tendiente al estricto cumplimiento de sus decisiones por parte de las autoridades responsables, los tribunales de amparo han establecido la práctica de que, en los casos que conceden la protección constitucional, abundan sobre las consecuencias inherentes a ello, o bien respecto a sus efectos si se quiere utilizar esta expresión, lo que si bien técnicamente es innecesario ya que conforme a lo establecido en el artículo 77, fracción III, de la Ley de Amparo, la sentencia debe concluir por establecer con claridad y precisión el sobreseimiento, concesión o negativa del amparo solicitado; empero, se reitera, tal forma de actuación encuentra como justificantes razones de índole pragmático, tendientes a que las autoridades responsables que habrán de cumplir a final de cuentas con la ejecutoria de amparo, se encuentren en la aptitud de tener la claridad suficiente para cumplimentarla de manera correcta y en sus términos."

Por lo expuesto, a manera de conclusión, considero que es factible la propuesta de adición por lo siguiente:

a) No se encuentran normados los "efectos" de la sentencia concesoria de amparo en materia penal,

b) La derogación de la fracción VI del artículo 225 del código penal federal otorgaría mayor libertad a los jueces penales para emitir sus determinaciones;

c) La existencia del Consejo de la Judicatura Federal supone la vigilancia en las actuaciones de los miembros del Poder Judicial Federal, cuestión que otorga una garantía en la impartición de justicia;

d) Se obligaría a los jueces a fundar y motivar debidamente sus determinaciones, en la inteligencia de que los errores cometidos repercutirían en su labor cotidiana, lo que traería como consecuencia una mayor aplicación y estudio en sus labores; y

e) Los litigantes tendríamos acceso a la impartición de justicia que anhelamos y los gobernados volverían a creer en el Poder Judicial, como base para un mejor desarrollo de la vida en sociedad. (Raúl Miguel Arriaga Escobedo, Tomo III, páginas 1729 a 1752)

---

COMENTARIO: COMO PUEDE ADVERTIRSE, LA LEY VIGENTE NO CONTEMPLA LO QUE HA DADO EN LLAMARSE "EL AMPARO PARA EFECTOS"; SIN EMBARGO, EN UNA PRÁCTICA INSANA ALGUNOS JUZGADOS DE DISTRITO Y TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO, CONCEDEN LA PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL "PARA



DETERMINADOS EFECTOS", CIRCUNSTANCIA QUE HA GENERADO QUE EN UN MISMO JUICIO NATURAL EXISTAN VARIOS AMPAROS, LO QUE EVIDENTEMENTE RETARDA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. DE AHÍ QUE DEBAN DISEÑARSE MECANISMOS DE REFORMA A ESTE PRECEPTO, PARA EVITAR LA REITERADA CONCESIÓN DE AMPAROS EN EL JUICIO DE INSTANCIA, SALVO, POR SUPUESTO, EN VIOLACIONES PROCESALES QUE COMETA LA AUTORIDAD. (José Francisco Becerril Mendoza, Tomo III, página 2047)

---

Los actos de autoridad, son el presupuesto necesario para la existencia de un juicio de amparo, por lo que en primer lugar, sería sano que se adoptara la tendencia que se estudien primero los conceptos de violación que puedan conducir al amparo liso y llano y solo en caso de no haber tales, se entre al estudio de las violaciones procesales.

Es decir, si en materia de suspensión se puede aceptar la apariencia del buen derecho, en materia del fondo también puede adoptarse dicha tesis para resolver el fondo.

Por otra parte, el amparo "para efectos" únicamente debería proceder en contra de actos de autoridad que nacen de la actividad del estado resolviendo una disputa entre particulares, y en consecuencia, al promoverse el juicio de amparo, aparece un particular como tercero perjudicado, y nunca en contra de actos, en los que el acto de autoridad nace de la actividad jurisdiccional del estado, dirimiendo controversias entre

sí mismo y un particular, trátase de recursos o juicios administrativos, en donde aparece una entidad como tercero perjudicado.

Razón por la cual se debería modificar la actual redacción del artículo 80 de la Ley de Amparo, para quedar al tenor siguiente:

**TEXTO PROPUESTO. ARTÍCULO 80.** La sentencia que conceda el amparo tendrá por objeto restituir al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación. El amparo para efectos únicamente procederá en contra de actos autoridad que emanen de la actividad del estado resolviendo una controversia entre particulares (Luis Orlando Hernández, Tomo III, páginas 2107 y 2108)

---

Se establece en la Ley de Amparo, en su artículo 80, lo que sigue:

“La sentencia que concede el Amparo tendrá por objeto restituir al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el efecto del amparo será obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exige”.

Por su parte, el artículo 81, de la propia Ley, asimismo estatuye:

“Cuando en un juicio de amparo se dicte sobreseimiento, se niegue la protección constitucional o desista el quejoso, y se advierta que se promovió con el propósito de retrasar la solución del asunto del que emana el acto reclamado o de entorpecer la ejecución de las resoluciones respectivas, o de obstaculizar la legal actuación de la autoridad, se impondrá al quejoso o a sus representantes, en su caso, al abogado, o a ambos, una multa de diez a ciento ochenta días de salario, tomando en cuenta las circunstancias del caso”.

De la transcripción anterior, se observa, que el legislador fue injusto al redactar ambos artículos. En efecto, del examen del artículo 80 claramente aparece que, cuando se conceda la protección constitucional, el objeto de la sentencia será obligar a la autoridad responsable a restablecer las cosa al estado que guardaban antes de la violación (en caso de que el acto sea de carácter positivo), o bien, a obrar en el sentido de respetar la garantía de que se trata (cuando el acto es de carácter negativo).

Por el contrario, al redactar el artículo 81, estableció una sanción pecunaria, de diez a ciento ochenta días de salario, para el quejoso, a su abogado o a ambos, en los casos en que se dicte sentencia de sobreseimiento, se niegue la protección constitucional o se desista el quejoso; y que dicha sanción será impuesta por el resolutor, cuando advierta de que el agraviado promovió el juicio de amparo, con el propósito de retrasar la solución del asunto o entorpecer la ejecución de la resolución respectiva, o de obstaculizar la legal actuación de las autoridades, o sea,

como dice el artículo 3-bis, segundo párrafo de la propia ley de amparo, cuando se advierta que el infractor actuó de mala fe.

Para modificar esa injusticia, es decir, que el legislador no trata por igual a las partes en el juicio de amparo, se propone que la autoridad responsable, además de restablecer las cosas del estado que guardaban antes de la violación, se le debe separar del ejercicio del cargo cuando se justifique, que en el término de un año, en doce casos distintos incurrió en violación de garantías.

#### **CONSIDERACIONES O MOTIVOS QUE SUSTENTAN LA PROPUESTA:**

Por publicaciones de la prensa, continuamente se tiene conocimiento de que año a año aumenta el número de juicios de amparo que se tramitan ante los distintos Juzgados de Distritos en la entidad; de ese número total de juicios, desde luego, algunos son sobreseídos, otros llegan a sentencia, en la que se niega la protección constitucional y también otros llegan a sentencia en la que se concede el Amparo de la Justicia de la Unión.

Muchos de los casos en los que se concede la protección constitucional, se refieren a asuntos penales, concretamente órdenes de aprehensión y autos de formal prisión, en donde el hecho en sí no es delictuoso, o bien, no se reúnen los elementos necesarios para comprobar el cuerpo del delito o para hacer probable la responsabilidad y no obstante estas deficiencias, las autoridades responsables emiten sus

determinaciones, que no resisten al análisis del Juicio Constitucional de Amparo.

En otras ocasiones, los jueces de lo civil que conocen de la materia mercantil, pronuncian sentencias contrarias a las constancias de autos, que motivan que el demandado tenga que recurrir ante los Tribunales Colegiados a demandar la inconstitucionalidad de dichas resoluciones y en los casos que se conocen, las sentencias fueron favorables a los intereses de los quejosos.

Por todo ello, se justifica adicionar el Capítulo II del Título Quinto de la Ley de Amparo, con un artículo que específicamente se refiera a la separación de su cargo, que se debe imponer a los funcionarios que incurran, en forma sistemática, en violación de garantías individuales.

**LA REDACCION QUE RESULTARIA AL INCORPORAR SUS  
COMENTARIOS SERIA LA SIGUIENTE:**

**Artículo.... La Suprema Corte de Justicia de la Nación, con base en las ejecutorias relativas y los informes que estimare pertinentes, podrá ordenar la separación de los titulares de las dependencias, que aparezcan como autoridades responsables en los diversos juicios de garantías, cuando se justifique, que en el término de un año, incurrieron en violación de garantías individuales, en doce casos distintos, independientemente de las demás sanciones que en su caso procediere. (Manuel Jesús Vallardo Castilla, Tomo IV, páginas 2305 a 2308).**

Para cumplir el imperativo constitucional de rapidez en la administración de justicia, en reparación al agravio hecho valer en el amparo, la sentencia que concede el mismo tendría el efecto jurídico de ser la verdad legal, evitando, las sentencias conocidas "para efectos".

Las sentencias de amparo se equiparan actualmente a sentencias de anulación, por el principio de que la autoridad de amparo no puede sustituir a la demandada, pero este amparar para efectos no impide que las autoridades responsables muchas veces al dar cumplimiento al amparo causen otro agravio diferente al quejoso o insistan en el mismo.

Si en un procedimiento llevado ante una autoridad jurisdiccional del fuero ordinario ya se agotaron todas las fases procesales resulta claro que ya se puede juzgar el negocio, y por ello la autoridad de amparo precisamente en reparación del agravio debe dar la solución del caso, señalando las bases de cumplimiento.

En la practica resulta irrelevante muchos amparos que se conceden por ejemplo en materia civil por el hecho de no recibirse una prueba, aunque ella sea intrascendente o cuando se le declare confeso, se ampara para efectos trayendo como consecuencia que un negocio se concluya después de promover varios amparos directos.

La reforma propuesta consiste en adicionar el artículo 80 de la Ley quedando redactada en los siguientes términos:

**"La sentencia que conceda el amparo tendrá por objeto restituir al agraviado en el pleno goce de la garantía constitucional violada, señalando las bases de cumplimiento, y restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el efecto del amparo será obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir por su parte lo que la misma garantía exija". (Javier Herrera Anaya, Tomo V, páginas 196 y 197)**

---

**En los términos del párrafo Segundo del artículo 107 Constitucional, la sentencia que concede el amparo solo tendrá efectos en el asunto particular controvertido sin hacer una declaración general respecto de la ley que la motiva.**

**Cuando se declara inconstitucional una ley por determinación del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resulta evidente que no solamente se encuentra inserto el interés del promovente, sino que una ley de carácter general y obligatoria que es contraria a la constitución sigue siendo obligatoria para los gobernados, lo cual es impropio que así se reconozca por el órgano encargado de la vigencia constitucional.**

**El órgano legislativo fue parte en el procedimiento que reconoció la inconstitucionalidad, y cuando esta se da por una mayoría calificada de Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la sentencia debe ser causa para obligar a la entidad legislativa a emitir otra ley en la que**

eliminado los aspectos de inconstitucionalidad reconocida emita otra que vaya de acuerdo con la Constitución.

El plazo de cumplimiento que implica realizar los estudios conducentes y someterlos a consideración de la soberanía popular no debe de exceder de 4 meses contados a partir de la notificación en que se indique que causo estado.

No se trata que el Poder Judicial se encuentre por arriba del Poder Legislativo, los poderes tienen igual jerarquía pero todos ellos deben ajustar sus actos a la Constitución la que su interpretación corresponde al Poder Judicial en los juicios de amparo y en las acciones de inconstitucionalidad. (Javier Herrera Anaya, Tomo V, páginas 200 y 201)



**Artículo 81.**

**Cuando en un juicio de amparo se dicte sobreseimiento, se niegue la protección constitucional o desista el quejoso, y se advierta que se promovió con el propósito de retrasar la solución del asunto del que emana el acto reclamado o de entorpecer la ejecución de las resoluciones respectivas o de obstaculizar la legal actuación de la autoridad, se impondrá al quejoso o a sus representantes, en su caso, al abogado o a ambos, una multa de diez a ciento ochenta días de salario, tomando en cuenta las circunstancias del caso.**

**PROPUESTAS**

**El Poder Judicial de la Federación, mediante tesis aisladas, ha sostenido que no existe mala fe, si el quejoso utiliza, "aun reiteradamente, los medios que la ley pone al alcance de los gobernados para conservarla, entre los cuales se encuentra el juicio de amparo... ya que no puede considerarse que el quejoso tuviera la intención de retrasar el asunto del que emanó el acto reclamado o de obstaculizar la legal actuación de la autoridad, porque en todo momento el fin perseguido fue la preservación de su libertad", no hay abuso en el juicio de garantías y es improcedente la multa impuesta al quejoso de acuerdo a los artículos 3º y 81 de la Ley de Amparo, "en virtud de que advirtió que el quejoso promovió un segundo juicio de garantías en contra de las mismas autoridades y contra los mismos actos reclamados que señaló en su primer juicio, en el que reclamó la orden de aprehensión dictada en su contra, debe estimarse que tal actuación no se hizo de mala fe, puesto que está de por medio su libertad personal, no**

siendo dable, a juicio de este Tribunal Colegiado, imponer multa alguna, pues de ninguna manera podría pensarse que su promoción tiende a retrasar la solución del asunto, de entorpecerlo o de obstaculizar la actuación de la autoridad, asimismo, no procede la imposición de la multa, por considerar que éste gestionó el amparo con el deliberado propósito de entorpecer la acción de la justicia, si de las constancias de autos se advierte que el quejoso promueve la demanda de garantías en defensa de su libertad. Los artículos 3º y 81 analizados, no contemplan ninguna excepción. Al parecer, se interpretó el artículo 211 fracciones I y II, y se aplicó analógicamente la ley:

"Se impondrá sanción... al quejoso que en un juicio de amparo afirme hechos... siempre que no se reclamen algunos de los actos a que se refiere el artículo 17". "Al quejoso en un juicio de amparo que para darle competencia a un Juez de Distrito, designe como autoridad ejecutora a una que no lo sea, siempre que no se reclamen algunos de los actos a que se refiere el artículo 17".

No es congruente acoger de manera absoluta tales criterios, pues se corre el riesgo de abusar del juicio de amparo, so pretexto de la defensa de la libertad. No procede la multa, en aquellos casos, única y exclusivamente, cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento judicial, deportación o destierro, o algunos de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal (artículo 17 de la Ley de Amparo vigente).

En realidad, no existe excepción para abusar de amparo. Jamás podrá autorizarse al individuo desnaturalizar esta noble institución jurídica mexicana. (José de Jesús Quesada Sánchez, Tomo I, páginas 320 a 322)

---

Como se advierte de la lectura de estos preceptos legales (3º bis, 81 y 103), tienen íntima vinculación con el tema de que trata este trabajo, pues las tres disposiciones legales contemplan la posibilidad de imponer una multa al quejoso, o al recurrente, a sus representantes, en su caso, a su abogado, o a ambos, cuando en el juicio de amparo se dicte el sobreseimiento, se niegue la protección constitucional, o desista el quejoso, si se advierte que se promovió el juicio con el propósito de retrasar la solución del asunto del que emana el acto reclamado o de entorpecer la ejecución de las resoluciones respectivas, o de obstaculizar la legal actuación de la autoridad, y tratándose del recurso de reclamación, si se interpuso sin motivo, y en ambos casos, si el infractor actuó de mala fe, según apreciación de la autoridad que conozca del juicio constitucional.

Conviene precisar, que la mala fe que se requiere en el infractor (quejoso, recurrente, sus representantes, o su abogado), y a la cual hace referencia el segundo párrafo del artículo 3o Bis de la Ley de Amparo, según se puntualizó en el dictamen de las Comisiones Unidas Primera de Justicia y Primera Sección de Estudios Legislativos, de dieciséis de diciembre de 1983, en donde se discutió la modificación de los montos de las multas, propuestas en la iniciativa Presidencial respectiva, tuvo por objeto evitar la práctica viciosa de algunos litigantes que acuden al amparo

con fines dilatorios; pero, a la vez, se procuró no desalentar a los gobernados para el ejercicio de la acción de amparo, ni para la interposición de los recursos, así como tampoco sancionar con multas a los agraviados de bajos ingresos.

Siendo así, la práctica ha demostrado que la finalidad perseguida con esa reforma legal, no ha alcanzado el éxito deseado, porque se advierte que el litigante que formula la demanda de amparo, en favor del quejoso, a sabiendas de que se va a concluir con un sobreseimiento, por ser indefectiblemente improcedente la acción constitucional, porque muchas veces ya ha existido con antelación otro juicio de amparo promovido por el mismo quejoso, cuestionando el mismo acto reclamado, de iguales autoridades responsables; o bien porque es notoriamente extemporánea su promoción, o lo que es aún más grave, en ocasiones se presenta el amparo con el único objeto de entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva que ha alcanzado la autondad de cosa juzgada, pues respecto de ella, ya se agotó el juicio correspondiente en todas sus instancias, e incluso la sentencia ya ha sido matena de examen en un juicio de amparo directo; sin embargo, a través de un nuevo juicio de amparo indirecto promovido por quien, en ocasiones se dice tercero extraño (muchas veces sin serlo), cuestiona que debió ser llamado a ese juicio, y de esta manera, al obtener del Juez de Distrito la suspensión del acto reclamado, con una garantía que resulta muy cómodo entregarla por el quejoso, ya que luego vendrá la práctica de acciones dilatonas a fin de retrasar la resolución final del juicio en primera instancia, dentro del breve término en que debe pronunciarse conforme a la ley, y para ello, se invocará por el impetrante la necesidad de desahogar pruebas fuera del lugar del juicio, y se propondrán otras a

sabiendas de que son totalmente improcedentes, con el objeto de que sean desechadas, y así dar paso al recurso de queja, con el cual, se logrará la suspensión del procedimiento hasta que este medio de impugnación sea resuelto, y así sucede que al llegar finalmente al momento de dictarse la sentencia, el juzgador constitucional se encontrará con que, aún justificado plenamente que el juicio de garantías se promovió con la deliberada intención de retrasar la solución del asunto del que emana el acto reclamado, o de entorpecer la ejecución de la resolución respectiva, estará imposibilitado para imponer alguna sanción al quejoso, porque éste, en ejercicio legítimo de su propio derecho, habrá señalado los estrados del juzgado para oír sus notificaciones, y así, aun cuando se le imponga alguna multa, la autoridad exactora estaría imposibilitada para hacerla efectiva; y por cuanto a su abogado, éste conocedor del derecho, se habrá escudado en el anonimato para evitar cualquier sanción a su conducta, falta de ética profesional, al promover un juicio que de antemano sabía estaba destinado al sobreseimiento, por actualizarse algunas de las causales que al efecto establece el artículo 73, de la Ley de Amparo, y así, impunemente podrá seguir aconsejando a los quejosos que usen el juicio de amparo como medio para entorpecer la pronta administración de la Justicia tutelada por el artículo 17 Constitucional.

En términos semejantes acontece cuando el abogado que patrocina al quejoso, sabe anticipadamente, que el acto dictado por la autoridad responsable, se encuentra perfectamente ajustado a la ley que lo rige, y por ende, que no infringe ninguna garantía tutelada a favor del quejoso, y no obstante, con el objeto de retrasar la resolución del asunto intenta el juicio de garantías en el que, sin poder cuestionar alguna ilegalidad del acto, se

concreta a expresar a manera de conceptos de violación, los antecedentes del juicio natural, la forma en que se han desahogado las pruebas, transcribirá las sentencias de primera y segunda instancias, así como el contenido íntegro de los artículos 14 y 16 constitucionales, y con ello, después de diez hojas o más, se concretará a pedir que le sea concedida la protección constitucional al quejoso.

En esas circunstancias, resultará notorio la mala fe del peticionario de garantías, que en realidad debe ser la del abogado que lo induce a la conducta procesal que observó en el trámite del juicio de garantías, que es el único dato objetivo que puede tomar en cuenta el juzgador para determinar la buena o mala fe en un procedimiento, y de esta manera, si el quejoso no señala su domicilio particular, sino sólo los estrados del tribunal para oír notificaciones, difícilmente podrá ser objeto de una multa en los términos de las disposiciones legales antes transcritas; y en cuanto a su abogado, en esas ocasiones cuidará de no aparecer como tal en la demanda de garantías, y para ello bastará no proporcionar su nombre y menos su domicilio, para no ser objeto de alguna sanción, toda vez que esto último no lo exige la actual Legislación de Amparo.

Lo propio acontece, en términos más o menos semejantes, cuando el quejoso hace valer el recurso de reclamación, contra los acuerdos de trámite dictados por el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por los Presidentes de sus Salas, o de los Tribunales Colegiados de Circuito, pues en esta hipótesis se considera que el recurso fue interpuesto sin motivo, y que se actuó de mala fe, entre otros supuestos, cuando los agravios sean notoriamente inoperantes porque no combaten las

resoluciones del acuerdo reclamado, lo que genera que resulte notoria la interposición del recurso para retardar innecesariamente la resolución definitiva del asunto, como lo ha considerado el Tribunal Pleno de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis XXV/89, aprobada en sesión celebrada el jueves dieciocho de mayo de mil novecientos ochenta y nueve, por unanimidad de votos, que es del tenor literal siguiente:

**"MULTAS EN EL RECURSO DE RECLAMACION. "PROCEDE IMPONERLAS CUANDO SE INTERPONE "SIN MOTIVO Y CON MALA FE.** De acuerdo con lo "dispuesto por los artículos 3o. bis y 103 de la Ley "de Amparo, procede imponer una multa al "recurrente o su apoderado, a su abogado, o a "ambos, cuando de las circunstancias del caso se "advierten elementos suficientes para considerar "que el recurso fue interpuesto sin motivo y que se "actuó de mala fe; lo cual sucede, entre otros "supuestos, cuando los agravios son notoriamente "inoperantes porque no combaten las "consideraciones del acuerdo reclamado y a la vez, "resulta notorio que la interposición de recurso "busca retardar innecesariamente la resolución "definitiva". Consultable en el IUS 8, con el registro número 205,969.

Precisado lo anterior, aun en el supuesto de que en las hipótesis referidas, el quejoso haya señalado perfectamente bien su domicilio particular y no exista constancia de que se trata de una persona de bajos ingresos, lo que puede motivar sea sujeto de la imposición de una multa por promover el juicio de amparo con el solo objeto de retrasar la resolución del asunto, o al intentar el recurso de reclamación sin motivo, cabe hacerse la siguiente interrogante:

¿Hasta qué punto será correcto sancionar a los quejosos con las multas previstas en los artículos 3o bis, 81, y 103, de la Ley de Amparo, por haber incurrido en una conducta que dada su ignorancia del derecho, es tomada por el asesoramiento del abogado que formuló la demanda de garantías, y así, después de sufrir el engaño de éste, porque no podrá obtener resolución favorable en el juicio de amparo, después de haber realizado el pago de unos honorarios mal devengados, todavía se le suma a su cargo la multa que le imponga el órgano de control constitucional, por la mala fe demostrada al acudir al juicio de amparo, o bien por hacer valer el recurso de reclamación, expresando conceptos de violación o agravios, según el caso, que sean notoriamente inoperantes, y que demuestran sólo su conducta de retrasar innecesariamente la resolución definitiva del asunto de donde emana el acto reclamado?

¿Qué acaso con ello, no se causa mayor perjuicio al quejoso, quien sin advertir la mala conducta del abogado que lo patrocina, pierde la fe en la institución a la que en última instancia puede acudir en busca del respeto de sus garantías individuales?

Siendo así, se advierte que la intención legislativa plasmada en el texto de los preceptos legales al inicio transcritos, no ha logrado en lo absoluto evitar la práctica viciosa de muchos litigantes que, sin ningún escrúpulo inducen a sus clientes a formar parte como quejosos y acudir al juicio de amparo con fines únicamente dilatorios, induciéndolos a conductas que denotan mala fe, y que finalmente pueden ser sancionadas, pero que no podrán repercutir en ellos, porque no existe actualmente la obligación legal de que impriman su nombre, su número de cédula profesional y su



firma que avale y respalde la solicitud del quejoso, que demanda el amparo y protección de la Justicia Federal, y así, en tanto cobren honorarios, evaden la responsabilidad que el ejercicio de todo derecho legítimo lleva implícito cuando éste no se ejerce en los términos y con las condiciones que fijan las leyes respectivas, y lejos de coadyuvar por el respeto a las garantías constitucionales en favor del quejoso, lo alientan a introducirse en un litigio constitucional en el que finalmente no sólo no obtendrán ningún beneficio, sino que por el contrario podrán resultar sancionados por culpa del mal asesoramiento jurídico que tengan.

Planteada de esta manera la problemática actual que se vive con la aplicación de las disposiciones legales de los artículos 3º. bis, 81, y 103 de la Ley de Amparo, lo cual ha sido comprendido por los juzgadores de amparo, y ello ha ocasionado que en muy contados casos se imponga la multa correspondiente al quejoso, permite sostener que es necesaria una reforma a la Ley de Amparo, a fin de suprimir las multas de que se trata y que puedan imponerse al quejoso, prevaleciendo las que corresponden imponer, y quizás con mayor severidad, al abogado que lo patrocine; empero, para ello, es menester también adicionar la Ley de Amparo para establecer que toda solicitud de garantías, requiere que el quejoso esté patrocinado por un licenciado en derecho, esto es, por un profesional capacitado legalmente para proveer a la defensa y el respeto de las garantías individuales de su cliente, quien deberá autorizar con su firma, la promoción respectiva, citando el número de su cédula profesional, la cual de encontrarse registrada en el órgano de control constitucional respectivo, habrá de señalar el dato relativo, y así, no será necesario que acompañe copia certificada de la misma, lo que sí requerirá, en caso contrario; en el

entendido de que deberá continuar con el patrocinio del negocio hasta su conclusión, debiendo señalar además su domicilio.

De esta manera, se busca que la solicitud de amparo esté formulada por quien tenga la aptitud legal de saber orientar al quejoso, acerca de la necesidad o no de acudir a ese medio extraordinario de defensa, si acaso el acto de la autoridad resulta violatorio de garantías en perjuicio de su cliente.

La modificación propuesta podría cuestionarse diciendo que atenta contra el derecho de petición previsto por el artículo 80 constitucional que establece la posibilidad de dirigirse a cualquier funcionario o empleado público de manera pacífica y respetuosa, y que a tal solicitud deba recaer un acuerdo escrito, el que debe hacerse del conocimiento en breve término al peticionario, sin embargo, tal garantía constitucional no puede interpretarse en el sentido de que el peticionario pueda dejar de cumplir las formalidades y requisitos que establezcan las leyes, en la especie sería la Ley de Amparo.

Además, no puede señalarse que el requerimiento de que una demanda de amparo vaya firmada por un abogado titulado, se necesite disponer de recursos económicos suficientes para pagar a quien lo patrocine, porque teniendo el estado a su cargo la administración de justicia en forma gratuita como lo establece el artículo 17 constitucional, también el propio estado ha tomado la preocupación de establecer instituciones de carácter público que prestan servicio de asesoramiento jurídico en forma gratuita, y no sólo eso, sino que también existen instituciones de derecho privado, dedicadas al mismo fin. De esta manera, se pueden citar dentro de

los primeros, al Instituto Federal de Defensoría Pública, a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, a la Procuraduría Agraria, a la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, a la Procuraduría del Ciudadano (como se denomina a la Defensoría de Oficio en el Estado de Puebla); así como dentro del segundo grupo, encontramos los Bufetes Jurídicos Gratuitos de diversas instituciones de educación superior que están siempre respaldados por abogados titulados. De esta manera no podría decirse que las personas de bajos recursos económicos no tendrían acceso a la protección de las garantías individuales.

Tampoco podría señalarse que con las reformas propuestas, se prohíbe el derecho de autodefensa, sino que por el contrario, la pretensión buscada es precisamente que la defensa del gobernado sea adecuada al último nivel que tiene para la protección de sus garantías individuales. Al respecto, conviene recordar para hacer un símil, que tratándose de la medicina, estando elevado a rango constitucional el derecho a la salud pública, se encuentra que en las farmacias existe cierto tipo de medicamentos, cuya venta requiere necesariamente de una receta médica expedida por un profesionista legalmente registrado ante la Secretaría de Salud Pública quien para ello debe acreditar tener los conocimientos suficientes por haber cursado la carrera profesional correspondiente. De ahí que, si lo que se busca a través de la medicina es que no se cause un daño a la persona por autorecetarse, de la misma manera se buscará en el derecho, que el quejoso que puede resentir la violación a sus garantías individuales, pueda obtener su tutela a través de estar legalmente patrocinado por quien pueda, en forma capaz y responsable, conducirlo en

el ejercicio del derecho de petición que estará expedito para que obtenga el respeto a sus garantías individuales.

Por otro lado, la garantía de defensa que consagra el artículo 14 constitucional, no debe entenderse otorgada en forma ilimitada, sino con sujeción al respecto de otras normas constitucionales de igual jerarquía que tiendan a lograr un justo equilibrio entre la agilización de la administración de justicia y la seguridad jurídica de las partes en el proceso, lo cual podría lograrse con mayor éxito, mediante la inclusión en la ley reglamentaria de que se trata, del requisito anotado para la admisión y procedencia del juicio constitucional.

Además, se busca que la garantía de audiencia y defensa establecida en el precitado precepto constitucional, sea adecuada y oportuna para la defensa del gobernado, pues en la medida en que se encuentre debidamente patrocinado por un profesionista del derecho, podrá hacer los planteamientos adecuados en defensa de sus intereses, aportar y rendir las pruebas que estime pertinentes y convenientes, de tal suerte que no sea la falta de un debido asesoramiento jurídico la causa que origine que quede indefectiblemente en estado de indefensión, al no lograr la protección constitucional por haberse realizado un mal planteamiento en la demanda de garantías.

En otro aspecto, la reforma propuesta no implicaría contravenir el artículo 17 constitucional, dado que no se impediría al afectado obtener la actividad jurisdiccional, porque sólo se condicionaría que su solicitud se encause por los medios que el propio Estado pone al alcance del gobernado

para la tutela de sus intereses, es decir, que como se ha visto, el propio Estado se ha preocupado por poner al alcance del gobernado instituciones de carácter público que sin necesidad de pagar algún precio por sus servicios, otorgan de manera gratuita el asesoramiento para garantizar la tutela de los derechos en general y en especial para la salvaguarda de las garantías individuales.

Atento a los razonamientos antes expresados, se considera que la reforma propuesta tiende a garantizar al quejoso que sus solicitudes de amparo puedan llevar un mayor grado de posibilidad de obtener resolución favorable, dado que si el abogado a quien consulten para el patrocinio de la defensa de sus intereses, advierte la ineficacia de solicitar la protección constitucional, bien por existir alguna causal de improcedencia o, en su caso, por no advertir la violación de alguna garantía constitucional, deberá hacérselo saber de esa manera, y no darle falsas expectativas de obtener algo que ya de por sí se encuentra perdido y con ello se evitará que quien acude al juicio de garantías no sólo se vea desalentado con una resolución contraria a sus intereses, sino que también pueda ser sujeto de una multa por una conducta que en realidad no le es imputable, y si por el contrario, permitirá, al verdadero responsable de esa práctica indebida, sea sancionado como en derecho corresponda. (Eric Roberto Santos Partido, Tomo I, páginas 556 a 566)

---

Conforme a la normatividad que rige el juicio de amparo, los quejosos que creen satisfacer los requisitos necesarios para ejercitar la acción constitucional, promueven los amparos indirectos, en los casos del artículo

114 de la Ley de Amparo y directos en los previstos en el artículo 158 de la propia ley. En esos juicios, existe una gran mayoría que es promovida para retrasar la solución del asunto del que emerge el acto reclamado o de entorpecer la ejecución de los fallos que tiene la calidad de cosa juzgada. En otra parte de los amparos, con el mismo propósito, son narrados hechos falsos o son omitidos; ofrecidos testigos y documentos falsos y para darle competencia a un determinado juez de Distrito, se designan autoridades ejecutoras que no tienen esa calidad. Todo ello, algunas veces, obedece a entorpecer el cumplimiento de un fallo ejecutoriado, a consecuencia de la crisis económica que hace varios años sufre México; otras, a que conociendo los beneficios y facilidad en la promoción de amparos, se llevan las controversias, hasta la solución definitiva por los Tribunales Federales, como los Jueces de Distrito, Magistrados de Circuito y H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, a sabiendas de que no les asiste la razón. Las circunstancias anteriores, hacen que cada año, en lugar de abatirse el rezago de juicios de amparo, se aumente el mismo, pues los tribunales existentes, no obstante los esfuerzos que hacen, les resulta imposible igualar el despacho de los amparos tramitados, con los ingresados, bastando para comprobarlo comparar los datos estadísticos de los tribunales que aparecen en los informes de la Presidencia de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación y todo ello, acarrea que la impartición de justicia, no sea acorde a lo mandado en el artículo 17 Constitucional. Se han aumentado tribunales federales, con el objeto de combatir la proliferación de amparos, en algunas partes, con competencia mixta, y en otras, especializándolos, pero el enorme esfuerzo del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de la Federación, no ha logrado agotar el rezago, puesto que generalmente, al crearse los nuevos tribunales, a ellos

se les mandan más asuntos de los que podrán fallar, para igualarse en número de cantidad con los que ingresan. Otro intento, se ha llevado a cabo con el fin de agotar el rezago, consistente en analizar en cada amparo la conducta de los quejosos, aplicando las sanciones previstas en los artículos 81 y 211 de la ley de amparo, cuando se demuestran los supuestos previstos en los mismos; mas como las multas son irrisorias, ya que van de diez días a ciento ochenta días de salario mínimo, puesto que su imposición se ubica, generalmente, desde el mínimo, sin llegar al máximo; y la desproporción de la multa con el monto de los negocios, resulta beneficiosa a los quejosos; por lo que corren el riesgo de la sanción. Asimismo, existe la dificultad para hacer efectivas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dado el monto de las mismas y la carencia de bienes para garantizarlas. De igual manera la sanción de seis meses a tres años de prisión, a quienes incurran en la conducta prevista en el artículo 211 de la Ley de Amparo, en la practica casi nunca se aplican castigando a los infractores; de ahí que resulta ser insuficiente para amedrentar a quien incurre en esas faltas; en consecuencia, todas estas medidas, en muy poco ayudan a que el amparo se promueva solo por los quejosos que tienen derecho a el; al contrario, permiten que lo hagan agraviados, alterando los hechos, y falseando documentos, con el fin de retardar la administración de justicia aumentando año tras año el número de juicios, en forma desmesurada, sin poder los tribunales federales resolver una proporción cercana siquiera a los ingresos, con lo cual no se cumple lo mandado en el artículo 17 Constitucional.

Por ello, propongo que sean modificados los artículos 81 y 211 de la Ley de Amparo en las sanciones de que se habla en los mismos, para que

se ayude a disminuir el número de amparos, obligando a promoverlos, sólo los que tengan derecho a ellos, sin incurrir en las conductas irregulares de que hablan dichas normas, para que su redacción sea:

"Artículo 81. Cuando en un juicio de amparo se dicte sobreseimiento, se niegue la protección constitucional o desista el quejoso, se advierta que se promovió con el propósito de retrasar la solución del asunto del que emana el acto reclamado o de entorpecer la ejecución de las resoluciones respectivas o de obstaculizar la legal actuación de la autoridad, se impondrá al quejoso o a sus representantes, en su caso, al abogado o a ambos, una multa de veinte a doscientos cincuenta días de salario, tomando en cuenta las circunstancias del caso"

"Artículo 211. Se impondrá sanción de dos a seis años de prisión y multa de treinta a ciento cincuenta días de salario:

I. Al quejoso y sus abogados en un juicio de amparo que al formular su demanda afirme hechos de los actos a que se refiere el artículo 17;

II. Al quejoso o tercero perjudicado y sus abogados en un juicio de amparo, que presente testigos o documentos falsos; y,

III. Al quejoso en un juicio de amparo que para darle competencia a un Juez de Distrito, designe como autoridad ejecutora a una que no lo sea, siempre que no se reclamen algunos de los actos a que se refiere el artículo 17". (José Librado Fuerte Chavez ,Tomo I, páginas 635 a 638)

---

Enmienda.



MISMO TEXTO HASTA DONDE DICE: "O DE OBSTACULIZAR LA LEGAL ACTUACIÓN DE LA AUTORIDAD...". SE PROPONE DEROGAR LA PARTE FINAL DE ESTE PRECEPTO, PARA QUEDAR REDACTADA COMO SIGUE:

"SE DARÁ VISTA AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL, PARA EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES, RESPECTO A LA RESPONSABILIDAD QUE LE RESULTE AL QUEJOSO O A SUS REPRESENTANTES, EN SU CASO, AL ABOGADO O A AMBOS, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 211 DE ESTA LEY".

#### Motivos.

SI EL QUEJOSO O SU REPRESENTANTE, SU ABOGADO, O AMBOS, INCURREN EN LA CONDUCTA DESCRITA EN ESTE PRECEPTO, COMETEN ILÍCITOS DEFINIDOS COMO TALES EN EL CÓDIGO PENAL FEDERAL. ANALIZADA LA CUESTIÓN RESPECTO AL JUICIO DE AMPARO, ADQUIERE CARACTERES MÁS GRAVES, PORQUE ENTORPECEN MALICIOSAMENTE LA IMPARTICIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL Y AL MISMO TIEMPO LA OBSERVANCIA DE LA LEY ANTE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. POR ELLO DEBE TIPIFICARSE COMO DELITO, CON LA CORRESPONDIENTE ADICIÓN DE UNA CUARTA FRACCIÓN EN EL ARTÍCULO 211 QUE SE OCUPA DE LA RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES EN EL JUICIO DE AMPARO, YA QUE SE DEBE CERRAR LA PUERTA A ESTE TIPO DE ABUSOS QUE

**ATENTAN CONTRA EL INTERÉS PÚBLICO. (Fidencio Ramírez y Fidel Herrera Beltrán , Tomo II, páginas 1149 a 1151)**

---

La propuesta tiende a evitar el abuso del amparo y, por ende, la promoción de juicios que movilizan sin razón el aparato judicial correspondiente, retardando así la aplicación de la Justicia.

**TEXTO CON MODIFICACIÓN**

**ARTICULO 81.-** Cuando en un juicio de amparo se dicte sobreseimiento, se niegue la protección constitucional o desista el quejoso, y se advierta que se promovió con el propósito de retrasar la solución del asunto del que emana el acto reclamado o de entorpecer la ejecución de las resoluciones respectivas o de obstaculizar la legal actuación de la autoridad, se impondrá al quejoso o a sus representantes, en su caso, al abogado o a ambos, una multa de cien a trescientos días de salario, tomando en cuenta las circunstancias del caso. **(María Simona Ramos Ruvalcaba, Tomo II, páginas 1416 y 1417)**

---

En cuanto al artículo 81 de la Ley que ordena imponer las sanciones a los litigantes, en los casos que contempla, las mismas deben hacerse efectivas por los conductos debidos, puesto que de no ser así no se consiguen los objetivos propuestos, que no son otros sino cuidar de la buena fe en el ejercicio profesional y evitar el abuso del amparo. **(Mario Gómez Mercado, Tomo IV, página 2678).**

---

**"Cuando en un juicio de amparo se dicte sobreseimiento, se niegue la protección constitucional o desista el quejoso, y se advierta que se promovió con el propósito de retrasar la solución del asunto del que emana el acto reclamado o de entorpecer la ejecución de las resoluciones respectivas o de obstaculizar la legal actuación de la autoridad, se impondrá al quejoso o a sus representantes, en su caso, al abogado o a ambos, una multa de diez a ciento ochenta días de salario, tomando en cuenta las circunstancias del caso".**

**La Ley de Amparo como reglamento de los artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República y como instrumento por el que el gobernado ve cristalizar la efectividad de la justicia y el correcto ejercicio del poder en el pleno convencimiento de la dignidad, imparcialidad e independencia de las instituciones nacionales que son escudo protector de las garantías individuales o derechos humanos que consagra la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no debe ser objeto de uso indiscriminado e irresponsable por quien o quienes acuden a la instancia federal a pretender hacer valer derechos que no les corresponden o por quienes se dedican al ejercicio de la abogacía, pues con ello, se demerita el espíritu por el cual fue creada, creando incertidumbre en quienes ven en esta ley federal el soporte al marco jurídico constitucional pues con tal cuerpo legal se pretende la preservación del estricto estado de derecho y a la que no en vano se ha reformado y hoy se pretende reformar para transformar substancialmente los órganos del estado a fin de fortalecer y permitir mayor acercamiento con quienes aspiran confiadamente en encontrar la verdadera impartición de justicia, por medio del accionar de todos y cada uno de los principios que conforman el juicio de amparo que**

integralmente buscan el control de la legalidad estableciéndose las bases jurídicas en las que los tribunales federales se dedican a ejercer el control constitucional.

Expuesto lo anterior, propongo que quien ha de ejercer la función legislativa dedique también su atención en el contenido del precepto legal en un principio enunciado a fin de establecer el mecanismo o mecanismos a través de los cuales se restrinja el uso indiscriminado del juicio de garantías y se aplique armónica y eficazmente cada uno de los preceptos que integran la ley de amparo, es decir que se reforme el artículo 81 en cita, a efecto de que se haga cumplir la sanción o sanciones que impone dicho precepto, sin que se contemple indistintamente si se trata de quejoso, representante de este o el abogado de ambos, es decir, que se reforme dicho artículo y que se imponga concretamente a todo abogado patrono la multa que prevee tal disposición legal y asimismo se adicione como una segunda sanción que deberá aplicarse al quejoso la cual ha de consistir en hacer efectiva la fianza o garantía que se otorgue dependiendo el caso concreto con motivo de la suspensión del acto reclamado a favor del tercero perjudicado, ya que este es quien realmente recibe los efectos de la utilización desmedida del juicio de garantías y del accionar de los tribunales federales que al conocer de estos tramites del procedimiento de amparo solo distraen su función y obstaculizan la ejecución de resoluciones y actuar de las autoridades del fuero común que en la gran mayoría de los casos emiten sus resoluciones apegadas a estricto derecho. (Enrique Flores Colín, Tomo IV, páginas 2760 y 2761).

## **Capítulo XI**

### **De los recursos**

**Artículo 82. En los juicios de amparo no se admitirán más recursos que los de revisión, queja y reclamación.**

### **PROPUESTAS**

Considero que uno de los puntos que han contribuido a complicar el trámite del juicio de amparo es el sistema de recursos establecido en la Ley de Amparo.

Dicho sistema se estructuró al principio en forma muy simple: sólo existía la revisión, aunque se aceptó la reclamación establecida en los reglamentos interiores de nuestro Máximo Tribunal.

Los problemas comenzaron cuando el legislador ordinario, sin tomar en cuenta la estructura del juicio, adicionó la queja; sin embargo, como consideramos demostrado en el capítulo correspondiente de este trabajo, en su primera etapa la queja era sólo un medio de provocar la revisión de los actos del juez de Distrito, por lo que, en el fondo, no trastocaba la estructura del sistema de recursos. Esto último ocurrió cuando se cambió la procedencia de la queja y se estableció que procedía contra actos de las autoridades responsables, pues éstas son partes en el juicio de amparo y su conducta no puede ser objeto de recurso en este juicio sino en todo caso de incidente.

Finalmente, los sucesivos parches legislativos han establecido un sistema confuso, complejo y disfuncional con relación a los medios para obtener la ejecución correcta de las sentencias de amparo, pues sobre este tema proceden la queja, la inconformidad, el incidente de inejecución y el incidente de sustitución de la ejecución por pago de daños y perjuicios.

Considero que podría ser útil simplificar el sistema de recursos y reconocer la naturaleza incidental del procedimiento de ejecución de las sentencias, a fin de mejorar la institución orgullo de nuestro sistema jurídico: el juicio de amparo.

#### Evolución del sistema de recursos del juicio de amparo mexicano

1. Ley Orgánica Reglamentaria de los artículos 101 y 102 de la Constitución, de 30 de noviembre de 1861<sup>51</sup>

La primera ley reglamentaria del juicio de amparo fue la de 30 de noviembre de 1861, en la que se establecieron como recursos los siguientes:

Apelación, prevista para el caso de que el Juez de Distrito determinara no abrir el juicio de amparo al recibir la demanda; se resolvía por el tribunal de Circuito respectivo; también estaba prevista contra la

---

<sup>51</sup> SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. *La Suprema Corte de Justicia, sus Leyes y sus Hombres*. México. 1984. Salvo que otra cosa se indique, los textos de las leyes de amparo anteriores a la vigente se tomaron de esta obra y se confrontaron con los *Díarios de Debates* y obras publicadas al respecto

sentencia del Juez de Distrito que mandaba amparar y proteger; se resolvía igualmente por el tribunal de Circuito.

Súplica, prevista contra la sentencia de vista emitida por el Tribunal de Circuito, cuando revocaba o modificaba la sentencia del Juez de Distrito; la resolvía la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

2. Ley Orgánica Constitucional sobre el Recurso de Amparo, de 20 de enero de 1869 <sup>52</sup>

La segunda ley reglamentaria del juicio de amparo fue la de 20 de enero de 1869, en la cual se cambió el sistema de recursos de la ley anterior, para establecer que la sentencia del Juez de Distrito sería revisada de oficio por la Suprema Corte, a quién debían remitirse los autos inmediatamente después de dictada la primera, permitiéndose a las partes alegar ante ella; las facultades de revisión eran absolutas para el tribunal revisor, quien podía revocar, confirmar o modificar la sentencia de primera instancia.

3. Ley Orgánica de los Artículos 101 y 102 de la Constitución Federal, de 14 de diciembre de 1882

La tercera ley reglamentaria del juicio de garantías fue emitida el 14 de diciembre de 1882, y en ella se previó el recurso de revisión ante la

---

<sup>52</sup> Idem Cfr LOZANO, José María. *Tratado de los Derechos del Hombre. Estudio del Derecho Constitucional Patrio en lo relativo a los derechos del hombre conforme a la Constitución de 1857 y a la Ley Orgánica del Amparo de Garantías de 20 de enero de 1869*. México, 1876. (Reimpresión facsimilar por Editorial Porrúa 1972)

Suprema Corte contra el auto en que se concedía o negaba la suspensión por parte del Juez de Distrito; igualmente, se conservó la revisión oficiosa de la sentencia del juez de primera instancia por parte de la Suprema Corte, a quien se le remitían los autos una vez notificada la sentencia a las partes, y el artículo 33 establecía textualmente que: "Las sentencias de los jueces nunca causan ejecutoria, y no pueden ejecutarse antes de la revisión de la Corte, ni aun cuando haya conformidad entre las partes."

En esta ley se estableció por primera vez la figura del sobreseimiento, en cuyo caso se remitían también los autos a la Suprema Corte para la revisión correspondiente.

La Suprema Corte podía extender la revisión a los procedimientos del inferior y no solamente a los términos de la sentencia, ya que conocía de estos asuntos con plena jurisdicción.

El ordenamiento comentado estableció también, por primera vez, la figura de la queja por exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, sólo que el recurso procedía contra la actuación del Juez de Distrito, y sus efectos eran idénticos a los de la revisión, ya que el artículo 52 establecía lo siguiente:

"Si el quejoso, el promotor fiscal o la autoridad ejecutora creen que el Juez de Distrito, por exceso o por defecto, no cumple con la ejecutoria de la Corte, podrán ocurrir en queja ante este tribunal, pidiéndole que revise los actos del inferior. Con el informe justificado que éste rinda, la Corte



confirmará o revocará la providencia de que se trate, cuidando siempre de no alterar los términos de la ejecutoria."

De lo anterior, se desprende que la naturaleza de la "queja" era la de un mero medio para provocar la revisión de los actos del Juez de Distrito por parte de la Suprema Corte, por lo que en realidad no se justificaba la denominación especial y diferenciada de la institución; debe hacerse notar que en este caso se establecía que era al Juez de Distrito a quien correspondía cumplimentar la ejecutoria de la Suprema Corte y por ello la "queja" era efectivamente un recurso, es decir, un medio para combatir las determinaciones de la autoridad que tramita un juicio o procedimiento.

**4. Código de Procedimientos Federales, de 14 de noviembre de 1895**

El Código de Procedimientos Federales de 14 de noviembre de 1895 sustituyó como ley reglamentaria del juicio de amparo a la ley de 1882, planteando una estructura más parecida a la que actualmente conocemos.

El artículo 48 disponía que la Suprema Corte de Justicia era tribunal de apelación o de última instancia, mientras que los Tribunales de Circuito conocían en segunda instancia de los negocios sujetos en primera a los Juzgados de Distrito y que conforme a la ley admitieran apelación, además de conocer de la revisión de expedientes en que la sentencia de los Jueces de Distrito hubiera causado ejecutoria.

Como facultad exclusiva del Tribunal Pleno de la Suprema Corte, el artículo 62, fracción XII, previó la de resolver las reclamaciones que se hicieran contra las providencias y acuerdos del Presidente de la Suprema Corte, aunque no se reglamentó el trámite de dicho recurso.

El artículo 57 estableció que las Salas Segunda y Tercera de la Suprema Corte conocieran por turno de la segunda instancia de los negocios que hubieran sido conocidos por los Tribunales de Circuito en primera instancia, así como de la revisión de expedientes en que la sentencia de los Tribunales de Circuito hubiera causado ejecutoria.

El 6 de octubre de 1897 se publicó el título II del Código de Procedimientos Federales, cuyo capítulo VI estaba destinado a regular el juicio de amparo, estableciéndose en el artículo 759 que los autos dictados en los juicios de amparo no admitían más recursos que los previstos expresamente en ese capítulo del código, agregándose lo siguiente<sup>53</sup>:

"[...] sin embargo, cuando la Corte tenga noticia de algún acto del juez que por su naturaleza trascendental y grave reclame la inmediata intervención de dicho tribunal, podrá éste pedir informes con justificación al juez y revisar dicho acto."

Se establecía también la revisión contra el auto del juez que concediera o negara la suspensión, así como contra el auto que la revocara, siendo competente para conocer del recurso la Suprema Corte.

---

<sup>53</sup> Obsérvese que esta disposición es el antecedente directo del artículo 95, fracción VI, de la Ley de Amparo actual

Se conservó la revisión oficiosa de la sentencia del Juez de Distrito, ordenándose a éste remitir los autos a la Suprema Corte dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la notificación de la sentencia a las partes. Se reiteró la prohibición de ejecutar los autos de sobreseimiento y las resoluciones que declararan improcedente el amparo antes de su revisión por la Suprema Corte.

La Suprema Corte debía analizar la sentencia del Juez de Distrito extendiendo la revisión a todos los procedimientos del inferior, pudiendo confirmar, revocar o modificar las resoluciones que revisaba, por lo que conocía de los asuntos con plenitud de jurisdicción.

La queja por exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de la Corte se mantuvo prevista contra los actos del Juez de Distrito, pudiendo la Suprema Corte confirmar o revocar la providencia, por lo que conservó la naturaleza que se le había atribuido en la reglamentación anterior; en este Código se previó por primera vez que la queja pudiera interponerse por un tercero distinto a las partes del juicio de amparo.

5. Código Federal de Procedimientos Civiles, de 26 de diciembre de 1908

El Código Federal de Procedimientos Civiles, de 26 de diciembre de 1908, mantuvo el recurso de revisión contra las resoluciones del Juez de Distrito que concedieran, negaran o revocaran la suspensión, previéndose por primera vez el trámite por cuerda separada del incidente respectivo;

como en las leyes anteriores, la Suprema Corte podía confirmar, revocar o reformar la determinación del Juez de Distrito.

Se conservó la revisión oficiosa de las sentencias de primera instancia, ordenándose la remisión de los autos a la Suprema Corte una vez notificada la sentencia o el auto de sobreseimiento, y el citado tribunal podía mandar practicar las diligencias que estimara necesarias, así como confirmar, revocar o modificar la resolución del Juez de Distrito, extendiendo la revisión a todos los procedimientos del inferior, pues la Suprema Corte conocía del recurso con plenitud de jurisdicción.

El artículo 771 previó la reclamación contra la admisión de una demanda improcedente o sin los requisitos legales, estableciéndose que previa audiencia del Ministerio Público, el Juez de Distrito resolvería y, cuando desechara la demanda, remitiría el expediente a la Suprema Corte para su revisión;<sup>54</sup> si admitía la demanda, el auto era revisable conjuntamente con la sentencia definitiva

La queja por exceso o defecto en el cumplimiento de una ejecutoria de amparo se mantuvo como competencia de la Suprema Corte y contra actos del Juez de Distrito, pudiendo promoverla cualquiera de las partes o un tercero, pero el artículo 684 dispuso lo siguiente:

---

<sup>54</sup> Obsérvese que se conserva el esquema de revisión oficiosa con plenitud de jurisdicción de la Suprema Corte

**"El que se considere perjudicado por exceso o defecto en la ejecución de alguna sentencia de amparo, podrá acudir en queja al Juez de Distrito, si se trata de la autoridad responsable"**

Esto es, se creó aquí la figura de la queja contra las autoridades responsables, caso en que quien conocía de la queja era el Juez de Distrito y no la Suprema Corte.

**6. Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 104 de la Constitución Federal, de 18 de octubre de 1919**

Este ordenamiento estableció el juicio de amparo directo contra sentencias definitivas, del que conocía la Suprema Corte, diferenciándolo del amparo indirecto, que se tramitaba ante los Jueces de Distrito.

En relación con los recursos, conservó la revisión contra el auto que concediera, negara o revocara la suspensión, que seguía resolviendo la Suprema Corte confirmando, revocando o reformando la resolución del Juez de Distrito.

También se establecía la revisión contra las sentencias, autos de sobreseimiento e improcedencia pronunciados por los Jueces de Distrito, que también resolvía la Suprema Corte, como siempre, con plenitud de jurisdicción.

En relación con la queja por exceso o defecto en el cumplimiento de una ejecutoria de amparo, se conservó el recurso contra el Juez de Distrito, pero también se especificó que procedía contra la autoridad responsable en

los amparos de que conociera la Corte en única instancia, modificando en este caso el sistema de la ley anterior, pues en ella procedía contra las responsables en cualquier juicio de amparo; en ambos casos el tribunal revisor podía confirmar o revocar la providencia, sin que pudiera alterar los términos de la ejecutoria.

Se estableció el recurso de súplica contra las sentencias definitivas dictadas en segunda instancia por los tribunales federales o locales con motivo de controversias sobre cumplimiento y aplicación de leyes federales o tratados internacionales, como alternativa al juicio de amparo directo, con la característica de que la Corte adquiriría plenitud de jurisdicción en el juicio sometido a su conocimiento por esta vía, pudiendo anular el procedimiento y mandarlo reponer; correspondía admitir el recurso al tribunal de segunda instancia, quien podía desecharlo, en cuyo caso el recurrente podía pedir la revisión de esta resolución (de desechamiento) ante la Suprema Corte; en caso de que la súplica fuera admitida, la parte contraria al suplicante podía promover ante la Suprema Corte el denominado incidente de súplica mal admitida, en virtud del cual la Suprema Corte podía revocar la determinación; nótese que la naturaleza de esta última institución es la de un recurso y no la de un incidente, puesto que se trata de un medio para combatir una determinación de una autoridad que tramita un juicio o procedimiento, pudiendo obtenerse de un superior de esa autoridad la revocación del acto combatido.

7. Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, de 30 de diciembre de 1935

Esta es la ley vigente en la actualidad, y si bien ha sido reformada en varias ocasiones, su estructura básica se ha conservado, sobre todo en lo relativo a los recursos que estableció en el capítulo XI, limitándolos a la revisión, queja y reclamación, disposición que se mantiene en el artículo 82.

La revisión procedía contra resoluciones que desecharan o tuvieran por no interpuesta la demanda de amparo, que concedieran, modificaran, revocaran o negaran la revocación de la suspensión definitiva, así como contra los autos de sobreseimiento y los que tuvieran por desistido al quejoso, y finalmente, contra las sentencias dictadas en la audiencia constitucional por los Jueces de Distrito.

La competencia para conocer del recurso de revisión se establecía inicialmente en favor de la Suprema Corte.

El recurso de queja se estableció contra los Jueces de Distrito cuando admitieran demandas notoriamente improcedentes, así como contra las determinaciones que tomaran al resolver en definitiva el incidente de reclamación de daños y perjuicios en el incidente de suspensión y las quejas promovidas ante ellos, así como contra sus resoluciones que, no pudiendo ser combatidas en revisión, pudieran causar un perjuicio grave a alguna de las partes no reparable en la sentencia definitiva o fueran dictadas después de fallado el juicio en primera instancia; contra las autoridades responsables, por exceso o defecto en la ejecución del auto que concediera la suspensión definitiva, o por falta de cumplimiento del auto que hubiera concedido al quejoso su libertad bajo caución, así como por

exceso o defecto en la ejecución de la sentencia que hubiera amparado al quejoso.

La reclamación procedía contra los acuerdos de trámite dictados por el Presidente de la Suprema Corte o de alguna de sus Salas, remitiéndose con relación a su trámite a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. (Germán Eduardo Baltazar Robles, Tomo I, páginas 27 a 38)

---

Algo similar sucede tratándose de los recursos previstos para el juicio de amparo o el incidente de suspensión, pues el sistema resulta complejo al contemplarse distintos recursos para impugnar actos que son similares. Toda vez que los plazos para la presentación del recurso son breves por lo general, la equivocación en la elección del recurso puede traer como consecuencia que no se logre la reparación que se pretende. (Sergio Pallares y Lara, Tomo I, página 490)

---

#### **6. Reestructuración de los recursos en el amparo.**

La promoción de los recursos de revisión y queja presenta algunas dificultades al momento de decidir cuál de ellos utilizar para la impugnación del auto o resolución relativos; y la complicación deriva del hecho de que ante actos que guardan cierta similitud, sin embargo el recurso que prevé la ley para combatirlos es distinto. A manera de ejemplo, las resoluciones de admisión y desechamiento de la demanda de amparo, los autos relativos a la suspensión y los que se dictan en el trámite del amparo o del incidente de



suspensión, a pesar de tratarse de la misma materia, sin embargo son impugnables en algunos casos mediante la queja y en otros mediante la revisión.

Por tanto, a fin de facilitar la promoción de los recursos, se requiere establecer un sistema que de una manera lógica agrupe las resoluciones y los actos que sean recurribles, evitando medios de defensa distintos para combatir resoluciones similares.

El factor que puede servir para la conformación de un sistema más lógico es el del origen de la resolución o acto, esto es, determinar la procedencia del recurso en función de la naturaleza del órgano que lo haya emitido. El recurso de revisión implica que dentro del mismo juicio se revisen los actos del órgano inferior a fin de que sean revocados o modificados o, de no prosperar, tengan la consecuencia de que se confirmen por el tribunal superior. Por tanto, todas las resoluciones dictadas por un juez de distrito deberían ser revisadas por el tribunal superior mediante el mismo recurso. Esto sucede igualmente cuando la autoridad responsable o su superior actúan como auxiliares de la Justicia Federal iniciando el trámite del juicio de amparo o resolviendo cuestiones relativas a la suspensión del acto reclamado, en los casos en que la ley lo permite, por lo que también deberían impugnarse por medio del recurso de revisión, ya que la relación que guardan respecto al tribunal que analizará la legalidad de sus actos, por actuar como órganos auxiliares de la Justicia Federal, es similar a la que se da entre Tribunales Colegiados y Juzgados de Distrito.

Esta característica no se da en la queja, pues el propósito de ésta es el de revisar la legalidad de los actos de las autoridades emitidos dentro del ámbito de su competencia ordinaria, o en su caso determinar si han dado cumplimiento a lo que les ha ordenado alguna resolución dictada en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión, es decir, los actos tendientes a la ejecución de la sentencia de amparo o de las resoluciones de suspensión, en las que las autoridades no fungen como auxiliares de la Justicia Federal.

Con base en esas ideas se pueden agrupar las resoluciones impugnables mediante la revisión, cuando deriven de un órgano inferior o de la autoridad responsable como auxiliar de la Justicia Federal; y para su impugnación por medio de la queja, cuando las emita la autoridad responsable en el ámbito de sus atribuciones ordinarias, o en el de la ejecución de las resoluciones y autos derivados del juicio de amparo o del incidente de suspensión. (Sergio Pallares y Lara, Tomo I, páginas 498 y 499)

---

En este trabajo, sólo se aborda el relativo al título del mismo, o sea, buscar nuevos procedimientos dentro del juicio de amparo que, de alguna manera, pudieran aliviar las labores de los diversos órganos del Poder Judicial, por una parte, y por otra, dar seguridad jurídica a las partes para conservar la paz social que implica una completa, oportuna, eficaz e imparcial impartición de Justicia, que, para todos garantiza el artículo 17 de la Constitución Federal.

Estimo que, para alcanzar tales finalidades, podría modificarse la Ley de Amparo, vigente, en el capítulo relativo a los recursos, a fin de introducir uno que pudiera denominarse revocación ó reclamación, o algún otro término semejante, el cual procedería contra los acuerdos de trámite dictados dentro del juicio de amparo indirecto o de su incidente de suspensión, ya sean de la competencia de Jueces de Distrito, Tribunales Unitarios o bien de las autoridades a que se refiere el artículo 37 de la propia Ley, suprimiendo, por consecuencia, el recurso de queja a que se refiere el artículo 95 fracción VI, primera parte, de la misma Ley, o sea, únicamente por lo que toca a la actual hipótesis de procedencia de tal recurso, o sea, en lo que atañe a los acuerdos de trámite que se pronuncien en aquellos cuadernos.

La propuesta de que se trata tiende a evitar la generación de recursos ante los Tribunales Colegiados, como son los que se interponen contra acuerdos de trámite dictados por los órganos que conocen del juicio de amparo indirecto, ya sea dentro del juicio en lo principal o bien en el incidente de suspensión.

Conforme al texto actual de los preceptos legales que se relacionan con la procedencia, trámite y resolución, del recurso de queja, se tiene que, tanto quienes conocen de esos juicios (y su respectivo incidente), y del recurso, o sea, el Tribunal Colegiado respectivo, se ven envueltos en formulismos y trámites que además de complicados, en ocasiones, son engorrosos e involucran a diverso personal, distrayéndoles de otras tareas, en ocasiones más urgentes y trascendentes, todo ello, con detrimento del despacho de otros asuntos sometidos a la consideración del órgano judicial.

En efecto, debe atenderse al contenido de los diversos artículos 95 fracción VI, 97 fracción II, 99, 100 y 101, de la Ley de Amparo, que por su orden disponen:...

Para el propósito de este trabajo, es de aludir también al diverso numeral 103 de la misma Ley de Amparo, que establece el recurso de reclamación, el cual procede contra los acuerdos de trámite dictados por el Presidente de la Suprema Corte de Justicia o por los Presidentes de sus Salas o de los Tribunales Colegiados de Circuito, señalando que tal medio de impugnación debe hacerse valer dentro del término de veinticuatro horas, siguientes al en que surta sus efectos la notificación de la resolución impugnada.

Se tiene, pues, que una vez recibido el escrito por medio del cual se interpone el recurso, el Presidente del Tribunal Colegiado de Circuito manda solicitar a la autoridad contra quien aquel se hace valer, requiriéndola para que en un plazo improrrogable remita copia de la resolución recurrida, constancia de notificación a las partes y de todas las demás que se estimen necesarias para resolver al respecto; igualmente, se envían a dicha autoridad sendas copias del escrito por el que se hace valer el recurso, para que se distribuyan entre las demás partes en el juicio de amparo (éste trámite no se encuentra señalado en el artículo 98, segundo párrafo de la Ley).

A continuación, se dictará un nuevo proveído acordando sobre la admisión, es decir, si se admite o no, contra el cual podrá interponerse a su

vez el recurso de reclamación, que requiere también de un acuerdo de admisión y turno al ponente, ocupándose a diverso personal para realizar dichos trámites, interviene el actuario, notificando a las partes por lista ese auto, etc., se da vista al Representante Social, para que formule pedimento, si lo estima pertinente y se turna al ponente, quién elaborará proyecto de resolución, el cual en la respectiva sesión de Pleno del Tribunal, y una vez aprobado el proyecto, se deberá engrosar la ejecutoria, notificar a las partes y a la autoridad contra la que se interpuso la queja.

En resumen, con optimismo, puede afirmarse que un término razonable para obtener la resolución del recurso, podría ser el de dos meses, plazo en el cual, se mantiene suspenso, en la mayoría de los casos, el juicio de amparo, con el consecuente perjuicio de las partes; pero tal plazo es sin tener en consideración el recargo de trabajo que se padece en casi todos los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, el cual puede provocar una mayor demora para resolver el recurso.

¿ Qué sucede cuando el informe no se rinde?

¿ Qué, cuando se rinde incompleto y las partes no aportan pruebas para demostrar que el recurso debe ser declarado fundado?

Es claro que no se obtiene resolución favorable; éste es un riesgo adicional que el inconforme corre, al quedar expuesto a que se rinda un informe incompleto, lo que sucede con frecuencia; o bien equivocado, sobre los hechos materia del recurso de queja.

Es evidente que esto no fue el propósito del legislador, pero sí resulta contrario a los postulados del artículo 17 de la Carta Magna.

Ahora, al poder impugnarse ante el propio juez de Distrito el acuerdo de trámite que dictó, a propósito incluso de alguna petición de parte (v.g. desechamiento de pruebas), se evitarían los diversos acuerdos que debe emitir el Presidente del Colegiado, la formación de un toca, noticia a Estadística, notificaciones, etc.; igualmente la formación del informe, remisión de autos; casi siempre, integrar un legajo con copias fotostáticas que el secretario ha de certificar, y enviar, y en general lo ya descrito.

El trámite del recurso que ahora se propone, podría reducirse, simplemente, a señalar un término, de tres días, por ejemplo, para su interposición, el que se computaría a partir de que surtiera efectos la notificación del proveído que se pretendiera impugnar; se ordenaría dar vista a las otras partes, por igual término, para que expresaran lo que a su interés conviniera y la resolución del recurso se debería emitir dentro del plazo de tres días.

El propio Juez tiene a su alcance todos los medios de conocimiento necesarios para confirmar el acuerdo recurrido, de ser procedente; a la luz de los agravios, de hecho, o de derecho, que le fueran argumentados y de existir alguna equivocación, el propio juez podría introducir las enmiendas necesarias para continuar con un debido procedimiento. Todo ello, sin menoscabo al principio de igualdad procesal de las partes, a quienes se dio oportunidad de alegar lo que a su interés conviniera, y los que, por otra parte, no pudiendo ya impugnar lo resuelto a propósito del recurso, sin

embargo, conservarían su derecho a expresar alguna inconformidad con lo ahí establecido, al interponer, en su caso, el recurso de revisión en contra de la sentencia, cuando ésta sea contraria a sus intereses. Tales alegaciones serían examinadas, preferentemente, por el Tribunal Colegiado, y según lo alegado, podría ordenarse la reposición del procedimiento para los efectos pertinentes y si se tratara de prueba indebidamente admitida, por ejemplo, el propio tribunal, dado que no existe reenvío, resolvería integralmente la cuestión, prescindiendo de la prueba ya desahogada, considerada por el a quo.

Conforme a estos lineamientos genéricos, puede advertirse que la propuesta de establecer el recurso de revocación ante el Juez de Distrito, o ante la autoridad que conoce del juicio de amparo indirecto, Unitario o Superior de la responsable, en el caso del artículo 37 de la Ley de la Materia, contra acuerdos de trámite dictados en el principal o en el incidente de suspensión, contribuye a obtener una inmediata reparación a un posible error de apreciación, evitando a las partes perjuicios por la demora en la resolución de sus conflictos, así como recargo de labores en los Tribunales Colegiados, al integrar los tocas relativos al recurso de queja a que se refiere la fracción VI, (primera parte) del artículo 95 de la Ley de Amparo, con los diversos trámites legales necesarios para su resolución; todo ello, contribuiría a lograr una administración de Justicia más rápida y expedita.

No podemos desconocer, por otra parte, que tan amplia posibilidad que se otorgaría a las partes en los juicios de amparo indirecto, para impugnar, ante el propio órgano de control constitucional, los acuerdos de trámite ya mencionados, en la práctica podría resultar contraproducente,

dado un eventual abuso en la interposición del recurso, volviendo más graves aún, las cargas de trabajo de las mismas unidades jurisdiccionales; para evitarlo, es necesario tomar ciertas medidas lo cual no hace nugatorio el derecho a defenderse, ni implicaría, la que se propone, el pago de costas, prohibidas constitucionalmente, ya que, tal medida preventiva consistiría en la eventual imposición de una multa, por el equivalente de diez o ciento ochenta veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal, tomando en cuenta las circunstancias del caso, en términos semejantes a los previstos en los artículos 3º.- bis y 81 de la Ley de la Materia. Tal multa sería impuesta, en su caso, en la resolución que se emita a propósito del recurso de revocación (también se podría denominar Reclamación, cuya existencia se reconoce en la Ley de Amparo) pero no se mandaría a hacer efectiva, sino hasta que el juicio de amparo se resolviera en definitiva y se advirtiera que tal recurso fue hecho valer sin motivo; desde luego, debe entenderse obligatoria la imposición de la multa, sin que haya lugar a considerar si hubo o no mala fe, pero pudiendo señalarse otras excepciones, análogas a las que ya contempla la propia Ley de la Materia.

En conclusión:

Tomando en consideración la problemática real de los justiciables en los juicios de amparo, los intereses legítimos que les asiste para una pronta y expedita administración de justicia, y el deber correlativo a proporcionarla, por parte del Estado, se propone la modificación de la vigente Ley de Amparo, en los términos que han quedado expuestos. (Francisco Guillermo Baltazar Alvear, Tomo I, páginas 609 y 610, 612 a 617)



He oído criticar el capítulo de recursos y quienes lo hacen no han advertido que el número de recursos, tres: revisión, reclamación y queja, son los adecuados; la revisión para conocer de las resoluciones más importantes, derivadas de una sentencia o un auto definitivo; la queja, para determinado tipo de resolución intraprocesales y la reclamación, para evitar los perjuicios que eran causar las resoluciones de los Presidentes de los Colegiados, de las Salas o de la Suprema Corte de Justicia o para encauzar el procedimiento. **(Jesús A. Arroyo Moreno, Tomo II, página 1080)**

---

**LIMITACIÓN DE RECURSOS.** Establecer un solo recurso. Como sucede en todas las materias. **(Fernando Sánchez Ugarte, Tomo III, página 1794)**

**Artículo 83. Procede el recurso de revisión:**

**I. Contra las resoluciones de los jueces de Distrito o del superior del Tribunal responsable, en su caso, que desechen o tengan por no interpuesta una demanda de amparo;**

**PROPUESTAS**

**Artículo 83. Procede el recurso de revisión:**

**I. Contra las resoluciones de los Jueces de Distrito o del superior del tribunal responsable, en su caso, que admitan, desechen o tengan por no interpuesta una demanda de amparo (Sergio Pallares y Lara, Tomo I, página 501)**

---

En nuestro país, el juicio de amparo constituye la institución jurídica protectora de las garantías individuales de los gobernados frente al poder público, y es el medio por el cual es factible combatir la inconstitucionalidad de cualquier acto que emita una autoridad con independencia de su rango o jerarquía.

Por su importancia debe ser accesible a todo gobernado, por lo cual los mecanismos para lograr su eficacia deben ser lo suficientemente precisos y definidos de manera que no se presten a confusiones y permitan que el gobernado pueda lograr el objetivo que se propuso al haber

acudido ante los órganos jurisdiccionales para solicitar la protección de la Justicia Federal, desde luego sin apartarse de los aspectos técnicos que deben ser siempre observados en toda gestión ante un tribunal, porque siendo el derecho una ciencia, debe contener una metodología para su aplicación, y así se ha conceptuado en razón a la actividad intelectual que tiene por objeto el conocimiento racional y sistemático de los fenómenos jurídicos. Sin embargo, no debe olvidarse que si el juicio de amparo tiene como objetivo el garantizar un estado de derecho justo, las normas que lo regulan deben tener una vigencia real que más allá de formulismos, permitan que se cumpla cabalmente su finalidad cuando se demande la protección de la justicia federal.

Si bien se parte de la base de que los juzgadores tienen el propósito de sujetarse al estricto cumplimiento de sus deberes de impartición de justicia, también lo es que cuando quienes resienten la aplicación de la ley y se estiman afectados indebidamente por una decisión, deben tener la posibilidad de solicitar la reparación de los agravios que sostengan haber resentido por las decisiones de las autoridades jurisdiccionales, por lo que es preciso contar con medios para tal efecto, los cuales debe establecer el legislador como recursos, ello a fin de que el gobernado tenga el máximo de seguridad de la certeza de los fallos de los órganos impartidores de justicia, pues en todo proceso existe un principio general de impugnación, o sea, que las partes tengan los medios para combatir las resoluciones de los tribunales cuando éstas no resultan apegadas a derecho.

Esto es, por recurso debe entenderse el medio de impugnación que se interpone contra una resolución judicial pronunciada en un proceso va

iniciado, generalmente ante un juez o tribunal de mayor jerarquía y de manera excepcional ante el mismo juzgador, con el objeto de que dicha resolución sea revocada, modificada o anulada.

La existencia de recursos viene a constituir una de las garantías más importantes dentro de un sistema jurídico para lograr la plena legalidad de las determinaciones judiciales, pues la sociedad reclama un sistema de justicia que permita de manera plena y eficaz el ejercicio de las garantías que establecen las leyes, apoyado en la garantía que establece el artículo 17 de la Constitución Federal.

Tratándose del amparo indirecto el legislador ha establecido como recursos procedentes, los de revisión, queja y reclamación, conforme al artículo 82 de la Ley de Amparo.

Para efectos de esta ponencia me permito citar como punto de referencia el axioma que establece: "EADEM RATIO EADEN DISPOSITIO", el cual consiste en que cuando existan situaciones similares derivadas de una misma razón generadora, debe aplicarse una misma disposición para tomar la resolución correspondiente.

Las hipótesis de procedencia del recurso de revisión en materia de amparo, se encuentran establecidas en el artículo 83 de la Ley de Amparo, y en cuanto al tema de este trabajo es de mencionarse que en la fracción I de ese precepto, se dispone lo siguiente:

"Procede el recurso de revisión: I - Contra las resoluciones de los jueces de Distrito o del superior del Tribunal responsable, en su caso, que deseche o tenga por no interpuesta una demanda de amparo."

El conocimiento de ese recurso corresponde a los Tribunales Colegiados de Circuito de acuerdo a lo dispuesto por la fracción del artículo 85 de la misma Ley, el cual debe ser interpuesto por conducto del juez de Distrito o de la autoridad que conozca del juicio de amparo conforme a la primera parte del primer párrafo del artículo 86 del mismo ordenamiento legal, y deberá hacerse en el término de diez días, contados desde el siguiente al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recurrida, como se previene en la segunda parte de ese párrafo del mismo artículo 86.

El desechamiento de una demanda de amparo indirecto obedece a que exista una causa notoria de improcedencia, de acuerdo con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el cual señala lo siguiente:

El juez de Distrito, examinará ante todo, el escrito de demanda; y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado;

En tanto que la determinación de tener por no interpuesta una demanda de amparo indirecto, es consecuencia fundamentalmente de que en la misma, a pesar de la prevención que se formule al quejoso, no hubiere llenado los requisitos que señala el artículo 116 de la Ley de Amparo, no hubiere hecho las aclaraciones razón, de manera que si no se establece la

posibilidad de combatir el desechamiento parcial de una demanda con el recurso de revisión, el medio idóneo es el de queja conforme a la jurisprudencia número 439 derivada de la Contradicción de Tesis 26/90, publicada en la página 292 y siguiente del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, cuyo texto es el siguiente:

**QUEJA, PROCEDE ESTE RECURSO CONTRA RESOLUCIONES QUE DESECHAN PARCIALMENTE UNA DEMANDA DE GARANTIAS.** De conformidad con lo dispuesto en el artículo 95, fracción VI, de la Ley de Amparo, procede el recurso de queja contra las resoluciones que dicten los jueces de Distrito o el superior del Tribunal a quien se impute la violación, durante la tramitación del juicio de amparo o del incidente de suspensión, que no admitan expresamente el recurso de revisión conforme al artículo 83 y que, por su naturaleza trascendental y grave, puedan causar daño o perjuicio a alguna de las partes, no reparable en la sentencia definitiva. Ahora bien, en los casos en que el juez de Distrito admite sólo en parte una demanda de amparo y la desecha en cuanto a ciertos quejosos o autoridades responsables, el recurso que la parte quejosa debe interponer en contra del desechamiento parcial de esa demanda es el de queja, dado que se trata de una resolución emitida durante la tramitación del juicio de amparo que no admite el recurso de revisión, puesto que una correcta interpretación de la fracción I del artículo 83 de la Ley citada, permite concluir que dicho recurso procede únicamente contra las resoluciones que desechan la demanda de amparo en su totalidad y las que dan por concluido el juicio de garantías. A esa conclusión se llega, tomando en cuenta, además, que todos los casos en que procede el recurso de revisión,

se refieren a resoluciones que dan por terminado el juicio de amparo o el incidente de suspensión, de lo que se deriva, si se atiende al sistema de tramitación de los recursos de queja y de revisión, dados los términos en que se encuentran redactados los artículos 83, 89, 95, 98 y 99 de la Ley de Amparo, que el recurso que se interponga contra las resoluciones emitidas durante la tramitación del juicio de amparo o del incidente de suspensión fuera rápido y sencillo, dejando abierta la opción de suspender el procedimiento en determinados casos, como dispone el artículo 101. Esto no sucede con el recurso de revisión cuya substanciación es más compleja y, por lo mismo, implica mayor dilación. Como en el supuesto de que se trata, se debe seguir actuando dentro del expediente, por cuanto se refiere a la parte de la demanda que fue admitida, y toda vez que el recurso de revisión no prevé la suspensión del procedimiento de este caso, el recurso procedente debe ser el de queja.

También suele suceder que el quejoso presente una demanda de amparo en la que solicite la suspensión de oficio de los actos reclamados, en los casos previstos por el artículo 17, en relación con el 123, ambos de la Ley de Amparo, y el juez declare su incompetencia legal para conocer de la misma omitiendo proveer sobre la suspensión de oficio solicitada, a pesar de que en observancia a lo dispuesto por el artículo 54 de la referida ley, debe pronunciarse respecto de la suspensión sin perjuicio que, desde un principio sostenga la incompetencia de plano para conocer del juicio. Sobre el particular la entonces Segunda Sala de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Jurisprudencia 5/90, ha sustentado criterio en el sentido de que es procedente el recurso de queja en términos de la fracción VI del artículo 95 de la Ley de Amparo en contra de una resolución de

incompetencia que omita proveer respecto de la suspensión de oficio, tesis la cual aparece publicada en la página 71 de la Gaceta número 35 de la Octava Epoca del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente al mes de noviembre de mil novecientos noventa, con el siguiente texto:

QUEJA, RECURSO DE. ES PROCEDENTE EN CONTRA DE UNA RESOLUCION DE INCOMPETENCIA QUE OMITA PROVEER RESPECTO DE LA SUSPENSION DE OFICIO. Cuando en una resolución el juez de Distrito se declara incompetente, sin proveer respecto de la suspensión de oficio, los efectos de ese acto irregular equivalen a una negativa y esa resolución es recurrible mediante el recurso de queja, en términos del artículo 95, fracción VI, de la Ley de Amparo, pues se trata de una resolución irregular que tiene un claro efecto positivo e influencia dentro del proceso."

Habiéndose tomado como premisa fundamental la de que cuando se combate una resolución de incompetencia que hubiese omitido proveer sobre la suspensión de oficio solicitada, se estaba cuestionando una resolución irregular, teniendo la misma un claro efecto positivo e influencia dentro del proceso, equivalente a una negativa de la suspensión.

Se estima conveniente referir lo correspondiente al recurso idóneo contra la negativa o concesión de la suspensión de oficio de los actos reclamados, pues en la legislación vigente no se encuentra establecida de manera precisa el medio de impugnación que procede en esos supuestos ya que en ninguna de las hipótesis de los artículos 83 y 95 de la Ley de Amparo relativas a los recursos de revisión y de queja,



respectivamente, se señalan, pues a virtud de la iniciativa presidencial de quince de noviembre de mil novecientos ochenta y cinco, se estableció el inciso b) de la fracción II del artículo 83 de la Ley de Amparo para determinar la procedencia del recurso de revisión contra las resoluciones de los jueces de Distrito o del Superior del tribunal responsable, en su caso, en las cuales concedieran o negaran la suspensión de oficio; pero ahora esa disposición ya no aparece en vigor. Sin embargo, del párrafo tercero del artículo 89 de la Ley de Amparo cuyo texto es el siguiente:

"Tratándose del auto en que se haya concedido o negado la suspensión de plano, interpuesta la revisión, sólo deberá remitirse al Tribunal Colegiado de Circuito copia certificada del escrito de demanda, del auto recurrido, de sus notificaciones y del escrito u oficio en que se haya interpuesto el recurso de revisión, con expresión de la fecha y hora del recibo.",

de lo que se infiere la procedencia del recurso de revisión contra tales determinaciones, por ello al margen de lo cuestionable sobre la instauración de recursos por analogía, lo cierto es que buscando un medio de reparación, es factible ubicarlo dentro de la hipótesis que señala el inciso a) de la fracción II del artículo 83 de la Ley de Amparo que establece la procedencia de la revisión contra las resoluciones que nieguen o concedan la suspensión definitiva de los actos reclamados; lo anterior sólo para los efectos de señalar todos los supuestos que abarcan la propuesta que se contiene en este estudio.

En suma, de lo anterior se puede establecer que contra las resoluciones que desechen o tengan por no interpuesta una demanda de

amparo indirecto procede el recurso de revisión; contra el desechamiento parcial de una demanda de amparo indirecto procede el recurso de queja; contra el acuerdo en que se hubiere declarado la incompetencia legal para conocer de una demanda de amparo indirecto omitiendo proveer sobre la suspensión de oficio de los actos reclamados procede el recurso de queja; contra los autos que admitan demandas notoriamente improcedentes procede el recurso de queja, y; contra el acuerdo que niega o concede la suspensión de oficio de los actos reclamados procede el recurso de revisión.

Lo anterior permite formular el siguiente planteamiento: primero, la necesidad de establecer la procedencia de un recurso de la misma naturaleza contra los proveídos del juez de Distrito o el superior del Tribunal responsable que desechen o que tengan por no interpuesta una demanda de amparo indirecto, contra los que la desechan parcialmente contra los que declaren la incompetencia de plano para conocer de una demanda en cuanto omitieron proveer respecto a la suspensión de oficio de los actos reclamados, contra los acuerdos que nieguen o concedan a suspensión de plano de los actos reclamados, y contra los acuerdos que las admitan cuando alguna de las partes estime que era notoriamente improcedente, y; segundo, definido lo anterior, señalar el mecanismo eficaz para que el Tribunal Colegiado de Circuito, a quien corresponde conocer del recurso, por razón de jerarquía, resuelva con la prontitud el medio de defensa interpuesto en esos supuestos.

Para sustentar la propuesta a fin de definir lo anterior, es conveniente mencionar que en la iniciativa del Presidente de la República de fecha

iniciativa presidencial para instituir la hipótesis de la fracción XI del artículo 95 de la Ley de Amparo, se establezca el mismo mecanismo que ha resultado lo suficientemente ágil y que es el contenido en el último párrafo del artículo 99 de la misma Ley, que permite que a la brevedad un Tribunal Colegiado ante la inconformidad de alguna de las partes cuando se dé alguno de los referidos supuestos pueda corregir las irregularidades en que hubiere incurrido la autoridad que conoció de la demanda de amparo, pues también suele suceder que al haberse admitido una demanda notoriamente improcedente y concedido la suspensión provisional de los actos reclamados, ésta surta sus efectos de manera ilegal en perjuicio de la parte tercera perjudicada o de la sociedad.

Por último, es de advertirse que si en la jurisprudencia 10/92 de la entonces Segunda Sala de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación publicada en la página 346 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, con el siguiente texto:

SUSPENSIÓN PROVISIONAL. EL RECURSO DE QUEJA ES PROCEDENTE CONTRA LA DETERMINACIÓN QUE ESTABLECE LOS REQUISITOS PARA QUE SURTA EFECTOS. El artículo 95, fracción XI, de la Ley de Amparo, que establece la procedencia del recurso de queja en contra de las resoluciones pronunciadas por los jueces de Distrito en las que concedan la suspensión provisional, debe entenderse en el sentido de que comprende a los acuerdos que tengan relación con esa medida cautelar, por lo que también abarca las condiciones que se fijan al quejoso para que aquélla surta efectos, toda vez que tales premisas no pueden desvincularse la una de la otra, pues su coexistencia se da al formar parte

del mismo acto en que se concede la suspensión de los actos reclamados; por tanto, es procedente el recurso de queja cuando sólo se impugnen las condiciones fijadas para que la suspensión surta sus efectos.

Se ha establecido la procedencia del recurso de queja en términos del artículo 95, fracción XI, de la Ley de Amparo, contra la determinación que establece los requisitos para que surta efectos la suspensión provisional de los actos reclamados, pues en efecto si la existencia de esa hipótesis obedeció a la necesidad de que el quejoso cuente con un medio de defensa contra las resoluciones que concedan la suspensión provisional de los actos reclamados, entonces los requisitos de efectividad de la medida cautelar forman parte del proveído concesorio y quien esté inconforme con los mismos debe tener a su alcance ese medio de impugnación para cuestionarlos; entonces es conveniente por razones de seguridad jurídica de las partes en el juicio, que ese supuesto se fije en la Ley de la Materia.

Lo anterior constituye un medio para lograr una mejor eficacia en la impartición de la justicia, por la unidad en la existencia de recursos y rapidez en la solución de los mismos, a fin de lograr ese estado de derecho que la sociedad demanda al tener a su alcance una eficiente solución a los problemas jurídicos que resultan en la tramitación de los juicios de amparo, cuya institución constituye la protección y salvaguarda de los derechos de los gobernados frente al poder público a efecto de evitar la afectación de manera arbitraria de sus garantías individuales y que se corrijan oportunamente las decisiones incorrectas de los órganos a quienes se encomienda el trámite y solución de los juicios de amparo indirectos.

dieciocho de noviembre de mil novecientos noventa y tres para modificar diversas disposiciones de la Ley de Amparo, entre ellas las relativas al recurso de queja, propuso la adición del artículo 95 de la Ley de Amparo, con la fracción XI, para establecer la procedencia de ese recurso contra las resoluciones de los jueces de Distrito o del superior del Tribunal responsable en su caso, que concedan o nieguen la suspensión provisional de los actos reclamados. Se expuso como razones para ello, que debido, por una parte, al enorme recargo de labores de los jueces de Distrito, y, por otra parte, al plazo tan breve en el cual deban resolver sobre la medida de urgencia regulado por el artículo 130 de la Ley de Amparo, resultaba necesario que las partes tengan la posibilidad de acudir ante los Tribunales Colegiados para que éstos puedan corregir los errores en que incurran los juzgados de primer grado.

Así, estimo que la solución al planteamiento formulado es lo siguiente:

a). - En primer término, partiendo del principio de seguridad jurídica de los gobernados, que se establezca la procedencia de un solo recurso en contra de los acuerdos que desechen en su integridad o en parte una demanda de amparo indirecto, la tengan por no interpuesta, declaren la incompetencia de plano sin proveer sobre la suspensión de oficio de los actos reclamados, nieguen o concedan la suspensión de oficio de los actos reclamados, así como contra los acuerdos que las admitan y que alguna de las partes considere que era notoriamente improcedente, pues si se está tratando en todos esos supuestos de lo referente al proveído inicial que debe recaer a la promoción de una demanda de amparo, tendría mayor seguridad jurídica el quejoso o el inconforme contra el proveído relativo, al

disponer de un solo medio de reparación, que debe ser el de queja y no una diversidad de recursos con tramitaciones diferentes; y

b).- Que tal hipótesis de procedencia del recurso de queja se ubique dentro del supuesto que ha establecido de manera sumarásima el legislador en la fracción XI del artículo 95 de la Ley de Amparo, primero porque suele suceder en la práctica que una demanda es desechada total o parcialmente por notoria improcedencia o tenida por no interpuesta, y el quejoso hubiera solicitado la suspensión provisional del acto reclamado correspondiente, y no será hasta que se tramite y resuelve el recurso de revisión, y en caso de que se determine que indebidamente fue desechada total o parcialmente la demanda o tenida por no interpuesta, cuando la autoridad en caso de que la admita, provea sobre la suspensión provisional del acto reclamado, para lo cual transcurrió un período en el cual bien pudo ejecutarse el acto reclamado de manera irreparable para el quejoso; o que el órgano jurisdiccional se haya declarado incompetente de plano para conocer de la misma sin proveer sobre la suspensión de oficio de los actos reclamados, pues no será hasta que se avoque al conocimiento la autoridad a quien se declinó la competencia o se resuelva el conflicto correspondiente, cuando se subsane la omisión, ya que tratándose de competencia los particulares no pueden tener participación porque es un aspecto que corresponde sólo a los órganos jurisdiccionales, como se advierte de la jurisprudencia 35/97 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo título es el siguiente: "INCOMPETENCIA POR DECLINATORIA DICTADA EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, NO ES RECURRIBLE EN REVISIÓN", y segundo, porque partiendo de las mismas razones que se invocaron en la exposición de motivos de la

Por tanto, se propone por una parte derogar la fracción 1 del artículo 83 de la Ley de Amparo, y por otra adicionar la fracción XI del artículo 95 de la Ley de Amparo, para quedar en los términos siguientes:

**ART. 95.-** El recurso de queja es procedente:

**...XI.-** Contra las resoluciones de un juez de Distrito o del superior del Tribunal responsable, en su caso, en que admitan o desechen total o parcialmente una demanda de amparo o la tengan por no interpuesta; en aquéllas que concedan o nieguen la suspensión provisional o de oficio de los actos reclamados, y en caso de que decreten esa medida cuando se impugnen las condiciones fijadas para que surta sus efectos, y cuando la autoridad a quien corresponda conocer de la demanda de amparo se declare incompetente de plano para conocer de la misma sin proveer sobre la suspensión de oficio de los actos reclamados. **(Arturo Hernández Torres, Tomo II, páginas 731 a 744)**

---

b) En relación a la I fracción del artículo 83 de la Ley de Amparo que establece la procedencia del recurso de revisión en contra del auto que deseche la demanda de amparo indirecto, estimo que este medio de impugnación no es el adecuado debido al tiempo que tarde en tramitarse y resolverse, pues no hay que olvidar que el desechamiento de la demanda de amparo deja expeditos los derechos de la responsable para que ejecutar el acto reclamado, en tal virtud en esa hipótesis lo que procedería sería la queja de 24 horas a que se refiere la fracción XI del artículo 95 de la ley de la materia. **(Jorge Antonio Galindo Monroy, Tomo III, páginas 1643 y 1644)**

---

I.- Contra las resoluciones de los jueces de Distrito que desechen o tengan por no interpuesta la demanda. (David Ancira Martínez, Tomo III, página 1914)

---

II. Contra las resoluciones de los jueces de Distrito o del superior del Tribunal responsable, en su caso, en las cuales:

a) Concedan o nieguen la suspensión definitiva;

b) Modifiquen o revoquen el auto en que concedan o nieguen la suspensión definitiva; y

c) Nieguen la revocación o modificación a que se refiere el inciso anterior;

### **PROPUESTAS**

El artículo 83, fracción II, inciso a), de la ley aludida, establece simplemente que procede el recurso de revisión contra la resolución por la que el juez de Distrito conceda o niegue la suspensión definitiva.

Pero frecuentemente se da la circunstancia de que lo que se discute no es ya la negativa o el otorgamiento de dicha medida, sino el monto de la garantía fijada cuando se concede la aludida suspensión. Y aunque ese problema ha sido definitivamente resuelto por jurisprudencia firme del pleno de la Suprema Corte de Justicia (es la 521 del tomo VI del último Apéndice,



de la voz "SUSPENSION DEFINITIVA. ES PROCEDENTE EL RECURSO DE REVISION Y NO EL DE QUEJA CONTRA LA INTERLOCUTORIA QUE LA CONCEDE, AUNQUE SOLO SE IMPUGNE LA GARANTIA A LA QUE SE SUJETO LA EFECTIVIDAD"), sería conveniente que se adicionara la mencionada fracción II, inciso a), del artículo 83 aludido, para quedar como sigue: "Procede el recurso de revisión: ... II. Contra las resoluciones de los jueces de Distrito o del superior del Tribunal responsable, en ese caso, en las cuales: a) Concedan o nieguen la suspensión definitiva, aun cuando sólo se impugne el monto de la garantía fijada". (Jorge Figueroa Cacho, Tomo I, páginas 406 y 407)

---

He dejado para comentar en último lugar un tema que considero muy importante: la impugnación de los acuerdos pronunciados en la audiencia incidental.

Hasta antes de que se aprobara la décimo quinta reforma hecha a la Ley de Amparo, por decreto de 29 de diciembre de 1983, publicado en el Diario Oficial de 16 de enero de 1984 y en Vigor sesenta días después, el artículo 83, en su fracción II, al igual que ahora establecía que en el incidente de suspensión el recurso de revisión únicamente procedía tratándose de las resoluciones por las que se hubiese concedido o negado la suspensión definitiva, así como contra aquellas que hubiesen autorizado o negado la modificación o revocación de la misma clase de suspensión.

A su vez en la fracción IV del propio artículo 83, se establecía que procedía revisión contra las sentencias dictadas en la audiencia constitucional por los jueces de Distrito. Así simplemente.

Con la aludida reforma quince quedó igual la mencionada fracción II del aludido artículo 83, pero a la fracción IV se añadió lo siguiente:

"Al recurrirse tales sentencias podrán impugnarse los acuerdos pronunciados en el curso de la citada audiencia".

Con posterioridad, en la reforma décimo sexta autorizada por decreto de 26 de abril de 1986, publicado en el Diario Oficial de 20 de mayo siguiente y en vigor a partir del 4 de junio del mismo año, a la frase copiada en el párrafo anterior sólo se cambió la palabra "podrán" por "deberán".

Desde entonces la ley de la materia, en el tema que comento, dispone: que en el incidente de suspensión únicamente cabe revisión, entre otros supuestos contra la interlocutoria que lo decida; que tratándose del juicio principal dicho recurso procederá también, entre otros casos, contra las sentencias dictadas en la audiencia constitucional, y que al hacerse valer dicho medio de defensa deberán atacarse asimismo los acuerdos que se hubieran pronunciado en dicha audiencia de fondo.

No hay duda que el legislador omitió tomar en consideración los acuerdos tomados en la audiencia incidental.

Como el recurso de revisión está limitado a las hipótesis contempladas exclusivamente en las cinco fracciones que integran el artículo 83 multicitado, es claro que las decisiones plasmadas en la referida audiencia incidental únicamente pueden ser atacadas a través del diverso recurso de queja, con base en el artículo 95, fracción VI, de la ley de la materia, toda vez que ésta dispone que tal recurso cabe "Contra las resoluciones que dicten los jueces de Distrito... durante la tramitación del... incidente de suspensión, que no admitan expresamente el recurso de revisión conforme al artículo 83 ...".

Lo expresado es obviamente lo legal y así lo han resuelto, si no todos, cuando menos la mayoría de los tribunales colegiados de circuito. Sólo citaré dos precedentes para corroborar lo que afirmo, localizables en el Informe de 1985, tercera parte, página 117, y en la octava época del Semanario Judicial de la Federación, tomo III, segunda parte 2, página 894, respectivamente de las voces "AUDIENCIA INCIDENTAL. LAS VIOLACIONES COMETIDAS EN LA, DEBEN RECLAMARSE A TRAVES DEL RECURSO DE QUELA Y NO DEL DE REVISION" y "AUDIENCIA INCIDENTAL. RECURSO DE REVISION. NO ES PROCEDENTE PARA REMEDIAR LAS VIOLACIONES COMETIDAS EN ELLA" (aclaro que esta última aparece como jurisprudencia).

Inclusive la propia Suprema Corte de Justicia se pronunció en el mismo sentido como se desprende de la jurisprudencia por contradicción de tesis que aparece registrada bajo el número 446 en el tomo VI del Apéndice 1917-1995, que dice:

"RECURSO DE QUEJA, PROCEDE EN CONTRA DE LOS ACUERDOS DICTADOS EN EL TRAMITE DEL INCIDENTE DE SUSPENSION.- El artículo 83, fracción II, inciso a), de la Ley de Amparo, establece de manera limitada la procedencia del recurso de revisión en contra de las resoluciones de los jueces de Distrito que concedan o nieguen la suspensión definitiva. El contenido de este dispositivo se relaciona con lo dispuesto por el artículo 95, fracción VI, del mismo ordenamiento, en el cual se reserva el recurso de queja para impugnar las resoluciones dictadas durante la tramitación del juicio de amparo o del incidente de suspensión, que no admitan expresamente el de revisión; por ende, la interpretación correcta de tales preceptos es en el sentido de que el recurso de revisión, procede únicamente en contra de la concesión o negativa de la suspensión definitiva, y el de queja para impugnar los acuerdos dictados en el tramite del incidente de suspensión".

¿Qué se deduce de todo lo anterior? Simple y sencillamente que al parecer todo se ha maquinado de tal forma que se crió una verdadera trampa procesal para las partes o sus abogados, porque para combatir los acuerdos pronunciados en la audiencia constitucional lo deben hacer a través del recurso de revisión que interpongan hasta contra la sentencia definitiva, en cambio, si de los acuerdos adoptados en la audiencia incidental se trata, deben acudir de inmediato al recurso de queja, y si la interlocutoria respectiva también les es desfavorable habrán de atacarla mediante el recurso de revisión.

Hasta hoy, creo, el único tribunal colegiado que se ha atrevido a sostener que en la hipótesis que trato cabe revisión en similares términos a

como está prescrito en la fracción IV del aludido artículo 83 (O sea, esperarse hasta el dictado de la interlocutoria que decida el incidente de suspensión y, en caso de ser ésta desfavorable, interponer tal medio de defensa en el que se impugnen tanto la propia sentencia interlocutoria como los acuerdos adoptados en la audiencia incidental), es el antiguo Primero del Segundo Circuito, como lo demuestra la ejecutoria que puede verse en el Informe de 1986, tercera parte, página 311, que dispone:

"REVISIÓN, PROCEDENCIA DE LA, CONTRA LOS ACUERDOS DICTADOS EN LA AUDIENCIA INCIDENTAL.- Es dable examinar en revisión, las determinaciones dictadas en la audiencia incidental, pues aun cuando de manera expresa no se establece al respecto la procedencia del referido medio de impugnación, debe hacerse extensivo en ese sentido, lo preceptuado en la fracción IV, del artículo 83 de la Ley de Amparo. por cuanto a que del numeral invocado, se desprende. que las infracciones cometidas en las resoluciones dictadas durante la diligencia constitucional deben ser combatidas al impugnarse la resolución de fondo, cual da lugar a estimar que las violaciones cometidas durante la audiencia suspensiva, también pueden plantearse al inconformarse de la interlocutoria, ya que los recursos no han sido establecidos por el legislador. como trampas procesales que entorpezcan la defensa de los derechos de las partes, sino como instrumentos tendientes a preservar un marco de legalidad en la actuación de los funcionarios judiciales, por lo que es preciso unificar los criterios aludidos, a fin de otorgar seguridad jurídica a los intervinientes en la litis constitucional".

Si a lo expresado se añade que los incidentes de suspensión se fallan casi siempre en la audiencia incidental, no queda duda de que el afectado con alguna resolución pronunciada durante su desarrollo nunca podrá hacer valer el recurso de queja, habida cuenta que, como ya se dictó la interlocutoria, al agotar dicho medio de defensa se le dirá que hubo un cambio de situación jurídica, y si al intentar la revisión contra aquella resolución planteara, en vía de agravio, la violación relativa al acuerdo recaído en la audiencia incidental se le manifestaría que no se puede estudiar porque era materia de recurso de queja. ¡Una verdadera trampa procesal!.

Aunque no se relaciona con el tópico de la suspensión (yo sólo lo referí a guía de ejemplo en mi voto particular), de alguna manera tiene algo que ver con ese tema el siguiente problema que se presentó en el tribunal al que estoy adscrito.

Antes de la audiencia constitucional se desecharon unas pruebas a la promovente del amparo. Contra la decisión respectiva es indudable que procedía queja conforme lo estableció el pleno de la Suprema Corte en la jurisprudencia de la voz "PRUEBAS. SU DESECHAMIENTO EN UN JUICIO DE AMPARO, MEDIANTE AUTO DICTADO POR UN JUEZ DE DISTRITO ANTES DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, ES IMPUGNABLE EN QUEJA Y NO EN REVISION" (novena época, tomo V, junio, página 87): recurso que fue precisamente el que se hizo valer. No obstante que la actual Primera Sala del mencionado alto Tribunal sostiene que la suspensión del procedimiento a que alude el artículo 101 de la ley de la materia (relacionado a su vez estrechamente con el artículo 95, fracción

VI, del mismo ordenamiento), debe decretarla, en todo caso, el propio juez de Distrito (así se dice en la ejecutoria visible en la misma novena época, tomo IV, julio, página 154), sucede que en el caso que comento el juzgador no lo hizo y en su oportunidad dictó sentencia definitiva. Muchos pensarán, como en la especie lo hizo la mayoría, que la queja quedó sin materia, pero ¿acaso podrá plantearse en la revisión contra tal fallo, como violación del procedimiento, el desechamiento de las probanzas indicadas siendo que esa cuestión era propia de dicha queja?

En el asunto multicitado formulé voto particular (novena época, tomo IX, junio, página 969) en el siguiente sentido: "El auto recurrido es el pronunciado antes de que se celebrara la audiencia constitucional a través del que el Juez de Distrito desechó, a la ahora recurrente, las pruebas testimonial y de inspección judicial que ofreció.- Contra ese acuerdo no hay duda de que procede el recurso de queja previsto en el artículo 95, fracción VI, de la ley de la materia, lo que inclusive estableció el Pleno de la Suprema Corte de Justicia en la jurisprudencia 37/97, visible en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, Tomo V, junio, página 87, de la voz: "PRUEBAS SU DESECHAMIENTO EN UN JUICIO DE AMPARO, MEDIANTE AUTO DICTADO POR UN JUEZ DE DISTRITO, ANTES DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, ES IMPUGNABLE EN QUEJA Y NO EN REVISION.". - Cada vez que se interpone el recurso aludido con apoyo en la citada fracción VI del artículo 95 mencionado, debe determinarse si la resolución que la decida influirá o no en la sentencia definitiva, pues de aceptarse así, el procedimiento del juicio de garantías debe suspenderse. Así lo dispone el artículo 101 de la ley invocada.- La actual integración de la Primera Sala de la Suprema Corte, interpretando dicho artículo 101,

consideró que es al propio Juez Federal a quien corresponde dilucidar si suspende o no el trámite del juicio de garantías. Al respecto puede consultarse la ejecutoria visible en la Novena Epoca del Semanario invocado, Tomo IV, julio, página 154, cuyo título es el de: "SUSPENSION DEL PROCEDIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO POR LA INTERPOSICION DEL RECURSO DE QUEJA. CORRESPONDE DECRETLARLA AL JUEZ DE DISTRITO".- Por razones obvias se entiende que un Juez Federal estará reacio a ordenar dicha suspensión, puesto que el asunto respectivo quedará estancado, será un negocio más que acrecentara su estadística.- Todo eso me hace pensar que cuando, como en el caso, se plantea recurso de queja contra algún auto dictado antes de la celebración de la audiencia constitucional, luego que el Juez reciba el oficio por el que se le solicita el informe justificado con relación a la queja, intencionalmente no decretará la suspensión del procedimiento y lo más pronto posible dictará la sentencia definitiva para así lograr que se quede sin materia (como se está resolviendo en la especie ) el aludido medio de defensa.- Lo expresado se corrobora con lo siguiente: El texto original de la fracción IV del artículo 83 de la Ley de Amparo, decía así:

"Procede el recurso de revisión: .1V. Contra las sentencias dictadas en la audiencia constitucional por los Jueces de Distrito, o por el superior del tribunal responsable en los casos a que se refiere el artículo 37 de esta ley.".- Fue con motivo de la reforma publicada en el Diario Oficial de veinte de mayo de mil novecientos ochenta y seis (en vigor el cuatro de junio siguiente), que se adicionó la indicada fracción IV del artículo 83 para quedar como se encuentra en la actualidad, esto es, a lo copiado en el párrafo anterior se le agregó lo siguiente: "Al recurrirse tales sentencias



deberán, en su caso, impugnarse los acuerdos pronunciados en la citada audiencia".- Antes de que se aprobara la adición aludida si a alguna de las partes en el juicio de garantías le afectaba alguna resolución adoptada al estarse celebrando la audiencia constitucional, procedía recurso de queja con base en la fracción VI, del artículo 95, medio de defensa que en la mayoría de las veces e afectado no alcanzaba a interponer antes de que se dictara la sentencia definitiva, de suerte que si esta última le era desfavorable formulaba, casi al mismo tiempo, los dos recursos: queja contra lo resuelto en la audiencia constitucional y revisión contra el fallo (en los dos casos el término era de cinco días).- Si en aquel entonces se hubiera sustentado el criterio sostenido por la mayoría, es claro que todas las quejas tendrían que haberse declarado sin materia. Lo que no ocurría así.- Pero no sólo me refiero al pasado, en el presente también puede suceder.- En efecto, sabido es que contra los acuerdos tomados en la audiencia incidental procede queja. Aunque sobre el particular existe criterio casi uniforme por los Tribunales Colegiados, para muestra cito la jurisprudencia 644 del Tomo VI, del último Apéndice al Semanario aludido, que dispone: "AUDIENCIA INCIDENTAL. LAS VIOLACIONES COMETIDAS EN LA SON MATERIA DEL RECURSO DE QUEJA Y NO DEL DE REVISION".- Si las transgresiones que se combaten fueron realizadas en la audiencia incidental y no en la interlocutoria suspensiva, las mismas deben reclamarse por medio del recurso de queja a que se refiere la fracción VI del artículo 95 de la Ley de Amparo, puesto que ninguna de las fracciones del artículo 83 de la indicada ley dispone en forma expresa, que las violaciones cometidas en la audiencia incidental podrán ser impugnadas por medio del recurso de revisión".- Es rara la ocasión en que un Juez de Distrito no dicta la interlocutoria correspondiente en el

mismo momento de celebración de la audiencia incidental.- Luego, si a algunos les afecta la resolución pronunciada en el desarrollo de tal audiencia, jamás podrían interponer el recurso de queja, pues, reitero, como en el mismo acto se pronuncia la sentencia interlocutoria, contra la cual procede revisión, su dictado haría que quedara sin efectos el acuerdo emitido en la audiencia susodicha siguiendo el criterio de mis compañeros Magistrados.- Por todo lo anterior es que no comparto su opinión".

Se hace indispensable, pues, que se adicione el artículo 83, fracción II, inciso a), de la Ley de Amparo, para que quede así: "Procede el recurso de revisión: ... II. Contra las resoluciones de los jueces de Distrito o del superior del Tribunal responsable. en su caso, en las cuales: a) Concedan o nieguen la suspensión definitiva. Al recurrirse 'a correspondiente interlocutoria deberán, en su caso impugnarse los acuerdos pronunciados en la audiencia incidental". (Jorge Figueroa Cacho, Tomo I, páginas 415 a 423)

---

II. Contra las resoluciones de los Jueces de Distrito o del superior del tribunal responsable, en su caso, en las cuales:

- a) Concedan o nieguen la suspensión provisional;
- b) Concedan o nieguen la suspensión definitiva.
- c) Modifiquen o revoquen el auto en que concedan o nieguen la suspensión definitiva; y
- d) Nieguen la revocación o modificación a que se refiere el inciso anterior; (Sergio Pallares y Lara, Tomo I, página 502)

Precepto actual del que se pretende la reforma lo es en relación con el Artículo 83, fracción II, inciso a), de la Ley de Amparo, en su texto actual que dice:

"Artículo 83.- Procede el recurso de revisión: (...) II.- Contra las resoluciones de los jueces de distrito o del superior del tribunal responsable, en su caso, en las cuales: a).- Concedan o nieguen la suspensión definitiva. (...)"

**b).- MOTIVOS DE LA APORTACION:**

El Legislador para agilizar el trámite, conclusión y resolución de los juicios de amparo, se percató que resultaba contrario a la economía y fluida marcha del procedimiento el que se tuvieran que promover dos diversos recursos en torno a la actuación judicial integral que consiste en la audiencia constitucional y la sentencia que, en el mismo acto, debe ser pronunciada. Así fue como descartó la procedencia del recurso de queja en contra de los acuerdos dictados en dicha audiencia constitucional, para establecer como forma de impugnación mediante agravio que se formule en recurso de revisión que, en su caso, se promueva en contra de la sentencia que resuelva el juicio de amparo, como se prevé en la parte final de la fracción IV del Artículo 83 de la Ley de Amparo.

Ahora bien, resulta carente de congruencia legislativa el que tratándose de un procedimiento accesorio del principal, en el incidente de suspensión se hubiera omitido seguir la misma regla procesal para la impugnación de los acuerdos dictados en audiencia incidental, pues en su

redacción vigente el inciso a) de la fracción II del Artículo 83 de la Ley de Amparo, tiene los mismos limitantes de una disposición superada, como lo fue la previa a la modificación de la fracción IV del Artículo 83 de la Ley de la Materia. En otras palabras, los acuerdos dictados en la audiencia incidental tienen que recurrirse en queja conforme a lo que prevé la fracción VI del Artículo 95 de la Ley de Amparo, en tanto que la resolución que niegue o conceda la suspensión definitiva, tiene que impugnarse mediante el recurso de revisión.

c).- La redacción que resultaría al incorporar la propuesta de adición, quedaría en la siguiente forma:

"Artículo 83.- Procede el recurso de revisión: (...) II.- Contra las resoluciones de los jueces de distrito o del superior del tribunal responsable, en su caso, en las cuales: a).- Concedan o nieguen la suspensión definitiva. (...)"

"Al recurrirse tales resoluciones, deberán, en su caso, impugnarse los acuerdos pronunciados en la audiencia incidental". (Guillermo Campos Osorio, Tomo II, páginas 975 a 977)

---

**III. Contra los autos de sobreseimiento y las interlocutorias que se dicten en los incidentes de reposición de autos;**

## **PROPUESTAS**

Contra las autoridades responsables, con relación a los juicios de amparo de la competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito, en amparo directo, cuando no provean sobre la suspensión dentro del término legal o concedan o nieguen ésta; cuando rehusen la admisión de fianzas o contrafianzas; cuando admitan las que no reúnan los requisitos legales o que puedan resultar insuficientes; cuando nieguen al quejoso su libertad caucional en el caso a que se refiere el artículo 172 de esta ley, o cuando las resoluciones que dicten las autoridades sobre la misma materia, causen dañoso perjuicios notorios a alguno de los interesados. (Sergio Pallares y Lara, Tomo I, página 502)

---

**IV. Contra las sentencias dictadas en la audiencia constitucional por los jueces de Distrito, o por el superior del tribunal responsable, en los casos a que se refiere el artículo 37 de esta Ley. Al recurrirse tales sentencias deberán, en su caso, impugnarse los acuerdos pronunciados en la citada audiencia.**

### **PROPUESTAS**

(ACTUAL ARTICULO 83).- Procede el recurso de revisión:

I a III .....

.....

IV. Contra las sentencias dictadas en la audiencia constitucional por los jueces de Distrito, o por el superior del tribunal responsable, en los casos a que se refiere el artículo 37 de esta ley; así como las resoluciones con la calidad y el carácter de sentencia en los amparos de la libertad, en los términos de la fracción II del artículo 136. Al recurrirse tales sentencias deberán en su caso, impugnarse los acuerdos pronunciados en la citada audiencia.

V... .. (Juventino V. Castro y Castro, Tomo I, página 153)

---

IV.- Contra los autos de sobreseimiento y interlocutorias que se dicten en los incidentes reposición de autos. (Sergio Pallares y Lara, Tomo I, página 502)

---

IV.- Contra las sentencias dictadas en la audiencia constitucional. Al recurrirse la sentencia deberán, en su caso, impugnarse las irregularidades observadas en la audiencia. (David Ancira Martínez, Tomo III, página 1914)

---

V. Contra las resoluciones que en materia de amparo directo pronuncien los Tribunales Colegiados de Circuito, cuando decidan sobre la constitucionalidad de leyes federales o locales, tratados internacionales, reglamentos expedidos por el Presidente de la República de acuerdo con la fracción I del

**artículo 89 constitucional y reglamentos de leyes locales expedidos por los gobernadores de los Estados, o cuando establezcan la interpretación directa de un precepto de la Constitución.**

**La materia del recurso se limitará, exclusivamente, a la decisión de las cuestiones propiamente constitucionales, sin poder comprender otras.**

**En todos los casos a que se refiere este artículo, la parte que obtuvo resolución favorable a sus intereses, puede adherirse a la revisión interpuesta por el recurrente, dentro del término de cinco días, contados a partir de la fecha en que se le notifique la admisión del recurso, expresando los agravios correspondientes; en este caso, la adhesión al recurso sigue la suerte procesal de éste.**

### **PROPUESTAS**

Examinando la naturaleza jurídica del recurso de revisión encontramos que, en la actualidad, tiene las características de una apelación; es decir, en virtud de este recurso, el superior jerárquico del juez de distrito, que puede ser la Suprema Corte de Justicia o un Tribunal Colegiado de Circuito, examinan sus resoluciones, especialmente la sentencia, para confirmarlas, modificarlas o revocarlas.

Si bien es necesaria la expresión de agravios como regla general, lo que limita la litis de la segunda instancia (revisión), en los casos en que se admite la suplencia de la deficiencia de la queja, la litis se abre, por la obligación del tribunal de alzada de examinar de oficio todos los aspectos de la controversia constitucional; incluso en los casos en que el recurso es de estricto derecho, no puede afirmarse que la litis en la alzada sea cerrada del todo, pues debe examinarse de oficio la procedencia del juicio de amparo, pudiendo sobreseerse invocando causales distintas a las que haya tomado en cuenta el A Quo.

Respecto de los efectos de la resolución del recurso, por regla general no existe el reenvío, lo que significa que el tribunal revisor, en caso de considerar incorrecta la sentencia recurrida, la revoca o anula (*iudicium rescindens*) dictando en el mismo acto la determinación que la sustituye (*iudicium rescisorium*); sin embargo, cuando se advierten violaciones de procedimiento en el juicio de amparo, el tribunal de alzada sólo anula o revoca la determinación recurrida y ordena reponer el procedimiento a partir de la violación, por lo que, en esos casos, si existe el reenvío y el expediente se devuelve al A Quo para que vuelva a desahogar el trámite del juicio y a dictar sentencia.

Por lo anterior, podemos afirmar que la denominación del recurso (revisión), no corresponde a su naturaleza jurídica, advirtiéndose que en la primera Ley Orgánica Reglamentaria de los artículos 101 y 102 de la Constitución, promulgada el 30 de noviembre de 1861, la denominación del recurso era conforme a las reglas generales de los juicios ordinarios, pues



se le llamaba apelación y súplica, según conociera un tribunal de circuito o la Suprema Corte.

Es en el segundo ordenamiento que regula el juicio de amparo<sup>55</sup> que aparece la denominación actual del recurso, pero nótese que el nombre de revisión no se usó como sustantivo, sino como verbo que indicaba la facultad de la Suprema Corte de *revisar*, de oficio, la sentencia del juez de distrito, quien ni siquiera tenía oportunidad de ejecutarla antes de la revisión de la Corte, pues debía remitirle los autos *"inmediatamente"*.

El mismo sistema se estableció en la Ley Orgánica de los Artículos 101 y 102 de la Constitución Federal, promulgada el 14 de diciembre de 1882; en ambos ordenamientos el Congreso partió de la base de que la Constitución de 1857 encomendaba a la Suprema Corte de Justicia de la Nación la resolución del juicio de amparo y no se daba tal facultad expresamente a los jueces de distrito, por lo que éstos emitían una sentencia que técnicamente constituía una mera opinión mientras no fuera revisada por la Suprema Corte y que sólo podía ejecutarse después de que dicho Alto Tribunal resolviera en definitiva.

El sistema cambió hasta la Ley de Amparo de 30 de diciembre de 1935, en que se suprimió la revisión oficiosa de las sentencias de los jueces de distrito, aunque se conservó la denominación de *"revisión"* para el recurso en virtud del cual los tribunales de circuito o la Suprema Corte conocían en segunda instancia de los juicios de amparo; es una lástima que

---

<sup>55</sup> Ley Orgánica Constitucional sobre el Recurso de Amparo, promulgada el 20 de enero de 1869.

no haya habido discusión del proyecto de esta ley, pues conforme al Diario de Debates de la Cámara de Diputados, la Comisión Revisora del Dictamen se limitó a hacer suyo el proyecto por la premura del tiempo, aduciendo que era patente la necesidad de contar con una nueva regulación de tan importante materia, por lo que se sometió a votación y se aprobó sin discusión; ello impide conocer si el legislador tuvo en mente alguna razón especial para mantener la denominación de la institución, además de la inercia de continuar empleando una expresión ya arraigada, para entonces, en la práctica judicial.

Ahora bien, deben distinguirse dos casos genéricos de procedencia del recurso de queja:

En el primer supuesto se comprenden los casos en que se recurren resoluciones de la autoridad que tramita el juicio de amparo; en estos casos corresponde resolver el recurso de queja a la Suprema Corte o al Tribunal Colegiado de Circuito, y no existe ninguna diferencia esencial con el recurso de revisión, del que conocen los mismos superiores; las diferencias son secundarias, pues se refieren a los términos para la interposición, a la autoridad ante la cual se presenta el escrito con los agravios y las pruebas con las que se resuelve el recurso, que en el caso de la queja es únicamente el informe del A Quo, mientras que en la revisión se remite el expediente completo al tribunal Ad Quem.

El hecho de que en la queja no pueda el recurrente ofrecer ni desahogar pruebas, quedando limitado al material probatorio que remita el Juez o Tribunal A Quo, afecta una de las formalidades esenciales del

procedimiento en la segunda instancia pues el recurrente no tiene oportunidad de aportar pruebas, ni siquiera señalar constancias para que el superior pueda contar con toda la información necesaria para resolver el recurso.

En estos casos, la naturaleza procesal de la queja es igual a la del recurso de revisión, pues la Suprema Corte o el Tribunal Colegiado debe determinar si la resolución recurrida es o no correcta, lo cual es conforme además con el origen histórico de la institución, pues desde la primera ley reglamentaria del amparo se establecía la posibilidad de que, en virtud de la queja, la Suprema Corte revisara los actos del Juez de Distrito, pudiendo confirmar, revocar o modificar las determinaciones recurridas. En la práctica, existe una diferencia adicional; cuando se resuelve un recurso de revisión, el tribunal que conoce del mismo expresa en uno de sus puntos resolutivos si confirma, revoca o modifica la resolución recurrida, en tanto que al resolverse un recurso de queja, lo único que se expresa es si se declara fundado o no, sin especificar que se revoca, se confirma o se modifica la resolución recurrida, lo cual no tiene ningún fundamento legal y en la mayoría de los casos provoca confusión, pues los alcances de la resolución deben interpretarse por la autoridad contra la cual se promovió la queja, derivándolos de los razonamientos contenidos en las consideraciones de la resolución.

Si a lo expuesto se agrega que la diversa reglamentación de supuestos de procedencia de la revisión y de la queja ocasiona conflictos y problemas para las partes en el juicio de amparo, quienes deben elegir entre dos recursos que, tramitándose en forma distinta, son resueltos por

las mismas autoridades, y que, en caso de error en la denominación del recurso intentado el recurrente, éste queda indefenso porque el tribunal revisor no puede cambiar el recurso intentado, se comprenderá la necesidad de eliminar la queja como figura autónoma en los casos en que se recurren determinaciones de la autoridad que tramita el juicio de amparo (tribunal unitario, Juez de Distrito o superior de la autoridad responsable), para dejar como único recurso en estos casos la revisión, de acuerdo con el espíritu del juicio de amparo, que tiende a trámites sencillos, claros, que no constituyan trampas procesales sino que permitan dirimir las controversias en el fondo.

Otro argumento que apoya la propuesta anterior lo constituye la exigencia lógica de que el juicio de amparo constituya un sistema congruente, en el que se apliquen correctamente las conclusiones obtenidas en los estudios de teoría procesal, que ya se comentaron.

Son dos las posibles objeciones que pudieran hacerse a las consideraciones anteriores. La primera sería que la naturaleza propia de cada recurso impide la inclusión de uno en el otro. La segunda sería que los casos en que procede la queja se resuelve mediante un procedimiento más ágil y rápido que el previsto para la revisión. Ambas objeciones son infundadas.

En cuanto a la naturaleza de los recursos, consideramos que ya se demostró, mediante el estudio de la evolución de la regulación de la queja, que originalmente constituye un medio para provocar la revisión de la actuación del Juez de Distrito por parte de las autoridades superiores, por lo

que su naturaleza no es distinta de la de la revisión, lo que se confirma con el hecho de que la misma autoridad que conoce de la revisión resuelve la queja cuando ésta se dirige contra determinaciones de la autoridad que tramita el juicio de amparo, sea un Tribunal Unitario, un Juez de Distrito o el superior del tribunal a quien se impute la violación de garantías.

Analicemos ahora los distintos casos de procedencia de la queja establecidos por el artículo 95 de la Ley de Amparo, para determinar en cuáles se está en presencia de un recurso y en cuales técnicamente el problema debe resolverse incidentalmente.

De las resoluciones emitidas por la autoridad que tramite el juicio de amparo, procede la queja contra el auto que admite una demanda que el recurrente considere notoriamente improcedente, las determinaciones que no admiten expresamente revisión pero causan gravamen no reparable en la sentencia o se dictan después de pronunciada ésta, las interlocutorias dictadas en el incidente de daños y perjuicios derivados de la suspensión, y el de cumplimiento sustituto de una ejecutoria de amparo, además de las resoluciones sobre suspensión provisional, así como las que resuelvan quejas contra autoridades responsables (caso conocido como "queja de queja").

La materia del recurso contra la admisión de una demanda no difiere substancialmente del caso previsto en la fracción I del artículo 83 de la Ley de Amparo, que establece la revisión contra el auto que desecha o tiene por no interpuesta una demanda de amparo; en ambos casos, el problema a dilucidar en el recurso es si el juicio de amparo resulta manifiesta e

indudablemente improcedente o no, por lo que no existe justificación alguna para que la misma cuestión de fondo se resuelva mediante dos instituciones distintas según la autoridad de primera instancia en el juicio de amparo determine si admite o no una demanda.

La queja contra las interlocutorias dictadas en los incidentes de daños y perjuicios (cumplimiento sustituto de una ejecutoria de amparo) no difiere esencialmente de la revisión prevista en la fracción III del artículo 83 mencionado, que se refiere a las interlocutorias dictadas en el incidente de reposición de autos<sup>56</sup>, único incidente que se tramita como de previo y especial pronunciamiento en el juicio de amparo; lo anterior, porque en ambos casos se trata de recurrir interlocutorias, es decir, determinaciones dictadas para poner fin a incidentes dentro del juicio de amparo, por lo que a fin de que el sistema de recursos quede estructurado en forma lógica, deben considerarse conjuntamente.

La queja contra resoluciones de suspensión provisional resulta igualmente de naturaleza semejante a la revisión prevista en la fracción II del artículo 83, que se refiere a los autos en conceden, niegan, modifican o revocan, o bien niegan modificar o revocar la suspensión definitiva, por lo que pueden incluirse sin problemas de naturaleza en la revisión, pues en última instancia el problema a dilucidar es si procede o no la suspensión, provisional o definitiva, así como los términos en que debe decretarse, en su caso.

---

<sup>56</sup> Esta fracción también establece la revisión contra las resoluciones que decretan el sobreseimiento del juicio, que no son interlocutorias y que por lo mismo no deberían considerarse en esta fracción.

Aquí podría objetarse que en el amparo directo son las autoridades responsables las que resuelven sobre la suspensión y que por lo mismo no puede proceder la revisión; sin embargo, en este caso, las autoridades responsables no actúan como parte en el juicio de amparo, sino como autoridad dentro del trámite del mismo, auxiliando a la Justicia Federal, y por ello sus determinaciones en estas circunstancias son resoluciones dictadas por la autoridad que tramita el juicio de amparo y por lo mismo deben recurrirse igualmente por medio de la revisión prevista en la citada fracción II del artículo 83 de la ley de amparo, pues una vez más, el problema consiste en determinar si procede o no la suspensión y los términos en que, en su caso, debe decretarse.

La segunda objeción contemplada se refería a la diferencia entre los trámites de la revisión y de la queja, dado que a primera vista podría decirse que el recurso de queja tiene un trámite más ágil y breve que la revisión, derivado de la urgencia para resolver las cuestiones materia del primer recurso citado; sin embargo, el recurso de queja, cuando se tramita contra actos del Juez de Distrito, debe resolverse en 28 días hábiles, o 25 cuando el acto recurrido emana de una autoridad responsable, mientras que la revisión debe resolverse en 25 días cuando conoce de ella un Tribunal Colegiado, caso mucho más frecuente que aquél en que conoce de la revisión la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en que el trámite alcanza los 55 días.

Lo anterior deriva de que, una vez interpuesto el recurso de queja, debe calificarse por parte del Presidente del Tribunal Colegiado o del Pleno

o Salas de la Suprema Corte, para lo cual disponen de un día para dictar el acuerdo, más otro que corresponde a la notificación del mismo; si se admite el recurso, se pide informe al juez o autoridad responsable, quienes deben rendirlo en el plazo de tres días, contados a partir del siguiente a la fecha en que reciban la notificación respectiva; después, debe darse vista al Ministerio Público Federal, para lo cual deben emplearse otros dos días, uno para el acuerdo y otro para la notificación respectivos; transcurridos los tres días de la vista mencionada, debe turnarse el expediente a proyecto de resolución, para lo cual debe dictarse otro acuerdo y notificarse (dos días más); finalmente, debe dictarse la resolución en el plazo de diez días, si el acto recurrido proviene de la autoridad que tramita el juicio de amparo, o de tres días si proviene de la autoridad responsable.<sup>57</sup>

La revisión se tramita como sigue: interpuesto el recurso, el juez o autoridad que tramita el juicio de amparo, dicta un acuerdo en que tiene por interpuesto el recurso y ordena remitir el expediente, o las constancias necesarias, con el recurso y una copia del mismo, a la Suprema Corte o al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, para lo cual deben considerarse un día para el acuerdo y otro para la notificación; llegado el expediente al tribunal que debe substanciar el recurso, su Presidente califica la procedencia y, en caso de admitirlo, notifica al Ministerio Público para efectos de su pedimento, requiriéndose un día para el acuerdo y uno más para la notificación; dentro del término de cinco días se turna el asunto al magistrado ponente, o diez días en caso de turno al ministro relator, quienes deben formular proyecto, en treinta días el ministro, para que en

---

<sup>57</sup> Artículos 97 a 99 de la Ley de Amparo.



diez días más se resuelva por el Pleno o la Sala de la Suprema Corte, en tanto que en los Tribunales Colegiados de Circuito, en el plazo de quince días posteriores al turno al magistrado ponente se debe dictar la resolución.

En todos los casos deben agregarse los días que dilaten las comunicaciones entre los órganos que intervienen si no radican en el mismo lugar.

De lo anterior se desprende que la diferencia de trámite no constituye un criterio suficientemente trascendente para diferenciar los recursos de queja y de revisión; el único caso en el cual la queja efectivamente se tramita en una tiempo mucho menor que la revisión lo constituye la queja contra las determinaciones sobre suspensión provisional, en cuyo caso el trámite debiera completarse en cuatro días hábiles; sin embargo, la objeción en este caso puede superarse estableciendo plazos específicos para la revisión que permitan en estas circunstancias, la pronta resolución del recurso, pues de todas formas quien dicta la resolución es el mismo órgano superior (Suprema Corte o Tribunal Colegiado), sin que ello afecte la integridad del sistema propuesto.

## **2. El recurso de inconformidad**

Por lo que hace a la inconformidad, actualmente se establece contra las resoluciones dictadas en el incidente de inejecución de sentencia, pero su naturaleza es, al igual que la revisión, la de una apelación; es decir, la apertura de la segunda instancia para que el superior jerárquico, en este caso la Suprema Corte, confirme, modifique o revoque la resolución del

inferior, incluso con litis abierta porque el tribunal Ad Quem puede investigar e integrar más elementos de convicción que los aportados en primera instancia y resolver libremente, sin sujetarse a los términos de la promoción de inconformidad.

Por ello, como ya precisamos, consideramos que debe eliminarse como figura autónoma e incluirse dentro de los casos de procedencia del recurso de revisión, para mantener la coherencia y unidad del sistema de recursos.

Por lo antes expuesto, propongo que se reestructure el sistema de recursos de la Ley de Amparo en los siguientes aspectos:

1. Eliminar la queja como recurso autónomo.
2. Los casos actualmente previstos como supuesto de procedencia de la queja, en que se recurren determinaciones de los Tribunales Unitarios de Circuito, de los Jueces de Distrito o de la autoridad que conoce del juicio conforme al artículo 37 de la Ley de Amparo, deben incluirse dentro de los casos de procedencia del recurso de revisión.
3. Los casos previstos actualmente como hipótesis de procedencia del recurso de queja, en que se recurren actos de autoridades responsables, deberán trasladarse al capítulo dedicado a los problemas de incumplimiento o desobediencia de las determinaciones dictadas en los juicios de amparo.

4. Eliminar el recurso de inconformidad y sustituirlo por la revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, generalizando la procedencia de la revisión contra todas las resoluciones interlocutorias que se pronuncien en un juicio de amparo.

5. Establecer el “incidente de desobediencia” como figura procesal autónoma, para determinar si una autoridad, distinta a la que tramita el juicio de amparo, incurre en exceso, defecto o incumplimiento de una determinación dictada en un juicio de amparo, o no, debiéndose incluir en el mismo los problemas de repetición de acto reclamado; contra la determinación que resuelva dicho incidente procederá la revisión, por tratarse de una interlocutoria.

6. Implementar un sistema de sanciones progresivas a la desobediencia: una primera multa de diez a quinientos días de salario; una segunda multa de quinientos a mil días de salario y, finalmente, la sanción máxima sería la separación del cargo y la inhabilitación por uno a diez años, para ocupar cualquier empleo, cargo o comisión públicos, seguidas de la consignación ante el Juez de Distrito para ser juzgado por desobediencia.

7. Establecer que las multas serán pagadas del patrimonio del servidor público sancionado y prohibir que se apliquen a ellas recursos públicos.

**Artículo 83.- Procede el recurso de revisión:**

I.- Contra las resoluciones de los Tribunales Unitarios de Circuito<sup>58</sup>, de los Jueces de Distrito o del superior del tribunal responsable, en su caso, que admitan, desechen o tengan por no interpuesta una demanda de amparo;

II.- Contra las resoluciones de los Tribunales Unitarios de Circuito, de los Jueces de Distrito o del superior del tribunal responsable, en su caso, en las que:

a).- Concedan o nieguen la suspensión, sea provisional, definitiva o de oficio;

b).- Modifiquen o revoquen el auto en que concedan o nieguen la suspensión;

c).- Nieguen la modificación o revocación a que se refiere el inciso anterior;

III.- Contra los autos de sobreseimiento y las interlocutorias dictadas en cualquier incidente, incluido el de desobediencia; también serán revisables las determinaciones que, en este último tengan por cumplida correctamente la determinación dictada en el juicio de amparo, así como aquéllas en que se impongan las sanciones a que se refiere el artículo 108 bis de esta ley.

---

<sup>58</sup> De acuerdo con el artículo 29, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el juicio de amparo indirecto contra actos de un Tribunal Unitario debe tramitarse ante el Tribunal Unitario más cercano.

IV.- Contra las sentencias dictadas en la audiencia constitucional por los Tribunales Unitarios de Circuito, por los Jueces de Distrito o por el superior del tribunal responsable, en su caso. Al recurrirse tales sentencias deberán impugnarse también las determinaciones pronunciadas en la citada audiencia.

V.- ...<sup>59</sup>

VI.- Contra las resoluciones de los Tribunales Unitarios de Circuito, de los Jueces de Distrito o del superior del tribunal responsable, en su caso, que afecten las defensas del recurrente y trasciendan al resultado del fallo constitucional<sup>60</sup>; o contra las que se dicten después de fallado el juicio en primera instancia<sup>61</sup>.

En todos los casos a que se refiere este artículo [...] <sup>62</sup>(Germán Eduardo Baltazar Robles, Tomo I, páginas 45, 46, 47, 50, 51, 52, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 69, 70, 78, 79, 81 y 82)

---

<sup>59</sup> Sentencias de amparo directo que admiten revisión por decidir sobre la constitucionalidad de leyes, tratados y reglamentos, así como sobre la interpretación directa de un precepto constitucional.

<sup>60</sup> El texto actual dice: "[...] que por su naturaleza trascendental y grave, puedan causar daño o perjuicio a alguna de las partes, no reparable en la sentencia definitiva [...]", pero al no definirse qué se considera trascendental y grave, consideramos mejor la redacción propuesta para establecer coherencia con la disposición relativa a las violaciones al procedimiento prevista para el amparo directo, por la semejanza del problema.

<sup>61</sup> El texto actual agrega: "[...] cuando no sean reparables por las mismas autoridades o por la Suprema Corte de Justicia con arreglo a la ley [...]" pero como no existe ningún otro recurso en materia de amparo, no puede darse ese caso.

<sup>62</sup> Previsión de la revisión adhesiva.

Como de todos es conocido, en atención a que el recurso de revisión solamente procede en las diversas cinco fracciones de que está integrado el artículo 83 de la ley de la materia, hay interesados que, por tal motivo, interponen recurso de queja contra el acuerdo que resuelve sobre la suspensión de plano.

Consiguientemente, si el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1/96, ya decidió que en la hipótesis indicada el procedente es el recurso de revisión, considero pertinente que para llenar la laguna existente debería adicionarse el artículo citado, en su fracción II (que es la que se refiere a los casos en que cabe revisión tratándose de la suspensión), con un inciso más en que se establezca precisamente que cabe dicho medio de defensa contra el acuerdo en que se niegue o conceda la suspensión de plano.

Dicha jurisprudencia aparece publicada en la novena época del Semanario Judicial de la Federación, tomo III, marzo, página 73, y es del tenor siguiente:

**"SUSPENSIÓN DE PLANO DEL ACTO RECLAMADO. PROCEDENCIA DEL RECURSO DE REVISION CONTRA EL AUTO QUE LA NIEGA O CONCEDE.-** Si bien el artículo 83 de la Ley de Amparo no señala expresamente que proceda el recurso de revisión contra las resoluciones que concedan o nieguen la suspensión de plano de los actos reclamados, el artículo 89 de esta Ley, que regula el trámite de este recurso, en su tercer párrafo implícitamente establece su procedencia al disponer que "tratándose del auto en que se haya concedido o negado la

suspensión de plano, interpuesta la revisión, sólo deberá remitirse al Tribunal Colegiado de Circuito copia certificada del escrito de demanda, del auto recurrido, de sus notificaciones y del escrito u oficio en que se haya interpuesto el recurso de revisión, con expresión de la fecha y hora del recibo." La omisión en el artículo 83 deriva, indudablemente, de una deficiente redacción legislativa. No sobra abundar que la suspensión de plano, por sus características, es equiparable a la suspensión definitiva que se decreta en el incidente de suspensión, en tanto que surte sus efectos hasta que se decide en definitiva el juicio en lo principal, sin estar sujeta a una resolución interlocutoria". (Jorge Figueroa Cacho, Tomo I, Páginas 394 y 395)

---

V.- Contra las resoluciones que dicten los Jueces de Distrito, o el superior del tribunal a quien se impute la violación en los casos a que se refiere el artículo 37 de esta ley, durante la tramitación del juicio de amparo o del incidente de suspensión y que, pro su naturaleza trascendental y grave, puedan causar daño o perjuicio a alguna de las partes, no reparable en la sentencia definitiva; o contra las que se dicten después de fallado el juicio en primera instancia, cuando no sean reparables por las mismas autoridades o por la Suprema Corte de Justicia con arreglo a la ley;

VI. Contra las sentencias dictadas en la audiencia constitucional por los Jueces de Distrito, o por el superior del tribunal responsable, en los casos a que se refiere el artículo 37 de esta ley. Al recurrirse tales sentencias deberán, en su caso, impugnarse los acuerdos pronunciados en la citada audiencia; y

VII. Contra las resoluciones que en materia de amparo directo pronuncien los Tribunales Colegiados de Circuito, cuando decidan sobre la constitucionalidad de leyes federales o locales, tratados internacionales, reglamentos expedidos por el presidente de la República de acuerdo con la fracción 1 del artículo 89 constitucional y reglamentos de leyes locales expedidos por los gobernadores de los Estados, o cuando establezcan la interpretación directa de un precepto de la Constitución.

La materia del recurso se limitará exclusivamente, a la decisión de las cuestiones propiamente constitucionales, sin poder comprender otras.

VIII. Contra las resoluciones que dicten los Jueces de Distrito, el Tribunal que conozca o haya conocido del juicio conforme al artículo 37, o los Tribunales Colegiados de Circuito en los casos a que se refiere la fracción IX del artículo 107 de la Constitución Federal, respecto de las quejas interpuestas ante ellos conforme al artículo 98;

IX.- Contra las resoluciones que pronuncien los Jueces de Distrito en el caso previsto en la parte final del artículo 105 de este ordenamiento.

En todos los casos a que se refiere este artículo, la parte que obtuvo resolución favorable a sus intereses, puede adherirse a la revisión interpuesta por el recurrente, dentro del término de cinco días, contados a partir de la fecha en que se le notifique la admisión del recurso, expresando



los agravios correspondientes; en este caso, la adhesión al recurso sigue la suerte procesal de éste.

Se propone adicionar el siguiente artículo:

Artículo 83 bis. Cuando el Tribunal revisor advierta que en lugar de la revisión procede un diverso medio de impugnación, de oficio adoptará las medidas pertinentes para tramitar el que legalmente corresponda. **(Sergio Pallares y Lara, Tomo I, páginas 502 a 504)**

---

Art. 83.- Procede el recurso de revisión:

I.- Contra las resoluciones de los jueces de distrito o del superior del tribunal responsable, en su caso, que desechen o tengan por no interpuesta una demanda de amparo; en los casos de las fracciones I y III, la competencia corresponderá a las salas unitarias de los tribunales colegiados de circuito.

II.- Contra las resoluciones de los jueces de distrito o del superior del tribunal responsable, en su caso, en las cuales: a)...; b)...; c)...

Cuando ya exista jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la materia del asunto la competencia corresponderá a las salas unitarias de los tribunales colegiados de circuito. **(Juan Manuel Arredondo Elías, Tomo I, páginas 678 y 679)**

**TEMA: "LA PROCEDENCIA DEL RECURSO DE REVISIÓN ADHESIVA INTERPUESTO ANTE EL JUEZ DE DISTRITO."**

Es una inquietud generalizada en nuestra sociedad, el que se cuente con un sistema de leyes coherente; en que armonicen debidamente los supuestos normativos que contempla para así evitar confusión en la aplicación de la ley respecto de un mismo hecho previsto o intuido por el legislador.

En tal sentido es necesario hacer una revisión constante de las leyes en vigor para que no queden superados por la realidad social y así mantengan su utilidad y servicio. Lo mismo puede decirse de aquellos ordenamientos que acusan cierta ambigüedad en su redacción y por ello puedan dar lugar a diversas interpretaciones que a su vez originen confusión en su aplicación, con la consecuente inseguridad jurídica para los gobernados cuando se aplique uno u otro criterio sobre una misma situación.

Ejemplos de lo anterior son muchos y variados, algunos de ellos que aún siendo reconocidos como errores han sido asimilados tanto por autoridades como por litigantes, obedeciendo lo anterior un poco por costumbre y otro poco por pragmatismo; en esa circunstancia se observa que ambas partes han llegado a procurar una observancia que sea lo más ajustado posible a lo escrito en la ley. Tal es el caso de nuevos detalles que se encuentran en las legislaciones procesales y en la Ley de Amparo reglamentaria de los artículos 1 03 y 1 07 constitucionales.

Ahora bien uno de esos casos de inexactitud es el que versa sobre el llamado recurso de revisión adhesiva previsto en la precitada Ley de Amparo en su artículo 83; fracción V, último párrafo y en especial la procedencia de tal recurso cuando el escrito relativo es presentado ante el Juez de Distrito que conoció del asunto.

Efectivamente, es la revisión adhesiva el medio de impugnación de ejercicio menos frecuente que se da en el juicio de amparo, recurso que tiene como finalidad el dar ocasión a la parte que ha vencido en el juicio constitucional de hacerse escuchar por la autoridad revisora, con el objeto de allegarle fundamentalmente más elementos para que confirme aun por diversas causas la resolución de que se trate y en la parte que le fue desfavorable sea revocada siguiendo los lineamientos de la tesis correspondiente a la Novena Epoca<sup>7</sup> en la Instancia del Pleno de la Suprema Corte de justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en el Tomo IV, correspondiente al mes de Noviembre de 1996, en la página: 141 y que a la letra señala:

REVISION ADHESIVA. QUIEN LA HACE VALER PUEDE EXPRESAR AGRAVIOS TENDIENTES NO SOLO A MEJORAR LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA EN LA PARTE RESOLUTIVA QUE LE FAVORECE, SINO TAMBIEN A IMPUGNAR LAS DE LA PARTE QUE LE PERJUDICA. La adhesión al recurso de revisión prevista por el artículo 83, fracción V, último párrafo, de la Ley de Amparo, tiene por finalidad que quien obtuvo sentencia favorable pueda expresar agravios que integren la litis de segunda instancia, cuando su contrario a través del recurso de revisión impugnó la parte que le perjudica; agravios que pueden

relacionarse con una materia diversa a la que es objeto de los argumentos vertidos por el recurrente, en tanto que al interponerse el recurso de revisión surge para quien obtuvo sentencia favorable el derecho a expresar agravios encaminados a fortalecer las consideraciones de la sentencia que orientaron al resolutivo favorable a sus intereses, y también a impugnar las que concluyan en un punto decisorio que le perjudica. Esto obedece a que quien obtiene un fallo que le favorece parcialmente tiene legitimación activa, en la medida del agravio, para interponer el recurso de revisión dentro de los diez días siguientes a la notificación de la sentencia y el hecho de no hacerlo solamente implica que hasta ese momento queda conforme con el resultado obtenido, porque tiene una sentencia que es parcialmente benéfica a sus intereses y no tiene la intención de continuar el litigio por todas las consecuencias inherentes del trámite de la segunda instancia; pero cuando otra de las partes en el juicio de amparo se inconforma con esa sentencia y hace valer el recurso de revisión, la pasividad mantenida hasta antes de la admisión del recurso, no supone que ha consentido el aspecto del fallo que le perjudica, porque la ley en la disposición que se analiza le otorga el derecho a adherirse a la revisión y expresar los agravios correspondientes, sin taxativa alguna, pues no limita el objeto de éstos a fortalecer las consideraciones de la sentencia que derivan en la parte resolutive favorable, sino que la redacción genérica de la ley al establecer "los agravios correspondientes", comprende también la impugnación de las consideraciones que le perjudican y hayan producido un punto resolutive expreso, contrario a sus intereses. Una limitación sobre el particular no puede deducirse de lo establecido por el citado precepto legal en cuanto a que la revisión adhesiva sigue la suerte "procesal" de la principal, ya que también señala que el recurrente adhesivo expresará los agravios que

correspondan, es decir, que exponga los agravios que a su derecho convengan. En este orden de ideas, queda justificado ocuparse de los agravios expuestos en la adhesión, porque aun cuando su contenido tiende a impugnar la parte de la sentencia que le perjudica al que la hace valer y no a mejorar las consideraciones de la parte resolutive que le favorece, ello es acorde con la finalidad de ese medio procesal de defensa.

En este caso cobra singular importancia la interposición de dicho recurso de revisión adhesiva, pues el desacierto en su presentación puede motivar su improcedencia.

En ese orden de ideas es la intención de la presente ponencia poner a su consideración una base sólida respecto de la improcedencia de dicho recurso, cuando el mismo es promovido ante un Juez de Distrito, pues se aprecia en la Ley de Amparo una falta de técnica legislativa y jurídica, consistente en que por costumbre derivada de la propia práctica forense no se distingue el hecho materia de excepción relativa a la interposición de tal recurso, esto es, que por principio se confunden los conceptos de procedencia y temporalidad por la inadecuada redacción del texto legal. Entendiendo por procedencia como la idoneidad del recurso o acción intentada y temporalidad como el término dentro del cual deba ejercitarse dicha acción o recurso.

Primeramente es de precisarse que los más connotados y reconocidos doctrinarios nacionales que han escrito sobre el juicio de amparo en manera alguna han sido imprecisos respecto del contenido,

técnica y alcances del recurso que aquí nos ocupa, pero también son claramente omisos respecto del problema específico que se plantea.

Esto es, que ninguno de los tratadistas y que de alguna forma constituyen la base teórica y doctrinal de la mayoría, por no decir todos, los abogados e investigadores del juicio de amparo, han plasmado en alguna de sus reconocidas obras la procedencia de la revisión adhesiva cuando el escrito relativo es presentado ante un Juez de Distrito, no obstante que es un tema relacionado con los estudios que han publicado.

Es importante recalcar el hecho de que la Ley de Amparo hasta en recientes tiempos no incluía este recurso, por lo que se infiere que fue motivado por la necesidad de la práctica forense derivada del ejercicio de la acción Constitucional, y que se hace consistir en el hecho de que anteriormente a la reforma de veintitrés de diciembre de mil novecientos ochenta y siete, publicada en el Diario Oficial de cinco de enero de mil novecientos ochenta y ocho, misma que entró en vigor el día quince del mismo mes y año; la parte que había obtenido el amparo y protección de la Justicia de la Unión, no tenía forma o medio alguno que le legitimara en la segunda instancia del juicio de garantías, coartándose de esta forma y en la última instancia la triangulación procesal del procedimiento.

En mérito de lo antes expuesto, se considera que debe señalarse lo siguiente: primeramente, por su propia naturaleza se colige que la revisión adhesiva como tal, no es propiamente un recurso, sino un medio de defensa en sentido amplio que garantiza, a quien obtuvo sentencia favorable, la posibilidad de expresar agravios tendientes a mejorar y reforzar la parte

considerativa de la sentencia que condujo a la resolutive favorable a sus intereses y también a impugnar las consideraciones del fallo que concluya en un punto decisorio que le perjudica.

Así las cosas, se tiene que con fundamento en lo artículo 83, fracción V de la Ley de Amparo, se puede establecer en casos en que la sentencia del Juez de Distrito beneficie en una perjudica a uno de los contendientes, la revisión adhesiva opera en dispuesto en el válidamente que parte y en otra ambos sentidos y por tanto sus agravios pueden versar sobre temas no contemplados en la sentencia por el Juez Federal y que vienen a fortalecer su decisión e incluso, dado el caso, a provocar el hecho de revocar la decisión parcialmente en cuanto a la parte que le perjudique en sus intereses; siendo ésta la razón por la que la adhesión sigue la suerte procesal del recurso.

Lo anterior se denota más claramente, si se toma en cuenta que si el recurso de revisión principal o directa se declara improcedente, la adhesiva debe seguir la misma suerte procesal de aquel, lo que se señala prístinamente en la fracción V del artículo 83 de la ley reglamentaria del juicio de garantías, máxime que en ese supuesto no habrá razón alguna para que la revisión adhesiva sea substanciada.

Bajo tal tesitura, se concluye que la adhesión al recurso de revisión directa tiene por objeto que el Tribunal Colegiado de Circuito proporcione otros fundamentos diversos, para mejorar las consideraciones que sustentan la sentencia recurrida a fin de que ésta subsista y también el de

combatir la parte de la resolución que resultó adversa a los intereses de la adherente.

Así pues, se tiene que la adhesión no es un recurso autónomo independiente y distinto de la revisión directa, sino que persigue el que en la parte considerativa de la sentencia se den esencialmente otros fundamentos diversos que los expresados por el A-quo Constitucional, por considerar que éstos puedan ser erróneos, débiles o faltos de fundamentación, lo que ocasionaría con razón, el temor justificado en que por tal circunstancia el fallo que le beneficia sea revocado por el superior.

Por otra parte, la condición especial de tal recurso, explica que la ley ordena que si el litigante afectado desiste de la revisión directa, corra igual suerte la adhesiva, ya que en este supuesto la parte adherida no sufre daño ni perjuicio alguno.

Estas consideraciones se concretan en la disposición contenida en el último párrafo del artículo 83 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales en el que se dispone que "la adhesión al recurso de revisión sigue la suerte procesal de éste".

Ahora bien, la importancia del tema radica en la situación de las múltiples confusiones que acarrea la interpretación del artículo 83, último párrafo, de la Ley de Amparo, y que origina la confusión entre las partes del juicio de amparo consistente en que no se contiene la expresión comúnmente utilizada de que "lo accesorio sigue la suerte de lo principal", sino la de que la adhesión al recurso de revisión "sigue la suerte procesal de



éste", lo que significa que si los agravios del revisionista son fundados, procede entonces estudiar los agravios de la adhesión, examen que se omite en caso contrario. Luego, la frase aludida no tiene el alcance que se le da en la mayoría de las interposiciones del aludido recurso, o sea, el de que la presentación del ocurso de revisión adhesiva deba hacerse también, al igual que el de la revisión principal, ante el mismo juez de Distrito. Se corrobora lo anterior por el hecho de que si el término para adherirse se cuenta "a partir de la fecha en que se le notifique la admisión del recurso", es obvio que ese plazo se inicia después de que se notifica el auto por el que el Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente admita la revisión principal, habida cuenta que es el presidente del mismo el único que puede admitirla o desecharla, según lo dispone el artículo 90, párrafo inicial, de la Ley de Amparo Dicho de otra manera: si el presidente del Tribunal Colegiado respectivo es quien admite o desecha el recurso de revisión principal, y si la adhesión debe interponerse en cinco días contados a partir de la fecha de la notificación en que se admite dicho recurso, resulta claro que es hasta que se notifica la admisión de la revisión, por el presidente del Colegiado, cuando empieza a correr el término para adherirse, pues es hasta entonces cuando le nace el derecho al citado recurrente, de ahí que si tal derecho lo ejercita antes de ese momento procesal, interponiendo su recurso adhesivo ante el Juez de Distrito, después de tener por interpuesta la revisión principal, se expone a que sea desechado por improcedente dicho recurso de revisión adhesivo, pues resulta obvio que serán remitidos simultáneamente los recursos tanto principal como adhesivo y al acordarse la admisión en primer término del principal, es claro, que inmediatamente no se puede proveer sobre la admisión del recurso adhesivo, por que no se da el requisito que señala el artículo 83 último párrafo, relativo a que esté

notificada la admisión del recurso de revisión principal y por tanto, es evidente su improcedencia, ya que se ha ejercitado un derecho que aun no ha nacido conforme a la ley, pues estimar lo contrario a manera de ejemplo equivaldría a tener por debidamente interpuesto un recurso de revisión principal cuando aun no se ha dictado la sentencia en la audiencia Constitucional por el Juez de Distrito, por tanto, se reitera, que los aludidos cinco días empiezan a correr después de la notificación de la admisión del recurso por el presidente del Tribunal Colegiado de Circuito que conozca del asunto y sólo hasta entonces es factible acordar sobre el recurso de revisión adhesivo. **(Gonzalo Hernández Cervantes, Tomo II, páginas 777 a 779)**

---

Por otra parte, considero conveniente que se establezca expresamente en la nueva Ley de Amparo que en los casos en que el Ministerio Público interponga el recurso de revisión, teniendo el carácter de autoridad ejecutora, no quede sujeto el estudio de los agravios respectivos a que la autoridad ordenadora interponga también dicho recurso, lo cual ha sido establecido por jurisprudencia de esa Corte, ya que tal interpretación del recurso da lugar a que la impugnación por el Ministerio Público como ejecutora resulta nugatorio.

Para tal efecto deberá agregarse un artículo al capítulo XI de la Ley de Amparo el cual podría quedar redactado de la siguiente forma:

Artículo 83...

Cuando el Ministerio Público en un proceso penal interponga el recurso de revisión contra las resoluciones dictadas en los juicios de amparo promovidos contra las resoluciones jurisdiccionales el mismo será independiente de los recursos que hagan valer los jueces penales respectivos. (José Antonio Sam López, Tomo II, página 794)

---

69.- En cuanto al recurso de revisión, el artículo 83 es correcto salvo dos defectos: que sea motivo del recurso de revisión el auto que rechaza una demanda, sin tomar en cuenta que se puedan causar daños irreparables con el rechazo, pues si no se admite la demanda, no se concede, si es el caso, la suspensión, por lo que la responsable queda en libertad de ejecutar el acto reclamado. Por tal motivo, por el hecho de que la queja se tramita con más rapidez y porque el auto que admite la demanda es recurrible en queja, el auto que no la admite debe recurrirse, igualmente, mediante la queja; pero por la urgencia que puede haber respecto de la suspensión, deberá interponerse en un plazo de 24 horas y fallarse en 48.

El segundo defecto es, una vez más, los errores redaccionales, ya que se usa y se abusa de la enumeración, que resulta frecuentemente inútil y siempre es posible evitarla. (Jesús A. Arroyo Moreno, Tomo II, página 1081)

---

La propuesta pretende ajustar la Fracción II al criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sobre dicho tema.

La propuesta de adición es con el fin de concordar con el artículo 89, párrafo tercero de la propia Ley de Amparo.

## **TEXTO CON MODIFICACIÓN**

### **ARTICULO 83.- Procede el recurso de revisión:**

I.- Contra las resoluciones de los jueces de Distrito o del superior del Tribunal responsable, en su caso, que desechen o tengan por no interpuesta una demanda de amparo;

II.- Contra las resoluciones de los jueces de Distrito o del superior del Tribunal responsable, en su caso, en las cuales:

a) Concedan, nieguen o resuelvan cualquier cuestión respecto de la suspensión definitiva;

b) Modifiquen o revoquen el auto en que concedan o nieguen la suspensión definitiva; y

c) Nieguen la revocación o modificación a que se refiere el inciso anterior;

III.- Contra los autos de sobreseimiento y las interlocutorias que se dicten en los incidentes de reposición de autos;

IV.- Contra las sentencias dictadas en la audiencia constitucional por los jueces de Distrito, o por el superior del tribunal responsable, en los casos a que se refiere el artículo 37 de esta Ley. Al recurrirse tales sentencias deberán, en su caso, impugnarse los acuerdos pronunciados en la citada audiencia.

V.- Contra las resoluciones que en materia de amparo directo pronuncien los Tribunales Colegiados de Circuito, cuando decidan sobre la constitucionalidad de leyes federales o locales, tratados internacionales, reglamentos expedidos por el Presidente de la República de acuerdo con la fracción I del artículo 89 constitucional y reglamentos de leyes locales expedidos por los gobernadores de los Estados, o cuando establezcan la interpretación directa de un precepto de la Constitución.

La materia del recurso se limitará, exclusivamente, a la decisión de las cuestiones propiamente constitucionales, sin poder comprender otras.

En todos los casos a que se refiere este artículo, la parte que obtuvo resolución favorable a sus intereses, puede adherirse a la revisión interpuesta por el recurrente, dentro del término de cinco días, contados a partir de la fecha en que se le notifique la admisión del recurso, expresando los agravios correspondientes; en este caso, la adhesión al recurso sigue la suerte procesal de éste.

VI.- Contra los acuerdos dictados por los jueces de Distrito o superior de la autoridad responsable, en su caso que resuelvan sobre las

**suspensiones de oficio: (María Simona Ramos Ruvalcaba, Tomo II, páginas 1418 a 1422)**

---

**CONSIDERACIONES:** El precepto legal de referencia, no establece si los agravios en la revisión adhesiva deben limitarse a las consideraciones de la sentencia que se recurre, o si se pueden también impugnarse las partes de tal sentencia en cuanto perjudiquen al recurrente. El Pleno de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido, en las tesis de jurisprudencia que se acompañan a este pliego, como anexos números 2,3, y 4 que se pueden expresar agravios para impugnar ambos extremos. Por consiguiente, debe reformarse el último párrafo del artículo 83 de la Ley de Amparo, para quedar como sigue:

“En todos los casos a que se refiere este artículo, la parte que obtuvo resolución favorable a sus intereses, puede adherirse a la revisión interpuesta por el recurrente, dentro del término de cinco días, contados a partir de la fecha en que se le notifique la admisión del recurso, expresando los agravios correspondientes; en este caso, la adhesión al recurso sigue la suerte procesal de éste. Quien haga valer la citada revisión, puede expresar agravios tendientes no solo a mejorar las consideraciones de la sentencia en la parte resolutive que le favorece, sino también a impugnar las de la parte que le perjudique.” (Enrique Arizpe Narro, Tomo III, páginas 1601 y 1602)

Como por ejemplo conforme a la Ley Orgánica el recurso de revisión en amparo directo es procedente aunque el Tribunal Colegiado no se pronuncie sobre la constitucionalidad de los actos de una autoridad o no se exprese la interpretación directa de un precepto constitucional, sin embargo de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 107 fracción IX de la Constitución y 83 fracción V de la Ley de Amparo, el recurso sería improcedente en las condiciones señaladas. **(Jorge Antonio Galindo Monroy, Tomo III, página 1616)**

---

a) En primer lugar creo necesario modificar los textos de la fracción IX del artículo 107 Constitucional y de la fracción V del artículo 83 de la Ley de Amparo, pues con motivo del artículo 10 de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal vigente, la Corte estimó correctamente en contra del texto constitucional y de la Ley de Amparo que el recurso de revisión en el amparo directo procede cuando en la demanda de garantías se hubiere planteado la inconstitucionalidad de una norma aunque en la sentencia el tribunal no se hubiere pronunciado sobre el problema de constitucionalidad planteado o no hubiere establecido la interpretación directa de un precepto constitucional. El criterio de la Corte es correcto porque gracias a él se logra que el tribunal colegiado que conozca el amparo resuelva la litis constitucional planteada, pues antes de esta interpretación bastaba que dicho tribunal con violación a la garantía de audiencia dejara de estudiar el punto de la litis relativo a la constitucionalidad para que el recurso fuera improcedente, lo que a todas luces es antijurídico. **(Jorge Antonio Galindo Monroy, Tomo III, página 1643)**

---

V.- Igual al vigente.

Párrafos dos y tres iguales al vigente.

**MOTIVOS.-** Al proponerse la derogación del precepto que autoriza la jurisdicción concurrente, la referencia que el precepto vigente hace del superior del Tribunal responsable, deviene innecesaria. Además, en la fracción IV se contempla también la posibilidad de recurrir las conductas omisivas, observados en la audiencia Constitucional. **(David Ancira Martínez, Tomo III, páginas 1914 y 1915)**

---

El actual texto del párrafo final de la fracción V del artículo 83 de la Ley de Amparo ha motivado una absurda y equivocada interpretación que deja injustamente en estado de indefensión a los interesados y, por ello, resulta muy necesaria su actualización para hacer cesar las injusticias que a propósito de dicho texto se cometen.

Dicho párrafo establece que la parte que obtuvo resolución favorable podrá acudir en revisión adhesiva dentro del término de cinco días y señala que los mismos se contarán "a partir de la fecha en que se le notifique la admisión del recurso" y no obstante que en la propia Ley de Amparo existe un capítulo específico que regula las notificaciones y en forma expresa, su artículo 34, señala que "Las notificaciones surtirán sus efectos:...desde el día siguiente al de la notificación personal o al de la fijación de la lista...", el absurdo y equivocado criterio a que me he referido sostiene que: como el artículo 82, fracción V, dice "a partir de que se notifique" (SIC), y no dice "a



partir de que surta sus efectos la notificación”, entonces, en este caso, LA NOTIFICACIÓN ES INMEDIATA !!! y el término corre ipso facto.

Como claramente se aprecia y el sólo sentido común permite constatarlo, resulta que sin ningún fundamento el criterio que denuncio pretende que la regla general (de que los términos empiezan a correr cuando la notificación se tiene por hecha, es decir, cuando surte sus efectos) no aplica en el caso de la revisión adhesiva y equivocadamente sostiene que el término corre a partir de que “se notifique la admisión del recurso” (SIC), dejando a su libre arbitrio el establecer “cuando” se debe entender que “se notifica” e ignorando que “se notifica” sólo cuando “la notificación surte efectos” y que así debe ser porque es necesario para saber cuando empieza y cuando termina un término y para que pueda existir certeza de la notificación.

El criterio que denuncio y que es contrario a una correcta interpretación de la Ley de Amparo es siempre dañino y aplicado en casos relevantes o difíciles, arroja una muy lamentable mancha y sospecha sobre los juzgadores que, con tal criterio, tienen por no presentados en tiempo los recursos de revisión adhesiva que así desean estimar y no se sabe si porque de verdad creen que la ley puede interpretarse de esa manera o porque auspician intereses indebidos o sólo por flojera y para ahorrarse el estudio de un “engorroso” asunto.<sup>63</sup>

---

<sup>63</sup> Un penoso ejemplo del criterio que denuncio y que motiva mi propuesta de reforma, es el caso de la revisión adhesiva planteada por el suscrito ante el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Penal, en el expediente 400/99 y en el recurso de reclamación que al efecto interpuse y en el que inopinadamente el Tribunal Pleno sostuvo tan absurdo criterio.

**LA REDACCIÓN QUE RESULTARÍA CON NUESTRA PROPUESTA  
ES LA SIGUIENTE:**

**Artículo. 83.- Procede el recurso de revisión:**

**I.-...**

**II.-...**

**III.-...**

**IV.-...**

**V.-...**

**...**

En todos los casos a que se refiere este artículo, la parte que obtuvo resolución favorable a sus intereses, puede adherirse a la revisión interpuesta por el recurrente, dentro del término de cinco días, contados a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de la admisión del recurso, expresando los agravios correspondientes; la adhesión al recurso sigue la suerte procesal de éste.

En espera de que la presente sea una aportación útil al importante proyecto que encabeza la Comisión a su cargo, quedo de Ustedes.  
**(Roberto Rodríguez Pérez, Tomo III, páginas 2023 a 2025)**

---

El artículo 83 respecto del recurso de revisión los abobados del foro viven en forma cotidiana y en todas las materias ejecutorias dictadas por los Tribunales Colegiados de Circuito que no tienen pies ni cabeza y que

desgraciadamente aunque alguna de las partes salga afectada en sus derechos por el contenido de dichas resoluciones que la mayor de las veces se aparta no sólo de la ley sino de la justicia y de la lógica jurídica, como el ordenamiento en comento es limitativo, ya que sólo permite en su fracción V que procederá dicho recurso cuando dentro de dicha resolución se decida sobre la constitucionalidad de una ley o se establezca la interpretación directa de un precepto de la constitución. Es decir si hubo arbitrariedad o injusticia manifiesta al dictarse una resolución o incluso mala fe por parte de alguno de los colegiados, sencillamente en estos casos no se puede impugnar dicha ejecutoria, por lo que consideramos que se debe de reformar la fracción en comento y a fin de evitar arbitrariedades se permita la procedencia del recurso de revisión cuando las ejecutorias se aparten del contenido de las leyes de cada materia específica. (Ignacio Quesada Castillo, Tomo III, páginas 2117 y 2118)

---

**ARTÍCULO 83. Procede el recurso de revisión:**

I. Contra las resoluciones de los Jueces de Distrito o del superior del tribunal responsable, o de los Tribunales Unitarios de Circuito en su caso, que desechen o tengan por no interpuesta una demanda de amparo;

II. Contra las resoluciones de los Jueces de Distrito o del superior del tribunal responsable, o del Tribunal Unitario de Circuito, en su caso, en las cuales:

a) Concedan o nieguen la suspensión definitiva;

b) Modifiquen o revoquen el auto en que concedan o nieguen la suspensión definitiva;

c) Nieguen la revocación o modificación a que se refiere el inciso anterior;

III. Contra las resoluciones de sobreseimiento y las interlocutorias que se dicten en los incidentes de reposición de autos;

IV. Contra las sentencias dictadas en la audiencia constitucional por los Jueces de Distrito, o del Tribunal Unitario de Circuito o por el superior del tribunal responsable, en los casos a que se refiere el artículo 37 de esta ley. Al recurrirse tales sentencias deberán, en su caso, impugnarse los acuerdos pronunciados en la citada audiencia; y

V. Contra las resoluciones que en materia de amparo directo pronuncien los Tribunales Colegiados de Circuito, cuando decidan sobre la constitucionalidad de leyes federales o locales, tratados internacionales, reglamentos expedidos por el presidente de la República de acuerdo con la fracción I del artículo 89 constitucional y reglamentos de leyes locales expedidos por los gobernadores de los Estados, o cuando establezcan la interpretación directa de un precepto de la Constitución Federal.

La materia del recurso se limitará, exclusivamente, a la decisión de las cuestiones propiamente constitucionales, sin poder comprender otras.

En todos los casos a que se refiere este artículo, la parte que obtuvo resolución favorable a sus intereses, puede adherirse a la revisión interpuesta por el recurrente, dentro del término de cinco días, contados a partir de la fecha en que se le notifique la admisión del recurso, expresando los agravios correspondientes; en este caso, la adhesión al recurso sigue la suerte procesal de éste. (Oscar Barrera Garza, Tomo III, páginas 2196 y 2197)

---

En el capítulo concerniente a los recursos en el juicio de amparo y en especial al de revisión en los amparos indirectos, es conveniente que se incluya la facultad de que el Tercero Perjudicado no llamado a juicio o mal emplazado, pueda intentarlo cuando le perjudique la sentencia concesoria del amparo, en atención a que se le causa un perjuicio que es imposible reparar a través de otro medio legal, debiendo hacerlo dentro de los diez días siguientes a que tenga conocimiento del acto. Al respecto, puede invocarse la tesis P./J. 41/98, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada del 6 de agosto de 1998, derivada de la Contradicción de Tesis 33/93, entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que se publica en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VIII, Agosto de 1998, página 65. (Jaqueline Velázquez Ramírez, Tomo IV, página 2795).

---

OCTAVA: En el recurso de revisión adhesiva incorporar el criterio del Pleno surgido con motivo de la revisión 1673/95 resuelto en sesión pública

del 17 de Septiembre de 1996, de que su objetivo es no sólo mejorar los fundamentos de la sentencia que favorecen sino también los de cuestionar los criterios que en la sentencia no le son favorables.

También se debe aclarar el último párrafo de la fracción V del artículo 83 para establecer cuando empieza a correr el término de cinco días para su interposición, también queda en duda ante que Autoridad se presentará el escrito.

Como la declaratoria de admisión del recurso es a cargo de la autoridad que lo substancia, es de señalarse por equidad que los cinco días corren a partir de que se notificó a los interesados la interposición del recurso, puesto que suponiendo que se tratare de un problema de Constitucionalidad de Leyes, que debe conocer en revisión la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y el recurrente tiene su domicilio fuera de la capital, le es casi imposible saber cuando se admite la revisión por la Suprema Corte de Justicia, pero aún teniendo su domicilio en la ciudad de México se le obligaría a estar revisando diario la lista de acuerdos para interponer en tiempo el recurso de revisión adhesiva. Si los agravios se expresan ante el Tribunal de Alzada éste tendría que hacer las notificaciones a las partes interesadas, corriendo traslado con las copias cuando lo lógico es que se hagan la presentación ante el mismo Organó Jurisdiccional que da tramite al recurso de revisión principal.

La reforma propuesta al tercer párrafo de la fracción V del artículo 83 de la Ley de Amparo es la siguiente redacción:

“En todos los casos a que se refiere este artículo la parte que obtuvo la resolución favorable a sus intereses, puede adherirse a la revisión interpuesta dentro del término de cinco días contados a partir de la fecha en que se le notifique la interposición del recurso, debiéndose expresar los agravios ante la autoridad que conoció del asunto para que se estudien conjuntamente los recursos.

Tiene por objeto el de mejorar los fundamentos de la sentencia que le favorecen y en su caso impugnar los criterios que no le son favorables.

La adhesión al recurso sigue la suerte procesal de este”. (Javier Herrera Anaya, Tomo V, páginas 194 y 195)

---

comentario

El recurso de revisión fiscal previsto en el artículo 104, fracción I-B, de la Constitución General y 248 del Código Fiscal de la Federación, se sujeta según los términos de la disposición constitucional, a los trámites que la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución, fija para la revisión en amparo in directo y de dicho recurso conocen y resuelven los Tribunales Colegiados de Circuito, sin embargo, no se establece una regulación específica para dicho recurso.

En razón de dicha remisión a la Ley de Amparo, se propone la posibilidad de regular de manera específica la tramitación y resolución del recurso de revisión que promueven las autoridades administrativas, ante los

Tribunales Colegiados de Circuito competentes que actúan como juzgadores de legalidad.

Lo anterior, porque aun cuando la Constitución remite a la tramitación del recurso de revisión en amparo indirecto, lo cierto es que en los artículos 83 a 94 de la Ley de Amparo en los que se establece el recurso de revisión, no aparece con claridad las disposiciones que puedan aplicarse para el recurso de revisión fiscal, lo que ha ocasionado que en la práctica no se cuente con fundamentos precisos en los supuestos siguientes:

Tiempo y forma para que el interesado manifieste lo que a su derecho convenga con relación a los agravios que la autoridad expresa en el recurso.

Por lo tanto se propone establecer algunas disposiciones en la Ley de amparo que puedan regir para el recurso de revisión fiscal.

#### **Reforma**

#### **ARTICULO 83.- Procede el recurso de revisión:**

I.- Contra las resoluciones de los jueces de Distrito o del Superior del Tribunal responsable, en su caso, que desechen o tengan por no interpuesta una demanda de amparo;

II.- Contra las resoluciones de los jueces de Distrito o del superior del Tribunal responsable, en su caso, en las cuales:



Concedan o nieguen la suspensión definitiva;

Modifiquen o revoquen el auto en que concedan o nieguen la suspensión definitiva; y

Nieguen la revocación o modificación a que se refiere el inciso anterior;

III.- Contra los autos de sobreseimiento y de las interlocutorias que se dicten en los incidentes de reposición de autos;

IV.- Contra las sentencias dictadas en la audiencia constitucional por los jueces de Distrito, o por el superior del tribunal responsable, en los casos a que se refiere el artículo 37 de esta Ley. Así como aquellas en que se imponga una multa a alguna de las partes. Al recurrirse tales sentencias deberán, en su caso, impugnarse los acuerdos pronunciado en la citada audiencia.

V.- Contra las resoluciones que en materia de amparo directo pronuncien los Tribunales Colegiados de Circuito, cuando decidan sobre la constitucionalidad de leyes federales locales, tratados internacionales, reglamentos expedidos por el Presidente de la República de acuerdo con la fracción I del artículo 89 constitucional y reglamentos de leyes locales expedidos por los gobernadores de los Estados, cuando establezcan la interpretación directa de un precepto de la Constitución.

La materia del recurso se limitará, exclusivamente, a la decisión de las cuestiones propiamente constitucionales, sin poder comprender otras.  
**(Juan José Paullada Figueroa, Tomo V, páginas 257 a 259)**

**Artículo 84. Es competente la Suprema Corte de Justicia para conocer del recurso de revisión, en los casos siguientes:**

**I. Contra las sentencias pronunciadas en la audiencia constitucional por los jueces de Distrito, cuando:**

**a) Habiéndose impugnado en la demanda de amparo, por estimarlos inconstitucionales, leyes federales o locales, tratados internacionales, reglamentos expedidos por el Presidente de la República de acuerdo con la fracción I del artículo 89 constitucional y reglamentos de leyes locales expedidos por los gobernadores de los Estados, o cuando en la sentencia se establezca la interpretación directa de un precepto de la Constitución, subsista en el recurso el problema de constitucionalidad;**

**b) Se trate de los casos comprendidos en las fracciones II y III del artículo 103 constitucional;**

### **PROPUESTAS**

En la fracción I se excluye el señalamiento del Juez de Distrito, por estimarlo innecesario. De igual forma se deroga el inciso b) de la fracción I del vigente artículo 84, por ser materia de la propuesta para derogar las fracciones II y III del artículo 1 de la Ley. (David Ancira Martínez, Tomo III, página 1916)

---

**II. Contra las resoluciones que en materia de amparo directo pronuncien los Tribunales Colegiados de Circuito, siempre que se esté en el caso de la fracción V del artículo 83.**

**III. Cuando la Suprema Corte de Justicia estime que un amparo en revisión, por sus características especiales, debe ser resuelto por ella, conocerá del mismo, bien sea procediendo al efecto de oficio o a petición fundada del correspondiente Tribunal Colegiado de Circuito o del Procurador General de la República, aplicándose en lo conducente lo dispuesto por el artículo 182 de esta ley.**

**Si la Suprema Corte de Justicia considera que el amparo cuyo conocimiento por ella hubiere propuesto el Tribunal Colegiado de Circuito o el Procurador General de la República, no reviste características especiales para que se avoque a conocerlo, resolverá que sea el correspondiente Tribunal Colegiado el que lo conozca.**

## **PROPUESTAS**

**Artículo 84.- Es competente la Suprema Corte de Justicia para conocer del recurso de revisión, en los casos siguientes:**

**[...]**

a). [...]

b). [...]

II. [...]

[...]

Contra las resoluciones dictadas en los incidentes de desobediencia, en las que se separe del cargo a cualquier servidor público y se le inhabilite en términos del artículo 108 bis de esta ley. **(Germán Eduardo Baltazar Robles, Tomo I, páginas 82 y 83 )**

---

Respecto a la competencia para conocer del recurso de revisión, estimo que los artículos 84 y 85 tienen una redacción compleja y no agotan todos los supuestos, por lo que un fórmula más sencilla sería establecer que el Pleno tuviera competencia para conocer del recurso en aquellos amparos en los que se hubiere planteado una invasión de esferas o la inconstitucionalidad de un tratado internacional, de una ley federal o local; que las Salas de la Corte conocieran de la inconstitucionalidad de reglamentos expedidos por los ejecutivos federal o local y, finalmente que los Tribunales Colegiados conocieran de los recursos de revisión en contra de la inconstitucionalidad de reglamentos de buen gobierno y en general de normas generales inferiores y de aquéllos amparos en donde únicamente se hubieren planteado problemas de legalidad. **(Jorge Antonio Galindo Monroy, Tomo III, página 1644)**

---

La suprema corte de justicia de la nación y sus salas, conocerán en revisión, las impugnaciones sobre las sentencias que en los juicios de

amparo en primera instancia dicten los tribunales colegiados en tratándose de actos y leyes de la autoridad que violen la norma constitucional. (Jesús González Moreno, Tomo III, página 1808)

---

III.- Cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación estime que el amparo, por sus características especiales, debe ser resuelto por ella, conocerá del mismo, bien sea procediendo de oficio o a petición fundada del correspondiente Tribunal Colegiado de Circuito o del Procurador General de la República, aplicándose en lo conducente lo dispuesto por el artículo 182 de esta Ley. (David Ancira Martínez, Tomo III, página 1915)

---

**ARTÍCULO 84.** Es competente la Suprema Corte de Justicia para conocer del recurso de revisión, en los casos siguientes:

I. Contra las sentencias pronunciadas en la audiencia constitucional por los Jueces de Distrito o por el magistrado del Tribunal Unitario de Circuito, cuando:

a) Habiéndose impugnado en la demanda de amparo, por estimarlos inconstitucionales, leyes federales o locales, tratados internacionales, reglamentos expedidos por el presidente de la República de acuerdo con la fracción I del artículo 89 constitucional y reglamentos de leyes locales expedidos por los gobernadores de los Estados, o cuando en la sentencia se establezca la interpretación directa de un precepto de la Constitución, subsista en el recurso el problema de constitucionalidad;

b) Se trate de los casos comprendidos en las fracciones II y III del artículo 103 constitucional;

II. Contra las resoluciones que en materia de amparo directo pronuncien los Tribunales Colegiados de Circuito, siempre que se esté en el caso de la fracción V del artículo 83; y

III. Cuando la Suprema Corte de Justicia estime que un amparo en revisión, por sus características especiales, debe ser resuelto por ella, conocerá del mismo, bien sea procediendo al efecto de oficio o a petición fundada del correspondiente Tribunal Colegiado de Circuito o del procurador general de la República, aplicándose en lo conducente lo dispuesto por el artículo 182 de esta ley.

Si la Suprema Corte de Justicia considera que el amparo cuyo conocimiento por ella hubiere propuesto el Tribunal Colegiado de Circuito o el procurador general de la República, no reviste características especiales para que se avoque a conocerlo, resolverá que sea el correspondiente Tribunal Colegiado el que lo conozca. (Oscar Barrera Garza, Tomo III, páginas 2197 y 2198)

---

Así como de la competencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en este mismo caso a que se refiere el artículo 84. (Josefina Mondragón Lerma, Tomo V, página 39)





**Artículo 85. Son competentes los Tribunales Colegiados de Circuito para conocer del recurso de revisión, en los casos siguientes:**

**I. Contra los autos y resoluciones que pronuncien los jueces de Distrito o el superior del tribunal responsable, en los casos de las fracciones I, II y III del artículo 83, y**

**II. Contra las sentencias pronunciadas en la audiencia constitucional por los jueces de Distrito o por el superior del tribunal responsable, siempre que no se trate de los casos previstos en la fracción I del artículo 84.**

**III. Derogada**

**Las sentencias que pronuncien los Tribunales Colegiados de Circuito al conocer de la revisión, no admitirán recurso alguno.**

### **PROPUESTAS**

**Artículo 85.- Son competentes los Tribunales Colegiados de Circuito para conocer del recurso de revisión, en los casos siguientes:**

**I.- Contra los autos y resoluciones que pronuncien los Tribunales Unitarios de Circuito, los Jueces de Distrito o el superior del tribunal responsable, en los casos de las fracciones I, II, III y VI del artículo 83;**

II.- Contra las sentencias pronunciadas en la audiencia constitucional por los Tribunales Unitarios de Circuito, los Jueces de Distrito o el superior del tribunal responsable, siempre que no se trate de los casos previstos en la fracción I del artículo 84;

III.- Contra las interlocutorias dictadas en los incidentes de desobediencia, así como las resoluciones en las que, en tales incidentes, se tenga por correctamente cumplida la determinación materia del incidente, así como aquéllas en que se sancione a cualquier servidor público, salvo el caso previsto en la fracción IV del artículo 84.

Las sentencias que pronuncien los Tribunales Colegiados de Circuito al conocer de la revisión, no admitirán recurso alguno. **(Germán Eduardo Baltazar Robles, Tomo I, páginas 83 y 84)**

---

Respecto a la competencia para conocer del recurso de revisión, estimo que los artículos 84 y 85 tienen una redacción compleja y no agotan todos los supuestos, por lo que un fórmula más sencilla sería establecer que el Pleno tuviera competencia para conocer del recurso en aquellos amparos en los que se hubiere planteado una invasión de esferas o la inconstitucionalidad de un tratado internacional, de una ley federal o local; que las Salas de la Corte conocieran de la inconstitucionalidad de reglamentos expedidos por los ejecutivos federal o local y, finalmente que los Tribunales Colegiados conocieran de los recursos de revisión en contra de la inconstitucionalidad de reglamentos de buen gobierno y en general de normas generales inferiores y de aquéllos amparos en donde únicamente se

hubieren planteado problemas de legalidad. (**Jorge Antonio Galindo Monroy, Tomo III, página 1644**)

---

Texto igual al vigente.

I.- Contra los autos y resoluciones a que se refieren las fracciones I, II y III del artículo 83 ;

II.- Contra las sentencias dictadas ante la audiencia constitucional, siempre que no se esté en los casos previstos por la fracción I del artículo 84 .

Las sentencias que los Tribunales Colegiados de Circuito dicten en revisión no admiten recurso.

MOTIVOS.- La redacción propuesta excluye la referencia que se hace a los Juzgados de Distrito y Superior de la autoridad responsable, en atención a la derogación de la jurisdicción concurrente ; además no se especifica al órgano que emite la resolución, porque finalmente son dictados solo por Juzgados de Distrito. (**David Ancira Martínez, Tomo III, página 1916**)

---

**ARTÍCULO 85.** Son competentes los Tribunales Colegiados de Circuito para conocer del recurso de revisión, en los casos siguientes:

I. Contra los autos y resoluciones que pronuncien los Jueces de Distrito, el magistrado del Tribunal Unitario de Circuito, o el superior del tribunal responsable, en los casos de las fracciones I, II y III del artículo 83; y

II. Contra las sentencias pronunciadas en la audiencia constitucional por los Jueces de Distrito, el magistrado del Tribunal Unitario de Circuito o por el superior del tribunal responsable, siempre que no se trate de los casos previstos en la fracción I del artículo 84.

III. Derogada: D.O.F. 5 de enero de 1988 (republicada: D.O.F. 11 de enero de 1988 y D.O.F. 1o. de febrero de 1988).

**Nota aclaratoria:** Se sugiere tengan a bien suprimir la fracción que antecede, en virtud de las reformas propuestas y al mismo tiempo exista una secuencia lógica en la numeración de este texto.

Las sentencias que pronuncien los Tribunales Colegiados de Circuito al conocer de la revisión, no admitirán recurso alguno. (**Oscar Barrera Garza, Tomo III, página 2199**)

---

Reforma al artículo 85 que establece las facultades de los Tribunales Colegiados de circuito, para conocer de los recursos de revisión, para que también conozcan de los interpuesto en contra de actos de los Tribunales Unitarios de Circuito en Materia de Amparo, y desde luego reforma al

artículo 83 que dispone en contra de que actos de autoridad procede dicho recurso. (Josefina Mondragón Lerma, Tomo V, página 39)

**Artículo 86.** El recurso de revisión se interpondrá por conducto del juez de Distrito, de la autoridad que conozca del juicio, o del Tribunal Colegiado de Circuito en los casos de amparo directo. El término para la interposición del recurso será de diez días, contados desde el siguiente al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recurrida.

La interposición del recurso, en forma directa, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación o ante el Tribunal Colegiado de Circuito, según corresponda, no interrumpirá el transcurso del término a que se refiere el párrafo anterior.

#### **PROPUESTAS**

Modificar el segundo párrafo del artículo 86.

Artículo 86. El recurso de revisión se interpondrá por conducto del Juez de Distrito, de la autoridad que conozca del juicio, o del Tribunal Colegiado de Circuito en los casos de amparo directo. El término para la interposición del recurso será de diez días, contados desde el siguiente al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recurrida.

La interposición del recurso. en forma directa. Ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación o ante el Tribunal Colegiado de Circuito. según corresponda. No interrumpirá el transcurso del término a que se refiere el párrafo anterior.

En caso de que la interposición del recurso se haga directamente ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación o el Tribunal Colegiado, dichos tribunales, de oficio, remitirán el escrito de agravios al tribunal que conoció del juicio de amparo, para que realice el trámite que corresponda. **(Sergio Pallares y Lara, Tomo I, páginas 491 y 492)**

---

#### Reforma

Suprimir el segundo párrafo del art. 86 y en su lugar incluir como tal el último del artículo 99, ajustado al supuesto de procedencia de la revisión que se propone incluir en la fracción II del artículo 83 de la Ley de Amparo.

Artículo 86. El recurso de revisión se interpondrá por conducto del Juez de Distrito, de la autoridad que conozca del juicio, o del Tribunal Colegiado de Circuito en los casos de amparo directo. El término para la interposición del recurso será de diez días, contados desde el siguiente al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recurrida.

En el caso de la fracción II, inciso a), del artículo 83, la revisión deberá interponerse ante el Juez de Distrito, dentro del término de veinticuatro horas contadas a partir del día siguiente a la fecha en que para la parte recurrente surta efectos la notificación que conceda o niegue la suspensión provisional. Los Jueces de Distrito o el superior del tribunal remitirán de inmediato los escritos en los que se formule la queja al tribunal que deba conocer de ella, con las constancias pertinentes. Dentro de las

cuarenta y ocho horas siguientes el Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda resolverá de plano lo que proceda.

Adicionar un artículo 86 bis, con el mismo texto del actual artículo 101, ajustando únicamente la fracción al caso de procedencia de la revisión, que se propone incluir en la fracción V del artículo 83.

Artículo 86 bis. En los casos a que se refiere el artículo 83, fracción V, de esta ley, la interposición del recurso de queja suspende el procedimiento en el juicio de amparo, en los términos del artículo 53, siempre que la resolución que se dicte en la queja deba influir en la sentencia, o cuando de resolverse el juicio en lo principal se hagan nugatorios los derechos que pudiera hacer valer el recurrente en el acto de la audiencia, si obtuviere resolución favorable en la queja. **(Sergio Pallares y Lara, Tomo I, páginas 505 y 506)**

---

La reforma que en el año de 1988 se hizo para que se interpusiera con expresión de agravios ante el tribunal que emitió la resolución impugnada, me parece acertada pues da agilidad al trámite del recurso, ya que por una parte se ahorra tiempo desde el momento en que el tribunal revisor recibe los agravios junto con los autos de donde emanan, por otra parte se evita la práctica indeseable de presentar el recurso ante otra autoridad con el objeto de alargar el procedimiento. Sin embargo al hacer la reforma no se tomó en cuenta el sistema contemplado en la Ley de Amparo para resolver los problemas de competencia entre los tribunales federales, conforme al cual el tribunal que reciba una demanda o un recurso que no le



corresponda conocer, deberá enviárselo al tribunal que estime competente, por lo que si una persona presenta el escrito de agravios ante una autoridad distinta, quién lo reciba deberá remitirlo al tribunal que corresponda conocer, lo que da lugar a que sea nugatoria la sanción prevista en el último párrafo del artículo 86 de la Ley de Amparo, por lo que estimo que dicho párrafo deberá modificarse para quedar de la siguiente manera:

“La interposición del recurso de manera directa ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación o ante los tribunales colegiados de circuito, dará lugar a que se tenga por no presentado.” **(Jorge Antonio Galindo Monroy, Tomo III, páginas 1644 y 1645)**

---

Con texto igual al vigente, excluyendo a la autoridad que conozca del juicio. **(David Ancira Martínez, Tomo III, página 1917)**

---

**ARTÍCULO 86.** El recurso de revisión se interpondrá por conducto del Juez de Distrito, el magistrado del Tribunal Unitario de Circuito, de la autoridad que conozca del juicio, o del Tribunal Colegiado de Circuito en los casos de amparo directo. El término para la interposición del recurso será de diez días, contados desde el siguiente al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recurrida.

La interposición del recurso, en forma directa, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación o ante el Tribunal Colegiado de Circuito, según

corresponda, no interrumpirá el transcurso del término a que se refiere el párrafo anterior. (Oscar Barrera Garza, Tomo III, páginas 2199 y 2200)

**Artículo 87. Las autoridades responsables sólo podrán interponer recurso de revisión contra las sentencias que afecten directamente al acto que de cada una de ellas se haya reclamado; pero tratándose de amparos contra leyes, los titulares de los órganos de Estado a los que se encomiende su promulgación, o quienes los representen en los términos de esta Ley, podrán interponer, en todo caso, tal recurso.**

**Se observará lo dispuesto en el párrafo anterior, en cuanto fuere aplicable, respecto de las demás resoluciones que admitan el recurso de revisión.**

### **PROPUESTAS**

Por último se propone la reforma o adición al Artículo 87 de la Ley de Amparo para el efecto de que el recurso que interponga el Ministerio Público como autoridad ejecutora no quede sujeto o condicionado a que interponga también dicho recurso la autoridad ordenadora, para tal fin se propone la adición del siguiente párrafo:

Artículo 87...

El recurso que interponga el Ministerio Público señalado como autoridad responsable ejecutora con relación a un juicio penal será independiente del que pueda interponer la autoridad ordenadora y como tal se resolverá por el Tribunal que conozca de dicho recurso. (José Antonio Sam López, Tomo II, página 796)

---

**LEGITIMACIÓN DE LA AUTORIDAD QUE APLICA LA LEY PARA INTERPONER RECURSO EN EL AMPARO CONTRA LEYES.** La autoridad que aplica la ley debería estar legitimada para interponer el recurso de revisión contra leyes, ya que la ley de amparo debería adecuarse a la nueva realidad administrativa, como es la existencia de organismos autónomos. **(Fernando Sánchez Ugarte, Tomo III, página 1795)**

---

**JUSTIFICACIÓN.** Es injusto que la autoridad encargada de aplicar la ley no pueda recurrirla cuando se resuelva que la ley que aplica es inconstitucional. Desde luego que tiene interés jurídico y más aún, las instituciones en derecho administrativo han evolucionado, siendo que el texto actual no reconoce estos cambios, ya que la existencia, por ejemplo, de órganos autónomos, deberían tener derecho a defender la constitucionalidad de la ley que aplica.

**TEXTO PROPUESTO. ARTICULO 87.-** Las autoridades responsables podrán interponer recurso de revisión contra las sentencias que afecten directamente al acto que de cada una de ellas se haya reclamado. Tratándose de amparos contra leyes, los titulares de los órganos de Estado a los que se encomiende su promulgación o aplicación, o quienes los representen en los términos de esta Ley, podrán interponer, en todo caso, tal recurso. **(Luis Orlando Hernández, Tomo III, páginas 2076 y 2077)**

**Artículo 88.** El recurso de revisión se interpondrá por escrito, en el cual el recurrente expresará los agravios que le cause la resolución o sentencia impugnada.

Si el recurso se intenta contra resolución pronunciada en amparo directo por Tribunales Colegiados de Circuito, el recurrente deberá transcribir, textualmente, en su escrito, la parte de la sentencia que contiene una calificación de inconstitucionalidad de la ley o establece la interpretación directa de un precepto de la Constitución.

Con el escrito de expresión de agravios, el recurrente deberá exhibir una copia de él para el expediente y una para cada una de las otras partes.

Cuando falten total o parcialmente las copias a que se refiere el párrafo anterior, se requerirá al recurrente para que presente las omitidas, dentro del término de tres días; si no las exhibiere, el Juez de Distrito, la autoridad que conozca del juicio de amparo o el Tribunal Colegiado de Circuito, si se trata de revisión contra resolución pronunciada por éste en amparo directo, tendrán por no interpuesto el recurso.

#### **PROPUESTAS**

Sugiero respetuosamente no deje de considerarse en el nuevo texto de la ley de amparo que el recurso de revisión contra las sentencia dictadas por los Tribunales Colegiados sea procedente igualmente cuando decidan que cuando omitan decidir sobre una interpretación directa de un precepto de la Constitución.

Puede entenderse por la fecha de promulgación de la Ley de Amparo 1995, y el año de 1936 en que se promulgo la Ley de Amparo vigente.

Pero en mas de una ocasión el silencio de la autoridad ha causado mas daño que su pronunciamiento.

Este criterio además es acorde con el artículo 14 de la Constitución, que señala que todo gobernado tiene derecho a ser oído y vencido en juicio.

Por lo cual consideramos que cuando se omita resolver en una sentencia dictada por un Tribunal Colegiado respecto de una materia tan importante que recoge una garantía constitucional, debe proceder el recurso de revisión para subsanar la omisión. **(Edgardo González Blanco, Tomo III, páginas 1605 y 1606)**

---

En primer lugar creo necesario modificar los textos de la fracción IX del artículo 107 Constitucional y de la fracción V del artículo 83 de la Ley de Amparo, pues con motivo del artículo 10 de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal vigente, la Corte estimó correctamente en contra del texto constitucional y de la Ley de Amparo que el recurso de revisión en el

amparo directo procede cuando en la demanda de garantías se hubiere planteado la inconstitucionalidad de una norma aunque en la sentencia el tribunal no se hubiere pronunciado sobre el problema de constitucionalidad planteado o no hubiere establecido la interpretación directa de un precepto constitucional. El criterio de la Corte es correcto porque gracias a él se logra que el tribunal colegiado que conozca el amparo resuelva la litis constitucional planteada, pues antes de esta interpretación bastaba que dicho tribunal con violación a la garantía de audiencia dejara de estudiar el punto de la litis relativo a la constitucionalidad para que el recurso fuera improcedente, lo que a todas luces es antijurídico.

Por la misma razón deberán eliminarse el párrafo segundo del artículo 88, el último párrafo del artículo 90 y la última parte del último párrafo del artículo 89 ya que al sujetarse la procedencia del recurso de revisión en el amparo directo al planteamiento en la demanda del problema constitucional y no a que el Tribunal Colegiado resuelva o no la litis de constitucionalidad planteada, lo dispuesto en esos párrafos no tiene sentido. (Jorge Antonio Galindo Monroy, Tomo III, página 1643)

---

**Con el escrito de expresión de agravios, el recurrente deberá exhibir una copia de él para el expediente y una para cada una de las otras partes.**

**Cuando falten total o parcialmente las copias a que se refiere el párrafo anterior, se requerirá al recurrente para que presente las omitidas, dentro del término de tres días; si no las exhibiere, el Juez de Distrito, la autoridad que conozca del juicio de amparo o el Tribunal Colegiado de Circuito, si se trata de revisión contra resolución pronunciada por éste en amparo directo, tendrán por no interpuesto el recurso.**

### **PROPUESTAS**

**Derogar los dos últimos párrafos del artículo 88.**

**Artículo 88. El recurso de revisión se interpondrá por escrito, en el cual el recurrente expresará los agravios que le cause la resolución o sentencia impugnada.**

**Si el recurso se pronunciada en amparo Colegiados de Circuito, transcribir, textualmente, en sentencia que contiene inconstitucionalidad de la interpretación directa de Constitución. intenta contra resolución directo por Tribunales el recurrente deberá su escrito, la parte de la una calificación de ley o establece la un precepto de la Constitución.**

**Con el escrito de expresión de agravios. El recurrente deberá exhibir una copia de él para el expediente v una para cada una de las partes.**



Cuando falten total o parcialmente las copias a que se refiere el párrafo anterior, se requerirá al recurrente para que presente las omitidas, dentro del término de tres días; si no las exhibiere, el juez de Distrito, la autoridad que conozca del juicio de amparo o el Tribunal Colegiado de Circuito, si se trata de revisión contra la resolución pronunciada por éste en amparo directo, tendrán por no interpuesto el recurso.(Sergio Pallares y Lara, Tomo I, páginas 492 y 493)

---

#### Reforma

Suprimir los dos últimos párrafos del artículo 88, con lo que su texto quedaría en los siguientes términos.

Artículo 88. El recurso de revisión se interpondrá por escrito, en el cual el recurrente expresará los agravios que le cause la resolución o sentencia impugnada.

Si el recurso se intenta contra resolución pronunciada en amparo directo por Tribunales Colegiados de Circuito, el recurrente deberá transcribir textualmente en su escrito, la parte de la sentencia que contiene una calificación de inconstitucionalidad de la ley o establece la interpretación directa de un precepto de la Constitución. (Sergio Pallares y Lara, Tomo I, página 507)

---

#### Enmienda.

Mismo texto, DEROGANDO ÚNICAMENTE LA PARTE DONDE DICE: "...tendrán por no interpuesto el recurso".

Poniendo en lugar de la frase derogada, lo siguiente:

SI FALTAREN PARCIAL O TOTALMENTE LAS COPIAS ANTES MENCINADAS, ORDENARÁN QUE EL SECRETARIO HAGA LA COMPULSA DEL ORIGINAL.

Motivos.

TRATÁNDOSE DE UN ASPECTO TRASCENDENTAL, COMO LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LEYES, AMERITA UN TRATAMIENTO EXCEPCIONAL EN EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO, TAL Y COMO SE ESTABLECE EN CUANTO A SU ALCANCE GENERAL, EN LA FORMA Y TÉRMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 103 Y 107 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. (Fidencio Ramírez y Fidel Herrera Beltrán , Tomo II, páginas 1151 y 1152)

---

Cuando falten total o parcialmente las copias a que se refiere el párrafo anterior, se requerirá al recurrente para que presente las omitidas dentro del término de tres días; sino las exhibiere, se tendrá por no interpuesto el recurso. (David Ancira Martínez, Tomo III, página 1917)

El Juzgado de Distrito, y Tribunal Colegiado que emitió la resolución recurrida, calificará la procedencia del recurso, admitiéndolo o desechándolo.

**MOTIVOS.-** El párrafo quinto del precepto significa un medio legal para dar mayor celeridad al recurso de revisión al evitar pérdida de tiempo con el traslado de los autos al Tribunal Colegiado o Suprema Corte, así como el relativo a su devolución cuando el recurso resulta improcedente. (David Ancira Martínez, Tomo III, página 1917)

---

**ARTÍCULO 88.** El recurso de revisión se interpondrá por escrito, en el cual el recurrente expresará los agravios que le cause la resolución o sentencia impugnada.

Si el recurso se intenta contra resolución pronunciada en amparo directo por Tribunales Colegiados de Circuito, el recurrente deberá transcribir, textualmente, en su escrito, la parte de la sentencia que contiene una calificación de inconstitucionalidad de la ley o establece la interpretación directa de un precepto de la Constitución.

Con el escrito de expresión de agravios, el recurrente deberá exhibir una copia de él para el expediente y una para cada una de las otras partes.

Cuando falten total o parcialmente las copias a que se refiere el párrafo anterior, se requerirá al recurrente para que presente las omitidas, dentro del término de tres días; si no las exhibiere, el Juez de Distrito o el

magistrado del Tribunal Unitario de Circuito, la autoridad que conozca del juicio de amparo o el Tribunal Colegiado de Circuito, si se trata de revisión contra resolución pronunciada por éste en amparo directo, tendrán por no interpuesto el recurso. (Oscar Barrera Garza, Tomo III, páginas 2200 y 2201)

---

**Artículo 88.-**

...

Tratándose de núcleos agrarios o de ejidatarios o comuneros, la falta de copias no será causa para que se tenga por no interpuesto el recurso de revisión, sino que, la autoridad judicial mandará expedir dichas copias. (Gilberto J. Hershberger Reyes, Tomo IV, página 2729).

**Artículo 89. Interpuesta la revisión y recibidas en tiempo las copias del escrito de expresión de agravios conforme al artículo 88, el juez de Distrito o el superior del tribunal que haya cometido la violación reclamada en los casos a que se refiere el artículo 37, remitirán el expediente original a la Suprema Corte de Justicia o al Tribunal Colegiado de Circuito, según que el conocimiento del asunto competa a aquélla o a éste, dentro del término de veinticuatro horas, así como el original del propio escrito de agravios y la copia que corresponda al Ministerio Público Federal.**

**En los casos de la fracción II del artículo 83 de esta ley, el expediente original del incidente de suspensión deberá remitirse, con el original del escrito de expresión de agravios, dentro del término de veinticuatro horas al Tribunal Colegiado de Circuito.**

**Tratándose del auto en que se haya concedido o negado la suspensión de plano, interpuesta la revisión, sólo deberá remitirse al Tribunal Colegiado de Circuito, copia certificada del escrito de demanda, del auto recurrido, de sus notificaciones y del escrito u oficio en que se haya interpuesto el recurso de revisión con expresión de la fecha y hora del recibo.**

**Cuando la revisión se interponga contra sentencia pronunciada en materia de amparo directo por un Tribunal Colegiado de Circuito, éste remitirá el expediente original a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como el original del**

**escrito de agravios y la copia que corresponda al Ministerio Público dentro del término de veinticuatro horas, y si su sentencia no contiene decisión sobre constitucionalidad de una ley ni interpretación directa de un precepto de la Constitución Federal, lo hará así constar expresamente en el auto relativo y en el oficio de remisión del expediente.**

### **PROPUESTAS**

#### **Reforma**

**Modificar el artículo 89 suprimiendo las referencias a copias en sus párrafos primero y cuarto.**

**Artículo 89. Interpuesta la revisión, el Juez de Distrito o el superior del tribunal que haya cometido la violación reclamada en los casos a que se refiere el artículo 37, remitirán el expediente original a la Suprema Corte de Justicia o al Tribunal Colegiado de Circuito, según que el conocimiento del asunto competa a aquélla o a éste, dentro del término de veinticuatro horas, así como el original del propio escrito de agravios.**

**En los casos de la fracción II del artículo 83 de esta ley, el expediente original del incidente de suspensión deberá remitirse, con el original del escrito de expresión de agravios, dentro del término de veinticuatro horas al Tribunal Colegiado de Circuito.**

Tratándose del auto en que se haya concedido o negado la suspensión de plano, interpuesta la revisión, sólo deberá remitirse al Tribunal Colegiado de Circuito, copia certificada del escrito de demanda, del auto recurrido, de sus notificaciones y del escrito u oficio en que se haya interpuesto el recurso de revisión con expresión de la fecha y hora del recibo.

Cuando la revisión se interponga contra sentencia pronunciada en materia de amparo directo por un Tribunal Colegiado de Circuito, éste remitirá el expediente original a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como el original del escrito de agravios dentro del término de veinticuatro horas, y si su sentencia no contiene decisión sobre constitucionalidad de una ley ni interpretación directa de un precepto de la Constitución Federal, lo hará así constar expresamente en el auto relativo y en el oficio de remisión del expediente. (Sergio Pallares y Lara, Tomo I, páginas 509 y 510)

---

Más de 180 juzgados de Distrito en la República Mexicana ocupan casi la mitad de su tiempo y de sus recursos humanos y materiales en el trámite de juicios de amparo promovidos contra órdenes de detención o de aprehensión atribuidas a autoridades no judiciales como son, entre otros, los procuradores de justicia, los agentes del Ministerio Público y los directores de policía, así como la ejecución de tales órdenes que con frecuencia se reclaman de decenas de cuerpos policíacos.

Este trabajo implica, como en todos los juicios de amparo, la recepción, registro y análisis de la demanda, la formación del expediente principal y del incidente de suspensión, el dictado y notificación de cinco o más acuerdos que deben hacerse del conocimiento, de una considerable cantidad de autoridades, sobre todo en lugares donde la zona metropolitana está formada con varios municipios, como los casos de Monterrey, Guadalajara y el Distrito Federal, entre otros.

Sin embargo, rara vez encontraremos una demanda con la que se persiga realmente una seria declaración de inconstitucionalidad de los actos reclamados, pues en casi la totalidad de los casos a los promoventes no les interesa una sentencia que generalmente es de sobreseimiento, ni la resolución interlocutoria en la que casi siempre se niega la suspensión definitiva de los actos. Lo único que pretenden es obtener una "protección rápida", a través de la suspensión de los actos reclamados, con la esperanza de que esa situación perdure el mayor tiempo posible.

#### **SOLUCIÓN QUE SE PROPONE:**

Las reformas al artículo 107, fracción VII, de la Constitución Federal y de los artículos 123 y 146 de la Ley de Amparo, fundamentalmente, así como del 39, 89 y 117 para precisarlos, aclararlos o adecuarlos.

Estas reformas darían lugar a lo siguiente:

**A).- ELIMINACIÓN DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN SOLO ENTRATÁNDOSE DE LOS ACTOS ALUDIDOS.** Para ello se sugiere



decretar la suspensión de plano, oficiosamente, en el auto inicial, tomando las medidas de aseguramiento del quejoso, toda vez que el artículo 130 de la Ley de Amparo establece en su último párrafo la obligación de conceder la suspensión provisional siempre que se trate de la restricción de la libertad personal fuera de procedimiento judicial, sin que dicho precepto exija el cumplimiento de los requisitos que establece el artículo 124; por tanto no existe obstáculo para decretarla oficiosamente. Además, el mismo hecho de presentar una demanda contra éste tipo de actos genera la presunción de que implícitamente se pide la suspensión.

B).- LA ELIMINACIÓN DE LA SENTENCIA DE SOBRESEIMIENTO Y DE LA DECLARACION DE EJECUTORIA EN ESTOS CASOS. Pues es sabido de todos los juzgadores federales, que resultan ser trámites inútiles, ya que a ninguna de las partes les interesan y sí, en cambio, ocasionan junto con el incidente, un gran gasto de recursos humanos, materiales y económicos que pueden emplearse mejor en los trámites y resoluciones que sí sean importantes.

Para esto se propone que antes de la admisión de la demanda se abra y registre un expediente auxiliar y se dicte un acuerdo decretando oficiosamente la suspensión, en el mismo auto se requerirá a las responsables y al promovente para que en el plazo de cinco días aquéllas informen solo sobre la existencia o inexistencia de los actos y en el mismo plazo el promovente podrá aportar prueba documental o el testimonio de dos personas para acreditarlo. Si se acredita la existencia del acto se admitirá la demanda; si no, se tendrá por no interpuesta.

**C).- IRRECURREBILIDAD DEL AUTO INICIAL EN COMENTO.**  
Sugiero que no se reformen los artículos 83 y 95 ni los relativos a éstos, ya que el auto a que se refiere el inciso anterior deberá ser irrecurrible, pues su naturaleza y la transitoriedad del mismo hacen impráctico un medio de defensa en su contra. En cambio, el promovente presentará nuevamente su demanda cuando realmente existan los actos que reclama. **(José Luis Rodríguez Santillán, Tomo I, páginas 590 a 592)**

---

La razón es que este párrafo establece una regla del trámite del recurso de revisión contra el auto en que se hubiere concedido o negado la suspensión de plano, regla que resulta incongruente con el artículo 83 que ya no contempla la procedencia del recurso contra el proveído mencionado.

#### **TEXTO PROPUESTO**

Se propone su derogación. **(José Luis Rodríguez Santillán, Tomo I, páginas 606 y 607)**

---

El Recurso de Revisión interpuesto por el Ministerio Público Federal contra la sentencia constitucional que concede al quejoso el amparo, no debe tener efecto suspensivo.

En el PROYECTO DE LA LEY "DUBLAN", en su artículo 14, dice: "La sentencia que manda amparar y proteger, sólo es apelable en efecto

devolutivo, y se ejecutara sin perjuicio del recurso interpuesto". (Nicolás Martínez Cerda, Tomo II, páginas 867 y 868)

---

El recurso de revisión contra la sentencia constitucional que concede al quejoso el amparo y Protección de la Justicia de la Unión, no debe tener efectos suspensivos. (Nicolás Martínez Cerda, Tomo II, página 872)

---

En primer lugar creo necesario modificar los textos de la fracción IX del artículo 107 Constitucional y de la fracción V del artículo 83 de la Ley de Amparo, pues con motivo del artículo 10 de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal vigente, la Corte estimó correctamente en contra del texto constitucional y de la Ley de Amparo que el recurso de revisión en el amparo directo procede cuando en la demanda de garantías se hubiere planteado la inconstitucionalidad de una norma aunque en la sentencia el tribunal no se hubiere pronunciado sobre el problema de constitucionalidad planteado o no hubiere establecido la interpretación directa de un precepto constitucional. El criterio de la Corte es correcto porque gracias a él se logra que el tribunal colegiado que conozca el amparo resuelva la litis constitucional planteada, pues antes de esta interpretación bastaba que dicho tribunal con violación a la garantía de audiencia dejara de estudiar el punto de la litis relativo a la constitucionalidad para que el recurso fuera improcedente, lo que a todas luces es antijurídico.

Por la misma razón deberán eliminarse el párrafo segundo del artículo 88, el último párrafo del artículo 90 y la última parte del último párrafo del

artículo 89 ya que al sujetarse la procedencia del recurso de revisión en el amparo directo al planteamiento en la demanda del problema constitucional y no a que el Tribunal Colegiado resuelva o no la litis de constitucionalidad planteada, lo dispuesto en esos párrafos no tiene sentido. **(Jorge Antonio Galindo Monroy, Tomo III, página 1643)**

---

Siendo procedente el recurso, se remitirá el expediente original a la Suprema Corte o Tribunal Colegiado, según que el conocimiento competa a aquella o a ésta, dentro del término de veinticuatro horas, así como el original del escrito de expresión de agravios y la copia que corresponda al Ministerio Público Federal. **(David Ancira Martínez, Tomo III, páginas 1917 y 1918)**

**Artículo 90. El Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o el Tribunal Colegiado de Circuito, según corresponda, calificará la procedencia del recurso de revisión, admitiéndolo o desechándolo.**

**Admitida la revisión por el Presidente de la Suprema Corte de Justicia o por los Presidentes de las salas de la misma, y hecha la notificación relativa al Ministerio Público, se observará lo dispuesto por los artículos 182, 183 y 185 a 191.**

**Admitida la revisión por el Tribunal Colegiado de Circuito y hecha la notificación al Ministerio Público, el propio Tribunal resolverá lo que fuere procedente dentro del término de quince días.**

**Siempre que el Presidente de la Suprema Corte de Justicia o, en sus respectivos casos, el Pleno, o la Sala correspondiente, desechen el recurso de revisión interpuesto contra sentencias pronunciadas por Tribunales Colegiados de Circuito, por no contener dichas sentencias decisión sobre la constitucionalidad de una ley o no establecer la interpretación directa de un precepto de la Constitución Federal, impondrán, sin perjuicio de las sanciones penales que procedan, al recurrente o a su apoderado, o a su abogado, o a ambos, una multa de treinta a ciento ochenta días de salario.**

## **PROPUESTAS**

Art. 90.-...

...

Admitida la revisión por el tribunal colegiado de circuito y hecha la notificación al Ministerio Público, el propio tribunal o las salas de éste resolverá lo que fuere procedente dentro del término de quince días.  
**(Juan Manuel Arredondo Elías, Tomo I, páginas 679 y 680)**

---

Sabemos que para poder vivir en sociedad, el ser humano necesita ajustar sus actos a normas de conducta que le permitan el respeto a sus derechos, así como al de los demás con quienes convive que garanticen seguridad en el cumplimiento de sus obligaciones bajo un clima de libertad, independencia y seguridad.

Es así que el Estado, a través de la función primordial que tiene y que consiste en reglamentar esa convivencia social, emite, a través del órgano legislativo, las normas de orden jurídico que tienden a preservar esas libertades y que están encaminadas a la observancia estricta de lo que al grupo social conviene, es decir a mirar siempre por el bien común.

Son éstos los fines propios del derecho, es decir el bien común, la justicia y la seguridad que debe imperar en todo grupo social.

Es evidente, que a medida de que la población aumenta, las relaciones interpersonales se acrecientan y con ello, la aplicación de las

normas jurídicas que tienden a reglamentar o regular un sin número de conductas tanto de orden social, como político, económico y religioso crecen en mayor proporción. Consecuentemente, este aumento poblacional incrementa la resolución o solución de los conflictos de intereses que se dan por este tipo de relaciones y que requieren forzosamente la intervención del Estado, a través de los órganos jurisdiccionales para poder solucionarlos.

En otro aspecto debe mencionarse que causa también el incremento de conflictos de intereses la resistencia que el ser humano tiene a cumplir con sus obligaciones, a respetar la ley, y sobre todo al reconocimiento que debe hacer cuando su conducta por él desplegada atenta contra las normas previamente establecidas.

Esta resistencia a cumplir con las disposiciones señaladas por la ley, que si bien es propia de la naturaleza del ser humano, ya que no fácilmente se acepta que la conducta desplegada esté en contra de disposiciones de orden legal establecidas por el Estado, es el otro factor que repercute en el aumento de los conflictos de intereses que cotidianamente se presentan ante las autoridades jurisdiccionales.

Son, en mi concepto, los dos puntos esenciales o factores determinantes que han hecho que los órganos del Estado encargados de administrar e impartir justicia, se vean totalmente saturados de asuntos y que resulte materialmente imposible el que los resuelvan dentro de los términos que la propia ley impone a dichos órganos jurisdiccionales, lo cual implica el retardo en la solución de los mismos con la consiguiente inseguridad del gobernado que ve que su pretensión no puede ser acogida

en forma inmediata y estima, que ello constituye una denegación de justicia y sobre todo fomentar un clima de inseguridad que no permite la tranquilidad en el desenvolvimiento de la vida cotidiana.

¿Cómo solucionar estos problemas?. Es la interrogante que a diario nos planteamos, quienes tenemos la difícil misión de resolver los conflictos de intereses y preservar a través de nuestras resoluciones la paz social, la seguridad jurídica y el bien común.

Ante lo primero, es decir el crecimiento poblacional y por ende el de incremento en los conflictos de intereses, nada se puede hacer.

En cuanto a lo segundo, la solución se encuentra en nuestras manos y primordialmente debemos señalar que como órganos jurisdiccionales nos encontramos debidamente comprometidos con la propia sociedad a la que pertenecemos a dar seguridad jurídica a gobernado, pero también otorgar ésta en término breve para que no se rompa el estado de derecho y se llegue a crear impunidad puesto que, quien está consciente de que ha infringido la ley, también lo está de que en la medida de que agote sistemáticamente todos los medios de defensa que tenga a su alcance, hará que la justicia no llegue en la forma que debiera ser, permitiéndole retardar el cumplimiento de su obligación y trayendo como consecuencia la poca eficacia de las disposiciones que regulan la convivencia social.

En nuestro sistema jurídico y a través del contacto cotidiano con los asuntos de los que tenemos conocimiento, fácilmente podemos advertir que el gobernado emplea todas las argucias necesarias para alargar los



procedimientos, para hacerlos tortuosos y en una palabra para evadir al máximo el cumplimiento de sus obligaciones, y que, a sabiendas de que ha incurrido en una violación a esas normas de conducta, evita a toda costa su cumplimiento así, que la ley no desempeña la función propia para la que fue creada sino que, se sirve de ella en lugar de acatarse y cumplirla debidamente.

Así tenemos que el juicio constitucional, ha perdido hoy en día su esencia, ya no se da para proteger al gobernado de las violaciones a las garantías individuales por parte de las autoridades, sino que se ha convertido, en especial en la materia civil, en una tercera instancia en la cual sólo se pretende eludir o retardar el cumplimiento de las obligaciones y no se conforma el gobernado con ello, sino que pretende a través de impedimentos o bien de quejas administrativas que se analice una cuestión ya debatida y decidida en primera, segunda instancia y en la vía de amparo, todo lo cual no sólo entorpece el cumplimiento estricto de la ley sino que dilata el procedimiento y crea un desmedido aumento en los asuntos que los Tribunales Federales deben de resolver.

El Poder Judicial de la Federación, atendiendo el reclamo de la población de que justicia que no es pronta, no es justicia, se ha dado a la tarea de aumentar constantemente y en forma significativa sobre todo a partir del año 1985, los órganos jurisdiccionales que deben atender los conflictos de orden social.

Sin embargo, ésto ha producido un efecto contraproducente porque quien está acostumbrado a evadir su responsabilidad y a servirse de la ley,

ve propicio su anhelo evasor, ya que tiene el alcance y con mayor facilidad, órganos a través de los cuales no busca la tutela de garantías individuales, ni tampoco el establecimiento del estado de derecho, sino únicamente retardar la aplicación de la ley y pretender evadir, al máximo sus obligaciones. En este punto conviene señalar, que no sólo es el gobernado quien a toda costa no acepta su responsabilidad, sino también el profesional en derecho que lo asesora y que como perito en la materia, a sabiendas de que es irremediable que su cliente cumpla con la ley, hace uso de todas las argucias que la propia legislación señala para lograr al máximo el retardo de la justicia.

¿Qué hacer ante esta situación si se ha visto y probado, que no es con mayores órganos jurisdiccionales que habrá de solucionarse el problema?

Se considera que la solución es revisar a fondo el juicio constitucional, para regresar a la esencia misma de su creación, es decir la tutela de la justicia federal a la violación de las garantías individuales.

Conforme a lo anterior, debe convenirse que probablemente sea éste uno de los motivos que inspiraron al Máximo Tribunal Constitucional, a insistir en las reformas que quedaron plasmadas en el Diario Oficial de la Federación, publicadas el día once de junio del año en curso y que en lo esencial determina en lo sucesivo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, podrá dejar de conocer todos aquellos asuntos que no revistan interés o trascendencia o que, en lo general la propia Suprema Corte estime innecesaria su intervención.

El principio anterior encuentra su antecedente en el writ of certiorari establecido en el Derecho Norteamericano.

Conforme a éste, la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos de Norteamérica, determina si accede o no a revisar un caso, es decir se otorga la facultad discrecional al máximo órgano colegiado para definir que casos desea analizar y resolver, y así, las partes que así lo soliciten, pedirán que éste emita un auto en que así lo decida.

La naturaleza de este derecho, se otorgó a la Suprema Corte por el Congreso Norteamericano y podemos señalar que es procedente en la mayoría de los casos.

Ahora bien, este principio que en la actualidad sólo corresponde a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debe incluirse como facultad a los órganos colegiados en materia de amparo; para ello resulta necesaria la adición o reforma a los preceptos de la Ley de Amparo y específicamente a los artículos que están comprendidos en el Capítulo Tercero del Título Tercero de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal, secciones primera, segunda y tercera, es decir el Presidente del Tribunal Colegiado a quien se le remite el juicio de garantías, deberá realizar un análisis minucioso en forma preliminar de la demanda de garantías y si advierte que el juicio constitucional ha sido interpuesto con el único fin de retardar el procedimiento y de hacer nugatoria la justicia pronta y expedita, ya que de las constancias que conforman los juicios naturales que se anexan al informe justificado, se desprende que está totalmente demostrado el

incumplimiento de las obligaciones que se pretenden dilatar; que el juicio se ha seguido con todas las formalidades de la ley y que, se han otorgado las garantías constitucionales a que los artículos 14 y 16 consagran, en favor del gobernado, deberá determinar lo anterior y rechazar la demanda de garantías, ello desde luego con independencia de que pueda suscitarse alguna causa de improcedencia.

Con lo anterior, las atribuciones del Presidente del Tribunal Colegiado correspondiente se extenderán en cuanto a la responsabilidad que le compete y no quedarán limitadas en forma exclusiva a instaurar la tramitación del juicio de garantías sino que, de primera mano realizará un estudio pormenorizado de la demanda de amparo y si estima que efectivamente pudiera darse el caso de que existan violaciones a las garantías individuales del quejoso, le dará curso, de no ser así, determinará que no existe razón para tramitar el juicio constitucional.

Con esto evidentemente, que las atribuciones de los Presidentes de los Tribunales Colegiados de Circuito no serían tan limitadas a las seis fracciones que establece el artículo 41 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

Este principio, también debe de ser recogido en la propia ley en tratándose de la interposición de los Recursos de Revisión.

Podemos pensar, que esta facultad del Presidente del Tribunal Colegiado, es sumamente riesgosa puesto que se deja a su decisión determinar qué asunto debe o no conocer el órgano colegiado al que

pertenece, sin embargo, este pensamiento no puede tener sostén ni jurídico, ni moral.

En efecto, si partimos de la base que quienes integran los Tribunales Colegiados de Circuito, son funcionarios de reconocida capacidad y honestidad ya que por ello, han alcanzado el cargo que ostentan, es indiscutible que ello garantizaría la decisión que al efecto tomaren amén de que, va su propia responsabilidad de por medio. **(Manuel Ernesto Saloma Vera, Tomo II, páginas 717 a 724)**

---

ART 90.- (último párrafo) Siempre que el Presidente de la Suprema Corte de Justicia.... impondrán, sin perjuicio de las sanciones penales que procedan a la recurrente una multa de treinta a ciento ochenta días de salario, y a su abogado una suspensión en el ejercicio de la profesión, de quince días a seis meses, cuando se advierta que con la interposición del recurso sólo se pretende retardar la ejecución de la sentencia de amparo. **(Manuel Ernesto Saloma Vera, Tomo II, página 727)**

---

Las consideraciones anteriores son, en concepto del suscrito una forma de limitar el juicio constitucional y hacer que éste realmente recobre la esencia y razón de ser, desde luego que para una efectiva aplicación del juicio de garantías se estima necesario no una reforma a la Ley de Amparo sino una nueva Ley, que permita que el juicio constitucional sea realmente una garantía para el gobernado y no como se ha convertido en la actualidad, lo cual ha demeritado el funcionamiento de los órganos

encargados de la administración de justicia, un instrumento que sólo pretende usarse para evadir el cumplimiento de la Ley.

De igual forma se estima necesario también, la elaboración de una nueva Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación que contemple y regule específicamente las funciones de los órganos del Poder Judicial de la Federación ya que la que se encuentra en vigor, suprimió ordenamientos que eran necesarios y que sin embargo no se previeron, bien para sustituirlos por otros, bien para considerar situaciones que siguen presentándose y que, por laguna de la ley sólo constituyen un obstáculo más para la administración pronta de la justicia. **(Manuel Ernesto Saloma Vera, Tomo II, página 730)**

---

En vista del notorio atraso en que se encuentran todos y cada uno de los expedientes que se tramitan en los Tribunales Colegiados de Circuito, trátase de amparos directos y/o recursos de revisión mismos que a manera de ejemplificar se encuentran estudiando los que les turnaron en los meses de abril y mayo del presente año, propongo que se les imponga un término no mayor a quince días aproximadamente para dictar la sentencia respectiva; dicho término se debería de contar a partir del momento en que se le turne el expediente al C. Secretario Proyectista del Tribunal Colegiado de Circuito de que se trate.

Lo anterior lo propongo con el fin de que sea mas ágil y dinámica la tramitación de un juicio de amparo directo o un recurso de revisión, misma solicitud que pongo a su amable consideración esperando, de ser posible,

sea tomada en cuenta al momento de elaborar el proyecto de la Nueva Ley de Amparo. (Rafael Castro Cortés, Tomo II, páginas 797)

---

La propuesta intenta evitar prácticas dilatorias en los procesos de amparo, de ahí que se aumenta el monto de la sanción pecuniaria.

La propuesta considera que la modificación se justifica por la naturaleza de la determinación y que se surten las mismas razones de urgencia que reviste la suspensión provisional.

#### TEXTO CON MODIFICACIÓN

ARTICULO 90.-→ El Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o el Tribunal Colegiado de Circuito, según corresponda, calificará la procedencia del recurso de revisión, admitiéndolo o desechándolo.

Admitida la revisión por el Presidente de la Suprema Corte de Justicia o por los Presidentes de las salas de la misma, y hecha la notificación relativa al Ministerio Público, se observará lo dispuesto por los artículos 182, 183 y 185 a 191.

Admitida la revisión por el Tribunal Colegiado de Circuito y hecha la notificación al Ministerio Público, el propio Tribunal resolverá lo que fuere procedente dentro del término de quince días.

Siempre que el Presidente de la Suprema Corte de Justicia o, en sus respectivos casos, el Pleno, o la Sala correspondiente, desechen el recurso de revisión interpuesto contra sentencias pronunciadas por Tribunales Colegiados de Circuito, por no contener dichas sentencias decisión sobre la constitucionalidad de una ley o no establecer la interpretación directa de un precepto de la Constitución Federal, impondrán, sin perjuicio de las sanciones penales que procedan, al recurrente o a su apoderado, o a su abogado, o a ambos, una multa de cien a trescientos días de salario. **(María Simona Ramos Ruvalcaba, Tomo II, páginas 1422 a 1425)**

---

En primer lugar creo necesario modificar los textos de la fracción IX del artículo 107 Constitucional y de la fracción V del artículo 83 de la Ley de Amparo, pues con motivo del artículo 10 de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal vigente, la Corte estimó correctamente en contra del texto constitucional y de la Ley de Amparo que el recurso de revisión en el amparo directo procede cuando en la demanda de garantías se hubiere planteado la inconstitucionalidad de una norma aunque en la sentencia el tribunal no se hubiere pronunciado sobre el problema de constitucionalidad planteado o no hubiere establecido la interpretación directa de un precepto constitucional. El criterio de la Corte es correcto porque gracias a él se logra que el tribunal colegiado que conozca el amparo resuelva la litis constitucional planteada, pues antes de esta interpretación bastaba que dicho tribunal con violación a la garantía de audiencia dejara de estudiar el punto de la litis relativo a la constitucionalidad para que el recurso fuera improcedente, lo que a todas luces es antijurídico.



Por la misma razón deberán eliminarse el párrafo segundo del artículo 88, el último párrafo del artículo 90 y la última parte del último párrafo del artículo 89 ya que al sujetarse la procedencia del recurso de revisión en el amparo directo al planteamiento en la demanda del problema constitucional y no a que el Tribunal Colegiado resuelva o no la litis de constitucionalidad planteada, lo dispuesto en esos párrafos no tiene sentido. **(Jorge Antonio Galindo Monroy, Tomo III, página 1643)**

---

Recibidos los autos en la Suprema Corte, se notificará al Ministerio Público, observándose lo dispuesto en los artículos 182, 183 y 185 al 191.

Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado, se notificará al Ministerio Público, hecho lo cual, se resolverá el recurso dentro de quince días. **(David Ancira Martínez, Tomo III, página 1918)**

**Artículo 91. El tribunal en Pleno, las Salas de la Suprema Corte de Justicia o los tribunales colegiados de Circuito, al conocer de los asuntos en revisión, observarán las siguientes reglas:**

**I. Examinarán los agravios alegados contra la resolución recurrida y, cuando estimen que son fundados, deberán considerar los conceptos de violación cuyo estudio omitió el juzgador.**

### **PROPUESTAS**

**I.- Contra los autos dictados por los jueces de Distrito, que admitan demandas notoriamente improcedentes. (David Ancira Martínez, Tomo III, página 1918)**

---

**II. Sólo tomarán en consideración las pruebas que se hubiesen rendido ante el juez de Distrito o la autoridad que conozca o haya conocido del juicio de amparo; y si se trata de amparo directo contra sentencia pronunciada por Tribunal Colegiado de Circuito, la respectiva copia certificada de constancias;**

**III. Si consideran infundada la causa de improcedencia expuesta por el juez de Distrito o la autoridad que haya conocido**

del juicio de amparo en los casos del artículo 37, para sobreseer en él en la audiencia constitucional después de que las partes hayan rendido pruebas y presentado sus alegatos, podrán confirmar el sobreseimiento si apareciere probado otro motivo legal, o bien revocar la resolución recurrida y entrar al fondo del asunto, para pronunciar la sentencia que corresponda, concediendo o negando el amparo, y

### PROPUESTAS

Al referirse el artículo 91 de la Ley de Amparo al tramite que debe seguirse en el recurso de revisión, en su fracción III establece la posibilidad de que el tribunal revisor sobresea el juicio por alguna causal de improcedencia que o fue planteada en la primera instancia del juicio.

No obstante que la improcedencia es de orden público y por lo tanto es correcto plantearla en la segunda instancia, la interpretación que los tribunales federales han dado de esa fracción es contraria a la garantía de audiencia ya que el tribunal revisor plantea una nueva causal de improcedencia que ninguna de las partes conoce, sino hasta que se publica el auto que sobresee el juicio con base en esa nueva causal y por tratarse de un sentencia de revisión, contra ella no puede hacerse nada, por ello estimo que cuando el tribunal revisor considere que el juicio debe sobreseerse por una causal de improcedencia que no se hubiere planteado en la primera instancia del juicio, debe dar vista a las partes, en especial al quejoso para que pueda manifestarse en contra de esa causal y sólo

después de oírlo, el revisor deberá dictar el auto correspondiente o la sentencia, ya sea que sobresea el juicio, o conceda o niegue el amparo, pero en ese auto o en esa sentencia deberá tomarse en cuenta el parecer de las partes, en especial la del quejoso, respecto de esa causal de improcedencia. (Jorge Antonio Galindo Monroy, Tomo III, páginas 1645 y 1646)

---

Fracciones III y IV se excluye la referencia a la autoridad que deba conocer del amparo en jurisdicción concurrente, porque ésta fue derogada. (David Ancira Martínez, Tomo III, página 1918)

---

**IV. Si en la revisión de una sentencia definitiva, en los casos de la fracción IV del artículo 83, encontraren que se violaron las reglas fundamentales que norman el procedimiento en el juicio de amparo, o que el juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia, incurrió en alguna omisión que hubiere dejado sin defensa al recurrente o pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva, revocarán la recurrida y mandarán reponer el procedimiento, así como cuando aparezca también que indebidamente no ha sido oída alguna de las partes que tenga derecho a intervenir en el juicio conforme a la ley; y**

**PROPUESTAS**

Fracciones III y IV se excluye la referencia a la autoridad que deba conocer del amparo en jurisdicción concurrente, porque ésta fue derogada. **(David Ancira Martínez, Tomo III, página 1918)**

---

**V. Derogada.**

**VI. Tratándose de amparos en que los recurrentes sean menores de edad o incapaces, examinarán sus agravios y podrán suplir sus deficiencias y apreciar los actos reclamados y su inconstitucionalidad conforme a lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 78.**

**PROPUESTAS**

Complementariamente, procurándose no sobrecargar de trabajo a los tribunales revisores, deberían decretarse medidas disciplinarias y sancionatorias en contra de los jueces y sus auxiliares que en primera instancia actúan con liviandad, negligencia u otro tipo de irresponsabilidades durante el procedimiento, o al resolver los asuntos de su competencia, sin el debido análisis de las cuestiones que conforman la litis y de las pruebas ofrecidas por las partes. **(Ivan Rueda Heduán, Tomo I, página 114)**

---

Art. 91. - El tribunal en Pleno, las Salas de la Suprema Corte de Justicia o los tribunales colegiados de circuito funcionando en Pleno o en Salas, al conocer de los asuntos en revisión, observarán las siguientes reglas:... (Juan Manuel Arredondo Elías, Tomo I, página 680)

---

En el artículo 91, la fracción VI debe desaparecer, pues la suplencia de la queja esta prevista en el artículo 76 bis, por lo que no hay que repetirla en este lugar. ( Jesús A. Arroyo Moreno, Tomo II, página 1081)

---

**RECURSO CONTRA LA ADMISIÓN O DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA.** Que aún cuando el Magistrado forme parte de un Tribunal Colegiado, lo resuelva unitariamente ante el secretario quien da fe. El mismo tratamiento deberá seguirse cuando se trate de aclaración de demanda o cuando se tenga por no interpuesta ésta, o cuando se conceda o se niegue la suspensión provisional. (Fernando Sánchez Ugarte, Tomo III, página 1795)

---

**ARTÍCULO 91.** El tribunal en Pleno, las Salas de la Suprema Corte de Justicia o los Tribunales Colegiados de Circuito, al conocer de los asuntos en revisión, observarán las siguientes reglas:

I. Examinarán en primer término, si existe alguna causal de sobreseimiento para después proceder al estudio de los agravios alegados

contra la resolución recurrida y, cuando estimen que son fundados, deberán considerar los conceptos de violación cuyo estudio omitió el juzgador;

II. Sólo tomarán en consideración las pruebas que se hubiesen rendido ante el Juez de Distrito o ante el magistrado del Tribunal Unitario de Circuito o ante la autoridad que conozca o haya conocido del juicio de amparo; salvo aquellas que demuestren alguna causal superveniente de improcedencia y si se trata de amparo directo contra sentencia pronunciada por Tribunal Colegiado de Circuito, la respectiva copia certificada de constancias;

III. Si consideran infundada la causa de improcedencia expuesta por el Juez de Distrito, , el magistrado del Tribunal Unitario de Circuito o la autoridad que haya conocido del juicio de amparo en los casos del artículo 37, para sobreseer en él en la audiencia constitucional después de que las partes hayan rendido pruebas y presentado sus alegatos, podrán confirmar el sobreseimiento si apareciere probado otro motivo legal, o bien revocar la resolución recurrida y entrar al fondo del asunto, para pronunciar la sentencia que corresponda, concediendo o negando el amparo;

IV. Si en la revisión de una sentencia definitiva, en los casos de la fracción IV del artículo 83, encontraren que se violaron las reglas fundamentales que norman el procedimiento en el juicio de amparo, o que el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia, incurrió en alguna omisión que hubiere dejado sin defensa al recurrente o pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva, revocarán la recurrida y mandarán reponer el procedimiento, así como

cuando aparezca también que indebidamente no ha sido oída alguna de las partes que tenga derecho a intervenir en el juicio conforme a la ley; y

V. Derogada: D.O.F. 20 de mayo de 1986.

Nota aclaratoria: Se sugiere tengan a bien suprimir la fracción que antecede, en virtud de las reformas propuestas .

VI. Tratándose de amparos en que los recurrentes sean menores de edad o incapaces, examinarán sus agravios y podrán suplir sus deficiencias y apreciar los actos reclamados y su inconstitucionalidad conforme a lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 78. (**Oscar Barrera Garza, Tomo III, páginas 2202 a 2204**)

---

Con independencia de lo anterior y en relación con el trámite del Amparo Indirecto, hacemos la siguiente propuesta:

EN AMPARO INDIRECTO, de conformidad con el artículo 91 de la Ley de Amparo, los Tribunales Colegiados de Circuito, tienen el deber de entrar al fondo del asunto cuando se revoque una resolución de sobreseimiento, por improcedencia dictada por un Juez de Distrito, siempre que no se actualice otra causal de esa naturaleza.

Pues bien, esta disposición legal prácticamente le está otorgando competencia a los Tribunales Colegiados para resolver en una sola instancia en materia de amparo indirecto, al menos en lo que se refiere a la



decisión final del asunto, lo cual no es compatible con las normas competenciales que se contienen en los artículos 114 y 158 de la propia ley de la materia.

Por lo anterior, se propone se propone se reforme el artículo que se cuestiona para el efecto de que los tribunales colegiados que revoquen resoluciones de sobreseimiento por causa de improcedencia pronunciadas por los jueces de Distrito en la audiencia constitucional, envíen los expedientes a los jueces para que éstos resuelvan el fondo del asunto. **(José Luis Arellano Pita, Tomo IV, páginas 2695 y 2696).**

---

Adicionar con una fracción más al artículo 91 de la Ley de Amparo. Ciertamente, el mencionado dispositivo legal enumera las reglas como básicas que deben observar tanto la Suprema Corte de Justicia como los Tribunales Colegiados al conocer del recurso de revisión.

Sin embargo, en lo tocante al supuesto de que se interponga recurso de revisión en contra de un auto desechatorio de una demanda de amparo en el que el Juez de Distrito considere plenamente probada una causal de improcedencia, es decir, que esta es manifiesta indudable y el H. Tribunal Colegiado considera que no es así, tal dispositivo legal que se pide adicionar deja sin prever o resolver el mecanismo a seguir en caso de que el H. Tribunal Colegiado considere que existe otra causal de improcedencia diversa la invocada por el Juez que si actualice aquel desechamiento; de ahí que ante tal eventualidad existan Tribunales Colegiados que consideren que no es a tal órgano a quien compete el desechamiento de la demanda,

interpretando el artículo 145 de la Ley de Amparo, originando su devolución y orden para su substanciación no obstante de ser fundadamente improcedente la tramitación de aquel juicio de garantías, con los consabidos daños que eso representa para la administración de justicia en nuestro País. Por ello, se propone que el artículo en comento debe ahora contener una diversa fracción en la que de modo expreso se indique que en aquel supuesto, deberá el H. Tribunal Colegiado desechar aunque por otro motivo, esa demanda de amparo pudiendo ser su redacción de la siguiente manera:

Fracción VII: si se considera que no se actualiza la causa de improcedencia invocada por el Juez de Distrito, por no ser manifiesta o indudable, pero el Tribunal Colegiado de Circuito estima actualizada otra con aquellas características, procederá a desechar la demanda de amparo. **(José Waldemar Alvarado Ríos, Tomo IV, páginas 2699 y 2700).**

**Artículo 92.** Cuando en la revisión subsistan y concurren materias que sean de la competencia de la Suprema Corte de Justicia y de un Tribunal Colegiado de Circuito, se remitirá el asunto a aquélla.

La Suprema Corte resolverá la revisión exclusivamente en el aspecto que corresponda a su competencia, dejando a salvo la del Tribunal Colegiado de Circuito.

### **PROPUESTAS**

En aras de una justicia rápida y expedita, garantía prevista en el artículo 17 constitucional, cuando en el recurso de revisión subsista el problema de constitucionalidad y de legalidad, el recurso debe resolverse en su totalidad por la Suprema Corte de Justicia de la nación, pues ésta ya tiene el expediente, ya tiene un ministro relator y un proyectista, quiénes han estudiado las constancias de autos, por ello considero que si en la revisión se estima que el auto reclamado no es inconstitucional, la propia Corte debe estudiar el problema de legalidad y no remitirlo al tribunal colegiado para que lo haga, pues ello implica que transcurra una cantidad considerable de tiempo, en perjuicio de la garantía prevista en el precepto constitucional citado, por tal motivo debería reformarse en ese sentido los artículos 92 y 93 de la Ley de Amparo. (Jorge Antonio Galindo Monroy, Tomo III, página 1646)

ARTÍCULO 92. Cuando en la revisión subsistan y concurran materias que sean de la competencia de la Suprema Corte de Justicia y de un Tribunal Colegiado de Circuito, se remitirá el asunto a aquélla.

La Suprema Corte resolverá la revisión exclusivamente en el aspecto que corresponda a su competencia, dejando a salvo la del Tribunal Colegiado de Circuito. (Oscar Barrera Garza, Tomo III, página 2204)

**Artículo 93. Cuando se trate de revisión de sentencias pronunciadas en materia de amparo directo por Tribunales Colegiados de Circuito, la Suprema Corte de Justicia únicamente resolverá sobre la constitucionalidad de la ley, tratado internacional o reglamento impugnados, o sobre la interpretación directa de un precepto de la Constitución Federal, en los términos del artículo 83 fracción V de esta ley.**

### **PROPUESTAS**

En aras de una justicia rápida y expedita, garantía prevista en el artículo 17 constitucional, cuando en el recurso de revisión subsista el problema de constitucionalidad y de legalidad, el recurso debe resolverse en su totalidad por la Suprema Corte de Justicia de la nación, pues ésta ya tiene el expediente, ya tiene un ministro relator y un proyectista, quiénes han estudiado las constancias de autos, por ello considero que sí en la revisión se estima que el auto reclamado no es inconstitucional, la propia Corte debe estudiar el problema de legalidad y no remitirlo al tribunal colegiado para que lo haga, pues ello implica que transcurra una cantidad considerable de tiempo, en perjuicio de la garantía prevista en el precepto constitucional citado, por tal motivo debería reformarse en ese sentido los artículos 92 y 93 de la Ley de Amparo. (Jorge Antonio Galindo Monroy, Tomo III, página 1646)

**ARTÍCULO 93.** Cuando se trate de revisión de sentencias pronunciadas en materia de amparo directo por Tribunales Colegiados de Circuito, la Suprema Corte de Justicia únicamente resolverá sobre la constitucionalidad de la ley, tratado internacional o reglamento impugnados, o sobre la interpretación directa de un precepto de la Constitución Federal, en los términos del artículo 83, fracción V, de esta ley.

Si el máximo Tribunal Federal considera que es incorrecta la apreciación del Tribunal Colegiado de Circuito respecto a la inconstitucionalidad de una ley o a su interpretación directa de un precepto constitucional, revocará la resolución recurrida y dictará una nueva; sin embargo, si subsisten temas de mera legalidad, revocará la sentencia recurrida y remitirá al Órgano Colegiado para que éste dicte una nueva sentencia. **(Oscar Barrera Garza, Tomo III, página 2204)**

**Artículo 94. Cuando la Suprema Corte de Justicia o alguno de los Tribunales Colegiados de Circuito conozca de la revisión interpuesta contra la sentencia definitiva dictada en un juicio de amparo, de que debió conocer un Tribunal Colegiado de Circuito en única instancia conforme al artículo 44, por no haber dado cumplimiento oportunamente el juez de Distrito o la autoridad que haya conocido de él conforme a lo dispuesto en el artículo 49, la Suprema Corte de Justicia o el Tribunal Colegiado declarará insubsistente la sentencia recurrida y lo remitirá al correspondiente Tribunal Colegiado de Circuito o se avocará al conocimiento del amparo, dictando las resoluciones que procedan.**

**Artículo 95. El recurso de queja es procedente:**

**I. Contra los autos dictados por los jueces de Distrito o por el superior del tribunal a quien se impute la violación reclamada, en que admitan demandas notoriamente improcedentes;**

**II. Contra las autoridades responsables, en los casos a que se refiere el artículo 107, fracción VII de la Constitución Federal, por exceso o defecto en la ejecución del auto en que se haya concedido al quejoso la suspensión provisional o definitiva del acto reclamado;**

**III. Contra las mismas autoridades, por falta de cumplimiento del auto en que se haya concedido al quejoso su libertad bajo caución conforme al artículo 136 de esta ley;**

**PROPUESTAS**

**Artículo 95.- El recurso de queja es procedente:**

**I y II**

**III Se deroga.**

La derogación de la fracción III del artículo 95 de la Ley de amparo, es correcta, puesto que es congruente con la propuesta de reformar al párrafo octavo del artículo 136 de la misma ley, en donde se suprime la facultad de



conceder la libertad provisional bajo caución al Juez de amparo. (Ricardo Ojeda Bohórquez, Tomo II, páginas 821 y 825)

---

III.- Contra los autos que desechan el recurso de revisión. (David Ancira Martínez, Tomo III, página 1919)

---

IV. Contra las mismas autoridades, por exceso o defecto en la ejecución de la sentencia dictada en los casos a que se refiere el artículo 107, fracciones VII y IX, de la Constitución Federal, en que se haya concedido al quejoso el amparo;

V. Contra las resoluciones que dicten los jueces de Distrito, el Tribunal que conozca o haya conocido del juicio conforme al artículo 37, o los Tribunales Colegiados de Circuito en los casos a que se refiere la fracción IX del artículo 107 de la Constitución Federal, respecto de las quejas interpuestas ante ellos conforme al artículo 98;

### **PROPUESTAS**

V.- Contra las resoluciones que dictan los jueces de Distrito o Tribunal Colegiado de Circuito en los casos a que se refiere el artículo 107

de la Constitución Federal , respecto de las quejas interpuestas ante ellos conforme al artículo 98. (David Ancira Martínez, Tomo III, página 1919)

---

**VI. Contra las resoluciones que dicten los jueces de Distrito, o el superior del tribunal a quien se impute la violación en los casos a que se refiere el artículo 37 de esta ley, durante la tramitación del juicio de amparo o del incidente de suspensión, que no admitan expresamente el recurso de revisión conforme al artículo 83 y que, por su naturaleza trascendental y grave, puedan causar daño o perjuicio a alguna de las partes, no reparable en la sentencia definitiva; o contra las que se dicten después de fallado el juicio en primera instancia, cuando no sean reparables por las mismas autoridades o por la Suprema Corte de Justicia con arreglo a la ley;**

#### **PROPUESTAS**

**VI.- Se elimina la intervención de la autoridad que lo es en jurisdicción concurrente. (David Ancira Martínez, Tomo III, página 1919)**

---

**VII. Contra las resoluciones definitivas que se dicten en el incidente de reclamación de daños y perjuicios a que se refiere el**

**artículo 129 de esta ley, siempre que el importe de aquéllas exceda de treinta días de salario.**

**VIII. Contra las autoridades responsables, con relación a los juicios de amparo de la competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito, en amparo directo, cuando no provean sobre la suspensión dentro del término legal o concedan o nieguen ésta; cuando rehúsen la admisión de fianzas o contrafianzas; cuando admitan las que no reúnan los requisitos legales o que puedan resultar insuficientes; cuando nieguen al quejoso su libertad caucional en el caso a que se refiere el artículo 172 de esta ley, o cuando las resoluciones que dicten las autoridades sobre la misma materia, causen daños o perjuicios notorios a alguno de los interesados;**

### **PROPUESTAS**

**VIII.- Similar al vigente, excluyendo la referencia a la libertad caucional. (David Ancira Martínez, Tomo III, página 1919)**

---

**IX. Contra actos de las autoridades responsables, en los casos de la competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito, en amparo directo, por exceso o defecto en la ejecución de la sentencia en que se haya concedido el amparo al quejoso;**

## **PROPUESTAS**

III. - Acerca del término para interponer el recurso de queja por defecto o exceso en el cumplimiento de las sentencias de amparo en los casos de la competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito.

El recurso de queja es un medio de impugnación vinculado, en lo esencial, con situaciones procesales en las que no procede el recurso de revisión y que de no existir, dejaría al procedimiento constitucional sin un funcionamiento práctico y eficaz.

Doctrinalmente se ha criticado la falta de unidad y armonía en la reglamentación del recurso en referencia, que hace difícil su sistematización técnica.

Algunos autores distinguen entre los casos en que la queja es propiamente un recurso, de aquéllos en que la queja es una cuestión incidental, para la que, incluso, proponen que en esta última situación se le denomine denuncia o demanda incidental por exceso o defecto en la ejecución de la sentencia.

Ahora bien, al margen de que convendría una organización que permita el estudio sistemático de la reglamentación de la queja, y de que también sería pertinente una distinción entre el citado medio de impugnación como recurso y de la queja incidente, para la ponencia que nos ocupa, es de relevancia poner de manifiesto la excesiva amplitud del término para su interposición, tratándose de los casos en que se impugna el

defecto o exceso en la ejecución de la sentencia protectora de garantías dictada por un Tribunal Colegiado de Circuito.

La actual Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, en el artículo 95, fracción IX, prevé el citado medio de impugnación, de la manera siguiente:

**ARTÍCULO 95.** El recurso de queja es procedente:

IX. Contra actos de las autoridades responsables, en los casos de la competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito, en amparo directo, por exceso o defecto en la ejecución de la sentencia en que se haya concedido el amparo al quejoso.

El artículo 97, del ordenamiento citado, en lo que interesa, previene:

**ARTÍCULO 97.** Los términos para la interposición del recurso de queja serán los siguientes:

III. En los casos de las fracciones IV y IX del propio artículo 95, podrá interponerse dentro de un año, contando desde el día siguiente al en que se notifique al quejoso el auto en que se haya mandado cumplir la sentencia, o al en que la persona extraña a quien afecte su ejecución tenga conocimiento de ésta; salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal, deportación, destierro o de alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, en que la queja podrá interponerse en cualquier tiempo.

En estrecha relación con lo anterior, se encuentra que el artículo 106 de la Ley de Amparo, establece:

**ARTÍCULO 106.** En los casos de amparo directo, concedido el amparo se remitirá testimonio de la ejecutoria a la autoridad responsable para su cumplimiento. En casos urgentes y de notorios perjuicios para el agraviado, podrá ordenarse el cumplimiento de la sentencia por la vía telegráfica, comunicándose también la ejecutoria por oficio.

En el propio, despacho en que se haga la notificación a las autoridades responsables, se les prevendrá que informen sobre el cumplimiento que se dé al fallo de referencia.

Si dentro de las veinticuatro horas siguientes a la en que la autoridad responsable haya recibido la ejecutoria, o en su caso, la orden telegráfica, no quedare cumplida o no estuviere en vías de ejecución, de oficio o a solicitud de cualquiera de las partes se procederá conforme al artículo anterior.

El artículo 105 del mismo ordenamiento, a que se refiere el numeral acabado de transcribir, en su tercer párrafo, prevé:

**ARTÍCULO 105.** ...

...

Cuando la parte interesada no estuviere conforme con la resolución que tenga por cumplida la ejecutoria, se enviará también, a petición suya, el expediente a la Suprema Corte de Justicia. Dicha petición deberá presentarse dentro de los cinco días siguientes al de la notificación de la resolución correspondiente; de otro modo, ésta se tendrá por consentida.

Como se observa, en los casos de la fracción IX del artículo 95, de la Ley de Amparo, el recurso de queja puede interponerse dentro de un año; plazo que comienza a correr desde el día siguiente al en que se notifique al quejoso el auto en que se haya mandado cumplir la sentencia, o al en que la persona extraña a quien afecte su ejecución tenga conocimiento de ésta, con la salvedad de los casos en que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal, deportación, destierro o de alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, pues en estas situaciones, la queja podrá interponerse en cualquier tiempo.

El precepto en la fracción aludida, indica como inicio para el cómputo del término para interposición de la queja, desde el día siguiente al en que se notifique al quejoso el auto en que se haya mandado cumplir la sentencia protectora de garantías.

En íntima vinculación con el cumplimiento de la resolución en que se hubiera concedido la protección de la Justicia Federal al quejoso, se encuentra el tercer párrafo del artículo 105 de la Ley de Amparo, que contempla un término de cinco días para que la parte interesada, una vez notificada del fallo cumplimentador, manifieste su inconformidad con el auto que declara cumplida la ejecutoria y pida el envío del expediente relativo a

la Suprema Corte de Justicia de la Nación y si no lo hace así, la resolución se tendrá por consentida.

En las referidas condiciones, es claro que existe una diferencia notable entre los plazos involucrados, pues si existe inconformidad con el informe rendido por la autoridad responsable a la sentencia protectora de garantías, la parte interesada puede manifestarlo así dentro del término de cinco días contados a partir de la fecha de la notificación de la comunicación de cumplimiento y si no lo hace así, ésta se tiene por consentida. En cambio, si la parte interesada considera que existe defecto o exceso en el cumplimiento del fallo protector de garantías individuales, puede ocurrir en queja dentro del término de un año; plazo que resulta por demás excesivo para tales efectos, tratándose de las partes en el juicio, si se toma en cuenta que el exceso o el defecto en la ejecución también involucran inconformidad con el citado cumplimiento, el cual debe comunicársele en su oportunidad; amén de que lo prolongado del lapso implica una cierta inseguridad jurídica que no se justifica desde ningún punto de vista.

Luego, sería pertinente armonizar las disposiciones invocadas, por lo que se realiza la siguiente:

### **P r o p u e s t a**

Que en la Nueva ley de Amparo se limite a un término prudente como sería el plazo de diez o quince días para el caso de interposición de la queja, tratándose de exceso o defecto en la ejecución de la sentencia en



que se hubiera otorgado la protección constitucional, dictada ya por Tribunal colegiado ya por juez de Distrito, al existir las mismas razones.

Así, el nuevo ordenamiento debe contener una disposición que en lo conducente prevenga:

Los términos para la interposición del recurso de queja serán los siguientes:

... En los casos de actos de las autoridades responsables, en los casos de la competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito, en amparo directo o del juez de Distrito en amparo indirecto, por exceso o defecto en la ejecución de la sentencia en que se haya concedido el amparo al quejoso, podrá interponerse dentro de los quince días, contados desde el siguiente al en que se notifique al quejoso el cumplimiento de la ejecutoria, o al en que la persona extraña a quien afecte su ejecución tenga conocimiento de ésta; salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal, deportación, destierro o de alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, en que la queja podrá interponerse en cualquier tiempo. (Herminio Huerta Díaz, Tomo IV, páginas 2914 a 2920).

**X. Contra las resoluciones que pronuncien los jueces de Distrito en el caso previsto en la parte final del artículo 105 de este ordenamiento.**

### **PROPUESTAS**

Si alguien les adujera que un recurso de queja apoyado en la fracción XI del artículo 95 de la Ley de Amparo fue interpuesto extemporáneamente. ¿Cómo decidirían la cuestión si el artículo 97, fracción IV, de ese ordenamiento legal señala un término y el artículo 98 indica otro diferente?.  
**(Mario Pérez de León Espinosa, Tomo I, página 551)**

---

**XI. Contra las resoluciones de un juez de Distrito o del superior del Tribunal responsable, en su caso, en que concedan o nieguen la suspensión provisional.**

### **PROPUESTAS**

De acuerdo con el origen histórico de la queja en el juicio de amparo, podemos afirmar que no se trata de la figura tradicional que, según la Enciclopedia Jurídica Omeba<sup>64</sup>, se define como un reclamo de superintendencia contra omisiones del juez en el trámite de los juicios y

---

<sup>64</sup> Enciclopedia Jurídica Omeba, Tomo XXIV, Buenos Aires, Driskill, 1981, p. 143.

cuyo objeto es obtener una resolución o sentencia contra la que se pueda interponer un recurso en forma.

Sobre la naturaleza del recurso de queja en el sistema jurídico mexicano, no respecto del juicio de amparo sino del procedimiento civil, la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó la tesis siguiente<sup>65</sup>:

“QUEJA. INCONSTITUCIONALIDAD DEL RECURSO PREVISTO POR EL ARTICULO 709, FRACCION II, DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA Y CODIFICACIONES SIMILARES. El recurso de queja se encuentra profundamente arraigado en la tradición procesal hispana y, por consiguiente, dentro de las codificaciones que rigieron en el México Colonial. Sus antecedentes se encuentran en las Leyes IV y VII, de la Séptima Partida; Ley CLV del Estilo, Leyes XV, Título XVI, Libro 3o. y XXV, Título XIX, Libro 8o. de las Ordenanzas Reales de Castilla; Ley I, Título 1o., Libro 4o. de la Novísima Recopilación; y artículo 75 de la Ley de Enjuiciamiento Civil Española de 1855. La gestación histórico-legislativa de este medio impugnativo revela que si bien en un principio se decidió sancionar al funcionario judicial, ya fuera multándolo o destituyéndolo del cargo, en la medida en que evolucionó y se consolidó dentro del marco procesal, sus efectos se orientaron a revocar la determinación recurrida. Esta transformación trajo como consecuencia una afectación a la contraparte del accionante de la queja, lo que provocó serias críticas durante el siglo pasado, por no permitir la intervención del colitigante

---

<sup>65</sup> SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION, Tribunal Pleno, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Tomo IV, julio de 1996, p. 100.

afectado. Dentro de este contexto se aprobó el Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal y Territorio de la Baja California de 1872, el cual sustituyó el recurso de queja por el de denegada apelación, que a diferencia de este último, sí permitía la intervención de la contraparte, perfil procesal que fue conservado por la reforma de 1880 y el Código de 1884. Por su parte, los autores del Código de 1932 optaron por reincorporar el recurso de queja, el cual ofrecía un procedimiento más ágil y versátil que el de la denegada apelación; sin embargo, los trazos evidentemente medievales del recurso de queja español no fueron advertidos por el presidente de la República, que en uso de facultades extraordinarias concedidas por el Congreso, expidió este ordenamiento el cual, a su vez, fue emulado por el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Baja California y la mayoría de las Legislaturas de los Estados. Ahora bien, al regularse el recurso de queja en el artículo 709, fracción II, del código adjetivo civil del Estado de Baja California, sólo se prevé la posibilidad de que el Juez produzca un informe; pero no se instrumenta una forma de intervención del colitigante, lo cual produce un estado de indefensión que atenta contra el artículo 14 constitucional.”

En la ejecutoria se hace una magnífica relación histórica de la evolución del recurso.

Volviendo a la materia específica de este trabajo, advertimos que, en su origen, la queja era sólo una forma de provocar la revisión de las determinaciones del Juez de Distrito por parte de la Suprema Corte de Justicia, cuando no estaba previsto expresamente el recurso de revisión, y el tribunal Ad Quem resolvía con plena jurisdicción, pudiendo por ello

revocar, modificar o confirmar la resolución recurrida, o incluso el procedimiento previo a la misma, por lo que su naturaleza procesal no era distinta de la revisión.

En la actualidad, esta afirmación continúa siendo válida, máxime si se toma en cuenta que los mismos órganos que conocen de la revisión conocen de la queja.

Ahora bien, deben distinguirse dos casos genéricos de procedencia del recurso de queja:

En el primer supuesto se comprenden los casos en que se recurren resoluciones de la autoridad que tramita el juicio de amparo; en estos casos corresponde resolver el recurso de queja a la Suprema Corte o al Tribunal Colegiado de Circuito, y no existe ninguna diferencia esencial con el recurso de revisión, del que conocen los mismos superiores; las diferencias son secundarias, pues se refieren a los términos para la interposición, a la autoridad ante la cual se presenta el escrito con los agravios y las pruebas con las que se resuelve el recurso, que en el caso de la queja es únicamente el informe del A Quo, mientras que en la revisión se remite el expediente completo al tribunal Ad Quem.

El hecho de que en la queja no pueda el recurrente ofrecer ni desahogar pruebas, quedando limitado al material probatorio que remita el Juez o Tribunal A Quo, afecta una de las formalidades esenciales del procedimiento en la segunda instancia pues el recurrente no tiene oportunidad de aportar pruebas, ni siquiera señalar constancias para que el

superior pueda contar con toda la información necesaria para resolver el recurso.

En estos casos, la naturaleza procesal de la queja es igual a la del recurso de revisión, pues la Suprema Corte o el Tribunal Colegiado debe determinar si la resolución recurrida es o no correcta, lo cual es conforme además con el origen histórico de la institución, pues desde la primera ley reglamentaria del amparo se establecía la posibilidad de que, en virtud de la queja, la Suprema Corte revisara los actos del Juez de Distrito, pudiendo confirmar, revocar o modificar las determinaciones recurridas. En la práctica, existe una diferencia adicional; cuando se resuelve un recurso de revisión, el tribunal que conoce del mismo expresa en uno de sus puntos resolutivos si confirma, revoca o modifica la resolución recurrida, en tanto que al resolverse un recurso de queja, lo único que se expresa es si se declara fundado o no, sin especificar que se revoca, se confirma o se modifica la resolución recurrida, lo cual no tiene ningún fundamento legal y en la mayoría de los casos provoca confusión, pues los alcances de la resolución deben interpretarse por la autoridad contra la cual se promovió la queja, derivándolos de los razonamientos contenidos en las consideraciones de la resolución.

Si a lo expuesto se agrega que la diversa reglamentación de supuestos de procedencia de la revisión y de la queja ocasiona conflictos y problemas para las partes en el juicio de amparo, quienes deben elegir entre dos recursos que, tramitándose en forma distinta, son resueltos por las mismas autoridades, y que, en caso de error en la denominación del recurso intentado el recurrente, éste queda indefenso porque el tribunal

revisor no puede cambiar el recurso intentado, se comprenderá la necesidad de eliminar la queja como figura autónoma en los casos en que se recurren determinaciones de la autoridad que tramita el juicio de amparo (tribunal unitario, Juez de Distrito o superior de la autoridad responsable), para dejar como único recurso en estos casos la revisión, de acuerdo con el espíritu del juicio de amparo, que tiende a trámites sencillos, claros, que no constituyan trampas procesales sino que permitan dirimir las controversias en el fondo.

Otro argumento que apoya la propuesta anterior lo constituye la exigencia lógica de que el juicio de amparo constituya un sistema congruente, en el que se apliquen correctamente las conclusiones obtenidas en los estudios de teoría procesal, que ya se comentaron.

El segundo supuesto de procedencia de la queja se da cuando lo que se recurre es una determinación de la autoridad responsable, caso en que procede la queja por exceso o defecto en el cumplimiento de las resoluciones sobre suspensión provisional o definitiva y sentencias que conceden el amparo, así como falta de cumplimiento al auto de libertad bajo caución; en estos casos la queja no constituye técnicamente un recurso, pues procesalmente éstos proceden contra las autoridades que tramitan un juicio y no contra los actos realizados por las partes en ese procedimiento, como es el caso de las autoridades responsables en el juicio de amparo; además, en los recursos se actualiza una extensión del problema tratado en la determinación recurrida, es decir, la litis analizada en el acto recurrido debe analizarse nuevamente en el recurso, para determinar si fue correcta o no la resolución que se combate; esto no sucede en el caso de la queja

cuando se promueve contra actos de la autoridad responsable, como se verá a continuación.

Si en este caso la queja no es en realidad un recurso, queda el problema de determinar su naturaleza procesal, con relación a la cual y toda vez que el elemento común en estas situaciones es la pretensión del recurrente de que se declare el incumplimiento o desobediencia que se imputa a la autoridad responsable respecto de las determinaciones tomadas por las autoridades federales en el trámite y resolución de un juicio de amparo, debe considerarse que la naturaleza de la institución es la de un incidente de incumplimiento o desobediencia, con una litis propia que versa únicamente sobre la obediencia de la responsable a las determinaciones federales y no un recurso, pues como resultado de la queja se obtiene una declaración de que la conducta de la autoridad responsable se adecua o no a lo ordenado dentro de un juicio de amparo, pero no puede obtenerse ninguna modificación a determinación alguna dictada dentro de ese juicio por la autoridad que lo tramite o haya tramitado.

La concepción anterior armoniza las instituciones previstas en la ley de Amparo con relación al cumplimiento de las ejecutorias, cuya naturaleza de incidente ha sido definida ya en la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 195, Tomo II, octubre de 1995, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo texto es como sigue<sup>66</sup>:

---

<sup>66</sup> Poder Judicial de la Federación, México, *IUS* 7, 1997, CD-ROM.



"INEJECUCION DE SENTENCIA. QUEDA SIN MATERIA EL INCIDENTE CUANDO LOS ACTOS DENUNCIADOS COMO REPETICION DE LOS RECLAMADOS HAN QUEDADO SIN EFECTO. Cuando los actos denunciados como repetición de los reclamados en un juicio de garantías en que se concedió el amparo al quejoso, hayan quedado sin efecto en virtud de una resolución posterior de la autoridad responsable a la que se le atribuye la repetición de dichos actos, el incidente de inejecución de sentencia queda sin materia, al no poderse hacer un pronunciamiento sobre actos insubsistentes."

Así como en la jurisprudencia sustentada por la anterior Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 303, Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, cuyo texto es como sigue<sup>67</sup>:

"REPETICION DEL ACTO RECLAMADO, INCIDENTE DE. QUEDA SIN MATERIA SI EN EJERCICIO DE SU COMPETENCIA EL SUPERIOR JERARQUICO DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE DEJA SIN EFECTO EL ACTO QUE LE DIO ORIGEN. Si durante el trámite del incidente de inejecución de sentencia por repetición del acto reclamado, la autoridad competente superior jerárquico de la autoridad responsable emite una resolución mediante la cual deja sin efectos la que dio origen a dicho incidente y se restablecen las cosas al estado que tenían antes de la violación de garantías, sin que la quejosa haga manifestación alguna, no obstante la vista que se le dio con la resolución de mérito, como el propósito

---

<sup>67</sup> Poder Judicial de la Federación, México, IUS 7, 1997, CD-ROM.

del artículo 108 de la Ley de Amparo no es el de que se llegue a la imposición de las sanciones ahí especificadas, sino el de que las sentencias de amparo sean debidamente cumplidas, resulta indudable que el incidente de que se trata ha quedado sin materia al quedar sin efectos jurídicos el acto que le dio origen, siendo suficiente para arribar a esta conclusión, el que la autoridad responsable lo haya manifestado así y su dicho se apoye con las copias certificadas de la resolución correspondiente, sin que sea necesario que el quejoso exprese su conformidad por escrito, si el mismo fue debidamente notificado y nada expuso en contrario."

Considerar los casos de queja por exceso, defecto o desobediencia, como presupuestos para el trámite de un incidente, traería como consecuencia la posibilidad, para la parte afectada, de ofrecer y desahogar pruebas para demostrar sus afirmaciones, sin quedar sujeta al informe que rinda la autoridad responsable, lo que garantizaría el respeto a las formalidades esenciales del procedimiento tal como éstas han sido consideradas en la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 133, tomo II, diciembre de 1995, Novena Epoca del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo texto es como sigue<sup>68</sup>:

"FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de

---

<sup>68</sup> Poder Judicial de la Federación, México, IUS 7, 1997, CD-ROM.

defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga "se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento". Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado."

#### **Posibles objeciones**

Son dos las posibles objeciones que pudieran hacerse a las consideraciones anteriores. La primera sería que la naturaleza propia de cada recurso impide la inclusión de uno en el otro. La segunda sería que los casos en que procede la queja se resuelve mediante un procedimiento más ágil y rápido que el previsto para la revisión. Ambas objeciones son infundadas.

En cuanto a la naturaleza de los recursos, consideramos que ya se demostró, mediante el estudio de la evolución de la regulación de la queja, que originalmente constituye un medio para provocar la revisión de la actuación del Juez de Distrito por parte de las autoridades superiores, por lo que su naturaleza no es distinta de la de la revisión, lo que se confirma con

el hecho de que la misma autoridad que conoce de la revisión resuelve la queja cuando ésta se dirige contra determinaciones de la autoridad que tramita el juicio de amparo, sea un Tribunal Unitario, un Juez de Distrito o el superior del tribunal a quien se impute la violación de garantías.

Cuando la queja se promueve contra determinaciones de la autoridad responsable, se advierte que el Juez de Distrito o el Tribunal Colegiado de Circuito, que haya tramitado el juicio de amparo indirecto o directo, resuelve en primera instancia sobre la desobediencia alegada por el recurrente, y corresponde siempre a la Suprema Corte resolver la cuestión en última instancia, mediante el recurso de inconformidad o la “queja de queja”.<sup>69</sup>

Analicemos ahora los distintos casos de procedencia de la queja establecidos por el artículo 95 de la Ley de Amparo, para determinar en cuáles se está en presencia de un recurso y en cuales técnicamente el problema debe resolverse incidentalmente.

De las resoluciones emitidas por la autoridad que tramite el juicio de amparo, procede la queja contra el auto que admite una demanda que el recurrente considere notoriamente improcedente, las determinaciones que no admiten expresamente revisión pero causan gravamen no reparable en la sentencia o se dictan después de pronunciada ésta, las interlocutorias dictadas en el incidente de daños y perjuicios derivados de la suspensión, y el de cumplimiento sustituto de una ejecutoria de amparo, además de las resoluciones sobre suspensión provisional, así como las que resuelvan

---

<sup>69</sup> Artículo 95, fracción V, de la Ley de Amparo.

quejas contra autoridades responsables (caso conocido como "queja de queja").

La materia del recurso contra la admisión de una demanda no difiere substancialmente del caso previsto en la fracción I del artículo 83 de la Ley de Amparo, que establece la revisión contra el auto que desecha o tiene por no interpuesta una demanda de amparo; en ambos casos, el problema a dilucidar en el recurso es si el juicio de amparo resulta manifiesta e indudablemente improcedente o no, por lo que no existe justificación alguna para que la misma cuestión de fondo se resuelva mediante dos instituciones distintas según la autoridad de primera instancia en el juicio de amparo determine si admite o no una demanda.

La queja contra las interlocutorias dictadas en los incidentes de daños y perjuicios (cumplimiento sustituto de una ejecutoria de amparo) no difiere esencialmente de la revisión prevista en la fracción III del artículo 83 mencionado, que se refiere a las interlocutorias dictadas en el incidente de reposición de autos<sup>70</sup>, único incidente que se tramita como de previo y especial pronunciamiento en el juicio de amparo; lo anterior, porque en ambos casos se trata de recurrir interlocutorias, es decir, determinaciones dictadas para poner fin a incidentes dentro del juicio de amparo, por lo que a fin de que el sistema de recursos quede estructurado en forma lógica, deben considerarse conjuntamente.

---

<sup>70</sup> Esta fracción también establece la revisión contra las resoluciones que decretan el sobreseimiento del juicio, que no son interlocutorias y que por lo mismo no deberían considerarse en esta fracción.

La queja contra resoluciones de suspensión provisional resulta igualmente de naturaleza semejante a la revisión prevista en la fracción II del artículo 83, que se refiere a los autos en conceden, niegan, modifican o revocan, o bien niegan modificar o revocar la suspensión definitiva, por lo que pueden incluirse sin problemas de naturaleza en la revisión, pues en última instancia el problema a dilucidar es si procede o no la suspensión, provisional o definitiva, así como los términos en que debe decretarse, en su caso.

Aquí podría objetarse que en el amparo directo son las autoridades responsables las que resuelven sobre la suspensión y que por lo mismo no puede proceder la revisión; sin embargo, en este caso, las autoridades responsables no actúan como parte en el juicio de amparo, sino como autoridad dentro del trámite del mismo, auxiliando a la Justicia Federal, y por ello sus determinaciones en estas circunstancias son resoluciones dictadas por la autoridad que tramita el juicio de amparo y por lo mismo deben recurrirse igualmente por medio de la revisión prevista en la citada fracción II del artículo 83 de la ley de amparo, pues una vez más, el problema consiste en determinar si procede o no la suspensión y los términos en que, en su caso, debe decretarse.

Todos los demás casos de procedencia de la queja se refieren a resoluciones de las autoridades responsables, que implican el análisis de la obediencia o desobediencia de dichas responsables a las determinaciones dictadas dentro de los juicios de amparo, ya sea directo o indirecto, y por lo mismo su naturaleza no es de resoluciones dictadas dentro del juicio de amparo por la autoridad que lo tramita, sino que constituyen conflictos

autónomos sobre la conducta de una de las partes en el citado juicio (la autoridad responsable) en relación con las determinaciones de la autoridad que lo tramita; luego, contra ellas técnicamente no procede un recurso, y por lo mismo, la controversia sobre su obediencia o desobediencia a las determinaciones pronunciadas dentro del juicio de amparo constituyen una litis autónoma de la constitucional que se dirime en el juicio de garantías, por lo que su resolución debe darse en forma incidental, pues es innegable su estrecha relación con el juicio de garantías propiamente dicho, a fin de que se decida sobre la desobediencia imputada por el interesado a la autoridad responsable, incidente dentro del cual debe pronunciarse una resolución de la autoridad que tramitó el juicio de amparo, por ser quien emite la determinación cuya desobediencia se estudia, independientemente de que contra dicha resolución proceda el recurso de revisión, pues se trataría de una interlocutoria dictada en un incidente, solución que mantiene la coherencia lógica del sistema de recursos.

Lo anterior justificaría, además, la eliminación del recurso de inconformidad que actualmente establece el artículo 105 de la Ley de Amparo y que contradice lo dispuesto por el artículo 82, que establece como recursos en el juicio de amparo únicamente la queja, la revisión y la reclamación, sin mencionar la inconformidad.

La segunda objeción contemplada se refería a la diferencia entre los trámites de la revisión y de la queja, dado que a primera vista podría decirse que el recurso de queja tiene un trámite más ágil y breve que la revisión, derivado de la urgencia para resolver las cuestiones materia del primer recurso citado; sin embargo, el recurso de queja, cuando se tramita contra

actos del Juez de Distrito, debe resolverse en 28 días hábiles, o 25 cuando el acto recurrido emana de una autoridad responsable, mientras que la revisión debe resolverse en 25 días cuando conoce de ella un Tribunal Colegiado, caso mucho más frecuente que aquél en que conoce de la revisión la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en que el trámite alcanza los 55 días.

Lo anterior deriva de que, una vez interpuesto el recurso de queja, debe calificarse por parte del Presidente del Tribunal Colegiado o del Pleno o Salas de la Suprema Corte, para lo cual disponen de un día para dictar el acuerdo, más otro que corresponde a la notificación del mismo; si se admite el recurso, se pide informe al juez o autoridad responsable, quienes deben rendirlo en el plazo de tres días, contados a partir del siguiente a la fecha en que reciban la notificación respectiva; después, debe darse vista al Ministerio Público Federal, para lo cual deben emplearse otros dos días, uno para el acuerdo y otro para la notificación respectivos; transcurridos los tres días de la vista mencionada, debe turnarse el expediente a proyecto de resolución, para lo cual debe dictarse otro acuerdo y notificarse (dos días más); finalmente, debe dictarse la resolución en el plazo de diez días, si el acto recurrido proviene de la autoridad que tramita el juicio de amparo, o de tres días si proviene de la autoridad responsable.<sup>71</sup>

La revisión se tramita como sigue: interpuesto el recurso, el juez o autoridad que tramita el juicio de amparo, dicta un acuerdo en que tiene por interpuesto el recurso y ordena remitir el expediente, o las constancia

---

<sup>71</sup> Artículos 97 a 99 de la Ley de Amparo.



necesarias, con el recurso y una copia del mismo, a la Suprema Corte o al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, para lo cual deben considerarse un día para el acuerdo y otro para la notificación; llegado el expediente al tribunal que debe substanciar el recurso, su Presidente califica la procedencia y, en caso de admitirlo, notifica al Ministerio Público para efectos de su pedimento, requiriéndose un día para el acuerdo y uno más para la notificación; dentro del término de cinco días se turna el asunto al magistrado ponente, o diez días en caso de turno al ministro relator, quienes deben formular proyecto, en treinta días el ministro, para que en diez días más se resuelva por el Pleno o la Sala de la Suprema Corte, en tanto que en los Tribunales Colegiados de Circuito, en el plazo de quince días posteriores al turno al magistrado ponente se debe dictar la resolución.

En todos los casos deben agregarse los días que dilaten las comunicaciones entre los órganos que intervienen si no radican en el mismo lugar.

De lo anterior se desprende que la diferencia de trámite no constituye un criterio suficientemente trascendente para diferenciar los recursos de queja y de revisión; el único caso en el cual la queja efectivamente se tramita en un tiempo mucho menor que la revisión lo constituye la queja contra las determinaciones sobre suspensión provisional, en cuyo caso el trámite debiera completarse en cuatro días hábiles; sin embargo, la objeción en este caso puede superarse estableciendo plazos específicos para la revisión que permitan en estas circunstancias, la pronta resolución del recurso, pues de todas formas quien dicta la resolución es el mismo órgano

superior (Suprema Corte o Tribunal Colegiado), sin que ello afecte la integridad del sistema propuesto.

Por lo antes expuesto, propongo que se reestructure el sistema de recursos de la Ley de Amparo en los siguientes aspectos:

1. Eliminar la queja como recurso autónomo.

2. Los casos actualmente previstos como supuesto de procedencia de la queja, en que se recurren determinaciones de los Tribunales Unitarios de Circuito, de los Jueces de Distrito o de la autoridad que conoce del juicio conforme al artículo 37 de la Ley de Amparo, deben incluirse dentro de los casos de procedencia del recurso de revisión.

3. Los casos previstos actualmente como hipótesis de procedencia del recurso de queja, en que se recurren actos de autoridades responsables, deberán trasladarse al capítulo dedicado a los problemas de incumplimiento o desobediencia de las determinaciones dictadas en los juicios de amparo.

4. Eliminar el recurso de inconformidad y sustituirlo por la revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, generalizando la procedencia de la revisión contra todas las resoluciones interlocutorias que se pronuncien en un juicio de amparo.

5. Establecer el "incidente de desobediencia" como figura procesal autónoma, para determinar si una autoridad, distinta a la que tramita el juicio

de amparo, incurre en exceso, defecto o incumplimiento de una determinación dictada en un juicio de amparo, o no, debiéndose incluir en el mismo los problemas de repetición de acto reclamado; contra la determinación que resuelva dicho incidente procederá la revisión, por tratarse de una interlocutoria.

6. Implementar un sistema de sanciones progresivas a la desobediencia: una primera multa de diez a quinientos días de salario; una segunda multa de quinientos a mil días de salario y, finalmente, la sanción máxima sería la separación del cargo y la inhabilitación por uno a diez años, para ocupar cualquier empleo, cargo o comisión públicos, seguidas de la consignación ante el Juez de Distrito para ser juzgado por desobediencia.

7. Establecer que las multas serán pagadas del patrimonio del servidor público sancionado y prohibir que se apliquen a ellas recursos públicos. (**Germán Eduardo Baltazar Robles, Tomo I, páginas 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 78 y 79**)

---

Concomitentemente con lo anterior, es preciso conceder al quejoso un recurso o medio de defensa contra la determinación del Juez de desechar de plano el incidente de suspensión solicitado, la cual por economía procesal deberá determinarse en el auto que admite la demanda, como en el supuesto previsto en la ley para el caso de la procedencia de la suspensión oficiosa, prevista en el artículo 123 de la Ley de Amparo; para tal efecto se propone adicionar el artículo 95, fracción XI, de la Ley de

Amparo, con el objeto de que el agraviado cuente con un recurso pronto y expedito que solucione la ilegalidad cometida.

Reforma planteada.

1. Sin formar incidente en el mismo auto en donde se admita la demanda de amparo desechar de plano el incidente de suspensión cuando éste sea notoriamente improcedente.

2. Conceder al quejoso un medio de impugnación contra dicha determinación, a saber el recurso de queja contenido en el artículo 95, fracción XI de la Ley de Amparo. **(Martín Ángel Rubio Padilla, Tomo I, páginas 188 y 189)**

---

Por idénticas razones a las que expongo en el punto anterior, considero necesario se adicione la fracción XI del artículo 95 de la Ley de Amparo, para quedar así: "El recurso de queja es procedente : ... XI. Contra las resoluciones de un juez de Distrito o del superior del Tribunal responsable, en su caso, en que concedan o nieguen la suspensión provisional, aun cuando sólo se reclame el monto de la garantía fijada"

En la inteligencia que sobre el tema que comento igualmente existe la jurisprudencia 527 del tomo VI del Apéndice 1917-1995, de La voz "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. EL RECURSO DE QUEJA ES PROCEDENTE CONTRA LA DETERMINACIÓN QUE ESTABLECE LOS REQUISITOS PARA QUE SURTA EFECTOS". **(Jorge Figueroa Cacho, Tomo I, página 407)**

---

**Artículo 95. El recurso de queja es procedente:**

**I.-** Contra las autoridades responsables, en los casos a que se refiere el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Federal, por exceso o defecto en la ejecución del auto en que se haya concedido al quejoso la suspensión provisional o definitiva del acto reclamado;

**II.-** Contra las mismas autoridades, por falta de cumplimiento del auto en que se haya concedido al quejoso su libertad bajo caución conforme al artículo 136 de esta ley;

**III.** Contra las mismas autoridades, por exceso o defecto en la ejecución de la sentencia dictada en los casos a que se refiere el artículo 107, fracciones VII y IX, de la Constitución Federal, en que se haya concedido al quejoso el amparo;

**IV.** Contra las resoluciones definitivas que se dicten en el incidente de reclamación de daños y perjuicios a que se refiere el artículo 129 de esta ley, siempre que el importe de aquéllas exceda de treinta días de salario;

**V.** Contra actos de las autoridades responsables, en los casos de la competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito, en amparo directo, por exceso o defecto en la ejecución de la sentencia en que se haya concedido el amparo al quejoso;

## ADICIÓN DE UN ARTÍCULO 95 bis

Artículo 95 bis. Cuando el Tribunal advierta que en lugar de la queja procede un diverso medio de impugnación, de oficio adoptará las medidas pertinentes para tramitar el que legalmente corresponda. **(Sergio Pallares y Lara, Tomo I, páginas 512 y 513)**

---

Art. 95 bis.- Las salas unitarias de los tribunales colegiados de circuito sólo conocerá del recurso de queja interpuesto conforme a las fracciones I y IX del artículo 95, cuando hayan dictado la sentencia cuya ejecución excesiva o defectuosa se impugne. **(Juan Manuel Arredondo Elías, Tomo I, página 680)**

---

En nuestro país, el juicio de amparo constituye la institución jurídica protectora de las garantías individuales de los gobernados frente al poder público, y es el medio por el cual es factible combatir la inconstitucionalidad de cualquier acto que emita una autoridad con independencia de su rango o jerarquía.

Por su importancia debe ser accesible a todo gobernado, por lo cual los mecanismos para lograr su eficacia deben ser lo suficientemente precisos y definidos de manera que no se presten a confusiones y permitan que el gobernado pueda lograr el objetivo que se propuso al haber acudido ante los órganos jurisdiccionales para solicitar la protección de la Justicia Federal, desde luego sin apartarse de los aspectos técnicos que

deben ser siempre observados en toda gestión ante un tribunal, porque siendo el derecho una ciencia, debe contener una metodología para su aplicación, y así se ha conceptualizado en razón a la actividad intelectual que tiene por objeto el conocimiento racional y sistemático de los fenómenos jurídicos. Sin embargo, no debe olvidarse que si el juicio de amparo tiene como objetivo el garantizar un estado de derecho justo, las normas que lo regulan deben tener una vigencia real que más allá de formulismos, permitan que se cumpla cabalmente su finalidad cuando se demande la protección de la justicia federal.

Si bien se parte de la base de que los juzgadores tienen el propósito de sujetarse al estricto cumplimiento de sus deberes de impartición de justicia, también lo es que cuando quienes resienten la aplicación de la ley y se estiman afectados indebidamente por una decisión, deben tener la posibilidad de solicitar la reparación de los agravios que sostengan haber resentido por las decisiones de las autoridades jurisdiccionales, por lo que es preciso contar con medios para tal efecto, los cuales debe establecer el legislador como recursos, ello a fin de que el gobernado tenga el máximo de seguridad de la certeza de los fallos de los órganos impartidores de justicia, pues en todo proceso existe un principio general de impugnación, o sea, que las partes tengan los medios para combatir las resoluciones de los tribunales cuando éstas no resultan apegadas a derecho.

Esto es, por recurso debe entenderse el medio de impugnación que se interpone contra una resolución judicial pronunciada en un proceso ya iniciado, generalmente ante un juez o tribunal de mayor jerarquía y de

manera excepcional ante el mismo juzgador, con el objeto de que dicha resolución sea revocada, modificada o anulada.

La existencia de recursos viene a constituir una de las garantías más importantes dentro de un sistema jurídico para lograr la plena legalidad de las determinaciones judiciales, pues la sociedad reclama un sistema de justicia que permita de manera plena y eficaz el ejercicio de las garantías que establecen las leyes, apoyado en la garantía que establece el artículo 17 de la Constitución Federal.

Tratándose del amparo indirecto el legislador ha establecido como recursos procedentes, los de revisión, queja y reclamación, conforme al artículo 82 de la Ley de Amparo.

Para efectos de esta ponencia me permito citar como punto de referencia el axioma que establece: "EADEM RATIO EADEN DISPOSITIO", el cual consiste en que cuando existan situaciones similares derivadas de una misma razón generadora, debe aplicarse una misma disposición para tomar la resolución correspondiente.

Las hipótesis de procedencia del recurso de revisión en materia de amparo, se encuentran establecidas en el artículo 83 de la Ley de Amparo, y en cuanto al tema de este trabajo es de mencionarse que en la fracción I de ese precepto, se dispone lo siguiente:



“Procede el recurso de revisión: I - Contra las resoluciones de los jueces de Distrito o del superior del Tribunal responsable, en su caso, que deseche o tenga por no interpuesta una demanda de amparo.”

El conocimiento de ese recurso corresponde a los Tribunales Colegiados de Circuito de acuerdo a lo dispuesto por la fracción del artículo 85 de la misma Ley, el cual debe ser interpuesto por conducto del juez de Distrito o de la autoridad que conozca del juicio de amparo conforme a la primera parte del primer párrafo del artículo 86 del mismo ordenamiento legal, y deberá hacerse en el término de diez días, contados desde el siguiente al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recurrida, como se previene en la segunda parte de ese párrafo del mismo artículo 86.

El desechamiento de una demanda de amparo indirecto obedece a que exista una causa notoria de improcedencia, de acuerdo con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el cual señala lo siguiente:

El juez de Distrito, examinará ante todo, el escrito de demanda; y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado;

En tanto que la determinación de tener por no interpuesta una demanda de amparo indirecto, es consecuencia fundamentalmente de que en la misma, a pesar de la prevención que se formule al quejoso, no hubiere llenado los requisitos que señala el artículo 116 de la Ley de Amparo, no hubiere hecho las aclaraciones razón, de manera que si no se establece la

posibilidad de combatir el desechamiento parcial de una demanda con el recurso de revisión, el medio idóneo es el de queja conforme a la jurisprudencia número 439 derivada de la Contradicción de Tesis 26/90, publicada en la página 292 y siguiente del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, cuyo texto es el siguiente:

**QUEJA, PROCEDE ESTE RECURSO CONTRA RESOLUCIONES QUE DESECHAN PARCIALMENTE UNA DEMANDA DE GARANTIAS.** De conformidad con lo dispuesto en el artículo 95, fracción VI, de la Ley de Amparo, procede el recurso de queja contra las resoluciones que dicten los jueces de Distrito o el superior del Tribunal a quien se impute la violación, durante la tramitación del juicio de amparo o del incidente de suspensión, que no admitan expresamente el recurso de revisión conforme al artículo 83 y que, por su naturaleza trascendental y grave, puedan causar daño o perjuicio a alguna de las partes, no reparable en la sentencia definitiva. Ahora bien, en los casos en que el juez de Distrito admite sólo en parte una demanda de amparo y la desecha en cuanto a ciertos quejosos o autoridades responsables, el recurso que la parte quejosa debe interponer en contra del desechamiento parcial de esa demanda es el de queja, dado que se trata de una resolución emitida durante la tramitación del juicio de amparo que no admite el recurso de revisión, puesto que una correcta interpretación de la fracción I del artículo 83 de la Ley citada, permite concluir que dicho recurso procede únicamente contra las resoluciones que desechan la demanda de amparo en su totalidad y las que dan por concluido el juicio de garantías. A esa conclusión se llega, tomando en cuenta, además, que todos los casos en que procede el recurso de revisión,

se refieren a resoluciones que dan por terminado el juicio de amparo o el incidente de suspensión, de lo que se deriva, si se atiende al sistema de tramitación de los recursos de queja y de revisión, dados los términos en que se encuentran redactados los artículos 83, 89, 95, 98 y 99 de la Ley de Amparo, que el recurso que se interponga contra las resoluciones emitidas durante la tramitación del juicio de amparo o del incidente de suspensión fuera rápido y sencillo, dejando abierta la opción de suspender el procedimiento en determinados casos, como dispone el artículo 101. Esto no sucede con el recurso de revisión cuya substanciación es más compleja y, por lo mismo, implica mayor dilación. Como en el supuesto de que se trata, se debe seguir actuando dentro del expediente, por cuanto se refiere a la parte de la demanda que fue admitida, y toda vez que el recurso de revisión no prevé la suspensión del procedimiento de este caso, el recurso procedente debe ser el de queja.

También suele suceder que el quejoso presente una demanda de amparo en la que solicite la suspensión de oficio de los actos reclamados, en los casos previstos por el artículo 17, en relación con el 123, ambos de la Ley de Amparo, y el juez declare su incompetencia legal para conocer de la misma omitiendo proveer sobre la suspensión de oficio solicitada, a pesar de que en observancia a lo dispuesto por el artículo 54 de la referida ley, debe pronunciarse respecto de la suspensión sin perjuicio que, desde un principio sostenga la incompetencia de plano para conocer del juicio. Sobre el particular la entonces Segunda Sala de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Jurisprudencia 5/90, ha sustentado criterio en el sentido de que es procedente el recurso de queja en términos de la fracción VI del artículo 95 de la Ley de Amparo en contra de una resolución de

incompetencia que omita proveer respecto de la suspensión de oficio, tesis la cual aparece publicada en la página 71 de la Gaceta número 35 de la Octava Epoca del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente al mes de noviembre de mil novecientos noventa, con el siguiente texto:

QUEJA, RECURSO DE. ES PROCEDENTE EN CONTRA DE UNA RESOLUCION DE INCOMPETENCIA QUE OMITA PROVEER RESPECTO DE LA SUSPENSION DE OFICIO. Cuando en una resolución el juez de Distrito se declara incompetente, sin proveer respecto de la suspensión de oficio, los efectos de ese acto irregular equivalen a una negativa y esa resolución es recurrible mediante el recurso de queja, en términos del artículo 95, fracción VI, de la Ley de Amparo, pues se trata de una resolución irregular que tiene un claro efecto positivo e influencia dentro del proceso.”

Habiéndose tomado como premisa fundamental la de que cuando se combate una resolución de incompetencia que hubiese omitido proveer sobre la suspensión de oficio solicitada, se estaba cuestionando una resolución irregular, teniendo la misma un claro efecto positivo e influencia dentro del proceso, equivalente a una negativa de la suspensión.

Se estima conveniente referir lo correspondiente al recurso idóneo contra la negativa o concesión de la suspensión de oficio de los actos reclamados, pues en la legislación vigente no se encuentra establecida de manera precisa el medio de impugnación que procede en esos supuestos ya que en ninguna de las hipótesis de los artículos 83 y 95 de la Ley de Amparo relativas a los recursos de revisión y de queja,

respectivamente, se señalan, pues a virtud de la iniciativa presidencial de quince de noviembre de mil novecientos ochenta y cinco, se estableció el inciso b) de la fracción II del artículo 83 de la Ley de Amparo para determinar la procedencia del recurso de revisión contra las resoluciones de los jueces de Distrito o del Superior del tribunal responsable, en su caso, en las cuales concedieran o negaran la suspensión de oficio; pero ahora esa disposición ya no aparece en vigor. Sin embargo, del párrafo tercero del artículo 89 de la Ley de Amparo cuyo texto es el siguiente:

"Tratándose del auto en que se haya concedido o negado la suspensión de plano, interpuesta la revisión, sólo deberá remitirse al Tribunal Colegiado de Circuito copia certificada del escrito de demanda, del auto recurrido, de sus notificaciones y del escrito u oficio en que se haya interpuesto el recurso de revisión, con expresión de la fecha y hora del recibo.",

De lo que se infiere la procedencia del recurso de revisión contra tales determinaciones, por ello al margen de lo cuestionable sobre la instauración de recursos por analogía, lo cierto es que buscando un medio de reparación, es factible ubicarlo dentro de la hipótesis que señala el inciso a) de la fracción II del artículo 83 de la Ley de Amparo que establece la procedencia de la revisión contra las resoluciones que nieguen o concedan la suspensión definitiva de los actos reclamados; lo anterior sólo para los efectos de señalar todos los supuestos que abarcan la propuesta que se contiene en este estudio.

En suma, de lo anterior se puede establecer que contra las resoluciones que desechen o tengan por no interpuesta una demanda de amparo indirecto procede el recurso de revisión; contra el desechamiento parcial de una demanda de amparo indirecto procede el recurso de queja; contra el acuerdo en que se hubiere declarado la incompetencia legal para conocer de una demanda de amparo indirecto omitiendo proveer sobre la suspensión de oficio de los actos reclamados procede el recurso de queja; contra los autos que admitan demandas notoriamente improcedentes procede el recurso de queja, y; contra el acuerdo que niega o concede la suspensión de oficio de los actos reclamados procede el recurso de revisión.

Lo anterior permite formular el siguiente planteamiento: primero, la necesidad de establecer la procedencia de un recurso de la misma naturaleza contra los proveídos del juez de Distrito o el superior del Tribunal responsable que desechen o que tengan por no interpuesta una demanda de amparo indirecto, contra los que la desechan parcialmente contra los que declaren la incompetencia de plano para conocer de una demanda en cuanto omitieron proveer respecto a la suspensión de oficio de los actos reclamados, contra los acuerdos que nieguen o concedan a suspensión de plano de los actos reclamados, y contra los acuerdos que las admitan cuando alguna de las partes estime que era notoriamente improcedente, y; segundo, definido lo anterior, señalar el mecanismo eficaz para que el Tribunal Colegiado de Circuito, a quien corresponde conocer del recurso, por razón de jerarquía, resuelva con la prontitud el medio de defensa interpuesto en esos supuestos.

Para sustentar la propuesta a fin de definir lo anterior, es conveniente mencionar que en la iniciativa del Presidente de la República de fecha dieciocho de noviembre de mil novecientos noventa y tres para modificar diversas disposiciones de la Ley de Amparo, entre ellas las relativas al recurso de queja, propuso la adición del artículo 95 de la Ley de Amparo, con la fracción XI, para establecer la procedencia de ese recurso contra las resoluciones de los jueces de Distrito o del superior del Tribunal responsable en su caso, que concedan o nieguen la suspensión provisional de los actos reclamados. Se expuso como razones para ello, que debido, por una parte, al enorme recargo de labores de los jueces de Distrito, y, por otra parte, al plazo tan breve en el cual deban resolver sobre la medida de urgencia regulado por el artículo 130 de la Ley de Amparo, resultaba necesario que las partes tengan la posibilidad de acudir ante los Tribunales Colegiados para que éstos puedan corregir los errores en que incurran los juzgados de primer grado.

Así, estimo que la solución al planteamiento formulado es lo siguiente:

a). - En primer término, partiendo del principio de seguridad jurídica de los gobernados, que se establezca la procedencia de un solo recurso en contra de los acuerdos que desechen en su integridad o en parte una demanda de amparo indirecto, la tengan por no interpuesta, declaren la incompetencia de plano sin proveer sobre la suspensión de oficio de los actos reclamados, nieguen o concedan la suspensión de oficio de los actos reclamados, así como contra los acuerdos que las admitan y que alguna de las partes considere que era notoriamente improcedente, pues si se está tratando en todos esos supuestos de lo referente al proveído inicial que debe recaer a la promoción de una demanda de amparo, tendría mayor

seguridad jurídica el quejoso o el inconforme contra el proveído relativo, al disponer de un solo medio de reparación, que debe ser el de queja y no una diversidad de recursos con tramitaciones diferentes; y

b).- Que tal hipótesis de procedencia del recurso de queja se ubique dentro del supuesto que ha establecido de manera sumarásima el legislador en la fracción XI del artículo 95 de la Ley de Amparo, primero porque suele suceder en la práctica que una demanda es desechada total o parcialmente por notoria improcedencia o tenida por no interpuesta, y el quejoso hubiera solicitado la suspensión provisional del acto reclamado correspondiente, y no será hasta que se tramite y resuelve el recurso de revisión, y en caso de que se determine que indebidamente fue desechada total o parcialmente la demanda o tenida por no interpuesta, cuando la autoridad en caso de que la admita, provea sobre la suspensión provisional del acto reclamado, para lo cual transcurrió un período en el cual bien pudo ejecutarse el acto reclamado de manera irreparable para el quejoso; o que el órgano jurisdiccional se haya declarado incompetente de plano para conocer de la misma sin proveer sobre la suspensión de oficio de los actos reclamados, pues no será hasta que se avoque al conocimiento la autoridad a quien se declinó la competencia o se resuelva el conflicto correspondiente, cuando se subsane la omisión, ya que tratándose de competencia los particulares no pueden tener participación porque es un aspecto que corresponde sólo a los órganos jurisdiccionales, como se advierte de la jurisprudencia 35/97 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo título es el siguiente: "INCOMPETENCIA POR DECLINATORIA DICTADA EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, NO ES RECURRIBLE EN REVISIÓN", y segundo, porque partiendo de las



mismas razones que se invocaron en la exposición de motivos de la iniciativa presidencial para instituir la hipótesis de la fracción XI del artículo 95 de la Ley de Amparo, se establezca el mismo mecanismo que ha resultado lo suficientemente ágil y que es el contenido en el último párrafo del artículo 99 de la misma Ley, que permite que a la brevedad un Tribunal Colegiado ante la inconformidad de alguna de las partes cuando se dé alguno de los referidos supuestos pueda corregir las irregularidades en que hubiere incurrido la autoridad que conoció de la demanda de amparo, pues también suele suceder que al haberse admitido una demanda notoriamente improcedente y concedido la suspensión provisional de los actos reclamados, ésta surta sus efectos de manera ilegal en perjuicio de la parte tercera perjudicada o de la sociedad.

Por último, es de advertirse que si en la jurisprudencia 10/92 de la entonces Segunda Sala de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación publicada en la página 346 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, con el siguiente texto:

**SUSPENSIÓN PROVISIONAL. EL RECURSO DE QUEJA ES PROCEDENTE CONTRA LA DETERMINACIÓN QUE ESTABLECE LOS REQUISITOS PARA QUE SURTA EFECTOS.** El artículo 95, fracción XI, de la Ley de Amparo, que establece la procedencia del recurso de queja en contra de las resoluciones pronunciadas por los jueces de Distrito en las que concedan la suspensión provisional, debe entenderse en el sentido de que comprende a los acuerdos que tengan relación con esa medida cautelar, por lo que también abarca las condiciones que se fijen al quejoso para que aquélla surta efectos, toda vez que tales premisas no pueden

desvincularse la una de la otra, pues su coexistencia se da al formar parte del mismo acto en que se concede la suspensión de los actos reclamados; por tanto, es procedente el recurso de queja cuando sólo se impugnen las condiciones fijadas para que la suspensión surta sus efectos.

Se ha establecido la procedencia del recurso de queja en términos del artículo 95, fracción XI, de la Ley de Amparo, contra la determinación que establece los requisitos para que surta efectos la suspensión provisional de los actos reclamados, pues en efecto si la existencia de esa hipótesis obedeció a la necesidad de que el quejoso cuente con un medio de defensa contra las resoluciones que concedan la suspensión provisional de los actos reclamados, entonces los requisitos de efectividad de la medida cautelar forman parte del proveído concesorio y quien esté inconforme con los mismos debe tener a su alcance ese medio de impugnación para cuestionarlos; entonces es conveniente por razones de seguridad jurídica de las partes en el juicio, que ese supuesto se fije en la Ley de la Materia.

Lo anterior constituye un medio para lograr una mejor eficacia en la impartición de la justicia, por la unidad en la existencia de recursos y rapidez en la solución de los mismos, a fin de lograr ese estado de derecho que la sociedad demanda al tener a su alcance una eficiente solución a los problemas jurídicos que resultan en la tramitación de los juicios de amparo, cuya institución constituye la protección y salvaguarda de los derechos de los gobernados frente al poder público a efecto de evitar la afectación de manera arbitraria de sus garantías individuales y que se corrijan oportunamente las decisiones incorrectas de los órganos a quienes se encomienda el trámite y solución de los juicios de amparo indirectos.

Por tanto, se propone por una parte derogar la fracción 1 del artículo 83 de la Ley de Amparo, y por otra adicionar la fracción XI del artículo 95 de la Ley de Amparo, para quedar en los términos siguientes:

ART. 95.- El recurso de queja es procedente:

...XI.- Contra las resoluciones de un juez de Distrito o del superior del Tribunal responsable, en su caso, en que admitan o desechen total o parcialmente una demanda de amparo o la tengan por no interpuesta; en aquéllas que concedan o nieguen la suspensión provisional o de oficio de los actos reclamados, y en caso de que decreten esa medida cuando se impugnen las condiciones fijadas para que surta sus efectos, y cuando la autoridad a quien corresponda conocer de la demanda de amparo se declare incompetente de plano para conocer de la misma sin proveer sobre la suspensión de oficio de los actos reclamados. **(Arturo Hernández Torres, Tomo II, páginas 731 a 744)**

---

El recurso de queja es un cajón de sastre, por cuanto que procede contra gran diversidad de hipótesis, algunas de las cuales no deben tramitarse como queja, sino como incidente, pues su lugar esta dentro del capítulo de ejecución de las sentencias, en este caso están las fracciones II, III, IV y IX, que se refieren al cumplimiento o ejecución de los autos de suspensión, de libertad y a las sentencias dictadas por los jueces de Distrito y por los Colegiados.

La fracción I establece el recurso de queja contra la admisión de demandas improcedentes y como dije, el auto que desecha la demanda también debe ser recurrible en queja, ya que ambos acuerdos: admitir o rechazar la demanda, de hecho implican el mismo esfuerzo, se refieren al mismo objeto, por lo que la lógica dice que el acuerdo que niega la admisión de la demanda debe ser reclamado en el recurso de queja, como se dijo arriba; en este caso repito, debiera ser, como lo es la hipótesis de la fracción XI, una queja de 24 horas, por lo que si por una parte deben suprimirse del artículo 95, las fracciones II, III, IV y IX, deberá agregarse una fracción XII, para comprender a los autos en que se niega la admisión de la demanda, cuya resolución debe hacerse en 48 horas, siguiendo en este caso el trámite a que se refiere la fracción XI mencionada.

Las demás fracciones deben redactarse mejor para que tengan más claridad y sean mejor comprendidas, por ejemplo en la VIII su redacción podría ser la siguiente: "Contra los acuerdos que dicten las autoridades responsables en el juicio de amparo directo, en la suspensión: la nieguen, o la concedan; fijen fianzas excesivas o deficientes y cualesquiera otras resoluciones en esta materia". Las fracciones II, III, IV y IX deben cambiar de ubicación, como ya dije, lo mismo debe hacerse del artículo 96 y de las fracciones I y III del 97.

Los artículos 98 a 102, 97, fracciones I y IV deben recibir una mejor ordenación para evitar dificultades de interpretación. **(Jesús A. Arroyo Moreno, Tomo II, páginas 1081 a 1083)**

Artículo 95, sugiero se agregue una fracción que diga:

“Contra las resoluciones en que los Jueces de Distrito o los Magistrados del Tribunal Colegiado impusieran alguna multa al litigantes o a su abogado”.

“La Queja contra la resolución de Juez de Distrito será resuelta por el Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente y de la Queja que se interponga contra resolución de éste, conocerá la Sala de la misma materia de la Suprema Corte de Justicia”.

En esta forma no quedará el sancionado en estado de indefensión y a través del recurso podrá demostrar la buena fe con la que procedió y no ser acreedor a la multa impuesta. **(Félix Galindo D. B., Tomo II, páginas 1369 y 1370)**

---

Texto con modificación

Artículo 95. El recurso de queja es procedente:

XI Contra las resoluciones de un juez de Distrito o del superior del tribunal responsable, en su caso, en que se deseche demandas de amparo notoriamente improcedentes, o las tengan por no interpuesta, o admitan demandas notoriamente improcedentes o aquellas que concedan o nieguen la suspensión provisional o la de oficio. **(María Simona Ramos Ruvalcaba, Tomo II, páginas 1425 y 1426)**

---

Este medio de impugnación está regulado de los artículos 95 a 102 de la Ley de Amparo, los que en términos generales tienen una redacción compleja, poco clara y en algunos casos contradictoria; además de que varios sus supuestos de procedencia no corresponden a un recurso sino a un incidente de ejecución de sentencia.

a) En efecto las fracciones II, III, IV, VIII y IX del artículo 95 citado establecen la procedencia del recurso de queja en tratándose de defectos en la ejecución de la sentencia o de la suspensión, por haber cumplido de más o por haber cumplido de menos. Es un error remediar por medio de un recurso lo que es objeto de un procedimiento incidental, como lo es el cabal cumplimiento de la sentencia o de la suspensión. Además hay que recordar que el recurso es un medio de defensa para impugnar un acto emitido por el juez durante el procedimiento; sin embargo en la queja de las fracciones citadas, equivocadamente con el recurso se busca impugnar el acto de una de las partes en el proceso de amparo.

Por tal motivo considero que debe ser objeto del incidente de ejecución de sentencias, no sólo el incumplimiento absoluto de la sentencia de amparo, de la suspensión o la repetición del acto reclamado, sino también el defecto en que incurra la responsable al cumplir una suspensión o una sentencia.

b) Independientemente de lo expuesto, las fracciones anteriormente citadas tienen diversos errores y contradicciones. Concretamente las

fracciones II y III del artículo 95 de la Ley de Amparo, pueden ser reducidas a una sola fracción, ya que el supuesto de ambas es el cumplimiento defectuoso del auto de suspensión, ya que la libertad provisional a que se refiere la última de las fracciones citadas no es más que la suspensión contra actos privativos de la libertad.

c) Otro error que contiene el artículo 95 se encuentra en la fracción IV, la que establece la procedencia del recurso de queja por exceso o defecto en el cumplimiento de la sentencia dictada en el amparo directo o en el indirecto. En efecto la fracción IX del artículo 95 citado señala expresamente la procedencia del recurso de queja por exceso o defecto en el cumplimiento de la sentencia de amparo directo; luego entonces atendiendo al principio general de derecho que la regla específica prevalece sobre la general, se llega a la conclusión de que la fracción aplicable para la queja a que se ha hecho referencia, no es la IV, sino la IX.

Por otro lado hay que aclarar que nada obstaculizaría que ambas quejas fueran reguladas por la misma fracción del artículo 95, en el entendido de que la única diferencia sería la autoridad ante quién debería interponerse y tramitarse el recurso, pero ello se remediaría estableciendo simplemente en el artículo 98 o en el 99 de la Ley de Amparo que la queja por exceso o defecto en el cumplimiento de una sentencia de amparo indirecto o directo, deberá interponerse ante la autoridad que resolvió el amparo.

Por, lo que hace a la tramitación de ambas quejas, si bien la del amparo indirecto esta regulada en el segundo párrafo del artículo 98 de la

Ley de Amparo, la de la fracción IX lo está, en el tercer párrafo del artículo 99 de la ley en cita, y la única diferencia entre ambos párrafos radica en que en el amparo indirecto la queja se resuelve en tres días y en el directo en diez días, lo cual es irrelevante, pues se podría señalar un mismo término para ambas quejas.

d) En los supuestos de las fracciones V, VII, VIII y IX del artículo 95 de la Ley de Amparo, relativos a la procedencia del recurso en contra de: las resoluciones dictadas en las quejas por exceso o defecto en el cumplimiento del auto de suspensión o de la sentencia de amparo en el juicio indirecto de garantías, las dictadas en el incidente de reparación de daños, los acuerdos de las responsables en materia de suspensión en el amparo directo y los defectos incurridos por la responsable en el cumplimiento de las sentencias dictadas en los amparos directos; en todas esas hipótesis de acuerdo a lo dispuesto en el segundo párrafo del 99 de la Ley de Amparo, la queja debe presentarse ante el tribunal que conoció o debió conocer del recurso de revisión.

En este orden de ideas, si la queja se interpone con base en las fracciones VIII y IX del artículo 95 de la Ley de Amparo, o se trata de un amparo indirecto en el que se plantearon problemas de constitucionalidad, la queja necesariamente la deberá conocer el Pleno o las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo cual es erróneo máxime que desde hace varios años existe la idea de quitarle competencia a ese alto tribunal con el objeto de que sólo se aboque a problemas de constitucionalidad, y no pierda el tiempo en cuestiones de legalidad o incidentales al juicio de amparo. Además nada impediría que la queja la



conociera el Tribunal Colegiado, (que de hecho es lo que sucede), y en todo caso si el quejoso no esté de acuerdo con la resolución que en su caso dictará el tribunal colegiado, se podría pensar que el expediente se mandará a la Corte para los efectos de la fracción XVI del artículo 107 constitucional, pues finalmente el cumplimiento defectuoso es un incumplimiento.

Por otro lado esta queja en tratándose de amparo directo, sólo procedería si en la demanda se hubieren planteado problemas de constitucionalidad, o en la sentencia se hubiere dado la interpretación directa de un precepto constitucional, pues sólo en esos casos procedería el recurso de revisión ante las Salas o ante el Pleno de la H. Corte, por lo que de no darse el supuesto referido, la queja sería improcedente de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 99 citado, por lo que pienso que debe corregirse esta situación.

e) En relación a la queja en contra de las resoluciones dictadas por los jueces de distrito en el incidente de cumplimiento sustituto de la sentencia de amparo, prevista en la fracción X del artículo 95 tantas veces invocado, hay que aclarar que el cumplimiento sustituto también procede en el amparo directo, ya que el último párrafo del artículo 106 relativo a la ejecución de sentencias en amparo directo remite a lo dispuesto en el artículo 105, que se refiere al cumplimiento de las sentencias en amparo indirecto, y en el último párrafo se prevé el cumplimiento sustituto de las sentencias.

En este orden de ideas habría que indicar que la queja citada también procedería en contra de las resoluciones dictadas en el incidente de

cumplimiento sustituto de las sentencias de amparo directo, máxime que así se desprende del segundo párrafo de la fracción XVI del artículo 107 constitucional. **(Jorge Antonio Galindo Monroy, Tomo III, páginas 1647 a 1651)**

---

XI.- Contra resoluciones de un Juez de Distrito que conceda o niegue la suspensión provisional. **(David Ancira Martínez, Tomo III, página 1919)**

---

Existen diferentes interpretaciones y resoluciones contradictorias que se presentan respecto del término para interponer el recurso de queja a que se refiere la fracción XI del artículo 95 de la Ley de Amparo, toda vez que por una parte la fracción IV del artículo 97 del mismo ordenamiento señala que el término para su interposición será de 24 horas siguientes a la fecha en que surta sus efectos la notificación de la resolución recurrida, mientras que el último párrafo del artículo 99 establece que la queja deberá interponerse ante el Juez de Distrito dentro del término de 24 horas contadas a partir del día siguiente a la fecha en que para la parte recurrente surta efectos la notificación que conceda o niegue la suspensión provisional, por lo que en esta última hipótesis el plazo se amplía. Por tanto se sugiere realizar la modificación correspondiente, dada la diferencia de momentos en que surten efectos las notificaciones a las partes.

Lo anterior es así, ya que no obstante que se establece igual término para las partes, se origina una inequidad procesal en perjuicio de las

autoridades responsables, precisamente por la forma en que para ellas surten efectos las notificaciones, por lo que resulta más adecuada y equitativa la redacción que contiene el último párrafo del artículo 99 antes invocado. **(Olga Hernández Espíndola, Tomo III, páginas 2066 y 2067)**

---

**JUSTIFICACIÓN.** Ante la diversidad de medios de impugnación que se pueden presentar en la sustanciación del incidente de suspensión, principalmente en la suspensión provisional, consideramos que en contra del otorgamiento o negativa de la suspensión provisional, no debería existir ningún medio de impugnación (queja), ya que la tramitación de éste sólo dilata la sustanciación del procedimiento.

La fracción que se examina debería de ser suprimida en el entendido de que en la mayoría de los casos, por no decir todos, la suspensión definitiva es resuelta con anterioridad a la resolución del recurso de queja que se pudiera interponer o a que se engrose la sentencia. **(Luis Orlando Hernández, Tomo III, páginas 2102 y 2103)**

---

**ARTÍCULO 95.** El recurso de queja es procedente:

I. Contra los autos dictados por los Jueces de Distrito, o el magistrado del Tribunal Unitario de Circuito o por el superior del tribunal a quien se impute la violación reclamada, en que admitan demandas notoriamente improcedentes, o cuando desechen o tengan por no interpuesta una demanda o la ampliación de la misma.

II. Contra las autoridades responsables, \*(se suprime) por exceso o defecto en la ejecución del auto en que se haya concedido al quejoso la suspensión provisional o definitiva del acto reclamado;

III. Contra las mismas autoridades, por falta de cumplimiento del auto en que se haya concedido al quejoso su libertad bajo caución conforme al artículo 136 de esta ley;

IV. Contra las mismas autoridades, por exceso o defecto en la ejecución de la sentencia dictada en los \*(se suprime) amparos indirectos en que se haya concedido al quejoso la protección Federal;

V. Contra las resoluciones que dicten los Jueces de Distrito, el tribunal que conozca o haya conocido del juicio conforme al artículo 37, el Tribunal Unitario de Circuito ,o los Tribunales Colegiados de Circuito en los casos \*(se suprime) que decidan sobre la inconstitucionalidad de una ley o establezcan la interpretación directa de un precepto de la Constitución, respecto de las quejas interpuestas ante ellos conforme al artículo 98 de ésta ley, es decir, la fracción en comento se refiere al recurso de queja de queja.

VI. Contra las resoluciones que dicten los Jueces de Distrito, o el superior del tribunal a quien se impute la violación en los casos a que se refiere el artículo 37 de esta ley, durante la tramitación del juicio de amparo o del incidente de suspensión, que no admitan expresamente el recurso de revisión conforme al artículo 83 y que, por su naturaleza trascendental y

grave, puedan causar daño o perjuicio a alguna de las partes, no reparable en la sentencia definitiva; o contra las que se dicten después de fallado el juicio en primera instancia, cuando no sean reparables por las mismas autoridades o por la Suprema Corte de Justicia con arreglo a la ley;

VII. Contra las resoluciones definitivas que se dicten en el incidente de reclamación de daños y perjuicios a que se refiere el artículo 129 de esta ley, siempre que el importe de aquéllas exceda de treinta días de salario;

VIII. Contra las autoridades responsables, con relación a los juicios de amparo de la competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito, en amparo directo, cuando no provean sobre la suspensión dentro del término legal o concedan o nieguen ésta; cuando rehusen la admisión de fianzas o contrafianzas; cuando admitan las que no reúnan los requisitos legales o que puedan resultar insuficientes; cuando nieguen al quejoso su libertad caucional en el caso a que se refiere el artículo 172 de esta ley, o cuando las resoluciones que dicten las autoridades sobre la misma materia, causen daños o perjuicios notorios a alguno de los interesados;

IX. Contra actos de las autoridades responsables, en los casos de la competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito, en amparo directo, por exceso o defecto en la ejecución de la sentencia en que se haya concedido el amparo al quejoso;

X. Contra las resoluciones que pronuncien los Jueces de Distrito \*(se suprime) cuando el quejoso solicite se de por cumplida la ejecutoria mediante el pago de daños y perjuicios que éste haya sufrido.

**XI. Contra las resoluciones de un Juez de Distrito o del magistrado del Tribunal Unitario de Circuito, o del superior del tribunal responsable, en su caso, en que concedan o nieguen la suspensión provisional. (Oscar Barrera Garza, Tomo III, páginas 2205 a 2207)**

---

**II.- Por otro lado, se considera conveniente adicionar una fracción al artículo 95 contemplado en el Libro Primero, Título Primero, Capítulo XI, De los recursos, de la Ley de Amparo, ya que no se menciona la procedencia del recurso de queja en contra de aquellos autos que impongan a cualquiera de la partes una sanción, como resultado de la aplicación de alguno de los medios de apremio que la Ley considera. En este sentido, resulta de tal importancia debido a que podrían presentarse situaciones dudosas respecto de la procedencia o improcedencia del recurso de queja en contra de los autos que contemplen las mencionadas sanciones. Por lo tanto, se sugiere la siguiente redacción:**

**Artículo 95.- El recurso de queja es procedente:**

**... Fracción XII.- En contra de los autos dictados por los Jueces de Distrito en donde se hagan efectivas la medidas de apremio previstas en la Ley. (Alma Araiza Hernández, Tomo IV, páginas 2299 y 2300).**

---

**Artículo 95.- ...**

Fracción II.- Contra las autoridades responsables, en los casos a que se refiere el artículo 107, fracción VII de la Constitución Federal, por exceso o defecto en la ejecución del auto en que se haya decretado la suspensión de plano, o concedido al quejoso la suspensión provisional o definitiva del acto reclamado.

...

Fracción IV Bis.- Contra el Juez de Distrito, por exceso en la ejecución de la sentencia. **(Jerónimo Eulogio Quiroz Gutiérrez, Tomo V, página 43)**

---

De ahí que deba reformarse el artículo 95 fracción VI, adicionando una última parte, para quedar como sigue:

"Art. 95.- ....

VI.- ...

Se exceptúan de lo anterior, aquellos acuerdos que desechen pruebas, ya sea en el cuaderno principal o en el incidente de suspensión del acto reclamado."

También deberá adicionarse una última parte a la fracción IV del Artículo 83, para quedar como sigue:

" ... Al recurrirse tales sentencias, deberán, en su caso, impugnarse los acuerdos pronunciados en la citada audiencia y aquellos que hayan desechado pruebas durante la tramitación del procedimiento". **(Gustavo Aquiles Gasca, Tomo V, página 242)**

---

Se considera importante reformar este precepto jurídico a efecto de hacer más viable la procedencia y presentación de la queja, estableciéndose en un mismo numeral el término, ante quién y contra qué se promueve.

Asimismo, se estima conveniente establecer la adhesión a los recursos de queja y reclamación, previstos respectivamente en los artículos 95 y 103 de la Ley de Amparo, a fin de que siguiendo el mismo criterio de la revisión adhesiva, se otorgue oportunidad a la parte que obtuvo resolución favorable a sus intereses, la posibilidad de formular agravios que permitan robustecer el criterio recurrido, cuya adhesión seguirá la suerte procesal del recurso, con lo que se estaría observando cabalmente el principio de equidad procesal y salvaguardando los derechos de las partes.

#### Reforma

ARTICULO 95.-El recurso de queja es procedente:

I.- Contra los autos dictados por los Jueces de Distrito o por el superior del tribunal a quien se impute la violación reclamada, en que admitan demandas notoriamente improcedentes:

Se interpondrá dentro de los cinco días siguientes al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recurrida; por escrito directamente



ante el Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, acompañando una copia para cada una de las autoridades contra quienes se promueva.

Dada entrada al recurso, se requerirá a la autoridad contra la que se haya interpuesto para que rinda informe con justificación sobre la materia de la queja, dentro del término de tres días. Transcurrido éste, con informe o sin él, se dará vista al Ministerio Público por igual término, y dentro de los tres días siguientes se dictará la resolución que proceda.

Tratándose del término para que el Tribunal colegiado de Circuito dicte la resolución que corresponda, el cual será de diez días.

II.- Contra las autoridades responsables, en los casos a que se refiere el artículo 107, fracción VII de la Constitución Federal, por exceso o defecto en la ejecución del auto en que se haya concedido al quejoso la suspensión provisional o definitiva del acto reclamado;

Podrá interponerse el recurso de queja en el presente caso, en cualquier tiempo, mientras se falle el juicio de amparo en lo principal, por resolución firme.

La queja deberá interponerse por escrito ante el Juez de Distrito o autoridad que conozca o haya conocido del juicio de amparo en los términos del artículo 37, o ante el Tribunal Colegiado de Circuito si se trata del caso de la fracción IX del artículo 107 de la Constitución Federal, precisamente por escrito, acompañando una copia para cada una de las autoridades

responsables contra quienes se promueva y para cada una de las partes en el mismo juicio de amparo.

Dada entrada al recurso, se requerirá a la autoridad contra la que se haya interpuesto para que rinda informe con justificación sobre la materia de la queja, dentro del término de tres días. Transcurrido, éste con informe o sin él , se dará vista al Ministerio Público por igual término, y dentro de los tres días siguientes se dictará la resolución que proceda.

Tratándose de Tribunal Colegiado de Circuito el término será de diez días para que dicte la resolución que corresponda.

III.- Contra las mismas autoridades, por falta de cumplimiento del autor en que se haya concedido al quejoso su libertad bajo caución conforme al artículo 136 de esta ley;

Podrá interponerse en cualquier tiempo, mientras se falle el juicio de amparo en lo principal, por resolución firme, la queja deberá interponerse ante el juez de Distrito o autoridad que conozca o haya conocido del juicio de amparo en los términos del artículo 37, o ante el Tribunal Colegiado de Circuito si se trata del caso de la fracción IX del artículo 107 de la Constitución Federal, precisamente por escrito acompañando una copia para cada una de las autoridades responsables contra quienes se promueva y para cada una de las partes en el mismo juicio de amparo.

Dada entrada al recurso, se requerirá a la autoridad contra la que se haya interpuesto para que rinda informe con justificación sobre la materia de

la queja, dentro del término de tres días. Transcurrido éste, con informe o sin él, se dará vista al Ministerio Público por igual término, y dentro de los tres días siguientes se dictará la resolución que proceda.

Tratándose de Tribunal Colegiado de Circuito el término será de diez días para que dicte la resolución que corresponda.

IV.- Contra las mismas autoridades, por exceso o defecto en la ejecución de la sentencia dictada en los casos a que se refiere el artículo 107, fracción VII y IX, de la Constitución Federal, en que se haya concedido al quejoso el amparo;

Podrá interponerse dentro de un año, contando desde el día siguiente al en que se notifique al quejoso el auto en que se haya mandado cumplir la sentencia, o al en que la persona extraña a quien afecte su ejecución tenga conocimiento de ésta; salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal, deportación, destierro o de alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, en que la queja podrá interponerse en cualquier tiempo. La queja deberá interponerse en cualquier tiempo. La queja deberá interponerse ante el juez de Distrito o autoridad que conozca o haya conocido del juicio de amparo en los términos del artículo 37, o ante el Tribunal Colegiado de Circuito si se trata del caso de la fracción IX del artículo 107 de la Constitución Federal, precisamente por escrito, acompañando una copia para cada una de las autoridades responsables contra quienes se promueva y para cada una de las partes en el mismo juicio de amparo.

Dada entrada al recurso, se requerirá a la autoridad contra la que se haya interpuesto para que rinda informe con justificación sobre la materia de la queja, dentro del término de tres días. Transcurrido éste, con informe o sin él, se dará vista al ministerio Público por igual término, y dentro de los tres días siguientes se dictará la resolución que proceda.

Tratándose de Tribunal Colegiado de Circuito el término será de diez días siguientes se dictará la resolución que proceda.

V.- Contra las resoluciones que dicten los Jueces de Distrito, el Tribunal que conozca o haya conocido del juicio conforme al artículo 378, o los Tribunales Colegiados de Circuito en los casos a que se refiere la fracción IX del artículo 107 de la Constitución }Federal, respecto de las quejas interpuestas ante ellos conforme al artículo 98;

El término para la interposición del recurso de queja será dentro de los cinco días siguientes al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recurrida; el recurso de queja se interpondrá por escrito, directamente ante el tribunal que conoció o debió conocer de la revisión, acompañando una copia para cada una de las autoridades contra quienes se promueva y para cada una de las partes en el juicio.

Dada entrada al recurso, se requerirá a la autoridad contra la que se haya interpuesto para que rinda informe con justificación sobre la materia de la queja, dentro del término de tres días. Transcurrido éste, con informe o sin él, se dará vista al Ministerio Público por igual término, y dentro de los tres días siguientes se dictará la resolución que proceda.

Tratándose de Tribunal Colegiado de Circuito el término será de diez días para que dicte la resolución que corresponda.

VI.- Contra las resoluciones que dicten los jueces de Distrito, o el Superior del Tribunal a quien se impute la violación en los casos a que se refiere el artículo 37 de esta ley, durante la tramitación del juicio de amparo o del incidente de suspensión, que no admitan expresamente el recurso de revisión conforme al artículo 83 y que, por su naturaleza trascendental y grave, puedan causar daño o perjuicio a alguna de las partes, no reparable en la sentencia definitiva; o contra las que se dicten después de fallado el juicio en primera instancia, cuando no sean reparables por las mismas autoridades o por la Suprema Corte de Justicia con arreglo a la ley.

El término para la interposición del recurso de queja será dentro de los cinco días siguientes al en que surta sus efectos notificación de la resolución recurrida, el recurso de queja se interpondrá por escrito directamente ante el Tribuna Colegiado de Circuito que corresponda, acompañando una copia para cada una de las autoridades contra quienes se promueva, y para cada una de las partes en el juicio.

Dada entrada al recurso, se requerirá a la autoridad contra la que se haya interpuesto para que rinda informe con justificación sobre la materia de la queja, dentro del término de tres días. Transcurrido éste, con informe o sin él, se dará vista al Ministerio Público por igual término, y dentro de los tres días siguientes se dictará la resolución que proceda.

Tratándose de Tribunal Colegiado de Circuito el término será de diez días para que dicta la resolución que corresponda.

La interposición del recurso de queja en el presente caso suspende el procedimiento en el juicio de amparo, en los términos del artículo 53, siempre que la resolución que se dicte en la queja deba influir en la sentencia, o cuando de resolverse el juicio en lo principal el recurrente en el acto de la audiencia, si obtuviere resolución favorable en la queja.

VII.- Contra las resoluciones definitivas que se dicten en el incidente de reclamación de daños y perjuicios a que se refiere el artículo 129 de esta ley, siempre que el importe de aquéllas exceda de treinta días de salario.

El término para la interposición del recurso de queja será dentro de los cinco días siguientes al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recurrida, el recurso de queja se interpondrá por escrito, directamente ante el tribunal que conoció o debió conocer de la revisión, acompañando una copia para cada una de las autoridades contra quienes se promueva y para cada una de las partes en el juicio.

Dada entrada al recurso, se requerirá a la autoridad contra la que se haya interpuesto para que rinda informe con justificación sobre la materia de la queja, dentro del término de tres días. Transcurrido éste, con informe o sin él, se dará vista al Ministerio Público por igual término, y dentro de los tres días siguientes se dictará la resolución que proceda.

Tratándose de tribunal Colegiado de Circuito el término será de diez días para que dicte la resolución que corresponda.

VIII.- Contra las autoridades responsables, con relación a los juicios de amparo de la competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito, en amparo directo, cuando no provean sobre la suspensión dentro del término legal o concedan o nieguen ésta; cuando rehusen la admisión de fianzas o contrafianzas; cuando admitan las que no reúnan los requisitos legales o que puedan resultar insuficientes; cuando nieguen al quejoso su libertad caucional en el caso a que se refiere el artículo 172 de esta ley, o cuando las resoluciones que dicten las autoridades sobre la misma materia, causen daños o perjuicios notorios a alguno de los interesados;

El término para la interposición del recurso de queja será dentro de los cinco días siguientes al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recurrida; el recurso de queja se interpondrá por escrito, directamente ante el tribunal que conoció o debió conocer de la revisión, acompañando una copia para cada una de las autoridades contra quienes se promueva y para cada una de las partes en el juicio.

Dada entrada al recurso, se requerirá a la autoridad contra la que se haya interpuesto para que rinda informe con justificación sobre la materia de la queja, dentro del término de tres días. Transcurrido éste, con informe o sin él, se dará vista al Ministerio Público por igual término, y dentro de los tres días siguientes se dictará la resolución que preceda.

Tratándose de Tribunal Colegiado de Circuito el término será de diez días para que dicte la resolución que corresponda.

IX.- Contra actos de las autoridades responsables, en los casos de la competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito, en amparo directo, por exceso o defecto en la ejecución de la sentencia en que se haya concedido el amparo al quejoso;

El recurso de queja podrá interponerse dentro de un año, contando desde el día siguiente al en que se notifique al quejoso el auto en que se haya mandado cumplir la sentencia, o la en que la persona extraña a quien afecte su ejecución tenga conocimiento de ésta; salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal, deportación, destierro a de alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, en que la queja podrá interponerse en cualquier tiempo.

El recurso de queja se interpondrá por escrito, directamente ante el tribunal que conoció o debió conocer de la revisión, acompañando una copia para cada una de las autoridades contra quienes se promueva y para cada un de las partes en el juicio.

Dada entrada al recurso, se requerirá a la autoridad contra la que se haya interpuesto para que rinda informe con justificación sobre la materia de la queja, dentro del término de tres días. Transcurrido éste, con informe o sin él, se dará vista al Ministerio Público por igual término, y dentro de los tres días siguientes se dictará la resolución que proceda.



Tratándose de Tribunal Colegiado de Circuito el término será de diez días para que dicte la resolución que corresponda.

X.- Contra las resoluciones que pronuncien los Jueces de Distrito en el caso previsto en la parte final del artículo 105 de este ordenamiento.

El término para la interposición del recurso de queja será dentro de los cinco días siguientes al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recurrida;

El recurso de queja se interpondrá por escrito directamente ante el Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, acompañando una copia para cada una de las autoridades contra quienes se promueva, y para cada una de las partes en el juicio.

Dada entrada al recurso, se requerirá a la autoridad contra la que se haya interpuesto para que rinda informe con justificación sobre la materia de la queja, dentro del término de tres días. Transcurrido éste, con informe o sin él, se dará vista al Ministerio Público por igual término, y dentro de los tres días siguientes se dictará la resolución que proceda.

Tratándose de Tribunal de Circuito el término será de diez días para que dicte la resolución que corresponda.

XI.- Contra las resoluciones de un juez de Distrito o del superior del Tribunal responsable, en su caso , en que concedan o nieguen la suspensión provisional.

El término para la interposición del recurso de queja será dentro de las veinticuatro horas siguientes a la en que surtas sus efectos la notificación de la resolución recurrida.

La queja deberá interponerse ante el juez de Distrito dentro del término de veinticuatro horas contadas a partir del día siguiente a la fecha en que para la parte recurrente surta efectos la notificación que conceda o niegue la suspensión provisional, acompañando una copia para cada una de las autoridades responsables contra quienes se promueva y para cada una de las partes en el mismo juicio de amparo. Los Jueces de Distrito o el superior del tribunal remitirán de inmediato los escritos en los que se formule la queja al Tribunal que deba conocer de ella, con las constancias pertinentes. Dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes el Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda resolverá de plano lo que proceda.

En los casos a que se refiere este artículo, con excepción de las fracciones II, III y IV, la contraparte del recurrente puede adherirse a la queja interpuesta, dentro del término establecido para la presentación del recurso, contado a partir de la fecha en que se le notifique la admisión del recurso, expresando los agravios correspondientes; en este caso, la adhesión al recurso sigue la suerte procesal de éste. **(Juan José Paullada Figueroa, Tomo V, páginas 259 a 270)**

**Artículo 96.** Cuando se trate de exceso o defecto en la ejecución del auto de suspensión o de la sentencia en que se haya concedido el amparo al quejoso, la queja podrá ser interpuesta por cualesquiera de las partes en el juicio o por cualquiera persona que justifique legalmente que le agravia la ejecución o cumplimiento de dichas resoluciones. En los demás casos a que se refiere el artículo anterior, sólo podrá interponer la queja cualesquiera de las partes; salvo los expresados en la fracción VII del propio artículo, en los cuales únicamente podrán interponer el recurso de queja las partes interesadas en el incidente de reclamación de daños y perjuicios, y la parte que haya propuesto la fianza o contrafianza.

### **PROPUESTAS**

**ARTÍCULO 96.** Cuando se trate de exceso o defecto en la ejecución del auto de suspensión o de la sentencia en que se haya concedido el amparo al quejoso, la queja podrá ser interpuesta por cualesquiera de las partes en el juicio o por cualquiera persona que justifique legalmente que le agravia la ejecución o cumplimiento de dichas resoluciones. En los demás casos a que se refiere el artículo anterior, sólo podrá interponer la queja cualesquiera de las partes; salvo los expresados en la fracción VII del propio artículo, en los cuales únicamente podrán interponer el recurso de queja las partes interesadas en el incidente de reclamación de daños y perjuicios, y la

parte que haya propuesto la garantía o contragarantía. (Oscar Barrera Garza, Tomo III, página 2207)

**Artículo 97. Los términos para la interposición del recurso de queja serán los siguientes:**

**I. En los casos de las fracciones II y III del artículo 95 de esta ley podrá interponerse en cualquier tiempo, mientras se falle el juicio de amparo en lo principal, por resolución firme;**

### **PROPUESTAS**

Los términos para la interposición del recurso de queja serán los siguientes:

I.- En los casos de la fracción II, del artículo 95 de esta Ley, podrá interponerse en cualquier tiempo, mientras no se falle el juicio de amparo en lo principal, por resolución firme. (David Ancira Martínez, Tomo III, página 1920)

---

**II. En los casos de las fracciones I, V, VI, VII, VIII y X del mismo artículo, dentro de los cinco días siguientes al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recurrida;**

### **PROPUESTAS**

II.- En los casos de las fracciones I, III, V, VI, VII, VIII Y IX del artículo 95 de esta Ley, podrá interponerse dentro de los cinco días

siguientes al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recurrida. (David Ancira Martínez, Tomo III, página 1920)

---

**III. En los casos de las fracciones IV y IX del propio artículo 95, podrá interponerse dentro de un año, contando desde el día siguiente al en que se notifique al quejoso el auto en que se haya mandado cumplir la sentencia, o al en que la persona extraña a quien afecte su ejecución tenga conocimiento de ésta; salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal, deportación, destierro a (sic) de alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, en que la queja podrá interponerse en cualquier tiempo.**

### **PROPUESTAS**

**NUEVAMENTE ESTÁ PRESENTE EL INTERÉS SUPERIOR DE PRESERVAR LA NORMA CONSTITUCIONAL, POR LO QUE DEBE QUEDAR VIVA LA POSIBILIDAD DE PEDIR EL CABAL CUMPLIMIENTO DEL FALLO PROTECTOR. (Fidencio Ramírez y Fidel Herrera Beltrán , Tomo II, página 1153)**

---

**IV. En el caso de la fracción XI del referido artículo 95, dentro de las veinticuatro horas siguientes a la en que surta sus efectos la notificación de la resolución recurrida.**

### **PROPUESTAS**

Artículo 97. Los términos para la interposición del recurso de queja serán los siguientes:

I. En los casos de las fracciones I y II del artículo 95 de esta ley podrá interponerse en cualquier tiempo, mientras se falle el juicio de amparo en lo principal, por resolución firme;

II. En los casos de la fracción IV del mismo artículo, dentro de los cinco días siguientes al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recurrida;

III. En los casos de las fracciones III y V del propio artículo 95, podrá interponerse dentro de un año, contando desde el día siguiente al en que se notifique al quejoso el auto en que se haya mandado cumplir la sentencia, o al en que la persona extraña a quien afecte su ejecución tenga conocimiento de ésta; salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal, deportación, destierro o de alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, en que la queja podrá interponerse en cualquier tiempo. **(Sergio Pallares y Lara, Tomo I, páginas 514 y 515)**

Mi propuesta consiste en que la actual redacción de la primera parte del último párrafo del artículo 99 de la Ley de Amparo, se corrija y no vaya a incluirse tal como ahora está en el artículo equivalente de una nueva ley de la materia.

Lo anterior lo propongo no solamente porque existe una deficiente técnica en la redacción actual de dicho precepto legal, dado que en los tres primeros párrafos del mencionado artículo 99 de la Ley de Amparo, lo que se regula es ante quién debe interponerse el recurso de queja en los diversos supuestos que prevé el artículo 95 de la citada ley, y no dentro de qué término debe hacerse dicha interposición, en virtud de que tal cuestión está expresamente regulada en el artículo 97 de la propia ley; sino además porque en la primera parte del último párrafo del artículo 99, aunado a la falta de técnica de incluir el término para la interposición del recurso de queja previsto en la fracción XI del artículo 95, que ya se encuentra expresamente señalado en el artículo 97, fracción IV, que es el precepto ad hoc para ello, el término que indebidamente en él se incluye no coincide con el señalado en la fracción IV del artículo 97.

En efecto, mientras que en este último se dispone:

“Art. 97.- Los términos para la interposición del recurso de queja, serán los siguientes: ...IV.- En el caso de la fracción XI del referido artículo 95 dentro de las veinticuatro horas siguientes a la en que surta sus efectos la notificación de la resolución recurrida”;



En cambio en la primera parte del último párrafo del artículo 99 se establece:

“...En el caso de la fracción XI, la queja deberá interponerse ante el Juez de Distrito, dentro del término de veinticuatro horas contadas a partir del día siguiente a la fecha en que para la parte recurrente surta efectos la notificación que conceda o niegue la suspensión provisional, acompañando las copias que se señalan en el artículo anterior. ...”;

Esto es, el artículo 97, fracción IV, claramente señala el término de veinticuatro horas siguientes a la en que surta efectos la notificación correspondiente, y de manera discrepante en la primera parte del último párrafo del artículo 99 se alude a un término de veinticuatro horas pero no contadas a partir de la en que surta sus efectos la notificación, sino a partir del día siguiente a la fecha en que surta efectos tal notificación, lo que constituye una antinomia que genera inseguridad jurídica para la parte recurrente, puesto que a ciencia cierta no sabrá cuál de esos dos términos deberá atender, con el riesgo de que si opta por el segundo, que es más amplio, si el Tribunal Colegiado considera que el que debe regir es el previsto en el artículo que específicamente regula los términos en esa materia, que es el 97, fracción IV, se podría desechar por extemporáneo el recurso de queja así interpuesto.

La antinomia antes destacada tiene fácil solución, suprimiendo la parte relativa al término de interposición que indebidamente se incluyó en el precepto que nos ocupa.

c) Por ello propongo que la redacción de la primera parte del último párrafo del actual artículo 99 de la Ley de Amparo, o su equivalente en la nueva ley de la materia, quede como sigue:

“... En el caso de la fracción XI, la queja deberá interponerse ante el Juez de Distrito, acompañando las copias que se señalan en el artículo anterior. ...”. (Jorge Higuera Corona, Tomo II, páginas 880 a 882)

---

DEROGAR EL TÉRMINO DE “24 HORAS” PARA QUE EN SU LUGAR DIGA:

CINCO DÍAS.

Motivos.

LO BREVÍSIMO DEL TÉRMINO FRECUENTEMENTE HACE NUGATORIO EL EJERCICIO DEL DERECHO DE INTERPONER LA QUEJA. (Fidencio Ramírez y Fidel Herrera Beltrán , Tomo II, páginas 1153 y 1154)

---

ARTÍCULO 97. Los términos para la interposición del recurso de queja serán los siguientes:

I. En los casos de las fracciones II y III del artículo 95 de esta ley podrá interponerse en cualquier tiempo, mientras se falle el juicio de amparo en lo principal, por resolución firme;

II. En los casos de las fracciones I, V, VI, VII, VIII y X del mismo artículo, dentro de los cinco días siguientes al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recurrida;

III. En los casos de las fracciones IV y IX del propio artículo 95, podrá interponerse dentro de un año, contando desde el día siguiente al en que se notifique al quejoso el auto en que se haya mandado cumplir la sentencia, o al en que la persona extraña a quien afecte su ejecución tenga conocimiento de ésta; salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal, deportación, destierro a (sic) de alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, en que la queja podrá interponerse en cualquier tiempo; y

IV. En el caso de la fracción XI del referido artículo 95, dentro de las veinticuatro horas siguientes a la en que surta sus efectos la notificación de la resolución recurrida. (**Oscar Barrera Garza, Tomo III, páginas 2207 y 2208**)

---

El Artículo 97 fracción V de la Ley de Amparo, no contempla el término para la interposición del recurso de queja a que se refiere la primera parte del Artículo 96 del propio ordenamiento legal antes citado, lo que se traduce en una laguna jurídica que provoca el estado de indefensión de la parte a la que le agravie la ejecución o cumplimiento en exceso o defecto del auto de suspensión o sentencia respectiva.

Por lo tanto, se sugiere adicionar al precepto en comento una fracción que establezca lo siguiente:

"Art. 97

...

Fracción V.- En el caso de la primera parte del artículo 96, dentro de los cinco días siguientes al de la notificación del auto que ordene tal ejecución." (**Eduardo Veraza Martínez-Cairo, Tomo IV, páginas 2361 y 2362**).

---

De igual forma se llevan a cabo practicas consuetudinarias en tratándose de la queja contra resoluciones de las comprendidas en el artículo 97 de la Ley de Amparo en relación con su artículo 101 de la misma ley de amparo, que refiere que la interposición del recurso de queja suspende el procedimiento en el juicio de amparo, que remite la fracción VI del artículo 95 del mismo dispositivo, sin duda, que causa perjuicio en tratándose de la parte obrera al no contemplar caso concreto a la subsistencia y con efectos laborales. Ya que por practica los Tribunales de amparo la queja la resuelven conjuntamente con el amparo directo correspondiente luego entonces se hace necesario contemplar de manera específica en tratándose de conflictos laborales apreciaciones a casos concretos y en conciencia sin menoscabo de la importancia de la ley de amparo.

En concreto en nuestra opinión, se hace necesario un capítulo que establezca forma, elementos, términos y conceptos procesales, dentro de la ley de amparo, pero necesariamente con un punto de vista labora. Sin duda y dada la premura ya que sus atentos oficios los recibimos físicamente el día 3 de enero del año 2000 y las propuestas son antes del 15 de Enero del mismo año pido a ustedes disculpas por lo breve de los comentarios expuestos. **(José Luis Villa Terrazas, Tomo V, páginas 303 y 304)**

**Artículo 98.** En los casos a que se refieren las fracciones II, III y IV del artículo 95, la queja deberá interponerse ante el juez de Distrito o autoridad que conozca o haya conocido del juicio de amparo en los términos del artículo 37, o ante el Tribunal Colegiado de Circuito si se trata del caso de la fracción IX del artículo 107 de la Constitución Federal, precisamente por escrito, acompañando una copia para cada una de las autoridades responsables contra quienes se promueva y para cada una de las partes en el mismo juicio de amparo.

### **PROPUESTAS**

En los casos a que se refieren las fracciones II y IV del artículo 95, la queja deberá interponerse ante el Juez de Distrito Tribunal Colegiado de Circuito si se trata del caso de la fracción IX del artículo 107 de la Constitución, por escrito, acompañando una copia para cada una de las autoridades responsables contra quien se promueva y para cada una de las partes en el juicio. (David Ancira Martínez, Tomo III, página 1920)

---

Dada entrada al recurso, se requerirá a la autoridad contra la que se haya interpuesto para que rinda informe con justificación sobre la materia de la queja, dentro del término de tres días. Transcurrido éste, con informe o sin él, se dará vista al Ministerio

**Público por igual término, y dentro de los tres días siguientes se dictará la resolución que proceda.**

### **PROPUESTAS**

Ajustar el texto a la reforma propuesta para el artículo 95, con lo que las fracciones relativas son la I, II y III; suprimiendo al final la referencia a la exhibición de copias.

Artículo 98. En los casos a que se refieren las fracciones I, II y III del artículo 95, la queja deberá interponerse ante el Juez de Distrito o autoridad que conozca o haya conocido del juicio de amparo en los términos del artículo 37, o ante el Tribunal Colegiado de Circuito si se trata del caso de la fracción IX del artículo 107 de la Constitución Federal, precisamente por escrito.

Dada entrada al recurso, se requerirá a la autoridad contra la que se haya interpuesto para que rinda informe con justificación sobre la materia de la queja, dentro del término de tres días. Transcurrido éste, con informe o sin él, se dará vista al Ministerio Público por igual término, y dentro de los tres días siguientes se dictará la resolución que proceda. **(Sergio Pallares y Lara, Tomo I, página 516)**

---

COMENTARIO: AL IGUAL QUE DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO DE AMPARO DIRECTO, EL TÉRMINO CONCEDIDO A LAS

AUTORIDADES RESPONSABLES A FIN DE RINDAN SUS INFORMES CON JUSTIFICACIÓN, RESULTAN INSUFICIENTES.

TRES DÍAS PARA LA RADICACIÓN E INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE DE QUEJA, LLEVAR A CABO EL EMPLAZAMIENTO A LOS TERCEROS PERJUDICADOS Y RENDIR SUS INFORMES JUSTIFICADOS, NO ES CONGRUENTE CON LA REALIDAD QUE VIVE HOY EN DÍA LOS TRIBUNALES DE NUESTRO PAÍS. POR ELLO, DEBE TOMARSE EN CUENTA QUE DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL DICHOS RECURSOS, ES NECESARIO AMPLIAR RAZONADAMENTE EL TÉRMINO, DE MANERA TAL QUE TANTO EL ÓRGANO REVISOR COMO EL REVISADO, ACTÚEN EN FORMA EQUILIBRADA. (José Francisco Becerril Mendoza, Tomo III, página 2048)

---

ARTÍCULO 98. En los casos a que se refieren las fracciones II, III y IV del artículo 95, la queja deberá interponerse ante el Juez de Distrito o ante el magistrado del Tribunal Unitario de Circuito o autoridad que conozca o haya conocido del juicio de amparo en los términos del artículo 37, o ante el Tribunal Colegiado de Circuito si se trata del caso de la

\*(se suprime), interpretación directa de un precepto de la constitución, o decidan sobre la inconstitucionalidad de una ley, precisamente por escrito, acompañando una copia para cada una de las autoridades responsables contra quienes se promueva y para cada una de las partes en el mismo juicio de amparo.



Dada entrada al recurso, se requerirá a la autoridad contra la que se haya interpuesto para que rinda informe con justificación sobre la materia de la queja, dentro del término de tres días. Transcurrido éste, con informe o sin él, se dará vista al Ministerio Público por igual término, y dentro de los tres días siguientes se dictará la resolución que proceda. **(Oscar Barrera Garza, Tomo III, páginas 2208 y 2209)**

**Artículo 99. En los casos de las fracciones I, VI y X del artículo 95, el recurso de queja se interpondrá por escrito directamente ante el tribunal colegiado de Circuito que corresponda, acompañando una copia para cada una de las autoridades contra quienes se promueva.**

### **PROPUESTAS**

En los casos de las fracciones I, III, VI y X del artículo 95, el recurso de queja se interpondrá por escrito directamente ante el Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, acompañando una copia para las autoridades contra quienes se promueva. (David Ancira Martínez, Tomo III, página 1921)

---

En los casos de las fracciones V, VII, VIII y IX del mismo artículo 95, el recurso de queja se interpondrá por escrito, directamente ante el tribunal que conoció o debió conocer de la revisión, acompañando una copia para cada una de las autoridades contra quienes se promueva y para cada una de las partes en el juicio.

La tramitación y resolución de la queja en los casos previstos en las fracciones I a X, se sujetará a lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo anterior, con la sola salvedad del

**término para que el Tribunal Colegiado de Circuito dicte la resolución que corresponda, que será de diez días.**

**En el caso de la fracción XI, la queja deberá interponerse ante el juez de Distrito, dentro del término de veinticuatro horas contadas a partir del día siguiente a la fecha en que para la parte recurrente surta efectos la notificación que conceda o niegue la suspensión provisional, acompañando las copias que se señalan en el artículo anterior. Los jueces de Distrito o el superior del tribunal remitirán de inmediato los escritos en los que se formule la queja al Tribunal que deba conocer de ella, con las constancias pertinentes. Dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes el Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda resolverá de plano lo que proceda.**

### **PROPUESTAS**

**En los casos del recurso de queja a que se refieren los tres primeros párrafos del artículo 99 de la ley de amparo, se señala un término de 10 días para que el tribunal colegiado de circuito dicte la resolución que corresponda, plazo que al igual que los anteriores es demasiado breve, por la cantidad de asuntos que se manejan y por consiguiente, propongo que se amplíe al doble, o sea 20 días. (Ma. De los Angeles Eduwiges Chavira Martínez, Tomo I, páginas 454 y 455)**

Al respecto, se nos ha presentado el problema de que cuando resolvemos las quejas previstas en la fracción XI del artículo 95 de la Ley de Amparo, no es posible listarlas con esa anticipación, y lo hacemos el día antes de su resolución atendiendo a la brevedad del plazo a que se refiere el último párrafo del artículo 99 de la misma ley, que nos da 48 horas para resolver, contadas a partir de la fecha en que se recibe el asunto.

Por consiguiente, tal vez tenga que hacerse una excepción en el artículo 34 de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal.

Además, en relación al tema de la Queja de que he venido haciendo mención de la fracción XI del artículo 95 de la Ley de Amparo, también sugiero se amplíe el plazo de 48 horas para resolverla, cuando menos a 24 horas más, ya que en el breve lapso que se otorga, no hay mucho tiempo para la debida reflexión del asunto. **(Ma. De los Angeles Eduwiges Chavira Martínez, Tomo I, página 456)**

---

Ajustar la redacción a la reforma propuesta al artículo 83, con lo que sólo quedarían comprendidos en la queja los casos previstos en la nueva redacción con las fracciones I a V.

Artículo 99. En los casos de las fracciones IV y V del mismo artículo 95, el recurso de queja se interpondrá por escrito, directamente ante el tribunal que conoció o debió conocer de la revisión.

La tramitación y resolución de la queja en los casos previstos en las fracciones I a V, se sujetará a lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo anterior, con la sola salvedad del término para que el Tribunal Colegiado de Circuito dicte la resolución que corresponda, que será de diez días.(Sergio Pallares y Lara, Tomo I, páginas 517 y 518)

---

a) Mi propuesta consiste en que la actual redacción de la primera parte del último párrafo del artículo 99 de la Ley de Amparo, se corrija y no vaya a incluirse tal como ahora está en el artículo equivalente de una nueva ley de la materia.

b) Lo anterior lo propongo no solamente porque existe una deficiente técnica en la redacción actual de dicho precepto legal, dado que en los tres primeros párrafos del mencionado artículo 99 de la Ley de Amparo, lo que se regula es ante quién debe interponerse el recurso de queja en los diversos supuestos que prevé el artículo 95 de la citada ley, y no dentro de qué término debe hacerse dicha interposición, en virtud de que tal cuestión está expresamente regulada en el artículo 97 de la propia ley; sino además porque en la primera parte del último párrafo del artículo 99, aunado a la falta de técnica de incluir el término para la interposición del recurso de queja previsto en la fracción XI del artículo 95, que ya se encuentra expresamente señalado en el artículo 97, fracción IV, que es el precepto ad hoc para ello, el término que indebidamente en él se incluye no coincide con el señalado en la fracción IV del artículo 97.

En efecto, mientras que en este último se dispone:

**“Art. 97.- Los términos para la interposición del recurso de queja, serán los siguientes: ...IV.- En el caso de la fracción XI del referido artículo 95 dentro de las veinticuatro horas siguientes a la en que surta sus efectos la notificación de la resolución recurrida”;**

**En cambio en la primera parte del último párrafo del artículo 99 se establece:**

**“...En el caso de la fracción XI, la queja deberá interponerse ante el Juez de Distrito, dentro del término de veinticuatro horas contadas a partir del día siguiente a la fecha en que para la parte recurrente surta efectos la notificación que conceda o niegue la suspensión provisional, acompañando las copias que se señalan en el artículo anterior. ...”;**

**Esto es, el artículo 97, fracción IV, claramente señala el término de veinticuatro horas siguientes a la en que surta efectos la notificación correspondiente, y de manera discrepante en la primera parte del último párrafo del artículo 99 se alude a un término de veinticuatro horas pero no contadas a partir de la en que surta sus efectos la notificación, sino a partir del día siguiente a la fecha en que surta efectos tal notificación, lo que constituye una antinomia que genera inseguridad jurídica para la parte recurrente, puesto que a ciencia cierta no sabrá cuál de esos dos términos deberá atender, con el riesgo de que si opta por el segundo, que es más amplio, si el Tribunal Colegiado considera que el que debe regir es el previsto en el artículo que específicamente regula los términos en esa**

materia, que es el 97, fracción IV, se podría desechar por extemporáneo el recurso de queja así interpuesto.

La antinomia antes destacada tiene fácil solución, suprimiendo la parte relativa al término de interposición que indebidamente se incluyó en el precepto que nos ocupa.

c) Por ello propongo que la redacción de la primera parte del último párrafo del actual artículo 99 de la Ley de Amparo, o su equivalente en la nueva ley de la materia, quede como sigue:

“... En el caso de la fracción XI, la queja deberá interponerse ante el Juez de Distrito, acompañando las copias que se señalan en el artículo anterior. ...”. **(Jorge Higuera Corona, Tomo II, páginas 880 a 882)**

---

Enmienda.

Suprimir “24 horas” para que diga así:

CINCO DÍAS.

Motivos.

LOS MISMOS EXPRESADOS RESPECTO DE LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 97. **(Fidencio Ramírez y Fidel Herrera Beltrán , Tomo II, página 1154)**

---

La propuesta de adición pretende hacer expedito el trámite del recurso de revisión del art. 95, fracción VI de la Ley de Amparo.

**Texto con modificación**

**ARTICULO 99.-** En los casos de las fracciones I y X del artículo 95, el recurso de queja se interpondrá por escrito directamente ante el tribunal colegiado de Circuito que corresponda, acompañando una copia para cada una de las autoridades contra quienes se promueva.

En los casos de las fracciones V, VII, VIII y IX del mismo artículo 95, el recurso de queja se interpondrá por escrito, directamente ante el tribunal que conoció o debió conocer de la revisión, acompañando una copia para cada una de las autoridades contra quienes se promueva y para cada una de las partes en el juicio.

En los casos de la fracción VI del mismo artículo 95, el recurso de queja se interpondrá por escrito ante el juez de Distrito que dictó el auto combatido, debiendo acompañar una copia para cada una de las partes en el juicio, debiendo remitirse al Tribunal Colegiado que corresponda con el informe respectivo.

La tramitación y resolución de la queja en los casos previstos en las fracciones I a X, se sujetará a lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo anterior, con la sola salvedad del término para que el Tribunal Colegiado de Circuito dicte la resolución que corresponda, que será de diez días.

En el caso de la fracción XI, la queja deberá interponerse ante el juez de Distrito, dentro del término de veinticuatro horas contadas a partir



del día siguiente a la fecha en que para la parte recurrente surta efectos la notificación que conceda o niegue la suspensión provisional, acompañando las copias que se señalan en el artículo anterior. Los jueces de Distrito o el superior del tribunal remitirán de inmediato los escritos en los que se formule la queja al Tribunal que deba conocer de ella, con las constancias pertinentes. Dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes el Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda resolverá de plano lo que proceda. **(María Simona Ramos Ruvalcaba, Tomo II, páginas 1427 a 1431)**

---

ARTÍCULO 99. En los casos de las fracciones I, VI y X del artículo 95, el recurso de queja se interpondrá por escrito directamente ante el Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, acompañando una copia para cada una de las autoridades contra quienes se promueva.

En los casos de las fracciones V, VII, VIII y IX del mismo artículo 95, el recurso de queja se interpondrá por escrito, directamente ante el tribunal que conoció o debió conocer de la revisión, acompañando una copia para cada una de las autoridades contra quienes se promueva y para cada una de las partes en el juicio.

La tramitación y resolución de la queja en los casos previstos en las fracciones I a X, se sujetará a lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo anterior, con la sola salvedad del término para que el Tribunal Colegiado de Circuito dicte la resolución que corresponda, que será de quince días hábiles.

En el caso de la fracción XI, la queja deberá interponerse ante el Juez de Distrito, dentro del término de veinticuatro horas contadas a partir del día siguiente a la fecha en que para la parte recurrente surta efectos la notificación que conceda o niegue la suspensión provisional, acompañando las copias que se señalan en el artículo anterior. Los Jueces de Distrito o el superior del tribunal remitirán de inmediato los escritos en los que se formule la queja al tribunal que deba conocer de ella, con las constancias pertinentes. Dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes el Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda resolverá de plano lo que proceda. (Oscar Barrera Garza, Tomo III, página 2209)

---

Para el efecto de que quede debidamente regulada la interposición del recurso de queja a que se refiere la primera parte del artículo 96, por cuanto a qué Tribunal de Alzada deberá conocer del mismo, se considera conveniente que sea el Tribunal Colegiado que falló, en su caso, el recurso, así como también es indispensable la suspensión del procedimiento de ejecución, en aras de evitar perjuicios de carácter irreparable al recurrente, por lo que se sugiere hacer una adición al segundo párrafo del Artículo 99 de la Ley de Amparo y agregarle un párrafo más con la siguiente redacción:

“Art. 99

...

En los casos de las fracciones V, VII, VIII y IX del mismo artículo 95, así como de la primera parte del artículo 96, el recurso de queja se interpondrá por escrito...”

“En el caso de la primera parte del artículo 96, tratándose de sentencia, la interposición del recurso de queja suspende el procedimiento de ejecución.” (Eduardo Veraza Martínez-Cairo, Tomo IV, páginas 2362 y 2363).

---

Artículo 99.- En los casos de las fracciones I, IV BIS, VI y X del artículo 95, el recurso de queja se interpondrá por escrito directamente ante el Tribunal Colegiado de Distrito que corresponda, acompañando una copia para cada una de las autoridades contra quienes se promueva.

Los párrafos segundo, tercero y cuarto, igual. (Jerónimo Eulogio Quiroz Gutiérrez, Tomo V, página 44)

**Artículo 100. La falta o deficiencia de los informes en los casos a que se refieren los dos artículos anteriores, establece la presunción de ser ciertos los hechos respectivos, y hará incurrir a las autoridades omisas en una multa de tres a treinta días de salario, que impondrá de plano la autoridad que conozca de la queja en la misma resolución que dicte sobre ella.**

### **PROPUESTAS**

#### **Enmienda**

MIXTO TEXTO HASTA DONDE DICE: "...A QUE SE REFIEREN LOS DOS ARTÍCULOS ANTERIORES,..." DEROGANDO LA FRASE: "...ESTABLECE LA PRESUNCIÓN DE SER CIERTOS LOS HECHOS RESPECTIVOS...", PARA PONER EN SU LUGAR:

DETERMINA QUE ES FUNDADA LA QUEJA... Y HARÁ...SE PROPONE TAMBIÉN ADICIONAR UN PÁRRAFO FINAL EN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS:

LOS INFORMES DE REFERENCIA INCLUIRÁN EL AUTO RECURRIDO, CONSTANCIA DE SU NOTIFICACIÓN Y LAS PRUEBAS QUE SIRVIERON DE BASE PARA RESOLVER, SIN PERJUICIO DE ACOMPAÑAR OTRAS CONSTANCIAS.

#### **Motivos.**

ANTE LA INEXISTENCIA DE LA POSIBILIDAD PARA EL RECURRENT, DE APORTAR PRUEBAS Y DADA LA NATURALEZA DEL RECURSO, ES OBLIGATORIO QUE LA AUTORIDAD AUTORA DE LA

RESOLUCIÓN RECURRIDA, JUSTIFIQUE SUS ACTOS, PARA QUE LA QUEJA SE RESUELVA EN ESTRICTA OBSERVANCIA DE LO DISPUESTO EN EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL.

LA FALTA DE INFORMES ES UN DESACATO QUE DEBE TRADUCIRSE EN UNA CONSECUENCIA JURÍDICA EQUIVALENTE A SU GRAVEDAD, SIN QUE SE PUEDA CONSIDERAR ADECUADA LA SIMPLE PRESUNCIÓN DE SER CIERTOS LOS HECHOS RESPECTIVOS, LO ADECUADO ES QUE LA QUEJA SE CONSIDERE FUNDADA EN ESTE CASO, PORQUE EN RIGOR PROCESAL, ES UNA ACEPTACIÓN DE LA VIOLACIÓN DE LA LEY POR PARTE DEL AUTOR DE LA RESOLUCIÓN COMBATIDA. (Fidencio Ramírez y Fidel Herrera Beltrán, Tomo II, páginas 1154 a 1156)

---

ARTÍCULO 100. La falta o deficiencia de los informes en los casos a que se refieren los dos artículos anteriores, establece la presunción de ser ciertos los hechos respectivos, y hará incurrir a las autoridades omisas en una multa de tres a treinta días de salario, que impondrá de plano la autoridad que conozca de la queja en la misma resolución que dicte sobre ella. (Oscar Barrera Garza, Tomo III, páginas 2209 y 2210)

**Artículo 101.** En los casos a que se refiere el artículo 95, fracción VI, de esta ley, la interposición del recurso de queja suspende el procedimiento en el juicio de amparo, en los términos del artículo 53, siempre que la resolución que se dicte en la queja deba influir en la sentencia, o cuando de resolverse el juicio en lo principal se hagan nugatorios los derechos que pudiera hacer valer el recurrente en el acto de la audiencia, si obtuviere resolución favorable en la queja.

### **PROPUESTAS**

**Artículo 101.-** En los casos a que se refiere el artículo 83, fracción VI, la interposición del recurso de revisión suspende el procedimiento en el juicio de amparo en los términos del artículo 53, siempre que la resolución que se dicte en la revisión deba influir en la sentencia, o cuando de resolverse el juicio en lo principal se hagan nugatorios los derechos que pudiera hacer valer el recurrente en el acto de la audiencia, si obtuviere resolución favorable en la revisión.<sup>72</sup> **(Germán Eduardo Baltazar Robles, Tomo I, página 84)**

---

Adicionar un artículo 86 bis, con el mismo texto del actual artículo 101, ajustando únicamente la fracción al caso de procedencia de la revisión,

---

<sup>72</sup> Esta disposición la establece actualmente el artículo 101 en relación con la queja.

que se propone incluir en la fracción V del artículo 83. **(Sergio Pallares y Lara, Tomo I, página 505)**

---

Suprimir el artículo 101 para pasar a ser el número 86 bis. **(Sergio Pallares y Lara, Tomo I, página 518)**

---

**ARTÍCULO 101.** En los casos a que se refiere el artículo 95, fracción VI, de esta ley, la interposición del recurso de queja suspende el procedimiento en el juicio de amparo, en los términos del artículo 53, siempre que la resolución que se dicte en la queja deba influir en la sentencia, o cuando de resolverse el juicio en lo principal se hagan nugatorios los derechos que pudiera hacer valer el recurrente en el acto de la audiencia, si obtuviere resolución favorable en la queja. **(Oscar Barrera Garza, Tomo III, página 2210)**

---

**Artículo 101.- Párrafo primero igual.**

También con la interposición del recurso de queja en término del artículo 95, fracción IV BIS, se suspende el procedimiento, cuando la resolución que se dicte en la queja deba influir en la ejecución de la sentencia que concedió el amparo. **(Jerónimo Eulogio Quiroz Gutiérrez, Tomo V, página 44)**





**Artículo 102.** Cuando la Suprema Corte de Justicia o el Tribunal Colegiado de Circuito desechen el recurso de queja por notoriamente improcedente, o lo declaren infundado por haberse interpuesto sin motivo alguno, impondrán al recurrente o a su apoderado, o a su abogado, o a ambos, una multa de diez a ciento veinte días de salario; salvo que el juicio de amparo se haya promovido contra alguno de los actos expresados en el artículo 17.

### **PROPUESTAS**

Artículo 102.- Cuando el Presidente de la Suprema Corte de Justicia o del Tribunal Colegiado de Circuito, o el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, sus Salas o el Tribunal Colegiado de Circuito, desechen el recurso de revisión por notoriamente improcedente, o lo declaren infundado por haberse interpuesto sin motivo alguno, impondrán al recurrente, o a su apoderado o a su abogado o a ambos, una multa de diez a ciento veinte días de salario; salvo que el juicio de amparo se haya promovido contra alguno de los actos expresados en el artículo 17.(Germán Eduardo Baltazar Robles, Tomo I, páginas 84 y 85)

---

Enmienda.

Adicionar después del término salario: **MÍNIMO.**

Motivos.

**POR LA DIVERSIDAD DE SALARIOS, DE PERMANECER LA MULTA SIN ESPECIFICAR CUÁL DE ELLOS, SE PUEDE COMETER UNA SERIA INJUSTICIA, POR LO QUE RESULTA EQUITATIVO QUE SE IMPONGA UNA MULTA EN SALARIOS MÍNIMOS. (Fidencio Ramírez y Fidel Herrera Beltrán , Tomo II, página 1156)**

**Artículo 103. El recurso de reclamación es procedente contra los acuerdos de trámite dictados por el presidente de la Suprema Corte de Justicia o por los presidentes de sus Salas o de los Tribunales Colegiados de Circuito.**

**Dicho recurso se podrá interponer por cualquiera de las partes, por escrito, en el que se expresen agravios, dentro del término de tres días siguientes al en que surta sus efectos la notificación de la resolución impugnada.**

**El órgano jurisdiccional que deba conocer el fondo del asunto resolverá de plano este recurso, dentro de los quince días siguientes a la interposición del mismo.**

**Si se estima que el recurso fue interpuesto sin motivo, se impondrá al recurrente o a su representante, o a su abogado, o a ambos, una multa de diez a ciento veinte días de salario**

### **PROPUESTAS**

**El trámite en el amparo directo.**

**Una de las actividades que representan mayor cúmulo de trabajo en la Suprema Corte de Justicia, actuando en Pleno o en Salas, y en los Tribunales Colegiados, es la relativa al trámite de los asuntos que se encomienda a los presidentes en turno de esos tribunales. Resulta evidente**

que el tiempo que dichos funcionarios deben destinarle al conocimiento y resolución del trámite, reduce considerablemente el que deben emplear en el estudio de los proyectos de sentencia que serán vistos en cada sesión.

Por otra parte, no parece conveniente que a través del recurso de reclamación, el presidente del tribunal respectivo participe en el análisis y resolución de un asunto en el que está siendo cuestionado uno de los actos que emitió en materia de trámite; participación que en ocasiones se da incluso a título de ponente al haberle tocado en turno la elaboración del proyecto en el recurso previsto por el artículo 103 de la Ley de Amparo.

Ante tal panorama, resulta conveniente una reforma legal que por una parte libere al presidente de esos tribunales de la carga extra de trabajo derivada del trámite de asuntos, que por cierto no le es remunerada; y por otra parte convierta a ese recurso en una verdadera instancia revisora de actos de una autoridad inferior.

Estimo que la solución a esos dos problemas puede darse a través de investir al secretario de acuerdos de la Suprema Corte de Justicia, de las Salas de la misma y de los Tribunales Colegiados de Circuito, de la facultad de resolver los asuntos de trámite, supeditado a la vigilancia del presidente y controlado en sus actividades mediante el recurso de reclamación.

Para ello se propone la reforma a los siguientes artículos de la Ley de Amparo.

**PRIMERA PROPUESTA: Reforma al primer párrafo del artículo 103.**

Artículo 103. El recurso de reclamación es procedente contra los acuerdos de trámite dictados por el presidente de la Suprema Corte de Justicia o por los presidentes de sus Salas o de los tribunales Colegiados de Circuito.

REFORMA:

Artículo 103. El recurso de reclamación es procedente contra los acuerdos de trámite dictados por el secretario de acuerdos de la Suprema Corte de Justicia o por los secretarios de acuerdos de sus Salas o de los Tribunales Colegiados de Circuito. (Sergio Pallares y Lara, Tomo I, páginas 518 a 520)

---

Como se advierte de la lectura de estos preceptos legales (3° bis, 81 y 103), tienen íntima vinculación con el tema de que trata este trabajo, pues las tres disposiciones legales contemplan la posibilidad de imponer una multa al quejoso, o al recurrente, a sus representantes, en su caso, a su abogado, o a ambos, cuando en el juicio de amparo se dicte el sobreseimiento, se niegue la protección constitucional, o desista el quejoso, si se advierte que se promovió el juicio con el propósito de retrasar la solución del asunto del que emana el acto reclamado o de entorpecer la ejecución de las resoluciones respectivas, o de obstaculizar la legal actuación de la autoridad, y tratándose del recurso de reclamación, si se interpuso sin motivo, y en ambos casos, si el infractor actuó de mala fe, según apreciación de la autoridad que conozca del juicio constitucional.

Conviene precisar, que la mala fe que se requiere en el infractor (quejoso, recurrente, sus representantes, o su abogado), y a la cual hace referencia el segundo párrafo del artículo 3o Bis de la Ley de Amparo, según se puntualizó en el dictamen de las Comisiones Unidas Primera de Justicia y Primera Sección de Estudios Legislativos, de dieciséis de diciembre de 1983, en donde se discutió la modificación de los montos de las multas, propuestas en la iniciativa Presidencial respectiva, tuvo por objeto evitar la practica viciosa de algunos litigantes que acuden al amparo con fines dilatorios; pero, a la vez, se procuró no desalentar a los gobernados para el ejercicio de la acción de amparo, ni para la interposición de los recursos, así como tampoco sancionar con multas a los agraviados de bajos ingresos.

Siendo así, la práctica ha demostrado que la finalidad perseguida con esa reforma legal, no ha alcanzado el éxito deseado, porque se advierte que el litigante que formula la demanda de amparo, en favor del quejoso, a sabiendas de que se va a concluir con un sobreseimiento, por ser indefectiblemente improcedente la acción constitucional, porque muchas veces ya ha existido con antelación otro juicio de amparo promovido por el mismo quejoso, cuestionando el mismo acto reclamado, de iguales autoridades responsables; o bien porque es notoriamente extemporánea su promoción, o lo que es aún más grave, en ocasiones se presenta el amparo con el único objeto de entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva que ha alcanzado la autoridad de cosa juzgada, pues respecto de ella, ya se agotó el juicio correspondiente en todas sus instancias, e incluso la sentencia ya ha sido materia de examen en un juicio de amparo directo; sin

embargo, a través de un nuevo juicio de amparo indirecto promovido por quien, en ocasiones se dice tercero extraño (muchas veces sin serlo), cuestiona que debió ser llamado a ese juicio, y de esta manera, al obtener del Juez de Distrito la suspensión del acto reclamado, con una garantía que resulta muy cómodo entregarla por el quejoso, ya que luego vendrá la práctica de acciones dilatorias a fin de retrasar la resolución final del juicio en primera instancia, dentro del breve término en que debe pronunciarse conforme a la ley, y para ello, se invocará por el impetrante la necesidad de desahogar pruebas fuera del lugar del juicio, y se propondrán otras a sabiendas de que son totalmente improcedentes, con el objeto de que sean desechadas, y así dar paso al recurso de queja, con el cual, se logrará la suspensión del procedimiento hasta que este medio de impugnación sea resuelto, y así sucede que al llegar finalmente al momento de dictarse la sentencia, el juzgador constitucional se encontrará con que, aún justificado plenamente que el juicio de garantías se promovió con la deliberada intención de retrasar la solución del asunto del que emana el acto reclamado, o de entorpecer la ejecución de la resolución respectiva, estará imposibilitado para imponer alguna sanción al quejoso, porque éste, en ejercicio legítimo de su propio derecho, habrá señalado los estrados del juzgado para oír sus notificaciones, y así, aun cuando se le imponga alguna multa, la autoridad exactora estaría imposibilitada para hacerla efectiva; y por cuanto a su abogado, éste conocedor del derecho, se habrá escudado en el anonimato para evitar cualquier sanción a su conducta, falta de ética profesional, al promover un juicio que de antemano sabía estaba destinado al sobreseimiento, por actualizarse algunas de las causales que al efecto establece el artículo 73, de la Ley de Amparo, y así, impunemente podrá seguir aconsejando a los quejosos que usen el juicio de amparo como

medio para entorpecer la pronta administración de la Justicia tutelada por el artículo 17 Constitucional.

En términos semejantes acontece cuando el abogado que patrocina al quejoso, sabe anticipadamente, que el acto dictado por la autoridad responsable, se encuentra perfectamente ajustado a la ley que lo rige, y por ende, que no infringe ninguna garantía tutelada a favor del quejoso, y no obstante, con el objeto de retrasar la resolución del asunto intenta el juicio de garantías en el que, sin poder cuestionar alguna ilegalidad del acto, se concreta a expresar a manera de conceptos de violación, los antecedentes del juicio natural, la forma en que se han desahogado las pruebas, transcribirá las sentencias de primera y segunda instancias, así como el contenido íntegro de los artículos 14 y 16 constitucionales, y con ello, después de diez hojas o más, se concretará a pedir que le sea concedida la protección constitucional al quejoso.

En esas circunstancias, resultará notorio la mala fe del peticionario de garantías, que en realidad debe ser la del abogado que lo induce a la conducta procesal que observó en el trámite del juicio de garantías, que es el único dato objetivo que puede tomar en cuenta el juzgador para determinar la buena o mala fe en un procedimiento, y de esta manera, si el quejoso no señala su domicilio particular, sino sólo los estrados del tribunal para oír notificaciones, difícilmente podrá ser objeto de una multa en los términos de las disposiciones legales antes transcritas; y en cuanto a su abogado, en esas ocasiones cuidará de no aparecer como tal en la demanda de garantías, y para ello bastará no proporcionar su nombre y



menos su domicilio, para no ser objeto de alguna sanción, toda vez que esto último no lo exige la actual Legislación de Amparo.

Lo propio acontece, en términos más o menos semejantes, cuando el quejoso hace valer el recurso de reclamación, contra los acuerdos de trámite dictados por el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por los Presidentes de sus Salas, o de los Tribunales Colegiados de Circuito, pues en esta hipótesis se considera que el recurso fue interpuesto sin motivo, y que se actuó de mala fe, entre otros supuestos, cuando los agravios sean notoriamente inoperantes porque no combaten las resoluciones del acuerdo reclamado, lo que genera que resulte notoria la interposición del recurso para retardar innecesariamente la resolución definitiva del asunto, como lo ha considerado el Tribunal Pleno de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis XXV/89, aprobada en sesión celebrada el jueves dieciocho de mayo de mil novecientos ochenta y nueve, por unanimidad de votos, que es del tenor literal siguiente:

"MULTAS EN EL RECURSO DE RECLAMACION. PROCEDE IMPONERLAS CUANDO SE INTERPONE "SIN MOTIVO Y CON MALA FE. De acuerdo con lo dispuesto por los artículos 3o. bis y 103 de la Ley de Amparo, procede imponer una multa al recurrente o su apoderado, a su abogado, o a ambos, cuando de las circunstancias del caso se advierten elementos suficientes para considerar que el recurso fue interpuesto sin motivo y que se actuó de mala fe; lo cual sucede, entre otros supuestos, cuando los agravios son notoriamente inoperantes porque no combaten las consideraciones del acuerdo reclamado y a la vez, resulta notorio que la

interposición de recurso busca retardar innecesariamente la resolución definitiva. Consultable en el IUS 8, con el registro número 205,969.

Precisado lo anterior, aun en el supuesto de que en las hipótesis referidas, el quejoso haya señalado perfectamente bien su domicilio particular y no exista constancia de que se trata de una persona de bajos ingresos, lo que puede motivar sea sujeto de la imposición de una multa por promover el juicio de amparo con el solo objeto de retrasar la resolución del asunto, o al intentar el recurso de reclamación sin motivo, cabe hacerse la siguiente interrogante:

¿Hasta qué punto será correcto sancionar a los quejosos con las multas previstas en los artículos 3o bis, 81, y 103, de la Ley de Amparo, por haber incurrido en una conducta que dada su ignorancia del derecho, es tomada por el asesoramiento del abogado que formuló la demanda de garantías, y así, después de sufrir el engaño de éste, porque no podrá obtener resolución favorable en el juicio de amparo, después de haber realizado el pago de unos honorarios mal devengados, todavía se le suma a su cargo la multa que le imponga el órgano de control constitucional, por la mala fe demostrada al acudir al juicio de amparo, o bien por hacer valer el recurso de reclamación, expresando conceptos de violación o agravios, según el caso, que sean notoriamente inoperantes, y que demuestran sólo su conducta de retrasar innecesariamente la resolución definitiva del asunto de donde emana el acto reclamado?.

¿Qué acaso con ello, no se causa mayor perjuicio al quejoso, quien sin advertir la mala conducta del abogado que lo patrocina, pierde la fe en la

institución a la que en última instancia puede acudir en busca del respeto de sus garantías individuales?.

Siendo así, se advierte que la intención legislativa plasmada en el texto de los preceptos legales al inicio transcritos, no ha logrado en lo absoluto evitar la práctica viciosa de muchos litigantes que, sin ningún escrúpulo inducen a sus clientes a formar parte como quejosos y acudir al juicio de amparo con fines únicamente dilatorios, induciéndolos a conductas que denotan mala fe, y que finalmente pueden ser sancionadas, pero que no podrán repercutir en ellos, porque no existe actualmente la obligación legal de que impriman su nombre, su número de cédula profesional y su firma que avale y respalde la solicitud del quejoso, que demanda el amparo y protección de la Justicia Federal, y así, en tanto cobren honorarios, evaden la responsabilidad que el ejercicio de todo derecho legítimo lleva implícito cuando éste no se ejerce en los términos y con las condiciones que fijan las leyes respectivas, y lejos de coadyuvar por el respeto a las garantías constitucionales en favor del quejoso, lo alientan a introducirse en un litigio constitucional en el que finalmente no sólo no obtendrán ningún beneficio, sino que por el contrario podrán resultar sancionados por culpa del mal asesoramiento jurídico que tengan.

Planteada de esta manera la problemática actual que se vive con la aplicación de las disposiciones legales de los artículos 3º. bis, 81, y 103 de la Ley de Amparo, lo cual ha sido comprendido por los juzgadores de amparo, y ello ha ocasionado que en muy contados casos se imponga la multa correspondiente al quejoso, permite sostener que es necesaria una reforma a la Ley de Amparo, a fin de suprimir las multas de que se trata y

que puedan imponerse al quejoso, prevaleciendo las que corresponden imponer, y quizás con mayor severidad, al abogado que lo patrocine; empero, para ello, es menester también adicionar la Ley de Amparo para establecer que toda solicitud de garantías, requiere que el quejoso esté patrocinado por un licenciado en derecho, esto es, por un profesional capacitado legalmente para proveer a la defensa y el respeto de las garantías individuales de su cliente, quien deberá autorizar con su firma, la promoción respectiva, citando el número de su cédula profesional, la cual de encontrarse registrada en el órgano de control constitucional respectivo, habrá de señalar el dato relativo, y así, no será necesario que acompañe copia certificada de la misma, lo que sí requerirá, en caso contrario; en el entendido de que deberá continuar con el patrocinio del negocio hasta su conclusión, debiendo señalar además su domicilio.

De esta manera, se busca que la solicitud de amparo esté formulada por quien tenga la aptitud legal de saber orientar al quejoso, acerca de la necesidad o no de acudir a ese medio extraordinario de defensa, si acaso el acto de la autoridad resulta violatorio de garantías en perjuicio de su cliente.

La modificación propuesta podría cuestionarse diciendo que atenta contra el derecho de petición previsto por el artículo 80 constitucional que establece la posibilidad de dirigirse a cualquier funcionario o empleado público de manera pacífica y respetuosa, y que a tal solicitud deba recaer un acuerdo escrito, el que debe hacerse del conocimiento en breve término al peticionario, sin embargo, tal garantía constitucional no puede interpretarse en el sentido de que el peticionario pueda dejar de cumplir las

formalidades y requisitos que establezcan las leyes, en la especie sería la Ley de Amparo.

Además, no puede señalarse que el requerimiento de que una demanda de amparo vaya firmada por un abogado titulado, se necesite disponer de recursos económicos suficientes para pagar a quien lo patrocine, porque teniendo el estado a su cargo la administración de justicia en forma gratuita como lo establece el artículo 17 constitucional, también el propio estado ha tomado la preocupación de establecer instituciones de carácter público que prestan servicio de asesoramiento jurídico en forma gratuita, y no sólo eso, sino que también existen instituciones de derecho privado, dedicadas al mismo fin. De esta manera, se pueden citar dentro de los primeros, al Instituto Federal de Defensoría Pública, a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, a la Procuraduría Agraria, a la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, a la Procuraduría del Ciudadano (como se denomina a la Defensoría de Oficio en el Estado de Puebla); así como dentro del segundo grupo, encontramos los Bufetes Jurídicos Gratuitos de diversas instituciones de educación superior que están siempre respaldados por abogados titulados. De esta manera no podría decirse que las personas de bajos recursos económicos no tendrían acceso a la protección de las garantías individuales.

Tampoco podría señalarse que con las reformas propuestas, se prohíbe el derecho de autodefensa, sino que por el contrario, la pretensión buscada es precisamente que la defensa del gobernado sea adecuada al último nivel que tiene para la protección de sus garantías individuales. Al respecto, conviene recordar para hacer un símil, que tratándose de la

medicina, estando elevado a rango constitucional el derecho a la salud pública, se encuentra que en las farmacias existe cierto tipo de medicamentos, cuya venta requiere necesariamente de una receta médica expedida por un profesional legalmente registrado ante la Secretaría de Salud Pública quien para ello debe acreditar tener los conocimientos suficientes por haber cursado la carrera profesional correspondiente. De ahí que, si lo que se busca a través de la medicina es que no se cause un daño a la persona por autorecetarse, de la misma manera se buscará en el derecho, que el quejoso que puede resentir la violación a sus garantías individuales, pueda obtener su tutela a través de estar legalmente patrocinado por quien pueda, en forma capaz y responsable, conducirlo en el ejercicio del derecho de petición que estará expedito para que obtenga el respeto a sus garantías individuales.

Por otro lado, la garantía de defensa que consagra el artículo 14 constitucional, no debe entenderse otorgada en forma ilimitada, sino con sujeción al respecto de otras normas constitucionales de igual jerarquía que tiendan a lograr un justo equilibrio entre la agilización de la administración de justicia y la seguridad jurídica de las partes en el proceso, lo cual podría lograrse con mayor éxito, mediante la inclusión en la ley reglamentaria de que se trata, del requisito anotado para la admisión y procedencia del juicio constitucional.

Además, se busca que la garantía de audiencia y defensa establecida en el precitado precepto constitucional, sea adecuada y oportuna para la defensa del gobernado, pues en la medida en que se encuentre debidamente patrocinado por un profesional del derecho, podrá hacer los

planteamientos adecuados en defensa de sus intereses, aportar y rendir las pruebas que estime pertinentes y convenientes, de tal suerte que no sea la falta de un debido asesoramiento jurídico la causa que origine que quede indefectiblemente en estado de indefensión, al no lograr la protección constitucional por haberse realizado un mal planteamiento en la demanda de garantías.

En otro aspecto, la reforma propuesta no implicaría contravenir el artículo 17 constitucional, dado que no se impediría al afectado obtener la actividad jurisdiccional, porque sólo se condicionaría que su solicitud se encause por los medios que el propio Estado pone al alcance del gobernado para la tutela de sus intereses, es decir, que como se ha visto, el propio Estado se ha preocupado por poner al alcance del gobernado instituciones de carácter público que sin necesidad de pagar algún precio por sus servicios, otorgan de manera gratuita el asesoramiento para garantizar la tutela de los derechos en general y en especial para la salvaguarda de las garantías individuales.

Atento a los razonamientos antes expresados, se considera que la reforma propuesta tiende a garantizar al quejoso que sus solicitudes de amparo puedan llevar un mayor grado de posibilidad de obtener resolución favorable, dado que si el abogado a quien consulten para el patrocinio de la defensa de sus intereses, advierte la ineficacia de solicitar la protección constitucional, bien por existir alguna causal de improcedencia o, en su caso, por no advertir la violación de alguna garantía constitucional, deberá hacérselo saber de esa manera, y no darle falsas expectativas de obtener algo que ya de por sí se encuentra perdido y con ello se evitará que quien

acude al juicio de garantías no sólo se vea desalentado con una resolución contraria a sus intereses, sino que también pueda ser sujeto de una multa por una conducta que en realidad no le es imputable, y sí por el contrario, permitirá, al verdadero responsable de esa práctica indebida, sea sancionado como en derecho corresponda. (Eric Roberto Santos Partido, Tomo I, páginas 556 a 566)

---

Para el propósito de este trabajo, es de aludir también al diverso numeral 103 de la misma Ley de Amparo, que establece el recurso de reclamación, el cual procede contra los acuerdos de trámite dictados por el Presidente de la Suprema Corte de Justicia o por los Presidentes de sus Salas o de los Tribunales Colegiados de Circuito, señalando que tal medio de impugnación debe hacerse valer dentro del término de veinticuatro horas, siguientes al en que surta sus efectos la notificación de la resolución impugnada.

Se tiene, pues, que una vez recibido el escrito por medio del cual se interpone el recurso, el Presidente del Tribunal Colegiado de Circuito manda solicitar a la autoridad contra quien aquel se hace valer, requiriéndola para que en un plazo improrrogable remita copia de la resolución recurrida, constancia de notificación a las partes y de todas las demás que se estimen necesarias para resolver al respecto; igualmente, se envían a dicha autoridad sendas copias del escrito por el que se hace valer el recurso, para que se distribuyan entre las demás partes en el juicio de amparo (éste trámite no se encuentra señalado en el artículo 98, segundo párrafo de la Ley).



A continuación, se dictará un nuevo proveído acordando sobre la admisión, es decir, si se admite o no, contra el cual podrá interponerse a su vez el recurso de reclamación, que requiere también de un acuerdo de admisión y turno al ponente, ocupándose a diverso personal para realizar dichos trámites, interviene el actuario, notificando a las partes por lista ese auto, etc., se da vista al Representante Social, para que formule pedimento, si lo estima pertinente y se turna al ponente, quién elaborará proyecto de resolución, el cual en la respectiva sesión de Pleno del Tribunal, y una vez aprobado el proyecto, se deberá engrosar la ejecutoria, notificar a las partes y a la autoridad contra la que se interpuso la queja.

En resumen, con optimismo, puede afirmarse que un término razonable para obtener la resolución del recurso, podría ser el de dos meses, plazo en el cual, se mantiene suspenso, en la mayoría de los casos, el juicio de amparo, con el consecuente perjuicio de las partes; pero tal plazo es sin tener en consideración el recargo de trabajo que se padece en casi todos los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, el cual puede provocar una mayor demora para resolver el recurso.

¿ Qué sucede cuando el informe no se rinde?

¿ Qué, cuando se rinde incompleto y las partes no aportan pruebas para demostrar que el recurso debe ser declarado fundado?

Es claro que no se obtiene resolución favorable; éste es un riesgo adicional que el inconforme corre, al quedar expuesto a que se rinda un

informe incompleto, lo que sucede con frecuencia; o bien equivocado, sobre los hechos materia del recurso de queja.

Es evidente que esto no fue el propósito del legislador, pero sí resulta contrario a los postulados del artículo 17 de la Carta Magna.

Ahora, al poder impugnarse ante el propio juez de Distrito el acuerdo de trámite que dictó, a propósito incluso de alguna petición de parte (v.g. desechamiento de pruebas), se evitarían los diversos acuerdos que debe emitir el Presidente del Colegiado, la formación de un toca, noticia a Estadística, notificaciones, etc.; igualmente la formación del informe, remisión de autos; casi siempre, integrar un legajo con copias fotostáticas que el secretario ha de certificar, y enviar, y en general lo ya descrito.

El trámite del recurso que ahora se propone, podría reducirse, simplemente, a señalar un término, de tres días, por ejemplo, para su interposición, el que se computaría a partir de que surtiera efectos la notificación del proveído que se pretendiera impugnar; se ordenaría dar vista a las otras partes, por igual término, para que expresaran lo que a su interés conviniera y la resolución del recurso se debería emitir dentro del plazo de tres días.

El propio Juez tiene a su alcance todos los medios de conocimiento necesarios para confirmar el acuerdo recurrido, de ser procedente; a la luz de los agravios, de hecho, o de derecho, que le fueran argumentados y de existir alguna equivocación, el propio juez podría introducir las enmiendas necesarias para continuar con un debido procedimiento. Todo ello, sin

menoscabo al principio de igualdad procesal de las partes, a quienes se dio oportunidad de alegar lo que a su interés conviniera, y los que, por otra parte, no pudiendo ya impugnar lo resuelto a propósito del recurso, sin embargo, conservarían su derecho a expresar alguna inconformidad con lo ahí establecido, al interponer, en su caso, el recurso de revisión en contra de la sentencia, cuando ésta sea contraria a sus intereses. Tales alegaciones serían examinadas, preferentemente, por el Tribunal Colegiado, y según lo alegado, podría ordenarse la reposición del procedimiento para los efectos pertinentes y si se tratara de prueba indebidamente admitida, por ejemplo, el propio tribunal, dado que no existe reenvío, resolvería íntegramente la cuestión, prescindiendo de la prueba ya desahogada, considerada por el a quo.

Conforme a estos lineamientos genéricos, puede advertirse que la propuesta de establecer el recurso de revocación ante el Juez de Distrito, o ante la autoridad que conoce del juicio de amparo indirecto, Unitario o Superior de la responsable, en el caso del artículo 37 de la Ley de la Materia, contra acuerdos de trámite dictados en el principal o en el incidente de suspensión, contribuye a obtener una inmediata reparación a un posible error de apreciación, evitando a las partes perjuicios por la demora en la resolución de sus conflictos, así como recargo de labores en los Tribunales Colegiados, al integrar los tocas relativos al recurso de queja a que se refiere la fracción VI, (primera parte) del artículo 95 de la Ley de Amparo, con los diversos trámites legales necesarios para su resolución; todo ello, contribuiría a lograr una administración de Justicia más rápida y expedita.

No podemos desconocer, por otra parte, que tan amplia posibilidad que se otorgaría a las partes en los juicios de amparo indirecto, para impugnar, ante el propio órgano de control constitucional, los acuerdos de trámite ya mencionados, en la práctica podría resultar contraproducente, dado un eventual abuso en la interposición del recurso, volviendo más graves aún, las cargas de trabajo de las mismas unidades jurisdiccionales; para evitarlo, es necesario tomar ciertas medidas lo cual no hace nugatorio el derecho a defenderse, ni implicaría, la que se propone, el pago de costas, prohibidas constitucionalmente, ya que, tal medida preventiva consistiría en la eventual imposición de una multa, por el equivalente de diez o ciento ochenta veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal, tomando en cuenta las circunstancias del caso, en términos semejantes a los previstos en los artículos 3º.- bis y 81 de la Ley de la Materia. Tal multa sería impuesta, en su caso, en la resolución que se emita a propósito del recurso de revocación (también se podría denominar Reclamación, cuya existencia se reconoce en la Ley de Amparo) pero no se mandaría a hacer efectiva, sino hasta que el juicio de amparo se resolviera en definitiva y se advirtiera que tal recurso fue hecho valer sin motivo; desde luego, debe entenderse obligatoria la imposición de la multa, sin que haya lugar a considerar si hubo o no mala fe, pero pudiendo señalarse otras excepciones, análogas a las que ya contempla la propia Ley de la Materia.

En conclusión:

Tomando en consideración la problemática real de los justiciables en los juicios de amparo, los intereses legítimos que les asiste para una pronta y expedita administración de justicia, y el deber correlativo a proporcionarla,

por parte del Estado, se propone la modificación de la vigente Ley de Amparo, en los términos que han quedado expuestos. (Francisco Guillermo Baltazar Alvear, Tomo I, páginas 612 a 617)

---

En otro aspecto, debe precisarse que como los actos del Presidente por disposición expresa de la Ley de Amparo no tienen efectos definitivos, la determinación que al efecto se tomare admitirá el recurso de reclamación y será entonces cuando los otros dos integrantes de dicho órgano confirmen o revoquen la determinación del Presidente.

Es factible pensar que con esto, no se resuelva el problema, porque entonces los Tribunales Colegiados se habrán de llenar de recursos de reclamación; sin embargo, si se reforma también la ley, en la medida de que de estimarse infundado el recurso de reclamación, se imponga una sanción económica a la parte quejosa que lo formule y una suspensión temporal en el ejercicio profesional del abogado que lo asesore, de acuerdo con la gravedad del caso ya que siendo perito en derecho conoce perfectamente que el recurso no puede prosperar, con ello quedaría totalmente limitado dicho medio impugnativo para que, únicamente en los casos de error de apreciación del Presidente o de criterio de éste, pueda prosperar la reclamación correspondiente. (Manuel Ernesto Saloma Vera, Tomo II, página 724)

---

ART. 103.- El recurso de reclamación, es procedente contra los acuerdos de trámite....

Si se estima, que el recurso fue interpuesto sin motivo, se impondrá al recurrente una multa de diez a ciento veinte días de salario, y a su abogado una suspensión en el ejercicio de la profesión, de quince días a seis meses. **(Manuel Ernesto Saloma Vera, Tomo II, página 727)**

---

72.- Finalmente, la reclamación, en mi concepto, esta bien, salvo la revisión que debe hacerse de la redacción. **(Jesús A. Arroyo Moreno, Tomo II, página 1083)**

---

#### ARTICULO 103

La propuesta intenta evitar prácticas dilatorias en los procesos de amparo se aumenta, de ahí el aumento en la sanción pecuniaria.

#### TEXTO CON MODIFICACIÓN

ARTICULO 103.- El recurso de reclamación es procedente contra los acuerdos de trámite dictados por el presidente de la Suprema Corte de Justicia o por los presidentes de sus Salas o de los Tribunales Colegiados de Circuito.

Dicho recurso se podrá interponer por cualquiera de las partes, por escrito, en el que se expresen agravios, dentro del término de tres días

siguientes al en que surta sus efectos la notificación de la resolución impugnada.

El órgano jurisdiccional que deba conocer el fondo del asunto resolverá de plano este recurso, dentro de los quince días siguientes a la interposición del mismo.

Si se estima que el recurso fue interpuesto sin motivo, se impondrá al recurrente o a su representante, o a su abogado, o a ambos, una multa de cien a trescientos días de salario. **(María Simona Ramos Ruvalcaba, Tomo II, páginas 1431 a 1434)**

---

**ARTÍCULO 103.** El recurso de reclamación es procedente contra los acuerdos de trámite que trasciendan al resultado del fallo , dictados por el presidente de la Suprema Corte de Justicia o por los presidentes de sus Salas o de los Tribunales Colegiados de Circuito.

Dicho recurso se interpondrá por escrito directamente ante el órgano jurisdiccional responsable por conducto de su oficialía de partes en el que el recurrente expresará los agravios, dentro del término de tres días siguientes al en que surta sus efectos la notificación de la resolución impugnada.

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia o de alguna de sus Salas o del Tribunal Colegiado de Circuito será el órgano jurisdiccional que deba

conocer el fondo del asunto y resolverá de plano este recurso, dentro de los quince días siguientes a la interposición del mismo.

Si se estima que el recurso fue interpuesto sin motivo, se impondrá al recurrente o a su representante, o a su abogado, o a ambos, una multa de diez a ciento veinte días de salario. (**Oscar Barrera Garza, Tomo III, páginas 2210 y 2211**)

---

Se estima conveniente establecer la adhesión a los recursos de queja y reclamación, previstos respectivamente en los artículos 95 y 103 de la Ley de Amparo, a fin de que siguiendo el mismo criterio de la revisión adhesiva, se otorgue oportunidad a la parte que obtuvo resolución favorable a sus intereses, la posibilidad de formular agravios que permitan robustecer el criterio recurrido, cuya adhesión seguirá la suerte procesal del recurso, con lo que se estaría observando cabalmente el principio de equidad procesal y salvaguardando los derechos de las partes.

## **REFORMA**

**ARTÍCULO 103.** El recurso de reclamación es procedente contra los acuerdos de trámite dictados por el presidente de la Suprema Corte de Justicia o por los presidentes de sus Salas o de los Tribunales Colegiados de Circuito.

Dicho recurso de podrá interponer por cualquiera de las partes, por escrito, en el que se expresan agravios, dentro del término de tres días



siguientes al en que surta sus efectos la notificación de la resolución impugnada.

En los casos a que se refiere este artículo, la contraparte del reclamante, puede adherirse a la reclamación interpuesta por el recurrente, dentro del término de tres días, contados a partir de la fecha en que se le notifique la admisión del recurso, expresando los agravios correspondientes; en este caso, la adhesión al recurso sigue la suerte procesal de éste.

El órgano jurisdiccional que deba conocer el fondo del asunto resolverá de plano este recurso, dentro de los quince días siguientes a que sea interpuesto el recurso de reclamación en vía adhesiva o a que haya transcurrido el término que tuvo la contraparte para interponerlo.

Si se estima que el recurso fue interpuesto sin motivo, se impondrá al recurrente o a su representante, o a su abogado, o a ambos, una multa de diez a ciento veinte días de salario. (Juan José Paullada Figueroa, Tomo V, páginas 270 y 271)

---

ARTÍCULO 103. El recurso de reclamación es procedente contra los acuerdos de trámite dictados por el presidente de la Suprema Corte de Justicia o por los presidentes de sus Salas o de los Magistrados Instructores de los Tribunales Colegiados de Circuito. (Gloria Tello Cuevas, Tomo V, página 295)

## **Capítulo XII**

### **De la ejecución de las sentencias**

**Artículo 104.** En los casos a que se refiere el artículo 107, fracciones VII, VIII y IX, de la Constitución Federal, luego que cause ejecutoria la sentencia en que se haya concedido el amparo solicitado, o que se reciba testimonio de la ejecutoria dictada en revisión, el juez, la autoridad que haya conocido del juicio o el Tribunal Colegiado de Circuito, si se interpuso revisión contra la resolución que haya pronunciado en materia de amparo directo, la comunicará, por oficio y sin demora alguna, a las autoridades responsables para su cumplimiento y la harán saber a las demás partes.

En casos urgentes y de notorios perjuicios para el quejoso, podrá ordenarse por la vía telegráfica el cumplimiento de la ejecutoria, sin perjuicio de comunicarla íntegramente, conforme al párrafo anterior.

En el propio oficio en que se haga la notificación a las autoridades responsables, se les prevendrá que informen sobre el cumplimiento que se dé al fallo de referencia.

## **PROPUESTAS**

Otra de las tantas cuestiones injustas a nuestro juicio que nos presenta la actual Ley de Amparo, se da en el recurso de revisión en juicios de amparo penales en los que se concede el amparo y protección de la justicia federal al quejoso y éste se encuentra privado de su libertad.

El efecto actual, para aquel que se encuentra privado de su libertad, ya sea por la orden de aprehensión, por un auto de formal prisión, por la negativa de fianza o por cualquier otra causa, es de que éste sigue privado de su libertad, cuando la autoridad responsable interpone revisión.

El efecto del recurso de revisión en esos casos, es suspensivo, porque no permite que la sentencia dictada por el Juez de distrito pueda ejecutarse.

La experiencia nos demuestra, que muchas de las veces el agraviado sufre las consecuencias de una prisión preventiva larga y tormentosa injustamente, cuando el recurso de revisión es resuelto en forma negativa a la autoridad responsable; demostrándonos, también la experiencia, que la tramitación de los recursos en amparo son sumamente tardados, en esos casos, en perjuicio grave para el quejoso.

Creemos justo, que existiendo en nuestras diversas legislaciones el efecto devolutivo en las sentencias que pueden ser recurridas, podría adicionarse el Capítulo XII del Título Primero de la Ley de Amparo, con una disposición que diga: "Tratándose de sentencias de amparo dictadas por el

Juez de Distrito o por la autoridad que conozca del juicio de amparo que se promueva en contra de actos relativos a procedimientos penales en los que el quejoso se encuentre privado de su libertad en virtud del acto reclamado, éste podrá ser puesto en libertad provisionalmente mientras se resuelve el recurso de revisión, si la autoridad responsable lo interpusiere; tomándose desde luego las medidas necesarias para el aseguramiento del quejoso”.

O bien, puede establecerse que la autoridad responsable que en asuntos criminales en los que el quejoso esté privado de su libertad, concedido el amparo por el juez de Distrito o por la autoridad que conozca del juicio, interponga recurso de revisión que fuere declarado improcedente, estará obligada al pago de los daños y perjuicios causados al agraviado que serán determinados por la autoridad que conozca del juicio de amparo. Ello, a fin de evitar que la autoridad responsable interponga maliciosamente el recurso de revisión cuando el quejoso se encuentra privado de su libertad. (Jorge Arellano Medina, Tomo II, páginas 816 y 817)

---

#### La ejecución.

Los artículos 104 a 111 de la Ley de Amparo se refieren a la ejecución de las sentencias y deben ser motivo de una revisión a fondo, en primer lugar, para incluir en este capítulo las ejecuciones que se efectúen con exceso o con en defecto y la ejecución en materia suspensiva, a que se refiere el artículo 95, fracciones II, III, IV y IX.

En segundo lugar, se debe, desde el primer requerimiento que se haga a la autoridad para que cumpla, apercibirla de un medio de apremio que, en un primer instante deberá ser exclusivamente dinero en cantidad que haga pensar a la autoridad si continúa en su actitud de rebeldía o no, ya que hay jueces de Distrito que imponen multas por un peso, lo que a nadie puede molestar y la razón que se ha proporcionado es que la cantidad a que se refiere el artículo 59 del Código Federal de Procedimientos Civiles como multa, para hacer cumplir sus determinaciones es de \$1,000.00. Se corre el punto decimal tres cifras, con lo que la multa. Esto es un absurdo, porque la sanción es risible y no sirve para que el infractor corrija su conducta y cumpla con lo ordenado por la autoridad judicial. Y la suma importante con que se aperciba a la autoridad, puede duplicarse o triplicarse la sanción antes de enviar el expediente a la Suprema Corte. ( **Jesús A. Arroyo Moreno, Tomo II, páginas 1095 y 1096**)

---

El capítulo relativo al incidente de ejecución de sentencias me parece correcto en lo general, sin embargo creo que los artículos 104, 105 y 106 podrían fusionarse en un solo precepto, pues el procedimiento a seguir para ejecutar las sentencias dictadas en los amparos indirectos y directos es el mismo.

Por otro lado creo que es importante que quede aclarado de manera expresa que el cumplimiento sustituto de las sentencias de amparo, es aplicable tanto en el juicio de garantías indirecto como en el directo, pues por una parte el artículo 106 actual, remite al artículo 105 vigente, pero sobre todo no existe razón alguna para que el cumplimiento sustituto solo

sea procedente en los amparos tramitados ante Jueces de Distrito, máxime que como ya lo dije anteriormente, el último párrafo de la fracción XVI del artículo 107 constitucional, al hablar del cumplimiento sustituto no excluye a ninguna de las dos clases de amparo. No obsta la idea anterior el hecho de que hay que ser cauteloso en el tema del cumplimiento sustituto de las sentencias de amparo, ya que éstas deben tener efectos restitutorios, toda vez que deben de poner al quejoso en el estado jurídico en que se encontraba antes de ser afectado en sus garantías individuales, sin embargo en casos extraordinarios a criterio del tribunal que conoció del amparo o de la Corte, deberá decretarse el cumplimiento sustituto.

Como dije al tratar el recurso de queja, el cumplimiento defectuoso de los autos de suspensión o de las sentencias de amparo, por haberlos cumplido de más o de menos, en la realidad implica un incumplimiento de la responsable, razón por la cual es necesario que la sentencia o el auto de suspensión se cumplan cabalmente y ello sólo puede lograrse a través del incidente de ejecución, por eso es importante que en este capítulo se establezca que el incidente respectivo abarca el incumplimiento absoluto de las sentencias y del auto de suspensión, la repetición del acto reclamado, así como el incumplimiento parcial de dicha sentencia o auto. (Jorge Antonio Galindo Monroy, Tomo III, páginas 1651 y 1652)

---

ARTICULO 103.- En los casos a que se refiere el artículo 107, fracciones VII, VIII y IX de la Constitución Federal, luego que cause ejecutoria la sentencia en que se haya concedido el amparo o que se reciba el testimonio de la ejecutoria en revisión, se comunicará por oficio y sin

demora a las autoridades responsables para su cumplimiento. (David Ancira Martínez, Tomo III, página 1921)

---

**ARTÍCULO 104. \*(se suprime)** Cuando cause ejecutoria la sentencia en que se haya concedido el amparo solicitado, o que se reciba testimonio de la ejecutoria dictada en revisión, el Juez, o el magistrado del Tribunal Unitario de Circuito, la autoridad que haya conocido del juicio o el Tribunal Colegiado de Circuito, si se interpuso revisión contra la resolución que haya pronunciado en materia de amparo directo, la comunicará, por oficio y sin demora alguna, a las autoridades responsables para su cumplimiento y la harán saber a las demás partes.

En casos urgentes y de notorios perjuicios para el quejoso, podrá ordenarse por la vía telegráfica el cumplimiento de la ejecutoria, sin perjuicio de comunicarla íntegramente, conforme al párrafo anterior.

En el propio oficio en que se haga la notificación a las autoridades responsables, se les prevendrá que informen sobre el cumplimiento que se dé al fallo de referencia., dentro del término de veinticuatro horas siguientes a dicha notificación. (Oscar Barrera Garza, Tomo III, página 2211)

**Artículo 105. Si dentro de las veinticuatro horas siguientes a la notificación a las autoridades responsables la ejecutoria no quedare cumplida, cuando la naturaleza del acto lo permita, o no se encontrare en vías de ejecución en la hipótesis contraria, el juez de Distrito, la autoridad que haya conocido del juicio o el Tribunal Colegiado de Circuito, si se trata de revisión contra resolución pronunciada en materia de amparo directo requerirán, de oficio o a instancia de cualquiera de las partes, al superior inmediato de la autoridad responsable para que obligue a ésta a cumplir sin demora la sentencia; y si la autoridad responsable no tuviere superior, el requerimiento se hará directamente a ella. Cuando el superior inmediato de la autoridad responsable no atendiere el requerimiento, y tuviere, a su vez, superior jerárquico, también se requerirá a este último.**

### **PROPUESTAS**

**COMENTARIO: PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS EJECUTORIAS, EL PRIMERO PÁRRAFO NO SEÑALA CUÁL ES EL SIGNIFICADO DE LOS SUPUESTOS... "CUANDO LA NATURALEZA DEL ACTO LO PERMITA, O NO SE ENCONTRARE EN VÍAS DE EJECUCIÓN".**

**SI EL OBJETO DE CONCESIÓN DEL AMPARO ES RESTITUIR AL GOBERNADO EN EL GOCE DE LA GARANTÍA VIOLADA, Y HACERLO IMPLICA DILIGENCIA Y PRONTITUD. ES FUNDAMENTAL DETERMINAR**



EL SIGNIFICADO DE ESTOS SUPUESTOS, CUYA IMPRECISIÓN GENERA EXCESO Y DEFECTO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS EJECUTORIAS, PUES EN LA PRÁCTICA, EL TEMOR DE RETRASAR SU DILIGENCIA, ATROPELLA LOS TIEMPOS PREVISTOS EN LA LEY DE LA CUAL EMANA EL ACTO RECLAMADO. CONTEMPLADOS COMO NECESARIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LAS RESOLUCIONES. (José Francisco Becerril Mendoza, Tomo III, páginas 2048 y 2049)

---

Quando no se obedeciere la ejecutoria, a pesar de los requerimientos a que se refiere el párrafo anterior, el juez de Distrito, la autoridad que haya conocido del juicio o el Tribunal Colegiado de Circuito, en su caso, remitirán el expediente original a la Suprema Corte de Justicia, para los efectos del artículo 107, fracción XVI de la Constitución Federal, dejando copia certificada de la misma y de las constancias que fueren necesarias para procurar su exacto y debido cumplimiento, conforme al artículo 111 de esta Ley.

**Cuando la parte interesada no estuviere conforme con la resolución que tenga por cumplida la ejecutoria, se enviará también, a petición suya, el expediente a la Suprema Corte de Justicia. Dicha petición deberá presentarse dentro de los cinco días siguientes al de la notificación de la resolución correspondiente; de otro modo, ésta se tendrá por consentida.**

**El quejoso podrá solicitar que se dé por cumplida la ejecutoria mediante el pago de los daños y perjuicios que haya sufrido. El juez de Distrito, oyendo incidentalmente a las partes interesadas, resolverá lo conducente. En caso de que proceda, determinará la forma y cuantía de la restitución.**

### **PROPUESTAS**

**El segundo supuesto de procedencia de la queja se da cuando lo que se recurre es una determinación de la autoridad responsable, caso en que procede la queja por exceso o defecto en el cumplimiento de las resoluciones sobre suspensión provisional o definitiva y sentencias que conceden el amparo, así como falta de cumplimiento al auto de libertad bajo caución; en estos casos la queja no constituye técnicamente un recurso, pues procesalmente éstos proceden contra las autoridades que tramitan un juicio y no contra los actos realizados por las partes en ese procedimiento, como es el caso de las autoridades responsables en el juicio de amparo; además, en los recursos se actualiza una extensión del problema tratado en la determinación recurrida, es decir, la litis analizada en el acto recurrido**

debe analizarse nuevamente en el recurso, para determinar si fue correcta o no la resolución que se combate; esto no sucede en el caso de la queja cuando se promueve contra actos de la autoridad responsable, como se verá a continuación.

Si en este caso la queja no es en realidad un recurso, queda el problema de determinar su naturaleza procesal, con relación a la cual y toda vez que el elemento común en estas situaciones es la pretensión del recurrente de que se declare el incumplimiento o desobediencia que se imputa a la autoridad responsable respecto de las determinaciones tomadas por las autoridades federales en el trámite y resolución de un juicio de amparo, debe considerarse que la naturaleza de la institución es la de un incidente de incumplimiento o desobediencia, con una litis propia que versa únicamente sobre la obediencia de la responsable a las determinaciones federales y no un recurso, pues como resultado de la queja se obtiene una declaración de que la conducta de la autoridad responsable se adecua o no a lo ordenado dentro de un juicio de amparo, pero no puede obtenerse ninguna modificación a determinación alguna dictada dentro de ese juicio por la autoridad que lo tramite o haya tramitado.

La concepción anterior armoniza las instituciones previstas en la ley de Amparo con relación al cumplimiento de las ejecutorias, cuya naturaleza de incidente ha sido definida ya en la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la

página 195, Tomo II, octubre de 1995, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo texto es como sigue<sup>73</sup>:

"INEJECUCION DE SENTENCIA. QUEDA SIN MATERIA EL INCIDENTE CUANDO LOS ACTOS DENUNCIADOS COMO REPETICION DE LOS RECLAMADOS HAN QUEDADO SIN EFECTO. Cuando los actos denunciados como repetición de los reclamados en un juicio de garantías en que se concedió el amparo al quejoso, hayan quedado sin efecto en virtud de una resolución posterior de la autoridad responsable a la que se le atribuye la repetición de dichos actos, el incidente de inejecución de sentencia queda sin materia, al no poderse hacer un pronunciamiento sobre actos insubsistentes."

Así como en la jurisprudencia sustentada por la anterior Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 303, Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, cuyo texto es como sigue<sup>74</sup>:

"REPETICION DEL ACTO RECLAMADO, INCIDENTE DE. QUEDA SIN MATERIA SI EN EJERCICIO DE SU COMPETENCIA EL SUPERIOR JERARQUICO DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE DEJA SIN EFECTO EL ACTO QUE LE DIO ORIGEN. Si durante el trámite del incidente de inejecución de sentencia por repetición del acto reclamado, la autoridad competente superior jerárquico de la autoridad responsable emite una resolución mediante la cual deja sin efectos la que dio origen a dicho

---

<sup>73</sup> Poder Judicial de la Federación, México, IUS 7, 1997, CD-ROM.

<sup>74</sup> Poder Judicial de la Federación, México, IUS 7, 1997, CD-ROM.

incidente y se restablecen las cosas al estado que tenían antes de la violación de garantías, sin que la quejosa haga manifestación alguna, no obstante la vista que se le dio con la resolución de mérito, como el propósito del artículo 108 de la Ley de Amparo no es el de que se llegue a la imposición de las sanciones ahí especificadas, sino el de que las sentencias de amparo sean debidamente cumplidas, resulta indudable que el incidente de que se trata ha quedado sin materia al quedar sin efectos jurídicos el acto que le dio origen, siendo suficiente para arribar a esta conclusión, el que la autoridad responsable lo haya manifestado así y su dicho se apoye con las copias certificadas de la resolución correspondiente, sin que sea necesario que el quejoso exprese su conformidad por escrito, si el mismo fue debidamente notificado y nada expuso en contrario."

Considerar los casos de queja por exceso, defecto o desobediencia, como presupuestos para el trámite de un incidente, traería como consecuencia la posibilidad, para la parte afectada, de ofrecer y desahogar pruebas para demostrar sus afirmaciones, sin quedar sujeta al informe que rinda la autoridad responsable, lo que garantizaría el respeto a las formalidades esenciales del procedimiento tal como éstas han sido consideradas en la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 133, tomo II, diciembre de 1995, Novena Epoca del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo texto es como sigue<sup>75</sup>:

---

<sup>75</sup> Poder Judicial de la Federación, México, IUS 7, 1997, CD-ROM.

“FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga "se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento". Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado.”

Cuando la queja se promueve contra determinaciones de la autoridad responsable, se advierte que el Juez de Distrito o el Tribunal Colegiado de Circuito, que haya tramitado el juicio de amparo indirecto o directo, resuelve en primera instancia sobre la desobediencia alegada por el recurrente, y corresponde siempre a la Suprema Corte resolver la cuestión en última instancia, mediante el recurso de inconformidad o la *“queja de queja”*.<sup>76</sup>

---

<sup>76</sup> Artículo 95, fracción V, de la Ley de Amparo.

Todos los demás casos de procedencia de la queja se refieren a resoluciones de las autoridades responsables, que implican el análisis de la obediencia o desobediencia de dichas responsables a las determinaciones dictadas dentro de los juicios de amparo, ya sea directo o indirecto, y por lo mismo su naturaleza no es de resoluciones dictadas dentro del juicio de amparo por la autoridad que lo tramita, sino que constituyen conflictos autónomos sobre la conducta de una de las partes en el citado juicio (la autoridad responsable) en relación con las determinaciones de la autoridad que lo tramita; luego, contra ellas técnicamente no procede un recurso, y por lo mismo, la controversia sobre su obediencia o desobediencia a las determinaciones pronunciadas dentro del juicio de amparo constituyen una litis autónoma de la constitucional que se dirime en el juicio de garantías, por lo que su resolución debe darse en forma incidental, pues es innegable su estrecha relación con el juicio de garantías propiamente dicho, a fin de que se decida sobre la desobediencia imputada por el interesado a la autoridad responsable, incidente dentro del cual debe pronunciarse una resolución de la autoridad que tramitó el juicio de amparo, por ser quien emite la determinación cuya desobediencia se estudia, independientemente de que contra dicha resolución proceda el recurso de revisión, pues se trataría de una interlocutoria dictada en un incidente, solución que mantiene la coherencia lógica del sistema de recursos.

Lo anterior justificaría, además, la eliminación del recurso de inconformidad que actualmente establece el artículo 105 de la Ley de Amparo y que contradice lo dispuesto por el artículo 82, que establece como recursos en el juicio de amparo únicamente la queja, la revisión y la reclamación, sin mencionar la inconformidad.

## **2. El recurso de inconformidad**

Por lo que hace a la inconformidad, actualmente se establece contra las resoluciones dictadas en el incidente de inejecución de sentencia, pero su naturaleza es, al igual que la revisión, la de una apelación; es decir, la apertura de la segunda instancia para que el superior jerárquico, en este caso la Suprema Corte, confirme, modifique o revoque la resolución del inferior, incluso con litis abierta porque el tribunal Ad Quem puede investigar e integrar más elementos de convicción que los aportados en primera instancia y resolver libremente, sin sujetarse a los términos de la promoción de inconformidad.

Por ello, como ya precisamos, consideramos que debe eliminarse como figura autónoma e incluirse dentro de los casos de procedencia del recurso de revisión, para mantener la coherencia y unidad del sistema de recursos.

Uno de los principales problemas del juicio de amparo es obtener el cumplimiento completo y correcto de las ejecutorias en las que se concede la protección federal contra leyes y actos inconstitucionales.

En el sistema de la ley de amparo actual, existen varias figuras relacionadas con el tema apuntado y, si bien todas tienden a lograr la ejecución de las sentencias, los medios previstos se encuentran desarticulados, ya que cada uno de ellos tiene como materia diferentes aspectos, al grado tal que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que cada medio es autónomo y excluyente de los demás:



"SENTENCIAS DE AMPARO. PROCEDIMIENTOS PREVISTOS EN LA LEY DE AMPARO PARA LOGRAR SU CUMPLIMIENTO. El sistema dispuesto por la Ley de Amparo para lograr el cumplimiento de las sentencias que concedan la Protección Federal se compone de diversos procedimientos, excluyentes entre sí, cuya procedencia depende de que se actualice alguno de los siguientes supuestos: 1o. Desacato a la sentencia de amparo cuando la autoridad responsable, abiertamente o con evasivas, se abstiene totalmente de obrar en el sentido ordenado por la sentencia, o bien no realiza la prestación de dar, hacer o no hacer que constituye el núcleo esencial de la garantía que se estimó violada en la sentencia, sino que desarrolla actos que resultan intrascendentes, secundarios o poco relevantes para dicho cumplimiento. En este supuesto: a) Si el juez o tribunal que conoce del asunto declara que no se ha cumplido la sentencia a pesar de los requerimientos dirigidos a la autoridad responsable y a su superior jerárquico (artículo 105, primer párrafo), remitirá de oficio el asunto a la Suprema Corte, iniciándose el incidente de inejecución (artículo 105, segundo párrafo) que puede conducir a la destitución de la autoridad responsable en términos del artículo 107, fracción XVI, constitucional; b) Si el juez o tribunal resuelve que la responsable cumplió la sentencia, procede la inconformidad en contra de su decisión (artículo 105, tercer párrafo), cuya resolución podría conducir a la destitución de la autoridad responsable y su consignación ante un juez de Distrito, si la Suprema Corte comprueba que ésta incurrió en evasivas o procedimientos ilegales para incumplir, dando la apariencia de acatamiento; c) Si el quejoso elige que la sentencia de amparo se dé por cumplida mediante el pago de una indemnización, procede el incidente de pago de daños y perjuicios (artículo 105, último

párrafo). 2o. Cumplimiento excesivo o defectuoso de la sentencia de amparo. En este supuesto, el quejoso puede acudir al recurso de queja en contra de los actos de la autoridad responsable (artículo 95, fracciones II y IV) y en contra de la resolución que llegue a dictarse, procede el llamado recurso de queja de queja (artículo 95, fracción V), cuya resolución no admite a su vez medio de impugnación alguno. 3o. Repetición del acto reclamado cuando la autoridad reitera la conducta declarada inconstitucional por la sentencia de amparo. En este supuesto: a) Si el juez o tribunal resuelve que la autoridad incurrió en esta repetición, procede el envío de los autos a esta Suprema Corte para que determine si es el caso de imponer la sanción de destitución y su consignación ante un juez de Distrito; b) Si el juez o tribunal resuelve que la autoridad no incurrió en repetición del acto reclamado, procede la inconformidad en contra de su decisión (artículo 108), cuya resolución podría conducir, en caso de ser fundada, y una vez agotados los trámites legales, a la destitución de la autoridad y a la consignación señalada. En estos supuestos, los procedimientos que podrían conducir a la destitución de la autoridad responsable se tramitarán sin perjuicio de las medidas que deban tomarse hasta obtener el cumplimiento del fallo protector.” (Pleno. Incidente de inconformidad 114/94. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Epoca, Tomo II, octubre de 1995, p. 160).

Lo anterior provoca que se complique innecesariamente la solución al problema fundamental: obtener el cumplimiento de las sentencias o, dicho de otra forma, determinar si alguna autoridad ha obedecido la sentencia de amparo o no y, en su caso, obligarla a cumplirla.

Sin embargo, consideramos que no debe perderse de vista que no sólo la sentencia que concede el amparo debe ser cumplida por las autoridades responsables y sus subalternas, sino otras resoluciones dictadas dentro del juicio, como los autos de suspensión, tanto de oficio como provisional y definitiva, consideramos conveniente ampliar el concepto al de cumplimiento de las determinaciones tomadas dentro del juicio de amparo.

Por otra parte, tanto en la inejecución como en el exceso o defecto en el cumplimiento y en la repetición del acto reclamado, el problema fundamental es el mismo: determinar si la autoridad responsable ha obedecido o no alguna determinación dictada dentro del juicio de amparo; el hecho de que la desobediencia sea total (inejecución), se manifieste en un exceso o defecto (queja) o se manifieste insistiendo en volver a realizar un acto ya declarado inconstitucional (repetición), resulta un aspecto de naturaleza secundaria, pues en todos ellos subyace la falta de respecto de la autoridad responsable y sus subalternas hacia las determinaciones tomadas por el juez o tribunal que conoce del juicio de garantías.

Ello nos lleva a considerar una alternativa al tratamiento de este problema.

Partiendo de la base de que, como ya precisamos al hablar de la queja por exceso o defecto, así como del recurso de inconformidad, los actos y omisiones de las autoridades responsables no pueden ser objeto de recurso dentro del juicio de amparo, puesto que tales autoridades son partes en dicho procedimiento.

En la teoría del derecho procesal general se admite que la ejecución de una sentencia es materia de un incidente, normalmente denominado incidente de ejecución, en el que se llevan a cabo los actos necesarios para obtener el cumplimiento de la resolución dictada en el juicio; este incidente se encuentra previsto actualmente en el artículo 105 de la Ley de Amparo.

Las consecuencias de que no se cumpla con la sentencia de amparo varían según se trate de un incumplimiento total, caso en el que se envían los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien debe aplicar una sanción extrema: la separación del cargo y la consignación ante un juez de Distrito; la gravedad de la sanción indicada ha provocado que, en la práctica, no se aplique y nuestro Máximo Tribunal se vea en la necesidad de gestionar en vía *“administrativa”* y *“pedir por favor”* a las autoridades que cumplan con las ejecutorias, lo que, a la vez que daña la imagen de la Suprema Corte y del Poder Judicial de la Federación, ocasiona que las autoridades ordinarias, sobre todo de tipo administrativo, pierdan el respeto que deberían guardar hacia los tribunales federales cuando actúan como órganos de control de constitucionalidad.

Si el problema es un cumplimiento inadecuado, por exceso o defecto en la actuación de la autoridad responsable, se combate mediante el *“recurso”* de queja que ya hemos examinado y para promoverlo se tiene el plazo de un año, que consideramos excesivo y contrario al principio de seguridad jurídica.

Finalmente, la repetición del acto reclamado también es motivo a la separación del cargo y a la consignación ante el juez de Distrito.

Ahora bien, la disgregación normativa de estos medios provoca que la solución al problema se complique y dilate, pues si se incumple por completo una ejecutoria, después de tramitar el incidente de inejecución, se obtiene un acto de la autoridad responsable que deja sin materia dicho incidente, sin que en él pueda examinarse si el cumplimiento es correcto o se incurrió en exceso o defecto, y algo parecido ocurre en la repetición del acto reclamado.

Insistimos en que la naturaleza de fondo del problema consiste en determinar si la autoridad responsable obedece o no las determinaciones dictadas dentro del juicio de amparo, por lo que proponemos la integración de todos los medios previstos actualmente en la Ley de Amparo sobre este tema, en un sólo incidente al que podría denominarse incidente de desobediencia, en el que la parte interesada pueda gestionar la determinación de que se ha incurrido en desobediencia, sea total (inejecución y repetición) o parcial (exceso o defecto) y la aplicación de sanciones graduales que verdaderamente obliguen a las autoridades responsables a cumplir con las determinaciones dictadas en los juicios de garantías.

La tramitación de dicho incidente deberá corresponder a la autoridad que haya conocido del juicio y, por ser un incidente, la interlocutoria que lo resuelva sería impugnabile por medio del recurso de revisión, lo que mantendría la sencillez del sistema de recursos.

Por otra parte, la posibilidad de imponer una sanción fija: la separación del cargo y la consignación, limita las posibilidades reales de obtener el cumplimiento de las resoluciones de amparo, puesto que la propia gravedad de la sanción ocasiona que no se aplique.

Por ello proponemos que la separación del cargo y la consignación se mantenga como sanción máxima, pero que se complemente con sanciones económicas (multas) graduales.

Así, dictada una resolución en el juicio de amparo y agotado el plazo para su cumplimiento, de oficio o a petición de la parte interesada se abrirá el incidente de desobediencia, dentro del cual se pedirá informe a la responsable para que pueda justificar su proceder; esto en virtud de que como parte dentro del juicio goza de la garantía de audiencia.

Por tratarse de un incidente, las partes podrían aportar pruebas (otro elemento esencial de la garantía de audiencia), para lo cual se señalaría una audiencia incidental de pruebas, alegatos y resolución.

Si se resolviera que la autoridad responsable ha incurrido en desobediencia a la determinación dictada dentro del juicio de garantías, se le requeriría para que en el plazo de tres días justifique haber dado cumplimiento correcto a la resolución, realizando los actos conducentes o anulando los que fuera necesario.

Además, al determinarse que existió desobediencia, deberá imponerse una sanción al servidor público titular del órgano de autoridad desobediente; la sanción podría consistir en una multa de diez a quinientos días de salario; consideramos que estos límites permitirían sancionar adecuadamente la desobediencia, atendiendo a su gravedad, sin dejar de ser un castigo de cierta relevancia.

Si a pesar de ese primer requerimiento no se obtuviera el cumplimiento correcto de la ejecutoria, sea por omisión total o porque el cumplimiento sea defectuoso o excesivo, el tribunal que conozca del incidente deberá calificar este último aspecto, en su caso, y podrá requerir por una segunda ocasión a la responsable para que cumpla correctamente con la resolución.

Dado que a estas alturas ya estaría determinado que existió desobediencia por parte de la autoridad responsable, y que ésta subsiste, en los mismos términos o con variantes secundarias, como podría ser el exceso o defecto en el cumplimiento, al hacerse el segundo requerimiento deberá imponerse una segunda multa, esta vez de quinientos a mil días de salario, procediéndose a continuación en los mismos términos previstos para el primer requerimiento.

Si a pesar del segundo requerimiento no se obtuviera el cumplimiento correcto de la resolución de amparo, deberá determinarse así y aplicar la sanción máxima: separar del cargo al servidor público responsable de la desobediencia y consignarlo ante el juez de Distrito que corresponda, para ser sancionado conforme al Código Penal para el Distrito Federal.

Ahora bien, dado que la pena por el delito de desobediencia establecida en el Código Penal no es demasiado elevada, consideramos que deberá complementarse con la inhabilitación para ocupar cualquier empleo, cargo o comisión públicos, que podría ir de uno a diez años.

También debería establecerse que el pago de las multas impuestas en el incidente de desobediencia se cubran con el patrimonio personal del servidor público responsable y prohibirse expresamente que se apliquen recursos públicos para cubrirlas, pues de otra forma los responsables no son los que cumplen las sanciones impuestas.

Nuestro Máximo Tribunal ha establecido que cuando cambian los servidores públicos titulares de los órganos que deben cumplir las resoluciones de amparo, debe requerirse nuevamente su cumplimiento; esto debería establecerse expresamente en la ley pero, además, debería también precisarse que el cambio de los titulares no impida que se ejecuten las sanciones aplicadas a los titulares substituidos, a fin de evitar que por este medio se burle el cumplimiento de las determinaciones de amparo.

Finalmente, dado que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sido reconocida como tribunal de constitucionalidad, consideramos que el recurso de revisión contra las resoluciones dictadas en el incidente de desobediencia deberá ser competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito y sólo se reservaría a nuestro Máximo Tribunal el conocimiento del recurso contra la aplicación de la sanción máxima consistente en la separación del cargo, la consignación y la inhabilitación.



Por lo antes expuesto, propongo que se reestructure el sistema de recursos de la Ley de Amparo en los siguientes aspectos:

1. Eliminar la queja como recurso autónomo.
2. Los casos actualmente previstos como supuesto de procedencia de la queja, en que se recurren determinaciones de los Tribunales Unitarios de Circuito, de los Jueces de Distrito o de la autoridad que conoce del juicio conforme al artículo 37 de la Ley de Amparo, deben incluirse dentro de los casos de procedencia del recurso de revisión.
3. Los casos previstos actualmente como hipótesis de procedencia del recurso de queja, en que se recurren actos de autoridades responsables, deberán trasladarse al capítulo dedicado a los problemas de incumplimiento o desobediencia de las determinaciones dictadas en los juicios de amparo.
4. Eliminar el recurso de inconformidad y sustituirlo por la revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, generalizando la procedencia de la revisión contra todas las resoluciones interlocutorias que se pronuncien en un juicio de amparo.
5. Establecer el *"incidente de desobediencia"* como figura procesal autónoma, para determinar si una autoridad, distinta a la que tramita el juicio de amparo, incurre en exceso, defecto o incumplimiento de una determinación dictada en un juicio de amparo, o no, debiéndose incluir en el

mismo los problemas de repetición de acto reclamado; contra la determinación que resuelva dicho incidente procederá la revisión, por tratarse de una interlocutoria.

6. Implementar un sistema de sanciones progresivas a la desobediencia: una primera multa de diez a quinientos días de salario; una segunda multa de quinientos a mil días de salario y, finalmente, la sanción máxima sería la separación del cargo y la inhabilitación por uno a diez años, para ocupar cualquier empleo, cargo o comisión públicos, seguidas de la consignación ante el Juez de Distrito para ser juzgado por desobediencia.

7. Establecer que las multas serán pagadas del patrimonio del servidor público sancionado y prohibir que se apliquen a ellas recursos públicos. (Germán Eduardo Baltazar Robles, Tomo I, páginas 52 a 57, 59 a 60, 69 a 79)

---

ADICIONAR UN CUARTO PARRAFO AL ARTICULO 105 DE LA LEY DE AMPARO, PASANDO EL ACTUAL PARRAFO A SER EL QUINTO PARRAFO DEL PROPIO ARTICULO, PARA QUEDAR COMO SIGUE:

“ARTICULO 105.- .....

.....

Si se estima que la inconformidad anterior careció de motivo, se impondrá al promovente o a su abogado, o a ambos, una multa de diez a ciento veinte días de salario.

El quejoso .....

....."

### MOTIVO

Se ha podido apreciar que al no haber sanción para la información en contra de la resolución que tiene por cumplida una ejecutoria, está se utiliza sin medida, y la sanción propuesta es igual a la señalada en el último párrafo del Artículo 104.(Armando Díaz Olivares, Tomo I, página 95)

---

Pasando a otra cuestión, los artículos 104 y 105 de la Ley de Amparo al referirse al cumplimiento de las sentencias, obligan a hacerlo dentro de un término de 24 horas a partir de la fecha en que se les comunique, plazo que me parece es demasiado breve basándome también en el cúmulo de asuntos que manejan muchas de esas autoridades, especialmente las judiciales y, en muchos otros casos, la falta de medios para la ejecución.

En relación a esto, propongo la modificación de ese término, a cinco días.(Ma. De los Angeles Eduwiges Chavira Martínez, Tomo I, páginas 455 y 456)

3.- Dispone el artículo 107 Constitucional en su fracción XVI segundo párrafo:

107.-

XVI: -----

“Cuando la naturaleza del acto lo permita, la Suprema Corte de Justicia, una vez que hubiera determinado el incumplimiento o repetición del acto reclamado, podrá disponer de oficio el cumplimiento sustituto de las sentencias de amparo, cuando su ejecución afecte gravemente a la sociedad o a terceros en mayor proporción que los beneficios económicos que pudiera obtener el quejoso, Igualmente, el quejoso podrá solicitar ante el órgano que corresponda, el cumplimiento sustituto de la sentencia de amparo, siempre que la naturaleza del acto lo permita.”

Lo anterior no ha sido aun establecido como tal en la Ley Reglamentaria, puesto que el texto del artículo 105 de la Ley de Amparo en su último párrafo dice:

105.-----

-----

-----

“El quejoso podrá solicitar que se dé por cumplida la ejecutoria mediante el pago de los daños y perjuicios que haya sufrido. El juez de Distrito, oyendo incidentalmente a las partes interesadas, resolverá lo conducente. En caso de que proceda, determinará la forma y cuantía de la restitución.”

Lo anterior genera una antinomia, fácil de resolver en cuanto a los principios de hermenéutica aplicables, pero que hace oscura la ley y permite confusiones. La restitución en el goce de las Garantías, en ocasiones, puede afectar a terceros o generar un desequilibrio entre la pretensión del quejoso y las consecuencias ocasionadas por el acatamiento del fallo. En otras ocasiones, la ejecución sustituta permite una restitución más adecuada y congruente con la realidad. Por tanto, se sugiere modificar el artículo 105 de la Ley de Amparo en su último párrafo para quedar como sigue:

105.-----

-----

-----

“Cuando la naturaleza del acto lo permita, la Suprema Corte de Justicia, una vez que hubiera determinado el incumplimiento o repetición del acto reclamado, podrá disponer de oficio el cumplimiento sustituto de las sentencias de amparo, cuando su ejecución afecte gravemente a la sociedad o a terceros en mayor proporción que los beneficios económicos que pudiera obtener el quejoso. Igualmente, el quejoso podrá solicitar que se dé por cumplida la ejecutoria mediante el pago de los daños y perjuicios que haya sufrido. El juez de Distrito, oyendo incidentalmente a las partes interesadas, resolverá lo conducente, siempre que la naturaleza del acto lo permita.” (Jorge Chessal Palau, Tomo II, páginas 790 a 792)

\_\_\_\_\_

La oposición de que se haga por parte del quejoso en los términos de los artículos 105 y 108, a la sentencia que tenga por cumplida la de amparo, debe integrarse al capítulo de recursos, como una queja.( **Jesús A. Arroyo Moreno, Tomo II, página 1096**)

---

Por último, la reforma del artículo 107, fracción XVI de 1994, no fue feliz, en dos aspectos:

\* La caducidad del procedimiento, que ya he dicho jamás debe existir.

La facultad que se otorga a la Suprema Corte para disponer de oficio que haya cumplimiento sustituto en las sentencias, por varias razones: porque no siempre la violación de garantías se traduce en un beneficio económico; porque de esa manera queda impune la autoridad que cometió la violación de garantías, pues ni se le separa del cargo, ni es consignada, con lo que se fomenta la violación de los preceptos constitucionales y porque se dispone de un bien del quejoso sin su anuencia, lo que es violatorio del artículo 14 de la Constitución, aun cuando la reforma la haya hecho el Constituyente Permanente. ( **Jesús A. Arroyo Moreno, Tomo II, páginas 1096 y 1097**)

---

Enmienda.

SE PROPONE LA INCLUSIÓN DEL ARTÍCULO 105 BIS, CON LA SIGUIENTE REDACCIÓN:

ART. 105 BIS.- CUANDO LA EJECUTORIA CONSTITUYA JURISPRUDENCIA, SE ORDENARÁ A LA AUTORIDAD RESPONSABLE, QUE DEROGUE O ABROGUE LA LEY, REGLAMENTO O DISPOSICIÓN DE ALCANCE GENERAL DECLARADOS INCONSTITUCIONALES.

Motivos.

POR RESPETO AL PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES QUE RIGE NUESTRO ORDEN CONSTITUCIONAL, ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 49 DE LA CARTA MAGNA, CORRESPONDE AL PODER ENCARGADO DE LA FUNCIÓN LEGISLATIVA, COMO UNO DE LOS DEPOSITARIOS DE LA SOBERANÍA DEL PUEBLO MEXICANO, COMO CREADOR VÍA PROCESO LEGISLATIVO, DE LA LEY DECLARADA INCONSTITUCIONAL, SUPRIMIR PARCIAL O TOTALMENTE SU VIGENCIA, YA QUE AL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN LE CORRESPONDE EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL. (Fidencio Ramírez y Fidel Herrera Beltrán , Tomo II, páginas 1156 y 1157)

---

Señalamiento de un término adecuado para el cumplimiento de ejecutorias emitidas en los juicios de amparo.

Al respecto, proponemos la modificación de los artículos 105. 106 y 107 de la Ley de Amparo, que establecen un término perentorio de 24 horas para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo; lo que es imposible de

acatar en materia laboral, cuando se trata de dictar un nuevo laudo, lo que requiere un lapso de varios días, conforme a lo dispuesto en los artículos 888, 889 y 890 de la Ley Federal del Trabajo.(Antonio Montes Peña, Tomo II, página 1256)

---

Se estima prudente incluir en el capítulo relativo a la ejecución de sentencias concesorias de amparo la facultad del Juez de Distrito para iniciar de oficio el incidente de cumplimiento sustituto en el caso de que las autoridades responsables hayan alegado y demostrado que existe imposibilidad jurídica o material para cumplir con la sentencia de amparo. (Emilio Alberto Hassey Domínguez, Tomo III, página 1609)

---

La fracción IX del artículo 73 de la Ley de Amparo señala la improcedencia del juicio de garantías cuando se haya consumado de manera irreparable el acto de autoridad, situación que es lógica si se toma en cuenta que el objeto de las sentencias de amparo es restituir al quejoso en el estado en que se encontraba antes de cometerse la violación. No obstante ello el último párrafo del artículo 105 de la Ley de Amparo permite el cumplimiento sustituto de la sentencia de amparo, es decir en lugar de restituir al quejoso en el estado en que se encontraba antes de que se violaran sus garantías individuales, la ejecución de la sentencia de amparo se haría liquidando los daños y perjuicios que causó al quejoso el acto de autoridad violatorio de sus garantías.



Si bien estoy de acuerdo con el cumplimiento sustituto como un caso de excepción<sup>77</sup>, creo que deberían limitarse los casos en los que procede, pues en la ley no se establecen. (Jorge Antonio Galindo Monroy, Tomo III, página 1638)

---

ARTICULO.- Si dentro de las veinticuatro horas siguientes a la notificación de las autoridades responsables la ejecutoria no quedare cumplida, se remitirá el expediente original a la Suprema Corte de Justicia, para los efectos del artículo 107, fracción XVI de la Constitución Federal, dejando copia certificada de los mismos y de las constancias que fuesen necesarias para procurar su exacto y debido cumplimiento.

Cuando la parte quejosa no estuviere conforme con la resolución que tenga por cumplida la ejecutoria, se enviará también, a petición suya, el expediente a la Suprema Corte de Justicia. Dicha petición deberá presentarse dentro de los cinco días siguientes al en que surta efectos la notificación de la resolución correspondiente, de no hacerlo, se dará vista al Ministerio Público, para los efectos previstos en el artículo 113 de esta Ley.

Se podrá solicitar que se de por cumplida la ejecutoria mediante el pago de daños y perjuicios. El Juez de Distrito oyendo incidentalmente a la interesada resolverá lo conducente. En caso de que proceda, determinará la forma y cuantía.

---

<sup>77</sup> Recuérdese que por decreto del 30 de diciembre de 1983, se adicionó el último párrafo del artículo 105 de la Ley de Amparo pues hubo varias ocasiones en que el poder judicial federal con motivo de la concesión del amparo ordenó la restitución de tierras al quejoso, pero el cumplimiento de dicha sentencia era imposible porque las tierras habían sido invadidas por cientos de familias o

**MOTIVOS.-** Se ha observado que las ejecutorias de amparo tardan en cumplirse con motivo de los requerimientos a los superiores jerárquicos e inclusive por el cambio del titular encargado de cumplimentar el fallo. Por ello, en el precepto se elimina el innecesario procedimiento de dar vista a los superiores jerárquicos y así fortalecer a la institución de amparo.

Por último, se fortalece a la institución del Ministerio Público al darle participación con el no desahogo del auto que tiene por cumplida la ejecutoria. **(David Ancira Martínez, Tomo III, páginas 1921 y 1922)**

---

**AHORA BIEN, RESPECTO AL ÚLTIMO PÁRRAFO, LA LEY DEBE DETERMINAR CON CLARIDAD, CUÁL ES EL SUPUESTO EN EL QUE EL QUEJOSO PUEDE SOLICITAR QUE LA SENTENCIA DE AMPARO SE DE POR CUMPLIDA MEDIANTE EL PAGO DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS, LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES, Y SI EL JUEZ DE DISTRITO ES LA ÚNICA AUTORIDAD QUE PUEDE RESOLVER ESTA CAUSA. DE OTRO MODO, QUEDA A LA PRAGMÁTICA INTERPRETACIÓN DEL JUZGADOR Y NO A LA LITERALIDAD DE LA NORMA. (José Francisco Becerril Mendoza, Tomo III, página 2049)**

---

**SEGUNDA.-** Derogar del artículo 107 constitucional en su Fracción XVI, segundo párrafo, parte in fine que expresa:

---

revendidas, etc., y entonces para resolver el cumplimiento de estas sentencias se optó por el cumplimiento sustituto

---

“Igualmente, el quejoso podrá solicitar ante el órgano que corresponda, el cumplimiento sustituto de la sentencia de amparo, siempre que la naturaleza del acto lo permita.”

Lo anterior, por contrario al interés público y social y, por ende, a la naturaleza jurídica del juicio constitucional.

Por otro lado, se debe derogar del artículo 105 de la Ley de Amparo, en su último párrafo, el cual se refiere al cumplimiento sustituto de ejecución de sentencias federales por contravenir lo dispuesto por el artículo 80 de ese mismo ordenamiento jurídico, así como la ratio essendi de la misma ley.

Cabe señalar que dicho párrafo expresa:

“El quejoso podrá solicitar que se dé por cumplida la ejecutoria mediante el pago de los daños y perjuicios que haya sufrido. El juez de distrito, oyendo incidentalmente a las partes interesadas, resolverá lo conducente. En caso de que proceda, determinará la forma y cuantía de la restitución”.

Atento a lo anterior, podemos aseverar que en caso de seguirse observando dicho precepto se estará beneficiando únicamente a un individuo lo cual es contrario al bien común que es lo que persigue nuestra Ley de Amparo. **(Mario Luis Pérez Méndez, Tomo III, páginas 2061 y 2062)**

**Del pago de daños y perjuicios en ejecución de sentencia.**

**TEXTO ACTUAL.** El quejoso podrá solicitar que se dé por cumplida la ejecutoria mediante el pago de los daños y perjuicios que haya sufrido. El juez de Distrito, oyendo incidentalmente a las partes interesadas, resolverá lo conducente. En caso de que proceda, determinará la forma y cuantía de la restitución.

**JUSTIFICACIÓN.** Nuevamente insistimos en que los conceptos deben tender a una protección eficaz de las garantías individuales, por lo que la reparación mediante el pago de daños y perjuicios debe suprimirse. (Luis Orlando Hernández, Tomo III, página 2080)

En dicho precepto encontramos el procedimiento para hacer el cumplimiento de las ejecutorias y que de su simple lectura pudiera advertirse que es muy contundente y que debido a ello las autoridades responsables que incumplen pudieran incluso ser separadas de su cargo, sobre todo cuando en dicho precepto se habla de un término de 24 horas, el cual debe permanecer por la premura del cumplimiento.

Sin embargo, es conocido de todos que la realidad se aparta totalmente a lo que contempla dicho precepto ya que tanto en los Juzgados de Distrito como en los Tribunales Colegiados de Circuito existen innumerables resoluciones que tienen más de dos años y aun se encuentran en la fase de incumplimiento. De ahí que consideramos que el

precepto a estudio se aplique con todo rigor y que deje de ser letra muerta, es decir no proponemos reforma a su contenido sino que sólo solicitamos su aplicación a fin de que éste no quede sólo utilizado como doctrina en las cátedras de amparo. (Ignacio Quesada Castillo, Tomo III, páginas 2118 y 2119)

---

ARTÍCULO 105. Si dentro de las veinticuatro horas siguientes a la notificación a las autoridades responsables la ejecutoria no quedare cumplida, cuando la naturaleza del acto lo permita, o no se encontrare en vías de ejecución en la hipótesis contraria, el Juez de Distrito, el magistrado del Tribunal Unitario de Circuito, la autoridad que haya conocido del juicio o el Tribunal Colegiado de Circuito, si se trata de revisión contra resolución pronunciada en materia de amparo directo requerirán, de oficio o a instancia de cualquiera de las partes, al superior jerárquico de la autoridad responsable para que obligue a ésta a cumplir sin demora la sentencia; y si la autoridad responsable no tuviere superior, el requerimiento se hará directamente a ella. Cuando el superior inmediato de la autoridad responsable no atendiere el requerimiento, y tuviere, a su vez, superior jerárquico, también se requerirá a este último.

Cuando no se obedeciere la ejecutoria, a pesar de los requerimientos a que se refiere el párrafo anterior, el Juez de Distrito, el magistrado del Tribunal Unitario de Circuito, la autoridad que haya conocido del juicio o el Tribunal Colegiado de Circuito, en su caso, declarará el incumplimiento y remitirá el expediente original a la Suprema Corte de Justicia, para los efectos del artículo 107, fracción XVI de la Constitución Federal, dejando

copia certificada de la misma y de las constancias que fueren necesarias para procurar su exacto y debido cumplimiento, conforme al artículo 111 de esta ley.

Cuando la parte interesada no estuviere conforme con la resolución que tenga por cumplida la ejecutoria, se enviará también, a petición suya, el expediente a la Suprema Corte de Justicia. Dicha petición deberá presentarse dentro de los cinco días siguientes al de la notificación de la resolución correspondiente; de otro modo, ésta se tendrá por consentida.

El quejoso podrá solicitar que se dé por cumplida la ejecutoria mediante el pago de los daños y perjuicios que haya sufrido ,siempre y cuando la naturaleza del acto reclamado lo permita. El Juez de Distrito o el magistrado del Tribunal Unitario de Circuito, oyendo incidentalmente a las partes interesadas, resolverá lo conducente. En caso de que proceda, determinará la forma y cuantía de la restitución.

Si la autoridad responsable carece de medios económicos para cubrir la indemnización a que se haga acreedor el agraviado, deberá notificarlo inmediatamente al órgano de control constitucional para que éste ordene su cumplimiento por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables. (Oscar Barrera Garza, Tomo III, páginas 2212 y 2213)

---

Igualmente debe de acontecer con el cumplimiento y ejecución de las sentencias de amparo, para mantener inviolado el orden constitucional y

efectivamente restituir al quejoso en el uso y goce de su garantía individual transgredida. (Román Díaz Vázquez, Tomo III, página 2291)

---

Consideraciones.- El crecimiento lógico y natural de la población, la globalización y otros factores de índole tanto interna como externa, ha producido efectos en la vida económica y social del país, que se han traducido en problemas laborales, penales, civiles y administrativos que después de ventilarse ante las instancias correspondientes, llegan hasta los tribunales de amparo.

El aumento destacado, ha hecho que nuestra institución haya tenido que multiplicar sus órganos con el consiguiente esfuerzo de sus funcionarios, que en muchas de las veces, podría catalogarse como sebrehumano.

Es un hecho conocido que los Tribunales de control constitucional conceden, en muchos casos, el amparo de la Justicia Federal.

Buena parte de ese trabajo, que llega tanto a los Juzgados de Distrito como a los Tribunales, se debe a cuestiones relacionadas con el cumplimiento de las sentencias, que muchas veces llegan hasta la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, misma que ha tenido que crear todo un aparato jurídico-administrativo para resolver esas cuestiones se ha tenido que editar un manual y emitir numerosas jurisprudencias y tesis, entre las que destaca una que propone el trámite de un incidente innominado para aclarar los efectos de una sentencia y su cumplimiento.

Desde mi particular punto de vista, la problemática se produce, la mayoría de las veces, sin ser las únicas, por dos cuestiones a saber.

1º Falta de precisión de los efectos de las sentencias, y

2º Imprecisión en el momento de atender al cumplimiento por parte de las responsables, en mérito a una interpretación errónea o imprecisa de la sentencia amparadora, dictada por un Tribunal Colegiado en el recurso de revisión.

En lo tocante al punto segundo con el fin de evitar en muchos de los casos, recursos que producen carga excesiva de trabajo, rezago e incumplimiento del carácter sumario del Juicio de Garantías, se debe plasmar en los artículos 104, 105 y demás relativos que los Tribunales Colegiados de Circuito, que revocan sentencias de primer grado, deberán tener a cargo la vigilancia del cumplimiento de las sentencias, pues son ellos los que conocen los límites exactos de la concesión, de ese modo se evitaría que los Jueces de Distrito Tribunales Unitarios de Circuito y las autoridades a que se refiere el Artículo 37 de la Ley de Amparo, interpreten erróneamente el sentido y alcance de la resolución de los Tribunales Colegiados al resolver en el recurso de revisión que la justicia ampara y protege.

Con ello también se disminuiría la carga en los Tribunales Colegiados al no tener que resolver el llamado recurso de queja de la queja, también



deberán anotarse previo el pago de los derechos respectivos, de conformidad con las disposiciones legales aplicables. (Manuel Fuentes Muñiz, Tomo V, páginas 170 y 171)

---

10.- Se propone reformar el último párrafo del artículo 105, para quedar como sigue:

“Art. 105.-

...

...

El quejoso, o la autoridad responsable, podrán solicitar que se dé por cumplida la ejecutoria, mediante el pago de los daños y perjuicios que se le hayan ocasionado al agraviado, a través del incidente de cumplimiento sustituto, y con los siguientes medios: el pago de dinero, la permuta y la compensación.

La solicitud se hará por escrito, y se presentará ante el Juez de Distrito que conoce del asunto, quien analizará la procedencia del incidente y en caso, de que exista motivo manifiesto de improcedencia la desechará de plano y continuará con el trámite a que alude el presente artículo; En caso contrario se tendrá por admitida, y en el mismo auto, se señalará día y hora para la celebración de la audiencia, la cual se llevará a cabo dentro del término de quince días hábiles, contados a partir de que se haya promovido el incidente.

Con el escrito que presente la parte que solicite el incidente se dará vista a la contraria, para que manifieste lo que a su derecho corresponda y ofrezca las pruebas que considere pertinentes, dentro del término de tres días, contadas para la autoridad responsable a partir del que reciba el oficio de notificación y para el quejoso a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación respectiva.

En el presente incidente únicamente son admisibles las pruebas documentales y pericial, cuyo ofrecimiento y desahogo se llevará a cabo conforme a lo establecido en el numeral 151 (reformado) de éste último ordenamiento legal.

Abierta la audiencia a que se refiere el presente incidente se procederá a recibir por orden las pruebas que las partes hayan ofrecido, los alegatos por escrito; acto continuo se dictará el fallo correspondiente.

El Juez al dictar la resolución a que se refiere el párrafo anterior determinará la cuantía de la restitución que se le haga al quejoso, analizando ante todo la naturaleza del acto reclamado y las pruebas que le sean ofrecidas por las partes.

Contra la resolución que se dicte en el presente incidente procede el recurso de queja, en términos de lo dispuesto por los artículos 95, fracción X, 97, fracción II y 99 párrafo primero de esta ley". **(Gustavo Aquiles Gasca, Tomo V, páginas 244 Y 245)**

Con esta reforma se pretende que las autoridades responsables que tengan que cumplimentar las ejecutorias dispongan de un plazo suficiente para acreditar ante el juez de distrito del conocimiento que han acatado su fallo.

## **REFORMA**

**ARTICULO 105.** Si dentro de las setenta y dos horas siguientes a la notificación a las autoridades responsables la ejecutoria no quedare cumplida, cuando la naturaleza del acto lo permita, o no se encontrare en las vías de ejecución en la hipótesis contraria, el juez de Distrito, la autoridad que Colegiado de Circuito, si se trata de revisión contra resolución pronunciada en materia de amparo directo requerirán, de oficio o a instancia de cualquiera de las partes, al superior inmediato de la autoridad responsable para que obligue a ésta a cumplir sin demora la sentencia; y si la autoridad responsable no atendiere el requerimiento, y tuviere, a su vez, superior jerárquico, también se requerirá a este último.

Cuando no se obedeciere la ejecutoria, a pesar de los requerimientos a que se refiere el párrafo anterior, el Juez de Distrito, la autoridad que hay conocido del juicio o el Tribunal Colegiado de Circuito, en su caso, remitirán el expediente original a la Suprema Corte de Justicia, para los efectos del artículo 107, fracción XVI de la Constitución Federal, dejando copia certificada de la misma y de las constancias que fueren necesarias para procurar su exacto y debido cumplimiento, conforme al artículo 111 de esta Ley.

Cuando la parte interesada no estuviere conforme con la resolución que tenga por cumplida la ejecutoria, se enviará también, a petición suya, el expediente a la Suprema Corte de Justicia. Dicha petición deberá presentarse dentro de los cinco días siguientes al se la notificación de la resolución correspondiente, de otro modo, ésta se tendrá por consentida.

El quejoso podrá solicitar que se dé por cumplida la ejecutoria mediante el pago de los daños y perjuicios que haya sufrido. El juez de Distrito, oyendo incidentalmente a las partes interesadas, resolverá lo conducente. En caso de que proceda. Determinará la forma y cuantía de la restitución. (Juan José Paullada Figueroa, Tomo V, páginas 271 a 273)

**Artículo 106.** En los casos de amparo directo, concedido el amparo se remitirá testimonio de la ejecutoria a la autoridad responsable para su cumplimiento. En casos urgentes y de notorios perjuicios para el agraviado, podrá ordenarse el cumplimiento de la sentencia por la vía telegráfica, comunicándose también la ejecutoria por oficio.

En el propio despacho en que se haga la notificación a las autoridades responsables, se les prevendrá que informen sobre el cumplimiento que se dé al fallo de referencia.

Si dentro de las veinticuatro horas siguientes a la en que la autoridad responsable haya recibido la ejecutoria, o en su caso, la orden telegráfica, no quedare cumplida o no estuviere en vías de ejecución, de oficio o a solicitud de cualquiera de las partes, se procederá conforme al artículo anterior.

### **PROPUESTAS**

Señalamiento de un término adecuado para el cumplimiento de ejecutorias emitidas en los juicios de amparo.

Al respecto, proponemos la modificación de los artículos 105. 106 y 107 de la Ley de Amparo, que establecen un término perentorio de 24 horas para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo; lo que es imposible de

acatar en materia laboral, cuando se trata de dictar un nuevo laudo, lo que requiere un lapso de varios días, conforme a lo dispuesto en los artículos 888, 889 y 890 de la Ley Federal del Trabajo.(Antonio Montes Peña, Tomo II, página 1256)

---

COMENTARIO: AL IGUAL QUE EN AMPARO INDIRECTO, EL TERCER PÁRRAFO DE ESTE ARTÍCULO, NO ESTABLECE REGLAS CLARAS CUÁNDO SE REMITE AL ARTÍCULO ANTERIOR. DE HECHO, INCURRE EN LA MISMA OMISIÓN CON IGUALES CONSECUENCIAS.

UN EJEMPLO DE LO IMPORTANTE QUE ES DETERMINAR EL SIGNIFICADO DE... "ESTAR EN VÍAS DE EJECUCIÓN", ES EL QUE SE PRESENTA FRECUENTEMENTE EN LA TRAMITACIÓN DE LOS JUICIOS LABORALES.

EN EFECTO, LOS ARTÍCULOS 885 AL 890 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, ESTABLECEN EL PROCEDIMIENTO A SEGUIR PARA LA ELABORACIÓN DEL LAUDO QUE DA POR CONCLUIDO EL JUICIO.

EN SUMA, SON VEINTICINCO LOS DÍAS QUE REQUIERE LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE PARA ELABORAR EL PROYECTO DE RESOLUCIÓN, ESTUDIARLO, DISCUTIRLO Y VOTARLO Y PROCEDER A SU APROBACIÓN.

LUEGO ENTONCES, JURÍDICA Y MATERIALMENTE ES IMPOSIBLE DAR CUMPLIMIENTO A LAS EJECUTORIAS EN EL

TÉRMINO DE VEINTICUATRO HORAS, SEÑALADO POR EL ARTÍCULO 106 DE LA LEY DE AMPARO.

ESTO ES, SI LA AUTORIDAD DE AMPARO, POR EJEMPLO, AL RESOLVER LA EJECUTORIA OTORGÓ A LA AUTORIDAD RESPONSABLE LIBERTAD DE JURISDICCIÓN SIGUIENDO LOS LINEAMIENTOS ORDENADOS, SE CONCLUYE, QUE AL DICTAR UN NUEVO LAUDO, IMPLICA NECESARIAMENTE EL ESTUDIO Y VALORACIÓN DE LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, EN LOS NUEVOS TÉRMINOS QUE FUERON PRECISADOS POR LA JUDICATURA, LO CUAL CONLLEVA NECESARIAMENTE AL PROCEDIMIENTO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS ANTES MENCIONADOS, PUES SERÍA ILÓGICO DICTAR OTRO LAUDO EN EL REDUCIDO TÉRMINO DE 24 HORAS, YA QUE ES FÍSICA, MATERIAL E INTELECTUALMENTE IMPOSIBLE, ACORDAR LA RECEPCIÓN DEL EXPEDIENTE LABORAL, ELABORAR EL PROYECTO DE RESOLUCIÓN, DISTRIBUIR LOS EJEMPLARES PARA SU ESTUDIO A LOS REPRESENTANTES DE LA JUNTA, CITAR A LOS MISMOS A UNA SESIÓN DE DISCUSIÓN Y VOTACIÓN, Y LLEVAR A CABO EL ENGROSE Y FIRMA DEL LAUDO.

PROCEDER EN CONTRARIO VIOLA LAS DISPOSICIONES QUE CONTIENE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, EMITIENDO UNA RESOLUCIÓN CONTRARIA A DERECHO POR NO CUMPLIRSE CON LAS FORMALIDADES DEL PROCEDIMIENTO.

POR LO CUAL, SE COLIGE, ES NECESARIO LLEVAR A CABO EL PROCEDIMIENTO ANTES MENCIONADO, NO OBSTANTE SE

**PRONUNCIE EN CUMPLIMIENTO DE UNA EJECUTORIA. (José Francisco Becerril Mendoza, Tomo III, páginas 2049 a 2051)**

---

ARTÍCULO 106. En los casos de amparo directo, concedido el amparo se remitirá testimonio de la ejecutoria a la autoridad responsable para su cumplimiento. En casos urgentes y de notorios perjuicios para el agraviado, podrá ordenarse el cumplimiento de la sentencia por la vía telegráfica, comunicándose también la ejecutoria por oficio.

En el propio despacho en que se haga la notificación a las autoridades responsables, se les prevendrá que informen sobre el cumplimiento que se dé al fallo de referencia.

Si dentro de las veinticuatro horas siguientes a la en que la autoridad responsable haya recibido la ejecutoria, o en su caso, la orden telegráfica, no quedare cumplida o no estuviere en vías de ejecución, de oficio o a solicitud de cualquiera de las partes, se procederá conforme al artículo anterior. (Oscar Barrera Garza, Tomo III, página 2213)



**Artículo 107.** Lo dispuesto en los dos artículos precedentes se observarán (sic) también cuando se retarde el cumplimiento de la ejecutoria de que se trata por evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable o de cualquiera otra que intervenga en la ejecución.

Las autoridades requeridas como superiores jerárquicos incurren en responsabilidad, por falta de cumplimiento de las ejecutorias, en los mismos términos que las autoridades contra cuyos actos se hubiese concedido el amparo.

**Artículo 108.** La repetición del acto reclamado podrá ser denunciada por parte interesada ante la autoridad que conoció del amparo, la cual dará vista con la denuncia, por el término de cinco días, a las autoridades responsables, así como a los terceros, si los hubiere, para que expongan lo que a su derecho convenga. La resolución se pronunciará dentro de un término de quince días. Si la misma fuere en el sentido de que existe repetición del acto reclamado, la autoridad remitirá de inmediato el expediente a la Suprema Corte de Justicia; de otro modo, sólo lo hará a petición de la parte que no estuviere conforme, la cual lo manifestará dentro del término de cinco días a partir del siguiente al de la notificación correspondiente. Transcurrido dicho término sin la presentación de la petición, se tendrá por consentida la resolución. La Suprema Corte resolverá allegándose los elementos que estime convenientes.

Cuando se trate de la repetición del acto reclamado, así como en los casos de inejecución de sentencia de amparo a que se refieren los artículos anteriores, la Suprema Corte de Justicia determinará, si procediere, que la autoridad responsable quede inmediatamente separada de su cargo y la consignará al Ministerio Público para el ejercicio de la acción penal correspondiente.

## **PROPUESTAS**

### **(Propuesta de redacción) DEL CUMPLIMIENTO DE LAS RESOLUCIONES PRONUNCIADAS EN LOS JUICIOS DE AMPARO <sup>78</sup>**

**Artículo 108.- El incidente de desobediencia a las determinaciones pronunciadas en el juicio de amparo procede con motivo de:**

**I.- El incumplimiento total, así como el exceso o defecto en el cumplimiento del auto en que se hubiera concedido al quejoso la suspensión de plano, la provisional o la definitiva; en estos casos, el incidente podrá promoverse por el interesado en cualquier momento, mientras no cause ejecutoria la sentencia definitiva que se dicte en el juicio de amparo, sin perjuicio de que el tribunal que conozca del juicio abra de oficio el incidente, en el caso de incumplimiento total.**

**II.- El incumplimiento total, así como el exceso o defecto en el cumplimiento de la sentencia que hubiera concedido el amparo al quejoso, dictada por los Tribunales Colegiados de Circuito, por los Tribunales Unitarios de Circuito, por los Jueces de Distrito o por el superior del tribunal responsable, en su caso; el plazo para promover el incidente en este caso, será de treinta días hábiles, contados a partir del siguiente al en que se**

---

<sup>78</sup> Actualmente se denomina "*De la ejecución de las sentencias*"

tenga conocimiento del acto que lo motive; cuando el incidente se promueva contra omisiones, el plazo citado se contará a partir del día siguiente al en que venza el plazo legal dentro del cual debió realizarse el acto omitido y, si no existiera disposición legal expresa sobre dicho plazo, se tomará el genérico de tres días.<sup>79</sup> En caso de incumplimiento total, el incidente podrá iniciarse de oficio por la autoridad que conozca del juicio de garantías.

III.- El incumplimiento al auto que haya concedido al quejoso la libertad bajo caución conforme al artículo 136; el incidente podrá promoverse en cualquier momento mientras no cause ejecutoria la sentencia que se dicte en el juicio de amparo.

IV.- La repetición del acto reclamado en un juicio en que se haya concedido al quejoso el amparo; el plazo para promover el incidente en estos casos, será de treinta días hábiles, contados a partir del siguiente al en que se tenga conocimiento de la repetición.

Artículo 108 Bis. El interesado promoverá el incidente por escrito, ante la autoridad que conozca o haya conocido del juicio de amparo, en el que se expresarán los hechos y razones en que apoye su pretensión y ofrecerá las pruebas que estime conducentes, acompañando copia de la promoción para cada una de las partes del juicio y para la autoridad contra la cual se promueva.

---

<sup>79</sup> El plazo actual es de un año, pero consideramos demasiado tiempo; el plazo de treinta días permitiría a cualquier persona defender sus derechos, pues se cuenta a partir del momento en que se tenga conocimiento del acto de la autoridad que motiva el incidente.

La autoridad que conozca del incidente señalará fecha para una audiencia de pruebas, alegatos y resolución, y ordenará que con las copias del escrito se emplace a las demás partes y a la autoridad contra la que se promueva, quienes podrán contestar lo que a sus derechos convenga y ofrecer pruebas dentro del plazo de cinco días hábiles, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación respectiva. Transcurrido dicho plazo, se calificarán las pruebas ofrecidas conforme a lo dispuesto por los artículos 150 a 153 de esta ley, sin perjuicio de que se reciban en la audiencia incidental; el desahogo de la audiencia produce el efecto de citación para resolución; la interlocutoria se dictará dentro de los diez días siguientes.

En caso de que en la interlocutoria que resuelva el incidente se determine que la autoridad incurrió en desobediencia a una resolución pronunciada en el juicio de amparo, por haberse actualizado cualquiera de las hipótesis previstas en el artículo anterior, la autoridad que conozca del incidente impondrá a la autoridad desobediente una multa de diez a quinientos días de salario y la requerirá para que dentro de los tres días siguientes dé correcto y completo cumplimiento a la determinación dictada en el juicio de amparo. Para efectos de lo anterior, al resolver el incidente deberá determinarse en qué consistió el incumplimiento, el exceso o el defecto en que se hubiese incurrido, así como los actos que deban realizarse y los que deban anularse, en su caso, para subsanar la desobediencia, sin que ello altere los términos de la resolución dictada en el juicio de amparo.

Transcurrido el plazo señalado en el párrafo anterior, si la autoridad requerida no justificare haber dado cumplimiento cabal a la resolución, la autoridad que conozca del incidente la requerirá por segunda ocasión, en los términos previstos en el párrafo anterior y le impondrá una multa de quinientos a mil días de salario. En los mismos términos se procederá cuando la autoridad desobediente incurra en exceso o defecto en el cumplimiento del primer requerimiento.

Transcurrido el plazo correspondiente al segundo requerimiento, si la autoridad requerida no justificare haber dado cumplimiento correcto a la resolución, la autoridad que conozca del incidente separará del cargo a los servidores públicos responsables de la desobediencia, y los consignará ante el Juez de Distrito que corresponda, a fin de que se les juzgue por desobediencia en términos del Código Penal para el Distrito Federal. Independientemente de lo anterior, se les inhabilitará por un plazo de uno a diez años para desempeñar cualquier empleo, cargo o comisión públicos. Siempre que queden firmes la separación del cargo y la inhabilitación, por no haberse recurrido la resolución respectiva o porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación la confirmare, deberá publicarse en el Diario Oficial de la Federación y comunicarse a la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo.

Cuando las autoridades responsables informen haber dado cumplimiento a la resolución dictada en el juicio de amparo, deberán acompañar copia certificada de las constancias que lo justifiquen; con el informe deberá darse vista a las demás partes por el término de tres días, transcurrido el cual, la autoridad que conozca del incidente determinará si la

resolución ha quedado cumplida debidamente; en caso de existir defecto o exceso, o subsista el incumplimiento, se continuará con el procedimiento establecido en este artículo.

En caso de que cambien los servidores públicos titulares de las autoridades que deban dar cumplimiento a las determinaciones dictadas en un juicio de amparo, se requerirá a los nuevos titulares; este requerimiento se considerará, respecto de ellos, como el primer requerimiento a que se refiere este artículo.

En ningún caso el cambio de los servidores públicos impedirá que se ejecuten las sanciones que se hubieran impuesto a los servidores sustituidos con motivo de la desobediencia.

Las multas previstas en este artículo deberán hacerse efectivas sobre el patrimonio del servidor público sancionado y en ningún caso podrán emplearse recursos públicos para cubrirlas. **(Germán Eduardo Baltazar Robles, Tomo I, páginas 86 a 90)**

---

Propongo adicionar el artículo 108 de la Ley de Amparo, con un penúltimo párrafo, a fin de establecer que en tanto no se agoten las instancias previstas en el propio numeral para determinar si existe o no repetición del acto reclamado, no empieza a correr el término para la promoción de un nuevo juicio de amparo.

Esta adición que propongo, es absolutamente indispensable, pues cuando el agraviado promueve el incidente de repetición del acto reclamado, técnicamente no debe promover otro juicio de amparo contra el acto que se estima reiterativo, pues equivaldría a aceptar que se trata de un acto nuevo, lo que es contradictorio con el incidente de repetición; y por otra parte el tiempo que tarda la Suprema Corte de Justicia de la Nación en resolver si existe o no repetición del acto reclamado excede notoriamente el término para promover un nuevo amparo, en caso de que el Alto Tribunal determine que no hubo la repetición. Y claro, en esta última hipótesis, cuando el agraviado promueve finalmente el nuevo amparo, el Juzgado de Distrito simple y sencillamente desecha la demanda de garantías por extemporánea, lo cual convierte la denuncia de repetición del acto reclamado en un verdadero azar. **(Bulmaro Corral Rodríguez, Tomo II, páginas 877 y 878)**

---

86.- La oposición de que se haga por parte del quejoso en los términos de los artículos 105 y 108, a la sentencia que tenga por cumplida la de amparo, debe integrarse al capítulo de recursos, como una queja. **(Jesús A. Arroyo Moreno, Tomo II, página 1096)**

---

Otro aspecto importante que hay que corregir, es la inconstitucionalidad del segundo párrafo del artículo 108 y de artículo 109, ambos de la Ley de Amparo. En efecto la fracción XVI del artículo 107 constitucional prescribe: ...



De la simple comparación de los preceptos legales con el texto constitucional se desprende que hay una contradicción evidente, pues mientras que en la Constitución se indica que la responsable que haya incumplido de manera inexcusable la sentencia de amparo, o repetido sin excusa alguna el acto reclamado, será inmediatamente separada del cargo y consignada ante el juez de distrito. Esta facultad constitucional que se otorga a la Suprema Corte de Justicia de la Nación es natural y congruente con el procedimiento de ejecución y con el rango de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como máximo Tribunal del país. En efecto si el Tribunal más importante ha determinado que la responsable de manera inexcusable ha incumplido una sentencia de amparo o ha repetido el acto reclamado, ningún otro tribunal puede contradecir lo dicho por la Corte, razón por la que el Juez ante quien se consigna el hecho no va a juzgar si se cometió un delito o no, pues ello ya fue determinado por el Máximo Tribunal del país, por lo que el juez se limitará a imponer la pena aplicable. Por esta misma razón el Ministerio Público no tiene porque integrar averiguación previa laguna, ni ejercer acción penal, ya que no hay nada que averiguar puesto que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya estudió y resolvió en definitiva sobre la existencia o no del incumplimiento o repetición y en su caso si hubo excusa o no para ello, por tal motivo como una excepción constitucional al artículo 21 de la ley fundamental, el artículo 107 constitucional en su fracción XVI ordena que sea la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien consigne el expediente al Juez de Distrito para que aplique la sanción.

De esta manera se evita el riesgo que el Ministerio Público decida no ejercer acción penal o que el Juez de Distrito determinará que a pesar del

incumplimiento o de la repetición del acto reclamado no existiera delito, lo que sería especialmente grave ya que pondría en duda la autoridad moral y la eficacia de las sentencias del Tribunal más importante del país.

El artículo 109 de la Ley de Amparo también es inconstitucional, pues hay que tomar en cuenta que la destitución del cargo y la consignación no están sujetas a condición alguna, y en el supuesto previsto en el artículo 109 invocado la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se sujeta a que el Poder Legislativo Federal a través de la Cámara de Diputados decida iniciar un procedimiento de desafuero en contra de la responsable y a que con motivo de ese proceso los diputados resuelvan desaforar al funcionario responsable, por lo que si no se inicia el proceso o iniciado éste el resultado es que no ha lugar al desafuero, entonces la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación quedaría sin valor alguno. En estas condiciones es necesario que en la nueva Ley de Amparo se adecue el texto legal al constitucional. **(Jorge Antonio Galindo Monroy, Tomo III, páginas 1652, 1654 y 1655)**

---

4. La siguiente propuesta, es en el sentido de que se modifiquen o se hagan congruentes entre sí los artículos 108 y 208 pues en el primero de ellos, en su tercer párrafo se precisa que cuando se trate de la repetición del acto reclamado o de inejecución de sentencias, la Suprema Corte de Justicia determinará si procede que la autoridad responsable quede inmediatamente separada de su cargo y la consignará al Ministerio Público para el ejercicio de la acción penal correspondiente, por otra parte el segundo de los artículos mencionados, señala, que si después de

concederse el amparo, la autoridad responsable insistiere en la repetición del acto reclamado o tratare de eludir el cumplimiento de la sentencia, inmediatamente será separada de su cargo y consignada al Juez de Distrito para que la juzgue por la desobediencia cometida.

La que será sancionada en los términos que el Código Penal aplicable en materia Federal, señala para el delito de abuso de autoridad.

Las disposiciones anteriores provocan confusión pues por un parte el artículo 108 señala que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por las razones que ahí se indican consignará a la autoridad responsable ante el Ministerio Público para que ejercite la acción penal correspondiente, el otro artículo el 208, precisa que la consignación de la responsable se hará ante el Juez de Distrito par que lo juzgue por la desobediencia cometida, es decir, no queda claro si la autoridad responsable será consignada al Ministerio Público, para que ejercite la acción penal en su contra, o directamente será consignada al Juez de Distrito, por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que lo juzgue sin que el Ministerio Público ejercite acción penal.

Por otra parte, y en relación con la propuesta anterior también deberá sacarse del Libro Primero, Título Primero Capítulo XII de la ejecución de sentencias los artículos 109 y 110 y pasarse, al Título Quinto, Capítulo II.

En consecuencia, en primer lugar se propone se modifiquen los artículos 108 y 208, para que en el primero se suprima el último párrafo pues no tiene porque estar en ese artículo la sanción a la autoridad rebelde

y en el segundo se señale que la autoridad responsable que insistiera en la repetición del acto reclamado, o no cumpla con la sentencia, inmediatamente será separada de su cargo y consignada al Ministerio Público para el ejercicio de la acción correspondiente pues, conforme a lo establecido en el artículo 21 de la Constitución Federal compete al Ministerio Público el ejercicio de la acción Penal; Y en su segundo término se propone que los artículos 109 y 110, pasen al Capítulo II, del Título Quinto, que se refiere a la responsabilidad de las autoridades, ya que estos artículos quedarían relacionados con el artículo 208, quedando como 208 bis y 208 tris. (Rosa Elena Rivera Barbosa, Tomo III, páginas 1758 y 1759)

---

Por tanto el artículo 108 deberá quedar como sigue:

“La repetición del acto reclamado podrá ser denunciada por parte interesada ante la autoridad que conoció del amparo, la cual dará vista con la denuncia, por el término de cinco días, a las autoridades responsables, así como a los terceros, si los hubiere, para que expongan lo que a su derecho convenga. La resolución se pronunciará dentro de un término de quince días. Si la misma fuere en el sentido de que existe repetición del acto reclamado, la autoridad remitirá de inmediato el expediente a la Suprema Corte de Justicia, de otro modo, sólo lo hará a petición de la parte que no estuviere conforme, la cual lo manifestará dentro del término de cinco días a partir del siguiente al de la notificación correspondiente. Transcurrido dicho término sin la presentación de la petición, se tendrá por consentida la resolución. La Suprema Corte resolverá allegándose los

denominado requeja. (Francisco Javier Teodoro Arcovedo Montero, Tomo IV, páginas 2550 a 2552).

---

**ARTÍCULO 105 .-** Si dentro de las veinticuatro horas siguientes a la notificación a las autoridades responsables la ejecutoria no quedare cumplida, cuando la naturaleza del acto lo permita, o no se encontrare en vías de ejecución en la hipótesis contraria, el juez de Distrito, la autoridad que haya conocido del juicio o el Tribunal Colegiado de Circuito, si se trata de revisión contra resolución pronunciada en materia de amparo directo requerirán, de oficio o a instancia de cualquiera de las partes, al superior inmediato de la autoridad responsable para que obligue a ésta a cumplir sin demora la sentencia; y si la autoridad responsable no tuviere superior, el requerimiento se hará directamente a ella. Cuando el superior inmediato de la autoridad responsable no atendiere el requerimiento, y tuviere, a su vez, superior jerárquico, también se requerirá a este último.

Cuando no se obedeciere la ejecutoria, a pesar de los requerimientos a que se refiere el párrafo anterior, el juez de Distrito, la autoridad que haya conocido del juicio o el Tribunal Colegiado de Circuito, en su caso, remitirán el expediente original a la Suprema Corte de Justicia, para los efectos del artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Federal, dejando copia certificada de la misma y de las constancias que fueren necesarias para procurar su exacto y debido cumplimiento, conforme al artículo 111 de esta Ley.

Cuando la parte interesada no estuviere conforme con la resolución que tenga por cumplida la ejecutoria, se enviará también, a petición suya, el expediente a la Suprema Corte de Justicia. Dicha petición deberá presentarse dentro de los cinco días siguientes al de la notificación de la resolución correspondiente; de otro modo, ésta se tendrá por consentida.

Siempre que la naturaleza del acto lo permita, el quejoso podrá solicitar que se dé por cumplida la ejecutoria mediante el pago de los daños y perjuicios que haya sufrido. El juez de Distrito, oyendo incidentalmente a las partes interesadas resolverá lo conducente. En caso de que proceda, determinará la forma y cuantía de la restitución.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación y los Tribunales Colegiados de Circuito, cuando la naturaleza del acto lo permita, de oficio, podrán disponer el cumplimiento sustituto de la sentencia de amparo, cuando su ejecución afecte gravemente a la sociedad o a terceros, en mayor proporción que los beneficios económicos que pudiera obtener el quejoso, en términos del artículo 107, fracción XVI, de la Constitución General de la República. (Salvador Bravo Gómez, Tomo V, páginas 24 a 26)

---

Artículo 105.- Los párrafos primero, segundo y tercero igual.

Siempre que la naturaleza del acto lo permita, el quejoso podrá solicitar que se de por cumplida la ejecución mediante el pago de los daños y perjuicios que haya sufrido. El Juez de Distrito, oyendo incidentalmente a

las partes interesadas, resolverá lo conducente. En caso de que proceda, determinará la forma y cuantía de la restitución.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando la naturaleza del acto lo permita, de oficio, podrá disponer el cumplimiento sustituto de la sentencia de amparo, cuando su ejecución afecte gravemente a la sociedad o a terceros en mayor proporción que los beneficios económicos que pudiera obtener el quejoso, en términos del artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Federal. (Jerónimo Eulogio Quiroz Gutiérrez, Tomo V, página 44)

---

I.- La primera propuesta es al artículo 105 de la Ley de Amparo, en el sentido de que debe incrementarse el término concedido a la autoridad responsable para dar cumplimiento a la Ejecutoria Federal, en virtud de estimarlo bastante corto para tales efectos, pues la postulancia me ha dado como experiencia en comprender que dicha autoridad por dar cumplimiento al mencionado requerimiento lo realiza en muchas de las ocasiones, simplemente por cumplir sin realizarlo, con la debida minuciosidad, pues en los multicitados casos se requiere de diversos elementos para realizarlas, en una forma debida, y por lo tanto el suscrito propongo se les de a dichas autoridades un término de cinco días. (Luciano Ortiz Coranguez, Tomo V, página 51)

---

**JUSTIFICACIÓN**

Se propone adicionar este artículo con un párrafo sexto, por el cual se facultaría a las autoridades competentes en materia de amparo para disponer de oficio el cumplimiento sustituto de las ejecutorias dictadas en los juicios de amparo, a través de la instauración del incidente de pago de daños y perjuicios, siempre que la naturaleza del acto lo permita, en aquellos casos en los que exista imposibilidad material para restituir al quejoso en el pleno goce de sus garantías violadas o que en virtud de su ejecución se afecte el interés social. La incorporación de esta medida, permitirá darle celeridad al cumplimiento de sentencias de amparo, en aquellos casos en que la parte quejosa no ejercite su derecho a iniciar el incidente en comento.

Se propone para que los interesados cubran previamente el pago de los derechos, que de conformidad con las disposiciones legales conducentes procedan por concepto de inscripción de las ejecutorias que se refieran a bienes inscritos en el Registro Público de la Propiedad.

#### **EL TEXTO QUE SE PROPONE**

##### **Artículo 105.-**

El juez de Distrito, la autoridad que haya conocido del juicio o el Tribunal Colegiado de Circuito deberán disponer de oficio el cumplimiento sustituto de las sentencias de amparo, mediante la instauración del incidente de pago de daños y perjuicios, en aquellos casos en que exista imposibilidad material para restituir al quejoso en el pleno goce de sus garantías violadas o que con su ejecución, se acredite que se afecta el interés social.

Las ejecutorias que se dicten con respecto a bienes inscritos en el Registro Público de la Propiedad, para surtir efectos frente a terceros,



**elementos que estime convenientes". (Rosa Elena Rivera Barbosa, Tomo III, páginas 1759 y 1760)**

---

Conforme al artículo 108, la repetición del acto reclamado puede ser denunciada por el interesado ante el tribunal de amparo, el que debe tramitarla y resolverla dentro de quince días.

Al respecto se propone que se establezca un término para presentar la denuncia respectiva y, en general, regular su tramitación a fin de que se precise si se trata de un recurso o de un incidente y, en su caso, el tribunal de amparo pueda desechar tal denuncia por extemporánea o por improcedente.

La imprecisión de tal término origina incertidumbre para los tercero perjudicados, que no pueden tener la certeza de que la sentencia de amparo haya quedado definitivamente cumplimentada en alguna forma.

Además, el agotamiento del recurso de queja por exceso o defecto en la ejecución de la sentencia, previsto por el Artículo 95, fracción IV, debe excluir la posibilidad de, además, denunciar la repetición del acto reclamado.

La redacción que en el particular se propone, es la siguiente:

**Artículo 108.- La repetición del acto reclamado puede ser denunciada por la parte interesada ante la autoridad que conoció del amparo, mediante**

escrito al que se acompañarán las constancias que se estimen pertinentes y dentro de los quince días siguientes a la fecha en que se haya tenido conocimiento del acto materia de la denuncia, la que se tramitará en la vía incidental, siempre y cuando no se haya promovido con anterioridad recurso de queja en términos de la fracción IV del artículo 95 de esta misma ley. La autoridad correspondiente dará vista con la denuncia, por el término de cinco días, a las autoridades responsables, así como a los terceros, en su caso, para que expongan lo que a su derecho convenga. (Graciela M. Landa Durán, Tomo IV, páginas 2686 y 2687).

---

C).- En relación a la PETICION DEL ACTO RECLAMADO.

MOTIVOS.- Este Instrumento contemplado por la Ley de Amparo ha sido objeto de venganzas o reacciones no de los quejosos sino de abogados en contra de la autoridad por lo que SE SUGIERE.

Incluir una disposición en la que de no resultar repetición del acto reclamado se sancione con multa al promovente, evitando así el uso infundado de este loable instrumento necesario ante verdaderos abusos de autoridad y ante la necesidad de garantizar respecto al Juicio de Amparo. (Ciro Juárez González, Tomo IV, página 2763).

**Artículo 109.** Si la autoridad responsable que deba ser separada conforme al artículo anterior gozare de fuero constitucional, la Suprema Corte, si procediere, declarará que es el caso de aplicar la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Federal; y con esta declaración y las constancias de autos que estime necesarias, pedirá a quien corresponda el desafuero de la expresada autoridad.

### **PROPUESTAS**

El artículo 109 es contrario a la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución, porque está no "sujeta" a condición la ejecución de la sentencia de amparo, lo que el 109 si hace, al establecer que si la autoridad goza de fuero constitucional debe pedirse la declaración de procedencia en contra del funcionario que incumpla la resolución de amparo.

En mi concepto, si bien el 109 de la Ley de Amparo es congruente con el artículo 110 de la Constitución y si es un precepto "político", también es verdad que es contrario al texto de la fracción XVI del 107 de la Constitución por lo que, en mi concepto debe eliminarse. (Jesús A. Arroyo Moreno , Tomo II, página 1096)

---

Otro aspecto importante que hay que corregir, es la inconstitucionalidad del segundo párrafo del artículo 108 y de artículo 109,

ambos de la Ley de Amparo. En efecto la fracción XVI del artículo 107 constitucional prescribe: ...

De la simple comparación de los preceptos legales con el texto constitucional se desprende que hay una contradicción evidente, pues mientras que en la Constitución se indica que la responsable que haya incumplido de manera inexcusable la sentencia de amparo, o repetido sin excusa alguna el acto reclamado, será inmediatamente separada del cargo y consignada ante el juez de distrito. Esta facultad constitucional que se otorga a la Suprema Corte de Justicia de la Nación es natural y congruente con el procedimiento de ejecución y con el rango de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como máximo Tribunal del país. En efecto si el Tribunal más importante ha determinado que la responsable de manera inexcusable ha incumplido una sentencia de amparo o ha repetido el acto reclamado, ningún otro tribunal puede contradecir lo dicho por la Corte, razón por la que el Juez ante quien se consigna el hecho no va a juzgar si se cometió un delito o no, pues ello ya fue determinado por el Máximo Tribunal del país, por lo que el juez se limitará a imponer la pena aplicable. Por esta misma razón el Ministerio Público no tiene porque integrar averiguación previa laguna, ni ejercer acción penal, ya que no hay nada que averiguar puesto que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya estudió y resolvió en definitiva sobre la existencia o no del incumplimiento o repetición y en su caso si hubo excusa o no para ello, por tal motivo como una excepción constitucional al artículo 21 de la ley fundamental, el artículo 107 constitucional en su fracción XVI ordena que sea la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien consigne el expediente al Juez de Distrito para que aplique la sanción.

De esta manera se evita el riesgo que el Ministerio Público decida no ejercer acción penal o que el Juez de Distrito determinará que a pesar del incumplimiento o de la repetición del acto reclamado no existiera delito, lo que sería especialmente grave ya que pondría en duda la autoridad moral y la eficacia de las sentencias del Tribunal más importante del país.

El artículo 109 de la Ley de Amparo también es inconstitucional, pues hay que tomar en cuenta que la destitución del cargo y la consignación no están sujetas a condición alguna, y en el supuesto previsto en el artículo 109 invocado la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se sujeta a que el Poder Legislativo Federal a través de la Cámara de Diputados decida iniciar un procedimiento de desafuero en contra de la responsable y a que con motivo de ese proceso los diputados resuelvan desaforar al funcionario responsable, por lo que si no se inicia el proceso o iniciado éste el resultado es que no ha lugar al desafuero, entonces la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación quedaría sin valor alguno. En estas condiciones es necesario que en la nueva Ley de Amparo se adecue el texto legal al constitucional. **(Jorge Antonio Galindo Monroy, Tomo III, páginas 1652, 1654 y 1655)**

---

**ARTÍCULO 109.** Si la autoridad responsable que deba ser separada conforme al artículo anterior gozare de fuero constitucional, la Suprema Corte, si procediere, declarará que es el caso de aplicar la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Federal; y con esta declaración y las constancias de autos que estime necesarias, pedirá a quien corresponda el

**desafuero de la expresada autoridad. (Oscar Barrera Garza, Tomo III, página 2215)**

**Artículo 110. Los jueces de Distrito a quienes se hicieren consignaciones por incumplimiento de ejecutoria, o por repetición del acto reclamado, se limitarán a sancionar tales hechos, y si apareciere otro delito diverso se procederá como lo previene la parte final del artículo 208.**

### **PROPUESTAS**

El artículo 110 de la Ley de Amparo dispone que los Jueces de Distrito ante quienes se hagan las consignaciones a que se refiere la fracción XVI del artículo 107 Constitucional, deberán actuar conforme a la parte final del artículo 208 de la Ley de Amparo, cuando apareciere otro delito; sin embargo este último precepto no indica que debe hacer el juez de distrito cuando ello suceda, por lo que no es aplicable. (Jorge Antonio Galindo Monroy, Tomo III, página 1656)

---

**ARTÍCULO 110. Los Jueces de Distrito a quienes se hicieren consignaciones por incumplimiento de ejecutoria, o por repetición del acto reclamado, se limitarán a sancionar tales hechos, y si apareciere otro delito diverso se aplicará lo que para tal efecto señala el Código Penal Federal. (Oscar Barrera Garza, Tomo III, página 2215)**

**Artículo 111.** Lo dispuesto en el artículo 108 debe entenderse sin perjuicio de que el juez de Distrito, la autoridad que haya conocido del juicio o el Tribunal Colegiado de Circuito, en su caso, hagan cumplir la ejecutoria de que se trata dictando las órdenes necesarias; si éstas no fueren obedecidas, comisionará al secretario o actuario de su dependencia, para que dé cumplimiento a la propia ejecutoria, cuando la naturaleza del acto lo permita y, en su caso, el mismo juez de Distrito o el Magistrado designado por el Tribunal Colegiado de Circuito, se constituirán en el lugar en que deba dársele cumplimiento, para ejecutarla por sí mismo. Para los efectos de esta disposición, el juez de Distrito o Magistrado de Circuito respectivo, podrán salir del lugar de su residencia sin recabar autorización de la Suprema Corte, bastando que le dé aviso de su salida y objeto de ella, así como de su regreso. Si después de agotarse todos estos medios no se obtuviere el cumplimiento de la sentencia, el juez de Distrito, la autoridad que haya conocido del juicio de amparo o el Tribunal Colegiado de Circuito solicitarán, por los conductos legales, el auxilio de la fuerza pública, para hacer cumplir la ejecutoria.

Se exceptúan de lo dispuesto en el párrafo anterior, los casos en que sólo las autoridades responsables puedan dar cumplimiento a la ejecutoria de que se trate y aquéllos en que la ejecución consista en dictar nueva resolución en el expediente o



asunto que haya motivado el acto reclamado, mediante el procedimiento que establezca la ley; pero si se tratare de la libertad personal, en la que debiera restituirse al quejoso por virtud de la ejecutoria y la autoridad responsable, se negare a hacerlo u omitiere edictar (sic) la resolución que corresponda dentro de un término prudente, que no podrá exceder de tres días, el juez de Distrito, la autoridad que haya conocido del juicio o el Tribunal Colegiado de Circuito, según el caso, mandarán ponerlo en libertad sin perjuicio de que la autoridad responsable dicte después la resolución que proceda. Los encargados de las prisiones darán debido cumplimiento a las órdenes que les giren conforme a esta disposición, los jueces federales o la autoridad que haya conocido del juicio.

### **PROPUESTAS**

De lo anterior se deduce que las reformas hechas a la fracción XVI del artículo 107 constitucional, aún no han entrado en vigor, pues la única reforma que ha tenido la Ley de Amparo, es la publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 8 de febrero de 1999, que se refiere a temas e instituciones muy diversos al cumplimiento de las ejecutorias de amparo. Luego, si después de casi cinco años de estar plasmada en la Constitución la reforma a la fracción XVI del artículo 107, la misma todavía no entra en vigor, sino que debe seguir aplicándose tal y como se encontraba redactada antes de su reforma, lo mejor sería pugnar porque se derogara y se borrara

de la Constitución el párrafo tercero de la indicada fracción, no solo por confuso y contrario a la salvaguardia constitucional, sino también porque resulta innecesario, dado que no han sido reformados hasta hoy los artículos del 104 al 113 de la Ley de Amparo, con posterioridad a la reforma constitucional del 31 de diciembre de 1994.

Resulta pertinente destacar que no existe en la Ley de Amparo una instrumentación adecuada, lo suficientemente clara y explícita, para obligar a una autoridad contumaz y rebelde a cumplir una ejecutoria de amparo, el procedimiento establecido en el artículo 111 resulta un tanto vago y muy general cuando se refiere al dictado de las "ordenes necesarias", y lo mismo ocurre al mencionar el auxilio de la fuerza pública, independientemente de las excepciones que contempla. Posiblemente el Constituyente Permanente de 1994 hubiera pensado en alguna fórmula lo suficientemente efectiva y rápida, que se introdujera mediante una reforma substancial al capítulo XII del título primero de la Ley de Amparo, pero a la fecha el Legislativo Federal no lo ha realizado, y así la reforma constitucional en su parte aceptable de los dos primeros párrafos de la fracción XVI del artículo 107, aparece en nuestro Texto Político Supremo pero sin entrar en vigor. **(Rodolfo Ricardo Ríos Vázquez, Tomo I, páginas 431 a 432)**

---

El artículo 111 de la Ley de Amparo establece que lo dispuesto para el caso de la repetición del acto reclamado es sin perjuicio de que el tribunal que haya conocido del juicio de garantías haga cumplir la ejecutoria.

Al respecto debo señalar que el procedimiento previsto en el artículo 111 no sólo es aplicable para el caso en que se repite el acto reclamado, sino que también debe aplicarse cuando se trate del incumplimiento de la sentencia, ya sea que este fuere absoluto o parcial. **(Jorge Antonio Galindo Monroy, Tomo III, página 1656)**

**Artículo 112.** En los casos a que se refiere el artículo 106 de esta ley, si la Sala que concedió el amparo no obtuviere el cumplimiento de la ejecutoria respectiva, dictará las órdenes que sean procedentes al juez de Distrito que corresponda, quien se sujetará a las disposiciones del artículo anterior en cuanto fueren aplicables.

### **PROPUESTAS**

**ARTÍCULO 112.** En los casos de amparo directo, si el órgano jurisdiccional que concedió el amparo no obtuviere el cumplimiento de la ejecutoria respectiva, dictará las órdenes que sean procedentes al Juez de Distrito que corresponda, quien se sujetará a las disposiciones del artículo anterior en cuanto fueren aplicables. (Oscar Barrera Garza, Tomo III, página 2216)

**Artículo 113. No podrá archivarse ningún juicio de amparo sin que quede enteramente cumplida la sentencia en que se haya concedido al agraviado la protección constitucional o apareciere que ya no hay materia para la ejecución. El Ministerio Público cuidará del cumplimiento de esta disposición.**

### **PROPUESTAS**

Luego, se presenta un problema al Juez de Distrito, pues por un lado está su deber de vigilar el total cumplimiento de las ejecutorias de amparo, por ser de orden público, y por el otro, no puede, en aras de ese deber, decidir que existe un cumplimiento defectuoso del fallo protector, sin que el peticionario del amparo, previamente, haya interpuesto el recurso de queja a que se refiere la fracción IV del artículo 95 de la invocada Ley de Amparo.

Queda entonces requerir el cumplimiento total de la ejecutoria con apoyo en el artículo 113 de la ley de la materia, que dispone que no podrá archivarse ningún juicio de amparo sin que quede cumplida la sentencia en que se haya concedido al agraviado la protección constitucional o apareciere que ya no hay materia para la ejecución. (Luz María Díaz Barriga, Tomo I, páginas 219 y 220)

---

Art. 113.- Mismo Texto.

Enmienda.

La siguiente adición:

EL QUEJOSO PODRÁ PEDIR EN CUALQUIER TIEMPO, EL CUMPLIMIENTO DE DICHA SENTENCIA.

Motivos.

LA SENTENCIA EJECUTORIA PRONUNCIADA EN UN JUICIO DE AMPARO, SOBRE LA BASE DE QUE PRESERVA LAS GARANTÍAS INDIVIDUALES, QUE SON DERECHOS IMPRESCRIPTIBLES, DEBE CUMPLIRSE EN SU INTEGRIDAD SIN QUE SE EXTINGA POR EL TRANSCURSO DEL TIEMPO EL DERECHO DE EXIGIR TAL CUMPLIMIENTO. (Fidencio Ramírez y Fidel Herrera Beltrán , Tomo II, página 1157)

---

COMENTARIO: LA REDACCIÓN DE LA ANTEPENÚLTIMA PARTE DE ESTE PRECEPTO, DA LUGAR A CONFUSIÓN EN LA MEDIDA DE QUE EL SUPUESTO... "O APARECIERA QUE YA NO HAY MATERIA PARA LA EJECUCIÓN", NO ESTABLECE CUÁLES SON LAS CIRCUNSTANCIAS QUE PUEDEN DETERMINAR DICHO EVENTO.

EN OTRAS PALABRAS, QUEDA AL ARBITRIO DEL JUZGADOR DE AMPARO Y NO A LA LITERALIDAD DE LA NORMA, DETERMINAR SI, EN EFECTO, LA EJECUTORIA NO PUEDE CUMPLIRSE POR CONSUMACIÓN DEL ACTO RECLAMADO O CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. ( José Francisco Becerril Mendoza, Tomo III, páginas 2051 y 2052)

---

Otro aspecto de suma trascendencia para la vida misma del juicio de amparo en lo que se refiere a las sentencias en las cuales se conceda al quejoso la protección de la justicia federal seria, si bien es cierto que no es materia de estas propuestas, consistiría en no permitir que en esta nueva ley de amparo se de o exista el procedimiento a que se refiere el artículo 107 base XVI párrafo tercero que textualmente menciona:

"la inactividad procesal o la falta de promoción de la parte interesada, en los procedimientos tendientes al cumplimiento de las sentencias de amparo, produciría su caducidad en los términos de la ley reglamentaria."

Ya que es bien explorado que la propia autoridad que conoce de juicio de amparo se le dan términos para dictar su sentencia en determinados casos y creemos por demás innecesaria que este párrafo en comento pueda tener vida jurídica ya que se desvirtuaría en forma total el objetivo fundamental de propio juicio de amparo. el volver al estado en el que se encontraba el acto reclamado hasta antes de que la garantía individual fuera violada.

Siendo una verdadera obligación de la propia autoridad en dictar en los plazos establecidos su sentencia en cualquier sentido y no es posible pensar en que el propio quejoso tenga que impulsar el procedimiento a fin de que se cumpla la sentencia que le fue favorable.

Nos oponemos rotundamente a que en la nueva ley de amparo se agregue el procedimiento de caducidad de incumplimiento de sentencia, como seria de igual forma el otro procedimiento de caducidad de la instancia por inactividad procesal en el procedimiento de amparo.

Sin olvidar de ninguna manera que otro de los aspectos de suma importancia dentro del Poder Judicial de la Federación es el rezago de asuntos. en este aspecto sé tendría que pensar en mecanismos a través de los cuales se sancionara a los litigantes que abusan del propio juicio de amparo imponiendo en forma valedera multas o hasta suspensión de la profesión.

Ojalá que esta modesta aportación sea tomada en consideración en el nuevo proyecto de la ley de amparo, que estamos seguros no tendrá mayor modificación sino únicamente adecuaciones que vendrán a hacer mas fácil y más sencillo el procedimiento de amparo. **(Guillermo Pacheco de la Rosa, Tomo III, páginas 2139 y 2140)**

---

Lamentablemente, por reforma (31 de mayo de 1994) al artículo 107 Constitucional, se agregó en la fracción XVI, la posibilidad de que opere la caducidad por inactividad procesal, en la fase de ejecución o cumplimiento de la sentencia de amparo, pero afortunadamente no se llegó a reformar, al menos hasta este momento, la Ley de Amparo, para acoger tal innovación, la que resulta contraria al principio de que el cumplimiento de las sentencias (y más aún las de Amparo, por los intereses en conflicto), es de orden público; que ningún juicio de amparo debe archivarse sin que esté cumplida



la sentencia (artículo 113 de dicho ordenamiento), pues incluso, se han agregado otras formas de cumplimiento de las sentencias, para alcanzar aquellos postulados. La propuesta entonces, va encaminada a que en la nueva Ley de Amparo, no se establezca la posibilidad de la caducidad por inactividad, en la fase de ejecución. (Dionisio F. Gutiérrez García, Tomo V, página 234)

BIBLIOTECA DE LA  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION

